Arenas de conflicto y experiencias colectivas

Horizontes utópicos y dominación

María Luisa Tarrés Barraza
Laura B. Montes de Oca Barrera
Diana A. Silva Londoño
Coordinadoras

EL COLEGIO DE MÉXICO

Imagen de portada: Recorte en papel de Hans Christian Andersen. *Escenario con bailarines, ángeles y dos figuras grandes.*

ARENAS DE CONFLICTO Y EXPERIENCIAS COLECTIVAS

HORIZONTES UTÓPICOS Y DOMINACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS

ARENAS DE CONFLICTO Y EXPERIENCIAS COLECTIVAS

HORIZONTES UTÓPICOS Y DOMINACIÓN

María Luisa Tarrés Barraza
Laura B. Montes de Oca Barrera
Diana A. Silva Londoño
(coordinadoras)

EL COLEGIO DE MÉXICO

320.99809040723
A6812

Arenas de conflicto y experiencias colectivas : horizontes utópicos y dominación / María Luisa Tarrés Barraza, Laura B. Montes de Oca Barrera, Diana A. Silva Londoño (coordinadoras). — 1a. ed. — México, D.F. : El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 2014.
527 p.; 21 cm.

ISBN: 978-607-462-695-7
Incluye referencias bibliográficas

1. Participación política — América Latina — Siglo XX — Estudio de casos. 2. Grupo sociales — América Latina — Siglo XX — Estudio de casos. 3. Movimientos sociales — América Latina — Siglo XX — Estudio de casos. 4. Negociaciones colectivas — Participación ciudadana — América Latina — Siglo XX — Estudio de casos. I. Tarrés Barraza, María Luisa, coord. II. Montes de Oca, Laura B., coord. III. Silva Londoño, Diana A., coord. IV. t

Open access edition funded by the National Endowment for the Humanities/Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book Program.

The text of this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License: https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/

Primera edición, 2014

D.R.© El Colegio de México, A.C.
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 México, D.F.
www.colmex.mx

ISBN: 978-607-462-695-7

Impreso y hecho en México

ÍNDICE

Presentación y agradecimientos 11

Miradas analíticas de la acción colectiva:
nota introductoria 13
María Luisa Tarrés Barraza

PRIMERA PARTE
LA LUCHA POR LA IDENTIDAD PÚBLICA:
RUPTURAS Y RECONFIGURACIONES SUBJETIVAS

I. Movimiento indígena en Bolivia. Estructura
de oportunidades y el sentido de la acción 35
Carmen Rosa Rea Campos

II. Movilización y autogestión en Argentina.
Los retos para el análisis de procesos
de invención y reproducción social en curso 81
María Amalia Gracia

III. Identificaciones en disputa: (des)construcciones
identitarias del Movimiento de Liberación
Homosexual (MLH) mexicano, 1968-1984 125
Sofía Argüello Pazmiño

SEGUNDA PARTE
LA INTERMEDIACIÓN ENTRE REPRESENTANTES POLÍTICOS Y ACTORES POPULARES: DISPOSITIVOS Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN

IV. Repertorios de acción colectiva y balanzas de poder: el caso de Michoacán (1920-1940) 163
Enrique Guerra Manzo

V. El sentido de la acción: interés y solidaridad en el Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México 211
Martín Paladino Cupolo

VI. Entre clientelismo y contienda. Los desalojos de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México (1993, 2007) 257
Diana Alejandra Silva Londoño

VII. Actores, escenarios y tiempos: algunos desafíos para estudiar la acción colectiva en colonias populares 297
Edison Hurtado Arroba

TERCERA PARTE
ESPACIOS INSTITUCIONALES COMO ESCENARIOS DE CONFLICTO COLECTIVO: ELITES GUBERNAMENTALES Y CONTENCIÓN DE DEMANDAS SOCIALES

VIII. El Leviatán frente a los que defienden lo verde. El Pacto Ribereño y la Dirección Federal de Seguridad 353
Mario Alberto Velázquez García

IX. Elite económica en movimiento: *Lobbying* y responsabilidad social de empresas transnacionales frente al movimiento social anticorporativo en México 391
Laura B. Montes de Oca Barrera

CUARTA PARTE
ENFRENTANDO LA SITUACIÓN DE RIESGO:
CRÍTICAS LOCALES A LA (DES)REGULACIÓN CAPITALISTA

X. Retos y fortalezas del análisis de redes sociales aplicado al estudio de la movilización social por el agua en la Cuenca de México 443
Leonardo Garavito González

XI. Análisis de retos y retos del análisis de la acción colectiva y la movilización social contra los riesgos de la minería canadiense en el caso de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí 485
David Madrigal González

PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

El presente libro es resultado de una larga trayectoria de apoyos y colaboraciones, de diálogos y críticas entre investigadores comprometidos con la comprensión del ritmo y los significados sociológicos de la acción colectiva en América Latina. Si bien se trata de un problema clásico en la región, las experiencias colectivas contemporáneas no dejan de evidenciar las limitaciones y vacíos explicativos de los marcos analíticos construidos desde que los estudios de la acción colectiva y los movimientos sociales son reconocidos como un campo de estudio autónomo. Estas páginas entretejen preocupaciones académicas, prácticas y personales que, a pesar de los distintos espacios de reflexión en los que se sitúa cada autor, logran identificar desafíos teórico-metodológicos para analizar la acción colectiva y construir puentes interpretativos que arrojen luz sobre su complejidad.

Este proyecto común tiene sus raíces en diversos cursos sobre acción colectiva y movimientos sociales que inicié hace muchos años en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (CES). Como hilos imaginarios, los hechos, las ideas y los problemas estudiados en esos seminarios son los que conducen y otorgan unidad a su contenido. Curiosamente, esas vivencias compartidas facilitaron los debates alrededor de investigaciones y lecturas diferentes, a veces apasionadas, sobre problemas comunes y son el cemento que permitió unir a este grupo.

Quisiera señalar que aunque el comportamiento se pueda traducir en la consecución racional del interés individual,

hay espacios donde las relaciones sociales producen también lealtades, solidaridades y compromisos con proyectos compartidos. Esa impronta se manifestó en el apoyo de Laura Montes de Oca y Diana Silva que participan como coordinadoras y autoras de esta obra. También agradezco infinitamente a los dictaminadores de prestigiosas instituciones académicas, siempre anónimos, que con sus observaciones y sugerencias enriquecieron las diversas versiones de los textos aquí presentados. Gracias a Mariana Gosain Ocampo, socióloga diestra con las palabras y sus significados pudimos dar forma a un conjunto de ideas que en un comienzo se antojaban dispersas.

La celebración de los 40 años del CES, que desde su fundación se vincula con los problemas del desarrollo y la democratización de América Latina, fue una oportunidad virtuosa para incluir este proyecto en un conjunto de actividades organizadas gracias a la iniciativa de su director Arturo Alvarado.

MARÍA LUISA TARRÉS BARRAZA

MIRADAS ANALÍTICAS DE LA ACCIÓN COLECTIVA: NOTA INTRODUCTORIA

María Luisa Tarrés Barraza*

Esta obra se planteó reflexionar sobre las encrucijadas teórico-metodológicas a las que se enfrenta el análisis de la acción colectiva para interpretar el surgimiento de conflictos como formas de sociabilidad que generan, mantienen o modifican comunidades de valores o intereses y grupos instituidos.

Dicho esfuerzo reflexivo hasta ahora muestra que cualquiera que sea la perspectiva analítica para comprender la lógica del conflicto, cuyo origen, desenvolvimiento y consecuencias son difíciles de prever, hay dimensiones que se escapan. De ahí que en los trabajos presentados se recurriera a lo que un participante llamó con acierto "la muleta", refiriéndose a la amalgama o ensamblaje teórico-conceptual que media entre los procesos temporales, los niveles micro y macrosociales, los espacios de relación o dimensiones de la acción que se juegan en las experiencias colectivas latinoamericanas.

En suma, más allá de los conflictos estudiados, el presente libro asume una mirada crítica para pensar los procesos sociopolíticos y las experiencias colectivas en la región, renovar preguntas, formas de observación, perspectivas

* Doctora en sociología por la Universidad de París. Profesora-investigadora del Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.

interdisciplinarias o lenguajes a partir de estudios de caso. El propósito no es nuevo, sin embargo, la idea fue contribuir a un antiguo campo de estudio que en México y América Latina se ha movido al ritmo de los ciclos económicos, sociales y políticos.

Si bien la acción colectiva en sus distintas expresiones, como las movilizaciones, las huelgas, las protestas e incluso las revoluciones, ha formado parte de los fenómenos a explicar por la sociología, no es hasta finales del siglo XX que deja de ser un capítulo más de las grandes teorías y adquiere un espacio propio en la disciplina. Este reconocimiento no fue gratuito. Responde, por un lado, a una crisis de la capacidad explicativa tanto del funcionalismo como del estructuralismo marxista y las teorías de la modernización para comprender los nuevos actores y fenómenos colectivos surgidos en Europa y Estados Unidos de los sesenta y setenta. Y, por otro, a las dificultades de las teorías latinoamericanas para caracterizar las movilizaciones populares que, a menudo, se ajustaban con dificultad a nociones importadas de los países capitalistas desarrollados e impedían identificar actores no contemplados en esas propuestas, observar sus particularidades, la especificidad de sus demandas y formas de organización, así como sus vínculos con las distintas manifestaciones del poder político.

Son las teorías de los Nuevos Movimientos Sociales, la Movilización de Recursos y Procesos Políticos las que se suman a la tradición latinoamericana para llenar este vacío explicativo, pues ofrecen diversas herramientas conceptuales y metodológicas para construir modelos adaptables a distintos contextos. Sobre todo desde los años ochenta hasta inicios del presente siglo contribuyen, en principio, a comprender los costos individuales y colectivos de las experiencias dictatoriales y autoritarias que, según lo señala Varese (2013), en un periodo gobernaron dos tercios del continente. Al suprimir la interacción política entre los actores y las autoridades, la

represión sistemática y violenta expande el miedo, deprime la acción colectiva convencional, pero otorga también un espacio, un campo unificado y un objetivo común a los disidentes. A la larga, los gobiernos autoritarios y las dictaduras son vulnerables a acciones sociales discretas, defensivas, fuente de una solidaridad iniciada simplemente para comprender lo incomprensible. La coyuntura tiene impacto en las ciencias sociales y durante este tiempo surge una vasta literatura en lo que se refiere a los temas de acción colectiva. El auge de estudios cualitativos localizados contribuye a conocer las experiencias de la gente común, desmontar las lógicas del poder, las consecuencias de la represión y elaborar estrategias para la búsqueda de protección y justicia con los sectores silenciados. El fundamento de estas investigaciones se vincula con temas éticos alrededor de la defensa de la vida y los derechos humanos donde la dignidad y la justicia se ubican en el orden de lo incalculable y, por lo tanto, de lo no negociable. Se da un giro virtuoso que recupera la experiencia, la subjetividad y, posteriormente, la memoria como fuentes legítimas de investigación social. En estas circunstancias la investigación adquiere una fuerte dimensión de compromiso con "los otros" y un desplazamiento de las pretensiones de racionalidad, objetividad y neutralidad en una postura científica que, muchas veces, impide al investigador acceder a las dimensiones morales, simbólicas y emocionales de la realidad social. Ocurre entonces una ruptura con las convenciones teóricas y conceptuales de las interpretaciones disciplinarias y una crítica a los discursos hegemónicos sobre el desarrollo de la región. Las crisis económicas cíclicas, los golpes de estado, las dictaduras, la violencia o la pobreza cuestionan la noción de desarrollo que enfatiza un crecimiento acumulativo-ascendente. En este sentido, el "progreso" evidenciado como un relato creado por los sectores dominantes, erosiona su legitimidad y da lugar a la posibilidad de proyectos de resistencia.

Así, surge un tejido social alternativo entre sujetos con escasa presencia pública o política que en un proceso de reelaboración intersubjetiva se desprenden de las representaciones sociales que los definen como subordinados y abren paso a una sociedad imaginada, a prácticas y discursos de autovaloración identitaria que facilitan el despliegue de acciones colectivas y movilizaciones populares.

Llegados los noventa, la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento de los regímenes socialistas producen una redefinición del contexto internacional que modifica las relaciones de los actores políticos y sociales latinoamericanos. La desorientación ideológica de los actores sociales unidos que resistieron la dominación dictatorial debilita sus alianzas mas no termina con sus organizaciones y se encauza en movilizaciones que crearon oportunidades para negociar la democratización del sistema político-institucional y el reconocimiento de los derechos ciudadanos.

Aunque no existía una perspectiva política e ideológica común, el tránsito a la democracia tomó distintas vías y significados que se configuran según la historicidad de los regímenes de dominación política nacional. En algunos países sucede a momentos revolucionarios o insurrecciones civiles que dieron paso a concertaciones para integrar la voluntad popular en la configuración de un nuevo sistema político-institucional y en otros, fue producto de rupturas internas o iniciativas de los propios regímenes autoritarios (civiles y/o militares) que no lograban sostenerse ante las cambiantes coyunturas regionales e internacionales. No obstante la integración de las fuerzas armadas y de civiles que apoyaban la dictadura a los acuerdos del incipiente régimen democrático presentó dificultades, pues durante largos años resistieron asumir sus responsabilidades y ceder sus privilegios. Siguiendo a Garretón (2001), los caminos a la democratización política se delinearon *grosso modo* en tres procesos principales:

1. Como *fundación* de sistemas políticos democráticos en países donde nunca existió propiamente una democracia en tanto fueron gobernados por regímenes oligárquicos o han experimentado guerras civiles prolongadas (como es el caso centroamericano). En estos países el tránsito requirió de mediadores institucionales, nacionales o extranjeros, entre sectores combatientes y adversarios históricos para convertirlos en actores políticos.
2. La transición como *desplazamiento* de dictaduras militares o civiles a regímenes democráticos (caso del Cono Sur).
3. La transición *vía reforma* como parte del proceso de extensión de instituciones democráticas desde el poder mismo presionado por la sociedad y la oposición política (caso mexicano).

Para otros grupos la transición constituyó un campo de acción político que marcó nuevas reglas de juego para llevar al escenario público necesidades de carácter cultural y subjetivo que hasta entonces escapaban al orden institucional y fueron nombradas en un discurso reivindicativo de los derechos humanos, el pluriculturalismo, la defensa de la naturaleza, la diversidad sexual y de género. En estos términos, se produce un descentramiento de la noción de clase y se fortalece la presencia de movimientos y organizaciones sociales que vinculan el ejercicio de la ciudadanía con la transformación de lo cotidiano en nombre de una vida más reflexiva y plácida, donde el ejercicio de lo político se ubica en el presente y no en la promesa de una sociedad por venir.

Los resultados, sin embargo, son ambiguos pues aunque en algunos casos ocurre una apropiación social de estos discursos, su reconocimiento legal permanece a nivel formal sin una aplicación efectiva y, en otros, son rechazados por las elites que, independientemente de su signo ideológico,

optan por posturas conservadoras para evitar conflictos alrededor de asuntos valóricos que ponen en riesgo los pactos que aseguran la estabilidad político-económica y su permanencia en posiciones de poder. Por otro lado, los actores colectivos irrumpen desde una asunción ciudadana, saturando las instituciones con un sinnúmero de reivindicaciones fragmentadas que no logran configurar un discurso común que los articule.

El romance entre la sociedad civil y los partidos políticos, producido en distintos países por la lucha a favor de la democracia electoral, creó esperanzas en la población que se desvanecen, en parte por un exceso de confianza en que la normatividad institucional produciría el orden deseado y también por la colonización de políticas neoliberales que, con frecuencia, al fundir el poder político con el económico provocan la omisión del Estado como filtro inteligente del capitalismo moderno y la globalización (O'Donnell 2008: 40). En este sentido, surgen movilizaciones cuya lucha no apunta sólo al Estado sino a corporaciones transnacionales y organizaciones internacionales de cooperación, desarrollo y regulación, con el fin de revertir el orden social que imponen.

Lo anterior ha tenido consecuencias, entre las que destacan: 1) el incremento de la desigualdad social que debilita la promesa de la ciudadanía democrática como un estatus que iguala a la población y 2) el desgaste de los órganos de representación y mediación entre lo social y lo político. De ahí que, aunque reconfigurados, los mecanismos de dominación persisten en países tan disímiles como Chile y México, actualmente de los más desiguales de América Latina y donde ha aumentado la brecha entre la sociedad civil y los partidos políticos. Mientras en otros como Bolivia o Ecuador, los movimientos sociales logran plasmar reivindicaciones civiles, sociales y culturales en nuevas constituciones que reconocen sus estados nacionales como unidades plurales y comunitarias abriendo oportunidades de participación e

inclusión a actores antes no reconocidos. Pese a ello, la presencia de acciones colectivas de protesta y rebeldía contra la exclusión, la marginación o la desigualdad expresan, en un principio, la indignación moral ante el arbitrio de las elites, deteriorando su legitimidad. Si bien en todos los países encontramos movilizaciones alrededor de estos asuntos y se ha promovido la transición a la democracia, los resultados no son los mismos. La historia de la región y de cada país es distinta e indica con claridad que a largo plazo "el liberalismo y la democratización son más bien destellos esporádicos que pauta estructurada de gobierno y revela que [...] la coerción ha tendido a predominar sobre el consenso" (Reyna, 1980: 1).

En cuanto al caso mexicano del que se ocupan la mayoría de los trabajos contenidos en este volumen, algunos autores tienden a centrar su atención en los obstáculos frente a la consolidación democrática o la construcción de ciudadanía que impiden el despliegue de la acción colectiva organizada en la vida pública. Hace casi dos décadas (1996) Zermeño ya anunciaba el colapso de los movimientos sociales como efecto de la conjunción del ajuste neoliberal que excluye, fragmenta e informaliza a la población y de una matriz cultural vertical que define las relaciones sociales y el ejercicio del poder en los partidos y espacios institucionales, impidiendo tanto la mediación efectiva entre la sociedad y el Estado, como la sustentabilidad de proyectos colectivos alternativos. Colapso que, pese a esa conjunción de neoliberalismo y cultura política vertical, se puso en entredicho, al menos durante los años inmediatos, con el surgimiento del que fuera caracterizado como el primer movimiento social de la era de la información (Castells, 1999) o como ejemplo del nuevo activismo transnacional (Tarrow, 2006): el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Movilización, que pese a haber operado como factor de cambio político-institucional de la transición democrática mexicana, a la larga no ha logrado cristalizarse en un pro-

yecto alternativo amplio e incluyente que revierta la lógica de poder mediante el "mandar obedeciendo".

Evaluaciones posteriores reiteran este escenario hasta mediados del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Bizberg (2010) señala que los actores y movimientos que lucharon por la instauración de la democracia y el pluralismo son organizaciones atomizadas, incapaces de establecer vínculos con otros actores colectivos o formular proyectos sociales alternativos de carácter social o cultural y, en general, cooptados por actores políticos, marginados por el gobierno o sus instituciones y eventualmente reprimidos. La ausencia de incentivos y los candados impuestos a la participación autónoma debilitan la formación de la sociedad civil y dan primacía a un sistema electoral frágil como vía de participación democrática en el país. El autor concluye su reflexión preguntándose si la democracia mexicana se trata entonces de una "democracia vacía". Desde un análisis con particular atención en el conflicto laboral, Zapata (2010) coincide con las posturas anteriores. Si bien reconoce la persistente presencia de protestas de grupos combativos de sectores populares en la vida política contemporánea, señala que, frente a los desequilibrios producidos por los procesos de transnacionalización y fragmentación social, predomina una estructura corporativa vertical de larga duración y alcance que bloquea la búsqueda de vínculos y alianzas horizontales que facilitaría la organización y las acciones colectivas de clases medias, campesinos y trabajadores. Por ello afirma que emprender acciones colectivas desde abajo se ha convertido en "tarea de Sísifo".

Estos límites iluminan sobre el peso de las relaciones de dominación en el logro y ejercicio de derechos ciudadanos que coincide con la idea de que la ciudadanía ha emergido de violentos conflictos y, a consecuencia de sus orígenes históricos y su continua negociación, es siempre incompleta y dispareja (Tilly, 1990). Ante la interminable pugna por la

producción y apropiación de significados, los límites y posibilidades de los consensos, así como la violencia producida alrededor de estos procesos, no es banal para las ciencias sociales analizar las experiencias de acción colectiva. Esto no sólo desde la dominación y la reproducción social, sino en tanto expresiones de una práctica entendida como actividad creativa de los sujetos organizados para mantener o transformar las estructuras normativas de la vida social.

El presente libro se ordenó en cuatro apartados temáticos con el fin de darle un hilo conductor a su lectura. Si bien hubiera sido posible privilegiar otros ejes, los que se proponen, permiten hacer un recorrido más o menos ordenado de acuerdo con las perspectivas analíticas y experiencias de conflicto presentadas por los autores.

La primera parte, *La lucha por la identidad pública: rupturas y reconfiguraciones subjetivas*, contiene tres trabajos interesados en los complejos procesos que crean el sentido de pertenencia y articulación a una colectividad local o nacional, de clase o sexual. El estudio de estas experiencias adquiere relevancia analítica si se considera que la noción de identidad colectiva ha sido cuestionada por vertientes teóricas e investigaciones de diversas disciplinas que insisten en la individuación como tendencia que atomiza y fragmenta a los sujetos desligando la construcción de su identidad de las relaciones sociales y los dispositivos de dominación. Lejos de otorgarle un sentido esencial e inmutable a la identidad o completa autonomía de las tensiones sociales, los estudios aquí incluidos se preocupan por su carácter versátil, es decir, por las formas en las que se configuran los valores y representaciones simbólicas que en un momento histórico hacen posible que el sujeto se defina a sí mismo y despliegue las acciones tendientes a afirmar los diversos matices de su identidad individual y colectiva.

El trabajo de Carmen Rea, "Movimiento indígena en Bolivia. Estructura de oportunidades y el sentido de la acción",

propone un ejercicio que vincula los cambios estructurales, los procesos políticos y las dimensiones instrumentales, simbólicas e identitarias para acercarse al movimiento indígena boliviano de principios de siglo (2000-2005). Se aproxima así a una explicación de los factores que en distintos niveles y temporalidades condensa este periodo conflictivo anterior a las transformaciones constitucionales del Estado que en ese país reconocen la pluralidad identitaria y étnica.

La autora se plantea la necesidad de abordar el papel de la acción colectiva más allá de los límites político-institucionales y se interesa por los efectos simbólicos y prácticos de los discursos políticos igualitarios en la constitución de subjetividades que cuestionan la subordinación en las relaciones cotidianas. Desde esta perspectiva Rea apuesta a ampliar el campo de lo político al incluir los cambios culturales amenazados por un racismo encubierto que persiste en esa sociedad tras los logros políticos y el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2005.

En "Movilización y Autogestión en Argentina. Los retos para el análisis de procesos de invención y reproducción social en curso", Amalia Gracia reflexiona sobre la emergencia de formas de producción cooperativa que en América Latina conviven, ajustándose o disputando, con las modalidades capitalistas predominantes. En este marco analiza el caso de los trabajadores argentinos que gestionan colectivamente fábricas quebradas bajo la administración de sus antiguos dueños capitalistas tras la crisis financiera y política de 2001 en ese país. Su investigación recupera y pone en juego una serie de categorías provenientes de las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales para comprender el proceso de constitución de subjetividades autónomas y relaciones de poder alternativas en el capitalismo globalizado.

La experiencia analizada pone a debate el poder de la identidad anclada en el orgullo profesional de un grupo de obreros calificados para desafiar y defender no sólo un modo

de ganarse la vida sino la definición de sí mismos. También se muestra que la subjetivación de la autonomía colectiva se produce en la lucha y el conflicto hasta generar prácticas propias que posibilitan no sólo recuperar y controlar la orientación del desarrollo de la producción industrial, sino también su reconocimiento legal e institucional fuera del ámbito corporativo. Experiencias similares en Argentina refuerzan los hallazgos de Gracia y señalan la importancia de la identidad como categoría de análisis de la acción colectiva no sólo como una cuestión imaginada o como respuesta a la fragmentación de antiguas comunidades, sino como un proceso de afirmación de sujetos capaces de interpretar las nuevas oportunidades y reintegrarse al horizonte crítico del orden económico-industrial.

El trabajo "Identificaciones en disputa: (des)construcciones identitarias del Movimiento de Liberación Homosexual (MLH) mexicano, 1968-1984" presentado por Sofía Argüello analiza los procesos de acción colectiva, politización y ciudadanización desplegados por el reconocimiento de la diversidad sexual en la Ciudad de México. Su recorrido cuestiona la visión universalista de la identidad que muchas veces dicotomiza las identidades sexuales, desdibuja las diferencias e ignora los matices que adquieren en la práctica social. Propone en su lugar a la *identificación* como categoría analítica para evitar la imposición de discursos que desde una mirada hegemónica excluyen o discriminan a sujetos que transgreden las convenciones de género.

Argüello enfrenta el desafío de estudiar al movimiento de liberación homosexual considerando la homosexualidad como un asunto que no es homogéneo, pues las identidades de los sujetos que lo constituyen se encuentran en una reconfiguración permanente tanto por la forma en que se conciben como por las prácticas políticas que producen. En efecto, el análisis señala que, además del clima histórico-cultural sobre el que surge, en el desarrollo del movimiento se juegan

las diferencias de clase social y los conflictos organizativos internos que muestran la dificultad de configurar un discurso compartido contra la represión, la estigmatización y la violencia.

La segunda parte, *La intermediación entre representantes políticos y actores populares: dispositivos y estrategias de negociación*, agrupa cuatro trabajos que reflexionan sobre distintas opciones estratégicas para la consecución de intereses colectivos. En el contexto mexicano, donde puede hablarse de un deterioro de la confianza en las instituciones democráticas gracias al creciente distanciamiento del sistema político con las bases sociales, las prácticas informales de negociación de corte clientelar entre los representantes políticos y los sectores populares constituyen un rico espacio de análisis. Se trata de un fenómeno de interacción desigual o asimétrica en el que se juegan intereses divergentes u opuestos entre el mundo social y el mundo político. Si bien puede considerarse a la negociación un acto idealizado para lograr el consenso, en los estudios presentados aparece no sólo como el resultado de un avance democrático, sino como un ajuste necesario entre los actores y la realidad que no implica la ruptura de las relaciones de dominación y, por tanto, tampoco un igualitarismo. En este sentido, los autores aquí incluidos resaltan el papel del intermediario político como figura clave ubicada en la frontera de intercambios simbólicos y materiales entre ambos actores desde la experiencia cotidiana. Así, al ponderar la dimensión cultural y subjetiva del clientelismo o la intermediación señalan que en estos también se filtran expresiones de protesta, rebeldía e indignación moral.

La investigación de Enrique Guerra, "Repertorios de acción colectiva y balanzas de poder: el caso de Michoacán (1920-1940)", se propone comprender la acción colectiva y los movimientos sociales desde el rol de los intermediarios políticos durante el tránsito del régimen porfirista al Estado

posrevolucionario. En un intento por sortear la dicotomía actor-sistema, su texto se pregunta por el equilibrio de poder, el conflicto y la cooperación entre las elites regionales, las bases sociales y los intermediarios formales.

Su elaboración constituye un aporte sustantivo sobre la mecánica política devenida de la Revolución Mexicana y da cuenta desde espacios de acción concretos, sobre todo el agrario, del modo en que se expresan los actores sociales organizados e inciden en la estructuración de la autoridad estatal durante el cambio de un sistema político a otro. En este sentido, ilustra la irrupción del campesinado michoacano como una fuerza combativa que gracias a la coyuntura nacional, sus lazos de solidaridad y capacidad organizativa aprovechan la estructura de oportunidades políticas y logran una presencia efectiva tras el colapso del antiguo régimen y la inconsistencia del nuevo.

En "El sentido de la acción: interés y solidaridad en el Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México", Martín Paladino se propuso analizar las estructuras de sentido y las orientaciones prácticas involucradas en la participación dentro del Frente Popular Francisco Villa y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. La investigación cuestiona el descrédito del individualismo metodológico y argumenta su pertinencia en tanto aún permite llevar a cabo importantes operaciones analíticas, problematizar la acción colectiva y considerar los sentidos múltiples y, en ocasiones, divergentes que la componen. Aunque no radicaliza esta perspectiva hasta el punto de considerar al individuo el núcleo explicativo de la acción y de la configuración de la sociedad, apuesta en un primer acercamiento, por una explicación racional de la acción y plantea que, una vez puesta en juego su operatividad, lo que a la luz de esta orientación no sea dilucidado se aborde desde otras propuestas analíticas que incluyan en sus marcos interpretativos las dimensiones culturales y expresivas de la acción que se manifiestan en la

vida cotidiana y son capaces de aportar nuevos conocimientos y directrices sobre el significado de la acción analizada.

El trabajo de Diana Silva, "Entre clientelismo y contienda. Los desalojos de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México (1993 y 2007)", manifiesta que las explicaciones orientadas a interpretar los intercambios clientelares entre el Estado y los sectores populares no bastan para comprender los conflictos y las movilizaciones sociales. Su aproximación logra construir un objeto de estudio vinculando la dimensión macrosocial desde las condiciones político-económicas que propician la expansión del comercio informal en los centros históricos de las ciudades latinoamericanas y la microsocial al estudiar la complejidad de las organizaciones del sector ambulante que, gracias a la construcción de densas relaciones internas de reciprocidad y liderazgo, logran crear espacios para evitar su retiro del espacio urbano.

El texto identifica los ciclos de acción contenciosa que tras violentos enfrentamientos resultan en una negociación alrededor de dos derechos contrapuestos, el derecho constitucional al trabajo y al uso del espacio público. Por otra parte, Silva contribuye a visibilizar las relaciones de solidaridad y de dominación dentro de las organizaciones, la administración pública y los sectores políticos de la ciudad, ocultas por complejos mecanismos que legitiman y garantizan la permanencia y reproducción de estos vínculos.

La investigación de Edison Hurtado, "Actores, escenarios y tiempos: algunos desafíos para estudiar la acción colectiva en colonias populares", aborda el tema clásico de la participación política de los sectores urbano-populares en las segregadas ciudades de América Latina. Rescatando la tradición de la micro-sociología desarrolla un trabajo de etnografía política en tres colonias (Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo y La Fama) de la Ciudad de México entre 2009 y 2012, con el objetivo de dilucidar el carácter plural

y contradictorio de las prácticas de los actores colectivos en su lucha por la satisfacción de demandas y el reclamo de su inclusión ciudadana.

El estudio busca el significado que los sujetos movilizados dan a lo que llaman "trabajo político de intermediación" y privilegia una mirada analítica sobre la trama de actores situados en torno a un territorio urbano marginal, los sentidos y las prácticas en la política local, así como su importancia como electorado para el gobierno municipal. Lo anterior señala que la apertura política sucedida a la elección de jefe de gobierno desde 1997 y de jefes delegacionales en el 2000 anuncia una reformulación de la cultura política y, con ello, el desplazamiento de las bases sociales de un control corporativo hacia un clientelismo competitivo donde se negocian los mutuos intercambios entre representantes políticos y actores populares.

En la tercera parte, *Espacios institucionales como escenarios de conflicto colectivo: elites gubernamentales y contención de demandas sociales*, se abre una perspectiva crítica escasamente trabajada por los estudiosos de la acción colectiva, donde el Estado, el gobierno y el aparato administrativo se construyen como espacios de observación de relaciones de poder entre los actores institucionales que representan distintos intereses y los actores sociales movilizados. La observación de estos espacios híbridos muestra inesperados juegos de alianzas, negociaciones y oposiciones entre elites, representantes políticos, bases sociales, intermediarios, etc. En estos trabajos la noción de estructura pierde su valor determinista al aproximarse al comportamiento de los sujetos en espacios microsociales donde, a veces, se juegan decisiones de carácter nacional.

En "El leviatán frente a los que defienden lo verde. El Pacto Ribereño y la Dirección Federal de Seguridad", Mario Velázquez revisita la movilización ambiental del Pacto Ribereño desplegada en 1976 por diversas organizaciones

campesinas y municipios ante los daños causados por las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Chiapas y Tabasco.

Su investigación trastoca la forma en la que se analiza el papel del Estado en los estudios de la acción colectiva, pues, en lugar de concentrarse en sus prácticas represivas o la cooptación, se aproxima al análisis de las estrategias rutinarias, muchas veces invisibles, que éste utiliza para conocer, controlar, definir y redirigir las protestas sociales. Así, abre un espacio de investigación que desplaza la mirada de la violencia como respuesta estatal típica hacia otros mecanismos o recursos: legales, políticos, propagandísticos, etc., con los cuales se busca controlar el comportamiento de la población y el propio cuerpo político-administrativo gubernamental. Velázquez alerta sobre la importancia de revisar archivos y fuentes históricas, principalmente de la Dirección Federal de Seguridad, que muestran las tácticas de inteligencia ejecutadas por el gobierno para establecer su hegemonía a nivel estatal y regional. De este modo reensambla un antiguo conflicto, ícono del movimiento ambientalista mexicano, cuando se interesa por las prácticas y patrones simbólicos en las relaciones de dominación y revela las debilidades del gobierno federal para articular a diversos organismos estatales involucrados en su resolución.

El trabajo de Laura Montes de Oca, "Elite económica en movimiento: *Lobbying* y responsabilidad social de empresas transnacionales frente al movimiento social anticorporativo en México", analiza la reconfiguración de los vínculos Estado-mercado-sociedad a propósito de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que surge como discurso y práctica institucionalizada a principios del siglo XXI.

A diferencia de otros estudios, su trabajo destaca los movimientos de elites económicas poderosas que luchan contra sus adversarios por imponer una orientación a las decisiones gubernamentales y lleva a cabo un análisis de

las confrontaciones entre activistas de la sociedad civil (como el Poder del Consumidor y Greenpeace México) y empresarios (como Bimbo, Coca-Cola y Monsanto) en dos episodios de disputa en México: la legislación sobre manejo de organismos genéticamente modificados (OGM) y la regulación sobre la venta de "comida chatarra" en escuelas, vinculada con el problema de desnutrición y obesidad infantil. La autora destaca que si bien la RSE surge como medida de regulación cultural de las actividades empresariales transnacionales, a la vez contribuye a legitimar la lógica del sistema económico contemporáneo, pues actúa como una reacción estratégica de las elites para contrarrestar movilizaciones críticas al capitalismo neoliberal cuya lucha no apunta exclusivamente al Estado sino a las corporaciones empresariales globales. Las acciones anticorporativas analizadas no logran reformas institucionales importantes ni generan políticas públicas; sus estrategias, en cambio, desequilibran los códigos culturales de las elites dominantes, revelan la irracionalidad de sus razones y hacen visible el poder que se esconde detrás de los procesos administrativos y organizativos del gobierno.

La última parte, *Enfrentando la situación de riesgo: críticas locales a la (des)regulación capitalista*, se pregunta por las fuerzas sociales y líneas de conflicto que emergen ante las transformaciones producidas por el orden global contemporáneo. El aumento de los discursos sobre globalización económica, política y cultural sugiere una reflexión local de las consecuencias asociadas a este fenómeno, pues fácilmente pierden contenido lejos de los contextos y prácticas sociales. Los estudios de caso aquí presentados aterrizan las incertidumbres y los riesgos aparejados al progreso moderno en experiencias de acción colectiva ambientalistas que les otorgan un significado propio. Se trata de analizar los procesos de reflexión y resistencia de diversos actores u organizaciones sociales que se movilizan para ganar espacios de legitimidad y representación en la lucha contra sus

adversarios, el logro de sus demandas y la transformación de sus condiciones de vida. En este marco, la noción de riesgo muestra que el desarrollo del capitalismo está expuesto a la influencia de la creatividad de los actores locales que al apropiarse de los discursos, productos e ideales occidentales, los utilizan y reelaboran de acuerdo con sus propios fines.

La investigación de Leonardo Garavito, "Retos y fortalezas del Análisis de Redes Sociales aplicado al estudio de la movilización social por el agua en la Cuenca de México", estudia la emergencia y el desarrollo de una movilización social que cuestiona el orden normativo y simbólico del agua inspirado en el proyecto del neoliberalismo global. Su trabajo realiza una evaluación minuciosa de las características particulares y relacionales de un grupo de organizaciones sociales que se articulan como un actor colectivo frente a la progresiva tensión socio-ambiental relacionada con la problemática del agua en la región. Garavito apuesta a que los movimientos sociales preexisten a su expresión pública, pues ésta no sucedería si no se contara con un discurso que otorga una orientación a la acción y densas redes de interacción sostenidas entre una pluralidad de individuos, grupos u organizaciones sumergidas en lo cotidiano.

Gracias a un análisis de redes sociales, vinculado con un enfoque simbólico de la acción colectiva, ubica las diferencias y puntos de encuentro entre las organizaciones, los significados que se juegan en la interpretación del agua como derecho y bien público, los repertorios de acción orientados a transformar el modelo de gestión dominante y, por último, el potencial reflexivo de la movilización para impulsar procesos de cambio social.

La investigación realizada por David Madrigal, "Análisis de retos y retos del análisis de la acción colectiva y la movilización social contra los riesgos de la minería canadiense en el caso de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí", estudia los procesos de acción colectiva y la producción de un discurso

sobre el riesgo ambiental ante el impacto de la transnacionalización en contextos localizados.

Su trabajo pone en juego los planteamientos teóricos generales de *la sociedad del riesgo* en un escenario marcado por la heterogeneidad, el subdesarrollo, la distribución desigual del poder y sistemas institucionales frágiles. En este sentido, recupera la conformación de los procesos políticos de resistencia y de movilización manifestados en el caso potosino principalmente a partir de la dimensión discursiva de los tres actores en pugna: la empresa minera canadiense, la sociedad civil organizada y el Estado mexicano. Lo anterior como una estrategia metodológica para acceder a las representaciones colectivas sobre los riesgos ambientales en la sociedad local y evidenciar las relaciones de poder y dominación entre los defensores del proyecto minero y sus adversarios ambientalistas. Madrigal concluye que la distribución de los riesgos durante el periodo estudiado apeló a distintos intereses y demandas que, luego de una década, se condensan en una noción de riesgo socio-ambiental híbrida no generalizable, pues resulta de la capacidad reflexiva propia de los actores locales.

BIBLIOGRAFÍA

Bizberg, Ilán (2010), "Una democracia vacía. Sociedad civil, movimientos sociales y democracia", en Ilán Bizberg y Francisco Zapata (coords.), *Los grandes problemas de México: Movimientos sociales*, México, El Colegio de México, pp. 21-60, vol. VI.

Castells, Manuel (1999), *La era de la información: economía, sociedad y cultura*, vol. II, *El poder de la identidad*, México, Siglo XXI.

Garretón, Manuel Antonio (2001), *Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina*, Santiago, Chile, CEPAL, División de Desarrollo Social, Serie 56.

O'Donnell, Guillermo (2008), "Hacia un Estado de y para la democracia", en Rodolfo Mariani (coord.), *Democracia/Estado/Ciudadanía*, Lima, Perú, PNUD, Serie Contribuciones al debate, pp. 25-64.

Reyna, José Luis (1980), "Obstáculos a la democracia en América Latina" *Crítica & Utopía*, núm. 2, URL: www.escenariosalternativos.org.

Tarrow, Sidney (2006), *The New Transnational Activism*, Nueva York, Cambridge University Press.

Tilly, Charles (1990), *Coercion, Capital and European States*, Cambridge, Blackwell.

Varese, Stefano (2013), "Eulogy of Utopian Praxis: From Dystopian Reality to the Research of Hope", *LASA Forum*, vol. XLIV, núm. 3, pp. 8-13.

Zapata, Francisco (2010), "Movimientos sociales y conflicto laboral en el siglo XX", en Ilán Bizberg y Francisco Zapata (coords.), *Los grandes problemas de México: Movimientos sociales*, México, El Colegio de México, pp. 61-100, vol. VI.

Zermeño, Sergio (1996), *La sociedad derrotada. El desorden mexicano de fin de siglo*, México, Siglo XXI.

Primera parte

LA LUCHA POR LA IDENTIDAD PÚBLICA: RUPTURAS Y RECONFIGURACIONES SUBJETIVAS

I. MOVIMIENTO INDÍGENA EN BOLIVIA: ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES Y EL SENTIDO DE LA ACCIÓN

Carmen Rosa Rea Campos*

Cuando se inicia un proceso de investigación en un campo temático relativamente nuevo –para el que investiga– se encuentran muchos desafíos teóricos y metodológicos que difícilmente se resuelven al inicio del proceso investigativo. Tales desafíos y su resolución se presentan o se van clarificando en el proceso mismo de la investigación, cuando los marcos teóricos de partida se enfrentan con el objeto de estudio. Sólo en este proceso dialógico es posible hacer evidentes los aciertos y los desaciertos, las limitaciones y las estrategias de resolución en la construcción de un proyecto teórico "fuerte", capaz de explicar y comprender el objeto de estudio. Esto último suele ser más bien el resultado del proceso investigativo.

En este capítulo se pretende exponer esos aciertos y desaciertos a los que nos vimos enfrentados al emplear un recurso teórico (la movilización de recursos, en particular el enfoque de los procesos políticos y los marcos cognitivos) para comprender un caso en particular: el movimiento indígena en Bolivia en su último ciclo de protestas (2000-2005), en el nuevo ciclo de protestas bajo nuevas y viejas formas de organización, de repertorio de acción y de identidades.

* Doctora en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México. Profesora-investigadora de la Universidad de Guanajuato. Premio de la Academia Mexicana de Ciencias (ACM) a las mejores tesis de doctorado en ciencias sociales 2011.

A pesar de las críticas que se hacen al enfoque de la movilización de recursos, recurrimos a esta perspectiva teórica considerando que podía permitirnos avanzar en la comprensión de las condiciones de posibilidad, sobre todo del éxito del movimiento indígena en Bolivia en el último ciclo de protestas. Pero centrarnos en las condiciones de posibilidad no era suficiente para comprender la relevancia de este nuevo ciclo de protestas (2000-2005), debíamos abarcar en nuestro análisis las motivaciones (el sentido de la acción) que habían hecho de él un caso particular, *sui generis* en términos de éxito, es aquí donde encontramos la principal traba del marco teórico que asumimos y la necesidad de recurrir a otras miradas interpretativas.

Dicho lo anterior, el capítulo se divide en seis apartados. En el primero, haremos una breve exposición del ciclo de protestas que experimentó Bolivia entrando al siglo XXI; en el segundo apartado exponemos las interpretaciones en torno a los factores explicativos de dicho ciclo de protestas; posteriormente, abordaremos las fisuras que implican tales interpretaciones para comprender el caso en particular, aspecto que nos permitió justificar en un cuarto apartado, la relevancia de la perspectiva que tomamos, sobre todo para comprender el curso de la acción en términos de resultados. Sin embargo, después de hacer un balance sobre los alcances interpretativos de tal teoría, abundaremos en otro acápite, aquello que la teoría no nos permitió explicar, las estrategias y giros que tuvimos que realizar para superar el reduccionismo político de la categoría de marcos cognitivos para comprender el sentido de la acción del movimiento indígena boliviano en el último ciclo de protestas.

BREVE HISTORIA RECIENTE DEL MOVIMIENTO INDÍGENA BOLIVIANO

El inicio del siglo XXI en Bolivia estuvo marcado por una serie de transformaciones sociopolíticas y económicas. A

nivel económico, desde la crisis de los ochenta hasta la fecha, Bolivia atravesó por una transformación no sólo en sus políticas económicas sino en la dinámica económica nacional.[1] El Estado nacionalista de la segunda mitad del siglo XX dio paso a las transformaciones de corte neoliberal en los noventa, y de ésta a la nueva política económica que vincula la privatización, que subsiste, con la (re)nacionalización de los recursos estratégicos que impulsó el gobierno de Evo Morales desde 2006.

En el ámbito político, el escenario se tornó conflictivo con el nuevo ciclo de protestas sociales, que inició con las movilizaciones de la Coordinadora del Agua, integrada por diferentes sectores sociales, principalmente campesinos regantes,[2] organizaciones vecinales, trabajadores fabriles y organizaciones cívicas del departamento de Cochabamba en oposición a la política de privatización del agua del gobierno de entonces (1999-2000). A esta movilización le secundó la acción colectiva de las poblaciones campesinas e indígenas de las tierras altas y bajas del país (2000-2003);[3] mientras

[1] En términos económicos, la minería dejó de tener la relevancia desempeñada durante gran parte del siglo XX. Aunque en los últimos cinco años (de 2005 a la fecha) experimentó un repunte significativo, es la exportación de gas natural a partir de su (re)nacionalización, la que está jugando un importante papel en la dinamización de la economía nacional; pero también, la actividad terciaria, sobre todo el comercio informal, continúa desempeñando un papel central en la economía nacional, pues constituye el 23.4% del PIB y ha logrado absorber a una parte importante de la población económicamente activa de procedencia rural y de origen indígena (el 75% de la población económicamente activa), generando procesos de mayor diferenciación social al interior de este sector.

[2] En su mayoría de origen quechua los campesinos regantes, ubicados en la región del valle del departamento de Cochabamba, desarrollaron sistemas organizativos de administración comunitaria y autogestionaria de las fuentes de agua para el riego de sus cultivos.

[3] Tierras altas refiere a la zona andina boliviana donde habita gran parte de la población de origen aymara, quechua, entre los principales, que representa más del 60% de la población autodefinida indígena respecto

los indígenas de tierras bajas demandaban la autogestión de sus territorios y recursos naturales, las organizaciones indígenas andinas fueron articulando sus demandas apelando a componentes particulares de lo nacional-popular. Unos –los sectores menos radicales como los productores de la hoja de coca– argumentaban la transformación del modelo económico neoliberal identificado como la causa estructural de la ampliación de la brecha de desigualdad y la agudización de la pobreza en Bolivia. Otros –los sectores más radicales del movimiento indígena– denunciaban la persistencia del racismo y acusaban a la clase gobernante de reproducir relaciones de dominación de tipo neocolonial.

Este ciclo de protestas concluyó con la concatenación de diferentes sectores sociales movilizados (urbanos y rurales, obreros, campesinos, sectores informales e indígenas) en torno a la lucha por la "defensa del gas", la posterior renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y el control de la administración del Estado por parte del Movimiento al Socialismo (MAS), desde el 2006. De entonces en más, Bolivia atraviesa por un proceso de transformación política, a la cabeza de un partido de bases campesinas e indígenas, principalmente, y de un líder de igual origen, Evo Morales Ayma quien, además, cuenta con el respaldo de sectores intelectuales de izquierda y de clases medias no indígenas, siendo un personaje representativo de dicho sector, Álvaro García Linera, vicepresidente en la gestión de Morales.

Es decir, el nuevo ciclo de protestas fue "exitoso" políticamente hablando, sobre todo para el movimiento indígena. Pues de sus más de 40 demandas con las que salieron a las carreteras en septiembre de 2000 y después de casi dos décadas (ochenta y noventa) en las que estos actores movi-

---

a la población nacional. Tierras bajas refiere a zonas amazónicas, chaco y llanos, donde se ubican más de 30 grupos étnicos que representan al 5% de la población total mayor de 5 años autodefinida indígena según el último Censo de Población y Vivienda, 2001.

lizados difícilmente lograban efectivizar sus acuerdos en las diferentes gestiones administrativas, además de una recurrente debilidad de sus estructuras organizativas, lograron más que la firma de convenios con la clase política. Bajo una dinámica pendular entre la movilización social y la participación político-institucional, en 2002 lograron más escaños parlamentarios de los que tenían en 1994, con un porcentaje de votación a nivel nacional (22%) nunca antes alcanzado por ningún partido indígena boliviano y muy cerca del partido que fue ganador entonces (24%), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que representaba a la clase política que había gobernado el país durante la segunda mitad del siglo XX.

En 2005, el partido de bases campesinas e indígenas (el Movimiento al Socialismo) obtuvo el 54% del apoyo electoral. Con ello no sólo lograron el control del poder ejecutivo y una mayoría absoluta en el parlamento nacional, sino el liderato en el proceso de transformaciones políticas y económicas, haciendo de los sectores populares (indígenas y no indígenas, campesinos, obreros formales e informales, entre los más importantes) los principales protagonistas.

¿POBREZA E INGOBERNABILIDAD? LOS FACTORES EXPLICATIVOS DEL NUEVO CICLO DE PROTESTAS

Este ciclo de protestas en Bolivia dio pie a una serie de estudios que intentaron ejercitar un conjunto heterogéneo de explicaciones sobre el contexto conflictivo y el papel de los diferentes actores sociales movilizados, sobre todo de los movimientos indígenas. ¿Qué factores explicaban la nueva ola de protestas sociales en Bolivia?, ¿por qué algunos sectores organizados, como los indígenas, parecían tener mucho más fuerza en este periodo de conflicto que en décadas anteriores, cuyas movilizaciones eran fragmentadas, débiles y no conseguían articular a otros sectores sociales?, y ¿cuál era

el sentido de la movilización indígena, más aún cuando el discurso de los líderes del movimiento no giraba en torno a reivindicaciones de clase como campesinado, sino había un retorno –después de casi treinta años– hacia las reivindicaciones étnico-culturales?

A pesar de la diversidad de miradas que giran en torno a las dos primeras preguntas, existe un consenso casi generalizado en señalar dos factores explicativos de la reactivación de los movimientos sociales y del movimiento indígena en Bolivia a principios de 2000, uno de orden político y el otro de tipo económico.

En el ámbito político, el consenso giró en torno a la crisis de gobierno y de Estado expresada por una situación de "ingobernabilidad" proveniente de dos direcciones. La "ingobernabilidad" desde abajo, como arguye Lazarte, era imputada a la misma sociedad civil en permanente movilización social desde principios de los ochenta, debilitada por la crisis del sindicalismo, pero no desaparecida y cuyas acciones contenciosas desestabilizaban a los gobiernos en turno y difícilmente veían satisfechas sus demandas (Lazarte, 2005: 329). La "ingobernabilidad" desde arriba, era atribuible a la elite gobernante que, desde 1985, había tratado de mantener la gobernabilidad a través de la política de pactos entre los partidos políticos; sin embargo, el "prebendalismo del Estado" y el "déficit en la gestión gubernamental" de entonces[4] (Lazarte, 2005: 331), hacían evidente la cuota de la elite política en la crisis política que experimentaba el país a principios de 2000.

El segundo factor explicativo viene por el lado económico, la crisis económica que afectó a Bolivia a finales de los noventa y los costos sociales de la implementación de las políticas de corte neoliberal, la agudización de la pobreza y una ampliación de la brecha de la desigualdad social. En 1999 la pobreza alcanzaba al 63% del total de la población, siendo a

[4] Nos referimos al gobierno de Hugo Bánzer Suárez (1997-2001).

nivel urbano de 52% y a nivel rural 82%, región donde se concentraba gran parte de la población con algún origen étnico; de ello se sostiene que la pobreza en Bolivia y la pobreza rural tienen un rostro: el rostro indígena (García, 2005; García, Gutiérrez, Prada, Tapia, 2001; Lazarte, 2005, Mamani, 2004).

García Linera fue más enfático al señalar el papel de las políticas económicas y sus efectos en la rearticulación de los movimientos sociales al afirmar que la intensificación de la expropiación y explotación de la economía de familias campesinas, de la fuerza laboral indígena, la precariedad del mercado de fuerza de trabajo, la concentración de la riqueza en detrimento del empobrecimiento de los sectores indígenas, serían los factores que condicionaron los acontecimientos suscitados en la primera mitad de la década de 2000 y la reaparición de los indígenas movilizados (García, Gutiérrez, Prada, Tapia, 2001; García, 2003).

Si retomamos la categoría de marcos cognitivos[5] o marcos de significación para describir los significados compartidos que impulsan a las personas a la acción colectiva (Tarrow, 1994: 57), estos dos factores estructurales habrían dado paso a "enmarcar" el sentimiento de "injusticia" que activó a los diferentes actores sociales, principalmente a los indígenas hacia la movilización. Lazarte llega a argumentar que la "ingobernabilidad" política expresada en corrupción, prebendas y pugnas permanentes entre la clase política contribuyeron al "sentimiento de impotencia", de rabia contenida, "de injusticia vivida por los pobres", quienes habían comprendido que las políticas sólo habían beneficiado a los

[5] Este es un concepto que los teóricos de la movilización de recursos retomaron de Goffman para explicar los esquemas interpretativos en la interacción cara a cara. Para el caso de la acción colectiva se entiende por marco de significación un esquema interpretativo que simplifica y condensa el mundo externo codificando selectivamente objetivos, situaciones, acontecimientos, experiencias, secuencias de acción presentes o pasadas (Tarrow, 1994: 214).

ricos, por tanto, que sólo esperaban una oportunidad para estallar en conflicto (Lazarte, 2005: 331).

En el mismo sentido fueron construidos y difundidos los discursos de los líderes y las bases del movimiento. Ambos argüían que las poblaciones pobres en Bolivia, en su mayoría indígenas, se habían empobrecido más a causa de las políticas estructurales de corte neoliberal y que la clase política era la única beneficiada en tal proceso, a ello contribuía el sistema de cuotas y la política de "pactos" de los partidos políticos que se intercambiaban la administración del Estado.

EJERCITANDO OTRAS RESPUESTAS

El problema de considerar la agudización de la pobreza –como efecto de las políticas neoliberales– y la ingobernabilidad política en su doble direccionalidad (de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba), como los principales factores estructurales para la reactivación de los movimientos indígenas, es que ninguna de estas variables explica por sí misma la reactivación del movimiento indígena en Bolivia ni los resultados a los que arribaron al final del ciclo de protestas. En primer lugar, la "ingobernabilidad política" era –como afirma Lazarte– recurrente desde mediados de los ochenta. Por otro lado, la agudización de la pobreza tampoco era un fenómeno nuevo.

Entonces, si estos factores fueron recurrentes en la historia boliviana larga y reciente, ¿por qué las movilizaciones de distintos sectores sociales, incluidos los sectores campesinos-indígenas no tuvieron la contundencia que mostraron entre 2000 y 2003? Si la agudización de la pobreza como efecto de las políticas implementadas en la década de los noventa fue el factor movilizador ¿por qué los poblados que concentraban al mayor porcentaje de pobres no se movilizaron?[6]

[6] Incluso esta pregunta remite a la tradición marxista y a teóricos marxistas como Lenin y Gramsci cuya contribución a las teorías de la acción colectiva gira en torno a las preguntas; ¿por qué la gente no

Según los datos del censo de 2001 los municipios rurales más pobres del país, con un 98% de pobreza de su población, estaban ubicados en los departamentos de Potosí (la región norte), Cochabamba (la región sur) y Oruro. Sin embargo, las poblaciones indígenas de estos departamentos no se movilizaron; y si lo hicieron fue en una magnitud mucho menor que los aymaras del altiplano paceño donde la pobreza alcanzaba al 74% de su población, o el sector cocalero ubicado en el departamento de Cochabamba donde la pobreza alcanza al 80%, la excepción la constituyen los grupos étnicos de tierras bajas dispersos en cuatro departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija) cuya pobreza alcanzaba al 94% de su población.

La pobreza es un factor de carencia, supone una negación y una falta de recursos no sólo de tipo económico, sino también de capitales simbólicos, culturales, sociales e institucionales, mermando sobre todo el ejercicio de los derechos más elementales. En condiciones de carencia los pobres no pueden movilizarse porque están desprovistos de la capacidad de movilización. Porque movilizarse implica una inversión en recursos –como el tiempo, que significa ingresos diarios para la reproducción vital– recursos extremadamente escasos como para invertirlos en la acción colectiva, cuyo resultado no era inmediato ni seguro, por eso muchas otras poblaciones indígenas con los mayores porcentajes de pobreza no se movilizaron.[7]

---

se rebela?, y si se rebela ¿por qué lo hace?, o ¿bajo qué condiciones se rebela?

[7] Aunque esta interpretación puede dar la idea de aproximarnos a los argumentos olsonianos de un sujeto estratégico, racional, calculador o a la idea del "gorrón", nuestra postura toma distancia de tales argumentos. El problema de la movilización implica un problema de recursos (materiales, simbólicos, políticos) y la ausencia de éstos (por ejemplo, la carencia de condiciones materiales, extrema pobreza) dificulta la movilización de los sujetos y de otros recursos por parte de ellos.

No negamos que la pobreza haya sido uno de los argumentos centrales de los sectores movilizados –aymaras del altiplano paceño y quechuas cocaleros del trópico de Cochabamba– y que éstos experimenten situaciones de pobreza,[8] pero este factor –como afirman distintos autores– no necesariamente explica la movilización social, aunque éste sea el argumento central de su movilización y forme parte del enmarcamiento de la acción. Tampoco explica el sentido de la acción, los agravios e injusticias sociales más o menos objetivos –señala Sabucedo (1998)– no son suficientes por sí mismos para el inicio de la movilización. O, como arguye Rancière, los pobres en tanto tales no generan una irrupción del orden, "...no hay política simplemente porque los pobres se opongan a los ricos", sino en tanto se establece un escenario donde los primeros se sientan iguales a cualquiera (Rancière, 1996), en el entendido de constituirse ellos mismos como sujetos históricos.

La hipótesis que se discute es que la reactivación del movimiento indígena y los éxitos alcanzados en este último ciclo de protestas constituyen un resultado no esperado del viejo proyecto del nacionalismo revolucionario de 1952, pero no por sus negaciones, sino por sus aperturas; pero también son resultado de las aperturas políticas que –paradójicamente– se presentaron en el periodo de implementación de las reformas estructurales de corte neoliberal. Por otra parte, sostenemos que lo que estaba en juego en la (re)emergencia de los movimientos indígenas no fue la reparación de los agravios experimentados por estos sujetos en tanto

[8] Pero a diferencia de los sectores indígenas no movilizados, éstos cuentan con los índices más altos en acceso a servicios públicos (electricidad, carreteras, educación, institucionalidad pública), sea por la cercanía con la sede de gobierno –el altiplano paceño– o por las políticas de desarrollo alternativo que se implementaron a lo largo de la década de los noventa para amortiguar los efectos de la política de erradicación de cultivos de coca.

clases empobrecidas o sectores étnicos discriminados, sino su propia constitución de sujetos políticos. Así, ponían en discusión la naturalidad del orden social y la legitimidad del "decir" y del "nombrar" que había hecho persistente no sólo las desigualdades económicas, sino los racismos en la sociedad boliviana que subsisten como relaciones de poder asimétricas mimetizadas pero no difíciles de ser reconocidas por quienes las vivieron en el pasado, las tienen insertas en sus memorias colectivas y las identifican en el presente.

LA CONTRIBUCIÓN DEL CONCEPTO DE ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES POLÍTICAS

Todavía existen autores en la región que argumentan que las teorías de la acción colectiva, el enfoque de la movilización de recursos o los nuevos movimientos sociales, difícilmente pueden ser aplicables a realidades tan distintas y complejas como las latinoamericanas, sobre todo por los presupuestos epistemológicos que suponen, principalmente los primeros enfoques individualistas de estas teorías.[9]

Tal crítica no es tan desatinada si asumimos que las teorías contemporáneas de la acción colectiva surgen en y para explicar la emergencia y particularidad de la acción colectiva en sociedades desarrolladas y posmodernas, caracterizadas por un alto proceso de individualización y una mayor complejización de los procesos de diferenciación social. En dichos contextos, los movimientos sociales de la década de los sesenta –que dieron paso a las teorías contemporáneas– presentaban ciertas singularidades y diferencias respecto a los movimientos que los precedieron. La acción colectiva se había desplazado de las demandas económico-materiales de los tradicionales movimientos obreros y campesinos hacia

[9] Nos referimos al carácter individual, reflexivo, racional-instrumental que supone la teoría olsoniana de la acción colectiva.

demandas de carácter cultural y societal. De las estructuras organizativas verticales (como los sindicatos) hacia estructuras organizativas más informales y horizontales, cuyas identidades y articulaciones ya no giraban alrededor de la clase social como categoría identitaria, sino hacia categorías que la desbordan, como el género, la raza y la etnia, por nombrar algunas.

La sociedad boliviana, al igual que otras sociedades en América Latina, dista mucho de tal caracterización societal. En Bolivia encontramos una sociedad de desarrollo incipiente, donde los procesos de diferenciación social y de individualización siguen un curso distinto y mucho más lento que las europeas y norteamericanas, más aún cuando todavía se hacen presentes de forma desarticulada –decía Zavaleta Mercado (1986)– distintos modos de producción que se corresponden con culturas políticas desigualmente desarrolladas (la comunitaria, la señorial y la incipiente cultura capitalista-liberal), aunque con cierto predominio de una de ellas.

Tal vez dicha lectura –en el caso boliviano– hizo que algunos autores, preocupados por la problemática de la acción colectiva en la región, ubiquen al enfoque de la movilización de recursos como una teoría que aporta mucho en términos descriptivos y poco en términos analíticos (Mayorga, 2007; García Linera, 2005). Siguiendo esta lógica, se reduce la estructura de oportunidades políticas al nivel descriptivo para dar cuenta del contexto, del panorama general donde se inscribe la movilización, más que emplear el potencial analítico de estas categorías para comprender la especificidad de la acción colectiva en determinadas coyunturas históricas y el efecto sobre el sentido de la acción que tienen los factores estructurantes de la misma.

Pese a las críticas que se le hacen al enfoque de la movilización de recursos, sea por los supuestos epistemológicos que arrastra de su anterior vínculo con el enfoque olsoniano

de la acción colectiva, o por la sobredimensión político-institucional de la acción colectiva, la categoría analítica de la estructura de oportunidades políticas posibilitó identificar aquellos condicionantes estructurales que ayudan a explicar, interpretando, el curso y el sentido de la acción colectiva en una determinada coyuntura. Nos permitió avanzar más allá del discurso predominante (en el contexto boliviano) que enfatizaba los efectos "perversos" de las políticas económicas implementadas en los noventa, identificando aquellas aperturas políticas –como efectos no intencionados– que se fueron convirtiendo en recursos para la movilización en esta nueva fase de protestas del movimiento indígena (2000-2005), aunque también fue necesario incorporar una perspectiva histórica –de la que carece este enfoque– que permitió comparar esos condicionamientos estructurales en distintos momentos. Empleando el concepto de estructura de oportunidades políticas de los teóricos de la movilización de recursos (Tilly, 1998; Tarrow, 1994; McAdam, 1998) identificamos otros factores explicativos de la emergencia y los resultados de las protestas del movimiento indígena, además de la "ingobernabilidad política" desde arriba y desde abajo (Lazarte, 2005) o de la crisis de Estado (García, Gutiérrez, Prada, Tapia, 2001; García, 2005; Prada, 2004; Tapia, 2002).[10] Nos referimos a la apertura política, los aliados influyentes, el contexto internacional, a los que hay que añadir, el cambio relativo de la estructura social como una variable explicativa.

[10] Estos autores forman parte del grupo comuna, intelectuales de izquierda, principalmente bolivianos, que desde posturas neomarxistas, sobre todo gramscianas, han logrado posicionarse –desde mediados de los noventa– en el campo intelectual y en el campo político desde el campo intelectual, en oposición a las posturas más institucionalistas de la política. Uno de los representantes del grupo comuna es Álvaro García Linera, vicepresidente en la gestión de Morales.

No abundaremos en cada uno de estos elementos, pero sí nos interesa destacar algunos de ellos para mostrar la utilidad del concepto de estructura de oportunidades políticas. Para efectos explicativos a continuación destacamos tres factores que están estrechamente vinculados y engloban un conjunto más amplio: a) la fractura de las elites políticas y los aliados influyentes; b) las aperturas en el sistema político; c) cambios relativos en la estructura social, los dos últimos son mucho más importantes que el primero.

La fractura de las elites políticas y los aliados influyentes

Retomando las tesis de Lazarte y de García Linera sobre la ingobernabilidad política desde arriba y la crisis del Estado, respectivamente, podemos argumentar que ambas hacen referencia a la crisis que experimentaba la clase política de entonces. Este fenómeno no es novedoso en la historia boliviana. Una revisión de la historia de los conflictos sociales en Bolivia y la participación de las poblaciones indígenas, sobre todo de la parte occidental del país, muestra una cierta correlación entre la crisis de las elites gobernantes y la emergencia de los movimientos indígenas. Es decir, estas fracturas al interior de la clase dominante, enfrentada por la disputa interna por el poder (político) han derivado en ciertas alianzas de alguna fracción de las elites con los sectores indígenas movilizados. La correlación es importante para explicar –en parte– el curso de la acción colectiva indígena, pero no implica necesariamente que los movimientos indígenas dependan de la crisis de las elites, y tampoco significa que tal factor desencadene por sí solo la movilización (Mendiola, 2002: 259), pero sí se puede sostener que en este escenario de fracturas, disputas y alianzas los movimientos indígenas se han visto parcialmente favorecidos.

Por ejemplo, durante el levantamiento indígena liderado por Pablo Zarate Willka a fines del siglo XIX, en un escenario

de disputa entre las elites políticas (conservadores *versus* liberales) que derivó en una Guerra Civil, la alianza de los aymaras movilizados con la fracción liberal de la elite criolla permitió a los primeros desestabilizar el poder de la elite conservadora, (1899-1904) y fundar de manera muy coyuntural la "república de los indios" (Condarco, 1982), que más que un hecho efectivo constituyó un acto simbólico de igualación de los indios en tanto sujetos políticos (Rea, 2009). De igual manera, a mediados de los cincuenta, la formación de una pequeña burguesía nacionalista en oposición a las oligarquías de entonces y en disputa por el control del poder político, consolidó la alianza entre las primeras, los indígenas movilizados y el movimiento obrero; lo cual ayudó a explicar el éxito que tuvieron los sujetos movilizados (campesinos y mineros y clases populares urbanas) en la primera fase de la revolución de 1952, al incidir en el proceso de distribución de tierras de la zona occidental del país, en manos de terratenientes, como en la ampliación de derechos ciudadanos –acceso a la educación y derecho al voto para los indígenas– (Albó, 2002; Dandler, 1986). En estos dos casos podemos ver la correlación entre la escisión de las elites políticas y la emergencia de los aliados estratégicos para el movimiento, pues la parte que se ve desfavorecida en la lucha por el poder político encuentra en los sectores indígenas movilizados los aliados para disputarse o asirse del poder.

En este nuevo ciclo de protestas también se presentó un escenario de crisis al interior de las elites dominantes y los aliados estratégicos para el movimiento estaban formados por sectores de clase media, principalmente profesionistas ideológicamente inclinados hacia la izquierda y centro izquierda que, hasta entonces, carecían de oportunidades políticas sólidas para alcanzar o disputar el poder estatal en manos de las viejas elites políticas. Si bien éstos no formaban parte de la elite política sí constituían una fracción de clase –clase media– más próxima a la clase dominante, pero que

habían sido desplazados del control de la institucionalidad política. Un viraje de su discurso neomarxista de clase social hacia una recuperación del discurso nacional indigenista, permitió una sólida articulación con las fracciones dominantes del movimiento indígena, pero también les permitió encontrar nuevos aliados y simpatizantes para el movimiento indígena y sus partidos políticos: los ciudadanos de clases medias bajas autodefinidos no-indígenas, descontentos con la vieja elite política y con los efectos del modelo económico implementado por los últimos.

Aquí cabe explicitar las diferencias de estos sucesos históricos. En los dos primeros casos las alianzas de los movimientos indígenas en Bolivia con fracciones de las clases dominantes, no implicaron un equilibrio de poder sino tales alianzas se basaron en un equilibrio inestable (Elias, 1994) o en una asimetría de las relaciones (Foucault, 1988), que logró beneficios más sólidos para los aliados estratégicos (control del aparato estatal) que para los sectores indígenas movilizados, aspecto que difícilmente es considerado por el enfoque de la teoría de la movilización de recursos al carecer de un concepto de poder.

En el tercer caso, durante el nuevo ciclo de protestas (2000-2003) del movimiento indígena, la alianza que se generó en torno al sujeto movilizado –que constituye una alianza inter-clase– también estuvo basada en relaciones de poder, en tanto equilibrio inestable de relaciones, pero este equilibrio inestable parece haber favorecido más que en otros periodos a ciertas fracciones del movimiento indígena, que desde 2006 lograron el control en la administración del Estado.

¿Cuáles son los factores que hicieron posible que tal equilibrio inestable favoreciera al movimiento indígena y al éxito de su movilización? En un intento por responder a esta interrogante es pertinente recurrir a la categoría de apertura de oportunidades políticas que nos ofrece la teoría de la movilización de recursos.

Las aperturas en el sistema político

Al incorporar la categoría de oportunidades políticas encontramos que las reformas estructurales de corte neoliberal, implementadas a principios de los noventa, no sólo generaron efectos negativos (pobreza, desigualdad, desempleo, subempleo, informalidad) para la población en general y para las poblaciones indígenas en específico, sino también oportunidades para la participación política de los sectores antes excluidos del sistema político formal: los indígenas.

Aparejado a los cambios económicos de corte neoliberal, también hubo cambios políticos, muy concordantes con el enfoque liberal, como el reconocimiento constitucional del carácter multiétnico y pluricultural del Estado boliviano.[11] Sin embargo, estos cambios normativos que incorporaban el reconocimiento de la diversidad étnica y lingüística de la población nacional no fueron producto de la simple iniciativa de la clase política gobernante, sino de una combinación del nuevo escenario político internacional (la ratificación de convenios internacionales por parte de los Estados nacionales, la conmemoración de los 500 años del descubrimiento del continente americano y el problema de la balcanización en Europa del este)[12] y la acción colectiva de ciertos sectores

[11] Desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT, en julio de 1991, la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) en 1995 que incorpora el carácter "multiétnico y pluricultural" del Estado, la promulgación de distintas leyes que incorporaron el elemento étnico-cultural y el reconocimiento de los derechos sociales indígenas como: la Ley 1565 de Reforma Educativa (1994), la Ley Forestal 1700 (1996), la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (1996), la Ley 1551 de Participación Popular (1994).

[12] Nos referimos al convenio 169 de la OIT firmado por diferentes países de la región a partir del cual muchos Estados-nación reconocen en sus cartas magnas algunos de los derechos colectivos de las poblaciones indígenas (respeto a sus lenguas y costumbres, principalmente). Por otra parte, las actividades en torno a los 500 años de "resistencia" que

indígenas (las movilizaciones de los pueblos indígenas de tierras bajas) en defensa de sus derechos territoriales. Estos discursos fueron reforzados por los discursos internacionales en torno a la etnicidad y a la diversidad cultural, tanto en el plano político como académico.[13]

En concreto, en este escenario de aperturas políticas un instrumento normativo relevante fue la Ley de Participación Popular, emitida en 1994, como parte de la reformulación constitucional, que reconocía la personería jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y originarias como Organizaciones Territoriales de Base (OTBS), el derecho a regirse por sus propias organizaciones, a definir sus prioridades de desarrollo, a ser atendidas por los gobiernos municipales y a ejercer funciones de gestión pública.

Entonces, algunos autores enfatizaban los efectos nocivos de dicha norma para los sectores indígenas. Robert Lessmann (2005) consideraba que la Ley de Participación Popular no había servido para avanzar en los procesos autonómicos de las poblaciones indias, sino que significó el avance del clientelismo y la corrupción, además de la injerencia de partidos tradicionales o del gobierno central en los asuntos de las organizaciones tradicionales reconocidas como OTBS. Por su parte, García Linera ponía más énfasis en el lado "perverso" de la norma al reconstruir y renovar "...las viejas jerarquías coloniales en las que los indígenas quedaban excluidos de cualquier poder que no sea el de la clientelización de su voto", llegó a argumentar que tal normativa sólo

movilizó a diferentes sectores indígenas en América Latina. Por último, la balcanización en el Este de Europa, a partir de la cual se renuevan los discursos sobre las minorías étnicas en el continente europeo.

[13] Esto último argumenta la tesis de Gamson y Meyer sobre que no sólo las oportunidades políticas abren el camino para la acción colectiva, sino que los movimientos sociales inciden en la creación de oportunidades para el nuevo ciclo de protestas (McAdam, 1998: 103).

permitió que los "mistis"[14] de pueblo se redistribuyesen el poder político local, mientras los q'aras[15] se ocupaban de la administración nacional (García, 2003). Es decir, esta Ley –argumentaba García– estaba diseñada para extirpar las instituciones políticas indígenas, desconocerlas y sustituirlas por esquemas procedimentales liberales y representativos, asentados en el voto individual y en el sistema de partidos.

Planteado así, ambos autores desproveen a los indígenas, en tanto agente social,[16] de capacidad (agencia) para aprehender, adaptar y modificar las estructuras que los sujetan. En este sentido podemos argumentar que algunos sectores indígenas, teniendo como caso más significativo el de los productores de hoja de coca, "usaron" estratégicamente dicha normativa para controlar los espacios de poder local, ocupar espacios de participación política nacional y potenciar su propio movimiento, como parte de su estrategia de

[14] Mistis es un término quechua para señalar "señor rural", pequeños "ricos" mestizos, que vivían en los municipios rurales y que durante gran parte del siglo XX habían gozado de ciertas preferencias –por su condición de mestizos– para administrar los espacios locales, como representantes locales del Estado.

[15] Q'ara, palabra de la lengua aymara que significa pelado, se lo emplea para identificar a personas de tez clara que no son indígenas o se desconocen como tales.

[16] Retomando la teoría bourdiana es apropiado considerar a los partícipes de la acción colectiva y al movimiento social como agentes, no como individuos biológicos sino socialmente constituidos en tanto activos y actuantes en un determinado campo social (Bourdieu y Wacquant, 2005: 163); en tanto tales, no son concebidos como ejecutores de un plan general que los superaría, ni actores dotados de una libertad soberana. Sus comportamientos no están regidos por una voluntad consciente, transparente a sí misma y tampoco están determinados mecánicamente por la coyuntura de la que forman parte (Nordmann, 2010: 20). Pero es a partir de sus *habitus* (sistemas de disposiciones o esquemas de interpretación) que los agentes luchan en función de la posición que ocupan en el espacio social, ya sea para modificarlo, ya sea para conservar sus fronteras y configuraciones (Bourdieu y Wacquant, 2005: 24-25).

acción para hacer frente a sus adversarios (la clase política gobernante).

Por ejemplo, en las primeras elecciones municipales de 1995, bajo dicha normativa, el sector cocalero logró controlar tres de las cuatro alcaldías y dos subalcaldías de su área de influencia como movimiento (el Trópico de Cochabamba) utilizando las siglas de un partido no indígena de izquierda (Izquierda Unida, IU). En 1997, el mismo sector logró controlar la totalidad de las alcaldías, así los dirigentes cocaleros (que no eran mistis como argüía García) se convertían en alcaldes municipales y otros en legisladores en el Congreso Nacional con la participación de cuatro representantes, entre ellos Evo Morales que logró el 69% de apoyo de la circunscripción electoral a la que representaba. Mientras que a nivel nacional en 1999, el control campesino/indígena de los espacios municipales fue numéricamente mayor con respecto a 1995, ganaron en 47 de los 311 municipios existentes en el país, con las siglas del MAS.

El control de los espacios de poder local (municipal) que se creó a través de esa normativa, permitió a los sectores indígenas proveerse de distintos recursos de los que carecían antes de esta apertura política, entre los principales: a) recursos económicos, vía el control de las alcaldías municipales; b) mayores capacidades de negociación y confrontación con el Estado y la elite política; c) ampliación de sus repertorios de acción desplazándose en un movimiento pendular entre los espacios informales de la política (la protesta) y los espacios formales (el parlamento); d) además que lograron la independencia política respecto a los partidos tradicionales que, durante 50 años, habían hecho de las bases y organizaciones campesinas su clientela electoral.

Pero estos accesos y recursos de los que se proveyeron los distintos sectores del movimiento indígena a partir de tal normativa sólo pueden ser comprendidos, como un *efecto no intencionado* de las reformas promovidas por la clase política dominante de entonces.

Cambios relativos en la estructura social: las aperturas sociales

La apertura política generada en el periodo neoliberal y como parte de este proceso no puede contener todo el peso de la explicación del éxito del movimiento indígena en el último ciclo de protestas (2000-2005), es necesario observarlo en su relación con otros factores. Nos referimos a *la apertura de tipo social que se generó desde el campo político* tras la Revolución nacionalista de 1952: el acceso de las poblaciones indígenas a la educación, pero no sólo a la educación básica que se promovió como parte de las políticas de Estado sino, y sobre todo, el acceso a la educación superior de una parte reducida de la población indígena.[17] Es decir, empezaron a disponer de un capital (capital escolar) antes escaso y restringido para este sector y, a partir de ello, a demandar y obtener los recursos políticos que hasta la década de los noventa eran exclusivos de las clases dominantes, principalmente, no indígenas.

Pero esta exclusión de los indígenas en el control de la institucionalidad política no estaba vinculada a prohibiciones formales, sino más bien al efecto de la hegemonía de la burguesía nacionalista (Gramsci, 1967) que hacia impensable al interior de las poblaciones indígenas subalternas la existencia de capacidades propias para administrar lo público. Como decía uno de nuestros entrevistados, "...la gente pensaba que ningún indio podía gobernar a otros indios (aunque el indio fuera educado), porque no era parte de su 'naturaleza', este papel era de exclusividad de los no-indios...".[18] Por eso, a

[17] En términos estadísticos es difícil cuantificar qué parte de la población con educación superior en Bolivia es indígena. A pesar de ello, los datos censales de 2001 arrojaban que del 10% de población que contaba con una educación terminal superior la mitad más uno (el 51%) se autoidentificó con algún pueblo indígena.

[18] Entrevista realizada a dirigente indígena en 2003.

pesar de la existencia de partidos indígenas desde la década de los setenta, éstos no encontraban apoyo de las poblaciones indígenas subalternizadas. Esta forma de pensarse y pensar lo político, un rasgo indiscutible de la internalización de la dominación, fue cambiando desde los noventa.

¿Cómo es posible comprender que el acceso a la educación, en sus diferentes niveles, haya permitido no sólo que un reducido grupo de indígenas tuviera acceso a capital escolar, sino un cambio en las subjetividades indígenas? Esto se puede comprender como uno de los resultados no intencionados más importantes del nacionalismo revolucionario que emprendió la pequeña burguesía nacionalista de mediados del siglo XX.

Es aquí donde identificamos una de las limitaciones más relevantes de la teoría de la movilización de recursos. ¿Cómo podíamos explicar estos cambios que no son político-institucionales pero que inciden en dicho campo? Tomando algunos recursos conceptuales de Bourdieu podemos argumentar que el acceso a la educación básica y superior de una población que carecía de este capital escolar y los escasos cambios que se generaron en sus condiciones de vida ocasionaron un desajuste[19] entre las expectativas subjetivas de estos actores (la idea de que hubiera movilidad social a partir del acceso a la educación) y escasas condiciones objetivas para tal movimiento. Este es el desplazamiento conceptual para encontrar en la teoría de la reproducción de Bourdieu –arguye Charlotte Nordmann– el origen de impugnaciones a la dominación. Ello es posible cuando esos principios ordenadores entran en contradicción con el orden presente de las cosas, cuando ese orden ha experimentado un cambio desde la constitución del *habitus* (Nordmann, 2010: 51-52).

[19] Este concepto de desajuste nos parece clave para pensar desde una perspectiva bourdiana cómo los factores estructurales y estructurantes (no solamente políticos) inciden en la emergencia de la acción colectiva de determinados agentes sociales, en determinadas coyunturas.

En términos empíricos, tal proceso es identificado en las sociedades europeas a partir de la masificación del sistema educativo, como resultado de la relación inversamente proporcional entre el acceso a la educación cada vez más masiva y una reducción cada vez mayor de las posibilidades de movilidad social que esperan alcanzar los agentes. Esta relación inversamente proporcional genera una inadecuación entre las esperanzas de los individuos y sus oportunidades objetivas que, combinado con la precariedad (producto de la reducción del mercado laboral), tiene como efecto disolver la coincidencia entre sus *habitus* y la realidad objetiva del mundo social (Bourdieu, 1999),[20] introduciendo además un elemento clave para el análisis de los movimientos sociales: la reflexividad.

Aunque la sociedad en Bolivia es distinta a la sociedad a la que refiere Bourdieu, el acceso a la educación que experimentó la población de origen indígena, sobre todo los aymaras y quechuas, desde la década de los setenta, no modificó significativamente la posición social de quienes tuvieron acceso a dicho capital. La crisis económica de los ochenta y el contexto de flexibilización laboral en la década de los noventa, restaba las posibilidades de movilidad social de estas poblaciones. Sin embargo, este desajuste entre *habitus*, parcialmente modificado por el acceso al capital escolar, y la reproducción de la posición social, permitió una ampliación del margen de libertad que tienen los agentes para actuar, para dotarse de mayores capacidades de "reflexividad" en el margen (no fuera) de las condiciones de posibilidad[21] que su posición social les permitía.

[20] La generalización del acceso a la educación –con el desfase estructural que resulta entre títulos que se poseen, por lo tanto, las posiciones esperadas y los puestos logrados–, y de la inseguridad profesional, tiende a multiplicar las situaciones de desajuste, generadoras de tensiones y frustraciones (Bourdieu, 1999: 276).

[21] Este elemento de actuar en el margen de las condiciones de posibilidad que tiene la gente y no fuera del margen de posibilidades lo rescatamos de Ignacio Mendiola (2002).

Esto último no quiere decir que en los ciclos de protesta anteriores al analizado se carecía de reflexividad sino que en esta coyuntura el acceso a la educación, las dificultades de movilidad social, la persistencia del racismo que, en el imaginario de los indígenas, debía ser mitigado por los capitales que disponían, combinadas con las aperturas políticas (la posibilidad de llegar a los espacios de poder municipal desde su condición étnica) jugaron un papel productivo en términos de la acción colectiva. Los indígenas encontraron legítimo el derecho a la palabra y de allí el derecho a la administración del poder político. Sólo desde este proceso es posible argumentar que los indígenas se disputasen en este ciclo de protestas la conducción del país a través de la toma del poder institucionalizado.

BALANCE DE LOS APORTES Y LIMITACIONES DE LA TEORÍA DE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Así, examinando la estructura de oportunidades políticas y cómo se concatenan estos procesos podemos comprender no sólo la emergencia del movimiento indígena durante el ciclo de protestas de 2000, sino los resultados que alcanzó al final de dicho ciclo. Este es el potencial de usar un concepto como el de estructura de oportunidades políticas para explicar el curso de la acción colectiva.

Por otra parte, la utilidad del concepto de estructura de oportunidades políticas sólo puede ser productivo para la comprensión de una acción colectiva como el movimiento indígena boliviano, en tanto se revisen o consideren los supuestos epistemológicos y teóricos que conllevan, a saber.

Asumir el carácter relacional de la acción colectiva, es decir que –como proponen Tilly, 1998 y Tarrow, 1994– lo central en el análisis de la acción colectiva no es explicar los cálculos individuales de la acción, sino las conexiones entre actores que conforman identidades colectivas y definen los

costos y beneficios colectivos (Tilly, 1998: 31). El vínculo entre la protesta (la acción colectiva), las condiciones de posibilidad (oportunidades políticas) de la acción colectiva, el sentido de la acción, las estrategias de coordinación, mantenimiento de la acción (Tarrow, 1994: 47) y las relaciones de poder que presuponen.

Ampliar el concepto de oportunidades políticas, a diferencia de lo que propone McAdam (1998), al hacer una revisión del concepto de estructura de oportunidades políticas y la necesidad de reducir las categorías analíticas a la dimensión político-institucional, creemos que es necesario mantener la amplitud del concepto para dar cuenta de aquellos elementos que desbordan el campo de lo político-institucional pero inciden sobre el mismo, como es el caso de las aperturas sociales (los cambios estructurales) que derivaron en el acceso a capitales (acceso a educación superior, como el principal pero no el único) e incidieron en el desajuste entre el *habitus* modificado y la reproducción de la posición social que permitió a los indígenas modificar sus repertorios de acción, sus discursos y les posibilitó pensar y actuar en el margen de sus condiciones de posibilidad. Es decir, la emergencia de los movimientos sociales y los resultados que alcanzan no necesariamente están ligados y de manera exclusiva con las oportunidades políticas, como suponen los teóricos de la movilización de recursos (Tarrow, 1994; McAdam, 1998). Creemos que es necesario virar la mirada hacia otros factores estructurales no políticos (sociales, culturales) que pueden explicar incluso las mismas oportunidades políticas.

Por otra parte, como argumenta Mendiola, la estructura de oportunidades no es externa a los agentes movilizados, como suponen los teóricos de la movilización de recursos (Mendiola, 2002). Los agentes están inmersos en ella, constituyen parte de las condiciones de posibilidad, cuya contracción o ampliación determina el margen de maniobra de los actores movilizados en tanto agentes y, en cuanto tal, no

supone una igualdad de relaciones de poder entre los agentes en conflicto, sino, como diría Elias (1994), un equilibrio inestable de relaciones.

Por último, desde nuestro punto de vista, cada uno de estos factores u oportunidades políticas no operan como variables independientes y causales de la emergencia de los movimientos sociales y de los efectos que éstos producen, sino más bien operan en el sentido weberiano de "afinidades electivas",[22] como relaciones flexibles y abiertas entre ciertas variables que se encuentran en un momento histórico determinado.

Sólo a partir de lo apuntado hasta aquí es posible entender el "éxito" del movimiento social (indígena) en términos de su re-posicionamiento en el campo político, así como comprender el sentido que los actores movilizados atribuyeron a su acción, más allá del reduccionismo político-institucional, como campo de lucha. Es en esta dimensión de la acción que la teoría de la movilización de recursos encuentra su mayor limitación, pese a incorporar categorías analíticas de tipo residual como "marcos cognitivos" o "enmarcamiento" de la acción, aspecto que trataremos en el siguiente apartado.

UN INTENTO DE SUPERAR EL REDUCCIONISMO POLÍTICO DEL SENTIDO DE LA ACCIÓN COLECTIVA

A diferencia del potencial que puede significar la categoría de la estructura de oportunidades políticas no sólo para explicar la emergencia sino el curso de la acción del movimiento indígena en Bolivia –con la salvedad de no reducirnos sólo al plano de lo político-institucional, sino ampliar tal concepto a elementos que desbordan tal dimensión, el concepto de marcos cognitivos resultó ser menos productivo para explicar el sentido de la acción.

[22] Véase Max Weber (2003).

En primer lugar, porque, a diferencia del concepto de estructura de oportunidades políticas que logra superar la dimensión individual de la acción colectiva partiendo de la premisa relacional de esta última (Tarrow, 1994), el concepto de marcos cognitivos se enquista en tal dimensión de la acción, pues reduce la construcción de la realidad, de la identidad y del significado de la acción al nivel de las experiencias y voluntades individuales,[23] desconociendo o restando importancia al papel que juegan los condicionamientos materiales y simbólicos históricamente determinados sobre esas experiencias y "voluntades" individuales.

En segundo lugar y a partir de lo anterior, como señala Rivas, el concepto de marcos cognitivos propuesto por diversos especialistas (Gamson, Snow y colaboradores, entre los principales) invisibiliza los desencuentros y las luchas que se dan al interior del movimiento por la definición de la situación problemática y la construcción de la identidad (Rivas, 1998: 196). Es decir, no explican que tales marcos cognitivos y emarcamientos son el resultado de las luchas, las disputas y las relaciones de poder entre los diferentes actores sociales al interior del movimiento.[24]

[23] Aspecto que resalta en estudios de caso como los presentados en el libro de Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina (1998).

[24] Por ejemplo, desde una perspectiva mucho más amplia de la construcción de los discursos del movimiento, que la ofrecida por los marcos cognitivos, se puede comprender que los "enmarcamientos", como el discurso antineoliberal, la apelación a la noción de "pueblo", o la reivindicación étnica más que de clase, fueron resultado de las disputas y tensiones, no sólo entre los actores colectivos movilizados y sus adversarios (la clase política dominante) sino entre actores del propio movimiento indígena. Resultado de tensiones y disputas por los liderazgos, los objetivos y hasta el control de las bases sociales, por algunas fracciones del movimiento. En un trabajo anterior, rastreando la dinámica interna del movimiento indígena boliviano, pudimos identificar por lo menos tres sectores del movimiento, diferenciados cultural, política e históricamente, cuyos discursos y posturas en torno al movimiento también fueron diferentes, pero que en algunos puntos del ciclo de protesta lograron acuerdos, que

En tercer lugar, restando el peso individual y asumiendo el supuesto relacional y social de la acción colectiva que plantea Tarrow (1994), la categoría de marcos cognitivos o marcos de significación es útil para explicar la dimensión simbólica de la acción en tanto recurso para la movilización que utilizan los actores colectivos de manera racional, consciente y estratégica para dar sentido a su acción, transmitir mensajes y encontrar ecos en la población en general. Sin embargo, difícilmente permite comprender y explicar el sentido de la acción que desborda el plano de lo consciente de los actores movilizados y trasciende la dimensión político-institucional en la que de manera reduccionista suele inscribir la emergencia y los resultados de la acción colectiva.

Ello implica, por tanto, el desplazamiento a otro nivel de análisis, al nivel de las subjetividades. ¿Qué es lo que pretendían los indígenas movilizados al reintroducir las categorías étnico-culturales, enmarcar sus discursos en la reivindicación étnica y el discurso antineoliberal y desplazar el discurso de clase social que había prevalecido en su interior durante la segunda mitad del siglo XX?

Si asumimos los presupuestos del enfoque de la movilización de recursos y dentro de éste el de procesos políticos podríamos llegar a la conclusión de que el movimiento indígena en el último ciclo de protestas logró transformar el campo político institucional en Bolivia, lo cual constituye una realidad concreta y efectiva a partir del ciclo de protestas analizado (2000-2005). Sin embargo, habría que preguntarse ¿este era el fin de la movilización indígena cuyas demandas y motivaciones de movilización estaban enmarcadas en las reivindicaciones étnicas? ¿El sentido de la acción en este último ciclo de protestas y a lo largo de su historia como

---

sin ser homogéneos, les permitió mejores posicionamientos en el campo político (Rea, 2006).

actores colectivos era transformar el sistema político, el Estado y sus instituciones?

Si respondemos de forma afirmativa a dichas preguntas caemos en aquello que Melucci denomina "la miopía de lo evidente", por un lado y, por otro y vinculado a aquel, en el reduccionismo político; es decir, quedarnos con la descripción de lo evidentemente observable por su condición externa, lo que evitaría explicar la dimensión subjetiva de la acción colectiva, no sólo en el entendido de recursos que se movilizan para dar sentido a la acción (la inmediatez del lenguaje) sino del efecto que generan dichas acciones en las subjetividades colectivas, como proceso y como resultado de la acción colectiva.

Para superar las limitaciones que implica el enfoque de los procesos políticos en la comprensión de la acción colectiva y sin negar los aportes de la categoría de la estructura de oportunidades políticas, debíamos entender al movimiento social como productor de sentido, pero no en el sentido formulado por los teóricos de los marcos cognitivos, como la dimensión simbólica, el conjunto de creencias y significados orientado a la acción que inspira, legitima y ayuda a conformar identidades personales y sociales (Rivas, 1998: 207). Desde nuestra perspectiva, esta forma de interpretar el sentido de la acción se queda en el plano de la "inmediatez del lenguaje" (Mendiola, 2000).

Que el movimiento indígena en Bolivia haya enmarcado su acción en el discurso de la "lucha antineoliberal" vinculado a la "reivindicación étnica" y el "retorno del Pachacuti",[25] que constituyeron los discursos principales de las movilizaciones entre 2000 y 2003 y que sintetizaban las injusticias pasadas y presentes que experimentan gran parte de los sectores populares, en tanto clases sociales empobrecidas

[25] El Pachacuti hace alusión a un actor de volteo, al cambio de una situación pasada pero mejor, usado en el contexto del movimiento implicaba el retorno simbólico al poder que habían perdido en tiempos coloniales.

y pueblos étnicos discriminados, no sólo apuntaban a la renegociación y reparación de las injusticias sociales (pobreza, desigualdad, exclusión) sino que, a partir de dichos "enmarcamientos", se estaban cuestionando las relaciones de dominación cotidianas (sustentadas en el eje de dominación étnico/racial), pero sintetizadas y representadas por la clase política gobernante, pero no reducidas a ella.

En otras palabras, el discurso y el repertorio de acción del movimiento ponían en cuestión y discutían los procesos de subjetivación dominantes de lo indio: el indio como sujeto sumiso, pobre y gobernable, educado pero poco culto, incapaz de autogobernarse y representarse a sí mismo, incapacitado para "igualarse".

Para dar cuenta de lo anterior recurrimos a fuentes teóricas que se distancian de las teorías de la acción colectiva. Por un lado, nos desplazamos a la filosofía política para extraer y repensar el concepto de política que propone Jacques Rancière. Por otro, retomamos la perspectiva posestructuralista, siguiendo a Ignacio Mendiola quien, a su vez retomando a Foucault, plantea que los movimientos sociales no sólo tienen por objetivo incidir en la transformación del sistema político, sino que intentan reorganizar el pliegue de las subjetividades experimentadas cotidianamente (Mendiola, 2002: 153), es decir, incidir en los procesos de subjetivación.

Rancière plantea la política como un momento de ruptura del orden social presentado como natural, un momento de instauración del litigio donde los sujetos que no son contados como partes reclaman ser contados como tales (Rancière, 1996: 45-56). Este concepto resulta interesante en el entendido de establecer una distinción entre lo que es la política y aquello que no lo es. No es política –nos dice el filósofo– el orden de lo visible y lo decible, aquello que implica el orden de los cuerpos que definen las divisiones entre los modos de hacer, de ser y de pensar, que hace que los cuerpos sean asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea. En cambio

la política es la distorsión y la ruptura de dicho orden, es la actividad que rompe la configuración sensible donde se definen las partes o su ausencia por un supuesto que por definición no tiene lugar en ella: la de una parte de los que no tienen parte (Rancière, 1996: 44-46). La política existe, entonces, cuando el orden natural de la dominación es interrumpido por la institución de una parte de los que no la tienen (Rancière, 1996: 25).

Desde esta perspectiva no toda confrontación, rebelión o disputa entre grupos sociales opuestos hace posible la política, entendida como una actividad de distorsión del orden social planteado como natural. La política se hace posible cuando se instaura un momento de igualación, de cualquiera con cualquiera, entre los que tienen parte (los grupos dominantes) y los que no (los grupos dominados).

El desmontaje de dicho orden social es posible en tanto los actores (dominados) movilizados se convierten en seres parlantes. Ello supone, siguiendo a Rancière, que el problema no es que los dominados estén incapacitados para desarrollar un discurso político propio, el problema consiste en que su palabra resulta inaudible porque son definidos socialmente como incapaces de hablar. Sólo proclamando la igualdad, pese a todo, se puede perturbar ese orden no sólo inicuo sino absurdo (Rancière, 1996 y Rancière en Nordmann, 2010). Este proceso de igualación en un orden de la desigualdad es posible porque la base de dicho orden no es otra cosa que la igualación en tanto comprensión (Rancière, 1996). Es decir, para que un subordinado obedezca, éste tiene que comprender la orden, y este acto (de comprensión) hace posible la igualación con quien manda. La igualación por tanto emerge cuando los sujetos comprenden que existe y a partir de dicha comprensión se revelan porque se reconocen como sujetos.

Sin embargo, Nordmann advierte –y con razón– que la propuesta de Rancière, para pensar la política como la intervención de la lógica de la igualdad en la organización

jerárquica de la sociedad, resulta problemática al ubicarse en un plano trascendental y a-histórico desde donde se reduce la lógica de la igualdad y la subjetivación –punto esencial de lo que se juega en los procesos de emancipación– a fenómenos azarosos y engendrados por la pura apertura de lo ilimitado (Nordmann, 2010: 185).

Pese a tal advertencia, este acercamiento a la filosofía política de Rancière nos permitió pensar en la política más allá del reduccionismo institucional de los teóricos de los procesos políticos como un campo de disputa en torno al orden social, donde lo que está en juego es el proceso de subjetivación –retomando a Foucault–, la constitución de las subjetividades.

Desde esta perspectiva podemos comprender las movilizaciones indígenas en Bolivia a principios del siglo XXI como un proceso de constitución de sujetos políticos que instauran un campo de disputa (la política en un sentido amplio), a partir del cual los indígenas se cuentan como sujetos iguales, y a partir de tal igualación, cuestionan las estructuras e instituciones que los determinan y determinan las relaciones sociales en las que están inmersos. Es decir, se movilizaron no sólo para demandar reivindicaciones postergadas (derecho al territorio y no sólo a la tierra, derecho a tener mejores condiciones de existencia). Para demandar tales reivindicaciones tuvieron que poner en evidencia que su situación de subordinación (en tanto pobres e indígenas) no tenía ningún fundamento natural sino la pura contingencia, sostenida por un racismo "encubierto" que persiste y se transforma permanentemente como mecanismo de dominación. En tal sentido, los sujetos movilizados no sólo reclaman la reparación de las injusticias, aludiendo a su situación de pobreza, a los efectos negativos del modelo económico neoliberal, como dispositivos discursivos o marcos de significación, empleados para encontrar respuesta en los diferentes actores sociales en la población, sino que a través de su acción y el uso de

estos marcos cuestionaban los procesos de subjetivación dominantes demandando ser reconocidos como sujetos iguales y, en tanto tales, también el orden establecido como natural: el orden de la dominación, que niega y se esfuerza por establecer la diferencia y la desigualdad. [26] En esta dirección apuntaban los discursos del movimiento, sobre todo de la fracción liderada por Felipe Quispe Huanca (líder aymara) quien denunciaba la presencia de una Bolivia partida en dos, "la de los indios y la de los q´aras":

> ...nosotros les hemos llamado a ustedes, les hemos dado nuestro territorio, les hemos alojado a ustedes extranjeros ¿y ahora qué?, nos matan, ¡carniceros! Y ahora ¿por qué no me matan a mí? ¿Por qué matan a mis hermanos quechuas?, ¿por qué matan a mis hermanos aymaras?, ¿por qué?, quiero saber la respuesta. El único delito que hemos cometido es reclamar justicia y la libertad, el único delito que hemos cometido es reclamar el poder político que nos devuelvan a nosotros. ¡Asesinos!, ¿por qué nos matan? El pueblo entero tiene que saber esto, [la] faz del mundo tiene que saber. Me da pena

[26] También es posible pensar esta función del movimiento social en las luchas indias encabezadas por Tupac Katari (siglo XVII) y Zarate Willka (fines del siglo XIX) puesto que en estos dos momentos el orden natural de la dominación, la dominación colonial, en el primer caso y el poder republicano, en el segundo caso, es transgredido e irrumpido por los indios movilizados que se reconocen como iguales a los grupos dominantes y, como tales, no reclaman la compensación de una injusticia, no reivindican sólo derechos parciales (acceso a la tierra, reconocimiento de sus autoridades), sino demandan ser contados como iguales y como tales demandan el poder que les corresponde, estableciendo así el litigio por la igualación. Así, logran nombrarse y reconocerse como sujetos iguales a aquellos que detentan el poder (las elites criollo-mestizas coloniales y republicanas). El cerco a las poblaciones criollo-mestizas durante el levantamiento de Katari o la constitución de una "república de indios" por los movilizados de Zarate Willka tienen esta connotación de igualación. Pues los indígenas dejan de asumir su posición subalterna dentro del orden establecido y, con ello, evidencian la vulnerabilidad de los grupos dominantes.

> ver a estos sanguinarios [que] se han manchado con la sangre india.... Si no hubiera indios ustedes no serían gente, no estarían gobernando, nosotros somos sus fusiles de ustedes. Nos han manejado, hemos sido sus instrumentos, hemos sido sus masas votantes y escalera política de estos q'aras. Ustedes tienen que recoger su aparato represivo. Yo no voy a venir a arrodillarme y bajarme el pantalón ante ustedes. Mátenme si son hombres, ahorita fusílenme. O si no pueden descuartícenme como a Tupac Katari. Si a Tupac Katari ustedes han descuartizado con cuatro caballos, a mí me descuartizarán con cuatro tanques, o sino con cuatro aviones y esa sangre va a derramar a esta población boliviana. Quisiera que sepa el pueblo, basta de votar por estos ADN, MIR, UCS. Como agradecimiento han matado en Huarina, en Jesús de Machaca, en Vinto; han matado y masacrado en Chapare. Yo no voy a mirarles sus ojos de ustedes, porque sus ojos están manchados de sangre indígena. Yo no les voy a mirar sus caras, porque sus caras están bañadas de la sangre indígena. Me duele esto como un Mallku Mayor. Yo no soy pongo[27] político. Me duele esto porque ustedes, inquilinos, se han adueñado de nuestra tierra.[28]

Este discurso es un ejemplo de cómo los indígenas transgredieron en los hechos el orden establecido como natural, se dieron nombre y ejecutaron una serie de actos que articulan la vida de sus cuerpos a palabras y a usos de éstas. Los indígenas se pronunciaron ante los gobernantes, mayoritariamente no indígenas, para reconocer que el poderío de éstos no tenía otro fundamento que la pura contingencia

[27] *Pongo* es un localismo para referir a la condición de servidumbre a la que fue sometida una parte importante de la población indígena durante el periodo de dominio oligárquico (fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX).

[28] Transcripción de la declaración de Felipe Quispe frente a los ministros del Estado, 1 de octubre de 2000. Archivo Radio San Rafael, ciudad de El Alto.

de todo orden social (Rancière, 1996: 42-43). Esta transgresión del orden y la instauración del parlante fue posible en tanto que el lugar de enunciación fue la dualidad del enunciador –en tanto sujeto colectivo (indio-aymara) e individual "(el Mallku)"– de ser juez y víctima, al mismo tiempo. Doble rol que le sirvió para apelar y convocar a la opinión pública, al sentido común, a ser parte del juicio instaurado a quienes se presentan como los "gobernantes". Así, al iniciar su discurso con "nosotros les hemos llamado a ustedes, les hemos dado nuestro territorio, les hemos alojado a ustedes extranjeros..." invierte el papel de la relación indio y no-indios gobernantes, ya no es el indio el extraño, el ajeno, sino el "del lugar" que reclama su lugar. Ya no es aquel que espera ser dotado temporalmente de la palabra, sino que este se asume como parlante por sí mismo. Se instaura como poder o capacidad de actuar.

Como parlantes y jueces los indígenas dejaron de ser quienes, con su acción colectiva y la manifestación de su protesta, transgreden la institucionalidad, la norma y los derechos individuales de los ciudadanos que parecen estar al margen del conflicto sin estarlo realmente; dejaron de ser los sujetos "irracionales" y "agresivos" presentados hasta entonces por los medios de comunicación y los gobernantes, denunciando que los verdaderos transgresores son aquellos, los que los gobiernan. La evidencia del transgresor hace posible instaurar el poder moral del indígena-ciudadano ante la acción inmoral de la elite gobernante.

Así, apelan a los elementos del sentido común, a los valores y elementos significativos para la sociedad en general ("...el único delito que hemos cometido es reclamar justicia y la libertad..."). Recurrir a dichos elementos permite que sujetos ajenos al conflicto se identifiquen con los denunciantes, al mismo tiempo que muestran la situación como injusticia, por tanto presentan e instauran la contingencia del orden social, el que discrimina étnicamente a los "verdugos" y a

las "víctimas", que valora y decide étnicamente sobre la vida de los hombres.

Pero esta auto y re-invención del sujeto indígena como víctima sólo tiene un rol temporal, es argumentativa del discurso de la denunciación para, posteriormente, reinventarse como poder, como poder movilizador capaz de vulnerar al "otro" dominador. De lo contrario, siguiendo a Rancière, no podría establecerse la distorsión de la igualdad que le permite plantear la reconfiguración de las subjetividades.

Pero no es sólo la enunciación lo que da cuenta de los atributos mencionados, sino el enunciado hecho praxis o, dicho de otro modo, revela lo que ya venía sucediendo desde el inicio del ciclo de protestas y el repertorio de acciones emprendidas por los sujetos movilizados. El bloqueo de carreteras y el "cerco económico" funcionaban como estrategias "forzadas" –dirá Laserna (2003)– que no tenían sólo por fin conseguir una nueva firma de acuerdos, sino hacer explícito el poder movilizador de dichos actores colectivos, aquel que parcialmente había sido reconocido en el discurso del nacionalismo revolucionario (50 años atrás), pero que dentro del discurso neoliberal era desprovisto de cualquier posibilidad de poder como sujeto colectivo.

Por tanto, la acción colectiva indígena en esta nueva fase de protestas podría entenderse como una superación y negación de los procesos de subjetivación dominantes en torno a lo indio. Los sujetos movilizados estaban demandando no sólo ser incluidos dentro del sistema político, reclamaban ser parte fundamental en el diseño estatal-societal para transformar el orden social establecido. El sentido de la acción no sólo implicaba la resolución de "injusticias", implica repensar el Estado-nación, la relación entre los indígenas y aquella parte de la sociedad que los excluye y los considera "sin parte". Ahí residía, también, la dificultad de dar cuenta de aquellos sujetos que habían aparecido en la escena pública: ¿quiénes eran?, ¿indígenas?, ¿campesinos?, ¿etnias?,

¿bolivianos?, ¿todos ellos a la vez?, si eran bolivianos ¿por qué pedían hablar de "presidente a presidente"?, sino sólo como una estrategia de nombrarse al margen de quienes les nombraban para dar cuenta de su existencia de manera marginal.

Así, las movilizaciones indígenas de principios de 2000, sintetizadas en el discurso de la "denuncia" de Felipe Quispe Huanca, pusieron en evidencia la dominación y con ello la posibilidad de que los indígenas (aymaras, quechuas, guaraníes, etc.) se reconocieran como tales, culturalmente diferentes a los autodefinidos "no-indígenas", pero moralmente iguales, y a partir de ello se establecieron las bases para la modificación (aún relativa) de las relaciones sociales, no sólo al nivel de lo político-institucional, sino al nivel de las prácticas cotidianas.

Para comprender este proceso en disputa fue necesario recuperar el concepto de procesos de subjetivación y gubernamentalidad que retoma Mendiola de Foucault para pensar a los movimientos sociales en su papel de transformadores de lo social,[29] sin que ello implique caer en una lectura teleológica de la acción colectiva. Desde esta perspectiva, el estudio de los movimientos sociales no debe ceñirse al entramado institucionalizado del Estado al comprender el papel de la acción colectiva para alterar el régimen de gubernamentalidad[30]

[29] Podría sostenerse que a este tipo de cuestionamientos apuntan gran parte de los actores colectivos que retoman el tema de la identidad como bandera de lucha, desde el movimiento feminista en la década de los sesenta, el movimiento por los derechos humanos liderados por Luther King, el movimiento lésbico-gay, hasta los movimientos indígenas en América Latina, por nombrar los más importantes.

[30] La gubernamentalidad, señala Foucault, no persigue un "bien común" cuanto un "fin conveniente" que establece el modo en que se incide en las prácticas de la población; el gobierno se entiende así en un sentido amplio en tanto que modulación de la población: "Las cosas de las que el gobierno debe hacerse cargo son los hombres, pero en sus relaciones con las diferentes cosas que son los usos, las costumbres, los hábitos, las maneras de ser o de pensar" (Foucault en Mendiola, 2002: 249).

que entreteje niveles políticos, económicos, culturales, afectando la experiencia de la cotidianidad: el pliegue de la subjetividad y su complejidad. Ello implica pasar del estudio de la relación del movimiento social con el Estado al estudio de la política de la relación, de las políticas de subjetivación (Mendiola, 2002: 263).

Este es el efecto, sociológicamente hablando, que generó el movimiento social indígena en Bolivia en su último ciclo de protestas: cuestionar los procesos por los cuales los grupos dominantes se dotan del poder de la palabra para nominar y clasificar a los sujetos, a partir del cual los sectores indígenas han sido ubicados como una clase subalterna, minorías políticas, "sujetos enquistados en el pasado y la tradición".

Desde esta perspectiva los sectores indígenas se constituyeron en sujetos políticos, se "nombraron", se reconocieron como "moralmente iguales" ante aquellos que se atribuían el poder de nombrar, de clasificar, de reconocer.

Ahora bien, ello sólo pudo ser posible gracias a las aperturas y los desajustes que se generaron en términos estructurales, en el orden de la reproducción social, en el orden de la dominación: 1) la apertura relativa de espacios de participación política, a partir del reconocimiento de la diferencia, que tenía un fin instrumental para la clase política dominante de entonces y acabó por permitir la fisura del orden; y 2) la apertura de otros espacios sociales, también estructurales y estructurantes –la escuela– que generaron situaciones de desajuste entre lo que Bourdieu llama el *habitus* de clase (relativamente modificado por el efecto de la escuela) y la escasa movilidad de las posiciones sociales de los sujetos. Mientras estos espacios reducidos se abrían de forma relativa, más evidente se hacían las barreras y brechas de la diferenciación social, entre aquellos que eran clasificados y se reconocían como indígenas y quienes tenían en su dominio los instrumentos del poder político, económicos, y mantienen el control de la nominación y clasificación de población, sus prácticas y representaciones.

Por tanto, esta igualación, esta perturbación del orden que instauraron los sujetos movilizados, planteada en términos filosóficos, es posible pensarla en términos sociológicos a través del concepto de procesos de subjetivación y de la impugnación del orden al cuestionar dichos procesos, que sólo es posible cuando el orden vacila y cuando dicho orden de la dominación engendra un desajuste de las identidades, por el desfase entre el *habitus* de clase y la posición social que ocupan los sujetos movilizados, generado, paradójicamente, a partir de uno de los espacios de reproducción del orden: la escuela. Este proceso de desfase provocó el momento de la "reflexividad" entre los sujetos atados a sus estructuras, que introdujo una posibilidad de distancia, de cuestionamiento del orden de la dominación. Una modificación de dicho orden que tiene efectos sobre los procesos de subjetivación de los indígenas y del "otro" dominante, sin que ello signifique necesariamente una reversión del orden de la dominación, sino un reacomodo, una ampliación relativa de los márgenes de libertad hasta que el desajuste se ajuste y en este ajuste se encuentren nuevas fisuras para la subversión.

CONCLUSIONES

Es posible que nuestra lectura sobre el movimiento indígena boliviano en su última fase de protestas (2000-2005) o, más bien dicho, los recursos teóricos a los que recurrimos para interpretar la acción colectiva indígena, pequen de eclecticismo y debemos reconocer que sí, nuestra aproximación teórica fue ecléctica, pero esta estrategia teórico-metodológica fue necesaria. No bastaba con los instrumentos teóricos de inicio –la teoría de la movilización de recursos– dados los reduccionismos y limitaciones que identificamos en el proceso de la investigación, pero tampoco, por dicha razón, debíamos simplemente desecharlos. Como hemos argumentado, pese a las críticas que se le hacen al enfoque de la movilización de

recursos, sea por los supuestos epistemológicos que arrastra de su anterior vínculo con el enfoque olsoniano de la acción colectiva, o por la sobredimensión político-institucional de la acción colectiva, la categoría analítica de la estructura de oportunidades políticas permitió –tomando precauciones sobre sus limitaciones– identificar los condicionantes estructurales que ayudan a explicar e interpretar el curso y el sentido de la acción colectiva en una determinada coyuntura.

También hemos argumentado que, contrario al potencial que ofrece la categoría de la estructura de oportunidades políticas, el concepto de los marcos cognitivos fue menos útil o poco productivo para comprender el sentido de la acción colectiva, la cohesión y los procesos identitarios que articulan y se articulan en torno a la acción colectiva, más aún cuando se trata de actores cuyas prácticas identitarias se asientan –con más fuerza que otros– en la memoria histórica y colectiva, mismas que no caben ser explicadas por categorías analíticas (marcos cognitivos) que ponen mucho peso en la concepción del individuo que tiende a reflexionar y actuar independientemente de los condicionamientos históricos que lo determinan.

Distanciarnos de este concepto (marcos cognitivos) y desplazarnos a uno más productivo para comprender el sentido de la acción –la política como práctica de ruptura, retomada de Jacques Rancière, y la producción de subjetividades, retomada del enfoque foucaltiano–, nos llevó a identificar otra de las limitaciones del enfoque de la movilización de recursos y de los marcos cognitivos: la ausencia de relaciones de poder, que media la acción colectiva, al interior del propio grupo de agentes y fuera de estos. También nos permitió identificar otras categorías analíticas que sí ayudan a comprender las acciones del movimiento y el sentido de las mismas, que desbordan la dimensión político-institucional, es decir, tienen un efecto sobre los procesos de reconfigura-

ción de lo social, los procesos de subjetivación que están en el centro de la discusión. Pero para dar cuenta de ello era necesario ubicar los elementos estructurales (las aperturas políticas y sociales) donde es posible identificar el momento de la reflexividad para la acción (el momento del desajuste o desfase estructural) que nos ayudan a explicar la acción del movimiento, su sentido y los éxitos y fracasos del mismo.

En conclusión, transfiguramos el proyecto teórico inicial para el análisis de la acción colectiva indígena –sin desechar por completo aquél– e intentamos pensar en el marco de este artículo en la necesidad de construir un proyecto fuerte, recurriendo a propuestas teóricas generales que desde el análisis de la dominación –y pese a las críticas que se hace de ellas en términos de etiquetarlas como teorías de la reproducción social– buscan identificar aquellos elementos que hacen posible pensar la impugnación a la misma, el cambio. El estudio de la acción colectiva en general y de la acción colectiva indígena en particular apunta en cierta medida a pensar el cambio, sus posibilidades e imposibilidades, las fisuras, los acomodos y reacomodos que se operan en términos del orden social, sin caer necesariamente en una ideologización o reificación de dichos sujetos y sus acciones. Este es el ejercicio que nos ofrecen las propuestas teóricas de Foucault y de Bourdieu o más en concreto, algunas categorías analíticas que recuperamos de sus propuestas teóricas, sobre todo aquellas que corresponden a los últimos aportes ofrecidos por dichos intelectuales.

BIBLIOGRAFÍA

Albó, Xavier (2002), *Los indígenas en la política*, La Paz, Cipca.

Bourdieu, Pierre (1999), *Meditaciones Pascalinas*, Barcelona, Anagrama.

Bourdieu, Pierre y Loic J. D. Wacquant (2005), *Respuestas por una antropología reflexiva*, México, Siglo XXI.

Condarco, Ramiro (1982) [1965], *Zarate el "Temible" Willka. Historia de la rebelión indígena de 1899 en la República de Bolivia*, La Paz, Renovación LTDA, 2a. ed. revisada.

Dandler, Jorge (1986), "Campesinado y reforma agraria en Cochabamba (1952-1953): Dinámica de un movimiento campesino en Bolivia", en Jorge Dandler y Fernando Calderón (coords.), *Bolivia. La fuerza histórica del campesinado*, La Paz, UNRISD-CERES, pp. 121-135.

Elias, Norbert (1994), "Conocimiento y poder. Entrevista", en Elias Norbert, *Conocimiento y poder*, Madrid, La Piqueta, pp. 53-121.

Foucault, Michel (1988) [1979], "El sujeto y el poder", en Hubert Dreyfus y Paul Rabinow, *Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica*, México, UNAM.

García Linera, Álvaro (2005), *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción colectiva*, La Paz, Plural Editores.

_____ (2005b), "La lucha por el poder en Bolivia", en *Horizontes y límites del Estado y el poder*, La Paz, Muela del Diablo.

_____ (2003), "La crisis del Estado", *Tinkazos. Revista boliviana de ciencias sociales*, núm. 14, pp. 9-34.

_____ (2001) "Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia", en Álvaro García Linera, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luis Tapia, *Tiempos de Rebelión*, La Paz, Muela del Diablo, pp. 9-80.

García Linera, Álvaro, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada y Luis Tapia (2001), *Tiempos de Rebelión*, La Paz, Muela del Diablo.

Gramsci, Antonio (1967), *La formación de los intelectuales*, México, Grijalbo.

Ibarra, Pedro y Benjamín Tejerina (eds.) (1998), *Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural*, Madrid, Trotta.

Laserna, Roberto (2003), *La crisis de octubre y el fracaso del Ch'enko. Una visión desde la economía política*, Bolivia, CERES.

Lazarte, Jorge (2005), *Entre los espectros del pasado y las incertidumbres del futuro. Política y democracia en Bolivia a principios del siglo XXI*, La Paz, Plural.

Lessmann, Robert (2005), "La autonomía clandestina: Raíces, rasgos y marco político del proceso autonómico en el trópico de Cochabamba", en Gilberto López y Rivas y Leo Gabriel (coords.), *Autonomías indígenas en América. Nuevas formas de convivencia política*, México, Plaza y Valdés, pp. 265-330.

Mamani Ramírez, Pablo (2004), *El rugir de las multitudes. La fuerza de los levantamientos indígenas en Bolivia*, La Paz, Yachaywasi.

Martín Rojo, Laura (2003), "El análisis crítico del discurso. Fronteras y exclusión social en los discursos racistas", en *Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales*, Barcelona, UOC.

Mayorga, Fernando (2007), "Movimientos sociales, política y Estado", *Opiniones y análisis, temas de coyuntura nacional*, tomo I, núm. 84, URL: http://www.pieb.com.bo/blogs/mayorga/archivos/movimientos_sociales.pdf.

McAdam, Doug (1998), "Orígenes conceptuales, problemas actuales y direcciones futuras", en Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina (eds.), *Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural*, Madrid, Trotta.

Melucci, Alberto (2002), *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México, El Colegio de México.

_____ (1991), "La acción colectiva como construcción social", *Estudios Sociológicos*, vol. IX, núm. 26, pp. 357-364.

Mendiola, Ignacio (2002), *Los movimientos sociales y trayectos sociológicos. Hacia una teoría práxica y multidimensional de lo social*, País Vasco, Universidad del País Vasco.

Nordmann, Charlotte (2010), *Bourdieu / Rancière. La política entre sociología y filosofía*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Prada, Raúl (2004), *Largo octubre. Genealogía de los movimientos sociales*, La Paz, Plural.

Rancière, Jacques (1996), *El desacuerdo. Política y filosofía*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Rea Campos, Carmen (2009), "Luchas indias en Bolivia: un análisis socio-histórico de la constitución de la política", en Beatriz Rajland y María Cecilia Cotarelo (coords.), *La revolución en el bicentenario. Reflexiones sobre la emancipación, clases y grupos subalternos*, Buenos Aires, FLACSO, Asdi, pp. 273-290.

_____ (2006), "¡Porque no quiero que mi hija sea tu sirvienta...! Movimientos indios y conflictividad social en Bolivia en los albores del siglo XXI", México, FLACSO, tesis de maestría.

Rivas, Antonio (1998), "El análisis de marcos: una metodología para el estudio de los movimientos sociales", en Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina (eds.), *Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural*, Madrid, Trotta, pp. 181-215.

Sabucedo, José Manuel, Javier Grossa y Concepción Fernández (1998), "Los movimientos sociales y la creación de un sentido común alternativo", en Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina (eds.), *Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural*, Madrid, Trotta, pp. 165-180.

Tapia, Luis (2002), *La velocidad del pluralismo. Ensayo sobre tiempo y democracia*, La Paz, Muela del Diablo.

Tarrés, María Luisa (1992), "Perspectivas analíticas de la sociología de la acción colectiva", *Estudios Sociológicos*, vol. X, núm. 30, pp. 735-757.

Tarrow, Sydney (1994), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza Universidad.

Tilly, Charles (1998), "Conflicto político y cambio social", en Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina (eds.), *Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural*, Madrid, Trotta, pp. 25-41.

Weber, Max (2003), *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, México, FCE.

Zavaleta, René (1986), *Lo nacional-popular en Bolivia*, México, Siglo XXI.

II. MOVILIZACIÓN Y AUTOGESTIÓN EN ARGENTINA. LOS RETOS PARA EL ANÁLISIS DE PROCESOS DE INVENCIÓN Y REPRODUCCIÓN SOCIAL EN CURSO

María Amalia Gracia*

"Este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y por eso hicieron una revolución"
John Womack

Este capítulo busca reflexionar sobre las decisiones y herramientas teórico-metodológicas utilizadas para investigar acciones y prácticas formuladas por trabajadoras y trabajadores que gestionan colectivamente unidades productivas que fracasaron bajo la administración de sus antiguos dueños capitalistas. De allí que, como otros autores del libro, me centraré en los elementos teóricos empleados y no podré abundar en el análisis que habilitan estas ricas experiencias, para lo cual remito a otros trabajos ya publicados (Gracia, 2008; Gracia, 2011 y Gracia, 2012).

Las empresas y fábricas administradas por sus trabajadores con prescindencia de empresarios constituyen un fenómeno latinoamericano que ubicamos dentro de las diversas formas de conflicto que se han venido manifestando en los últimos quince o veinte años en la región y, en cuanto

* Doctora en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México. Profesora-investigadora de El Colegio de la Frontera Sur.

tales, señalan tendencias, muestran tensiones y abren interrogantes que pueden enriquecer los debates académicos, político-institucionales y de activistas-militantes sobre las modalidades emergentes de acción colectiva y las posibilidades en torno a la constitución de experiencias productivas alternas que conviven y/o disputan con las formas capitalistas predominantes.

A pesar de las diferencias existentes entre los casos en distintas naciones (hay formas de este tipo articuladas en redes y organizaciones en Brasil, Uruguay y Venezuela) y dentro del mismo caso argentino sobre el que se realizó la investigación que se analiza en estas páginas, en la mayoría de las experiencias de los distintos países se observan empresas nacionales pequeñas y medianas en crisis, sobre todo del sector industrial pero también de servicios y algunas del sector primario en las que se rompe el contrato de trabajo entre empresarios y trabajadores. Ante dicha situación, algunos de los trabajadores –sólo de algunas de las miles de empresas en quiebra– apoyados por diferentes agentes y colectivos sociales efectúan acciones jurídicas, políticas y económicas para preservar la fuente de trabajo y, paralelamente, se organizan para asumir la gestión de la producción, mayoritariamente a partir de cooperativas de trabajo, opción que más que una adscripción ideológica a los principios del movimiento cooperativo es una opción práctica tomada durante el curso de los acontecimientos que les permite volver a poner en marcha la fábrica para reiniciar la producción en plazos de tiempo relativamente cortos.

Una de las primeras dificultades para analizar estas experiencias exclusivamente desde las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales –teorías renovadas en los países centrales de ambos lados del Atlántico a partir del estímulo de las movilizaciones y movimientos de finales de los años sesenta y setenta del siglo pasado– fue la insistente y enfática diferenciación entre nuevos y viejos actores sociales.

En Argentina, tanto las investigaciones que retomaron el paradigma de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS), como las que fueron recuperando perspectivas de la Movilización de Recursos (MR) para analizar las movilizaciones y acciones colectivas que se dieron durante los años ochenta y noventa del siglo pasado y a principios del actual, tendieron a establecer como eje de debate su *ruptura/continuidad* con las prácticas de otrora. Así, la mayoría de los autores enfatizaron los rasgos originales de la participación-organización de nuevos actores y sus distanciamientos respecto de formas clásicas como las movilizaciones sindicales, la huelga o los partidos políticos (Delamata, 2002; Schuster y Scribano, 2001; Farinetti, 1999). Otros autores, en cambio, destacaron la importancia de los asalariados y de modalidades tradicionales como la huelga general en las manifestaciones acaecidas durante la crisis de diciembre de 2001 e insistieron en que los asalariados (empleados o desocupados) ostentaron un lugar central en las "nuevas formas de protesta" y mostraron –con los cortes de ruta y la recuperación de fábricas– capacidad de auto-organización e innovación en sus estrategias (Íñigo y Cotarelo, 2000; Íñigo, 2002; Maceira y Spaltemberg, 2001). Este eje de debate predominó en los escritos e investigaciones sobre las experiencias que específicamente investigamos. Hay autores que rescataron la continuidad de las viejas prácticas en la acción colectiva, considerando que los trabajadores retomaron "una herramienta clásica del movimiento obrero" (García Allegrone, Partenio y Fernández Álvarez, 2004: 329), "formas de acción colectiva que ya caracterizaban a (sus) distintos segmentos" (Davolos y Perelman, 2003: 186) o se alimentaron "de tendencias instaladas en el conflicto obrero de la última década, aunque también produciendo rupturas" (Rebón, 2004: 48). Otros, sin desconocer las herencias, pusieron el acento en la emergencia de "nuevos sujetos sociales" (Favaro y Aizicson, 2003), en la "ruptura en la subjetividad de los trabajadores" (Fajn, 2003),

en la "conformación de movimientos alternativos" (Magnani, 2003) o en la integración de un "nuevo repertorio de acción colectiva" que se generó en el marco del ciclo de protesta de los últimos años (Gracia y Cavaliere, 2007).

La forma de organizar el proceso de trabajo autogestionado y su potencialidad (o imposibilidad) para desplegar formas que disputaran, con sus condicionamientos y particularidades, la lógica de acumulación capitalista que imperaba en las empresas caídas sobre las que se erigieron también generó posiciones dicotómicas. En este caso, ellas tendieron a articularse en torno al eje *invención/reproducción degradada* de las condiciones de existencia de los protagonistas de las acciones autogestivas.

Estas diferenciaciones tajantes entre lo viejo y lo nuevo, entre prácticas de invención y repetición social, empero, están profundamente desafiadas por los rasgos de individuos y grupos que, retomando la idea que expresa la cita de Womack, emprendieron acciones que terminaron cuestionando profundamente el orden pero no para convertirse en otros sino para poder seguir siendo quienes eran: trabajadores con una larga tradición e historia cuya identidad estaba amenazada de muerte. No se trata de grandes activistas ni luchadores sociales sino de trabajadoras y trabajadores con trayectorias laborales estables, con antigüedad en las empresas y una edad promedio mayor a la de la Población Económicamente Activa (PEA) en ese periodo. ¿Cómo abarcar la riqueza de estos procesos en una coyuntura histórica de crisis generalizada y total? ¿Con qué categorías analíticas captar las estrategias económicas, jurídico-políticas y simbólicas que fueron emergiendo y dieron lugar a la conformación de una forma socio-productiva reconocida como tal? ¿Cómo dar cuenta, al mismo tiempo, de los cambios y las continuidades en las prácticas cotidianas individuales y colectivas en cada lugar de trabajo sin desvincularlas de la movilización en las calles, en los juzgados, en las legislaturas y sin soslayar

las tensiones, las relaciones de poder que en ellas se van generando? ¿Cómo conectar estas microhistorias con el contexto macrosocial incorporando de manera dialéctica la relación entre procesos y estructuras? ¿Son éstas modalidades inviables envueltas en la lógica del mercado y la competencia como afirmaron muchos (Sánchez, 2003; Martínez y Vocos, 2002) o representan la invención de una nueva forma productiva que asume una función social basada en la regulación como destacaron otros? (Fernández, 2006).

La constelación de herramientas teórico-metodológicas para formular y afrontar algunas de estas preguntas es el resultado de un proceso de conocimiento aún abierto que se fue configurando y poniendo en discusión durante el trabajo empírico y provienen de diversos campos y tradiciones analíticas. En un principio comencé utilizando y poniendo a prueba analíticamente una serie de categorías provenientes de las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales (tanto del paradigma de NMS como de MR en su variante de crítica a la perspectiva de acción racional olsoniana). Sin embargo, a medida que fui avanzado en el trabajo de campo tuve la necesidad de apelar a conceptos que me permitieran complementar el análisis para dar cuenta de aspectos que no lograban ser captados adecuadamente mediante dichas teorías, sobre todo: a) entender las experiencias y sus implicaciones en el marco de las transformaciones más generales experimentadas por las relaciones laborales y las instituciones que regulaban el mundo del trabajo en el capitalismo periférico globalizado; b) situar de manera relacional a los grupos emergentes y sus luchas en el espacio histórico-social en el que se pusieron en juego las recuperaciones; c) concebir conjugadamente lo extraordinario y lo cotidiano para analizar los elementos simbólicos mediante los cuales los colectivos procesaron la alternativa de recuperar la fábrica y reconfiguraron las relaciones de trabajo y de poder en ellos.

Para explicar la emergencia, transmisión y conformación de las distintas organizaciones que sostienen la causa de la recuperación utilicé conceptos de las teorías de acción colectiva y los movimientos sociales, específicamente, la noción de *estado naciente* de Francesco Alberoni que, a diferencia de otros conceptos, no ha sido previamente explorada para analizar estos fenómenos; también me serví de argumentos que fueron útiles a la luz de la producción de datos empíricos, como la importancia de la percepción de la violación a un acuerdo social de Barrington Moore y la eficacia del sentimiento de injusticia enfatizada por Edgar P. Thompson. Para mostrar cómo disputaron su existencia los trabajadores, situar sus experiencias de manera relacional y vinculada con lo macrosocial y captar sus acciones como prácticas sociales, utilicé los conceptos de *estrategia, habitus, campo* y *capital* provenientes de la teoría de los campos y las prácticas de Pierre Bourdieu. Finalmente, buscando entender estas experiencias y sus implicaciones en el marco de los cambios más generales en las relaciones de trabajo que han impactado profundamente las características y prácticas de los sectores populares en Argentina y América Latina, empleé las categorías de *régimen social de acumulación*, acuñada por José Nun, y de *relación salarial*, proveniente del horizonte de la teoría de la regulación francesa, ambas compatibles entre sí y con muchas coincidencias y posibilidades de conjugación con la teoría general de los campos de Bourdieu. Asimismo, estas últimas categorías me sirvieron para historizar las prácticas y poner en juego los debates que sobre ese particular han tenido lugar en nuestra región en los últimos cuarenta años, debates que en ocasiones fueron precursores de categorías analíticas como la de *exclusión* social tan extendidas hoy en día y que surgieron mucho después en el horizonte europeo. Estos debates incluyen la discusión teórica sobre la posibilidad de desarrollo en nuestra región de segmentos de economía

social y solidaria a los que podrían aportar e integrarse las experiencias analizadas.

A simple vista ésta puede ser una constelación incómoda pero el tipo de preguntas que se fueron abriendo me llevaron a recurrir a teorías generales como las de Bourdieu o el regulacionismo –así como a apelar en ocasiones específicamente a autores clásicos como Marx y Polanyi que están retomados en ellas– porque requería incorporar en el análisis de la acción colectiva la historia, las relaciones de poder, el vínculo entre lo micro y lo macro, y buscaba concebir las acciones de recuperación como prácticas sociales encarnadas por un actor con mucha historia que, interpelado por los acontecimientos y apoyado por una serie de actores, estaba generando prácticas de innovación y de repetición social inspiradas en su vasto acervo, prácticas que al ir remodelando los nuevos espacios laborales involucran aspectos de cambio y de continuidad respecto al antiguo orden fabril.

HISTORIZAR EL PRESENTE PARA CAPTAR LAS TRANSFORMACIONES EN LAS PRÁCTICAS Y DEMANDAS DE LOS SECTORES POPULARES

Las acciones que estudiamos emergieron de una de las crisis más profundas y extendidas que tuvo Argentina en el siglo XX. La crisis y el "default" supeditaron completamente la política a la lógica virtual del dinero y en ese contexto de deuda y bancarrota fueron surgiendo –como sucede hoy en Grecia donde se están ocupando fábricas, bancos, diarios y se multiplican experiencias de asambleas y de trueque como las que se expandieron en Argentina– una serie de formas de acción colectiva y encuentros sociales que buscaron enfrentar creativamente esa realidad. La magnitud del colapso –que dio lugar a la renuncia del entonces presidente y a la sucesión de otros cuatro presidentes interinos en el lapso de 10 días– habilitó que se cuestionaran temas fundantes como la

política monetaria o la regionalización del Estado-nación, entre tantos otros, lo cual permite hablar de una profunda crisis de dominación.

En este marco de aumento de la protesta y de la movilización social, muchos activistas y analistas locales e internacionales hablaron del "argentinazo", del "cambio total" y "radical" en las formas de hacer política de las clases populares, mientras que más acá en el tiempo –y a partir del proceso de recomposición hegemónica encabezado por los gobiernos kirchneristas– se ha tendido a minimizar las movilizaciones y experiencias surgidas de esa agitada coyuntura por su carácter efímero y fugaz, por considerarlas "cooptadas" y fragmentadas o por su dificultad para articularse en una alternativa político-crítica en la Argentina contemporánea. ¿Cómo captar entonces las transformaciones protagonizadas por los trabajadores de las fábricas en crisis sin caer en la simplificación y/o idealización de pensarlas como rupturas totales? ¿Cómo estudiar los aspectos retomados del orden anterior sin interpretar por ello que se trata de experiencias que representan una continuidad total?

Una de las premisas que guiaron la investigación fue que, para poder abarcar las prácticas de los trabajadores así como otras respuestas de las clases populares de gestión colectiva del trabajo surgidas en nuestra región, es necesario ubicarlas en un periodo histórico más amplio que el de la crisis de 2001, situarlas en el marco de las mutaciones del capitalismo periférico globalizado y de la crisis, desestructuración y transformación de las instituciones y relaciones sociales que otrora regulaban el mundo del trabajo.

Concibiendo la categoría *trabajo* como una construcción histórica vinculada a una época particular y, por tanto, susceptible de cambiar de una sociedad a otra y en los distintos momentos del devenir socio-histórico (Meda, 1998 [1995]) utilicé en clave metodológica la triple secuencia planteada por Coriat (1982), que buscaba conectar los procesos de tra-

bajo (producción del capital), la acumulación del capital (su reproducción) y los dispositivos normativos que aseguran la reproducción de la fuerza de trabajo. Eso me permitió articular los conceptos de *régimen social de acumulación* (RSA) y *relación salarial* (RS) a partir de los cuales analicé las transformaciones en las relaciones de trabajo acaecidas desde la instauración de la última dictadura militar hasta el presente, cómo se fueron experimentando esas transformaciones en las fábricas estudiadas, qué registros tenían de estos cambios quienes protagonizaron las experiencias estudiadas y de qué manera se fueron construyendo durante las últimas tres décadas las condiciones históricas que posibilitaron las acciones de toma y gestión de fábricas en la Argentina actual.

A partir de una relectura del marxismo a la luz de la obra de Antonio Gramsci, José Nun (1989) propuso el concepto de RSA, que recupera una visión dinámica en la que los términos Estado y sociedad civil aparecen articulados y evidencia las estructuras sociales de la economía y permite articular, a partir de un análisis histórico pluridimensional, lo económico, lo social y lo político. Especialmente importante es este concepto para evidenciar el papel que juegan la política y la ideología, así como distinguir las inflexiones y contradicciones que las políticas neoliberales han tenido en los distintos regímenes de gobierno. La RS ocupa un espacio fundamental dentro del RSA y hace referencia a la organización del proceso de trabajo, la jerarquía de las calificaciones, la movilidad de los trabajadores dentro y fuera de la empresa, los principios que determinan la formación del salario directo e indirecto y la utilización del ingreso por parte de los asalariados (Neffa, 2005), e instituciones jurídicas que se modificaron radicalmente a partir de la emergencia del nuevo RSA que en el caso argentino ubicamos a partir de 1976.

Con la noción de RS se muestra cómo, durante la década de los ochenta y noventa, se fueron dando las transforma-

ciones en el estatuto de los trabajadores, quienes luego recuperarían las fábricas donde habían trabajado durante años, y cómo se flexibilizaron las relaciones entre los trabajadores, sus condiciones de vida y calificaciones, por un lado, y los puestos de trabajo, las características técnicas de procesos y productos y la realidad organizativa de las unidades de producción, por otro. Asimismo la noción de RS permite explicar, procesualmente, cómo las ocupaciones actuales fueron confluyendo en la defensa de la fuente de trabajo más allá de la oportunidad política que se dio luego de diciembre de 2001

La ocupación de fábricas ha sido una modalidad utilizada por el movimiento obrero latinoamericano e internacional en distintos momentos de su historia, pero las actuales experiencias se diferencian de las anteriores en tanto surgieron como formas de resistencia social en contextos de desempleo y exclusión social generados por la implementación de políticas neoliberales en la región. Si otrora las ocupaciones de fábrica se utilizaban como medidas de fuerza que sirvieron para negociar despidos, salarios y otras condiciones de trabajo, es decir, para resguardar el puesto de trabajo, ahora fueron confluyendo en la necesidad de defender la fuente de trabajo. ¿Cómo se explica este pasaje? El desmantelamiento progresivo de las instituciones y arreglos sociales que otrora regularon las condiciones de trabajo y vida permiten entenderlo en parte, en tanto transformó el empleo asalariado y desplazó a grandes grupos de trabajadores.

Durante los años ochenta se habían ensayado prácticas que también buscaban defender las fuentes de trabajo, pero que no lograron generalizarse ante el ofrecimiento de retiros voluntarios o indemnizaciones por despido. Así, en las experiencias que volvieron a surgir desde mediados de los años noventa y se intensificaron luego de las jornadas de diciembre de 2001, la defensa de la fuente de trabajo fue adquiriendo una relevancia central, sobre todo a partir de

los aprendizajes sociales construidos sobre las consecuencias que tuvo para muchos trabajadores el despido y retiro de la empresa, aun entre quienes pudieron cobrar elevados montos por concepto de indemnización o retiro voluntario. Esta forma de historizar el análisis de un proceso en curso es una forma fructífera –no siempre muy visitada– de estudiar distintas experiencias más allá de sus logros inmediatos en tanto los actores ensayan una serie de prácticas que en ocasiones tienen más éxito y en otras quedan latentes y son susceptibles de ser retomadas por nuevas voces mucho más adelante en el tiempo.

En general, las acciones de recuperación emprendidas por los trabajadores no se explican como una lucha por la abolición de la propiedad privada o como el conflicto con el patrón en tanto representante de uno de los términos en la dialéctica capital-trabajo sino que comienzan al romperse el contrato de trabajo. En la investigación observamos cómo se vuelve a transformar dicha relación con la autogestión, aunque todavía resulta difusa la nueva forma institucional que adopta. En este sentido, aun si la categoría de RS ya no es pertinente para dar cuenta de ella, es necesario proponer categorías analíticas nuevas para pensarla.

La forma jurídica que se terminó instituyendo para gestionar las unidades productivas fue la cooperativa, la cual, si bien permitió a los trabajadores negociar con jueces, legisladores y funcionarios y obtener recursos jurídicos como los fallos y las leyes de expropiación para administrar temporalmente las fábricas o ser beneficiarios de un programa de política pública, también es limitada para abarcar las luchas y sentidos atribuidos a las acciones, los nuevos vínculos que los trabajadores establecen entre sí, con otras recuperadas y emprendimientos de este tipo y con las distintas instancias estatales. Además, plantea dificultades a futuro si los trabajadores se cierran sobre sí mismos en tanto tendrían que afrontar aisladamente los problemas que se han señalado

hacia las cooperativas relacionados con la conjunción de su organización interna según principios democráticos y su vínculo con el mercado donde prima el principio de maximización de ganancias.

Como en el caso de la emergencia del movimiento de los trabajadores desocupados (movimiento piquetero), las recuperaciones también expresaron la imposibilidad de las estructuras gremiales para proponer estrategias a quienes quedaban desafiliados de las relaciones salariales y son elocuentes del quiebre en el monopolio de representación ejercido por los aparatos sindicales en la historia político-social argentina. Si bien su papel en los procesos de recuperación no fue unívoco, la mayoría asumió una actitud pasiva.

Los cambios en la relación salarial han generado una serie de tensiones. En las relaciones con los entes gubernamentales, la organización interna de las fábricas estudiadas difiere en varios aspectos del formato tradicional de la cooperativa de trabajo avalada por el organismo oficial regulador del funcionamiento de cooperativas y mutuales, lo cual obstaculizó muchas habilitaciones que luego fueron posibilitadas por la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entre las diferencias podemos mencionar la importancia que tiene en la práctica cotidiana el dispositivo asamblea cuya decisión puede cambiar en cualquier momento al Consejo de Administración, así como la constitución de un modelo de gestión autónomo y sin gerenciamientos externos. Para los trabajadores que tuvieron que resignar una serie de derechos tales como la jubilación y la seguridad social, el cambio que involucra pasar de una situación en la que se trabaja a cambio de un salario a otra en la que es necesario hacerse cargo de un sinfín de responsabilidades en condiciones precarias ha sido abrupto, producto de aprendizajes y esfuerzos y representa un gran desafío organizacional y subjetivo, no exento de conflictos.

El constituirse en cooperativa ha permitido a los trabajadores rescatar derechos que les habían sido vedados y con

ello no sólo se constituyen en un ejemplo de la creación de ciudadanía en los lugares de trabajo (Arteaga, 2010) sino también plantean nuevos desafíos institucionales que aún son objeto de disputa en un conflicto que sigue su curso a pesar de que las recuperaciones tienen hoy menos visibilidad en la agenda pública.

LA TEORÍA DE LOS CAMPOS DE BOURDIEU COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA ESTUDIAR LA PUESTA EN JUEGO DE LAS RECUPERACIONES

Las acciones y autodenominaciones surgidas de colectivos de trabajadores que se reconocen en los agrupamientos y organizaciones que vinculan a las fábricas, así como las distintas intervenciones y nominaciones surgidas de los organismos estatales, de los propios empresarios y de otros agentes externos que han ido interviniendo en estos procesos son indicativos de que, lejos de ser algo estática, la denominada "fábrica recuperada" es una forma socioproductiva dinámica y en disputa. De acuerdo con la problematización que iban realizando los distintos sectores, el fenómeno recibió distintas denominaciones. Se habló de *"autogestión"* destacando la forma que adquirió el proceso productivo (es el nombre que predominantemente se utiliza en Brasil: "cooperativas autogeridas"); cuando se enfatizó la lucha, la nominación fue "ocupadas" y "tomadas"; cuando se la criminalizó, empresas "usurpadas". Finalmente, mientras los técnicos del Estado que defendieron el carácter no expropiatorio del fenómeno las denominaron empresas "reconvertidas", los sectores de izquierda hablaron de "*gestión obrera*" pues reclamaron que se las estatizara bajo control obrero. El término "recuperadas", que surgió de una de las organizaciones emergentes, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), se convirtió en el más utilizado y aun si puede asumir distin-

tas significaciones para cada actor involucrado, hace sobre todo referencia a la capacidad de quienes protagonizaron estos procesos para rescatar el valor del trabajo frente a la conducta moralmente reprochable de los empresarios y con ello a la reivindicación de un *imaginario social* sumamente arraigado desde el peronismo en Argentina: la cultura del trabajo y su capacidad de otorgar dignidad.

El universo de las recuperadas está en constante definición y redefinición. Algunos investigadores han mostrado que no sólo se observa una ampliación del mismo a partir de nuevas experiencias que han continuado dándose hasta el presente, sino que también se reconocen en él experiencias anteriores que son resignificadas "hacia atrás", por efecto indudable de la existencia actual del movimiento de empresas recuperadas (Palomino, Bleynat, Garro y Giacomuzzi, 2010). En 2010 se estiman entre 205[1] y 280[2] casos de fábricas recuperadas con la participación de unos 10 mil trabajadores distribuidos en las distintas provincias del país, aunque con mayor concentración en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, es decir, en las zonas suburbanas que habían alojado la concentración industrial más importante en décadas pasadas. La mayoría de las empresas son manufactureras –siendo las ramas metalúrgica, alimenticia y textil las predominantes– pero también existen de servicios –principalmente salud– y abarcan distintas actividades. Aunque la mayoría de los casos de recuperación se dieron en 2002-2003 (si bien se observan casos desde mediados de los años noventa del siglo pasado) se han seguido recuperando fábricas con tasas de crecimiento económico mayores al 8%. Incluso en el marco de la crisis económica mundial iniciada en 2008, se ha observado que de las empresas recuperadas relevadas en la Ciudad de

[1] Facultad Abierta, 2010.

[2] Osera, 2010, con base en datos del MTEySS de octubre de 2010.

Buenos Aires, un cuarto pertenecen al periodo 2007-2009 y más del 10% de los casos a nivel nacional se produjeron después de 2007, lo cual lleva a pensar que se trata de la instalación de una forma de acción colectiva posible cuando las empresas o fábricas se encuentran en crisis.

Con la difusión de la experiencia de recuperación de fuentes de trabajo, se gestaron distintas organizaciones que buscan nuclear, articular, difundir y sostener las recuperaciones y brindar apoyo legal y técnico (cuadro 1). Dada su diversidad de origen político-ideológico, formas de organización y funcionamiento, dichas organizaciones no están unificadas y, desde su emergencia hasta la actualidad, han pasado por diferentes crisis y reconfiguraciones. Una de las organizaciones que tuvo más peso en el fenómeno que analizamos, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), surgió en 2001 y se escindió a los dos años como consecuencia de diferencias ideológicas y prácticas políticas de sus líderes; a principios de 2003 surgió el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT) que es la organización estudiada en la investigación.

Al irse normalizando la crisis, existió y existe una tendencia a naturalizar y ver como anecdóticos estos sucesos: sólo quienes están muy al tanto de su ocurrencia saben que hoy la mayoría de las fábricas está produciendo con éxito y que muchas de ellas ya llevan más de 10 años de autogestión obrera. ¿Cómo mostrar que estos fragmentos poseen una riqueza singular, para nada anecdótica, en tanto pusieron y siguen poniendo en cuestión dimensiones político-jurídicas, económicas y simbólicas aun si su peso cuantitativo en la economía total del país no es significativo? ¿Cómo ligar este fragmentado tan rico de la historia argentina reciente con las dimensiones meso y macrosociales?

La decisión metodológica seguida para ello fue delimitar mediante el trabajo de investigación en terreno y, siguiendo la teoría bourdiana, el *campo del trabajo* en el que se inscribe

Cuadro 1. Organizaciones de unidades productivas recuperadas

Organizaciones	*Año constitución*	*Núm. empresas**	*Empresas referentes y sectores de apoyo*	*Propuestas y consignas*	*Principales demandas*
Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra)	1988	12	Cristalux-Cooperativismo-Federación Gráfica Bonaerense	Cooperativas que recuperan empresas	Reforma a la Ley de Cooperativas
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER)**	2001	60	IMPA-UOM Quilmes-Legisladores Cd. de Bs. As (PSD, ARI, Izq. Unida, PS. Autodeterminación y Libertad) Asambleas barriales-Fac. de Cs. Sociales y Filosofía y Letras de la UBA	"Ocupar, resistir, producir" Alianza con otros sectores movilizados	Ley Nacional de Expropiación en cesación de pagos-Fondo de capital-Reforma Ley de Quiebras-Cesión de créditos hipotecarios y prendarios Banca oficial
Comisión Nacional de Empresas Recuperadas y en Lucha	2002	4	Zanón-Madres de Plaza de Mayo-Asambleas barriales-Sindicato de Comercio-Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS) y otros de izquierda-Coordinadora Alto Valle	Control obrero	Estatización sin cargo bajo control obrero Subsidios para capital de trabajo e ingreso trabajadores
Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo Reconvertidas Feencooter(***)	2002	14	Frigorífico Yaguané-Unidad Ejecutora del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)	Constitución cooperativas	Expropiación con cargo

Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT)	2003	56	Unión y Fuerza-Los Constituyentes-Lavalan Guelco-Pastoral Social Peronismo de Avellaneda Universidad Tecnológica Nacional	Solidaridad entre fábricas No gerenciamientos externos ni créditos Interpelación jueces Competir en mercado	Reforma a la Ley de Quiebras-Ley de Resolución Jurídica de las Expropiaciones y Fondo Especial de Recuperación de Fábricas de Provincia de Bs. As.
Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA)	2005	8	Central de Trabajadores Argentinos (CTA)	Derechos del trabajador autogestionado	Fondo para la Reconversión Tecnológica Régimen del Trabajador Autogestionado
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA)	2006 (diciembre)	30	BAUEN Mil Hojas Pauny (Ex Zanello) Peronismo de izquierda	Acercamiento sector cooperativo Economía solidaria-Conformación Unión de Federaciones, con ANTA y Fecootra entre otras	Reforma a la Ley de Cooperativas Fortalecer la producción y organización

(*) Cantidad (aproximada) máxima que llegaron a nuclear. Se trata de un proceso muy dinámico en el que se observan escisiones, reagrupamientos y superposiciones.
(**) El MNER se escindió en 2003 cuando se conformó el MNFRT (a partir de esta ruptura nucleaba 44 cooperativas aproximadamente) y experimentó una nueva ruptura en 2005. Varias de las empresas que se fueron conformaron FACTA entre las que se encuentran empresas de la Red Gráfica Cooperativa.
(***) Esta organización prácticamente se diluyó luego de que la Unidad Ejecutora de Recuperación de Empresas en Crisis (URIEC), creada durante la presidencia de Eduardo Duhalde, dejó de existir dentro del INAES.

la disputa por la forma legítima que adopta la fábrica recuperada, a partir del estudio de uno de los principales agentes que intervienen en las recuperaciones, el MNFRT (diagrama 1). Para ello utilizamos una variedad de herramientas metodológicas provenientes tanto de las tradiciones cuantitativas como cualitativas de análisis.[3] En la teoría bourdiana los campos son espacios jerarquizados que se estructuran en función de un tipo de capital específico y se organizan por la desigual distribución de dicho capital. En este caso, el diseño del campo del trabajo se realizó a partir de la intersección de otros universos sociales: los campos económico, político, jurídico y simbólico, campos en los que se disputa la creación, el control, la posesión y el acrecentamiento y/o reproducción de una especie de capital específico y que en el momento de las recuperaciones experimentaban extensas crisis sincronizadas. Esto permitió ubicar a los trabajadores como agentes socialmente constituidos y activos actuantes, concebir sus prácticas sin descuidar las condiciones históricas de posibilidad y captar cómo las mismas emergen

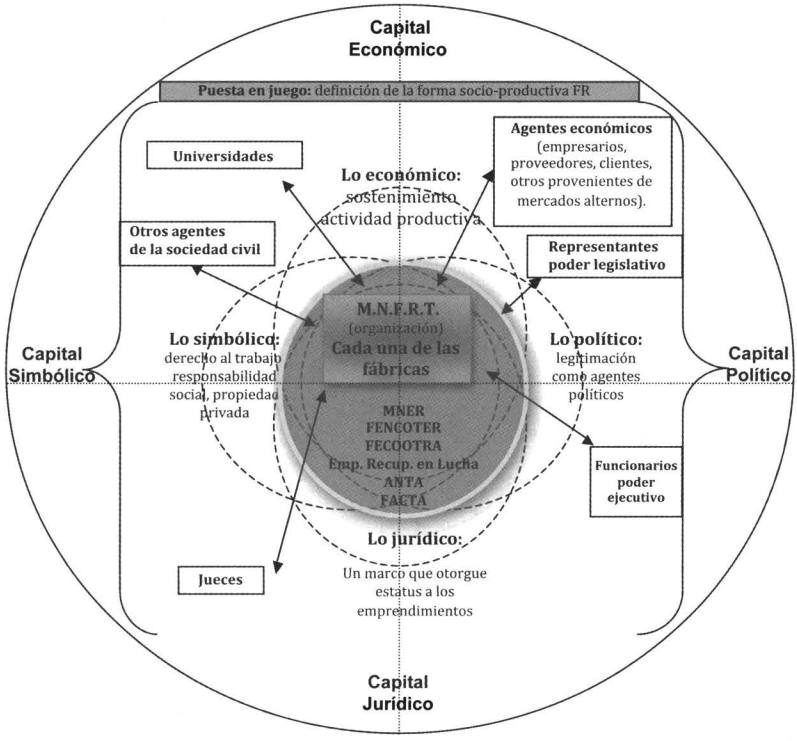
[3] De marzo de 2005 a julio de 2006 se realizó trabajo en terreno visitando 37 cooperativas constituidas luego de procesos de recuperación. Los instrumentos utilizados para producir datos fueron: a) entrevistas semi-estructuradas a trabajadores y otros actores sociales y políticos; b) observación en fábricas, reuniones y demás actividades organizadas entre ellas, y c) encuestas que revelaron distintos aspectos de las empresas y los trabajadores. El trabajo de encuestas se realizó durante el mes de julio de 2005. Se obtuvieron datos a partir de la aplicación de tres cuestionarios. Dos de ellos se utilizaron para captar características de las fábricas (antes y después de la recuperación) y del proceso de recuperación así como aspectos de organización, de producción, comerciales y jurídicos de las cooperativas (se obtuvieron 32 encuestas para uno de ellos y 18 para el otro). El tercero se utilizó para producir datos sobre la trayectoria y experiencia laboral de los trabajadores, sus funciones, participación en la recuperación y otros datos. En suma, se levantaron 217 cuestionarios.

y se desenvuelven en un ámbito de relaciones de poder inmanente a su propia constitución.

La pugna en el campo así construido corresponde a las estrategias que cada grupo de trabajo (unidad de análisis es cada fábrica) y la organización que los agrupa (unidad de análisis son las relaciones entre las fábricas) han construido en confrontación con los demás agentes con los que mantienen relaciones de cooperación, alianzas, controversias, negociación, etc. Otra originalidad que tiene esta forma de delimitar metodológicamente el campo es que el agente estudiado se ubica dentro de la puesta en juego por cuanto en ella se disputa su propia existencia.

En el diagrama 1 se representa esta puesta en juego por medio de la figura de cuatro círculos a los costados y uno en el centro, los bordes de dicha configuración actúan como membranas permeables transmutando su forma en función del proceso mediante el cual se establecen los modos legítimos de la fábrica recuperada. De esta manera podríamos decir que la forma socio-productiva fábrica recuperada "membranea" en función de la producción de regularidades y reglas que reparten los recursos necesarios para intervenir en la acción en un ámbito en el que los derechos y los deberes relativos al estatuto del trabajador –que aún están difusos y se encuentran en definición– son el objeto del conflicto de los diferentes grupos sociales que buscan defender sus intereses específicos. El peso relativo que tiene lo económico, lo político, lo jurídico y lo simbólico y los tipos de recursos (capitales) puestos en juego varía de acuerdo con cada pelea específica que se presenta y de los agentes intervinientes ubicados respecto a la relación (cualitativa) que tienen con la puesta en juego y no exclusivamente en función del volumen de capitales que poseen. Esta forma de recortar el campo también es original respecto a la propuesta de Bourdieu, que ubica a los agentes de acuerdo con el volumen (*quantum*) y estructura (especies) de los capitales.

Diagrama 1. Construcción del campo del trabajo



De acuerdo con lo dicho hasta aquí, para disputar la definición de la fábrica recuperada se requieren especies de capitales específicos. Como afima Bourdieu:

> El valor de una especie de capital –por ejemplo, el dominio del griego o del cálculo integral– depende de la existencia de un juego, de un campo en el cual dicho triunfo pueda utilizarse. Un capital o una especie de capital es el factor eficiente en un campo dado, como arma y como apuesta; permite a su poseedor ejercer un poder, una influencia, por tanto existir en

> un determinado campo, en vez de ser una simple "cantidad deleznable". Asimismo, la jerarquía de las diferentes formas de capital (económico, cultural, social, simbólico) se modifica en los diferentes campos. Dicho de otra manera, existen cartas válidas y eficientes en todos los campos –se trata de especies fundamentales de capital–, pero su valor relativo como triunfos varía según los campos e, incluso de acuerdo con los estados sucesivos de un mismo campo (Bourdieu y Wacquant, 1995: 65).

Una interrogante que dispara este planteamiento es cómo pudieron los trabajadores disputar la definición legítima de la fábrica recuperada si contaban con cantidades escasas de las distintas especies de capitales necesarios para ello. Buscando responder esta interrogante, y a partir de la ubicación de cada agente en el campo del trabajo, fui analizando cómo la formulación y apropiación colectiva de prácticas que se daban en cada fábrica y en la organización que las agrupa les posibilitaba o no la utilización y acumulación de los capitales con los que sí contaban (fundamentalmente experiencia, trayectoria y capacitación laboral previa; experiencia sindical o política en organizaciones sociales y redes, así como contacto con familiares y actores de la sociedad civil y política), susceptibles de ser canjeados para el desarrollo de estrategias que apuntaron a sostenerlos como categoría social. El concepto de *tasa de cambio* permitió mostrar, por ejemplo, cómo la experiencia laboral (capital trabajo) o los contactos y redes establecidos entre las fábricas fueron movilizados y transformados en capital económico y político.

Esta forma de análisis nos permitió arribar a una serie de conclusiones sobre la disputa por la definición de la forma socioproductiva fábrica recuperada. Se trata de procesos conflictivos-relacionales dinámicos, pues aun si muchos de los aspectos en ellos involucrados se han ido institucionalizando a partir de normas jurídicas como las leyes de expropiación (que en algunos casos han sido operativizadas por

los estados provinciales), en términos generales su definición permanece abierta.

CONJUGAR CONCEPTOS PROVENIENTES DE DISTINTAS TRADICIONES ANALÍTICAS PARA CAPTAR LA RIQUEZA DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES

Una vez que finalicé mi investigación doctoral en México, volví a Argentina para llevar a cabo el proceso de producción de los datos en terreno. Retrospectivamente, percibo que, si bien este entrar y salir del escenario donde se desarrollaba la acción, significó esfuerzos prácticos adicionales también me permitió accesos, formas de relación y una sensación de extrañamiento que hicieron más rico y fructífero el trabajo.

Como marco de referencia teórico, el proyecto preveía pensar las acciones de los trabajadores desde las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales combinando categorías provenientes de la perspectiva de MR y de NMS.[4]

Conforme me iba adentrando en el campo, realizando observaciones no sistemáticas en algunas de las fábricas y asistiendo a las diversas reuniones que representantes de las fábricas tenían en pequeños o grandes grupos, transformé la mirada inicial que había tenido en la fase exploratoria de la investigación y luego, en los primeros momentos de la misma cuando entrevisté a informantes clave antes visitados por otros investigadores del país y del mundo, por los medios de comunicación y por activistas de Argentina. Una de las características que distingue a este fenómeno es la atención que concitó tanto en los sectores académicos de Argentina y del mundo como en militantes y agencias de

[4] Incluso, en co-autoría con una colega, publicamos un artículo en la revista *Estudios Sociológicos* en el que utilizamos la noción de *repertorio de acción colectiva* de Charles Tilly, trabajo que surgió de la materia dictada por la profesora Ma. Luisa Tarrés, que tanto me ha inspirado.

desarrollo, hecho que resulta tan curioso como llamativos son la falta de atención que actualmente recibe de parte de los actores locales y el interés que sigue concitando en otros lugares del mundo, desde donde llegan investigadores a recorrer las fábricas para entender tanto por analogía como por oposición lo que ocurre en Italia, España o Grecia, por citar algunos casos.

Esta inmersión en terreno iba desafiando cada vez más esa mirada inicial profundamente influenciada por un estado de ánimo colectivo que predominaba tanto entre actores como analistas y que, producto de una crisis tan extendida, había permitido cuestionar casi todos los marcos de referencia que orientaban la acción social. De esta manera, si durante los años ochenta y noventa los analistas habían puesto el énfasis en los procesos de descomposición y ruptura del lazo social y retomado sobre todo autores como Robert Castel para pensar la crisis y el agotamiento del modelo de acumulación, ante la coyuntura de agudización del conflicto y crisis post 2001 muchos nos embriagamos con la posibilidad de renovación de la vida social y política y tendimos a enfatizar la posibilidad de transformación. Ciertamente el proceder de manera dicotómica no es sólo un problema epistemológico sino que tiene que ver con las dificultades que entraña el análisis del presente.

Me enfrentaba a sujetos sociales que habían experimentado, en poco tiempo, grandes cambios pues habían pasado de ser asalariados a trabajar sin patrón asumiendo con osadía el riesgo de ese proceso: ante la amenaza de perder el empleo habían hecho lo impensable, lo cual los diferenciaba y los diferencia de tantas experiencias que se repiten una y otra vez en todo el mundo en el horizonte del capitalismo globalizado. ¿Cómo captar esos gestos que, para interpelar a las autoridades y a otros sectores de la sociedad argentina, apelaban a imaginarios sociales profundamente arraigados en la cultura política nacional y en la sociabilidad sindical

que aparecían junto a prácticas con rasgos de novedad frente a anteriores ocupaciones fabriles? ¿Cómo conjugar los momentos extraordinarios con los cotidianos? ¿Cómo pensar la movilización y la autogestión que lograron articuladamente, algo no previsto a lo que fue arribando a partir de aprendizajes, por medio de ensayos y errores?

Ese era el desafío con el que me enfrentaba y me llevó a combinar nociones que a simple vista parecen poco compatibles: por un lado, la noción de *estado naciente* formulada por Alberoni que refiere a un estado de transición de lo social, resultado de la frustración que genera el quiebre con un estado de cosas con las que se tenía un compromiso profundo (en este caso el quiebre de la fábrica que amenazó la identidad de los obreros), donde se constituye una solidaridad alternativa por medio de la cual se exploran y se buscan maximizar las fronteras de lo posible. Por otro, nociones asociadas a la teoría general de las prácticas de Pierre Bourdieu, fundamentalmente las de *habitus, estrategia* y *campo*. Para entender que su incompatibilidad es aparente, es necesario hacer una pequeña digresión referida a estas nociones en Bourdieu, ya que existe una tendencia a enfatizar los aspectos de repetición y de sumisión al orden que tiene el *habitus*.

El concepto de *habitus*, que posee una larga tradición en la reflexión y en el discurso filosófico desde Aristóteles, fue transformándose y adquiriendo nuevos matices durante el proceso teórico-investigativo que Bourdieu y su equipo desarrollaron. En las obras de los años setenta se observa una visión más determinista, pues la mirada estaba centrada en el análisis de la reproducción de las estructuras sociales y de cómo ellas tienden a perpetuarse a partir del *habitus* e incluso generan "disposiciones irreversibles".[5] Luego, a

[5] En *La Reproducción* el *habitus* se define como "principio de la producción de las diferencias escolares y sociales más duraderas (...) principio generador y unificador de las conductas y de las opiniones de

partir de los años ochenta del siglo pasado,[6] el concepto fue adquiriendo otros visos con la incorporación de la noción de *sentido práctico* cuya actividad, en tanto sistema de esquemas prácticos, no es meramente reproductiva sino que también incluye la posibilidad de inventiva.

Se trata de disposiciones a sentir, pensar, actuar de una cierta manera que han sido internalizadas por las personas en su trayectoria de vida. A diferencia del estructuralismo, que concibe las prácticas como relaciones simbólicas y "reduce a los agentes históricos al rol de 'soportes' de la estructura y sus acciones a simples manifestaciones epifenoménicas" (Bourdieu, 1991, 1980: 73), el *habitus* es una fuerza creativa, "una estructura estructurante" tanto de prácticas como de percepciones y reconocimiento de las propias prácticas y de las prácticas de los demás agentes. En contraste con el sujeto existencialista que funda sus elecciones en un proyecto libre o del actor racional que construye sus decisiones a partir de una lógica costo-beneficio que opera según sus intereses, se destaca la condición no consciente de las acciones, representaciones y prácticas generadas por el *habitus*. Así, la práctica es el resultado de una relación dialéctica entre la situación concreta y el *habitus* pues éste es una "estructura estructurada y estructurante" y como tal,

> está tan alejada de una creación de imprevisible novedad como de una simple reproducción mecánica de los condicionamien-

---

las que es asimismo el principio explicativo, porque tiende a reproducir en cada momento de una biografía escolar o intelectual el sistema de las condiciones objetivas de las que es producto" (Bourdieu y Passeron, 1977 [1970]: 218) En tanto que el trabajo pedagógico es un proceso irreversible que produce, en el tiempo necesario para la inculcación, una disposición irreversible, o sea una disposición que sólo puede ser reprimida o transformada por un proceso irreversible que produce a su vez una nueva disposición irreversible" (*Ibidem*: 83).

[6] Sobre todo a partir de *El sentido práctico*, Bourdieu, 1991 (1980).

> tos iniciales [...] Si la génesis del sistema de las obras o las prácticas engendradas por el mismo *habitus* [...] no puede ser descrita [...] como creación continua de novedades, es porque se lleva a cabo en y por la confrontación, a la vez necesaria e imprevisible, del *habitus* con el acontecimiento, acontecimiento que sólo puede ejercer una incitación pertinente sobre el *habitus* si éste lo arranca de la contingencia del accidente y lo constituye como problema, aplicándole los principios mismos de su solución (Bourdieu, 1991 [1980]: 96-97).

El *habitus* no funciona siempre igual ni tampoco –por estar atravesado por diferentes "acontecimientos"– puede ser fuente de constante novedad. Para que los acontecimientos lo "inciten" el *habitus* debe "arrancarles" su contingencia y constituirlos en problema aplicándoles sus propios esquemas. El encuentro con el acontecimiento y su problematización determina la emergencia del *habitus* como *sentido práctico* que Bourdieu compara con lo que los deportistas denominan "sentido del juego" (...) "Como dominio práctico de la lógica o de la necesidad inmanente de un juego que se adquiere por la experiencia del juego y que funciona más acá de la conciencia y del discurso" (Bourdieu, 1988). Éste permite a los jugadores hacer lo que hay que hacer en el momento y desplegar una gran capacidad de crear y de improvisar *in situ* sin necesidad de ser conscientes de lo que hacen o requieran planteárselo explícitamente. Así, el cálculo utilitarista que suele primar en las teorías de la acción se sustituye por la *racionalidad práctica* que no es sólo una regla en común sino también un modo de proceder, de situarse y de estar/habitar el mundo, una *disposición práctica.*

El plano de lo consciente está siempre influenciado por el *habitus* que se inscribe en el cuerpo. Para Bourdieu los modos de pensar, de sentir, de actuar se expresan en el cuerpo a partir de disposiciones, por lo cual la dimensión de la corporeidad es inherente a toda práctica social y, como

tal, constituye un aspecto fundamental en la constitución de la sociedad. El esquema corporal ordena el mundo estableciendo orientaciones prácticas. Los conceptos, sentimientos, creencias, emociones, que muchas veces se ubican en la esfera de las representaciones, se pueden analizar como estados corporales que tienen la potencia de afectar y ser afectados. Esta consideración también es consecuente con una de las características que Alberoni atribuye al estado naciente: actuar en dicho estado es también modificar la forma de sentir juntos, de creer, de percibir, es decir, es también actuar sobre los afectos.

El sentido práctico implica un ajuste corporal a las exigencias presentes en los distintos juegos o universos sociales y, como tal, supone un aprendizaje del cuerpo. La lógica que gobierna las prácticas no puede aprehenderse a partir de la lógica teórica (como ha pretendido el estructuralismo) pues la lógica práctica tiene sus especificidades y sus funciones prácticas que buscan, por ejemplo, preservar la producción y reproducción de un grupo.

Estas características del sentido práctico han sido muy fructíferas para analizar las prácticas de los trabajadores y la transmisión, circulación y apropiación de sus saberes en torno a la gestión de la producción y el trabajo (Gracia, 2011 y 2012). En primer lugar, ayudaron a superar un marco de representación dominante sobre el saber o la calificación obrera que dicotomiza el trabajo manual del intelectual, atribuyéndole al primero un carácter rutinizado, repetitivo, automático y al segundo la posibilidad de inventiva, originalidad e improvisación. En cambio, desde la visión bourdiana –que ciertamente retoma la clásica perspectiva marxiana también recuperada por otros autores– no podrían existir actividades completamente programadas y reproductivas ni absolutamente inventivas e improvisadas. La oposición entre trabajo manual/trabajo intelectual se sostiene a partir de una concepción restringida de lo corporal que continúa

subsumida en la dicotomía cuerpo/mente y tiende a considerar el cuerpo como lo hacía Descartes, como una materia inerte gobernada por las leyes de la mecánica. Frente a esto, Bourdieu proporciona una visión alterna pues lo mental no se opone a lo corporal sino que en el cuerpo se inscriben las formas de pensar, de sentir, de actuar. De esta manera se pueden abarcar no sólo los conocimientos y competencias codificados y genéricos (transmisibles por métodos de comunicación a partir de un lenguaje formal y sistemático) sino también los saberes tácitos (que se transmiten en otros tiempos y por otras vías, principalmente, a través de la acción, el compromiso y la participación) (Nonaka y Takeuchi, 1995).

A partir del *habitus* en tanto sentido práctico o sentido del juego, Bourdieu concibe las acciones en términos de estrategia y no de elección. Las estrategias se conciben como "despliegue activo de líneas de acción objetivamente orientadas que obedecen a regularidades y conforman patrones coherentes y socialmente inteligibles aun cuando no siguen reglas conscientes o apuntan a las metas premeditadas determinadas por un estratega" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 56).

El concepto de estrategia evita tomar "las cosas de la lógica por la lógica de las cosas" pues pone en evidencia la diferencia que hay entre la "regla" explícita o el código y la "regularidad" de las prácticas fundada sobre la disposición, es decir, el sentido práctico. Ahora bien, para construir un modelo analítico que logre diferenciar e integrar ambas es necesario pensar en *"los modos de existencia diferentes"* de "los principios de regulación y de regularidad de las prácticas" que el *habitus* engendra fuera de toda referencia a las reglas. Desde esta concepción, toda práctica –inclusive el respeto a la norma jurídica– debe ser entendida en términos de estrategia en cuanto refiere a la defensa de intereses que rigen el juego en el que se está inmerso.

Con esta definición de *estrategia* se pueden abarcar, a partir de un eje dialéctico, los elementos de invención y repro-

ducción en el análisis de las prácticas de los trabajadores. Las condiciones objetivas de la institución fabril que integraban los trabajadores antes de la recuperación fundamentaban las condiciones subjetivas que, mediante diversas representaciones y acciones (ciertas formas de trabajar y de relacionarse o distintas modalidades de reclamo), contribuían a reproducir la fábrica como categoría social objetiva. Como afirma Bourdieu, "la sintonía casi perfecta que se establece entre las categorías subjetivas y las categorías objetivas fundamenta una experiencia del mundo como evidente". Así, una "construcción social arbitraria parece situarse del lado de lo natural y de lo universal" (Bourdieu, 1999a: 130). Con las conductas y representaciones que se pusieron en juego con la ocupación y recuperación de la fuente de trabajo se rompe el círculo de la reproducción social y se abre el proceso de producción y cristalización de prácticas. Además, estas características del *habitus* posibilitaron explicar las distintas estrategias de los trabajadores para enfrentarse a administrar las fábricas sin capitalistas y sin capital inicial y cómo lograron trascender una de las reglas básicas del funcionamiento del sistema capitalista, el derecho de propiedad, que quedó por debajo del derecho al trabajo. Si bien la noción de estado naciente permitió entender sobre todo el surgimiento y la difusión de la acción colectiva, su combinación con la noción de *habitus* posibilitó fortalecer la explicación, por ejemplo, al mostrar por qué se movilizaron quienes lo hicieron. Ante situaciones similares, sólo algunos trabajadores de algunas fábricas enfrentaron la violencia simbólica del desempleo y lograron adaptarse a la situación de manera activa, creativa, emprendiendo prácticas que les permitieron ir más allá de una adaptación acrítica a las condiciones dadas. Cuando Alberoni busca responder qué sujetos tienen una elevada probabilidad de entrar en interacción y formar grupos en estado naciente concluye que "ésta es máxima para *los que se ven frustrados por una situación*

a la que se hallaban profunda y sinceramente ligados y de la que esperaban cosas que no se han realizado" (Alberoni, 1981: 76). En términos de Bourdieu, esto se puede explicar por un desajuste o desfase entre el *habitus* engendrado en un momento dado en cierto espacio social (campo) y su nueva configuración asociada a la emergencia de un nuevo régimen de acumulación económica.

La noción de estado naciente funcionó, sobre todo, para explicar cómo se fueron conformando los distintos grupos en torno a la defensa de la fuente de trabajo y cómo se propagaron y confluyeron los núcleos en estado naciente que propiciaron dicha defensa. La emergencia de cada grupo de trabajo se vio estimulada por el predominio de la disgregación social, ante la cual algunos de los trabajadores de fábricas en crisis –predominantemente quienes trabajaban en la planta– se movilizaron para protegerse del cierre y el desempleo seguro, mientras que otros no participaron por no creer en su viabilidad –sobre todo los que ocupaban puestos administrativos o gerenciales– o por necesitar otro trabajo de manera inmediata. Para poder dimensionar y abarcar la fuerza de invención del nuevo estado social en el que entraron los trabajadores movilizados, su carácter súbito y la profundidad de la fractura que realizaron, consideramos, siguiendo a Alberoni, "el peso esencial" (...) "del vínculo de las lealtades preexistentes y el consiguiente dramatismo de la decisión" adoptada. Asimismo analizamos cómo la acción colectiva se fue gestando –como lo ha observado Barrington Moore en sus estudios– a partir de la percepción de la violación al acuerdo social establecido con los empresarios, que generó fuertes sensaciones de injusticia y traición que tuvieron una gran fuerza e intensidad y permitieron sostener una lucha y conflicto con sus costos personales y colectivos. A partir de las vivencias compartidas los miembros de la futura cooperativa se pudieron reconocer y establecieron entre ellos otro tipo de interacciones y solidaridades, poniendo en cuestión el

espacio cultural y social en el que se encontraban antes, que los dividía y fragmentaba. En casi todos los casos estudiados se observó que la solidaridad se fue construyendo cuando surgieron los problemas, lo cual permitió la constitución del grupo en estado naciente que procuró resolver la situación de manera colectiva y así reforzó los lazos y redes internas.

El reconocimiento entre cada grupo en estado naciente contribuyó a que la recuperación se propagara y se fueran conformando colectivos que exploraron los límites de lo posible buscando maximizar la solidaridad y la cooperación dentro de cada grupo de trabajo y entre distintos grupos. Cada fábrica recuperada fue correa de transmisión de una experiencia que convidó a otras y fue sedimentando rasgos propios. En general, el interés por participar en la lucha se definió durante el desenvolvimiento y la organización de la acción colectiva misma, haciendo mutar las percepciones de costos y beneficios.

La etapa más dinámica de las recuperaciones –durante el año 2002– se dio en un estado de ánimo colectivo de auge de la movilización social después de diciembre de 2001: aunque las experiencias no estaban muy articuladas todavía, sí se estaban reconociendo y eran apoyadas por otros grupos en estado naciente como las asambleas barriales. Esto contribuyó a la gestación del MNER, cuyos líderes, grupos y organizaciones eran muy disímiles, pero que se reconocieron por estar en "estado naciente". Por tanto, su reconocimiento no se produjo sobre la ideología sino sobre el estado del interlocutor. La constitución del MNFRT en 2003, a partir de una escisión del MNER, marcó un punto de inflexión y contribuyó a la institucionalización de la experiencia de recuperación. Sus acciones se articularon en torno a una fuerte estrategia jurídica centrada en el "derecho al trabajo" y una resignificación de la lucha que enfatizó los aspectos de preservación de la fuente de trabajo y buscó borrar sus huellas políticas y los nexos con grupos más "ideologizados".

Este momento de institucionalización, siguiendo a Alberoni, tuvo la doble función de extinguir el estado naciente y asegurar de otra manera su prolongación ya que se constituyó en custodia de la promesa y esperanza del estado naciente que se concretizó justamente con ella. Así, las primeras experiencias inauguraron procesos de aprendizaje en los que se adoptaron prácticas que cristalizaron en nuevas reglas formales e informales.[7] Dichas reglas han ido estableciendo las condiciones de existencia de la fábrica recuperada, es decir, han definido la organización interna de los trabajadores, la cooperación de las fábricas reunidas en el MNFRT así como su relación con los agentes económicos, sociales y estatales. Tanto a partir de la noción de estado naciente, como de las categorías de *habitus* y estrategia logramos captar en los datos producidos que más allá del importante papel jugado por los agentes externos a los que en otras investigaciones se les ha atribuido un lugar decisivo en la explicación de la difusión de las recuperaciones (Rebón, 2004, 2007), el *reconocimiento* entre trabajadores de distintas fábricas que permitió que se difundiera la idea de recuperación se dio sobre todo por estar en estado naciente como por compartir vivencias y estructuras de experiencias, es decir, por tener *habitus* similares que experimentaron un desajuste y así resistieron la dominación que habían experimentado en los últimos años y propusieron salidas creativas.

En los relatos de los trabajadores aparecen distintas características del estado naciente descrito por Alberoni junto a la incitación que este estado produjo en las disposiciones prácticas engendradas por el *habitus*. Entre ellas destacan

[7] Entre las principales destaca la institución de dispositivos que horizontalizaron la toma de decisiones (como el dispositivo asamblea que se utiliza como herramienta privilegiada para la toma de decisiones de gestión y organización del trabajo), la igualación en el reparto de utilidades y la generación de mecanismos para compartir saberes y calificar a los trabajadores.

la historización que tiende a repetirse en los distintos grupos sobre el pasado y presente que se proyecta hacia el futuro. En sus palabras, hay un tiempo anterior a la crisis de las empresas en el que ellos tenían salarios dignos, se sentían orgullosos del trabajo que realizaban e incluso muchos mantenían una buena relación con el empresario; luego viene el momento de la crisis en el que empiezan las suspensiones, la falta de pago de salarios, aguinaldo, vacaciones y se dejan de realizar los aportes a las obras sociales y, finalmente, está el momento en que empieza a surgir la idea de armar una cooperativa y seguir ellos con la fábrica. Si bien este último periodo aparece lleno de dudas, miedos e incertidumbre se destacan los lazos que se lograron y la posibilidad de haber llevado a cabo todos juntos un proyecto que les permitió enfrentar los propios fantasmas y trabajar hoy de otra manera.

CONSIDERACIONES FINALES

En este capítulo analizamos las decisiones y categorías teórico-metodológicas utilizadas en una investigación sobre experiencias de movilización y autogestión del trabajo y la producción que se intensificaron y conectaron en una coyuntura histórica como la argentina a principios del actual siglo en la que se manifestó una profunda y extendida crisis, no sólo del régimen social de acumulación, sino de la dominación política. En tal contexto se pusieron en juego casi todos los marcos de referencia de la acción social, por lo cual, junto a la deuda y bancarrota, brotaron experiencias y encuentros sociales como lo hacen hoy en Grecia las asambleas, los clubes de trueque, la ocupación de periódicos y fábricas que, al resistir y enfrentar de manera creativa la realidad se convierten, como en el caso argentino, en espacios de experimentación de prácticas sociales, productivas, económicas y políticas. A diferencia de otros actores que se originaron en esa coyuntura como las redes de trueque y las asambleas

barriales, las recuperaciones de fábricas en Argentina se han seguido dando con tasas de crecimiento económico superiores al 8% anual. Si a lo anterior le agregamos que cerca del 70% de las experiencias que emprendieron procesos de recuperación están produciendo –muchas de ellas con buen *perfomance* y algunas con más de 10 años de autogestión– podemos decir que se trata de un fenómeno que ha ido más allá de la coyuntura crítica y que se ha instituido como una solución posible cuando las unidades productivas fallan bajo administración capitalista.

Nos preguntamos qué significa esta solución en un contexto como el que describimos antes. Para entender las prácticas y acciones desarrolladas y ubicarlas en su relación con el contexto macrosocial, es necesario marchar a contrapelo de las explicaciones que centran el análisis de la acción colectiva excesivamente hacia las demandas o su participación en las instituciones políticas. Es necesario darles un contenido sociológico y hacer historia del presente abarcando un periodo más amplio que la intensa coyuntura antes referida en tanto las transformaciones en las prácticas, sociabilidad y politicidad de las clases populares vienen dándose desde la emergencia del régimen social de acumulación de valorización financiera que surgió a mediados de los años setenta del siglo pasado y se consolidó durante los noventa, instituyendo una serie de cambios en la relación salarial.

Las experiencias estudiadas nos hablan, precisamente, de los cambios en la relación salarial y de sus efectos por lo cual su debate puede servirse de las riquísimas producciones de las ciencias sociales latinoamericanas que han generado polémicas, como las mantenidas por José Nun y Fernando Enrique Cardoso sobre la población supernumeraria que no era absorbida por el capitalismo periférico. Lo que ya desde 1969 planteaba Nun en consonancia con Aníbal Quijano era la existencia de una masa cada vez más numerosa que no jugaba el papel del ejército industrial de reserva en los

términos descritos por Marx para la fase competitiva del capitalismo, es decir, que no era susceptible de ser explotada dentro del mercado de trabajo y no cumplía con una de las funciones fundamentales de ese concepto: la de contribuir a depreciar el nivel salarial de los trabajadores ocupados. Cuarenta años después este debate continúa vigente, aunque el rumbo socioeconómico seguido por el capitalismo global y por la región latinoamericana parece dar más la razón a Nun. Entre los aspectos que este autor trae a la discusión –y que considero importante rescatar para discutir experiencias como las estudiadas– está la necesidad de distinguir entre la diversidad de sentidos y formas que puede adquirir la población sobrante y sobre todo pensar en los efectos que tiene su definición en la creación de identidades y formas de acción social y política. Es tal vez pensando en esta cuestión de los efectos sobre la acción y las identidades, que las propuestas que han ido surgiendo en la región desde los años ochenta del siglo pasado en torno a la constitución de una "economía popular", "solidaria", del "trabajo", "social y solidaria", entre otras, han buscado realizar una relectura de la noción de informalidad –que surgió luego del concepto de marginalidad– para pensar las experiencias de los trabajadores organizados más allá de la idea de desviación o carencia en tanto desde esos marcos es difícil pensar la producción de actores y prácticas.

Buscando resolver un problema tan extendido como el desempleo, los trabajadores recurren a ocupar las fábricas, lo cual no es una forma de acción colectiva nueva sino que es parte del acervo de la clase trabajadora en Argentina y en el mundo. Sin embargo, estos procesos, sus lógicas, prácticas y significaciones se diferencian de las de otrora en tanto sus demandas no se orientan hacia el puesto de trabajo sino que defienden la fuente de trabajo y para ello desarrollan una serie de estrategias tendientes a disputar la definición legítima de una forma socio-productiva dinámica que plantea

una serie de interrogantes aún abiertas. La forma jurídica que se encontró disponible para poder trabajar colectivamente fue la cooperativa –la cual permitió negociar con agentes jurídico-políticos y económicos– pero el imaginario y práctica cooperativa tal y como se ha desarrollado hasta el presente no abarca las luchas y sentidos que se les fue atribuyendo a las prácticas ni los nuevos vínculos que los trabajadores establecen entre sí, con otras recuperadas y proyectos de este tipo, así como con las distintas instancias estatales. No se trata de actores que emprendieron acciones y prácticas económicas de manera asociada buscando su propio nicho en el mercado ni tampoco se trata de grandes activistas ni luchadores sociales sino de trabajadores estables con antigüedad en las empresas, cuyos trabajos e identidad se vieron amenazados y por ello emprendieron una serie de acciones que otrora no se hubieran imaginado.

El modelo socioproductivo propuesto por las fábricas es particular. Sus prácticas de gestión y organización del trabajo difieren de un sistema cooperativo más tradicional en tanto profundizaron la horizontalidad en la distribución de responsabilidades, saberes y retiros además de que estimularon con diferentes intensidades un proceso interactivo con la comunidad, abriendo la fábrica para visitas, conciertos y otras actividades sociales y culturales. Al mismo tiempo, y a diferencia de otros proyectos económicos emergentes en el país y en la región latinoamericana que venden sus productos en mercados solidarios o a la economía estatal, sus productos se insertan casi exclusivamente en el mercado capitalista.

En este camino efectuaron y realizan diversos aprendizajes organizacionales, institucionales y subjetivos, cada uno de los cuales demanda tiempos y recursos diferenciados. En este sentido, estas experiencias comparten con muchas otras de la región y del mundo los desafíos cotidianos de la auto-organización socioeconómica en marcos

institucionales y legales que no los contemplan y por ello se ven en la necesidad de demandar nuevos marcos para sus acciones.

Como se trata de un aprendizaje y de un modelo socioproductivo dinámico, actualmente es posible encontrar nuevas sinergias en las que estos actores están transformando el campo del cooperativismo. Si en el primer momento se tendió a utilizar la cooperativa sólo como una herramienta jurídica disponible, con el correr del tiempo y ante los enormes desafíos de gestión y producción, la tradición del cooperativismo ha desempeñado un papel cada vez más importante a raíz de su acumulación y experiencia histórica. Esto se manifiesta en nuevos procesos promovidos por el sector cooperativo que buscan crear cadenas de valor, obtener ventajas comerciales y unificar posiciones para luchar conjuntamente por un marco institucional que otorgue mayores garantías al trabajo autogestivo; estos procesos se han expresado en la conformación de Federaciones de segundo grado (como la Red Gráfica Bonaerense, gestada también con apoyo sindical y FACTA e incluso uniones de tercer grado, como la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) creada a mediados de 2009 que, además, muestran una articulación bastante sistemática con varios organismos gubernamentales (cuadro 1). En estos nuevos espacios, en los que conviven las recuperadas con cooperativas tradicionales de trabajo, se reconoce la importancia que han tenido los procesos de recuperación para "transformar" y "dinamizar" (...) "a un cooperativismo de trabajo que hasta el momento no era visto como un actor social de importancia" aunque "sin dejar de lado la identidad de clase de los trabajadores que la conforman" en tanto se comparten las reivindicaciones, lucha e historia del movimiento obrero. Otra característica más actual de este universo, es que a diferencia del periodo en el que se formó el MNFRT escindiéndose de MNER y en el que el espacio de las recuperadas estaba muy polarizado y

la participación en uno de estos dos movimientos excluía la adscripción al otro, actualmente las pertenencias pueden solaparse dado que se han multiplicado las agregaciones y que, además, cada fábrica y empresa puede converger en experiencias con otras redes de las que participan recuperadas, organismos públicos y universidades.

La combinación de categorías analíticas utilizadas para pensar la emergencia, difusión y cristalización de la acción colectiva permite sostener que la movilización y la autogestión son dimensiones de la acción interconectadas en estas experiencias en tanto la movilización hizo posible la transformación de los capitales con los que los trabajadores contaban por los capitales necesarios para ir disputando la definición legítima de la fábrica recuperada al tiempo que es una suerte de condición de posibilidad para su sostenibilidad, pues si las experiencias se cierran sobre sí mismas corren el riesgo de ser completamente absorbidas por la dinámica capitalista al tiempo que aun requieren de las herramientas legales y económicas para seguir sosteniendo la actividad productiva. En este sentido, su capacidad y apertura para nutrirse de otros movimientos y actores es una condición *sine qua non* para profundizar lo que ya han conseguido y constituirse en un modelo productivo alterno.

El modelo jurídico-político, económico y simbólico que constituyeron las cooperativas nucleadas en la organización que estudiamos no puede asimilarse a la figura o liderazgo de los agentes externos que facilitaron la causa de la recuperación sino que dicho modelo es el resultado temporario de una serie estrategias que fueron ensayando y aprendiendo los trabajadores estableciendo relaciones de cooperación/confrontación con otros agentes intervinientes. Como tal, es necesario considerarlo como parte de un acervo de experiencias que pueden resonar y ser reconocidas en futuras experiencias tanto del país como de otras regiones del mundo.

BIBLIOGRAFÍA

Alberoni, Francesco (1981), *Movimiento e institución*, Madrid, Editora Nacional.

Arteaga, Arnulfo (2010), "Introducción: ¿Por qué el trabajo y la ciudadanía?", en Arnulfo Arteaga (comp.), *Trabajo y ciudadanía: una reflexión necesaria para la sociedad del siglo XXI*, México, UAM-I y Porrúa, pp. 5-40.

Bourdieu, Pierre (2005) [2000], *Las estructuras sociales de la economía*, Buenos Aires, Manantial.

_____ (2004), *Campo de poder, campo intelectual,* Buenos Aires, Quadratta.

_____ (2000), *Poder, derecho y clases sociales,* Bilbao, Desclée de Brouwer.

_____ (1999a) [1994], *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Barcelona, Anagrama.

_____ (1999b) [1997], *Meditaciones pascalinas*, Barcelona, Anagrama.

_____ (1999c), *La miseria del mundo,* Buenos Aires, FCE.

_____ (1999d), *Intelectuales, política y poder,* Buenos Aires, Eudeba.

_____ (1999e) [1998], *Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal,* Barcelona, Anagrama.

_____ (1991) [1980], *El sentido práctico,* Madrid, Taurus.

_____ (1988), *La distinción. Crítica y bases sociales del gusto,* Madrid, Taurus.

Bourdieu, Pierre y Jean-Claude Passeron (1977) [1970], *La reproducción. Elementos para una Teoría del Sistema de Enseñanza,* Barcelona, Laia.

Bourdieu, Pierre y Loic J. D. Wacquant (1995), *Respuestas. Por una antropología reflexiva,* México, Grijalbo.

Boyer, Robert (1989), *La teoría de la regulación. Un análisis crítico,* Buenos Aires, Área de Estudio e Investigación

en Ciencias Sociales del Trabajo (SECYT), CONICET, CNRS y Editorial Humanitas.

Coriat, Benjamin (1982), *El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa,* Madrid, Siglo XXI.

Davolos, Patricia y Laura Perelman (2003), "La intervención sindical en las empresas recuperadas. Un estudio de caso", VI Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires, ASET

Delamata, Graciala (2002), "De los estallidos provinciales a la generalización de las protestas en Argentina", *Nueva Sociedad*, núm. 182, pp. 121-138.

Facultad Abierta (2010), *Informe del tercer relevamiento de Empresas Recuperadas Las empresas recuperadas en Argentina 2010,* Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires.

Fajn, Gabriel (coord.) (2003), *Fábricas y empresas recuperadas. Protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad,* Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

Farinetti, Marina (1999), "¿Qué queda del 'movimiento obrero'? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina", *Trabajo y Sociedad. Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas*, vol. I, núm. 1, julio-septiembre, URL: http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/Zmarina.htm.

Favaro, Orietta y Fernando Aizicson (2003), "La resistencia obrera en Zanón, Neuquen", *Realidad Económica,* núm. 197, pp. 24-39.

Fernández, Ana María (2006), *Política y subjetividad. Asambleas barriales y fábricas recuperadas*, Buenos Aires, Tinta y Limón.

García Allegrone, Verónica, Florencia Fernández Álvarez y María Inés Partenio (2004), "Los procesos de recupera-

ción de fábricas: una mirada retrospectiva", en Battistini, O. (comp.), *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores,* Buenos Aires, Prometeo, pp. 329-343.

Gracia, Ma. Amalia (2012), "Ni el patrón ni cualquier varón estaría para marcarnos el paso. Auto-reconocimiento y relaciones de poder en prácticas socio-productivas populares", *Otra Economía.* Revista de la Red de Investigadores Latinoamericanos en Economía Social y Solidaria (RILESS), vol. V, núm. 9, pp. 152-172.

_____ (2011), *Fábricas de resistencia y recuperación social. Experiencia de autogestión del trabajo y la producción en Argentina*, México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.

_____ (2008), "Fábricas recuperadas en Argentina, 2000-2006: un campo para la invención social", México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, tesis de doctorado.

Gracia, Ma. Amalia y Sandra Cavaliere (2007), "Repertorios en fábrica. La experiencia de recuperación fabril en Argentina, 2000-2006", *Estudios Sociológicos*, vol. XXV, núm. 73, enero-abril, pp. 155-186.

Íñigo Carrera, Nicolás (2002), "De la revuelta del hambre a la insurrección espontánea", *América Libre*, núm. 19, URL: http://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/19/inigo19.htm.

_____ y María Celia Cotarelo (2000), "Reestructuración productiva y formas de la protesta social en la Argentina", en Enrique de la Garza Toledo (comp.), *Reestructuración productiva, mercado de trabajo y sindicatos en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, pp. 73-86.

Kasparian, Denise y Candela Hernández (2010), "Aunando cooperación: La Red Gráfica", *Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas (OSERA)*, núm. 4, segundo semes-

tre, URL: http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_04/redgrafica4.pdf.

Maceira, Verónica y Ricardo Spaltemberg R. (2001), "Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera argentina", *Observatorio Social de América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales* (CLACSO), año II, núm. 5, octubre-noviembre, pp. 23-28.

Magnani, Esteban (2003), *El cambio silencioso. Empresas y fábricas recuperadas por los trabajadores en Argentina*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

Martínez, Óscar y Vocos, Federico (2002), "Las empresas recuperadas por los trabajadores y el movimiento obrero", en Enrique Carpintero y Mario Hernández (comps.), *Produciendo realidad. Las empresas comunitarias*, Buenos Aires, Ediciones Topía-La Maza.

Marx, Karl (2001) [1844], *Manuscritos económico-filosóficos*, Buenos Aires, Edición Colihue Clásica.

_____ (2000) [1983], *El Capital. Crítica de la economía política*, t. I, México, FCE.

Meda, Dominique (1998) [1995], *El trabajo. Un valor en extinción*, Barcelona, Gedisa.

Moore, Barrington (1999), *Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia*, Barcelona, Península.

_____ (1989), *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

Neffa, Julio C. (2005), *Las teorías económicas sobre el mercado de trabajo*, vol. I, Buenos Aires, FCE.

Nonaka I. y Takeuchi (1995), *The knowledge-creating company*, Nueva York, Oxford University Press.

Nun, José (1987), "Cambios en la estructura social de la Argentina", en José Nun y Juan Carlos Portantiero (comp.), *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*, Buenos Aires, Puntosur, pp. 117-137.

_____ (1987), "Vaivenes de un régimen social de acumulación en decadencia", en José Nun y Juan Carlos Portantiero (comp.), *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*, Buenos Aires, Puntosur, pp. 83-116.

_____ (1969), "Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal", *Revista Latinoamericana de Sociología*, vol. V, núm. 2, pp. 178-236.

Palomino, Héctor, Ivanna Bleynat, Silvia Garro y Carla Giacomuzzi (2010), "Empresas recuperadas por sus trabajadores (2002-2008). El universo, la continuidad y los cambios en el movimiento", en Palomino *et al.*, *La nueva dinámica de las relaciones laborales en Argentina*, Buenos Aires, Baudino, pp. 27-66.

Polanyi, Karl (2003) *La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*, México, FCE.

Quijano, Aníbal (1969), *Redefinición de la dependencia y proceso de marginalización en América Latina*, Chile, OIT-ILPES.

Rebón, Julián (2007), *La empresa de la autonomía*, Buenos Aires, Ediciones Picasso.

_____ (2004), *Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas*, Buenos Aires, Ediciones Picaso, La Rosa Blindada.

Sánchez, Federico (2003) "Acciones colectivas y políticas de desarrollo local. Las empresas recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires", en *Empresas recuperadas. Ciudad de Buenos Aires*, Buenos Aires, Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pp. 85-101.

Schuster, Federico y Alberto Scribano (2001), "Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura", *Observatorio Social de Latinoamérica*, núm. 5, septiembre, URL: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110210065134/2analisis.pdf.

Thompson, Edward Palmer (1989), *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, Barcelona, Crítica.
Womack, John (1968), *Zapata y la Revolución Mexicana*, México, Siglo XXI.

III. IDENTIFICACIONES EN DISPUTA: (DES)CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS DEL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN HOMOSEXUAL (MLH) MEXICANO, 1968-1984

Sofía Argüello Pazmiño*

Este artículo presenta los matices en torno a las identificaciones en juego que conformaron los primeros resquicios de acción colectiva en torno a la sexualidad (no heteronormativa) en México. Principalmente se trata de analizar de manera articulada: a) cómo los discursos oficiales (principalmente los discursos científicos y de los medios de comunicación) promovieron representaciones estigmatizantes sobre la homosexualidad, b) cómo se configuró y cuál fue, políticamente, el discurso y la identificación –aparentemente aglutinante– dentro del Movimiento de Liberación Homosexual mexicano (MLH) y c) cuáles fueron las disputas dentro la militancia en relación con la naciente "identidad" homosexual.

El artículo está dividido en tres secciones. La primera sección expone el modelo analítico que cruzará el análisis empírico. La segunda parte presenta articuladamente una descripción sobre cuáles fueron los discursos científicos y de los medios de comunicación que sirvieron como palestra de

* Doctora en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México. Profesora invitada del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador. Asesora académica de Yachay EP, Ciudad del Conocimiento.

estigmatización sobre la homosexualidad y los mecanismos y estrategias políticas del MLH para contrarrestar, por un lado, el papel de los medios, de la psicología y la psiquiatría; y por otro, para promover una agenda política y social reivindicativa. Finalmente, el tercer acápite sitúa los conflictos interorganizativos ligados a la (des)construcción de la identificación homosexual y sus cruces de género y clase.

LAS ENTRADAS ANALÍTICAS

En este texto restringiremos el modelo analítico a la noción de identidad en estrecha articulación con los debates en torno a la acción colectiva (política de la identidad). Por un lado, interpelaremos la categoría *identidad* y, por otro, pondremos a debate el concepto de *movimiento social*. A partir de la discusión sobre los límites de estas perspectivas, lo que interesa es mostrar la importancia de situar las miradas analíticas en clave procesual, relacional e histórica. Por ello nos referiremos no a los movimientos sociales LG, GLBT, Queer,[1] etc., sino más bien a los procesos de configuración de acción colectiva, politización y ciudadanización de las identificaciones sexuales.

Ahora bien, cabe señalar que este artículo no abarcará de manera exhaustiva los aportes de las teorías feministas y los estudios de género, así como la extensa bibliografía producida sobre México respecto a la temática. Este artículo sintetiza los instrumentos analíticos de estos *corpus* teóricos a partir de un sostenido estado del arte realizado previa-

[1] Las siglas se adecuan según la autoidentificación de los actores y la mirada analítica de los investigadores. LG sirve para designar a los colectivos Lésbico-gays; GLBT, aglutina a las identificaciones Gays, lésbicas, bisexuales, transgénero, transexuales (en varias ocasiones se incluye la letra I para designar las identificaciones intersexuales). Queer designa a las agrupaciones que quieren romper con binarismos e identificaciones normativas (incluidas las gays y lésbicas).

mente. En la medida que este trabajo quiere apostar por una sociología de la acción colectiva, la caja de herramientas utilizada compendia, resumidamente, varios artefactos de análisis.

El título de este artículo "Identificaciones en disputa: (des)construcciones identitarias del Movimiento de Liberación Homosexual (MLH) mexicano, 1968-1984" tiene como objetivo analizar los mecanismos de construcción de las identificaciones sexuales en los gérmenes de acción colectiva que activó la sexualidad no (hetero)normativa. Estos gérmenes de acción colectiva se plasmaron en lo que en aquel momento situacional se dio por llamar Movimiento de Liberación Homosexual. Por ello, el MLH debe ser comprendido como una unidad de observación descriptiva y no como un concepto analítico-teórico explicativo.

Los límites de la identidad

> Si la identidad está en todas partes entonces no está en ninguna. Si fluye, ¿cómo podemos entender las formas en que las autocomprensiones pueden fortalecerse, congelarse y cristalizarse? Si es construida, ¿cómo podemos entender la a veces coercitiva fuerza de las identidades externas? Si es múltiple, ¿cómo podemos entender la terrible singularidad que suele ser perseguida –y a veces alcanzada– por políticos para transformar meras categorías en grupos unitarios y excluidos? ¿Cómo podemos entender el poder y el *pathos* de la identidad política?
>
> ROGERS BRUBAKER Y FREDERICK COOPER

Los debates teóricos en torno al concepto *identidad* han sido un eje sustantivo de discusión tanto en la sociología de la

acción colectiva como en las teorías feministas y los estudios de género y, en general, en las ciencias sociales. Los marcos de análisis alrededor de la *construcción de las identidades* y de la *política de la identidad* (entre otros) posibilitaron, por un lado, comprender el sentido de *hechura* de los sujetos, discursos y prácticas sociales; sentido forjado en relaciones de poder asimétricas y estructuras de dominación. En este marco, el carácter constructivista de las identidades, principalmente de los diálogos feministas, permitió (ha permitido y permite) desnaturalizar roles sociales y sexuales imperantes. Por otro lado, los despliegues políticos en torno a la identidad (a las identidades) han dado pie para reflexionar sobre las luchas por reconocimiento, redistribución y representación (*Cfr.* Fraser, 1991, 1997, 2010), han posibilitado comprender y analizar a las identidades como formas de estrategia y recursos para la acción (*Cfr.* Tilly, McAdam y Tarrow, 2005, Calhoun, 1995) y han (re)significado en la arena de la lucha social la articulación de la vida cotidiana con la política y las reivindicaciones colectivas en clave de movimientos sociales identitarios (*Cfr.* Melucci, 1991, Touraine, 1993).

Sin embargo, las posiciones constructivistas que han girado alrededor de los estudios de las *identidades* han fijado aquello que en sus inicios quisieron desmontar, y han dejado poco espacio para la comprensión y la reflexión analítica sobre las paradojas y los límites de la *identidad*. Desde estas preocupaciones, Brubaker, Cooper (2000) y Butler (2002) –entre otros autores/as– han cuestionado la categoría *identidad* y han dado algunas entradas conceptuales alternativas. Tanto Brubaker y Cooper como Butler acuden a la noción de *identificación* (ya que las identidades en sí, no existen) para vislumbrar: 1) que las identidades son el resultado de procesos relacionales de identificación (*Cfr.* Brubaker y Cooper, 2000) y 2) que "las identificaciones nunca se concretan plena y finalmente; son objeto de una incesante reconstitución y, como tales, están sometidas a la

lógica volátil de la iterabilidad" (Butler, 2002: 159).[2] Ahora bien, tomando como marco explicativo los procesos de identificación (pensados como procesos relacionales e inacabados) debemos entender el carácter histórico de la construcción de las identificaciones, el cual está atravesado, temporal y espacialmente, por discursos hegemónicos, por disputas interpretativas, por estrategias colectivas, etc. En suma, lo que se debería estudiar no son las "identidades" *per se*, sino los procesos en los cuales las identificaciones se configuran.

Los límites de los movimientos sociales y de sus reflejos identitarios

Una puntualización crítica al uso (constructivista o no) de la categoría *identidad* es el riesgo de establecer un sujeto social y político homogéneo e inmóvil.[3] Este sujeto homogéneo –y su representación política– no sólo es un limitante en el campo

[2] Butler plantea específicamente la noción de identificación fantasmática. La idea de fantasmática alude al sentido de fantasía, entendida como "la escenificación y dispersión del sujeto en una variedad de posiciones identificatorias" (Butler, 2001: 159). Esto no quiere decir, sin embargo, "que todos se sientan impulsados a ser o tener tal fluidez identificatoria" (Butler, 2002: 152). La identificación no implica la total voluntad para asumir cualquier identidad (como proceso). Es decir, si bien hay un momento de agencia, también hay otro de estructuración.

[3] Vale señalar la diferencia que existe de la categoría identidad en términos teóricos-analíticos y en términos empíricos. Si bien es cierto que en la realidad (en los datos y fuentes empíricas) podemos observar que las identificaciones actúan como identidades concretas e inamovibles (las mujeres, los gays, las lesbianas, los trans, etc., por ejemplo); en el campo teórico debemos poner atención para no estudiar *a priori* una/la/las identidad(es). Ello conllevaría a: 1) deshistorizar la constitución de dicha identificación, 2) presumir teóricamente, incluso desde el punto de vista constructivista, que la(s) identidad(es) existe(n) en sí mismas, 3) crear un marco analítico normativo que no nos posibilite ahondar en las complejas tramas de configuración de las identificaciones, que incluyen distinciones espaciales y temporales, las interacciones con otros actores, etc.

de las reivindicaciones *in situ*; sino que, además, limita el análisis teórico de la articulación entre sexualidad y política. En relación con las formas de acción colectiva se ha estudiado específicamente lo que ha dado por llamarse los movimientos sociales gay/lésbicos, GLBT, Queer, entre otros. En principio creo que ambas asunciones son problemáticas; tanto la de movimiento social como la de las categorías identitarias (no identificatorias) que lo acompañan (a menos que estén situadas como categorías descriptivas de un proceso social específico y no como categorías analíticas/explicativas de un sujeto/actor social homogéneo y descontextualizado). Para explicitar esta problemática pondré un ejemplo estrechamente ligado al análisis de este artículo. Jordi Díez (2010, 2011) propone una cronología dividida en tres tiempos para explicar el desarrollo de lo que denomina el Movimiento Lésbico-Gay (LG) en México (1978-2010): del surgimiento al declive (1978-1983), de debilitamiento y pérdida de presencia nacional (1984-1997) y la etapa reciente, a la que considera la etapa más productiva del movimiento (1998-2010).[4] Si bien considero que, en términos metodológicos, estas tres etapas marcan temporalmente las acciones y estrategias de los colectivos de las diversidades sexuales en México, particularmente en la Ciudad de México, no concuerdo con las características y formas de clasificación que sostiene Díez. En primer lugar no resulta pertinente, en términos analíticos, plantear un carácter evolutivo al movimiento social. A pesar que en algunos momentos Díez sostiene la necesidad de comprender las complejidades del movimiento LG, su mirada, demasiado general y normativa, no posibilita rastrear la riqueza de las dimensiones históricas dentro de las cuales se produce la acción colectiva. Este carácter normativo se ve reflejado, por ejemplo, en la posición que tiene

[4] Para confrontar temas relacionados ver De la Dehesa (2008, 2010), Salinas (2008, 2009, 2010), Laguarda (2009), Mogrovejo (2000).

el autor al sostener que la etapa más reciente del movimiento (1998-2010) es la más productiva. Ello se debe, siguiendo a Díez, a la transformación del movimiento social y a la apertura del sistema político mexicano. Esta transformación del movimiento social está marcada por el paso "de un movimiento social 'callejero' a uno profesional, institucional y con liderazgos nuevos" (Díez, 2010: 152). Estas afirmaciones conllevan a observar al movimiento dentro de un determinismo histórico innecesario (evolutivo) y a comprender poco o nada los mecanismos que posibilitan el cambio.[5]

La reflexión de Díez está sustentada en cánones teóricos sobre la comprensión de los movimientos sociales en clave evolutiva: "que va del movimiento al grupo de interés; de un sentimiento de *statu nascenti* a uno de toma racional de decisiones, y de la oposición por principio a las instituciones a la participación política pragmática" (Tilly *et al.*, 2005: 70-71). Este esquema es uno de los clásicos enfoques de la acción colectiva, y ha sido debatido ampliamente por las teorías de los marcos (*frames)* (Snow, Bendford, 2006), el modelo de los ciclos de protesta (Tarrow, 2001) y el de los mecanismos de los procesos dinámicos (Tilly, Tarrow, McAdam, 2005). Además, pese a que Díez señala reiteradamente la exis-

[5] En el plano de la comprensión de los procesos, es mucho más certero vislumbrar las relaciones e interacciones entre actores y espacios sociales que trazar un orden evolutivo para su entendimiento. La primera entrada analítica (procesual) requiere (des)armar las tramas de sentidos en las cuales se producen los fenómenos. La segunda (evolutiva) busca desencadenamientos causales a los fenómenos (en un sentido más positivista), los mismos que suelen circunscribirse en parámetros normativos para comprender la realidad. Por eso es que esta propuesta analítica, a diferencia de la Díez, no partirá de las premisas de que: a) el movimiento homosexual mexicano nació el 26 de julio de 1978, b) este primer estadio del movimiento puede ser entendido "del surgimiento a su declive" y c) se trata, en esencia, de explicar el Movimiento Lésbico-Gay en México, como si éste fuese el mismo (con variaciones de carácter progresivo) desde finales de los setenta hasta nuestros días.

tencia de complejidades dentro del movimiento, éstas son casi inexistentes en sus análisis. Por sí misma la noción de movimiento social, así como la de identidad, tiende a suspenderse análogamente, dejando poco espacio para la reflexión sobre las relaciones de poder internas que se producen en colectivos de pares.

En este marco, prefiero distanciarme de un concepto tan abarcativo como el de movimiento social. En su lugar, me referiré a los procesos de acción colectiva, politización de la sexualidad y ciudadanía sexual que, de una u otra manera, pueden producirse históricamente en clave de movimiento social, pero no necesariamente.

Asimismo, la categoría LG (lésbico-gay) que otorga el efecto identitario del movimiento social que estudia Díez se presenta, por un lado, como si hubiese existido siempre de la misma manera; es decir, como si no hubiese habido una configuración histórica de dicha(s) identidad(es). Trabajos como los de Laguarda (2009), por ejemplo, nos recuerdan la importancia de comprender cómo, efectivamente, se fue conformando procesual y relacionalmente la identidad gay en la Ciudad de México.

Por otro lado, la categoría LG se utiliza analíticamente como si lo gay y lo lésbico fuesen (hubiesen sido) categorías identitarias semejantes y comparables únicamente en sus similaridades. Este rasgo da poco espacio para un ejercicio comparativo que tome en cuenta las diferencias, las mismas que incitan la reflexión sobre la composición (asimétrica) de las relaciones de género al interior del "movimiento".

Finalmente, creo que existe una dificultad no resuelta en definir a qué actores se estudia y/o se deja de lado en un análisis sobre acción colectiva, politización y ciudadanías. En el campo de la sexualidad, y particularmente del estudio de los colectivos de la diversidad sexual esta dificultad no es un tema menor. En este marco no resuelto, mi apuesta es imbricar, lo más posible, las distintas asunciones identifica-

torias que han entrado en disputa en los procesos políticos ligados a la sexualidad. De allí que, a diferencia de Díez, me interesa reflexionar no sólo en la construcción histórica de las identificaciones sexuales y en el análisis de las diferencias comparativas que permitan observar las disimilitudes de género; sino también me interesa rastrear el papel que cumplieron las experiencias de las personas cuyas identificaciones transitaron entre lo masculino y lo femenino. Estas experiencias no han sido recabadas y ameritan indagación. Particularmente en el México de los años setenta y ochenta (y me atrevería a decir en otros países de la región y en otras temporalidades históricas) las identificaciones (sexuales) fantasmáticas (*Cfr.* Butler, 2000) menos normativas entraron en la arena de disputa por su ambigüedad, casi extrema, de *escenificación y dispersión* (Butler, 2000). Estas identificaciones se movían en las diversas experiencias de las identificaciones (masculinas) feminizadas.

Politización y sexualidad

El eje articulador que cruza este texto tiene su base en la comprensión procesual, relacional e histórica de la articulación entre sexualidad y política. En este marco, las dos primeras secciones teóricas del artículo discuten: 1) los límites de la categoría de identidad y la posibilidad de utilizar otra categoría analítica (la de identificación) y 2) los límites del concepto de movimiento social y del uso identitario que se adscriben a los "movimientos" de la diversidad sexual, ejemplificados en los trabajos de Díez (2010, 2011) sobre el caso mexicano.

Ahora bien, he reiterado en varias ocasiones que mi apuesta analítica se distancia tanto de la noción de identidad como de la de movimiento social; y a su vez, se instaura en la reflexión sobre los procesos de acción colectiva, politización y ciudadanización. Quisiera sugerir que las aristas

que convergen en esta discusión permiten ver al menos dos señalamientos de suma importancia para el estudio de las sexualidades y la política (cuadro 1): a) las identificaciones sexuales se politizan de forma diferenciada según los contextos en los que se formulen demandas colectivas sobre la sexualidad y según el tipo de luchas y disputas políticas[6] (en un caso puede ser legalizar el matrimonio gay y lésbico y/o la adopción y formación de familias, en otro puede ser despenalizar la homosexualidad y reconocer/afirmar la diferencia y el sentido de la vida de los seres humanos sexuados, etc.); b) siguiendo a Weeks (1989, 1998) podemos ver que la politización de las identidades sexuales halla momentos de concreción no sólo en el paso de lo privado a lo público en términos personales, vitales, cotidianos (momento de transgresión),[7] sino también en las disputas en torno a los valores y normas que rigen el orden social y la convivencia (momento de ciudadanía).[8] Ambas ideas recuerdan el hecho de las tensiones entre agencia y estructura que se resuelven en momentos sucesivos y a veces superpuestos del devenir histórico.

Sexualidad, identificación y política son cruzados por dinámicas diacrónicas y sincrónicas propias de la continuidad entre orden y cambio sociales.

[6] Se trata de ver a las identificaciones en su dimensión estratégica, relacional, donde las adscripciones categoriales se activan *en la disputa* política y de acuerdo con las características situacionales de esas disputas.

[7] "El momento de trasgresión está caracterizado por la constante invención y reinvención de nuevos sentidos del ser y de nuevos desafíos a las instituciones y tradiciones heredadas que hasta ahora habían excluido a estos nuevos sujetos" (Weeks, 1998:36, traducción propia).

[8] El momento de la ciudadanía refleja "la reivindicación de la igualdad ante la ley, los derechos de igualdad en el empleo, la paternidad, la condición social, el acceso a la provisión de bienestar, los derechos de asociación o incluso el matrimonio de parejas del mismo sexo" (Weeks, 1998: 37, traducción propia).

Cuadro 1. Conceptos

Identificación es un proceso que acentúa diferencias con miras a construir sujetos y posiciones de sujeto en un campo situado de interacciones. Implica tanto la forma en que los actores experimentan su posición y su diferencia, cuanto las estructuras sociales objetivas de desigualdad y jerarquía que marcan la vida cotidiana.
Identidad es, a su vez, el resultado de los procesos de identificación. Conlleva un carácter estratégico ya que sólo se define en oposición a uno o varios alter con los que marca distancias y tipos de relación.
Por **política** se entiende un espacio dual de producción de conflictos y de resolución de los mismos. A lo primero se le conoce como ámbito de *lo político* o del *polemos*, y a lo segundo como el de *la política* o *polis* (Mouffe, 1999).
Politización es la forma en que aspectos de la vida social son llevados hacia el campo de la política. Incluye: a) la evaluación de una situación como justa o injusta y susceptible de ser alterada o preservada, b) la constitución de un actor portador de demandas con base en una identificación, así como de intereses compartidos y c) la definición de estrategias de acción.
Sexualidad remite a los aspectos sociales del sexo. Implica regulaciones en torno al deseo sexual, las conductas sexuales, los cuerpos y la reproducción. En tanto factor de relacionamiento social, también alude a derechos y obligaciones. Es fruto de construcciones sociales e históricas.

LA POLÍTICA DEL ESTIGMA Y RESPUESTAS DE LIBERACIÓN HOMOSEXUAL

El papel de los medios de comunicación y los discursos científicos

A partir del 26 de julio de 1978,[9] las notas periodísticas no dejaron de subrayar la participación pública y política, por

[9] El Movimiento de Liberación Homosexual (MLH) no nace (como noción de origen, de génesis) el 26 de julio de 1978. Si bien es cierto que esta fecha marca la visibilidad pública del incipiente movimiento homosexual, éste se venía constituyendo desde finales de los años sesenta. El 26 de julio debe

primera vez en la historia del país, de homosexuales y lesbianas (particularmente del MLH), así como sus subsiguientes acciones y el inesperado frenesí de un homosexual, Víctor Amezcua –que no pertenecía a las filas del MLH– por lanzar su candidatura a la Cámara de Diputados representando al PRI. Todos estos acontecimientos iban sumados a las campañas contra el charrismo, la represión, el derecho a la huelga, la libre sindicalización, la memoria de la matanza de Tlatelolco, del movimiento estudiantil, los 25 años del inicio de la Revolución Cubana y la "ilusión (a partir del favorable desempeño de la economía y la renta petrolera) de que los recursos disponibles serían suficientes para perpetuar una suerte de patronazgo y mediación presidencial (en manos de José López Portillo) con todos los sectores sociales" (Rodríguez Kuri *et al.*, 2010: 736).

"Surge aquí la unión de los lilos",[10] "Ayer Halcones, hoy palomas",[11] "El FHAR contra el 'Sexismo represor'",[12] "También en México los homosexuales protestan",[13] "Se vinculan

---

ser comprendido como una estructura de oportunidad, instituida por la lid política de izquierda y aprovechada por los militantes homosexuales que se unieron a las marchas conmemorativas de los 10 años del movimiento estudiantil, la matanza de Tlatelolco y el 25 aniversario del inicio de la Revolución Cubana. Los gérmenes del MLH se fueron dando desde 1968. Nancy Cárdenas fue un puntal fundamental para la creación de espacios de apertura y reflexión sobre la homosexualidad en México. Ella y otros intelectuales de la época como Carlos Monsiváis y Luis Prieto, posibilitaron abrir líneas de debate para la posterior politización pública. Las primeras formas de reunión colectiva y el nombre que se atribuiría este primer germen de cohesión en torno a la diversidad sexual, tenían similitudes con los primeros colectivos homosexuales de Estados Unidos. Ya sea como *awareness groups* (modelos de concientización estadounidenses) (*Cfr.* Monsiváis, 2010) o como el *Gay Liberation Front*, que en México tomaría la batuta como Frente de Liberación Homosexual.

[10] *El Sol de México*, 2 de agosto de 1978.

[11] *Excélsior*, 28 de julio de 1978.

[12] *Novedades*, 30 de septiembre de 1978.

[13] *Novedades*, 29 de septiembre de 1978.

los homosexuales con los partidos de izquierda",[14] "Busca el tercer sexo tener un diputado",[15] "Buscan apoyo del PRI los invertidos",[16] "Jugará para diputado el líder del tercer sexo",[17] fueron, entre tantos, los encabezados de algunos diarios.

La caricatura de Calderón "El Valle de los Caídos" hace referencia a la inserción pública del MLH en las protestas sociales. En la imagen el caricaturista hace converger la pluralidad de actores que se conglomeraron en las protestas callejeras de la época. Se pueden observar, por un lado, manifestantes que llevan pancartas relacionadas con la lucha homosexual en las que se leen *slogans* como "Jotos del mundo uníos", "Puño cerrado y caído" y "FHAR". Junto a estos sublevados vemos mezclados en la multitud a otro grupo de militantes (de izquierda, comunistas). Dos de ellos mantienen un diálogo. Uno dice: "Caray mano. ¿No extrañas esas manifestaciones en las que nos echaban piedras? Y el otro responde: "Sí mano. En estas nuevas nos dan de besitos". Tanto en las notas de los periódicos como en la representación de Calderón, podemos observar el alcance y visibilización que tuvo el movimiento a raíz de la protesta del 26 de julio, y la recepción e interpretación, estigmatizada, que el MLH tuvo en los medios de comunicación.

El papel que jugaron los medios de comunicación fue un punto fundamental para la puesta en escena del Frente de Liberación Homosexual (FLH) y de las vivencias cotidianas de los homosexuales (principalmente masculinos en todas sus variaciones). Los medios, incluida la radio, no sólo visibilizaron el quehacer político del movimiento, sino que además produjeron marcos de sentido anclados en condiciones de estigmatización sobre la homosexualidad, ya sea en el ámbito político o el cotidiano, incluso mucho antes de julio de 1978.

[14] *El Sol de México*, 5 de octubre de 1978.
[15] *El Sol de México*, 5 de octubre de 1978.
[16] *El Sol de México*, 10 de octubre de 1978.
[17] *El Sol de México*, p. 3, 10 de octubre de 1978.

Fue precisamente el papel de los medios de comunicación uno de los detonantes que posibilitó la salida a la esfera pública del MLH; principalmente por la indignación que causaba, a la naciente militancia, la tergiversación que la prensa le daba a la homosexualidad. Este estilo de divulgación estigmatizante fue uno de los marcos de injusticia que sirvió como palestra de lucha, y fue uno de los mecanismos de reivindicación con el que partió el movimiento para construir un discurso homogéneo de opresión y exclusión.

Ahora bien, una de las acciones emprendidas por el MLH (principalmente por el FHAR) para detener o al menos matizar las misivas de los medios, fue una campaña de contrainformación. Esta campaña tenía como propósitos desmentir noticias, informar sobre la homosexualidad (quitándole el peso de los estigmas) y promover agendas políticas a través de los propios medios. En julio de 1978, por ejemplo, un integrante del FHAR envió cartas de protesta al diario *Uno más Uno* y a la revista *Proceso*. En estas cartas se hacía evidente el descontento en el uso de la figura del homosexual en una de las obras de teatro del grupo El Galpón y en las declaraciones del actor Roberto Cobo, quien hiciera de homosexual en la película *El lugar sin límites*, de Arturo Ripstein. Según el comunicado, en ambas representaciones "aparece una imagen deformada y sexista del homosexual".

La carta enviada a *Proceso* el 22 de julio de 1978 (gráfica 2) nos deja ver la complejidad de la problemática. En términos de divulgación, eran los medios de comunicación los que permitían masificar la información. Sin embargo, varios de los discursos plasmados principalmente en los diarios y revistas, estaban cargados de disertaciones religiosas y (pseudo) científicas sobre la homosexualidad. Tanto las peroratas religiosas como los razonamientos científicos, y en algunos casos los discursos de los homosexuales no militantes y las notas sensacionalistas que recogían las vidas de los "maricas en su ambiente", legitimaban los estigmas.

Gráfica 2. Protesta de homosexuales, extracto de la carta remitida a la revista *Proceso*, 22 de julio de 1978

PROTESTA DE HOMOSEXUALES

Proceso: No. 90
Fecha: 1978-07-22

Señor director:

Queremos manifestarle nuestro desacuerdo por la manera en que su revista ha venido abordando el tema de la homosexualidad, manera que parece empezar a hacer crisis, por el tono de la entrevista que Anne Marie Mergier hace a Roberto Cobo (Proceso 89).

Pensábamos que Proceso, por ser una revista independiente y seria, abordaría más temprano que tarde la cuestión de la homosexualidad, con seriedad y conocimiento de causa. Pero nos hemos equivocado. Han publicado ustedes artículos que abordan la homosexualidad pero que de ninguna manera reflejan el sentir de los homosexuales mexicanos (incluidas las "opiniones" de Cobo); han dado ustedes la palabra a la iglesia, a la siquiatría, a los articulistas y cine y teatro, pero no a los homosexuales. Y si lo han hecho, ha sido marginal, vergonzosamente en su sección de Palabra de Lector, que por supuesto no tiene ni el espacio ni la jerarquía que el tema merece.

Creemos que el tratamiento de temas tradicionalmente tabú en nuestra sociedad es muy saludable; pero también creemos que tratarlo sin ton ni son, por moda, sin disciplina ni conocimiento de causa puede resultar muy peligroso y desinformador y puede acarrear consecuencias imprevisibles De ahí nuestra preocupación. Como lectores y homosexuales conscientes no podemos aceptar que Proceso se convierta en desinformador en lo que a la homosexualidad respecta. Exigimos seriedad, profundidad en sus artículos.

La entrevista de marras contiene una serie de puntos que nos gustaría comentar, no con el afán de atacar a Cobo, sino de aclarar algunas ideas. Amplios sectores de hombres y mujeres homosexuales están ávidos de información seria acerca de su problemática sexual. Quieren enterarse, leer, reafirmarse y es lamentable que las páginas de Proceso se utilicen para reproducir cual verdades una serie de refritos de las opiniones más vulgares, antihistóricas, seudo-científicas, moralizantes y antihomosexuales ¡emitidas por un homosexual!

Sin embargo, en el espacio de las paradojas analíticas, eran estas mismas disertaciones, sobre todo las científicas, de las que se valía el MLH a la hora de emprender la campaña de contrainformación. Sobre el particular, quisiera retomar los aportes de Nancy Fraser (1991) respecto a lo que llama política de las necesidades. Según esta autora, la acción política se produce en un campo de inteligibilidad entre actores que necesitan interpelarse mutuamente. Por ello, tanto las acciones puntuales y concretas como las estrategias generales se utilizan y ponderan en la medida en que se consideran oportunas dentro de un conflicto particular. Las formas en que se da sentido a la acción se basan en recursos de interpretación y comunicación. Tales recursos están no sólo en la base del conflicto, sino que ellos mismos se convierten en objeto de disputa. Por ello, "el discurso de las necesidades se presenta como un espacio en contienda, donde los grupos con recursos discursivos (y no discursivos) desiguales compiten por establecer como hegemónicas sus interpretaciones respectivas sobre lo que son las legítimas necesidades sociales. Los grupos dominantes articulan sus interpretaciones con la intención de excluir, desarmar y/o cooptar las contrainterpretaciones. Por otra parte, los grupos subordinados o de oposición articulan su interpretación de las necesidades con la intención de cuestionar, sustituir y/o modificar las interpretaciones dominantes. En ninguno de los dos casos las interpretaciones son simplemente representaciones. En ambos casos son, más bien, actos e intervenciones" (Fraser 1991: 11).

De este modo, advertimos que las luchas por interpretaciones promovidas por la campaña de contrainformación del MLH pasaban por tratar de desvincular la homosexualidad con cargas valorativas relacionadas con la patologización, lo antinatura, lo desviado, lo invertido. Todo esto dentro del espíritu político ligado al afán por diferenciar al homosexual del "marica", del "joto", del "puto". En el marco de las

políticas de las necesidades no resulta extraño que el MLH haya recurrido en varias ocasiones a los discursos científicos como medio de legitimación de sus estrategias políticas. Por ejemplo, cuando algún articulista escribía de manera peyorativa sobre la homosexualidad, inmediatamente se hacían públicas cartas de rechazo. Estas cartas interpelaban la posición ingenua y sesgada de los articulistas, señalando que quienes estaban escribiendo artículos de opinión no eran expertos. Constantemente podemos observar que las cartas exponían que tales opiniones (las de los articulistas) no se trataban de escritos serios producidos por psicólogos, antropólogos o sociólogos, y que, por lo tanto, no tenían un carácter de validez y verdad.

En relación con los discursos científicos, particularmente con las prácticas psicológicas, psiquiátricas y médicas, el panorama era más complejo. Ello porque se trataba de los discursos que determinaban, con mayor autenticidad (al menos en este contexto situacional), si la homosexualidad se inscribía o no como trastorno mental, enfermedad, patología, anormalidad, etc. Las reflexiones que los militantes emprendieron para (des)complejizar la relación entre ciencia y homosexualidad fueron sostenidas y difíciles. Ya desde 1971, sea en las tertulias en casa de Nancy Cárdenas o las reuniones de Sex-Pol,[18] se fueron cimentando estos intentos por imbricar ciencia y (homo)sexualidad. La necesidad de articular un discurso coherente pasaba por armar un alegato sistemático, a través de diversas opciones (pseudo)científicas, que sostuvieran sus discusiones en el campo político.

Dos episodios condensan esta complejidad. El primer evento fue la presentación de una ponencia en el Foro Abierto del II Encuentro de la Red Nuevas Alternativas para la Psiquiatría el 22 de septiembre de 1978. Esta ponencia, titulada "Un punto de vista sexo-político sobre la homosexualidad",

[18] Abreviatura de sexo político.

planteaba: a) el papel del cuerpo y su diferencia sexual dentro "del universo de la sexualidad humana", b) el papel de las instituciones, como la familia, la iglesia, la escuela en producir formas de dominación sobre esos cuerpos sexualmente diversos, c) una crítica al término normalidad y d) la necesidad de emplear la palabra homosexual "sólo como recurso de comunicación", rechazando "sus implicaciones de enfermedad, perversión, delito, etc." (Un punto de vista sexo-político sobre la homosexualidad 1978: 4). Como herramienta de legitimización científica esta ponencia recogía los aportes de los psicoterapeutas Alexander Lowen, Wilhelm Reich y Fritz Perts.

El segundo episodio fue el envío de una carta dirigida al periódico *Uno más Uno* el 30 de julio de 1979. En esta carta, el FHAR advertía sobre algunas consideraciones en torno a ciertas operaciones de cambio de asignación de sexo que se estaban efectuando en la Ciudad de México.[19] En ella se quería dejar claro lo siguiente:

> Que las operaciones de 'cambio de sexo', médicamente son necesarias sólo cuando existe una malformación genital, externa o interna, de carácter congénito. En estos casos los pacientes son sometidos a cuidadosos estudios durante años, a tratamientos previos, a terapias de adaptación que concluyen en una o varias intervenciones quirúrgicas que ajustarán el sexo biológico de la persona con la sexualidad que psicológicamente se le ha formado en los procesos de educación y socialización (...) Otro es el caso de los llamados cambios de sexo en adolescentes y jóvenes homosexuales, que se presentan actualmente en nuestro país en cantidades alarmantes (tenemos cifras aproximadas, extraoficiales, de más de dos mil casos), y que

[19] El contexto de este comunicado se da porque el tema del transexualismo estaba siendo discutido por los magistrados del Sexto Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia a partir de la existencia de varias prácticas médicas de asignación de sexo que se estaban realizando en México.

> no son más que auténticas carnicerías fomentadas por un puñado de médicos mercenarios y sinvergüenzas, quienes se han enriquecido a costa de la opresión de los homosexuales, ya que ninguna de las víctimas de estos fraudes realmente requiere de este tipo de operación. El argumento que hace caer a compañeros homosexuales en manos de estos modernos doctores Frankenstein es creer que 'llevan dentro de sí a una mujer' y que la castración les hará convertirse en mujeres (Carta dirigida a Manuel Becerra Acosta, director general de *Uno más Uno*, 30 de julio de 1979).

Las alusiones cientificistas sobre la homosexualidad (que se recogen en los periódicos y en las disertaciones del MLH) se encarnan en las presunciones y debates no acabados alrededor de la terminología del anormal, desviado, invertido o sobre la categoría "tercer sexo" tantas veces recogida por los diarios. De allí que no podemos dejar de anotar que los discursos científicos hayan coadyuvado indiscutiblemente en los procesos de administración, control y clasificación de las poblaciones homosexuales. Pero hay que apuntar que la legitimidad de estos discursos provee regulaciones histórica y espacialmente situadas. Las categorías de clasificación científicas mutan. En el México de los años sesenta y setenta, en un momento en el que apenas nacía el movimiento homosexual, las estrategias políticas enmarcadas a las disputas con los discursos científicos no terminan de ser claras (y no tenían por qué serlo). Los militantes hicieron grandes esfuerzos por debatir con las teorías psicológicas para comprender y explicar de qué se trataba la homosexualidad. Como lo señala Nancy Leys "la ciencia se revela a sí misma mucho más contingente y culturalmente específica de lo que se había pensado" (1991: 10).[20]

[20] "Science reveals itself as much more contingent and culturally specific than it has been thought to be".

De este modo, los discursos (pseudo)científicos sobre homosexualidad (a favor y en contra) en los sesenta y setenta se edificaban principalmente: a) en la psiquiatría, la psicología, la sexología, la medicina[21] y b) en la sociología, la antropología y la historia "en sus formas revolucionarias", es decir, a través del uso del marxismo, latente en las discusiones y luchas sociales de la época.[22]

IDENTIFICACIONES EN DISPUTA

En medio de artículos sensacionalistas de varios medios de comunicación que reseñaban las "vidas alegres" de los "jotos", "bonitas", "mayates", "putos", etc., en las calles y locales de ambiente de la ciudad, los artículos de opinión de editorialistas, los debates inacabados de la psiquiatría y la psicología, las lecturas iniciales de los militantes sobre algunos textos referidos a la homosexualidad, las luchas políticas de la época, etc., no existía, y no tenía por qué existir, un discurso claro sobre qué significaba la homosexualidad y/o sobre quiénes eran los homosexuales.

Aunque a primera vista parecería que había un acuerdo más o menos común sobre la homosexualidad, la verdad es que los matices y diferenciaciones sobre la sexualidad no normativa fueron un tema no resuelto.

[21] En los años ochenta, con la aparición del VIH/SIDA los discursos científicos sobre homosexualidad se centrarán principalmente en la epidemiología, demografía y salud pública.

[22] No podemos dejar de mencionar que esta campaña de (contra)información pasó por promover activamente la existencia del MLH en varios medios de comunicación a nivel internacional. "Esta promoción hizo explícitos públicamente los desmanes que el Estado mexicano cometía hacia los 22 homosexuales y a su vez difundió la existencia de la organización en medios de divulgación homosexual".

Esta irresolubilidad estaba presente en todo nivel, e incluso permeaba la militancia naciente de los años setenta (y posteriormente de los ochenta).

Como anotamos en el acápite anterior, una de las luchas de la agenda del MLH fue la campaña de contrainformación hacia los medios de comunicación y varios discursos científicos que circulaban sin un centro fijo. En este apartado quisiera ubicar la mirada a las divergencias identificatorias que se dieron dentro del MLH.

El Boletín Interno núm. 1 del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) expone brevemente los antecedentes de la organización (fundada en abril de 1978) y las acciones y estrategias desplegadas durante sus primeros cuatro meses de existencia. Este boletín recrea los mecanismos de publicidad de uno de los primeros colectivos homosexuales. El FHAR es una de las tres organizaciones que configurarán, entre 1978 y 1984, el Frente de Liberación Homosexual (FLH) o el Movimiento de Liberación Homosexual (MLH) en México. Esta organización, el FHAR, tal como lo señala Díez, "era el grupo más contractual de los tres" (2010: 138). Produjeron boletines de prensa, cartas de descontento hacia los medios de comunicación que (re)producían estigmas sobre la homosexualidad, armaban de forma directa alianzas con otros colectivos homosexuales a nivel nacional e internacional, participaban en programas radiales, en congresos psiquiátricos, etc. Este colectivo tenía una composición únicamente masculina.[23] Otro de los grupos, el colectivo LAMBDA,[24] surgió de Sex Pol (abreviaturas de Sexo Político) que se creó

[23] Aunque el FHAR visibilizó principalmente la presencia política masculina, alrededor de la figura de Juan Jacobo Hernández, existen documentos organizativos sobre la reflexión lésbica. Estos documentos están firmados por la fracción de lesbianas del FHAR.

[24] El nombre LAMBDA ha sido comúnmente utilizado a nivel mundial por los colectivos homosexuales para nombrarse. Simbólicamente representa energía.

inicialmente como un grupo de autoconciencia y autoayuda inspirado en la psicología. El colectivo LAMBDA era, de los tres, el único colectivo mixto. Su composición era de hombres y mujeres homosexuales. Finalmente, el colectivo OIKABETH (Ollin Iskan Katuntat Bebeth Thot)[25] era un grupo formado exclusivamente por mujeres lesbianas. Este colectivo nace de un primer grupo: LESBOS, su posición era principalmente la de reivindicar el lesbianismo sobre la homosexualidad. Pese a que existía una línea de mujeres que se autodefinían como homosexuales, OIKABETH partía del hecho de situar la autonomía del colectivo de lesbianas y reivindicarse como tales, sin embargo, esto no imposibilitó que desde 1978 se aliaran al FLH.

La composición diversa de estos colectivos se encontraba permeada por diferencias de género. Por un lado, las identificaciones homosexuales masculinas, por otro, las identificaciones lésbicas. Dentro de estas posiciones existían tensiones constantes, tanto dentro de la asunción identitaria entre hombres homosexuales y mujeres lesbianas, pero sobre todo, dentro de las experiencias masculinas, las mismas que pasaban por la diferenciación entre quienes performaban el género como (tra)vestidas y quienes no lo hacían. Ello suponía una disputa de género. Esta disputa se hacía visible en cómo los sujetos (tra)vestidos incomodaban a las masculinidades normativas que se erguían dentro del patrón homosexual masculino de la militancia. Este punto es crucial en la medida que nos permite subrayar la diversificación identificatoria que permeaba la composición del MLH. Asimismo es decisivo porque deja entrever los despliegues y repliegues identificatorios que produjeron muchos de los conflictos interorganizativos y entre las tres organizaciones que inicialmente formaron el Frente de Liberación Homosexual.

[25] En maya significa "mujeres guerreras que abren camino y esparcen flores".

Una de las pugnas que hicieron estallar los conflictos entre las organizaciones del MLH se evidenció en la Sexta Marcha Nacional del Orgullo Gay en 1984. Se trató de un sector del movimiento que evidenció algunas formas de asimilación de los militantes homosexuales. Estas fricciones incluían la asimilación de los "jotos", el deterioro del discurso contra la opresión (que llegó a convertirse en victimizador) y los conflictos entre "los grupúsculos del MLH".

¿Quiénes eran los estigmatizados? Los discursos descalificativos de los medios, algunas disertaciones científicas, la mayor parte de los arrestos, torturas y extorsiones que realizaba la policía y, en gran medida, la valoración social sobre la homosexualidad, se configuraron alrededor de las imágenes corpóreas, situaciones y posiciones sociales de las personas (tra)vestidas,[26] mayates,[27] chichifas,[28] mujercitas,[29] jotos,[30] bonitas.[31] Todos estos calificativos,[32] y muchos otros

[26] Persona con apariencia masculina que se viste de mujer. Puede o no dedicarse al trabajo sexual.

[27] Mayate viene del náhuatl, es un escarabajo que vive y se alimenta del estiércol de otros animales. Por este motivo, la palabra ha sido utilizada para referirse a cierto tipo de prácticas homoeróticas. Retomando el trabajo de Annick Prieur (2008), "mayate es el término que emplean las jotas para denominar a los hombres que, sin ser femeninos ni considerarse homosexuales, tiene relaciones sexuales con otros hombres" (Prieur: 224).

[28] Chichifa se utiliza comúnmente para referirse al hombre que intercambia prácticas sexuales con otro hombre a cambio de dinero, comida, ropa. Se lo considera como un vividor.

[29] Homosexual afeminado, vestida.

[30] Homosexual afeminado.

[31] Homosexual travestido cuya imagen es de "mujer bonita". Pueden dedicarse al trabajo/comercio sexual.

[32] Existe un sinnúmero de calificativos para describir las prácticas sexuales, las representaciones corporales, las posiciones de clase de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales/transgénero. Estos calificativos se (re)producen como mecanismos de clasificación y estigmatización por parte de la sociedad en general (a través de los medios de comunicación, de prácticas represivas y discriminatorias, etc.) y

más, describían peyorativamente a trabajadores sexuales con prácticas homoeróticas y/o a hombres afeminados (homosexuales afeminados). Pero además estas categorizaciones suponían marcadas formas de clasificación despectivas y estigmatizantes, ubicando como criminales y/o criminalizando a estas personas, ya sea por sus prácticas sexuales o su inversión de género. En este marco, la asimilación de los militantes, el detrimento del discurso contra la opresión común y los conflictos entre organizaciones homosexuales y lésbicas, condensaron la pérdida del carácter aglutinador que en sus inicios juntó al movimiento de liberación homosexual. En un primer momento (años setenta) estos colectivos se articularon para construir un discurso coherente en contra de la represión, estigmatización, violencia hacia los homosexuales, y a la vez, edificar un discurso liberador que les permitiese "salir del closet". Sin embargo, el primer lustro la década de los ochenta dejaba ver que ciertas posiciones privilegiadas de algunos militantes agotaron los discursos de los inicios del MLH. Este agotamiento se hacía visible en la necesidad de muchos activistas por encajar en los parámetros del "buen ciudadano", del ciudadano varón de clase media.

Así versa, por ejemplo, un párrafo de "Eutanasia al movimiento Lilo", panfleto que circuló en la Sexta Marcha:

> En esta sociedad, todos vivimos oprimidos de alguna manera u otra, unos más, otros menos. Unos con privilegios. No por ser choto[33] está uno más oprimido. La sociedad te madrea[34] más si no te pones el modelito de uniforme, o si te niegas a entrarle

dentro de la vida cotidiana de estas personas. Para comprender la asignación y el uso de estas palabras se requieren preguntas de investigación y enfoques metodológicos distintos a los planteados para este trabajo. Sostengo que es necesario realizar estudios de caso etnográficos que nos permitan comprender a profundidad esta temática.

[33] Sinónimo de joto.

[34] Golpear.

al huacal.[35] Si lo dudas, pregúntale a cualquier joto asimilado, decente, con prerrogativas sociales, económicas y culturales, decente, fresa,[36] qué tan oprimido se siente en su ambiente... En el espíritu original del MLH palpitaba la conciencia de que vivimos en una sociedad opresiva a la que hay que transformar dentro de nosotros mismos y en nuestro medio. No se trataba de domesticarla ni de limarle los dientes al cuchillo de nuestra existencia para que la sociedad nos aceptara. Esos dientes (la indecencia, la irreverencia, la vulgaridad y los malos modos de las vestidas, la reivindicación del gozo, del lenguaje grosero, de nuestros cuerpos, la alegría de vivir una vida distinta, en la que el erotismo juega un papel importantísimo) deberían, al contrario, trozar las costumbres, transformar, aunque sea brutalmente, los modelos de dominio y auto-opresión interiorizados en todos, pugnando por la transformación de la sociedad. Los actuales grupos del MLH quedaron chimuelos[37] o desdentados. La tolerancia y aceptación sociales les dieron en la madre. Y ahora sus minigurús nos recomiendan ser 'de categoría'; tener trabajo estable, con ingresos superiores a cuatro veces el mínimo; ir en peregrina marcha donde La Lupe[38] a gritar que somos chotos; comportarnos con decencia, persignarnos para todo lo que declaremos con citas de Lenin, Marx y Trotsky. De esta manera, aseguran, la sociedad se dará cuenta sin lugar a dudas de que también hay jotos trabajadores, lindos, de regios modelazos, bien portados, que no dicen groserías ni se visten de mujer (o si se visten, sólo para divertirse y mostrar su "sensibilidad") (Eutanasia al Movimiento Lilo, 1984: 1).

Las apelaciones planteadas en "Eutanasia al movimiento Lilo" permiten observar los conflictos organizativos centrados en las formas de asimilación de varios militantes.

[35] Cajón, cesta.
[36] De clase alta o con presunción de serlo.
[37] Sin dientes.
[38] Se refiere a la Virgen de Guadalupe.

Estas formas de asimilación se encajaban principalmente en la posición de clase que caracterizaba la composición de la militancia homosexual. Nociones como decencia, bien portado, trabajador (con trabajo estable, con buen salario y que además pague impuestos) –y hasta guadalupano– definían, tras bambalinas del MLH, al homosexual asimilado. Sin embargo, estas connotaciones –un tanto caricaturizadas en el panfleto– daban indicios sobre los conflictos de clase que permearon al MLH. Tanto los homosexuales tachados de asimilados, como los denunciantes de ello, pertenecían a la clase media. Esta característica tambaleó las estructuras del aparente cauce del movimiento. Por supuesto, este elemento estaba acompañado por la variable de género. Los conflictos casi siempre estuvieron precedidos por la militancia masculina, cuyo eje de pugna era la diferenciación de ellos sobre las masculinidades homosexuales feminizadas.[39] Por lo tanto, género y clase se imbricaron para crear una identificación en proceso de asimilación (la gay). Fuera de ella, la identificación abyecta que se solidificaba en los imaginarios de los homosexuales era reflejo de una cara de ellos mismos. Eran las identificaciones dispersas por las cuales lucharon casi una década. Esta identificación abyecta tomaba cuerpo en las representaciones del homosexual afeminado y/o travestido y/o trabajador sexual.

Por lo tanto, el carácter asimilacionista debe ser comprendido analíticamente como el acomodo de los actores colectivos a órdenes normativos de clase y género. Esto no implica, de ningún modo, que los varones homosexuales y las mujeres lesbianas de clase media no hayan sufrido formas de discriminación y homofobia/lesbofobia. Políticamente, como señala Laguarda, "la identidad estaba en disputa, como ocurre cuando los grupos sociales buscan imponer

[39] Esta diferenciación se daba tanto fuera del MLH como dentro de él. Uno de los conflictos entre las organizaciones homosexuales fue precisamente que algunos de los activistas del MLH se (tra)vestían de mujer.

una visión específica de sí mismos a los demás o cambiar la visión de los grupos dominantes a su favor" (2009: 79). Y yo añadiría, como ocurre –pero suele hacerse menos visible– cuando los grupos sociales disputan entre sí la asunción de una identificación, la representación política de esa identidad estratégica y la diferenciación de esta identidad (que se congela y renace constantemente) con otras identificaciones que pululan dentro de los colectivos de pares.

Por ejemplo, el FHAR reconocía la diversidad de la homosexualidad. El sentido diverso se hacía irrebatible, y hasta ahora es así, en el exceso del uso de los cuerpos y la abundancia de códigos y signos que se desprendían de ese uso. De allí que las prácticas y posiciones sociales de las personas (tra) vestidas, jotos afeminados, mayates, bonitas, etc., exacerbaban los ideales de una homosexualidad homogénea, sobre todo de aquellos ideales que pretendían instaurar algunos de los integrantes de LAMBDA. Para LAMBDA, era importante presentar una imagen homosexual, de varón, que no pasase por representar lo femenino, ya sea en la rutinización del travestismo y el amaneramiento femenino o en la feminización del cuerpo masculino a través de entonaciones de voz, modos de caminar, movimientos corporales, etc. Adicionalmente, estas ambigüedades identificatorias se ubicaban en lo que varios militantes llamaron los "homosexuales lúmpenes".

Todo esto nos recuerda, por un lado, a las formas en las que se vive una identidad estigmatizada (Goffman, 2003). Una de esas formas es la manera de circulación y presentación de la persona en la vida cotidiana (Goffman, 2004). Para Goffman no es lo mismo sobrellevar un estigma aparentemente visible que uno camuflado. Por ello distingue al desacreditado del desacreditable.[40] En este marco, releyendo a Goffman, debemos anotar que en muchos casos, la carga

[40] La *persona desacreditada* es aquella cuya marca de estigma es evidente; mientras que la marca de una *persona desacreditable* no lo es necesariamente.

del estigma cumple esta doble función: producir una persona desacreditada que al mismo tiempo sea desacreditable. Ese sería el caso de los homosexuales afeminados. Por otro lado, debemos poner atención sobre cómo la compulsión binaria de género (Butler, 2001) se reproduce también en las prácticas de la sexualidad no heteronormativa. En este punto nos encontramos con una paradoja. En primer lugar advertimos sobre cómo la regulación de la sexualidad produce una "verdad del sexo" anclada en la heteronormatividad, la misma que genera "oposiciones discretas y asimétricas entre femenino y masculino, entendidos estos conceptos como atributos que expresan 'hombre' y 'mujer'" (Butler, 2001: 50). Por lo tanto, esta "verdad del sexo" provoca formas inteligibles sobre el sexo, el género y el deseo edificadas en las prácticas heteronormativas en desmedro de las que se encuentran fuera de esta norma (por ejemplo, la homosexualidad y el lesbianismo). Pero contrariamente, a pesar de que estas identificaciones sexuales no heteronormativas logran desnaturalizar este orden regulador sobre el sexo, vuelven a (re)producirse bajo el manto de "esas normas de inteligibilidad cultural" (Butler, 2001: 50) binarias, provocando de este modo otras nuevas políticas de regulación sexual, esta vez, dentro de las propias identificaciones no heteronormativas.

Los "homosexuales lúmpenes" (que principalmente estaban ubicados dentro de los grupos de obreros y de las clases populares) fueron el talón de Aquiles entre la militancia homosexual constituida. Aunque existían grupos de travestis autonombrados como Mariposas Rojas y Mariposas Negras,[41] éstos no politizaban, al menos no públicamente, la

[41] Mariposas Negras era un colectivo que se encontraba dentro del FHAR. En mayo de 1979 lanzaron la publicación "Nuestro Cuerpo". Esta publicación (que en mis registros son dos números) tenía como objetivo "el fortalecimiento del movimiento homosexual revolucionario (...), el auge de la concientización y el orgullo de los homosexuales y las lesbianas mexicanas y su vinculación con las luchas populares" (Nuestro Cuerpo, 1979: 24).

identificación travestida. Paradójicamente, los grados de variación estética y corporal de las mujeres lesbianas no causó la cerrazón que sí lo hicieron los travestidos y homosexuales afeminados. Existían también formas de masculinización femenina. En uno de sus testimonios, Juan Jacobo Hernández señalaba que "las generalas" (militantes lesbianas) "eran mujeres fuertes, de pelo corto, copetonas, vestidas de señores, muchas de ellas masculinas". Monsiváis anota que "el lesbianismo era tan inconcebible que a sus practicantes se les vilipendiaba por el aspecto de 'marimachas' o de 'quedadas profesionales', y no por la conducta que la sociedad se negaba a creer posible. Así, a las maestras de invariable traje sastre, a las activistas políticas de corte férreo, a las solteronas que amistaban románticamente con jovencitas, se les hostilizaba por no ser femeninas, y ser agrias y severas, pero no por ejercer su sexualidad" (Monsiváis, 2010: 202).[42]

A MANERA DE CONCLUSIÓN

En el campo analítico nos encontramos ante la necesidad: 1) de cuestionar categorías teóricas que han constituido el *mainstream* dentro de los debates académicos y 2) de construir modelos analíticos flexibles que posibiliten observar aquello que la cerrazón conceptual nos imposibilitó ver. En este sentido, tanto la categoría identidad como la de movimiento social debieron ser puestas entre paréntesis para poder analizar, a la luz de los datos empíricos, la relación entre sexualidad, identificación y política.

Desde el análisis empírico pudimos situar tanto las ambivalencias y paradojas de la constitución de las identificaciones sexuales, así como las luchas interpretativas que posicionaron los discursos en torno a la homosexualidad.

[42] Sumado a ello debemos anotar la misoginia (tendencia de rechazo, repudio y desprecio a las mujeres y lo femenino) que varias militantes lesbianas percibían por parte de los hombres homosexuales.

Estas luchas interpretativas condensaron los elementos con los que pudimos vislumbrar el análisis social en clave de procesos. Dentro de este proceso de politización pudimos observar que la configuración alrededor de las identidades sexuales está inmersa en una red compleja de relaciones, actores, intereses y estrategias. En este marco, las disputas alrededor de cómo se representan las identificaciones sexuales tienen determinadas características.

Finalmente, pese a existir un aparente consenso por construir una identidad homogénea (estratégica), pudimos observar las divergencias internas en torno las diferenciaciones identitarias. Estas diferenciaciones están atravesadas por marcadas disputas en torno a las diferencias de género y de clase: disputas entre lo homosexual y lo lésbico, conflictos alrededor de la carga estigmatizante de la palabra homosexual y la acelerada asimilación hacia lo gay, y conflictos internos con las representaciones abyectas de las identidades trans (travestidas).

BIBLIOGRAFÍA

Arditti, Benjamín (2000), "El reverso de la diferencia", en Benjamín Arditti (ed.), *El reverso de la diferencia. Identidad y política*, Caracas, Nueva Sociedad, pp. 99-124.

_____ (1995), "Rastreando lo político", *Sociología y Política*, núm. 6, pp. 96-120.

Brubaker, Rogers y Frederick Cooper (2000), "Más allá de la identidad", *Apuntes de Investigación del* CECYP, núm. 7, pp. 30-67.

Butler, Judith (2002), *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*, Argentina, Paidós.

_____ (2001), *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*, México, Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM, Paidós, trad. Mónica Mansour y Laura Manríque.

_____ (2000), "El marxismo y lo meramente cultural", *New Left Review*, núm. 2, mayo-junio, pp. 109-121.

_____ (1998), *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, México, Paidós.

Calhoun, Craig (1999), "El problema de la identidad en la acción colectiva", en Javier Auyero (ed.), *Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana*, Argentina, Universidad Nacional de Quilmes, pp. 77-114.

_____ (1995), *Critical Social Theory*, Basil, Blackwell.

_____ (1994), "Social Theory and the Politics of Identity", en Craig Calhoun (ed.), *Social Theory and the Politics of Identity*, Cambridge, Blackwell, pp. 9-36.

Dehesa, Rafael de la (2010), *Queering the Public Sphere in México and Brazil*, Londres, Duke University Press.

_____ (2008), "Diversidad sexual, elecciones y modernidad democrática en Brasil y México", en Martha Singer Sochet (coord.), *Participación política desde la diversidad,* México, UNAM, Plaza y Valdés, pp. 277-294.

Díez, Jordi (2011), "La trayectoria política del Movimiento Lésbico-Gay en México", *Revista Estudios Sociológicos*, vol. XXIX, núm. 86, México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, pp. 687-712.

_____ (2010), "The importance of Policy Frames in Contentious Politics: Mexico's National Antihomophobia Campaing", *Latin American Research Review*, vol. XLV, núm. 1, pp. 33-54.

_____ (2010), "El Movimiento Lésbico-Gay, 1978-2010", en Ana María Tepichin, Karine Tinat y Luz Elena Gutiérrez (coords.), *Los grandes problemas de México: relaciones de género*, México, El Colegio de México, pp. 135-154, vol. VIII.

Elias, Norbert (1999) [1970], *Sociología fundamental*, Barcelona, Gedisa.

Foucault, Michel (2007) [1977], *Historia de la sexualidad 1: voluntad de saber*, México, Siglo XXI.

_____ (1992), *Microfísica del poder*, Madrid, La Piqueta.

Fraser, Nancy (2010), "Injustice at Intersecting: On 'Social Exclusion' and 'Global Poor'", *European Journal of Social Theory*, vol. XIII, núm. 3, pp. 363-371.

_____ (1997), *Justitia Interrupta*, Colombia, Siglo del hombre, Universidad de los Andes.

_____ (1991), "La lucha por las necesidades: esbozo de una teoría crítica socialista-feminista de la cultura política del capitalismo tardío", *Debate Feminista*, año 2, núm. 3, pp. 3-40.

Gamson, William (1992), *Talking Politics*, Cambridge, Cambridge University Press.

Gamson, William y David Meyer (1999), "Marcos interpretativos de la oportunidad política", en Douglas McAdam, J. McCarthy y M. Zald, *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*, España, Istmo, pp. 389-412.

Goffman, Erving (2004), *La presentación de la persona en la vida cotidiana*, Buenos Aires, Amorrortu.

_____ (2003), *Estigma. La identidad deteriorada*, Buenos Aires, Amorrortu.

_____ (1975), *Frame Analysis. An essay on the organization of experience*, Australia, Penguin Books.

Hinojosa, Claudia (2001), "Gritos y susurros. Una historia sobre la presencia pública de las feministas lesbianas", *Desacatos*, núm. 1, pp. 177-189.

Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe (2000), "Posición de sujeto y antagonismo: la plenitud imposible", en Benjamín Arditti (ed.), *El reverso de la diferencia. Identidad y política*, Caracas, Nueva Sociedad, pp. 153-168.

Laguarda, Rodrigo (2009), *Ser gay en la ciudad de México. Lucha de representaciones y apropiación de una identi-*

dad, 1968-1982, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Mora.

Lind, Amy y Sofía Argüello (2009), "Ciudadanía y sexualidades en América Latina. Presentación del dossier", *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, núm. 35, pp. 13-18.

Lizárraga, Xabier (2010), "Una memoria de los Movimientos Gays en México: inicios del activismo homosexual en México", en Edith Peña y Lilia Hernández Albarrán (coords.), *Iguales pero diferentes: diversidad sexual en contexto. Memorias de la VII Semana Cultural de la Diversidad Sexual*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Loaeza, Soledad (2010), "Modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia, 1944-1968", en *Nueva historia general de México*, México, El Colegio de México, pp. 653-697.

McAdam, Doug, John D. McCarthy y Mayer Zald (1999), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*, España, Istmo.

_____ (1999), "Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales", en Doug McAdam, J. McCarthy y M. Zald, *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*, España, Istmo, pp. 21-46.

Melucci, Alberto (1991), "La acción colectiva como construcción social", *Estudios Sociológicos*, vol. IX, núm. 26, pp. 357-364.

Meyerowitz, Joanne (2002), *How Sex Changed. A History of Transsexuality in the United States*, Massachusetts, Harvard University Press.

Mogrovejo, Norma (2000), "Aprendiendo a mirarse en el espejo: construyendo la autonomía", en Norma Mogrovejo,

Un amor que se atrevió a decir su nombre. La lucha de las lesbianas y su relación con los movimientos homosexual y feminista en América Latina, México, Plaza y Valdés, pp. 161-177.

Monsiváis, Carlos (2010), "Envío a Nancy Cárdenas, activista ejemplar", en Carlos Monsiváis, *Que se abra esa puerta. Crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual,* México, Paidós, pp. 199-207.

_____ (2010), *Que se abra esa puerta. Crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual*, México, Paidós.

Mouffe, Chantal (1999) [1993], *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*, Barcelona, Paidós.

Plummer, Ken (2006), "Rights Work: Constructing Lesbian, Gay and Sexual Rights in Late Modern Times", en Lydia Morris (ed.), *Rights. Sociological Perspectives*, Nueva York, Routledge, pp. 152-167.

_____ (2000), "Mapping the Sociological Gay: Past, Presents and Futures of a Sociology of Same Sex Relations", en Theo Sandford, Judith Schuyf, Jan Willem Duyvendak y Jeffrey Weeks (eds.), *Lesbian and Gay Studies. An Introductory, Interdisciplinary Approach*, Londres, Sage, pp. 46-60.

Prieur, Annick (2008), *La casa de la Mema. Travestis, locas y machos*, México, Programa Universitario de Estudios de Género.

Richardson, Diane (2000), "Claiming Citizenship? Sexuality, Citizenship and Lesbian / Feminist Theory", *Sexualities*, vol. III, núm. 2, pp. 255-272.

Rodríguez Kuri, Ariel y Renato González Mello (2010), "El fracaso del éxito, 1970-1985", en *Nueva historia general de México*, México, El Colegio de México, pp. 699-745.

Roger, Jo (2004), "Organizacional 'Emotion Work' through consciousness-raising: an analysis of a feminist or-

ganization", *Qualitative Sociology*, vol. XXVII, núm. 2, pp. 205-222.

Rubin, Gayle (1989), "Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad", en Carole Vance (comp.), *Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina*, Madrid, Revolución, pp. 113-190.

_____ (1986), "El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo", *Nueva Antropología*, vol. VIII, núm. 30, pp. 95-145.

Salinas, Héctor (2010), *Políticas de disidencia sexual en América Latina. Sujetos sociales, gobierno y mercado en México, Bogotá y Buenos Aires*, México, Ediciones y Gráficos Eon.

_____ (2009), "Liderazgo carismático y sociedades de convivencia en la Ciudad de México", en Vargas Paredes Saúl (coord.), *Liderazgo, políticas públicas y cambio organizacional. Lecciones desde Iberoamérica*, México, Porrúa, pp. 225-264.

_____ (2008), *Políticas de disidencia sexual en México*, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Seidman, Steven (2002), *Beyond the closet. The transformation of gay and lesbian gay*, Londres, Routledge.

Snow, David, Robert Benford y Scott Hunt (2006), "Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la construcción social de los movimientos", en Aquiles Chihu Amparán (coord.), *El "análisis de los marcos" en la sociología de los movimientos sociales*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Porrúa, pp. 155-188.

Snow, David, Robert Benford, Steven Worden y Burke Rochford (2006), "Procesos de alineamiento de marcos, micro-movilización y participación en movimientos", en Chihu Amparán, Aquiles (coord.), *El "análisis de los marcos" en la sociología de los movimientos sociales*, México,

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Porrúa, pp. 33-82.
Stepan, Nancy (1991), *The Hour of Eugenics: Race, Gender and Nation in Latin America*, Nueva York, Cornell University Press.
Tarrow, Sidney (2001), *El poder en movimiento,* España, Alianza.
Tilly, Charles, Doug McAdam y Sidney Tarrow (2005), *Dinámica de la contienda política*, Barcelona, Hacer.
Touraine, Alain (1993), *Crítica de la modernidad*, España, Temas de hoy.
Weeks, Jeffrey (2000), "The Invention of Sexuality", en K. Plummer (ed.), *Sexualities: critical concepts in sociology*, Londres, Routledge, pp. 7-20, vol. 2.
_____ (1998), "The Sexual Citizen", *Theory, Culture and Society*, vol. XV, núm. 3-4, pp. 35-52.
_____ (1981), *Sex, Politics and Society: the regulation of sexuality since 1800*, Londres, Longman.

Segunda parte

LA INTERMEDIACIÓN ENTRE REPRESENTANTES POLÍTICOS Y ACTORES POPULARES: DISPOSITIVOS Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN

IV. REPERTORIOS DE ACCIÓN COLECTIVA Y BALANZAS DE PODER: EL CASO DE MICHOACÁN (1920-1940)

Enrique Guerra Manzo*

Charles Tilly (2010) ha enfatizado que detrás de los movimientos sociales y de las formas de acción colectiva suelen estar siempre los intermediarios. Aspecto abiertamente reconocido para el pasado, pero que a fines del siglo XX tiende a ser dejado de lado por la literatura. Lo que no hace sino oscurecer el tratamiento de los movimientos sociales.

En las investigaciones que he realizado sobre Michoacán me propuse el estudio en esa entidad de los nexos entre las formas de acción colectiva que aparecen con el estallido de la Revolución mexicana de 1910 y su entrelazamiento con la formación del Estado. Partí del supuesto de que esa relación no era directa sino indirecta: la mayor parte de las formas de acción colectiva tienden a articularse en torno a intermediarios regionales que median entre sus demandas y el Estado. A su vez, este último necesitaba de los intermediarios para garantizar el orden público en las regiones y hacer cumplir sus políticas públicas (especialmente en materia agraria, educativa y anticlerical). Es en ese marco que me pregunto por la naturaleza de la acción colectiva,

* Doctor en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco.

sus juegos de poder, conflicto y cooperación internos, como por la manera en que se entrelaza con los sistemas de acción concretos en que se halla inserta: el político, educativo, agrario o religioso.

En principio, la sociología constructivista de Michel Crozier y Erhard Friedberg fue el soporte teórico-metodológico para explicar la naturaleza de la acción colectiva y sus nexos con los intermediarios (a los que ellos llaman "segmentos de medio" o "relevos").[1] El objetivo principal de este trabajo es dar cuenta de los alcances y limitaciones a que me llevó en el proceso de investigación el planteamiento de Crozier y Friedberg, así como de la manera en que intenté superar estas últimas apoyándome en otros autores. Aunque el enfoque de Crozier y Friedberg es heurístico[2] tiene dos desventajas. La primera es su naturaleza dicotómica, pues se mueve en la lógica del actor frente a los sistemas. Para hacer frente a esta desventaja traté de complementar el enfoque de ambos con algunos aportes de la sociología figuracionista cultivada por Norbert Elias, esforzada en proponer un pensamiento no dicotómico. La segunda desventaja es que Crozier y Friedberg (e incluso Elias) no explican cómo la acción colectiva en ciertos momentos se transforma en movimiento social. Para ello tuve que valerme de otros autores. Charles Tilly permite explicar el modo en que los movimientos sociales siguen ciertos ciclos y los momentos en que se activan o desactivan, estrechamente conectados a la estructura de las oportunidades políticas. Theda

[1] De hecho Melucci (2002) construye su teoría de la acción colectiva y los movimientos sociales sobre los cimientos colocados por Crozier y Friedberg (1990).

[2] Una de las obras paradigmáticas del porfiriato y de la Revolución mexicana es la de François-Xavier Guerra (1991), quien se apoya ampliamente en el enfoque de Crozier y Friedberg. Las virtudes del análisis de Guerra propiciaron mi acercamiento a la sociología constructivista para explicar el caso de Michoacán.

Skocpol ofrece elementos para comprender el modo en que se suscitan las rebeliones y movimientos campesinos, actores a los que el presente ensayo presta especial atención. Por su parte, Barrington Moore detalla el papel de los agravios (el sentimiento de injusticia) en la aparición de la acción colectiva y la rebelión. A pesar de que existen diferencias entre todos estos estudiosos, considero que varias de sus aportaciones pueden ser articuladas para ofrecer una mejor explicación de los nexos entre acción colectiva y movimientos sociales.

De manera breve, se hace mención a los planteamientos sobre la acción colectiva de Anthony Giddens y de Alberto Melucci, respectivamente, pero cabe aclarar que ello es con finalidades diferentes. Con el primero sólo se pretende ilustrar cuáles son los niveles involucrados en toda acción colectiva (una intención comunicativa, una relación moral y una relación de poder) y precisar a cuál de ellos se le presta más atención en el presente ensayo (a la acción colectiva como una relación de poder). Pero no se utiliza el enfoque de Giddens, por el contrario, se hacen ver sus limitaciones. En la medida en que Alberto Melucci es el principal autor que ha intentado movilizar la sociología constructivista sobre la acción colectiva de Crozier y Friedberg para explicar los movimientos sociales, su mención en las conclusiones me permite cerrar con algunas reflexiones sobre las aporías a las que un enfoque dicotómico se enfrenta y la necesidad de insertar a las teorías intermedias de la acción colectiva en teorías más generales y abiertas al dialogo teoría-empiria.

En el primer apartado se refiere la problemática empírica, la estrategia metodológica y las principales ideas de Crozier y Friedberg en las que me apoyé. En el segundo apartado se abordan los desafíos teóricos a los que me enfrenté al seguir el enfoque de dichos autores en mi investigación y mis esfuerzos por tratar de pensar la acción colectiva y los movimientos sociales más allá de las dicotomías.

LOS DESAFÍOS EMPÍRICOS DE LA INVESTIGACIÓN: LA DIMENSIÓN HISTÓRICA DE LA ACCIÓN COLECTIVA Y EL PROBLEMA DE LOS NIVELES DE ANÁLISIS LOCAL, REGIONAL, NACIONAL

La complejidad de la Revolución de 1910 y la formación del Estado inevitablemente conduce al problema de la articulación de los niveles locales, regionales y nacionales (e incluso internacionales). Tan es así que las dos escuelas dominantes de la historiografía política sobre la primera mitad del siglo XX, la estatalista y la revisionista, se dividen en torno a cuál de esos niveles debe tener prioridad en el análisis.[3]

La manera en que me sitúo en esa problemática es tratando de articular dos procesos que si bien se pueden distinguir analíticamente, en la práctica confluyen: el que viene desde abajo (subrayado por el revisionismo) y el que se da desde arriba por parte del Estado en la búsqueda de la centralización del poder (documentado por la escuela estatalista). Así se puede explorar el modo en que interactúan sociedad y Estado en una época en que ambos se transforman. Para ello el seguimiento de la trayectoria y funciones de los intermediarios es de gran utilidad, pues son figuras clave en los nexos entre sociedad civil y Estado. Además, permiten articular los tres niveles en los que opera la acción colectiva, en tanto son sus correas de transmisión: local, regional y nacional. Profundizando en diversas zonas de Michoacán es como intento explorar el modo en que se articulan los niveles mencionados.

Mi argumento central es que detrás de cada uno de esos intermediarios están diversas formas de acción colectiva que es necesario investigar en sistemas de acción concretos (la expresión es de Crozier y Friedberg) para dar cuenta del

[3] Ambas escuelas tienen diferencias internas, en aras de la brevedad aquí las omito. Pero puede verse un balance de las mismas en Guerra Manzo (2006) y en Florescano (1999).

modo en que se expresa la sociedad civil e incide en la estructuración de la autoridad estatal. El periodo de 1920-1940 comprende la fase de reconstrucción del Estado nacional y del sistema político en su forma moderna, de tal suerte que es la fase ideal para observar el comportamiento de los intermediarios y sus nexos con las formas de acción colectiva en la transición de un sistema político a otro.

Es el plano de la articulación de los niveles y el de los nexos entre procesos y estructuras, los ejes principales en los que se sitúa mi reflexión sobre la problemática de la acción colectiva. Mi investigación intentó dar cuenta de las transformaciones del campo político, agrario, educativo y religioso, y el modo en que se suscitan diversas formas de acción colectiva en cada uno de ellos, luchas siempre entrelazadas a través de una pléyade de intermediarios y sus respectivas redes. En el presente ensayo me centro en el caso del campo agrario y de las formas de acción colectiva que se hallan relacionadas con dos figuras centrales de la mediación durante 1920-1940: los intermediarios formales (o líderes agraristas) y los caciques.

El seguimiento de la trayectoria de los intermediarios permite dar cuenta del modo en que irrumpe en la palestra pública el campesinado michoacano y de los tipos de acción colectiva que despliega: manifestaciones públicas, sindicatos, ligas agrarias, movimientos sociales. En algunas regiones de la entidad se construyen organizaciones agrarias eficaces para resolver pacíficamente las diferencias entre sus miembros y evitar el faccionalismo interno, fortaleciendo así su capacidad para la acción colectiva extralocal. Sus intermediarios aquí contaban con una mayor capacidad de liderazgo para mejorar sus negociaciones con el Estado y para vencer a sus enemigos locales o extralocales. En estos casos arraigaron formas de acción colectiva que evolucionaron en un proceso de fusión creciente hacia la creación de grandes organizaciones de masas y movilizaciones sociales agraristas,

muchas de las cuales terminan encapsuladas en el proceso de corporativización de la década de 1930 (por ejemplo, el caso del Bajío zamorano y el de la región de Taretan). En cambio, en otras regiones en que la capacidad para la acción colectiva era menor, solía suscitarse con mayor frecuencia el uso de la violencia como medio para dirimir diferencias y alcanzar el poder local, en esos casos era más viable la aparición de intensos faccionalismos y de intermediarios que asumían la forma de caciques (figuras autocráticas que se apropian de la representación de la comunidad y que inhiben acciones colectivas autónomas), en estos casos los procesos de fisión y fragmentación de las organizaciones agrarias fueron más frecuentes (eso es lo que se registró en la región de Naranja y en la Cañada de los Once Pueblos). En lo que concierne al campo agrario estas son las principales figuras de la mediación de las que doy cuenta, pero en lo que respecta al campo religioso se prestó mayor atención a otro tipo de intermediarios: catequistas, abogados, pequeños propietarios, curas, ex guerrilleros cristeros y líderes de organizaciones pararreligiosas (al respecto son muy ilustrativos los casos de Ciudad Hidalgo, Zitácuaro y Coalcomán).[4]

Empero, independientemente de la forma de representación local, los intermediarios son las cabezas visibles de diversas formas de acción colectiva mediante las cuales la sociedad civil se moviliza para canalizar sus demandas al Estado o bien para protegerse de él: por ejemplo, para evitar la influencia de un maestro rural anticlerical enviado por la Secretaría de Educación Pública, o de un delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria que pretende "corregir errores" en la manera en que se hicieron dotaciones agrarias. Pero al mismo tiempo, el Estado encuentra en los intermediarios a las figuras mediante las cuales responsabilizar a una

[4] Para esta última clase de intermediarios véase Boyer (2003), Butler (2004) y Purnell (1999).

de las facciones locales en la procuración del orden público y el cumplimiento de la ley.

Crozier y Friedberg (1990) permiten explicar el modo en que los participantes en una acción colectiva utilizan a sus intermediarios para negociar en la resolución de sus problemas ante las instancias pertinentes. También muestran que los intermediarios tienen intereses propios que no siempre coinciden con los de las bases que representan, pues son figuras bifacéticas: de un lado representan los intereses de la organización, pero de otro los del medio (o sistema de acción concreto) ante la organización. Además, no pueden cumplir sus funciones de mediación si no tienen ciertos márgenes de libertad para negociar y tienden a identificarse con la parte más poderosa. Así se da una lógica de monopolio al interior de toda organización (formalizada o no) o forma de acción colectiva: entre las bases por imponer sus intereses a su intermediario colonizándolo completamente, y el de este último por "colonizar" a sus bases, imponiendo sus intereses particulares y los del segmento del medio al que representa. No obstante, sólo el análisis empírico en cada caso es el que muestra cuál es la lógica imperante, pues nada de ello puede deducirse *a priori*. Esta mirada heurística para explicar la acción colectiva y sus nexos con los intermediarios es la principal razón por la que me apoyé inicialmente en este enfoque.

De esta manera, si bien el Estado aparece como un factor (un recurso) que influye en el juego faccional local –su apoyo a alguno de los grupos que se disputan el poder suele ser decisivo–, también es cierto que la autoridad estatal se construye en un juego que se alimenta de diversas formas de poder y resistencia regionalizadas, que dan lugar a diferentes tipos de intermediarios (quienes cuentan con diferentes recursos sociales, culturales y políticos), que representan diferentes formas de acción colectiva.

En relación con la estrategia metodológica traté de atender los siguientes aspectos: i) Priorizar la dimensión institu-

cional de la acción colectiva. Formas en que ésta evoluciona hacia la construcción de movimientos sociales agraristas y su ulterior cristalización en organizaciones agrarias, en su mayoría corporativizadas. Por tanto se pone énfasis en el modo en que las ubicuas relaciones de poder tienden a evolucionar hacia formas de dominación clientelares-corporativas. Aunque el plano individual y el cultural están presentes, no aparecen desarrollados con la misma profundidad. ii) En la medida en que toda acción colectiva tiene por propósito principal resolver problemas específicos, se presta atención a las formas en que se dan regateos entre intereses individuales y colectivos. iii) Dirección del intercambio de recursos: impera la horizontalidad o la verticalidad. iv) Tipo de recursos que se intercambian: tierra, agua, crédito, escuelas, cargos. v) Modalidades de la resolución de problemas: impulsos desde arriba del aparato estatal y/o impulsos desde abajo, desde la sociedad civil.

Para dar cuenta de lo anterior se emplea un doble razonamiento: heurístico (modo en que los actores se perciben a sí mismos y a su entorno) y sistémico (dilucidación de la estructuración del campo en que se encuentran desarrollando sus acciones colectivas). Aquí, como se verá, intento combinar los planteamientos de Crozier y Friedberg con los de Norbert Elias.

En ese sentido, el lenguaje empleado, más que hablar de grandes categorías sociológicas abstractas (como las de clase, campesinado, clases medias), o morales (pueblo, masas o los de abajo), utiliza términos que aluden a actores concretos: la villa de Taretan, el pueblo de San José de Gracia... Al aludir a esos actores reales se enfatiza el tipo de vínculos que los mantiene unidos: sistemas de autoridad, valores, comportamientos y memorias comunes, pues esto es central para dar cuenta de sus repertorios para la acción colectiva. No obstante, se tiene en cuenta que actores con situaciones comunes, en momentos de crisis reaccionan de modo dife-

rente, con posiciones y alianzas distintas. Ello es así porque éstos nunca pierden su libertad de elección y sus márgenes para la acción. Aspectos que, como veremos, no se cansan de enfatizar Crozier, Friedberg y Elias.

De igual modo, todos los actores se hallan insertos en redes más vastas que trascienden sus lugares concretos de origen. De ahí que los movimientos sociales de cierta amplitud son siempre actores que se mueven en redes complejas de actores primarios con procedencias geográficas y sociales múltiples. Por ello, en el caso de la Revolución mexicana ninguna facción revolucionaria es homogénea. Los movimientos sociales de la época expresan una variedad de improntas regionales y una tendencia a la homogeneización en el plano nacional, con las que buscan expresar una identidad.

Pero antes de cerrar este apartado, conviene ofrecer mayores elementos que permitan ubicar y apreciar la riqueza de la obra de Crozier y Friedberg. Desde la década de 1960 Crozier –a quien más tarde se le unió Friedberg– se propuso elaborar un modo de razonamiento diferente al que predominaba para reflexionar sobre los problemas de la acción colectiva frente a las condiciones que la hacen posible y las restricciones que encuentra. Su tema central es una reflexión sobre las relaciones entre el actor y el sistema. Pronto se concentró en el campo organizacional e intentó explorar los márgenes de libertad y las restricciones que encuentran los actores individuales al desarrollar acciones colectivas y las propias organizaciones. El razonamiento que proponía Crozier se estructura en torno de estos dos polos opuestos. "El actor no existe fuera del sistema que define la libertad [...] y la racionalidad que puede emplear en su acción. Pero el sistema no existe porque hay un actor; únicamente él puede generarlo y darle vida, y sólo él puede cambiarlo". De la yuxtaposición de estas dos lógicas nacen las restricciones de la acción organizada o colectiva. El desarrollo de estos argumentos –que se basaban en una larga serie de estudios

empíricos en el campo de las organizaciones– fue expuesto por Crozier y Friedberg en su obra ya clásica *El actor y el sistema*, a la que aquí se hace amplia referencia.[5]

Para ambos, el estudio de las organizaciones formales permite suministrar un marco de análisis para comprender la acción, entendida como la estructuración social de los campos de acción, es decir, como sistema de acción concreto. En otras palabras, las organizaciones formales no son sino el aspecto más visible, intencional y elaborado de los sistemas de acción concretos, dentro de las cuales el problema es siempre el mismo: el de la cooperación y el de la interdependencia. Los sistemas son constructos no formalizados, cuyas reglas son absolutamente empíricas –que hay que descubrir mediante el análisis– y cuyos actores, aunque estén intuitivamente conscientes de los resultados, ignoran los mecanismos por completo y, por tanto, son incapaces de controlarlos totalmente.

Una situación organizacional nunca limita totalmente al actor. Éste siempre conserva un margen de libertad, cada actor dispone de poder sobre los otros actores, mismo que será más grande cuanto más pertinente sea para éstos la fuente de incertidumbre que aquél controla, es decir, que los afectará de una manera más sustancial en sus propias capacidades para jugar y perseguir estrategias. Su comportamiento se puede y se debe analizar como la expresión de una estrategia racional que tiende a utilizar su poder lo mejor posible para aumentar las "ganancias" de su participación en la organización (Crozier y Friedberg, 1990: 76).

Proponen considerar el funcionamiento de la organización como el resultado de una serie de juegos en los cuales participan los diferentes actores organizativos definiendo las posibilidades de ganancias y pérdidas de unos y otros, que delimitan un abanico de estrategias racionales que podrán

[5] Crozier y Friedberg (1990); véase también Grémion (1992).

adoptar si quieren que su compromiso con la organización sirva para sus expectativas personales o, por lo menos, para que no les contraríe. Una vez aceptada la organización como conjunto de juegos articulados entre sí, el fenómeno sociológico de la integración de la conducta de los actores se analiza como la consecuencia indirecta de la restricción fundamental que obliga a cada participante a no perder de vista las exigencias y las reglas –formales e informales– de los juegos que prevalecen en la organización y contribuir así a cumplir con los objetivos de ésta.[6] Es justamente el diagnóstico de los juegos concretos en que están implicados los intermediarios a los que aquí prestamos atención lo que nos permite elaborar tipologías que los distinguen (el cacique, el intermediario formal), precisar las formas diferenciadas en que se relacionan con sus bases de apoyo (uso de la coerción, del consenso, el intercambio clientelar), así como observar el funcionamiento real de las organizaciones campesinas (articulación entre reglas formales e informales, relación líderes-bases, nexos extralocales) y los campos de acción en que participan.

En efecto, a pesar de que en el estudio de las organizaciones tradicionalmente se distingue entre una estructura formal y otra informal, Crozier y Friedberg han demostrado que tal distinción es más artificial que real. Para ellos, no hay ninguna diferencia entre la naturaleza de una organización formalizada y la de otras formas más difusas de acción colectiva, cuando mucho hay una diferencia de grado. Es decir, el funcionamiento de las organizaciones formalizadas sólo obedece parcialmente a sus características formales, mientras que otras formas de acción colectiva o campos de acción más imprecisos están más estructurados de lo que a primera vista parece. En realidad, en todo campo de acción hay una mezcla de dispositivos formales y de estructuras que

[6] Crozier y Friedberg (1990: 95).

aparecen súbitamente, de tipo espontáneo, no intencionales, construidas o deseadas, es decir, no formalizadas.

Para Crozier y Friedberg las organizaciones formales no son sino el aspecto más superficial, intencional y elaborado de lo que llaman un sistema de acción concreto. De esta manera, todo campo de acción –por ejemplo, un sistema político o un campo de poder local– puede analizarse como un conjunto interdependiente de actores individuales y/o colectivos, institucionales o no institucionales que compiten unos con otros tanto por la definición de los problemas a cuya solución deben contribuir como por la ejecución de las soluciones que se darán a esos problemas.[7]

De este modo, se considera a la acción social como estructuración y reestructuración de los espacios de acción por medio de la creación y estabilización de sistemas de alianzas y de redes de actores que compiten en torno a los problemas y sus soluciones. Es tarea del investigador tratar de comprender cómo se constituye y organiza socialmente un espacio de competencia (de juegos reglamentados) entre actores mutuamente dependientes en torno a un problema que no pueden resolver por sí solos. Ello me permite dar cuenta de la necesidad de alianzas que tienen los intermediarios locales, las organizaciones campesinas y los caudillos que pulularon tras el estallido de la Revolución mexicana y el proceso de reconstrucción del nuevo Estado, mismas que darán lugar a diversos tipos de intercambios políticos y configuraciones de redes.

Los actores o redes de actores sólo son comprensibles en relación con los demás actores que los circundan. Sus actitudes y acciones dependen del campo estratégico en el que se mueven, marco geográfico, relaciones de oposición o afinidad con otros actores, posibilidad de obtener ciertos recursos o

[7] Friedberg (1993: 301).

lograr alianzas con grupos más vastos.[8] En otras palabras como señala Elias, los actores se configuran en campos de fuerzas específicos (o figuraciones), campos que aparecen como juegos de cooperación y conflicto entre unidades diversas que compiten por maximizar sus oportunidades de valor. En este contexto, un concepto heurístico desarrollado por la sociología eliasiana es el de "cambiantes balanzas de poder",[9] aspecto central en el presente ensayo.

No obstante, el enfoque de Crozier y Friedberg incita a analizar actores y sistemas de acción concretos, más que derivarlos de tipologías apriorísticas, lo cual constituye un gran avance. Empero, deja sin apoyo al investigador para dar cuenta de la dirección que asumen los procesos históricos y las estructuras que emergen de ellos, problema que busqué resolver con la incorporación de otros autores.

LOS DESAFÍOS TEÓRICOS: ACCIÓN COLECTIVA Y BALANZAS DE PODER MÁS ALLÁ DE LAS DICOTOMÍAS

Giddens nos ha recordado que el núcleo de la distinción de Max Weber entre "acción" y "acción social" radica en distinguir la acción de actos realizados con algún tipo de intención comunicativa, condición necesaria para la interacción. Así,

[8] Véase Tilly y Wood (2010).

[9] Elias define al poder como aspecto "de una relación, de cada una de las relaciones humanas. El poder tiene algo que ver con el hecho de que existen grupos o individuos que pueden retener o monopolizar aquello que otros necesitan, por ejemplo, comida amor, sentido o protección frente a ataques (es decir, seguridad), así como conocimiento u otras cosas. Y cuanto mayores son las necesidades de estos últimos, mayor es la proporción de poder que detentan los primeros... [No obstante, aquellos] poseen generalmente algo de lo que carecen, y que a su vez necesitan, los que monopolizan lo que otros necesitan. Pero si se exceptúan los casos marginales, siempre se producen equilibrios de poder, proporciones de poder similares, aunque sean poderes diferentes (Elias, 1994: 53-54).

la "mutualidad de la orientación se puede considerar una característica que define a la interacción", mientras que todo lo demás serían casos límite de la acción (por ejemplo, la veneración que siente cierta persona por una estrella de cine que no sabe de su existencia). A partir de esta premisa, Giddens propone las siguientes tesis: 1) Una intención comunicativa (la producción de sentido) es sólo un elemento de la interacción (que remite al plano de las estructuras de significación); pero no menos importante es que toda interacción constituye una relación moral (que se entrelaza con las estructuras de legitimación) y de poder (que remite a las estructuras de dominación). 2) Las colectividades (la acción colectiva) consisten en interacciones entre sus miembros, no así las estructuras, aunque toda interacción se puede analizar estructuralmente.

En otras palabras, las prácticas "son los quehaceres situados de un sujeto", mientras que la estructura, a diferencia del sujeto, "no tiene localización socio-temporal, se caracteriza por la 'ausencia de sujeto'" (Giddens, 2001: 145-146). Ejemplo de lo primero es el habla (acción e interacción) que presupone al sujeto, mientras que de lo segundo sería la lengua (una estructura, que se caracteriza por la ausencia de sujeto). Nuestro ensayo se concentra en la acción colectiva como una interacción de poder (aunque, como señala Giddens, toda interacción siempre presupone el plano de la significación y el de la moralidad), por tanto, se presta mayor atención al uso de los recursos y a las estructuras de dominación a las que remite. Empero, no se comparte el dualismo en el que se mueve Giddens entre interacción de un lado (el mundo de los sujetos) y estructuras (el mundo sin sujetos), por otro (o bien el de actor de un lado y sistema de otro). En este sentido, al seguir a Crozier y Friedberg, me centré en el nivel institucional, que concierne al problema del poder y la dominación. Los otros planos referidos por Giddens no están ausentes, pero aparecen en menor grado.

Acudiendo a Elias, Foucault, Moore, Skocpol y Tilly, traté de suplir esa ausencia. Sin embargo, antes de ahondar en estos argumentos teóricos, conviene hacer un preámbulo sobre nuestro plano empírico.

Acción colectiva y balanzas de poder regionales

Entre 1920 y 1940 la mayoría de las comunidades campesinas estaban apenas comunicadas por brechas o caminos de mula, muchas sin escuela y a veces hasta sin templo. De este modo, los movimientos sociales regionales que aparecen desde la década de 1920 se convierten en una mediación indispensable para que las voces fragmentadas de los pueblos campesinos puedan ser oídas por quienes tomaban las decisiones públicas.

Para entender la forma en que cristalizará el movimiento campesino en Michoacán (o bien en que será bloqueado) debe atenderse a las balanzas de poderes que imperan en cada región, y no sólo entre las facciones locales en pugna, sino también al interior de las organizaciones agrarias. En ello radica la clave para comprender la naturaleza de los movimientos populares y de los líderes regionales que terminan articulándose en la coalición cardenista que irá cristalizando en los años veinte y treinta.[10] Dada la falta de espacio, aquí sólo me detendré brevemente en algunos casos que ayuden a ilustrar nuestra problemática.[11]

En una misiva del 24 de agosto de 1938 enviada desde la ciudad de San Luis Potosí, Jesús Ruiz Béjar, que junto con su hermano Emigdio fungía como uno de los principales

[10] Lázaro Cárdenas tuvo una creciente importancia en Michoacán a partir de la década de 1920. Primero como Comandante de Operaciones Militares (1926-1928), luego como gobernador de la entidad (1928-1932) y presidente del país (1934-1940).

[11] Para un tratamiento más amplio de los casos aquí tratados véase Boyer (2003), Guerra Manzo (2002), Salmerón (1989) y Becker (1995).

líderes del agrarismo en la región de Taretan, Michoacán, exponía a Enrique Melgoza, a la sazón regidor agrarista, cómo veía al conjunto de grupos organizados en la federación agraria regional (comunidades, cooperativas ejidales, ligas femeniles, grupos juveniles y sindicatos). Primero, le señalaba que festejaba el triunfo que recientemente sus compañeros habían obtenido sobre la facción católica al impedir las manifestaciones religiosas y lograr la expulsión del cura Telésforo Gómez Nava. Y agregaba:

> [...] siento también satisfacción porque esos mismos compañeros saben defender sus conquistas que hasta sangre han costado, y de aquí se desprende que en la Lucha Social nadie hace falta porque recordarás que cuando me vine a ésta [ciudad] decían los compañeros que sín mí [sic] acabaría todo y que el enemigo los desplazaría y dominaría, todo esto por un error y por considerar que en la marcha de la Revolución los individuos son indispensables, pero los resultados pronto se vieron y quedarás convencido que las Organizaciones saben defender sus derechos cuando se ven amenazados.[12]

La carta finalizaba recordándole a Melgoza la necesidad de que "con frecuencia los Munícipes [regidores] celebren sus acuerdos a fin de tener un control absoluto en la cuestión oficial y que el Presidente [Municipal] como Autoridad sirva para hacer cumplir las disposiciones de los primeros únicamente y no como Autónomo".[13] Como puede observarse, esta misiva revela una plena conciencia por parte de los líderes del valor del nuevo recurso que la Revolución había expandido por el campo: las organizaciones agrarias que transcienden a los individuos. Lo cual contrasta, como ha observado Katz (1998, vol. II: 186-187 y 212-213), con las

[12] Archivo particular, Idelfonso Ruiz Béjar (APIRB).

[13] APIRB, Jesús Ruiz Béjar a Enrique Melgoza, 24 de agosto de 1938.

formas decimonónicas de movilización del campesinado que se mostraban ineficaces cuando no contaban con el apoyo de caciques y caudillos, o bien al no disponer del control de las autoridades locales.[14]

Empero, no en todas las regiones michoacanas las acciones colectivas del campesinado agrarista pudieron evolucionar en la dirección de la de Taretan: construcción de una organización fuerte que sirviera como un foro para dirimir diferencias entre sus miembros de manera pacífica, a la vez que pugnaba por la resolución de problemas del campesinado: acceso a la tierra, agua, crédito, escuelas y cargos públicos para parte de sus agremiados.

Por ejemplo, Luis González (1984: 189, 192-193) argumenta que si bien en la tenencia de Ornelas –cuya cabecera era san José de Gracia–, la "revolución agraria" no fue "excesivamente mortífera o ruda", en comparación a otros pueblos vecinos –como el de Mazamitla–, ello no libró al pueblo de una espiral de violencia que se extendió hasta los primeros años de la década de 1940 y que, aunado a "las maniobras sucias que la escoltaron [,] hirieron la moral pública".[15]

[14] Katz ha argumentado que tanto en Chihuahua como en el centro del país cuando las comunidades campesinas, en la segunda mitad del XIX, dejan de contar con sus tradicionales aliados (caciques y caudillos) y pierden el control de las autoridades locales, disminuyen sensiblemente sus rebeliones. No vuelven a tener una participación política activa sino hasta la Revolución de 1910, sobre todo a partir de la década de 1920. Mi opinión es que la construcción de organizaciones formales fue uno de los nuevos recursos que permitió a las comunidades campesinas rearticular sus luchas y reafirmar su participación política. Con el tiempo, las organizaciones formales podían mostrar eficacia para resolver algunos de sus problemas colectivos e individuales, pero también su lado oscuro: transformarse en "jaulas de hierro" capaces de inhibir la protesta social.

[15] El reparto se hizo de la siguiente manera: "de los 590 josefinos mayores de 18 años que carecían de terrenos propios, poco más de 200 recibieron parcela y para el otro 66% ya no hubo predios afectables, según determinaron las autoridades agrarias, aunque entonces los había en poder de pocas personas influyentes, adineradas y bien defendidas por

Entre 1932 y 1936, salvo en una ocasión, la facción agrarista de la tenencia de Ornelas, conformada por una coalición de líderes de cada una de las doce rancherías que se sumaron al agrarismo, se hizo del poder político, ocupando la jefatura de la tenencia. Pero pronto las armas que habían usado contra los propietarios se volvieron contra ellos: los líderes, al igual que los nuevos ejidatarios, se mataban entre sí. "En 1935 y 1936 –afirma González– se registró el mayor índice de homicidios en la jurisdicción de San José: ocho al año [...] Como el grupo de Camilo Chávez se disgustó con Adolfo Ávila, se produjo en plena plaza de San José, durante la noche [...] una balacera en grande". En 1936 fue asesinado en una de esas trifulcas el líder principal del movimiento agrarista, Antonio Ávila (González, 1984: 201).

Cabe preguntarse, ¿por qué en San José no pudo surgir una facción agrarista fuerte? González sugiere que las divisiones entre agraristas se debieron esencialmente a la forma en que se llevó a cabo el reparto –la tierra no era mucha y los deseosos de tenerla sí– y a las *vendettas* familiares. Sin embargo, al comparar el movimiento agrarista en San José con el de otras regiones como Taretan o el Bajío zamorano, destaca la falta de una organización agraria efectiva y líderes fuertes capaces de dirimir las diferencias entre agraristas por la vía no violenta.

El caso de Naranja, en el municipio de Zacapu, es parecido al de San José de Gracia. A finales de 1921 se empezó a formar un frente unido de diferentes comunidades indígenas de Zacapu en torno a Primo Tapia, pero los reveses del gobierno de Francisco J. Múgica (1920-1922) frente a hacendados, clero y gobierno central bloquearon las perspectivas de una reforma agraria inmediata. Entre 1922 y 1925 Tapia no sólo mantendría a sus hombres armados sino que

---

los tinterillos". La mayor parte de las posesiones definitivas se hizo entre 1935 y 1939 (González, 1984: 197-198).

se ocupó también de gestionar sus peticiones ejidales ante las autoridades agrarias locales y federales. Tapia fue asesinado por guardias blancas de la hacienda de Cantabria en 1926. Tras su muerte, Naranja se dividió en dos facciones, y algo similar se suscitaría en los otros dos pueblos indígenas de Zacapu: Tarejero y Tiríndaro. De esa forma, según Friedrich, "el reparto tuvo el efecto de debilitar los cacicazgos agrarios, algo previsto por los administradores del gobierno" (González, 1984: 126 y 161-162).[16]

Después de 1926 se suscitó una fuerte competencia en Naranja entre dos facciones: la de los Caso y la de los Ocampo. Entre 1926 y 1934 dominó la segunda facción y entre 1935 y 1945, la primera, que a largo plazo terminaría por ser la hegemónica, hasta que su principal cacique, Elías Caso ("Caracortada"), fue asesinado en los años sesenta. Friedrich ha pasado revista a la manera en que esta última facción –que reunía a una coalición de varios caciques, que se autonombraban "príncipes"– conquistó y ejerció su poder.

El secreto del éxito de los Caso, a pesar de ser la facción minoritaria de Naranja entre 1926 y 1934, fue haberse apoyado en Lázaro Cárdenas y en sus antiguos enemigos partidarios de los hacendados: los rancheros mestizos y peones acasillados –a quienes los Ocampo nunca dejaron de oponerse–. El hecho de que un pueblo tan pequeño como Naranja haya llegado a tener desde 1926 tanta influencia sobre la política municipal de Zacapu, según Friedrich, obedece a que los líderes agrarios de la facción de los Caso lograron lo siguiente:

[16] Es difícil sostener esta última afirmación de Friedrich. Ya que el faccionalismo fue un fenómeno que se suscitó en la mayor parte de los pueblos que se vieron beneficiados por el reparto agrario debido a luchas internas por el poder político y el control de los ejidos, más que haber sido planeado maquiavélicamente por el gobierno. Al respecto véase Boyer (2003), Guerra Manzo (2002) y Purnell (1999).

> [...] perdurables relaciones y compromisos con políticos cardenistas en todos los niveles [...] tales lazos políticos se articulan en función de la amistad personal, compadrazgos, actividades masónicas, intereses económicos comunes, una vaga ideología [agrarista], y varios factores más; todos los cuales se han conjugado para hacer posibles los de otra manera inexplicables éxitos e intrigas a alto nivel, y la casi total libertad para actuar al margen de la ley que han marcado la carrera de los caciques Caso. El papel político y la influencia de estos hombres también se han debido, sin embargo, a la posición del pueblo en las organizaciones políticas que sirven para unir al campesinado en la región de Zacapu y del estado de Michoacán. La fuerza de estas organizaciones campesinas se ha magnificado en correspondencia al papel fundamental de la reforma agraria en la región (Friedrich, 1991: 197-198).

La anterior cita muestra que hay dos ámbitos fundamentales que explican tanto el poder de los caciques de Naranja como su capacidad de mediación: el de las relaciones informales con los políticos cardenistas en las diferentes esferas del gobierno y el de su control sobre las organizaciones agrarias de la región. Friedrich ha explicado con gran detalle en sus dos obras fundamentales (1984 y 1991) el primer aspecto, pero se ha referido poco al segundo, lo que dificulta la comparación entre el papel mediador del cacique y el del intermediario formal, así como sus respectivas relaciones con las organizaciones agrarias.

No obstante, Friedrich (1965: 201) considera que en Naranja los mecanismos informales determinan el liderazgo y la política local, expresada sólo en parte a través de las instituciones formales del gobierno. Por ejemplo, aduce, en Naranja –como en muchos pueblos– los dos órganos formales de gobierno son el jefe de tenencia (el "brazo civil") y el comisariado ejidal (el "brazo ejidal"). Si bien uno y otro se eligen –el primero cada año, y el segundo cada tres– mediante

procedimientos formales (elecciones y votos, que casi siempre son hechos a mano alzada y en forma unánime), los temas y candidatos son promovidos por el grupo caciquil dominante –y sólo en parte recogen las preocupaciones locales–, los inconformes no asisten a las asambleas o bien se abstienen de votar. Las discusiones se dan en las calles o en las asambleas del pueblo pero los caciques siempre maniobran para que el día de las elecciones ganen sus candidatos.

De igual manera, los caciques naranjeños confían más en el uso de la violencia para someter a los disidentes y a sus enemigos –práctica que ya se observaba en Primo Tapia–, que apoyarse en sus organizaciones agrarias para resolver divergencias internas o movilizarlas en forma pacífica hasta derrotar –no eliminar– a sus enemigos. Por ejemplo, como argumenta Friedrich, sintomáticamente el propio "príncipe" naranjeño con mayor cultura, Camilo, "mantiene su puesto entre los sobrinos empistolados que 'nunca fallan a Caracortada'" –el cacique hegemónico–. "De hecho, sus actividades pasadas y presentes han hecho de Camilo algo insensible respecto al homicidio político: '[...] así es como hacemos la política [declaró Camilo a Friedrich], matamos, y todo eso'" (Friedrich, 1991: 65).

El uso de la violencia por parte de los príncipes de Naranja –al igual que ocurriera en la Cañada de los Once Pueblos, ubicada en Zacapu–, no sólo era para "ahorrar discusiones" –la frase es del cacique de la Cañada, Ernesto Prado–, sino que se convirtió en un recurso "casi normal" en la vida pública de los naranjeños. Si bien surge en el "periodo heroico" de la lucha por la tierra contra los hacendados, una vez alcanzada la reforma agraria en 1926, se vuelve contra los propios agraristas en "una agotadora lucha de facciones", por ello Friedrich ha llamado a esta fase *libido dominandi*.[17]

[17] Friedrich calcula que entre 1929 y 1965 hubo 77 asesinatos, y tan sólo 21 ocurrieron entre 1937 y 1939 por motivos políticos. Durante los años treinta tres líderes agrarios de la facción opuesta a Elías Caso –que

Es cierto que estas dos fases de la violencia que observa Friedrich tienden a manifestarse en diferentes partes de la entidad. Pero uno de los aspectos que distingue a los actores agraristas de una región a otra, es tanto el grado en que ésta ocurre, como la manera en que intentan contrarrestarla. A pesar de que los caciques naranjeños construyeron organizaciones agrarias poderosas a nivel regional, sin embargo, la forma en que eran utilizadas por sus líderes contrasta con las de Taretan y el Bajío zamorano. Los líderes agraristas de estas dos últimas regiones, si bien no rehusaron a la violencia para defenderse de sus enemigos –la organización de "defensas sociales" tenía tal objetivo– generalmente lo hicieron en forma defensiva más que ofensiva. Para derrotar a sus enemigos apostaron sobre todo a la construcción de organizaciones agrarias fuertes, capaces de limar los conflictos internos en forma pacífica: la expulsión de la organización o el desparcelamiento ejidal eran los mecanismos principales para disciplinar o deshacerse de los disidentes, más que su eliminación física. En estas dos regiones una adecuada gestión de las organizaciones agrarias parece ser, en gran medida, la clave para que los Ruiz Béjar en Taretan y Juan Gutiérrez Flores en Zamora figuren en la década de 1930 como los principales intermediarios políticos en sus respectivas zonas de influencia.

Aunque no se dispone de información más precisa sobre la forma en que evolucionaron los diferentes sindicatos

---

se habían postulado como candidatos para ocupar cargos en el gobierno local– fueron asesinados por sus pistoleros –los que se autonombran "luchadores"–. Según el autor, este tipo de homicidios nunca ha sido sádico, salvo en dos ocasiones, y los ciudadanos naranjeños y sus líderes ven el homicidio como un recurso "normal, como una dimensión inevitable de la política, particularmente porque las obligaciones de amistad y parentesco", que son muy fuertes entre los naranjeños, "provocan la *vendetta* asociada a fuertes pasiones y celosos códigos de moralidad". Como puede apreciarse, las relaciones de poder se articulan con los códigos simbólicos de la comunidad (Friedrich, 1965: 205-206).

laborales hasta su cristalización en la Federación Regional Campesina "Lázaro Cárdenas" de Taretan,[18] afortunadamente se cuenta con una nutrida correspondencia entre Jesús Ruiz Béjar y otros dirigentes de la federación agraria taretana durante 1938, año en que estaba en marcha el proceso de corporativización de las organizaciones de masas en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que arroja cierta luz sobre el modo en que funcionaba la vida interna de esa organización agraria.

Jesús Ruiz Béjar, como parte del núcleo dirigente taretano –informal y formal–, se mostraba celoso sobre el cuidado de cada uno de los aspectos de la vida de la federación agraria. Prácticamente no había carta en donde éste no insistiera en que por ningún motivo se dejaran de recaudar las cuotas que debían pagar los miembros de la organización,[19] se cuidaran escrupulosamente sus bienes y se llevara una transparente contabilidad de los mismos.[20]

En la segunda mitad de 1938 la federación taretana vivió un conflicto entre dos de sus principales dirigentes locales, Salvador Valladares, oficial mayor de la federación agraria, y Enrique Melgoza, regidor y luego provisionalmente pre-

[18] A pesar de que en ocasiones me refiero a ella como la federación de Taretan, en estricto sentido, sus bases sociales se extendían más allá de este municipio, al menos al de Nuevo Urecho, al de Nueva Italia y al de Ziracuaretiro. No obstante, era en Taretan donde tenía su mayor fuerza y sus líderes principales eran originarios de este municipio.

[19] Por ejemplo, el 26 de agosto de 1938 Jesús Ruiz Béjar le recomendaba al comisariado ejidal de la ex hacienda La Purísima que "sean muy celosos en la cuestión de sus problemas y que para todo se pongan de acuerdo con la Federación [agrarista] así como que deben de dar puntualmente las cuotas para que ésta también pueda responder a sus necesidades". APIRB.

[20] Como Jesús Ruiz Béjar abrigaba algunas dudas sobre el manejo de los bienes de la federación, el Tesorero trató de tranquilizarlo señalándole, entre otras cosas, que la "loza, los petates y la tina" que se poseían no se habían vendido y que se encontraban en buen estado. APIRB, 26 de agosto de 1938.

sidente municipal, en el cual vale la pena abundar puesto que permite vislumbrar cómo se dirimían los problemas internos de la organización. Así, en respuesta a una carta de Valladares en la que éste informaba de los intentos de algunos miembros de la federación (Enrique Melgoza y el ingeniero Francisco Posadas) de cambiar el sistema de explotación colectiva que predominaba en los ejidos, Ruiz Béjar le contestaba:

> De que Posadas pretende que los trabajos de campo y refacción individual se lleven a cabo en esta forma, y sustituyendo el Sistema Colectivo que hasta la fecha está implantado en las Cooperativas de las Comunidades Agrarias del Mpio., creo prudente hacerte notar que por prestigio de ustedes y de nuestra Federación, deben luchar porque se trabaje sólo en la forma en que lo están haciendo actualmente, pero también deben de aceptar modificaciones para eliminar arregularidades [*sic*] y abusos de algunos compañeros irresponsables que dirigen los trabajos y si es posible de llegar al extremo de eliminar a algún elemento en beneficio de los intereses colectivos, hacerlo, si no obstante Posadas insiste, habrá que combatirlo para hacerlo rectificar.[21]

Era posible, entonces, que al interior de la federación hubiera diferencias sobre la "línea" de la organización, pero ello dentro de ciertos límites. Es decir, mientras las críticas sirvieran para mejorar la "línea", eran bienvenidas, si no había que combatir a los disidentes hasta hacerlos "rectificar" o, de lo contrario, expulsarlos de la organización. Actitud que difiere de otras regiones en donde la violencia entre los propios agraristas fue el método para dirimir diferencias internas. Jesús Ruiz Béjar era también consciente de que el funcionamiento de la organización –al que se refería como "la cuestión social"– sólo podía ser adecuado si ésta era ca-

[21] APIRB, 2 de septiembre de 1938.

paz de resolver los problemas de los diferentes grupos que la integraban:

> Güero –escribía Ruiz Béjar al tesorero de la federación–, haciendo mención a la cuestión social, debo manifestarte que es de imperiosa necesidad que todos los miembros del Comité Federal se trasen [*sic*] un plan de trabajo equitativo y que periódicamente se visiten a las Organizaciones adheridas a la Federación, con el fín [*sic*] de que conozcan de cerca todos sus problemas y puedan eficazmente cooperar a su resolución, los del Mpio. tú e Idelfonso [Ruiz Béjar] los pueden atender por tener la ventaja de que efectúan las rayas, los del Mpio. de Nuevo Urecho y demás, Valladares y el resto de Secretariado pueden hacerlo [...] También tú y mi hermano deben hacer porque los Grupos den puntualmente sus cuotas para el sostenimiento de la Federación [...][22]

Salvador Valladares, sin embargo, remitió un extenso informe a Jesús Ruiz Béjar sobre los problemas que enfrentaba la organización regional. Valladares señalaba que la facción encabezada por Enrique Melgoza obstruía constantemente su autoridad como oficial mayor, bloqueaba el buen funcionamiento de la federación agraria, alentaba enfrentamientos entre sus militantes y la debilitaba ante sus enemigos. Valladares agregaba:

> Al principio de mi gestión [...] tuve que luchar enconadamente para contrarrestar la insidiosa labor desarrollada por nuestros enemigos y aun a quienes hemos llamado amigos (Enrique Melgoza, Ponciano Ramírez, Antonio Villanueva, J. Jesús Sandoval y el Ing. Posadas, además de otros agentes secundarios) [...] labor consistente en que se afirmaba la desaparición de la Federación, tanto por tu salida como por la desaparición

[22] APIRB, 3 de septiembre de 1938.

de la Confederación [CRMDT], afirmando que se debía crear un Organismo nuevo [...] y no como el actual que servía para encumbrar personas en puestos jugosos [...]
No me fue posible que se suspendiera la labor destructora que emprendieron tales elementos, labor que en honor de la verdad, provocó cierto desequilibrio y desconcierto entre los grupos, pues muchos llegaron a mostrarse rebeldes a la Federación [...]
Mientras tanto, la reacción me hacía proposiciones veladas de que traicionara los intereses de los campesinos y de que obrara de Acuerdo con el Teniente Pde. Mpal., Villanueva y Melgoza, para que la tranquilidad del pueblo se restableciera sobre la base de la celebración del culto religioso. No necesito decir cuál fué [sic] mi actitud ante esas proposiciones, pues mis convicciones revolucionarias están por encima de toda sospecha o duda [...]
Últimamente se produjeron algunos choques entre Melgoza y yo, muy a pesar de que el debe tomar en cuenta mi disimulo para desenmascararlo y denunciar sus actividades, además de los latrocinios que ha cometido en la Comunidad. Ya Uds. saben que es una especie de tradición la de que todos los compañeros, cuando manejan los intereses de las comunidades, no resisten la tentación de robar [...]
Muéstrale esta carta a Emigdio [Ruiz Béjar] –el principal lider del agrarismo taretano– y dile que tal era el CACICAZGO que me atribuía y que reitero mi declaración de que es el máximo aquí y allá, a donde fué a sustituir en uno de los aspectos del mando a don Saturnino [Cedillo] [...].[23]

Me extendí en la anterior cita porque en ella se revela la forma en que, una vez alcanzado el reparto agrario (el poder sobre los recursos materiales) y el control del ayuntamiento (el poder político), los grupos dirigentes parecen buscar la satisfacción de sus propios intereses. Valladares lo que pre-

[23] APIRB, 6 de septiembre de 1938.

tendía era ser presidente municipal y al no verse apoyado empezó a descuidar a la federación. Por su parte, Melgoza y sus aliados "no resisten la tentación de robar" al manejar los intereses de las comunidades (Melgoza era regidor y sus aliados ocupaban diferentes puestos directivos en las comunidades ejidales).[24] No obstante, por la forma en que se resolvió el conflicto entre los grupos que representaban Melgoza y Valladares, se puede argumentar que no quisieron llevar sus enfrentamientos a un punto en el que la federación agraria estuviese en peligro de desaparecer. Pues, en parte por las presiones de Jesús Ruiz Béjar como por las de otros miembros del comité central, son obligados a exponer abiertamente sus diferencias en el seno de la organización y a llegar a un acuerdo. El hecho de que se hayan podido hacer ambas cosas indica que la federación regional era un foro que permitía la libre discusión entre los bandos que la integraban y que en aras de no desgarrar a la misma y fortalecer a la "reacción", ponían límites a sus diferencias para alcanzar metas comunes: la existencia y consolidación del poder de la organización. Es decir, en el caso de la federación taretana los líderes no silenciaban a las bases, ni a los disidentes, como ocurre en Naranja. La balanza de poder entre líderes y bases permite que tanto los primeros persigan la satisfacción de sus intereses (puestos públicos) como los segundos tengan acceso a recursos que satisfagan sus oportunidades de valor: tierra, crédito, escuelas, trabajo.

En lo que respecta a la región de Zamora, una de las más importantes instancias en la vida de los ejidos y en la construcción del poder regional del principal líder agrarista, Juan Gutiérrez Flores, era la federación agraria regional, adherida a la Confederación Revolucionaria Michoacana del

[24] Las denuncias de enriquecimiento entre los propios líderes agraristas, también son un indicador de que en la medida en que los intermediarios regionales viven de la política y no para la política, tienden a apropiarse de bienes colectivos. *Cfr.* Weber (1983: 1066-1068).

Trabajo (CRMDT), organización creada en 1929 con apoyo de Lázaro Cárdenas. Ésta se divide en 1936 en dos facciones rivales. Gutiérrez Flores se manifestó en favor del magañismo, encabezado por el gobernador de la entidad Gildardo Magaña (1936-1939).

Una vez que el sindicalismo agrarista logra arrebatar la mayor parte de las tierras a las haciendas del Bajío zamorano, con el reparto de junio de 1936, hay indicios del estallido de frecuentes conflictos al interior de la federación agraria que toman la forma de una embestida de los comisariados ejidales de varias comunidades contra las ligas femeniles y antialcohólicas locales. En este contexto, Gutiérrez Flores sugería a los grupos integrantes de la federación que tenían conflictos entre sí que discutieran sus diferencias para llegar a acuerdos, fortaleciendo de ese modo la unidad de la organización. Pero en otros casos, ahí donde veía disidencia y la sombra de las facciones rivales amenazando su poder, no dudaba en tomar medidas drásticas, mas no violentas: el desparcelamiento, la expulsión inmediata de los ejidos y de la federación.[25]

Asimismo, ante el peligro latente de que sus enemigos, particularmente la facción antimagañista, pudieran penetrar en los ejidos, Gutiérrez Flores trató de persuadir a los comisariados ejidales para que trataran de integrar en los ejidos a los campesinos que aún no habían recibido tierra y que eran cercanos a la línea de la federación regional. En

[25] En algunas ocasiones se aplicaban tales medidas sin mayores argumentos. Por ejemplo, en marzo de 1937 a Víctor Miranda se le expulsó del ejido y se le quitó la parcela que trabajaba. Juan Gutiérrez Flores, al solicitar al departamento agrario que aprobara esta acción, la justificaba señalando que se le expulsaba por "indigno de pertenecer a la Comunidad". Juan Gutiérrez Flores a Delegado del Departamento Agrario, Gustavo Martínez, 4 de marzo de 1937, Archivo particular Juan Gutiérrez Flores (APJGF).

ese sentido, por ejemplo, se dirigió al presidente del comisariado ejidal del poblado de Ario de Rayón:

> [...] me permito manifestar a usted que sería conveniente la aceptación del acomodamiento de estos compañeros [de campesinos sin parcela] como una medida venefica [*sic*] para esa misma comunidad, en virtud de que hay el peligro en que al cambio de Gobierno pueda surgir nuevamente la agitación entre elementos antagónicos de ese poblado que ha venido representado un grupo de Tránsfugas [se refería a los antimagañistas] de la Revolución, que todas sus tendencias han sido destruir las tendencias sociales de esa Comunidad y de la Liga de mujeres revolucionarias [...] después de haber estudiado detenidamente el problema que puede presentarse a esa Comunidad hemos llegado a esta conclusión, en que una vez que se haga la colocación de elementos de Rinconada [los agraristas sin tierra] sin afectar intereses de ejidatarios de ese ejido, se puede considerar a estos compañeros de Rinconada como una Vanguardia de ustedes mismos, y cuando los elementos anti-revolucionarios pretendan hacer sus movimientos como siempre cada vez que hay cambio de gobierno, entonces ya la Comunidad de ustedes se encuentra reforzada por elementos de filiación netamente revolucionaria [...].[26]

Además de las anteriores medidas, hay evidencias de que Juan Gutiérrez Flores procuró que miembros de la federación agraria ocuparan diversos cargos públicos: encargados del orden y jefaturas de tenencia, [27] presidencias municipales, jueces menores, diputaciones.

[26] Carta de Juan Gutiérrez Flores al presidente del comisariado ejidal de Ario de Rayón, 21 de agosto de 1940 (APJGF). Consejos parecidos daba Gutiérrez Flores al comisariado ejidal de la comunidad de Etúcuaro, municipio de Tangancícuaro, 19 de febrero de 1941, APJGF.

[27] Véase, por ejemplo, Juan Gutiérrez Flores a presidente municipal de Tlazazalca, 14 de enero de 1939, APJGF.

Las diferencias entre las anteriores trayectorias del agrarismo michoacano se deben a la forma en que se dirimió la lucha por la tierra en cada región, pero también expresan diferentes balanzas de poder al interior de cada organización entre sus bases y sus respectivos intermediarios. En San José de Gracia y en Naranja los intermediarios se imponen claramente a las bases y son arrastradas a un ciclo de violencia tanto interior como exterior a sus respectivas organizaciones. En cambio, en Taretan y en Zamora, la balanza de poder no es tan desfavorable para las bases. Ello permite no sólo que sus intereses sean más escuchados sino también que haya mayor unidad en sus filas y que la violencia sólo se use ante sus enemigos. En esta última sus líderes son capaces de hacer funcionar a la organización por medio del consenso más que por la coerción, como ocurre en Naranja.

Después de 1910 el campesinado logra incrementar sus posibilidades de participación política al encontrar nuevos aliados en muchos de los líderes locales y caudillos que pusieron en circulación la revolución y la reconstrucción del Estado, pero también en un nuevo recurso, del que rara vez dispusieron en el siglo XIX: la creación de organizaciones agrarias. Su entrada en ellas les permite practicar formas diferentes de participación política –la actividad organizativa en agrupaciones formalmente reglamentadas– y construir redes de intermediación hacia los distintos niveles del poder.[28] Esto es, al mismo tiempo que crean nuevos constructos de acción colectiva aprovechan las oportunidades políticas abiertas por la revolución y el curso que siguió la edificación del nuevo Estado para movilizarse y ampliar sus redes con

[28] Quizá la definición más completa de la participación política sea la que han dado Huntington y Nelson (1973: 2-16): "se refiere a acciones por medio de las cuales los miembros ordinarios de un sistema político buscan o intentan influenciar los resultados (*outcomes*)". En este sentido es un concepto "paraguas" que abarca un gran conjunto de formas de acción, que van desde el ejercicio del voto cívico hasta el empleo de la violencia.

aquellos sectores de las elites políticas locales y extralocales que se mostraban favorables a sus demandas.

Podría objetarse el nivel de la participación campesina en las organizaciones agrarias postulando que éstas fueron creadas desde arriba. Sin embargo, como señala Barrington Moore (1989: 450-452), las elites siempre suelen ofrecer un abanico de opciones políticas a las masas con el fin de atraérselas, pero son ellas las que seleccionan, casi siempre pragmáticamente, cuál recurso tomar, y al hacerlo suyo le imponen su huella (sus códigos simbólicos): los lazos familiares, de vecindad, amistad y compadrazgo, los recursos de que se valían en el siglo XIX para construir su identidad colectiva,[29] orientarse y ejercer su participación política, siguen permeando a las organizaciones agrarias dando por resultado una hibridez de prácticas tradicionales y modernas, mismas que se observan también en la conducta de sus líderes. El hecho de que la participación no sea democrática no es motivo para no reconocerla. Justamente, tal error lleva a Salmerón (1992) y a Zepeda (1986), quienes han hecho el mayor esfuerzo por interpretar a los intermediarios políticos en Michoacán durante el periodo de 1920-1940, a calificar a las organizaciones agrarias cardenistas que integraban la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT) como carentes de participación política activa en la base. Estos autores confunden participación política con democracia. Por muy elevado que sea el grado de control sobre los miembros de una organización nunca pueden estar encadenados a un nivel en que quedaran sin opciones de resistencia y de lucha. Como han demostrado Crozier y Friedberg (1990), Foucault (1988) y Elias (1994), hablar de poder es también hacerlo de márgenes de resistencia para enfrentar la autoridad del que domina. De esta forma, tanto

[29] Wolf (1956) ha sido de los primeros en llamar la atención sobre la importancia de tales recursos.

la vida interna de la federación agraria de Taretan como la de Zamora, estaban lejos de ser reducidas a la pasividad.

El consenso del nuevo Estado se alimenta de lógicas clientelares y corporativas. Ambas formas de representación y de mediación se entrelazan en las instituciones políticas. Uno de los hallazgos más importantes de mi investigación en las regiones michoacanas es que el más apto para moverse en esa doble dinámica no es el cacique sino el intermediario formal, encarnado en figuras como las de los Ruiz Béjar o Juan Gutiérrez Flores. Pese a la abundante bibliografía, especialmente de inspiración antropológica y literaria, que ha enfatizado la figura del cacique en la esfera pública, éste no es el personaje central de la mediación política durante la fase formativa del Estado mexicano (1920-1940) sino el intermediario formal. No reparar en ello implica perder de vista que la transición del antiguo régimen porfirista al régimen posrevolucionario implicó cambios en el ejercicio y en las formas de la mediación política, así como en los constructos de acción colectiva del campesinado. Estos cambios fueron impulsados por las elites políticas que competían por el poder en el plano federal y estatal, y por las facciones que lo hacían en el plano regional.

La acción colectiva más allá de las dicotomías

Elias, a diferencia de Crozier y Friedberg (que se mueven en la díada actor-sistema), rechaza el pensamiento dicotómico y sustancialista que impera en la sociología (y, en general, en las ciencias sociales). En su lugar, propone razonar en términos relacionales, donde lo social y lo individual se aprecien como dos perspectivas de la realidad que no pueden separarse, pues constituyen una dualidad del ser, mas no una dicotomía excluyente. Ello se observa con claridad en la forma en que utiliza los conceptos de figuración y *habitus*.

Además, ve con perspicacia que los conflictos sociales giran en torno a la conservación o ampliación de más oportunidades vitales (o de valor).

En la sociología eliasiana, los procesos civilizatorios y la tendencia al autocontrol de los individuos forman un *habitus social*, que encarna de manera variable en la personalidad de cada ser humano. El *habitus* denota así la incorporación individual de normas transmitidas por las unidades de pertenencia (familia, aldea, tribu, iglesia, nación). En ese sentido, Elias tiene plena conciencia de que en la formación del *habitus* converge tanto un proceso de inculcación (socialización)[30] de las normas de una unidad social como de incorporación (individuación del *habitus*). En la identidad de un individuo hay un repertorio de capas simbólicas, tantas como sean las unidades de pertenencia en las que esté inserto. El *habitus* social se manifiesta en los cánones de conducta y los sentimientos individuales, cuyos modelos se transforman en el transcurso de las generaciones y expresan las disposiciones compartidas por los miembros de una sociedad o una unidad de pertenencia (*Cfr.* Elias, 1991: 182-183; Zabludovsky, 2007: 65-69 y 89-93). Parte de esas disposiciones compartidas que hallamos en los actores que analizamos en las regiones michoacanas fueron las relaciones de parentesco, amistad, compadrazgo, vecindad, clientelismo. Son las relaciones simbólicas (los códigos morales) que se articulan con las relaciones de poder.

Elias (1978: 130-131) define su concepto de figuración social como "el modelo cambiante que constituyen los jugadores como totalidad, esto es, no sólo con su intelecto, sino con toda su persona, con todo su hacer y todas sus omisiones

[30] Los niños, dice Elias (2000: 119), "en el espacio de unos cuantos años deben alcanzar el nivel de umbral de vergüenza o escrúpulos que la humanidad ha alcanzado en varios siglos. Toda la figuración de seres humanos ejerce una presión sobre ellos, formándolos más o menos perfectamente".

en sus relaciones mutuas". Tal figuración "constituye un tejido de tensiones. La interdependencia de los jugadores, que es la premisa para que constituyan entre sí una figuración específica, es no sólo su interdependencia como aliados sino también como adversarios". Esto es, implica cooperación y conflicto. Considera que en "el centro de las cambiantes figuraciones o [...] del proceso de figuración hay un equilibrio fluctuante en la tensión, la oscilación de un balance de poder, que se inclina unas veces más a un lado y otras más a otro". Una de las peculiaridades de todo proceso de figuración social es el de los "equilibrios fluctuantes de poder". En vez de conceptos sustancialistas, invita a construir conceptos en términos relacionales y procesuales, pues el carácter dinámico de lo social nos obliga a ello y en ese sentido pensar lo social en términos de metáforas de juego es muy útil.[31]

Este modo de definir una figuración[32] permite que pueda aplicarse tanto a pequeñas como a grandes agrupaciones sociales: el profesor y sus alumnos en una clase, el médico y sus pacientes en un grupo de terapia, clientes de un café reunidos en una mesa de tertulia, niños en un *kindergarten*. Todos ellos, afirma Elias, constituyen figuraciones, pero también los habitantes de un pueblo, una ciudad o una nación. Aun cuando en estos últimos casos "la figuración no sea directamente perceptible" porque las cadenas de interdependencia que vinculan a las personas son más largas y diferenciadas (Elias, 1978: 131). En este sentido, toda acción colectiva también puede verse como una figuración:

[31] Aunque cabe precisar que el enfoque de Crozier y Friedberg tampoco rehúsa el uso de metáforas de juego para observar lo social.

[32] "Lo que llamamos 'estructura' –afirma Elias (1992: 190)– no es, de hecho, sino el esquema, o figuración, de los individuos interdependientes que forman el grupo o, en un sentido más amplio, la sociedad. Lo que denominamos 'estructuras' cuando vemos a las personas como sociedades son 'figuraciones' cuando las vemos como individuos".

un tejido de interdependencias entre jugadores, un juego de cooperación y conflicto, una balanza de poderes cambiante.

En consecuencia, podemos interpretar a la federación agraria de Taretan, a la de Zamora o al cacicazgo de Naranja, como figuraciones con sus respectivas tensiones, tanto internas (divisiones y pugnas entre grupos, nexos líderes-bases) como en relación con los campos sociales en los que operan (agrario, político, religioso o cultural).

De hecho, en opinión de Elias la sociedad puede ser vista como una gran figuración: es un campo de fuerzas y las clases, grupos e individuos que la constituyen luchan por mejorar sus oportunidades de valor. Dado que en toda sociedad hay una interdependencia valorativa, se afirma en *La societè de cour*, "se reduce la posibilidad de que un individuo crezca sin que tales actitudes valorativas sociales se conviertan en parte de sí mismo".[33] En las regiones michoacanas analizadas, la población tendió a polarizarse hacia los juegos faccionales (figuracionales) que se presentaban a medida que la Revolución de 1910 dislocó el antiguo orden porfirista: bien como agraristas, liberales o católicos, por mencionar a los principales bandos de la década de 1920 y 1930. Era el camino para mejorar o conservar sus oportunidades de valor.

Es así como vinculando los conceptos de *habitus* y *figuración* eliasianos, intento resolver las aporías dicotómicas (actor-sistema) de la acción colectiva de Crozier y Friedberg. El segundo concepto me obligó a reparar en los juegos de poder y resistencia que se vivieron en las regiones michoacanas en términos de balanzas de poderes que asumen direcciones

[33] Que no son otra cosa que luchas por la vida u oportunidades vitales. En Elias (1985: 103-105 y ss), las oportunidades de valor (o vitales) es todo aquello que da sentido a la vida de los individuos que participan en una figuración específica, pueden ser títulos, cargos, estatus, prestigio o bienes. Para el modo en que aplica ese concepto en el caso de los jóvenes alemanes que apoyaron a Hitler en Alemania, véase Elias (1999: 239-240 y 244-245).

distintas, de acuerdo con las oportunidades de valor que son más relevantes para los actores involucrados, así como las redes y capitales de que disponen para inclinar la balanza a su favor. En cambio, el concepto de *habitus* me incitó a pensar a partir de la *experiencia* de los actores, el modo en que tendían a sentirse o no identificados con sus constructos de acción colectiva, la racionalidad de sus jugadas y apuestas.[34] Empero, una de las limitaciones en el estudio del *habitus* es que al no analizarlo en la larga duración es difícil dar cuenta de sus transformaciones. Si bien el periodo elegido (1920-1940) es de intensos cambios estructurales, hasta qué grado lo fue también en el plano de las estructuras sociales de la personalidad. ¿Qué continuidades y discontinuidades se registraron? Responder a ello fue una de las grandes limitaciones que enfrentó mi estudio. No obstante, el *habitus* de una población acostumbrada a vivir en paz en la mayor parte de las tres décadas que duró el porfiriato, no dejó de verse afectado por el ciclo de violencia y desórdenes sociales que trajo consigo el estallido de la Revolución mexicana. Lo cual se expresó en la irrupción de la guerra civil y el bandolerismo en la década de 1910, en la lucha contra guardias blancas de las haciendas o en incesantes *vendettas* entre facciones campesinas locales en los años veinte y treinta.

Por otra parte, en lo que concierne al concepto de figuración, basta decir por el momento que para Elias todo campo de acción está siempre atravesado por procesos, estructuras y unidades sociales (actores) que al competir por maximizar o conservar sus oportunidades de valor, tienden a estructurarlo en balanzas de poder inestables que deben ser documentadas de modo procesual en sus incesantes trasformaciones. Considero que en este aspecto mis investigaciones lograron mayores avances, pues pude documentar el modo en que

[34] Las sugerencias metodológicas eliasianas para abordar la experiencia de los actores aparecen sintetizadas en Elias (1990).

las balanzas de poder regionales tienden a estructurarse en Michoacán. En algunas zonas tendió a imponerse el modelo ilustrado con los casos de Taretan y Zamora (el predominio de intermediarios formales y constructos de acción colectiva en los que había espacio para debatir y resolver de manera pacífica las diferencias internas), en otras el de San José de Gracia o de Naranja (imperio de incesantes ciclos de violencia y de caciques que colonizan a las bases, empleando la coerción "para ahorrar discusiones"). Todos los casos que pude documentar en mis investigaciones giran hacia uno de estos dos modelos.

La teoría eliasiana ofrece un marco para situar a la acción colectiva y a los movimientos sociales que se desprenden de ella, pero en estricto sentido no los teoriza directamente. Para el primer aspecto, los razonamientos de Crozier y Friedberg pueden resultar complementarios, pero no para el segundo, pues ninguno de estos autores construyó teoría intermedia sobre los movimientos sociales. En Crozier y Friedberg aparecen como actores (sistemas de acción concretos) que buscan incidir sobre un determinado entorno para resolver sus problemas, mismo que acota sus racionalidades, márgenes y lógicas de acción. En Elias como unidades en competencia en una balanza de poderes específica (figuración).

Pero, ¿a partir de qué momento se detona la acción colectiva que se transforma en movimiento social? Sus teorías ofrecen postulados de investigación, pero no van más allá. Melucci es un ejemplo de una de las direcciones en que la teoría de Crozier y Friedberg puede ser retomada para construir una teoría sobre los movimientos sociales,[35] pero para el caso de Norbert Elias no ha aparecido ningún autor

[35] Empero, a diferencia de Crozier y Friedberg, Melucci (2002), busca situar a los movimientos sociales frente a los sistemas en un sentido ontológico. Posición que era descartada por los primeros, pues para ellos no hay nada en el desarrollo actual de la teoría que nos permita hablar en esos términos.

que haga algo equiparable. En este punto decidí utilizar las formulaciones de Theda Skocpol, Charles Tilly y Barrington Moore, ya que permiten situar los ciclos de los movimientos sociales y el momento en que se activan o desactivan. Tres aspectos son centrales aquí: la apertura o cierre del sistema político, el nivel de tolerancia del Estado y su capacidad de represión, y la fragilidad o fuerza de las alianzas del gobierno con las elites políticas. Tilly (2010) enfatiza también a los movimientos sociales como expresiones de soberanía popular frente a los señores de la guerra, las aristocracias políticas o religiosas. De igual modo, a semejanza de Elias, subraya la experiencia histórica (y no las tipologías) como central para analizar a los movimientos sociales.

Skocpol me permitió precisar el modo en que los campesinos, desde el plano local, se convierten en una fuerza colectiva capaz de combatir a sus opresores. Como ha dicho Wolf, "a la postre, el factor decisivo al hacer posible la rebelión campesina se encuentra en la relación con el campo de poder que le rodea" (Skocpol, 1984: 189), o en palabras de Elias, el juego de las fluctuantes balanzas de poder. Pues por mucha explotación que sufran los campesinos, para poder actuar han de tener alguna capacidad organizada de acción colectiva contra la explotación de sus patrones.

De esta forma, Skocpol prioriza la solidaridad comunitaria, grado de autonomía y la "estructura de las oportunidades políticas" (Tilly) como los factores principales para explicar la capacidad de acción colectiva del campesinado frente a sus opresores. Empero, si bien son importantes esos factores, a mi modo de ver, debe agregarse a ellos el importante descubrimiento de Barrington Moore, la capacidad de agravios de un actor subalterno: sólo cuando siente que el "contrato moral" con el que se rigen sus relaciones con sus superiores ha sido violado, es cuando emerge el sentimiento de injusticia y detona la rebelión. Pero para que ella sea exitosa es necesario que se den también las tres condiciones señaladas por Skocpol.

Los anteriores aspectos se expresan en los casos referidos en el acápite precedente. A pesar de los numerosos agravios que el campesinado michoacano acumuló durante el porfiriato (despojos de tierras, malas condiciones laborales, bajos salarios, entre otros) en la década de 1910 no hubo mayores rebeliones contra los hacendados. Por el contrario, en su mayor parte cerraron filas con ellos para hacer frente al bandolerismo que asoló a la entidad en esa década (Guerra Manzo, 2002; Mijangos, 1997). Es hasta la llegada de Francisco J. Múgica a la gubernatura de la entidad (1920-1922), quien se mostró abiertamente favorable para promover la reforma agraria, cuando el campesinado aprovecha la oportunidad política que se abría para construir su primera organización agraria con un peso importante en la entidad, la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas del Estado de Michoacán (diciembre de 1922). Como se observó en Naranja, es a partir de entonces cuando empiezan a cobrar cuentas a los hacendados: reclamos de tierras, mejoras salariales, reconocimiento a sus sindicatos. Entre 1922 y 1928 llegaron a la entidad gobernadores débiles y aunque no se mostraron favorables al agrarismo, éste continuó extendiéndose. Lázaro Cárdenas aprovecha este impulso para fundar en 1929 la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, unificando al entonces disperso agrarismo michoacano. Ello fue posible al converger cuatro factores: agravios, solidaridad campesina, debilitamiento de la autoridad de los hacendados, oportunidades políticas para encontrar aliados externos, en un periodo en que la autoridad estatal aún no era muy fuerte en las regiones michoacanas.

Skocpol no deja de enfatizar que ahí donde se dan las dos primeras condiciones (solidaridad y autonomía) sin que aparezca la tercera (erosión de la autoridad estatal) las rebeliones campesinas siempre han sido aplastadas.[36] Con ello,

[36] En las tres grandes revoluciones sociales (las de Francia, Rusia y China): "Fue el desplome de la capacidad represiva concertada de un Estado antes unido y centralizado el que finalmente creó las condiciones

la autora refuerza el importante descubrimiento de Tilly: los ciclos de acción colectiva y de los movimientos sociales están estrechamente ligados a la estructura de las oportunidades políticas (Tilly y Wood, 2010; Tarrow, 1997: 33-67), argumento en el que el propio Moore parece coincidir pues aduce que en última instancia es "el estado del ejército, de los ejércitos rivales, y no el de la clase obrera [o campesina], lo que ha determinado la suerte de las revoluciones en el siglo XX" (Moore, 1989: 356).

De esta forma, como ha mostrado la historiografía sobre la Revolución mexicana, las luchas campesinas en diversas entidades del centro del país (y ello aparece con claridad en el caso de Michoacán), tienen un ciclo ascendente entre 1915 y 1938, fase en la que se colapsó el antiguo régimen, mientras nuevo aún no terminaba de afianzarse, en la medida en que encontraron caudillos o gobernadores favorables a la reforma agraria. En cambio, en el sureste del país (con la notable excepción de Yucatán, donde el general Salvador Alvarado y luego Felipe Carrillo Puerto impulsaron una movilización desde arriba), el campesinado encontró una estructura de oportunidades políticas menos favorable para la movilización, al enfrentarse a oligarquías y autoridades locales reacias a amplias reformas sociales (al respecto son muy ilustrativos los casos de Oaxaca y Chiapas).

CONCLUSIONES

A mi modo de ver, una manera de superar las actuales aporías de las teorías de la acción colectiva es poniendo guiones a lo mejor de cada una, pero reintroduciéndolas en teorías más generales abiertas al diálogo teoría-empiria como las de Crozier, Friedberg y Elias. De manera breve, trataré de

---

directa o indirectamente favorables a unas revueltas campesinas *difundidas e irreversibles* contra los terratenientes" (Skocpol, 1984: 193).

ilustrar este argumento confrontando la teoría de Alberto Melucci con las que aquí se han referido.

Melucci critica la teoría de Tilly y Tarrow[37] señalando que no es la dimensión política la más importante para explicar los movimientos sociales desde la década de 1980, sino la cultural. En consecuencia, debe enfatizarse la identidad y solidaridad del movimiento social (o de la acción colectiva), modo en que son construidas, pues de ellas depende que la injusticia sea percibida, y se puede hacer el cálculo de los intercambios en la arena política.

Melucci propone enfatizar tres dimensiones de la acción colectiva: a) movilización de recursos internos y externos (aspecto desarrollado por Tilly), b) estructuras organizacionales (en el sentido propuesto por Crozier y Friedberg) y c) funciones del liderazgo. Sólo así es posible considerar al movimiento no como un *personaje* (pues su unidad es más un resultado, que un punto de partida y no hay necesidad de asumir una especie de esencia o espíritu oculto del movimiento), sino como un sistema de relaciones sociales en las que se movilizan recursos, se construyen estructuras organizacionales y se garantizan funciones de liderazgo.

El problema con Melucci es que el actor y el sistema presuponen un dualismo analítico, esquemático y ahistórico. En cambio, Crozier, Friedberg, Tilly, Skocpol, Elias y Moore están más dispuestos a proponer un campo de fuerzas histórico-concreto en un sentido procesual mucho más rico para situar la lógica de la acción colectiva.

Melucci reconoce que existe un proceso de construcción y negociación del significado de la acción colectiva, como identidad colectiva. Pero admite lo siguiente: el término de "identidad" no da cuenta "del aspecto dinámico de este proceso, pero señala la necesidad de un grado de identificación, que es precondición para cualquier cálculo de ganancia y pér-

[37] Tarrow (1997), Tilly y Wood (2010).

dida" (Melucci, 2002: 44). Además, al faltar la identificación la injusticia no podría ser percibida como tal.

En cambio, los conceptos de figuración y *habitus* son más dinámicos y no forman una dicotomía, sino una dualidad. La dicotomía implica exclusión (o se es un actor o se es un sistema), la dualidad implica dos dimensiones del ser que no pueden separarse sin alterar su naturaleza. Así, una acción colectiva es una figuración que sólo puede acaecer a través de los *habitus* de las personas entrelazadas en sus interacciones. Por tanto, hablar de figuraciones es hablar de *habitus* y viceversa. A partir de ambos conceptos, se puede hablar de identidades en el contexto de balanzas de poder fluctuantes, de juegos de cooperación y conflicto, donde las unidades participantes no pierden de vista la maximización de sus oportunidades de valor y se hallan configuradas a partir de sus experiencias concretas en la vida cotidiana.

En las regiones michoacanas que aquí han sido referidas, ha sido posible apreciar los *habitus* de los actores (códigos de lealtad clientelares o corporativos, redes de paisaje, de amistad o familiares) que imprimen su impronta a las figuraciones en que participan entre 1920 y 1940 (sindicatos, ligas o federaciones agrarias, movimientos campesinos). Las identidades de los actores que encontramos sólo son comprensibles en el contexto de fluctuantes balanzas de poder regionales en que se hallan insertos. Pero la posible realización de sus oportunidades de valor (tierra, agua, bosques, crédito, escuelas, cargos públicos) o el bloqueo de las mismas, depende en gran medida de cómo se resuelvan las apuestas (movilización de recursos, estructuras organizacionales, funciones de liderazgo) que depositan en las figuraciones en que participan. De esta manera, nunca se pierde de vista el íntimo vínculo entre *habitus* (el plano de los actores) y naturaleza de las figuraciones (acción colectiva). Así, en algunas zonas de Michoacán cristalizan *habitus* autoritarios (es el caso de Naranja o de San José de Gracia),

en otras emergen *habitus* más tolerantes, que posibilitan a los actores una mayor capacidad para la deliberación y la búsqueda de la resolución de sus diferencias de manera pacífica (Taretan o el Bajío zamorano). En las primeras suelen imperar cacicazgos que someten a las bases por medio de la coerción y arrastran a las organizaciones agrarias a incesantes procesos de fisiones y *vendettas*. En las segundas predominan organizaciones de masas que tienden a civilizar (enfriar) las pasiones que hizo aflorar la Revolución mexicana y se muestran más eficaces para gestionar la satisfacción de las oportunidades de valor de sus agremiados.

Considero que una exploración psicogenética (en el plano de los *habitus*) y sociogenética (en el plano de las balanzas de poder regionales, los juegos figuracionales o de las estructuras), como la que en el presente trabajo se ha intentado referir, es necesaria para dar cuenta, en términos procesuales y dinámicos, de la transición del antiguo régimen porfirista al posrevolucionario, misma que implicó, entre otras cosas, cambios en el ejercicio y en las formas de mediación política, así como en los constructos de la acción colectiva del campesinado. Cambios que fueron impulsados tanto arriba, en el plano federal y estatal, por parte de las elites, como abajo por las facciones y organizaciones que emergen en el plano regional.

Finalmente, no es posible cerrar estas reflexiones sin mencionar que la principal dificultad a que me enfrenté en el estudio de la acción colectiva fue la de registrar las transformaciones del *habitus*, pues no basta un periodo tan corto como el que revisamos. Según Elias, se requiere como mínimo seguir el curso de sus mutaciones durante tres generaciones. Tarea a abordar en futuras investigaciones.

BIBLIOGRAFÍA

Adams, Richard (1993), *Energía y estructura. Una teoría del poder social*, México, FCE.

Adler, Larissa (1994), *Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana*, México, Porrúa, FLACSO.

APIRB (Archivo Particular Idelfonso Ruiz Béjar) (1938), "Carta al comisariado ejidal de la ex-hacienda la Purísima", *Archivo Particular Idelfonso Ruiz Béjar*, San Luis Potosí, México, 26 de agosto.

_____ (1938), "Carta a Enrique Melgoza", *Archivo Particular Idelfonso Ruiz Béjar*, San Luis Potosí, México, 24 de agosto.

_____ (1938), "Carta de Salvador Valladares a Idelfonso Ruiz Béjar", *Archivo Particular Idelfonso Ruiz Béjar*, San Luis Potosí, México, 6 de septiembre.

_____ (1938), "Carta al tesorero de la federación", *Archivo Particular Idelfonso Ruiz Béjar*, San Luis Potosí, México, 3 de septiembre.

_____ (1938), "Carta respuesta a Salvador Valladares", *Archivo Particular Idelfonso Ruiz Béjar*, San Luis Potosí, México, 2 de septiembre.

APJGF (Archivo Particular Juan Gutiérrez Flores) (1941), "Carta al comisariado ejidal de la comunidad de Etúcuaro, municipio de Tangancícuaro", *Archivo Particular Juan Gutiérrez Flores*, Michoacán, México, 19 de febrero.

_____ (1940), "Carta al presidente del comisariado ejidal de Ario de Rayón", *Archivo Particular Juan Gutiérrez Flores*, Michoacán, México, 21 de agosto.

_____ (1939), "Carta al presidente municipal de Tlazazalca", *Archivo Particular Juan Gutiérrez Flores*, Michoacán, México, 14 de enero.

_____ (1937), "Carta a Gustavo Martínez, delegado del departamento agrario", *Archivo Particular Juan Gutiérrez Flores*, Michoacán, México, 4 de marzo.

Becker, Marjorie (1995), *Setting the Virgin on Fire. Lázaro Cárdenas, Michoacán Peasants and the Redemption of the Mexican Revolution*, Berkeley, University of California Press.

Boyer, Christopher R. (2003), *Becoming Campesinos. Politics, Identity, and Agrarian Struggle in Postrevolucionary Michoacán, 1920-1935*, Stanford, Stanford University Press.

Butler, Matthew (2004), *Popular Piety and Political identity in Mexico's Cristero Rebellion: Michoacán, 1927-29*, Oxford, Oxford University Press.

Crozier, Michel (1970), *La sociedad bloqueada*, Buenos Aires, Amorrortu.

_____ (1962), *El fenómeno burocrático*, Buenos Aires, Amorrortu.

Crozier, Michel y Erhard Friedberg (1990), *El actor y el sistema*, México, Alianza.

De la Peña, Guillermo (1986), "Poder local, poder regional: perspectivas socio-antropológicas", en Jorge Padua y Alain Vanneph (coords.), *Poder local. Poder regional*, México, El Colegio de México, pp. 32-44.

Elias, Norbert (2000), *The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic Investigations*, Oxford, Blackwell Publishing.

_____ (1999), *Los alemanes*, México, Instituto Mora.

_____ (1994), *Conocimiento y poder*, Madrid, La Piqueta.

_____ (1992) "Un ensayo sobre el deporte y la violencia", en Norbert Elias y Eric Dunning, *Deporte y ocio en el proceso de la civilización*, México, FCE, pp. 185-212.

_____ (1991), *The Society of Individuals*, Oxford, Basil Blackwell.

_____ (1990), *Compromiso y distanciamiento*, Barcelona, Península.

_____ (1985), *La societé de cour*, París, Flammarion.

_____ (1978), *What Is Sociology?*, Nueva York, Columbia University Press.

Florescano, Enrique (1999), *El nuevo pasado mexicano*, México, Cal y Arena.

Foucault, Michel (1988), "El sujeto y el poder", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. L, núm. 3, julio-septiembre, pp. 3-20.

_____ (1992), *Genealogía del racismo*, Madrid, La Piqueta.

Friedberg, Erhard (1993), "Las cuatro dimensiones de la acción organizada", *Gestión y Política Pública*, vol. II, núm. 2, julio-diciembre, pp. 283-313.

Friedrich, Paul (1991), *Los príncipes de Naranja. Un ensayo de método antropohistórico*, México, Grijalbo.

_____ (1984), *Revuelta agraria en una aldea mexicana*, México, FCE.

_____ (1965), "A Mexican Cacicazgo", *Ethnology*, vol. IV, núm. 2, pp. 190-209.

Giddens, Anthony (2001), *Las nuevas reglas del método sociológico*, Buenos Aires, Amorrortu Editores.

González y González, Luis (1984), *Pueblo en vilo*, México, Secretaría de Educación Pública, FCE.

Grémion, Pierre (1992), "Michel Crozier's Long March: the Making of The Bureaucratic Phenomenon", *Political Studies*, vol. XL, pp. 5-20.

Guerra, François-Xavier (1991), *México: del antiguo régimen a la revolución*, 2 vols., México, FCE.

Guerra Manzo, Enrique (2006), "Pensar la revolución mexicana: tres horizontes de interpretación", *Secuencia*, núm. 64, enero-abril, pp. 51-78.

_____ (2002), *Caciquismo y orden público en Michoacán, 1920-1940*, México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.

Huntington y Joan M. Nelson (1973), *Socio-economic change and political participation: Report to the Civic Participation Division of the Agency for International Development,* Cambridge Ma., Center for International Affairs, Harvard University.

Katz, Friedrich (1998), *Pancho Villa*, 2 tomos, México, Era.

Knight, Alan (1996), *La revolución mexicana*, 2 vols., México, Grijalbo.

Melucci, Alberto (2002), *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México, El Colegio de México.

Mijangos Díaz, Eduardo (1997), *La revolución y el poder en Michoacán 1910-1920*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Moore, Barrington (1989), *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

Purnell, Jennie (1999), *Popular Movements and State Formation in Revolutionary Mexico. The Agraristas and Cristeros of Michoacán*, Durham, Duke University Press.

Ritzer, George (1994), *Teoría sociológica contemporánea*, México, McGraw-Hill.

Salmerón, Fernando (1992), "Movilización, mediación y control políticos. La escuela agrícola de La Huerta y la CRMDT en el proceso posrevolucionario de la centralización política", en Jesús Tapia (coord.), *Intermediación social y procesos políticos en Michoacán*, Michoacán, El Colegio de Michoacán.

_____ (1989), *Los límites del agrarismo*, Michoacán, El Colegio de Michoacán.

Skocpol, Theda (1984), *Los Estados y las revoluciones sociales. Un análisis comparativo de Francia, Rusia y China*, México, FCE.

Tarrow, Sydney (1997), *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza.

Tilly, Charles (1991), *Grandes estructuras, procesos largos y comparaciones enormes*, México, Alianza.

Tilly, Charles y Lesley J. Wood (2010), *Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde los orígenes a Facebook*, Barcelona, Crítica.

Tobler, Hans Werner (1994), *La revolución mexicana. Transformación social y cambio político, 1876-1940*, México, Alianza.

Weber, Max (1983), *Economía y sociedad*, México, FCE.

Wolf, Eric (1956), "Aspects of Group Relations in a Complex Society: Mexico", *American Antropologist*, vol. LVIII, núm. 6, pp. 1065-1078.

Womack, John (1985), *Zapata y la revolución mexicana*, México, Secretaría de Educación Pública, Siglo XXI.

Zabludovski, Gina (2007), *Norbert Elias y los problemas actuales de la sociología*, México, FCE.

Zepeda Patterson, Jorge (1986), "Los pasos de Cárdenas. La Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo", en *75 años de sindicalismo mexicano*, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.

V. EL SENTIDO DE LA ACCIÓN: INTERÉS Y SOLIDARIDAD EN EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MARTÍN PALADINO CUPOLO*

El origen de la problemática que se presenta en este capítulo puede rastrearse lejos en el tiempo y el espacio. La inquietud que terminó definiendo una modesta agenda de investigación dirigida a dar cuenta del carácter polisémico de la acción colectiva y de la racionalidad instrumental en los movimientos sociales se generó en la sorpresa que sólo dan los momentos fortuitos. En Argentina durante el 2004, mientras esperaba en una estación de tren la llegada del contacto que me presentaría en el comedor del Polo Obrero[1] que me disponía a investigar, un grupo de mujeres sostenía una conversación en voz alta. En el momento en que las es-

* Doctor en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede México. Profesor-investigador del Instituto Dr. José María Luis Mora.

[1] El Polo Obrero era una de las muchas organizaciones piqueteras que operaban en la Zona Sur del Conurbano Bonaerense durante 2003, año en que tiene lugar la situación que se describe. Los comedores populares eran una de las formas organizativas de base más extendidas ya que ofrecían un espacio físico y social para la interacción entre los miembros de las organizaciones –en adición a las movilizaciones o piquetes– y una actividad que servía para cumplir con la contraprestación laboral que los programas gubernamentales de apoyo a desempleados exigían a sus beneficiarios.

cuchaba no sabía que ellas formaban parte de ese comedor ni ellas sabían que yo era "el estudiante que estaba haciendo un trabajo para la Universidad". En esa situación de anonimato mutuo ellas debatían las ventajas y desventajas de participar en las diferentes organizaciones que en esa época gestionaban planes de apoyo para desempleados. Algunas preferían hacerlo con los piqueteros, argumentando que por esa vía se llegaba más rápidamente al cobro del beneficio. Las otras aceptaban que en la Sociedad de Fomento barrial –controlada por el peronismo– la demora podía ser mayor, pero el trabajo de contraprestación era menos intenso y las marchas y movilizaciones menos frecuentes. Una vez que me conocieron como un universitario investigador no volvieron a hacer un cálculo de costos y beneficios tan explícito, especialmente en presencia de los líderes de la organización, que enmarcaban la vida cotidiana del actor colectivo como lucha contra el capitalismo.

En el trabajo de campo etnográfico que siguió a ese episodio pude ver que la tensión originada entre estos sentidos divergentes se manifestaba sólo ocasionalmente. Otro acontecimiento registrado en el diario de campo presenta una de estas infrecuentes ocasiones. El gobierno municipal –de signo peronista, políticamente opuesto a la dirigencia del Polo Obrero– ofrecía como donativo carne de res a todos los comedores populares de la demarcación. Los líderes rechazaban frontalmente la oferta. En su visión la única forma legítima de aceptar recursos gubernamentales era "arrancándoselos mediante la lucha", de lo contrario se reproducía el patrón clientelar que aplastaba la movilización popular. La base se resentía ante una negativa que les parecía incomprensible, al fin y al cabo era carne para alimentar a sus hijos. ¿No se trataba de eso el comedor comunitario?

El sentido que aquellas mujeres –lejos de los oídos de los líderes de la organización– construían y otorgaban de manera reflexiva a su participación en un actor colectivo era

abiertamente instrumental e individualista. En el recuento que hacían de su acción cada una de ellas participaba para lograr un bien que consumiría de manera privada. La acción colectiva era el subproducto de la ligazón de motivaciones individuales. Los líderes de la organización –cuadros políticos formados en el marxismo– construían un sentido muy diferente para la acción colectiva que encabezaban: el movimiento piquetero en su praxis le arrebataba al mercado la capacidad de fijar el nivel óptimo de empleo y de salarios, socavando las bases mismas del sistema capitalista. La movilización era una herramienta en la lucha colectiva contra el capitalismo, no una lucha individual para obtener los ingresos necesarios para participar de la sociedad capitalista.

En la visión que aquellas mujeres trazaban no había una diferencia sustancial entre el involucramiento en un actor colectivo autónomo y disruptivo y la pertenencia en una red clientelar. Ambas proveían el mismo bien. La opción por una u otra dependía de sus preferencias y urgencias y de otros factores más escurridizos como la afinidad personal con los actores territoriales del peronismo o el movimiento piquetero.

La mención de este episodio, lejos en el tiempo y el espacio, no apunta a convertirse en la base de un estudio comparativo. Más bien procura presentar al lector de manera resumida el tema que será tratado en este capítulo: el carácter polisémico de la acción colectiva plasmado en marcos de sentido contrapuestos que, con mayor o menor dificultad y éxito, se ajustan para producir la acción. Para desarrollar el tema comenzamos por presentar dos vertientes teóricas que dan cuenta de la polisemia de la acción colectiva, la individualista de Elster y la de la acción de Melucci. La exposición de la propuesta elsteriana está acompañada de una discusión sobre las condiciones de utilización de enfoques que reposan en los supuestos de la elección racional. Al hacerlo intentaremos reconstruir sociológicamente los supuestos de esa teoría. En el siguiente apartado retomaremos evidencia obtenida en un trabajo de

campo para plantear la existencia de dos estructuras de sentido en organizaciones del Movimiento Urbano Popular. La base articula el sentido de la acción colectiva en una matriz a la que llamamos interés, mientras que los militantes y dirigentes lo hacen en una matriz a la que llamamos solidaridad. Para finalizar sostendremos que estas dos estructuras de sentido no corresponden a momentos de la explicación teórica –Elster *vs.* Melucci– sino que se explican por la vida cotidiana y las trayectorias sociales diferentes de base y dirigencia.

EL ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (MUP) Y LA RACIONALIDAD EN LA ACCIÓN COLECTIVA

Los movimientos urbano-populares de la Ciudad de México han sido el objeto, desde su emergencia en los años setenta, de una vasta literatura sociológica que procuró interpretarlos a la luz de los cambios económicos, políticos, urbanos y sociales que tuvieron lugar en la ciudad y en el país. La emergencia y persistencia de las organizaciones, demandas, formatos de protesta, marcos y estructuras cognitivas se explicaron con recurso al crecimiento demográfico y la producción del espacio urbano (Ramírez, 2005; Schteingart, 2011), la estructura económica desintegrada del capitalismo periférico (Moctezuma y Navarro, 1984), el cambio en las respuestas gubernamentales ante la protesta (Favela, 2006), la emergencia de la sociedad civil, el cambio político-institucional, etc. Un aporte reciente (Guerra, 2012) considera a las organizaciones –puntualmente al Frente Popular Francisco Villa– como sistemas sociales en el sentido de Luhmann. De este modo fija su atención en los procesos de auto-organización, llevando la explicación de la existencia y evolución de la organización al interior de la misma más que a las circunstancias que se le presentan como entorno. Es preciso señalar que en esta visión la organización no

está absolutamente desacoplada de los restantes sistemas que se presentan como entorno (conciencias y sistemas funcionales), sin embargo, ese acoplamiento no es necesario ni causal. Toda irritación es auto-irritación dado que debe ser construida internamente por el sistema. Lo que llamamos cambios en el entorno pueden producir nada o muchas alternativas diferentes. Sería arriesgado indicar a una de las alternativas –la realizada– como causa de un proceso interno del sistema, a menos que seamos capaces de señalar el mecanismo de observación que retroalimenta ese cambio.

El presente capítulo tiene un interés coincidente con el trabajo de Guerra dado por el énfasis en los procesos internos de la organización. Sin embargo, las referencias teóricas son muy diferentes, pues lejos de considerar –a la manera luhmanniana– la acción como un prejuicio humanista, con poco o ningún valor para la sociología, pensamos que sigue siendo una categoría teórica importante para hacer inteligible la vida en sociedad. Del enfoque sistémico retomaremos la advertencia que nos lleva a evitar concebir a la acción como un hecho necesario dadas ciertas circunstancias o unívoco e idéntico a sí mismo. El punto de partida del análisis de la acción colectiva debe ser, entonces, problematizarla. Afortunadamente dentro de la tradición accionalista encontramos las herramientas teóricas para hacerlo. Como veremos, desde supuestos disímiles, Jon Elster y Alberto Melucci problematizan la aparente unidad empírica de la acción colectiva y nos permiten crearla como un objeto de investigación complejo dando cuenta de la multiplicidad de sentidos y orientaciones que involucra.

ACTOR Y ACCIÓN: EL INDIVIDUO Y LA ACCIÓN COLECTIVA

La problematización de la acción colectiva que propone Elster se deriva de los supuestos sobre los que construye su teoría. Elster propone para las ciencias sociales un abordaje

estrictamente individualista: explicar el todo por las partes que lo componen y lo anteceden. Esta definición tajante, que otorga una preminencia ontológica al individuo, resulta incompatible con prácticamente toda la tradición sociológica. Por tal motivo es necesario presentar dos maneras en que puede aplicarse el principio del individualismo para la explicación de fenómenos sociales.

En el sentido que aquí usaremos al individualismo éste no implica una aseveración ontológica sobre los individuos o la sociedad, por el contrario, delinea una estrategia metodológica. La separación entre el individualismo metodológico (IM) y el individualismo ontológico frecuentemente es soslayada por algunos partidarios del IM. Tomaremos a modo de ilustración la definición que ofrece Noguera (2003), pues en ella se confunden ambas formas de entender al IM y clarificándola podremos esclarecer nuestra posición. Noguera sostiene que "una teoría individualista es la que afirma que las únicas entidades reales y eficaces en la vida social son los individuos, o bien que todos los fenómenos sociales pueden reducirse en última instancia a fenómenos referentes a individuos, propiedades de individuos o relaciones entre individuos...". En la primera formulación la aproximación individualista a los fenómenos sociales se justifica con recurso a la existencia real y eficacia del individuo, que aparece entonces como real ante una sociedad que es artificial y cuya existencia es, en el mejor de los casos, derivada de los individuos y, en el peor, un artificio del que se vale la sociología para justificar su existencia. La segunda formulación es diferente, ya que remite a una estrategia metodológica –la reducción– y no a una afirmación ontológica. El cambio es sustancial dado que esta definición de IM deja abierta la posibilidad de dar cuenta a nivel histórico de la constitución social del individuo,[2]

[2] Es decir, es compatible con una versión *no presocial* del individuo y de ese modo puede sortear críticas como las de Pierre Bourdieu cuando afirma que la perspectiva de la elección racional es "[una] antropología

así como de los cambios en los intereses y preferencias que se producen en el transcurso de la acción colectiva (Paramio, 2000).

El abordaje individualista deberá ser juzgado por la pertinencia de las preguntas que nos permite realizar y no por la primacía ontológica del individuo sobre la sociedad o a la inversa.

Llevar al individualismo a un terreno plenamente metodológico para hacerlo compatible con la tradición sociológica parece un esfuerzo innecesario. ¿No sería mejor descartarlo de una vez por todas? Sostendremos que es un esfuerzo válido mientras nos permita conservar algunas herramientas teóricas surgidas de esa tradición de gran capacidad para problematizar la acción colectiva y dar cuenta de su carácter polisémico.

Tomando como punto de partida a la acción individual instrumental podemos presentar a la acción colectiva como improbable: el resultado que la teoría predice para la mayoría de los casos es la no cooperación de los individuos. El fundamento teórico de esta improbabilidad de la acción colectiva no está dado por un ejercicio permanente de la dominación que suprime o debilita la capacidad de los dominados para constituirse en un actor capaz de contestarla. Remite, en cambio, a las dificultades para la producción de bienes públicos que señala la perspectiva olsoniana.

El problema del *free-rider* propuesto por Olson en *La lógica de la acción colectiva* combina al individualismo metodológico con una reducción de la acción a sus aspectos instrumentales. La acción es para algo y ese algo es un estado de cosas deseado. El camino que se toma para lograrlo –la acción propiamente dicha– no es cualquiera, será siempre el menos costoso. En la producción de bienes privados esto

---

imaginaria [que] busca fundar la acción, sea económica o no, en la elección intencional de un actor económica y socialmente incondicionado" (Bourdieu y Wacquant, 2005:183).

no implica problema alguno pues costos y beneficios están firmemente asociados, es decir, se puede excluir del beneficio a aquel o aquellos que no han asumido los costos. La peculiaridad de los bienes públicos es que no puede practicarse esta exclusión, disociando los costos de los beneficios. En esta situación la tendencia general estará dada por individuos que intentarán no asumir el costo de la producción del bien en cuestión. Si el bien se produce nadie podrá excluirlos de su goce. El resultado es que se producirán muchos menos bienes públicos de los que sería posible producir.

La coordinación de las acciones individuales en una acción colectiva orientada a la obtención de bienes públicos enfrenta así su primer y fundamental desafío: evitar la aparición de *free-riders* que minan los esfuerzos por alcanzar el objetivo común. El propio Olson, al presentar este problema, sugiere un mecanismo para ajustar los costos individuales con los beneficios colectivos. Las matrices de incentivos selectivos aparecen tempranamente como una de las soluciones teóricas al problema de la deserción. Sin embargo, las matrices de incentivos selectivos no ofrecen una explicación completa. Este mecanismo puede explicarnos cómo se *reproduce* la acción colectiva, pero no cómo se produce. Es decir, da cuenta de una manera en la que se evita la defección una vez que hay cooperación, pero es imposible que ofrezca incentivos para ser los primeros en optar por la estrategia cooperativa en una situación de no cooperación.[3]

El problema del momento cero de la acción colectiva lleva a Elster a abrirse a la posibilidad de motivaciones que excedan a las egoístas orientadas al resultado, es decir, al

[3] A estas dos modalidades diferentes del problema del *free-rider* Elster las llama *inaccesibilidad* e *inestabilidad* de la acción colectiva, respectivamente. El uso que aquí se les da es ligeramente diferente al de Elster, quien las introduce abonando el camino para desarrollar su teoría de cooperadores condicionales e incondicionales (Elster, 1985).

comportamiento típicamente esperado por la perspectiva de la elección racional. Al *homo economicus* Elster agregará el *homo sociologicus*. Si el primero se guía exclusivamente por la maximización egoísta, el segundo lo hace compelido por el deber.[4] La existencia de estos cooperadores incondicionales –kantianos, en lenguaje elsteriano– constituye el primer núcleo de la acción colectiva. Su cooperación puede atraer a otros que sí evalúan las condiciones para decidir su cooperación. De estos cooperadores condicionales la categoría más interesante para nuestros intereses es la de regla de justicia. Quienes se rigen por esta regla sólo cooperan si los demás lo hacen. Su presencia es la que explica la generación de incentivos selectivos pues, a diferencia de los kantianos, no son incondicionales y únicamente cooperarán si los demás lo hacen. Otro tipo de cooperador importante es el regido por normas sociales y especialmente las normas que constituyen el sustento de la autoimagen. "Hay cosas que uno no haría simplemente porque no es la clase de persona que hace esas cosas" (Elster, 1985:153).

En síntesis la propuesta de Elster para explicar a la acción colectiva tiene como punto de partida la concatenación de elecciones individuales. Hay acción colectiva cuando un conjunto suficientemente grande de individuos opta por cooperar. Sin embargo, hay diferentes tipos de cooperadores: un primer círculo de incondicionales que sirven a la teoría

[4] Sería erróneo asegurar que al *homo economicus* no le importan las normas, pues su aproximación es diferente. No las observa por un compromiso moral, lo hace por temor a las sanciones que las reglas pueden contemplar para quienes las violan. El problema es que si consideramos a la aplicación de sanciones un bien público volvemos a la situación original: en un mundo habitado por individuos que sólo atienden a las motivaciones egoístas orientadas al resultado nunca habrá acción colectiva. La introducción de la acción normativa por parte de Elster no viola el principio de la racionalidad individual como la entiende este autor. Para el individuo que actúa normativamente la violación de la norma es un costo subjetivo y por eso se abstiene de hacerlo.

para romper la paradoja del primer movimiento, un segundo círculo de cooperadores condicionales que participará siempre que los demás lo hagan y, por lo tanto, propondrá matrices de incentivos selectivos y un tercer círculo que lo hará sólo motivado por los beneficios individuales derivados de esa matriz de incentivos selectivos.

ACCIÓN Y ACTOR: LA AUTOPRODUCCIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA

La propuesta individualista de Elster no es la única que nos permite problematizar a la acción colectiva y considerar los sentidos múltiples y en ocasiones divergentes que la componen. La sociología de la producción de los movimientos sociales de Alberto Melucci también los considera, partiendo de supuestos completamente diferentes a los de Elster.

En una ponencia presentada en 1990 Alberto Melucci arremete contra el "supuesto ingenuo de que la acción colectiva es un dato y una unidad". Al dar por sentados los valores, intenciones y fines del movimiento "la ideología de los líderes o los atributos que les pone el observador se convierten en la verdadera «realidad» del movimiento" (Melucci, 1991: 357). En lugar de considerar a la acción colectiva como un dato deberíamos considerarla un producto, pero no un producto acabado –eso sería lo mismo que considerarla un dato–, sino un producto en constante producción. En esa producción interactúan y se relacionan sentidos, metas y orientaciones diversas. No existe un sentido único para la acción, ese sentido está sometido a permanente negociación y definición. Quien asegure haber fijado el sentido de una acción colectiva –ya sea remitiendo a la estructura social o arribando en un juego modelado a la estrategia dominante– en el mejor de los casos está mostrando un fotograma de una película, es decir, haciendo estático algo que es dinámico. En la propuesta de Melucci uno de los procesos más dinámicos

y fundamentales de un actor colectivo es la definición de sí mismo. "Los individuos crean un nosotros colectivo (más o menos estable o integrado de acuerdo con el tipo de acción), compartiendo y ajustando laboriosamente por lo menos tres clases de orientaciones: aquellas relacionadas con los fines de la acción (por ejemplo, el sentido que tiene la acción para el actor); aquellas relacionadas con los medios (por ejemplo, las posibilidades y límites de la acción) y, finalmente, aquellas referidas a las relaciones con el ambiente (por ejemplo, el campo en el que tiene lugar la acción)" (Melucci, 1991:358). Este proceso no es puramente interno, es decir, no se limita a ajustar los sentidos y orientaciones de los individuos implicados en la acción. El procesamiento cognitivo del entorno y la reflexión sobre acciones ya emprendidas juegan un papel importante en la definición del actor y la acción.

En este *ajuste laborioso* se produce la acción colectiva que se nos presenta a la observación como dato. El esfuerzo de Melucci por descosificar la acción colectiva no implica, sin embargo, que la acción colectiva se produzca en un caos de definiciones y sentidos divergentes y hasta opuestos. De lo contrario, la acción colectiva se parecería demasiado al clásico ejemplo weberiano de la apertura simultánea de paraguas ante la lluvia, es decir, no tendría nada de colectiva. El proceso de ajuste –cuya observación es crítica en el análisis de los actores colectivos– apunta a dar un orden duradero y predecible a las definiciones. Esa es, para el autor italiano, la función del liderazgo y las formas organizativas: integrar sentidos y orientaciones y hacerlos de ese modo estables.[5]

Melucci plantea a la integración de sentidos como un aspecto problemático de la acción colectiva. La identidad

[5] Para quien siga interesado en el episodio de la carne relatado en la Introducción, su resolución nos habla mucho de la forma en que, mínima y cotidianamente, se negocian los sentidos de la acción. Uno de los participantes en la reunión propuso ir a recibir la carne ofrecida por el intendente municipal escenificando un piquete frente a la sede de gobierno.

colectiva no es un punto de partida, no es previa a la acción colectiva. Al contrario, es construida en un laborioso proceso de negociación que no sólo la produce y la transforma, sino que al mismo tiempo produce y transforma las identidades personales de los involucrados. La acción produce al actor ajustando múltiples orientaciones y entretejiendo a la identidad colectiva con la identidad personal. De este modo, el mecanismo básico para explicar la acción colectiva es la solidaridad expresada individualmente como compromiso y no el interés.

Las similitudes y diferencias entre los planteamientos de Elster y Melucci son claras. Ambos procuran problematizar a la acción colectiva presentando dilemas y desafíos que ésta debe sobrellevar para existir. Lo que se nos presenta como un actor unificado –un movimiento social o un grupo de presión– reúne a la diversidad. Sin embargo, las diferencias son todavía más significativas. En primer lugar Elster ve a la acción colectiva no como un producto sino como un subproducto de las motivaciones individuales que son previas a la acción colectiva. Asimismo la acción colectiva (AC) no tiene vida más allá de los individuos que la componen y de los incentivos –materiales o no– que los impulsan a cooperar. El sentido y los fines de la acción colectiva no pueden ser, como lo son para Melucci, producidos o negociados *en* la acción. Deben ser previos, de lo contrario no habría beneficio contra los que calcular los costos. Del mismo modo, el ajuste que Melucci considera uno de los aspectos fundamentales de la AC, para Elster no es necesario. No hay un sentido colectivo de la acción que deba ser negociado, cada cual aporta el propio.

Los límites de una y otra perspectiva han sido ampliamente debatidos en la literatura sobre movimientos sociales y acción colectiva. Para una crítica de la perspectiva racionalista desde el enfoque de la identidad véase Pizzorno (1990) y Paramio (2000), desde una perspectiva cultural véase

Calhoun (1999) y desde una perspectiva de las emociones considérese a Jasper (2010). Una defensa del individualismo metodológico y crítica a las restantes perspectivas es articulada por Noguera (2003; 2007) y Opp (2009).

Desde el punto de vista del problema que se nos presenta nos conformaremos con plantear que la organización que analizamos se describe de manera más parsimoniosa a partir de la interacción estratégica de tres actores: la base, los líderes y los actores del sistema político. Cada uno otorga sentidos diferentes a su participación y esos sentidos se ajustan sólo en un nivel práctico. La construcción de una identidad colectiva fuertemente entrelazada con la identidad personal –el proceso de identificación que es central en la crítica identitaria al problema del *free-rider*– es más bien infrecuente. Las preferencias cambian poco con el involucramiento en la acción.

Esta opción por la propuesta individualista metodológica significa que prestaremos atención a los incentivos selectivos como forma de reproducción de la AC. Sin embargo, a partir de Elster consideramos que debe haber otro tipo de mecanismos que son condición de posibilidad de la presencia de incentivos selectivos. El mecanismo al que haremos referencia es la confianza, entendida como expectativas razonables sobre lo que los otros harán. El lazo que funda la acción colectiva es el lazo de confianza que une al líder con cada uno de los miembros de base de la organización. Las relaciones se articulan de manera vertical más que horizontal: lo que mantiene unido y actuando al actor no es tanto la solidaridad entre los miembros de base entre sí como la confianza depositada en el líder. En ese sentido, la función principal del líder es la de ser intermediario en un triple registro: de los miembros de base entre sí, del actor colectivo con las instancias burocráticas encargadas de implementar programas y con la coyuntura política en la que buscan incidir para alcanzar sus objetivos.

LOS MODELOS TEÓRICOS APLICADOS A LA GESTIÓN DE PROYECTOS HABITACIONALES DE LA UPREZ

Elster y Melucci proponen abordajes teóricos que permiten problematizar a la acción colectiva desde supuestos diferentes. El siguiente paso es evaluar la capacidad analítica de las perspectivas de la elección racional y del ajuste de orientaciones en su aplicación a un caso. Tomaremos como referencia empírica un proyecto de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata[6] en el Distrito Federal que fue objeto de

[6] La UPREZ reconoce como fecha de nacimiento al 1 de enero de 1987 (Reyes, Rello, y Ávila, 1994), fecha en la que se fundó como coordinadora regional en el Valle de México de los grupos urbano-populares vinculados a la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM). La OIR-LM había tenido un papel destacado en la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) y era una de las organizaciones más importantes del Movimiento Urbano Popular (Bouchier, 1990). La UPREZ tiene criterios de membresía en sentido estricto, que no incluyen automáticamente a los solicitantes de vivienda que la organización articula. La pertenencia a la organización es voluntaria y sólo algunos de los beneficiarios de cada proyecto de vivienda se incorporan a la organización en calidad de miembros.

La Unión comenzó su lenta y compleja transición desde una férrea posición anti-electoral a la presentación de algunos de sus dirigentes como candidatos a puestos de representación popular en el marco de alianzas con partidos políticos a fines de los años ochenta. Algunos de sus dirigentes participaron y movilizaron a sus bases para la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, aunque dichas acciones fueron objeto de debate, denuncia y controversia al interior de la organización. Tras la ruptura interna de la OIR-LM y la formación del Partido del Trabajo, la UPREZ articuló a los remanentes del proyecto de Línea de Masas en el Valle de México y fue moviéndose de a poco hacia posiciones electorales más marcadas. El triunfo que llevó a Cárdenas a la jefatura de gobierno de la ciudad en 1997 encontró a varios dirigentes de la UPREZ como miembros activos en esa campaña y algunos otros llegando a puestos de representación popular.

Varios dirigentes de los que integrarían la UPREZ en 1987 participaron en el proyecto de El Molino, donde establecieron un vínculo estrecho con

una investigación etnográfica en 2009. Comenzaremos por problematizar la figura del *free-rider* y, tras ello, haremos lo mismo con el ajuste de orientaciones y enlace de la identidad personal con la identidad colectiva.

Marchas, puntos y departamentos. La organización como una matriz de incentivos

El problema de acción colectiva o problema del *free-rider* tiene unas condiciones de aplicación delimitadas: el dilema amenaza solamente a la producción de bienes públicos. Corresponde entonces determinar si el objetivo que el grupo persigue cumple con ese requisito. Las viviendas que obtienen los solicitantes serán, luego de un largo camino, bienes privados que gozarán individualmente. Sin embargo, durante el proceso de solicitud de vivienda pueden ser tratadas como un bien público. El Programa de Vivienda Conjunta del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI-DF), a través del cual obtienen las viviendas, no está dirigido a individuos sino a grupos y las viviendas son entregadas al grupo. Una vez que el grupo se ha registrado como Asocia-

---

actores estatales relevantes en el área de vivienda, concretamente con el grupo que conformaba el proyecto Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FOHNAPO). Si bien los últimos años de gobierno del PRI en la Ciudad de México fueron poco favorables para todas las organizaciones urbano-populares, la UPREZ, en virtud de estos contactos, logró sacar adelante algunos proyectos. La llegada de Cárdenas al gobierno facilitó todavía más las cosas, pues sus viejos conocidos en las ONGs del área de vivienda volvieron a ser influyentes en la política sectorial (Sánchez, 2004).

La entrada de la UPREZ al juego de las corrientes internas del PRD fue un tanto caótica, no entraron como un bloque sino que lo hizo cada dirigente por sí mismo y se insertó allí donde lo creía conveniente. Algunos dirigentes importantes nunca hicieron la transición a la política electoral y de algún modo el debate sobre esa opción sigue abierto.

ción Civil todos los integrantes tienen derecho a la vivienda. El comportamiento racional para los individuos de acuerdo con los autores mencionados sería, a partir de ese punto, dejar de participar en las actividades de la organización. Si ésta logra su propósito todos los inscritos, independientemente de haber cooperado o no, lograrían una vivienda. Sin embargo, si ninguno de ellos o ellas participara en las reuniones, talleres, mesas de negociación y movilizaciones sería imposible que el propósito de conseguir la vivienda se obtuviera. Para que el problema se resuelva, la organización hace uso de un sistema de incentivos selectivos que vinculan el esfuerzo individual con un beneficio individual. Se trata del sistema de puntaje al que los propios implicados se refieren como "marchómetro" o "protestómetro". Un extracto de la entrevista realizada a Ana María, militante de la UPREZ, lo describe con gran poder de síntesis:

> R. En un principio cuando se empezó a convocar a la gente, que no nos dividíamos en brigadas, yo llevaba la asistencia y nos pusimos un método de puntos... sí, es importante, yo me acuerdo que cuando nos entregaron las viviendas del Arbolillo UPREZ El Rosario llevaba puntos y UPREZ 6 de Octubre no. Entonces fue un relajo a la hora de entregar la vivienda, en El Rosario si dos personas querían el mismo departamento se decidía por quien había participado más, quien tenía más puntos. En cambio los de allá... salieron muchos de pleito porque se entregó así nada más, fue sorteo. Entonces cuando empezamos acá, "Bautista" (dirigente histórico de la organización) me decía "Es que a mí no me gustan los puntos porque se presta a que la gente vaya nada más por el interés de tener el punto", pero yo le decía: "Acuérdate lo que pasó". "¿Cómo decides?"
> *P. ¿Cómo son los puntos?*
> R. Ahí te va... (risas) Asistir a la asamblea semanal es un punto, ser parte de una comisión es dos puntos por evento, al que vaya son dos puntos, asistir a una marcha son tres puntos,

asistir a un plantón de día son cuatro puntos y de noche son cinco puntos.

P. ¡Ah! tienen la escala...

R. Sí, es que es más pesado, cuando estás en plantón... te quedaste de noche. Y me acuerdo cuando llegábamos aquí antes[7] con nuestros hules y nuestros palos a armar. Y lo primeritito que hacíamos con los niños era ubicar una coladera, para las necesidades. Entonces es pesado estar en un plantón, mucha gente nos decía "es más pesado la marcha", pero ustedes no saben lo que es estar en un plantón, nosotros lo sabemos, ustedes no lo saben. Entonces a partir de que se puso esa puntuación para las asistencias, llevaba yo la asistencia y como no había comisiones, cada ocho días se decidía quién iba al Taller y la persona que iba ya le tocaban dos puntos.

Con la aplicación del sistema de puntaje la cooperación para la producción del bien público queda vinculada a la producción de un bien privado: puntos que se registran a título individual y que son proporcionales al sacrificio hecho. Aquella persona que reúna más puntos obtendrá antes su departamento y/o podrá elegir el que prefiera.

La presencia del sistema de puntaje como incentivo selectivo, siguiendo a Elster, puede explicarnos la reproducción de la acción colectiva pero no su emergencia. Para que el sistema funcione es necesario algo más: que una persona o grupo de personas lleven el registro de los puntos y que exista la confianza de que, llegado el momento de privatizar el bien público, sean realmente utilizados como criterio. Hace falta un primer núcleo de cooperadores y, sobre todo, confianza.

¿Cómo es posible que funcionen los incentivos selectivos en nuestro caso? Recordemos que a los cooperadores la recompensa no les será entregada hasta el final del ciclo de

[7] La entrevista transcurre cerca de Avenida Reforma, donde Ana María y su gente habían tomado parte en los plantones que siguieron a la elección de 2006.

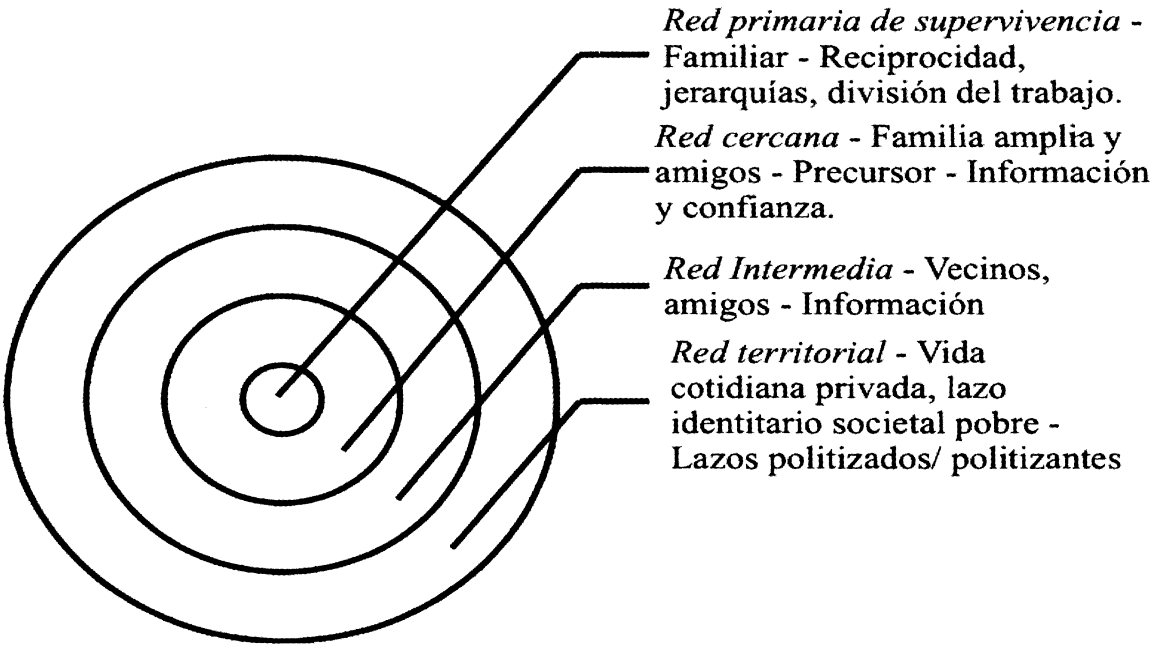
movilización y, en sentido estricto, ninguno de los involucrados la controla completamente. Es un resultado contingente, obtenerla es sólo una de las posibilidades que aparecen. Para que funcione debe ser creíble para el solicitante que en verdad está encaminado a la obtención del bien. En el caso de la solicitud de vivienda no hay incentivos parciales ni mucho menos un flujo de beneficios que se pueda cortar. Solamente hay una recompensa muy grande que está al final del camino. La *confianza* en la capacidad del dirigente para abrir el acceso a ese beneficio a través de sus contactos políticos y la creencia en que distribuirá los bienes para beneficio de todos, es el mecanismo a través del cual se crea una ilusión productiva: la de obtener la vivienda.

El beneficio futuro que sirve de incentivo –un mejor departamento, obtener el departamento antes– no puede ser un espejismo completo. La confianza atribuida al líder-dirigente se sustenta en información disponible. Para explicar la manera en que circula esa información debemos remitirnos a la forma en que la organización recluta a sus nuevos miembros y para hacerlo debemos tener en cuenta las redes con las que estos miembros cuentan.

El esquema 1 y el cuadro 1 resumen los hallazgos del trabajo de campo en ese sentido. En el esquema se presentan las redes de las que disponen quienes participarán como solicitantes de vivienda antes de pertenecer formal o informalmente a la organización. En el cuadro 1 se observa el mecanismo de difusión que sirvió para acercar a una nueva camada de solicitantes de vivienda a la organización.

El esquema 1 fue elaborado a partir de entrevistas y observación etnográfica. El cuadro 1 fue elaborado a partir de una encuesta administrada a solicitantes de vivienda de un proyecto que inició casi simultáneamente con el trabajo de campo. En la difusión de los proyectos la familia sigue siendo relevante para establecer el primer contacto entre los intermediarios y la base. En menor medida también lo son

Esquema 1. Redes a disposición de la base antes de entrar en la relación de intermediación



Cuadro 1. ¿Cómo se enteró que estaban inscribiendo para este proyecto?

		Frecuencia	*Porcentaje válido*
	Volante o cartel en vía pública	2	1.4
	Reunión en la colonia	31	21.5
	Vecino	30	20.8
	Familiar	60	41.7
	Amigo o compañero de trabajo	21	14.6
	Total	144	100.0
Perdido		6	
Total		150	

los amigos o compañeros de trabajo. Las formas impersonales de comunicación juegan un papel mucho menor, 98.6% de los encuestados se enteró a través de una persona, familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo o miembro de la organización que se acercó a su colonia. A este agente que presenta a los potenciales interesados con el proyecto y a los líderes con su base lo llamamos precursor y se ubica en la mayoría de los casos en los dos primeros anillos del esquema 1.

Desde la base se sabe que las posibilidades de ser estafado por personas que se presentan como intermediarios privados son altas. Existe una red más amplia que la red de supervivencia (familia, primer anillo) que tal vez no esté tan directamente involucrada en lazos de reciprocidad para la supervivencia, pero está conformada por personas conocidas, accesibles y dignas de confiar.

Alguien que se encuentra en esta red intermedia –que se superpone con la red primaria de supervivencia– se limita a avisar de la existencia de un nuevo proyecto. Hace circular

información y pone en contacto a dos nodos que tal vez no se encontrarían si no fuera por ese tercero. Sin embargo, no siempre se limitan a dar aviso. Un tipo especial de miembros de esta red primaria ampliada (red cercana), más cercano al futuro inscrito en el proyecto que los que únicamente dan la información, es el *precursor*. El precursor no sólo informa de la existencia del proyecto, también transmite confianza e información detallada sobre la organización o el dirigente y sobre las actividades que los miembros de base de la organización deben llevar a cabo. El precursor es un beneficiario o familiar cercano que ha obtenido el beneficio esperado –en nuestro caso, la vivienda relacionándose con la organización o dirigente que recomienda. El prospectivo solicitante de vivienda confía en el precursor, el precursor confía en el dirigente. No solamente se cierra una brecha de confianza, también comienza a circular información importante. Los nuevos solicitantes llegan, cortesía del precursor, con una presunción de lo que les espera, con un conocimiento básico de lo que tienen y no tienen que hacer en la organización. En esta red intermedia circula información de primera mano que será de gran utilidad para los principiantes. Comenzarán a aprender lo que puede y lo que no puede decirse delante de cada persona, qué tipo de actividades deberán llevar a cabo y cómo desenvolverse en cada situación.

Que el mecanismo de los incentivos selectivos tenga alguna efectividad depende de la confianza otorgada al dirigente. Si desaparece la confianza el espejismo se revela como tal y acumular puntos ya no tiene ningún sentido.

Las mencionadas son las condiciones de la racionalidad instrumental de la acción situadas en una configuración social específica. Son una forma de aprovechar instrumentos teóricos surgidos en el contexto de la "antropología imaginaria" expresada en la microeconomía para fines sociológicos. Esta operación es posible siempre que remitamos "la *historia* individual y colectiva de los agentes a través de la cual las

estructuras de preferencias que los habitan son constituidas en una compleja dialéctica temporal con las estructuras objetivas que los produjeron y que ellos tienden a reproducir" (Bourdieu y Wacquant, 2005:183).

El ajuste de orientaciones

Aun en una organización tan consolidada como la UPREZ, con más de dos décadas de aprendizaje, el ajuste de versiones y visiones sobre la acción no llega a la univocidad. La tensión entre dos formas diferentes de articular la experiencia que conviven se resume en el cuadro 2.

Existen dos relatos sobre la vida organizacional de la UPREZ que se configuran como estructuras diferentes de sentido. Un relato que es prevalente en el liderazgo y los militantes es, con frecuencia, el primero que conoce quien se acerca a la organización. En este relato la solidaridad y el desinterés de los líderes y la base explican la totalidad de la vida organizacional. El cambio social y la expansión universal de derechos se configuran como los objetivos perseguidos en el hacer común, el camino para lograrlos puede incluir sacrificios, pero es ante todo un proceso de aprendizaje valioso en sí mismo. El otro sentido es articulado por la base de la organización, los solicitantes lo comparten y producen entre sí. Esta orientación considera a la participación en las actividades que conducirán a la vivienda como un costo que se sopesa con respecto al beneficio esperado. La relación entre dirigentes y base se asemeja a una transacción, un acuerdo mutuamente beneficioso a través del cual unos obtienen la vivienda y otros, capacidad de incidencia política y dinero.

¿Cómo logra el actor operar conteniendo semejante diversidad de sentidos relativos a la participación individual y la acción colectiva? Para la base cuestionar públicamente el sentido que los líderes dan a la acción significa cuestionar su autoridad. El cuestionamiento es entonces privado, se

Cuadro 2. Solidaridad e interés

Idea	*Solidaridad*	*Interés*
Estamos en la organización porque	Porque somos pobres, necesitados. La vivienda es un problema público en la ciudad.	Busco mi beneficio. Quiero una casa para vivir, algo que dejarle a mis hijos.
La participación en las movilizaciones es necesaria	Para demostrar la unión del movimiento.	Para presionar al gobierno y que finalmente den los créditos y presten los servicios.
El sistema de puntaje	Nos sirve para organizarnos, para que todos trabajemos.	Sirve para organizarnos, pero lo manejan los líderes para otros fines.
Las reuniones son	Para aprender, para debatir.	Para que nos den las tareas de la semana.
Vamos a las reuniones porque	Queremos aprender, para informarnos de lo que está pasando.	Queremos que nos vean los líderes. Da puntos. "Me aburro en las reuniones."
En las reuniones hay que	Hablar, preguntar, no quedarse con dudas.	Escuchar lo que dice el líder. Si me opongo seguro que da un argumento mejor y da vuelta lo que quiero decir.
Los líderes tienen autoridad	Por su experiencia, por su conocimiento, por su calidad moral. Están probados en la lucha popular.	Por sus contactos con el gobierno. Porque conocen bien los trámites y el papeleo.
Los líderes son un mal necesario	Porque si todos aprendemos y todos participamos no harían falta líderes. Pero la cultura existente no lo permite.	Porque a veces se roban la plata o nos usan para sus fines políticos. Pero son los que manejan la organización, si no "sería un relajo".

Continúa...

Continúa...

Idea	*Solidaridad*	*Interés*
Hacen falta líderes	Para aprovechar la experiencia de la gente que lleva más años en la organización.	Porque si no es un relajo y cada cual hace lo que quiere.
La participación política de la organización es necesaria	Porque todo es político, no podemos eludirlo. Somos una organización de izquierda y tenemos que apoyar a los proyectos de izquierda.	La organización consigue más rápido sus objetivos si los líderes son capaces de manejarse políticamente. Apoyamos a los líderes porque ellos nos apoyan.
La relación entre la base y la organización	Los intereses reales de la base son expresados por los líderes. No hay intereses divergentes.	Líderes y bases tienen distintos intereses, pero pueden colaborar en una relación de apoyo mutuo.

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo realizado entre febrero y septiembre de 2009. Algunos resultados de esa investigación se encuentran en la tesis doctoral titulada "Intermediación clientelar de demandas sociales y movilización política. La vivienda social en la Ciudad de México", defendida en 2010 en FLACSO Sede México.

elabora entre pares o de manera retrospectiva una vez que se ha dejado la organización. De manera formal y en las actividades de reflexión públicas sobre la dirección que ha de tomar el movimiento se aceptan los sentidos propuestos por los líderes. No se trata de una respuesta de lealtad a la manera de los identificadores postulados por Pizzorno (1990), porque no existe la imbricación profunda entre la identidad colectiva y la identidad individual. El compromiso con la organización es un compromiso condicional que existe mientras se está en el camino para obtener un bien. La salida, que es la respuesta esperada para los miembros de baja lealtad, no se produce en la medida en que el sentido que ellos otorgan a la acción –lo que aquí llamamos interés– siga teniendo un lugar. La participación en las actividades de la organización, incluida la deferencia mostrada a los líderes prestigiosos y dotados de autoridad moral, sigue teniendo sentido, aunque uno diferente. *Estas dos estructuras de sentido se ajustan en la práctica, pero no se integran.* Conviven de manera tensa y se toleran en virtud de un acuerdo tácito. Los líderes guiarán la acción para que alcance sus objetivos y la base no cuestionará su autoridad mientras confíe en esa guía.

El pasaje a la identificación con el movimiento y con el sentido que el liderazgo intenta articular se da en pocos casos y es el pasaje que va de solicitante de vivienda a militante. Se trata de un movimiento infrecuente que se constata en el número de militantes muy inferior al número de solicitantes. Los militantes enmarcan la acción desde la solidaridad, aun cuando son solicitantes de vivienda al mismo tiempo.

Hasta el momento hemos planteado que en la acción de la UPREZ conviven en un ajuste ambiguo[8] dos sentidos diferentes a los que hemos llamado *interés* y *solidaridad*. Un estudio exhaustivo de las estructuras de experiencia

[8] Es decir, conviven en la medida en que llevan a cabo acciones que son inteligibles desde los dos marcos de sentido. No hay una integración plena de sentido.

que los producen excede las posibilidades de este capítulo, sin embargo, a través de la inscripción de los agentes en el campo social del consumo y el estudio de sus trayectorias podemos adelantar algunas hipótesis al respecto.

Una alternativa es retomar el concepto de *discurso oculto* de James Scott (2000) para referirnos a la construcción del sentido *interés*, pero consideramos que las condiciones en las que tiene lugar son muy diferentes a las condiciones extremas de dominación que ese autor propone. Más allá de algunas referencias mediáticas a la "cárcel clientelar" la base de la UPREZ que produce este sentido no es esclava ni está en un campo de concentración. La no emergencia del discurso no se explica por los castigos terribles que pueden esperarles. Todos tienen la posibilidad de abandonar la organización cuando quieran y hasta hemos planteado que para la gran mayoría el *costo identitario* es bajo.

Consideramos, en cambio, al *interés* como un *sentido dominado* a la manera de Bourdieu (Bourdieu y Wacquant, 2005; Grignon y Passeron, 1991; Bourdieu, 2002), es decir, ubicado como socialmente inferior por las estructuras jerarquizantes de clasificación.

EL INTERÉS COMO SENTIDO DOMINADO

En este apartado me propongo presentar un encuadre alternativo para el problema de las tensiones y sentidos divergentes de la base y la dirigencia, ofreciendo una explicación de raíz sociológica para este problema. Sostendré que las tensiones entre la base y los líderes pueden explicarse de manera más exhaustiva y acorde con las sutilezas de los casos concretos si tenemos en consideración *la vida cotidiana y las formas de categorizar el mundo social* de cada una de las partes. Los intereses y, sobre todo, las maneras que se consideran válidas de actuar en el mundo para perseguir estos intereses dependen en gran medida de la forma en que

se vive la vida cotidiana y de la forma en que se organiza el mundo social. Las hipótesis presentadas y sustentadas con la información del trabajo de campo apuntan a: 1) que para la base de la organización las actividades en las que deben participar son una disrupción de lo cotidiano, mientras que para la dirigencia son la cotidianeidad misma y 2) que cierta dotación de capital cultural es la condición para la formación del "desinterés". Sostenemos que hay una diferencia entre el *habitus* de la base y el *habitus* del liderazgo y que en el campo de los actores socio-políticos de la Ciudad de México la disposición *desinterés* (Bourdieu, 1992) –articuladora del sentido solidaridad– logra establecerse como disposición legítima. Por tal motivo, la disposición opuesta no emerge, no logra articularse como un sentido público. La producción del sentido de la acción colectiva no tiene lugar en condiciones de completa igualdad.

Recurriremos a las historias de vida de Rosa –una solicitante de vivienda que ya obtuvo su departamento– y "F." –uno de los líderes del proyecto en el que participó Rosa– para ilustrar las diferentes estructuras de experiencia y sentido. Asimismo propondremos al análisis del espacio social configurado por las coordenadas capital económico y capital cultural y los movimientos registrados en ese espacio para dar cuenta de la relación entre posiciones y disposiciones.

Vida cotidiana, relatos y sentidos de la acción colectiva

Para los vecinos históricos de El Molino, los que pertenecen a las cuatro manzanas originales construidas a mediados de los años ochenta, las acciones que llevaron a cabo y que condujeron a la obtención de la vivienda escaparon por completo a la trama de acciones que solían llevar adelante día tras día. Participar de asambleas, tomar la palabra en público, exponer puntos de vista que podrían contradecirse

con los de otros, ir a marchas, plantones, estar presente en reuniones con autoridades, debatir la pertinencia de una solución u otra para problemas de servicios urbanos, fueron actividades en las que se involucraron en ese momento, pero que escapaban al curso regular de los acontecimientos. "Rosa", una de las informantes más importantes en el trabajo de campo, recuerda este periodo no sólo como uno de muchos sacrificios, también como extraordinario, en el que hizo cosas que jamás había hecho y que no volvió a hacer. Hoy la vida de Rosa transcurre, principalmente, en los confines de su barrio. Con su hija tienen instalado un puesto precario en una esquina donde venden jugo de naranja recién exprimido. Sus clientes son sus vecinos, difícilmente concreta una venta sin antes saludar al comprador, preguntarle cómo van sus cosas, qué es de su familia, cómo está la salud. Cuando no está trabajando –las naranjas se acaban normalmente al mediodía y se cierra el puesto– Rosa se dedica a las actividades domésticas, prepara la comida para sus hijos, su marido y sus nietos. Sale muy poco del barrio y cuando lo hace es para atenderse por algún problema de salud o para acompañar a su marido en las visitas al pueblo en el que ha nacido, una pequeña localidad en Puebla que tampoco es del agrado de Rosa.

Cerca de la casa de Rosa vive "el Frijol", uno de los líderes originales del FPFV,[9] quien llegó a ser diputado local por el PRD. Mientras encontrar a Rosa en la esquina de El Molino, siempre que la salud lo permita, es tan fácil como caminar al puesto en el que trabaja, dar con el Frijol es mucho más difícil. José –es su nombre– está terminando una licenciatura en ciencia política y ya ha comenzado una maestría en la misma especialidad. Cuando lo veo por tercera vez lo encuentro, como habíamos acordado, en el patio de la universidad en la que estudia. Está con algunos militantes nuevos del

[9] Frente Popular Francisco Villa.

Frente, ellos también estudiantes, discutiendo el plan de trabajo que les asignará: con un mapa de la Ciudad de México se reparten lugares en los que irán a ver gente, potenciales beneficiarios de un programa de apoyo a desempleados que planea implementar el gobierno de la ciudad. El Frijol concluye que lo importante es "crear al sujeto político". Cuando hace la historia de su vida, José relata, principalmente, hechos políticos. Haber participado en tal o cual lucha, haber formado parte de tal o cual comisión, haber apoyado tal o cual proyecto. Sólo recuerda algunas de las movilizaciones en las que tomó parte, las primeras con aquel primer grupo que intentaron organizar en Iztapalapa, las que marcaron hitos en la construcción de las viviendas de la Cooperativa Allepetlalli, aquellas en las que la represión policial fue particularmente intensa.

El transcurrir del día a día de Rosa y del Frijol es, a pesar de la cercanía territorial de su residencia, muy diferente. Para los líderes las tareas de organización, movilización, presión a las instancias gubernamentales, son una parte fundamental de la vida y lo ha sido desde hace décadas. La mayoría de los líderes tiene al menos 20 años dentro de la organización y desde sus comienzos –ya sea como militantes estudiantiles, sindicales o directamente en organizaciones sociales– han participado en este tipo de actividades. No sólo es un repertorio que conocen y dominan a la perfección, es una práctica cotidiana que de algún modo "llena" sus vidas hasta tornarse completamente "natural", invisible. Coordinar la demanda social y actuar políticamente *es* su vida cotidiana.

Participan, utilizando la categoría de Bourdieu, de la *illusio* del campo de la movilización política y social de la Ciudad de México, campo que ellos mismos han contribuido a crear y mantener funcionando (Bourdieu, 2003). Viven cotidianamente y con intensidad "el sentido del juego", son capaces de leer los mínimos detalles de cada negociación, de

calcular sus fuerzas frente a las de los aliados o adversarios, medir el compromiso de la base con ellos mismos y con el proyecto que encabezan. Los dirigentes están, en un sentido fuerte, *involucrados*. Sienten como propias las venturas y desventuras de cada negociación, viven como éxito o fracaso personal lograr una asistencia amplia o moderada en las actividades a las que convocan. ¿Qué harían si no estuvieran yendo a una marcha o una reunión?

Para quienes integran o integraron la base de las organizaciones, tomar parte junto a un colectivo en estas actividades se trata de un mero momento de su biografía, unas horas a la semana que deben quitarle a la marcha normal de los acontecimientos, desatendiendo el trabajo, la familia o el esparcimiento. La participación en la escena pública es un acto irregular para el que no se sienten nunca del todo preparados y que no logran dominar del todo.

Estas diferencias en la vida cotidiana de cada uno, aunque estén a tres casas de distancia, explican mucho de las tensiones entre base y dirigencia. Para unos, el estado de movilización permanente no sólo es posible y deseable, es el hacer que constituye su ser. Se han hecho lo que son a través de la movilización y la negociación. Para los otros, las actividades privadas y la interacción previsible con *sus iguales*, con aquellos con quienes se sienten cómodos, no sólo es posible y deseable, es el hacer que constituye su ser. Se han hecho lo que son siendo familia de su familia, amigos de sus amigos, vecinos de sus vecinos. Movilizarse para demandar algo, ir a asambleas o faenas, implica alejarse de sus satisfactores cotidianos.

Dos cotidianeidades articulan formas de ver el mundo y de darse a uno mismo un lugar en ese mundo. Dos cotidianeidades configuran aquello que se considera un costo y aquello que se considera un beneficio. No podríamos deducirlo de antemano, siguiendo un patrón puramente teórico que para funcionar debe remitirnos a una naturaleza humana fija,

inmutable. Tanto para los dirigentes como para la base, la movilización tiene un valor instrumental, a través de ella se logran cosas. Sin embargo, lo que logra uno y otro participando de la misma actividad son cosas diferentes. Además de los resultados que arroja, para los dirigentes la movilización es valiosa por sí misma. Es una situación pedagógica que debería producir en los demás los mismos cambios subjetivos que produjo en ellos. Sirve para reproducir una vida cotidiana pública, el contexto más inmediato de sus acciones. Para la base, la movilización tiene un valor instrumental, sirve para reproducir una vida cotidiana privada, para aumentar sus posibilidades de consumo personales y familiares.

A diferencia de los solicitantes que viven en sus territorios, los intermediarios viven literalmente en la interfaz. Su vida cotidiana transcurre de reunión en reunión, asisten a marchas, asambleas, talleres, en los muchos puntos de contacto con la administración pública.

Posiciones y disposiciones

La posición de líder se recrea en la vida cotidiana del líder. No es líder solamente cuando está atendiendo los asuntos del proyecto que tiene en marcha, toda su vida transcurre entrando en contacto con la amplia red que ha tejido a lo largo de su vida. Los líderes o dirigentes no sólo viven para ser dirigentes, viven de serlo. Las actividades de intermediación ofrecen los recursos simbólicos con los que reproducen y dan sentido a su vida, y también les ofrecen los recursos materiales. Las organizaciones proporcionan un ingreso a sus dirigentes y en algunos casos a los militantes pero mucho menor. Existen varias fuentes de recursos reconocidos para el financiamiento de las organizaciones. Una de ellas es la contribución con una parte del salario percibido por aquellos miembros plenos que obtuvieron, por intermedio de la organización, un trabajo en el sector público. El patronazgo

de cargos no sólo permite la reproducción de la vida material de quienes llegan a esos cargos, permite también una redistribución dentro de la organización. Estos temas suelen tratarse con gran secrecía, en realidad nadie se pregunta cómo consiguen sus ingresos estas personas que no tienen otras fuentes visibles de dinero. Desde la base, en algunos casos, circulan rumores sobre fuentes turbias de financiamiento de las actividades, pagos en efectivo a cambio de movilizar políticamente a sus bases, recirculación de dinero público malversado por aliados, etc. Las prácticas de esta "zona gris" no emergieron durante el trabajo de campo, fue inclusive difícil conseguir que alguien hablara sobre otras fuentes más legítimas de ingresos. Entre las observadas durante el trabajo de campo se cuentan la renta de inmuebles construidos por las organizaciones, ya sean viviendas o locales comerciales.

Los empleos en la administración pública, ya sea como funcionarios burocráticos u ocupantes de puestos de representación popular, han sido uno de los caminos más transitados por los que los dirigentes han mejorado sus ingresos. Más allá del prestigio que trae asociado y de tener un valor simbólico en el campo con el que están comprometidos, estas posiciones ofrecen salarios difíciles de igualar. Asimismo permiten dar empleo a otros miembros de la organización en puestos subordinados. El mecanismo del patronazgo de cargos es utilizado principalmente con aquellas personas más cercanas y que han participado en las campañas electorales o apoyado al que ocupa la plaza. Son un premio a la lealtad y un reconocimiento a los servicios prestados y se utiliza con un grupo relativamente pequeño de personas.

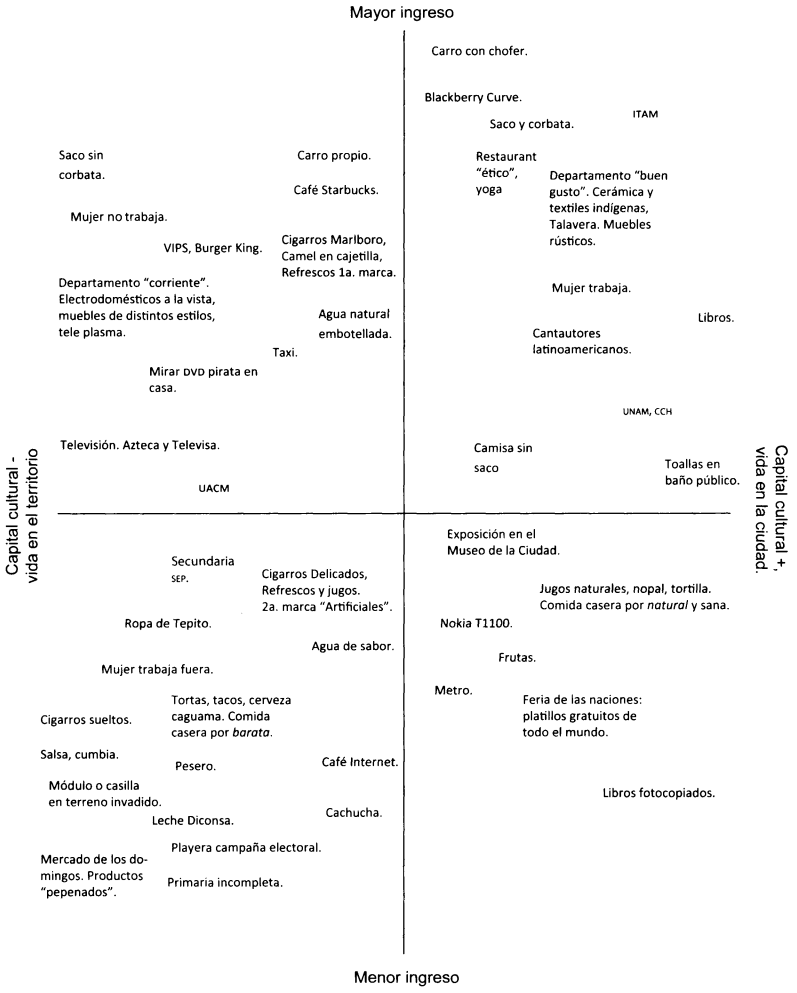
El ingreso y sus fuentes, sobre todo en el caso de los dirigentes, son prácticamente imposibles de tratar de manera directa. Sin embargo, podemos inferir algunas de las propiedades de su economía observando el otro extremo de la vida material: el consumo. La información etnográfica recogi-

da indica marcadas diferencias en los patrones de consumo de los distintos agentes. La relación entre ingreso y consumo no es directa e inmediata. Por un lado, está el ahorro, una variable que no puede ser contemplada con la información disponible, pero analizar cómo se agrupan ciertos consumos podrá darnos alguna información sobre los gustos socialmente construidos que a través de ellos se expresan (Bourdieu, 2002). Los diferentes gustos por cada sector nos dan pistas sobre la discontinuidad social que nos interesa explicar. El ingreso es, evidentemente, una variable importante para explicar esa discontinuidad, aunque no es la única. En niveles similares de ingreso podemos encontrarnos con variaciones marcadas. Algunos consumos son accesibles más allá del ingreso –espectáculos y exposiciones en museos de carácter– y dentro de niveles de ingreso similares podemos encontrarnos con formas muy diferentes de organizar el gasto.

El eje que corre verticalmente indica la variable Ingreso, entendida de manera aproximada a través del consumo. Hacia arriba el consumo de bienes más costosos, hacia abajo el de bienes más baratos. El eje horizontal se mueve desde un menor a un mayor capital cultural. Un mayor capital cultural –más a la derecha en el esquema– se identifica con una primacía de los consumos "cultos", mientras que una menor dotación de éste se identifica con los consumos populares articulados desde la "necesidad" (Bourdieu, 2002). Para nuestro caso un menor capital cultural se asocia con consumos que se dan en el territorio, en el lugar en el que se vive. Un mayor capital cultural se vincula con una mayor apertura a la ciudad como espacio amplio para el consumo.

En cuanto a las viviendas, están atravesadas por ambos ejes. Viviendas en las que se puede equiparar el gasto que cada uno ha hecho en la decoración y el arreglo ofrecen resultados muy diferentes. A menor capital cultural mayor exposición y énfasis en los electrodomésticos, a mayor capital cultural mayor "cuidado" en la decoración. Ésta es más

Esquema 2. Consumo y nuevas desigualdades



Fuente: Elaborado en el espíritu de los formidables esquemas de asociación con los que Pierre Bourdieu expone las curiosas asociaciones de variables en *La Distinción*. Este esquema ilustra la ubicación de ciertos consumos de los actores que durante el trabajo de campo compartí con ellos u observé que realizaban.

discreta y se compone de artículos de producción artesanal y no de producción en masa. El gusto por la música también se mueve sin una relación directa con el costo de adquirirla, aunque hay una tensión entre los productos "pirata" y los CDs originales. Hacia la derecha se encuentra un gusto marcado por los cantautores latinoamericanos, mientras que a menor capital cultural nos encontramos con el gusto por las rancheras en los adultos y por los ritmos tropicales de alta difusión en la radio por parte de los jóvenes.

Algunos consumos cambian más marcadamente en el eje de ingreso. El consumo de cigarros de marcas Premium (Camel, Marlboro) sólo se da entre los de ingreso más alto, a nivel intermedio se consumen cajetillas de marcas más económicas (Delicados) y todavía más abajo es usual, sobre todo entre los jóvenes desempleados, la compra de cigarros sueltos.

En cuanto a la educación hay una relación entre el nivel alcanzado y el costo de los consumos, en la cima están algunos egresados de universidades privadas caras. Más abajo, en términos de ingreso, se encuentran aquellos que estudiaron en universidades públicas de renombre. Las universidades más nuevas (UAM-I y UACM), con su cercanía territorial y sus estándares de admisión más accesibles para quien carece de contactos, son una alternativa frecuente a menor capital cultural.El trabajo de la mujer está cruzado por ambos ejes. Menor capital cultural y mayor poder adquisitivo se asocia con menor trabajo femenino fuera de las actividades del hogar. En los renglones de ingreso más bajos, el trabajo femenino reaparece como una necesidad para complementar el ingreso del hogar, trabajan en el sector informal del comercio o como empleadas domésticas. En cambio, a mayor capital cultural son frecuentes los casos de mujeres que trabajan, pero ese trabajo se enfoca desde el punto de vista de una carrera profesional.

El esquema 3, "Los actores y posiciones en el campo social", agrega información al esquema anterior. Se los

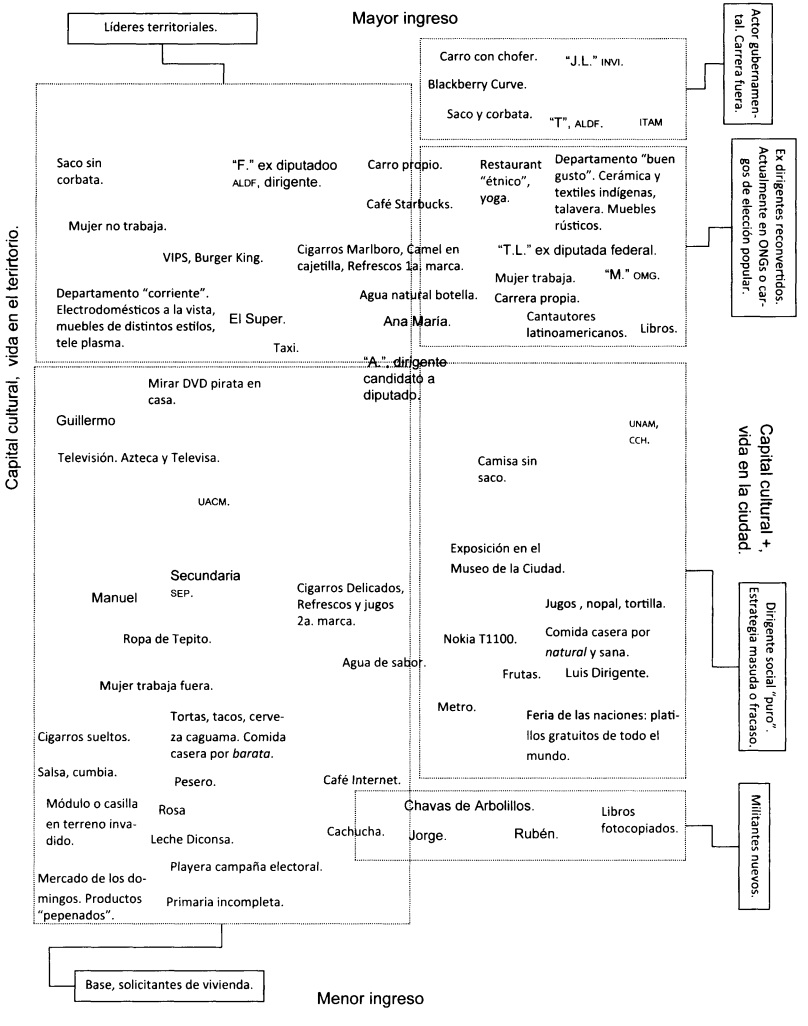
presenta por separado para facilitar su legibilidad. En este esquema se ubican en el espacio trazado por los dos ejes algunas personas que fueron entrevistadas u observadas durante el trabajo de campo. Asimismo se agrupan los consumos señalando a qué tipo de actores corresponde.

El objetivo de estos esquemas es presentar resumidamente las diferencias entre los actores. Actores gubernamentales, actores políticos exitosos surgidos de las organizaciones sociales, dirigentes sociales que no han podido o no han querido dar el salto a la política, líderes territoriales, militantes que han entrado al patronazgo de cargos y la base tienen pautas de consumo muy distintas que no se ordenan solamente por la variable ingreso. Provienen de lugares distintos en el espacio social, tienen una socialización diferente que se expresa en ciertos gustos y estilos de vida. Estos diferentes hábitos de consumo –su posición actual en el espacio definido por los dos ejes– no es fruto del azar, aunque éste pueda haber intervenido un poco. Es fruto de su posición inicial y de las estrategias que han llevado adelante.

¿Cómo se dan los desplazamientos dentro del campo? La información recolectada en el trabajo de campo nos permite presentar algunos casos de trayectorias sociales, es decir, variaciones en el tiempo en la dotación de capital cultural y económico. Retomando la representación espacial que proponemos en el esquema, un desplazamiento horizontal indica variaciones en el capital cultural, mientras que uno vertical en el económico. Al plantear estas dos dimensiones podemos tener una idea más detallada de las trayectorias sociales posibles. Hay caminos abiertos y caminos cerrados y, en general, es más difícil que se registren incrementos en la dotación de capital cultural que en la de económico.

Las trayectorias de los dirigentes son llamativas. Todos parten de posiciones similares, pero las trayectorias laborales surgidas de decisiones tomadas –competir electoralmente o no, comprometerse en tramas de patronazgo de cargos, re-

Esquema 3. Actores y posiciones en el campo social



convertirse como asesores exitosos desde ONGs– y el éxito que han tenido en materializar esas decisiones, implican cambios en las pautas de consumo y en las personas con las que socializan. El consumo es una parte de esa socialización.[10] El solicitante de vivienda que se convierte en militante y desde esa posición alcanza un puesto de trabajo bien remunerado en la administración pública no sólo se convierte en alguien más influyente y respetado en su medio, también lleva adelante una auténtica proeza de movilidad social e intenta adaptar sus gustos y patrones de consumo a los de sus nuevos compañeros. El dirigente que se presenta con éxito en un proceso electoral se verá rodeado, ocupando el puesto que ha alcanzado, de unos nuevos iguales. Esos nuevos iguales se convierten en un marco de referencia para su consumo, pertenecer a ese grupo implica consumir algunos bienes y servicios y no otros. Si bien mantendrá su contacto con las bases que lo ayudaron a llegar allí, se convertirá lentamente en otra persona. Si no obtiene el trabajo mejor remunerado ni ingresa a ese nuevo entorno social permanecerá inmerso en un estilo de vida más similar al de sus bases, incidido por la dotación inicial de capital cultural. Un dirigente que no hace el salto a la política electoral comparte algunos de los hábitos de consumo de la base o al menos el de los mejor posicionados de ese grupo. Sin embargo, su mayor capital cultural y social lo dirigen a otro tipo de consumos y de actividades de esparcimiento.

La opción de reconvertirse exitosamente en asesor –trabajo generalmente vinculado a las organizaciones no gubernamentales– depende del capital cultural. Es una alternativa para ex dirigentes con estudios universitarios y las habilidades sociales necesarias para insertarse en ese medio. Los líderes territoriales pueden alcanzar niveles de

[10] Esto pude saberlo de primera mano durante el trabajo de campo. Dependiendo del lugar en el que me encontrara y de la gente con la que estuviera, los productos disponibles eran otros.

ingreso más elevados que la base con la que viven, sin embargo, comparten muchos de sus gustos, gustos que la base no siempre puede darse, pero al menos aspira a hacer efectivos.

Dentro de la base existen diferencias en cuanto al consumo y estilos de vida. Aquellos que son "segunda generación" o ya han adquirido la vivienda, tienen ingresos disponibles un poco más altos y consumos más diversificados. Otros están en posiciones más precarias y vulnerables, pues todavía viven en asentamientos o pagan renta. Algunos de ellos se acercan a dirigentes como militantes y aun sin conseguir por esa vía mejores empleos pueden diversificar sus opciones de consumo dentro de la restricción presupuestal. Tienen acceso principalmente a consumos culturales gratuitos –museos, ferias de alimentos– o de bajo costo –libros fotocopiados o de biblioteca.

La referencia a Pierre Bourdieu nos permite movernos de la sociología del gusto a la sociología política. En una y otra, sostiene el sociólogo francés, hay sentidos legítimos y sentidos ilegítimos, dominantes y dominados. El sentido *interés* corresponde al expresado –en privado– a los entrevistados de los cuadrantes ubicados a la izquierda de los esquemas presentados. El sentido *solidaridad* a los cuadrantes ubicados a la derecha.

CONCLUSIONES

En el inicio de este capítulo nos propusimos atender lo que llamamos carácter polisémico de la acción colectiva. El marco de la discusión lo ofrecieron dos teorías que expresan posiciones disímiles sobre el tema: la diversidad de motivaciones individuales de Elster y el ajuste colectivo de las definiciones de la acción de Melucci. Estamos en condiciones de hacer un balance sobre las posibilidades teóricas de una y otra.

De la posición elsteriana podemos rescatar únicamente algunos aspectos y sólo en tanto que reconstruyamos sus

fundamentos teóricos con supuestos radicalmente diferentes a los que considera este autor. Con esa intención proponemos el concepto más manejable de sentido en el lugar del de motivación. Asimismo hemos planteado que la acción egoísta orientada al resultado no es un presupuesto lógico de la teoría de la acción –como lo expresa en su texto de 1985– y mucho menos una característica biológica hereditaria como sostiene en 2010 (Elster, 2010). Ese tipo de acción existe, pero puede y debe ser explicada con recurso a la génesis social de las estructuras de preferencias que son su condición de posibilidad.

Conservamos, en cambio, algunas ideas derivadas de esos supuestos reformulados. La primera es la definición de la acción colectiva como producción de bienes públicos amenazada por las estrategias no cooperativas. Dicho de otro modo, la definición individualista que conceptualiza a la acción colectiva como el resultado de las elecciones –nunca soberanas– de las personas. Eso nos dirige al problema del sentido en la AC y a la segunda idea que retomamos de Elster. El problema del sentido de la AC es formulado como el problema del sentido de la participación de cada uno, más que el sentido de la acción como totalidad o sistema, multipolar o no. La acción colectiva debe tener un sentido que resuene en la biografía de quienes en ella participan. Siguiendo la recomendación weberiana el analista debe procurar captar esa conexión de sentido (Weber, 1983).

De la propuesta de Melucci destacamos la noción de ajuste e integración de orientaciones y el énfasis en la vida cotidiana de los actores colectivos más que las manifestaciones públicas de su existencia. Ese énfasis da un fundamento a la opción etnográfica que proponemos para el estudio de los movimientos sociales. Sin embargo, el ajuste no conduce necesariamente a la definición de un nosotros totalizante del actor. En el caso que presentamos conduce a la formación de los dos sub-nosotros o estructuras de sentido que hemos

tratado de fijar en este texto. Expectativas fundadas en dos estructuras de sentido diferentes que no logran integrarse, pero se articulan y hacen posible a la acción. La integración se apoya en una coincidencia práctica más que semiótica, una coincidencia de la que no se habla.[11]

Esa imposibilidad de una integración semiótica –que no es obstáculo para la acción– no es un producto de la casualidad o un defecto del actor. Está inscrita en la vida cotidiana de la que emergen las estructuras de sentido. A pesar de la cercanía física y las relaciones afectuosas que mantienen, líderes y base viven mundos sociales diferentes. El sentido práctico que sirve de guía en uno no cuadra demasiado bien en el otro. Una integración completa –la conversión de todos los solicitantes en militantes– conllevaría un desdoblamiento de la experiencia demasiado desgarrador. A pesar del esfuerzo realizado por algunos líderes por "hacerse uno" con sus liderados, que han llegado en algunos casos a optar por vivir en sus mismas condiciones materiales, ciertas disposiciones formadas previamente en la universidad, la militancia política y otros ámbitos de socialización siguen impregnando su forma de clasificar y organizar el mundo. Esa trayectoria diferente los ubica en una relación supraordinada con respecto a sus bases. La escala valorativa que proponen los ubica en el tope: son los más desinteresados, los más conscientes, los más honestos, los que más saben. El resto asiente y espera pacientemente la realización de sus expectativas, producidas

[11] Dos propuestas teóricas sobre la integración de la heterogeneidad y la contingencia para la constitución de actores colectivos quedaron fuera de este debate que se centró en aportes teóricos fincados en la tradición accionalista. Una es la apenas mencionada teoría de la autopoiesis y clausura operativa de los sistemas sociales propuesta por Luhmann que está dando sus primeros frutos en el análisis de la protesta social en América Latina (Estrada, 2012). La otra es la de la formación de cadenas equivalenciales propuesta por Laclau y su comprensión de la articulación de los sujetos políticos en un registro simbólico (Laclau, 2005).

y reproducidas en otro ámbito, a las que forman y que los forman desde otra experiencia.

La mención de la racionalidad instrumental como sentido práctico involucrado en la acción colectiva de los sectores populares nos dirige a otra reflexión, menos teórica y más práctica y política. Llevada a sus últimas consecuencias tiene una connotación incómoda: que las bases de las organizaciones a las que la literatura sobre el tema refiere como autónomas (Ramírez, 2005) podrían optar por liderazgos abiertamente partidistas si les ofrecen el acceso a los mismos bienes de manera menos costosa. Debemos contemplar una vez más la confianza en los líderes como límite a esta posibilidad. Quienes quieran reemplazarlos deberán contar no sólo con acceso a recursos gubernamentales, también deberán hacer llegar la información sobre su confiabilidad a las redes densas de supervivencia en las que se insertan los sectores populares de la Ciudad de México. Lo segundo es mucho más difícil que lo primero.

BIBLIOGRAFÍA

Bouchier, Josiane (1990), "La paradoja de la unidad. El movimiento urbano popular y Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup)", en Sergio Zermeño y Aurelio Cuevas (coords.), *Movimientos sociales, democracia emergente y sistema político en México,* México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, pp. 203-219.

Bourdieu, Pierre (2003), *El oficio del científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad*, Barcelona, Anagrama.

_____ (2002), *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, México, Taurus.

_____ (1992), *Razones prácticas: sobre la teoría de la acción,* Barcelona, Anagrama, trad. Thomas Kauf.

Bourdieu, Pierre y Loïc Wacquant (2005), *Una invitación a la antrología reflexiva*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Calhoun, Craig (1999), "El problema de la identidad en la acción colectiva", en Javier Auyero (ed.), *Caja de herramientas: el lugar de la cultura en las ciencias sociales,* Buenos Aires, Universidad de Quilmes, pp. 77-114.

Elster, Jon (2010), *La explicación del comportamiento social. Más tuercas y tornillos para las ciencias sociales*, Barcelona, Gedisa.

_____ (1985), "Rationality, Morality and Collective Action", *Ethics*, vol. XCVI, núm. 1, pp. 136-155.

Estrada Saavedra, Marco (coord.) (2012), *Protesta social: tres estudios sobre movimientos sociales en clave de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann*, México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.

Favela Gavia, Diana M. (2006), *Protesta y reforma. Interacción entre Estado y sociedad 1946-1997,* México, UNAM, Plaza y Valdés.

Grignon, Claude y Jean-Claude Passeron (1991), *Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y literatura*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Guerra Blanco, Edgar Everardo (2012), "Protesta a marchas forzadas: el caso del Frente Popular Francisco Villa en la Ciudad de México, 1983-2010", en Marco Estrada Saavedra (coord.), *Protesta social: tres estudios sobre movimientos sociales en clave de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann,* México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.

Jasper, James M. (2010), "Social movement theory today: Toward a theory of action", *Sociology Compass*, vol. IV, núm. 11, pp. 965-976.

Laclau, Ernesto (2005), *La razón populista,* México, Fondo de Cultura Económica.

Lomnitz, Larissa Adler de (1975), *Cómo sobreviven los marginados,* México, Siglo XXI.

Luhmann, Niklas (2005), *Confianza,* México, Anthropos, Universidad Iberoamericana, trad. Amada Flores.

Melucci, Alberto (1991), "La acción colectiva como construcción social", *Estudios Sociológicos,* vol. IX, núm. 26, pp. 357-364.

Moctezuma, Pedro y Bernardo Navarro (1984), "Proletariado, Estado y reproducción de la fuerza de trabajo en las colonias populares", *Nueva Antropología*, vol. VI, núm. 24, pp. 5-20.

Noguera, José A. (2007), "Racionalidad y deliberación en la acción colectiva", *Revista Internacional de Sociología,* vol. LXV, núm. 46, pp. 107-129.

_____ (2003), "¿Quién le teme al individualismo metodológico? Un análisis de sus implicaciones para la teoría social", *Papers,* núm. 69, pp. 101-132.

Olson, Mancur (1991), *La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y la teoría de grupos*, México, Limusa.

Opp, Karl D. (2009), *Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis*, Abingdon, Routledge.

Paladino, Martín (2010), *Intermediación clientelar de demandas sociales y movilización política. La vivienda social en la Ciudad de México,* México (mimeo).

_____ (2004), "Acá somos piqueteros. Los sentidos divergentes de la acción colectiva", Argentina, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de la Plata, tesina de licenciatura.

Paramio, Ludolfo (2000), "Decisión racional y acción colectiva", *Leviatán: Revista de hechos e ideas*, núm. 79, pp. 65-83.

Pizzorno, Alessandro (1990), "On the Rationality of Democratic Choice", en Pierre Birnbaum y Jean Leca, *Individualism*, Oxford, Clarendon Press.

_____ (1989), "Algún otro tipo de alteridad: una crítica a las teorías de la elección racional", *Sistema*, núm. 88, pp. 27-42.

Ramírez Sáiz, Juan Manuel (2005), "Organizaciones urbano-populares, producción habitacional y desarrollo urbano en la Ciudad de México, 1980-2002", *Desacatos,* núm. 19, pp. 113-136.

_____ (1984), "Los movimientos sociales en el Valle de México: elementos para una caracterización", *Nueva Antropología,* vol. VI, núm. 24, pp. 21-33.

Reyes, Terelupe, Jaime Rello y Jaime Ávila (1994), "Mirando desde la UPREZ", México, Casa y Ciudad.

Sánchez Mejorada, Ma. Cristina (2004), "De actores y programas sociales en la Ciudad de México. El caso del Programa de vivienda en lote familiar", *Andamios,* vol. 1, pp. 77-108.

Schteingart, Martha (2011), "La división social del espacio en las ciudades", *Revista Herramienta,* vol. 15, núm. 48, URL: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-48/la-division-social-del-espacio-en-las-ciudades.

Scott, James (2000), *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*, México, Era.

Weber, Max (1983), *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, México, Fondo de Cultura Económica.

Zermeño, Sergio (2001), "El contexto de la organización social en el Distrito Federal", en Jaime Castillo Palma, Elsa Patiño Tovar y Sergio Zermeño, *"Pobreza y organizaciones de la sociedad civil"*, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, pp. 97-123.

VI. ENTRE CLIENTELISMO Y CONTIENDA. LOS DESALOJOS DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (1993, 2007)

DIANA ALEJANDRA SILVA LONDOÑO*

En este trabajo analizamos las formas de acción colectiva desplegada por parte de las organizaciones de comerciantes ambulantes en respuesta a las iniciativas de desalojo de las calles del Centro Histórico adelantadas por el gobierno del Distrito Federal a partir del enfoque de la dinámica de la contienda política (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005). Al revisar la literatura existente sobre el tema, encontramos una serie de desafíos relacionados con las dificultades de caracterizar el tipo de acción colectiva y el nudo sobre el cual se desarrolla el conflicto, las cuales obedecen al predominio de los análisis que asocian a las organizaciones de los sectores populares con la pasividad y la ausencia de acción colectiva (Lomnitz, 1994; Cornelius, 1975).

En este sentido, sostenemos que la presencia de relaciones clientelares no limitó necesariamente la capacidad de organización y de acción estratégica de las organizaciones de comerciantes ambulantes. Por el contrario, en algunos casos potencializó su capacidad para adoptar, sobrellevar

* Doctora en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México. Becaria del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

o influenciar la formulación y/o aplicación de las políticas públicas en su favor a través de un conjunto de estrategias que van desde pleitos legales, marchas, manifestaciones, sigilos y sobornos, como se ha mostrado en otras investigaciones sobre el tema (Cross, 1998; Gordon, 1998; Silva, 2011). Considerando lo anterior, buscamos contribuir al conocimiento de las dimensiones políticas de la informalidad, las cuales se han insinuado, mas no investigado a profundidad (Fernández-Kelly, 2006). En efecto, dentro de las investigaciones sobre el tema han predominado los estudios que analizan las dimensiones económicas de la informalidad desde una amplia diversidad de perspectivas. La informalidad se ha analizado, por un lado, como el resultado de la incapacidad del sistema económico para absorber mano de obra (Tokman, 1995); por otro, como un sector necesario dentro del proceso de flexibilización laboral que requiere el sistema capitalista en su fase actual (Portes, 1995) o, finalmente, como el resultado de la energía empresarial de los sectores populares que dadas las condiciones del mercado laboral, consideran más ventajoso vincularse con el sector informal (De Soto, 1987).

Teniendo en cuenta lo anterior, organizamos este texto en cinco apartados. En el primero, presentamos brevemente las coordenadas teórico-metodológicas que orientaron la investigación. Posteriormente, contextualizamos el fenómeno del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México y el marco en el que se producen los desalojos en los años 1993 y 2007. A continuación, describimos la base organizacional que estructura las relaciones sociales en este espacio social caracterizadas por la presencia del clientelismo político. En el cuarto apartado, damos cuenta de la naturaleza del conflicto y de la acción colectiva desplegada mediante la presentación de tres acontecimientos que seleccionamos de los desalojos estudiados. Por último, terminamos el capítulo con algunas reflexiones finales.

LA DINÁMICA DE LA CONTIENDA COMO INSTRUMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA ORDENAR LA MIRADA

Para dar cuenta de los procesos de desalojo del comercio ambulante del Centro Histórico de la Ciudad de México, recurrimos al análisis de la dinámica de la contienda política propuesta por McAdam, Tarrow y Tilly (2005). Estos autores definen la contienda política como un tipo particular de interacción caracterizada por ser episódica, que tiene lugar en público, supone la interacción entre quienes reivindican y otros. Es reconocida por esos otros como algo que tiene efectos sobre sus intereses y hace intervenir al gobierno como mediador, objetivo o reivindicador. Aunque los autores emplean esta definición para el análisis de una serie de episodios de cambio social –entre los que se destacan las revoluciones, los procesos de democratización y la construcción de los Estados nacionales– los aspectos más relevantes de su enfoque metodológico pueden ser adaptados para comprender una amplia diversidad de conflictos, entre los que se ubica el caso que nos ocupa. Si bien los procesos de desalojo de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico se amparan en programas, decretos y bandos, el resultado de su aplicación ha sido influenciado por el conflicto y la acción estratégica de los actores involucrados.

El análisis de la dinámica de la contienda propuesta por McAdam, Tarrow y Tilly (2005), nos ofrece una serie de herramientas para elaborar una narrativa en la que reconstruimos una secuencia de sucesos ordenados en el tiempo basada en el análisis de las acciones e interacciones entre actores sociales, que intervienen en los tres acontecimientos que presentamos. Con la construcción de esta narrativa, establecemos una serie de puentes entre los datos empíricos recabados mediante entrevistas en profundidad, la observación directa

y la revisión de prensa,[1] con una serie de conceptos que nos permitan identificar, en términos teóricos, la secuencia de acciones, interacciones y los contextos de actuación (Sommers, 1994). A través de esta narrativa, damos cuenta de las acciones, estrategias y repertorios desplegados por parte de los actores sociales involucrados considerando en cada caso la capacidad que cada uno de ellos tiene para limitar o no la acción de los otros. Más allá de buscar una explicación causal cristalina, ofrecemos una explicación plausible para los eventos analizados, que nos permita comprender cuál es la dinámica que impulsa la contienda a través del tiempo, entendida ésta como un proceso complejo con posibilidades distintas de interpretación y de reconstrucción.

Si bien las interacciones entre actores sociales no se limitan a los tres momentos que analizamos, los hemos escogido puesto que allí se despliegan los argumentos, las acciones, estrategias y repertorios de las organizaciones de comerciantes ambulantes y de quienes se oponen a su presencia en las calles. De este modo, nos permiten analizar la correlación

[1] Este artículo toma como base el trabajo de campo efectuado entre julio de 2008 y agosto de 2009 en el Centro Histórico de la Ciudad de México en el marco de mi tesis doctoral. Los datos que aquí se presentan, se soportan en una diversidad de fuentes recabadas a lo largo del proceso de investigación. Entre ellas: 1) las notas de campo resultantes de la observación sistemática al área de estudio, 2) una cronología de acontecimientos elaborada a partir del análisis de la prensa escrita para el periodo de tiempo estudiado (*La Jornada, El Universal, El Día, Excélsior, Reforma, Proceso*), y 3) las entrevistas en profundidad con líderes y lideresas de organizaciones de comerciantes ambulantes, funcionarios del Distrito Federal y representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2006-2009), encargados de la problemática; funcionarios de las instituciones encomendadas a la preservación del patrimonio a nivel federal e internacional; y a los comerciantes establecidos. En estas entrevistas en profundidad indagamos sobre los aspectos principales de las políticas de desalojo del Centro Histórico, la definición de la problemática, las acciones emprendidas y los retos enfrentados. Los nombres de los entrevistados han sido cambiados para preservar su identidad.

de fuerzas en este campo de conflicto y negociación en el cual es posible visibilizar las distintas concepciones acerca de los usos, funciones e imágenes del Centro Histórico, las contradicciones que se producen por la presencia del comercio en las calles, las acciones realizadas por los distintos gobiernos para retirarlos y las acciones por parte de las organizaciones de comerciantes ambulantes para evitar su retiro. En este sentido, más que analizar el éxito o el fracaso de las políticas de desalojo, buscamos analizar las distintas lógicas que intervienen en la problemática por parte de los actores estatales, de las organizaciones de comerciantes ambulantes y del mundo empresarial. Mediante el análisis de estos tres momentos, podemos contrastar las posturas y las interacciones de los actores sociales involucrados, así como sus relaciones con los contextos de situación. En este sentido, no se analizan los episodios de contienda como secuencias lineales sino como "lugares iterativos de interacción en los que se solapan diferentes oleadas de movilización y desmovilización, se forman y evolucionan las identidades y se inventan, se afinan y se rechazan nuevas formas de acción cuando los actores interactúan entre sí y con sus oponentes y terceras partes" (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005: 32).

Por otro lado, la cuestión temporal nos permite explicar el curso y la transformación de la contienda, las trayectorias de los actores sociales involucrados, los cambios contextuales entre un momento y otro, así como los procesos y los mecanismos implicados. Ahora bien, siguiendo la propuesta planteada por McAdam, Tarrow y Tilly (2005), los episodios de contienda están conformados por la concatenación de una serie de procesos, los cuales son definidos como secuencias y combinaciones de mecanismos causales frecuentemente recurrentes. A su vez, los mecanismos estarían definidos por "una clase delimitada de acontecimientos que altera las conexiones entre personas, grupos y redes interpersonales" (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005: 13-14). De este modo,

explicar la dinámica de la contienda política, implica identificar "sus mecanismos causales recurrentes, sus formas de combinación, las secuencias en que recurren y por qué diferentes combinaciones y secuencias, a partir de condiciones iniciales distintas, producen diversos efectos a gran escala" (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005: 13-14). En el presente trabajo entendemos los procesos como la concatenación de observaciones que nos indican el paso de una situación a otra a través del tiempo, mientras que los mecanismos corresponden a las explicaciones teóricas con las que interpretamos dicha concatenación. Para ello, el procedimiento de observación fue inductivo, en el sentido de que los mecanismos fueron inferidos de la observación de los procesos.

En este sentido, los episodios de contienda que se analizan corresponden a "los lentes que como observadores construimos" (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005: 32). De este modo, la contienda –como totalidad del caso a estudiar en esta investigación– corresponde al proceso de desalojo de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico, el cual dividimos en tres cortes temporales en los acontecimientos que van de 1993 a 2007. En estos momentos identificamos los mecanismos dinámicos que explican en términos teóricos abstractos cómo se dieron las acciones e interacciones entre los actores sociales involucrados. Esto nos permitirá contar con los mecanismos y los procesos como soportes de la explicación mientras que los episodios seleccionados corresponden a los soportes de la descripción (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005: 32).

Teniendo en cuenta las diferencias contextuales de cada episodio de contienda, nos centramos en identificar en cada caso los procesos de negociación, movilización, conflicto y resistencia, así como en los mecanismos de presión, reivindicación, comunicación, participación y confrontación. En esta perspectiva se consideran diversos tipos de actores: tanto aquellos que tradicionalmente han partici-

pado en contiendas políticas, como los actores emergentes y sus formas de involucramiento. En cada uno de estos momentos se busca identificar a los actores que pretenden influir de algún modo en tales acciones de desalojo, ya sea a favor o en contra, e interpretar las interacciones entre actores a partir de la identificación de sus objetivos, estrategias y repertorios. También se busca enfatizar en el análisis de los procesos (cómo se dieron y por qué se dieron los procesos de desalojo). Con respecto a los actores, partimos de un análisis estático para identificar a los implicados en la contienda, las formas de interacciones que establecen las consecuencias para la política estudiada y sus definiciones sobre la situación en pugna. En el caso que estudiamos identificamos a los diferentes actores sociales involucrados: las instancias de gobierno, los partidos políticos y sus posturas frente a la problemática, los empresarios establecidos, líderes y comerciantes ambulantes de base. Para el proceso de análisis, partimos del presupuesto de que los actores sociales involucrados los constituyen "conjuntos de personas y de relaciones entre personas, cuya organización interna y sus conexiones con otros actores políticos mantienen una sustancial continuidad en el tiempo y en el espacio" (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005: 13). Posteriormente, flexibilizamos este presupuesto para ver el modo en que se disuelven las líneas divisorias, las organizaciones cambian y las posiciones políticas varían. En cuanto a la acción colectiva, buscamos mostrar bajo qué estímulos y circunstancias los actores sociales que en un momento dado no plantean reivindicaciones, comienzan a hacerlo y al contrario.

EL COMERCIO AMBULANTE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En las ciudades latinoamericanas el comercio ambulante es parte constitutiva del paisaje urbano en una heterogenei-

dad de manifestaciones que, con diferencias y similitudes, se expresan a lo largo y ancho de las urbes. Su presencia en las calles, plazas y parques ha concitado la atención desproporcionadamente negativa por parte de los medios de comunicación, los dirigentes políticos y los funcionarios estatales. Esta opinión negativa se fundamenta en una serie de argumentos diversos, entre los que se cuenta su asociación con el crimen y la inseguridad, la competencia desleal con los comerciantes establecidos, la evasión del pago de impuestos, el congestionamiento vial y peatonal, los problemas vinculados con la planeación y la infraestructura urbana, el descontento de los vecinos, el enriquecimiento ilícito de los líderes y empleados públicos que cobran cuotas y *mordidas*[2] para protegerlos, los problemas de salud pública, el manejo de residuos sólidos y la contaminación derivada de su actividad, entre otros. Esta opinión negativa del comercio ambulante ha contribuido a la construcción de percepciones que lo asocian con el desorden, la inmoralidad, el peligro, el crimen y la ilegalidad, invisibilizando las causas más profundas y estructurales que se encuentran en el origen de su desarrollo. Entre ellas, la incapacidad del sistema económico para generar empleos y del Estado para garantizar el acceso efectivo a los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanas(os).

Los comerciantes ambulantes han tenido una presencia importante en los centros históricos de las ciudades latinoamericanas, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Esto puede explicarse a causa de los procesos de crecimiento urbano acompañados por el despoblamiento de los centros históricos, orientando a estos últimos hacia un uso más comercial que habitacional.

En el caso de la Ciudad de México, esta situación favoreció la transformación del Centro Histórico en un gran centro

[2] La mordida es el soborno que se paga para evitar multas.

de abasto comercial, orientado especialmente hacia el mayoreo y el consumo popular, combinando una amplia gama de actividades formales e informales en distintas modalidades de apropiación del espacio urbano. A los tradicionales locales comerciales y a los viejos mercados, se fueron sumando una extensa red de bodegas y comerciantes ambulantes en puestos fijos, semifijos y *toreros*[3] (Melé, 1998).

A estos aspectos se suma el contexto de crisis económicas recurrentes experimentadas en toda la región desde la década de los ochenta. Éstas se gestaron en el marco del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y la implementación de las políticas neoliberales que reconfiguraron la estructura del Estado y abrieron las fronteras, incidieron en el incremento de la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el subempleo y la informalidad. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2010), el empleo informal en América Latina se ha incrementado del 43% en 1990 a 53.8% en 2010. Aunado a ello, con la apertura de las fronteras tras la firma del Tratado de Libre Comercio

[3] El comercio en puesto fijo emplea estructuras metálicas de malla de alambre u otros materiales ligeros ancladas en las banquetas. Entre estos, se cuentan los puestos metálicos orientados a la venta de lotería, de periódicos, revistas y libros, así como los destinados a la venta de tortas y jugos. El estatus de estos comerciantes es un poco distinto a los demás casos, puesto que cuentan con una licencia especial para ubicarse en la vía pública. Por su parte, el comercio en puesto *semifijo* corresponde al que se ubica en estructuras removibles que permiten la apropiación temporal del espacio público. Este tipo de puesto es conocido por los comerciantes como *tubulares* o *quitapón*, porque están fabricados con tubos recubiertos por toldos plásticos de distintos colores, los cuales indican su pertenencia a alguna de las organizaciones de comerciantes ambulantes. Estos puestos son instalados todas las mañanas y retirados al finalizar la jornada, para lo cual requieren del uso de bodegas donde resguardarlos junto con sus mercancías. En ocasiones, pueden contratar a un tipo especial de personal que se dedica a su instalación diaria. Por último, los *toreros* corresponden a los comerciantes ambulantes que no tienen puesto alguno y exponen sus mercancías en un trozo de tela o en una maleta que facilita su retiro.

de América del Norte (TLCAN) en 1994, el paisaje comercial en las calles ha sufrido una dramática metamorfosis. El número de comerciantes ambulantes aumentó en virtud de la falta de empleos y los bajos salarios, al mismo tiempo que las mercancías se diversificaron. La venta tradicional de alimentos, bebidas, ropa y artículos usados, se acompañó de manera más reciente del aumento de la piratería y el contrabando. Provenientes principalmente de Taiwan, Corea, China y Vietnam, la comercialización de estas mercancías, ha fortalecido los circuitos de distribución en los que participan los comerciantes ambulantes, representando sólo un eslabón dentro de las cadenas de contrabando y piratería que involucra a muchos actores económicos, tanto formales como informales (Alba y Labazée, 2008).

Otro de los aspectos que han incidido en el incremento del comercio ambulante en los centros históricos, tiene que ver con la forma en que se ha gestionado esta problemática. En el caso de la Ciudad de México, ha sido el resultado de una relación de larga data entre las organizaciones de comerciantes ambulantes vinculadas con el sector popular del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propia del corporativismo que organizó las relaciones entre el Estado y la sociedad. Ésta se fortalece a partir de la política de erradicación del comercio ambulante y la construcción de mercados públicos durante la regencia de Ernesto Uruchurtu (1952-1966). Durante su gobierno, se delineó una política en la que sólo grupos reconocidos tendrían acceso a los mercados construidos para ellos. Mientras se realizaba este proceso, éstos eran los únicos tolerados para vender en las calles y los demás eran reprimidos (Cross, 1998). Desde entonces, para evitar la violencia y su retiro de las calles, los comerciantes se vieron obligados a afiliarse al sector popular del PRI[4] y

[4] El sector popular junto con el sector campesino y el sector obrero conformaron la estructura corporativista mediante la cual se regulaban y estructuraban las relaciones entre el Estado y la sociedad durante el

apoyar todas las acciones políticas en su favor (Cross, 1998). Al abrigo de este partido, se formaron grandes organizaciones que llegaron a aglutinar cerca de 10 000 comerciantes a mediados de los años noventa en el Centro Histórico, las cuales han tenido que enfrentar las acciones surgidas en el ámbito gubernamental que han fluctuado entre la represión y la tolerancia. Con la llegada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno de la ciudad en 1997, se producen algunos cambios en la relación con las organizaciones de comerciantes ambulantes. En lugar de grandes organizaciones enmarcadas en el corporativismo de Estado, éstas se fragmentan para dar paso a una multiplicidad de organizaciones de menor tamaño e influencia.[5]

Como resultado de los tres aspectos antes presentados, la presencia del comercio ambulante en el Centro Histórico llega a ser insostenible. Especialmente, por una serie de conflictos desatados entre las organizaciones, entre éstas y

---

periodo en el que gobernó el PRI. El sector popular concentraba las relaciones con los sectores de la sociedad que no cabían dentro del sector campesino y obrero, involucrando a una gran diversidad de actores sociales, como profesionales, comerciantes, pequeños propietarios rurales, pequeños industriales, trabajadores al servicio del Estado y trabajadores independientes, entre los que se contaban las organizaciones de comerciantes ambulantes.

[5] Pudimos constatar a lo largo de esta investigación que de 15 organizaciones de comerciantes ambulantes que negociaron su retiro de las calles en 1993 en el marco de la aplicación del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular, se conformaron más de 80 organizaciones que negociarían con la administración de Marcelo Ebrard su retiro de las calles en 2007, de las cuales se calcula que dos terceras partes estarían vinculadas con el PRD, mientras que una tercera parte tendrían vínculos con el PRI. Esta multiplicación de organizaciones fue resultado de una estrategia que buscó fracturar las organizaciones que pertenecían al PRI. Para ello, los gobiernos perredistas reconocieron nuevos liderazgos y nuevas organizaciones de menor tamaño con el propósito de reducir el grado de poder e influencia de las organizaciones priistas. Para más información al respecto, ver Silva (2011).

la fuerza pública y entre comerciantes ambulantes y establecidos que involucraron altas dosis de violencia. De este modo, el comercio ambulante se convirtió en un problema de gobernabilidad y de la falta de capacidad por parte del Estado para garantizar el derecho al espacio urbano (Coulomb, 2001). Por la magnitud y recurrencia de estos conflictos, el tema se convierte en un asunto público a ser debatido tanto en los medios masivos de comunicación como en la naciente Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF).[6] De manera paralela al debate público, surgieron nuevas formas de acción colectiva en este sector. Por primera vez, los comerciantes comenzaron a tomar las calles para marchar en defensa de sus propios derechos e intereses, ya no sólo como *acarreados*.[7] También surgieron nuevas formas de definir la problemática, nuevas organizaciones de comerciantes ambulantes y de comerciantes establecidos que se opusieron a su presencia en las calles. Estos aspectos desembocaron en la elaboración del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular (PMCP) en 1993, el cual consistió en la construcción de plazas comerciales para reubicar a los comerciantes ambulantes y del Bando que prohíbe el ejercicio de esta actividad en el perímetro A del Centro Histórico.[8] Este Bando logra ser

[6] La ARDF fue un órgano de representación creado en agosto de 1987 con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos entre 1988 y 1994. En octubre de 1993 se le otorgan facultades legislativas mediante decreto en el *Diario Oficial* y pasa a denominarse Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

[7] El acarreo es una práctica mediante la cual se le ofrecen contraprestaciones (en dinero o especie) a una persona o colectivo a cambio de participar en manifestaciones públicas de apoyo a un candidato político o funcionario público.

[8] Este Bando es publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 12 de julio de 1993. En él se dictan las disposiciones "por las que se prohíbe el ejercicio del comercio en la vía pública en puestos fijos, semifijos y de cualquier otro tipo en las calles comprendidas dentro del perímetro determinado por el Departamento del Distrito Federal para la Primera

aplicado únicamente durante el primer año de haber sido promulgado a causa de la crisis económica y política experimentada en el país en 1994, así como por las dificultades experimentadas en la aplicación del PMCP. Desde entonces y durante los catorce años que le siguieron, los comerciantes ambulantes permanecieron en las calles del centro a pesar del Bando que prohíbe su presencia en el perímetro A.

Iniciando el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012), se anuncia la aplicación del Bando de 1993 fijando como fecha límite para el desalojo el 12 de octubre de 2007, justificada en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución en 2010. A pesar del escepticismo de esta medida, se logró el desalojo silencioso de cerca de 26 000 comerciantes ambulantes. Esto fue posible, a través de una estrategia que combinó la negociación y la entrega de incentivos, junto con la judicialización e infiltración de organizaciones de comerciantes ambulantes para producir enfrentamientos violentos y con ello facilitar su retiro (Alba y Labazée, 2008). Además, se intensificó la inversión privada en la zona desde 2001, encabezada por Carlos Slim a través de la fundación Centro Histórico y de la empresa Centro Histórico S.A. de C.V. Esto se acompañó de la implementación de una serie de políticas de seguridad, inspiradas en el enfoque de *tolerancia cero* aplicada en la ciudad de Nueva York, incidiendo también en la legislación local como es el caso de la Ley de Cultura Cívica de 2004. La introducción de nuevos mecanismos y de actores sociales en este espacio social, limitó la capacidad de acción de los comerciantes ambulantes, quienes a pesar de su histórica presencia en este espacio de la ciudad, son finalmente retirados.

Fase de Desarrollo del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular" (ver mapa, p. 295). Este Bando sigue vigente y fue un instrumento jurídico importante para el proceso de desalojo de los comerciantes ambulantes en 2007 durante el gobierno de Marcelo Ebrard.

Las relaciones clientelares como base organizativa del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Los comerciantes ambulantes están agrupados en una diversidad de organizaciones encabezadas por líderes y lideresas. Aunque hay una amplia heterogeneidad en la manera de liderar estas organizaciones, por lo general ellos son los encargados de negociar con los funcionarios públicos y los partidos políticos el acceso y la permanencia de los comerciantes de base en el espacio urbano. Cuando esto no es posible, realizan acciones de presión y movilización colectiva o protagonizan enfrentamientos violentos –ya sea con miembros de la fuerza pública u otras organizaciones del gremio– beneficiando a miles de comerciantes que demandan un ingreso que no es satisfecho por otros canales. A cambio de esto, los comerciantes de base aportan una contribución monetaria obligatoria, generalmente semanal, que cubre los gastos necesarios para la permanencia en los espacios que ocupan para la venta y la protección de sus miembros frente a los posibles desalojos. Estas cuotas son recolectadas generalmente por familiares, comadres y compadres, quienes asumen el papel de delegadas(os) y se constituyen en el círculo de confianza de los líderes y lideresas. Con estos recursos pueden eventualmente sobornar a funcionarios públicos,[9] quienes mediante el pago de *mordidas* permiten la explotación comercial del espacio público urbano.

A su vez, los líderes protegen a las(os) vendedores de las multas establecidas en la Ley de Cultura Cívica (2004) por el uso del espacio urbano para el comercio, del acoso de

[9] Siguiendo a De la Peña, los funcionarios públicos deben caracterizarse como participantes de "la red de intercambio de favores, sus motivaciones combinan el mejoramiento económico personal con una fuerte lealtad a sus patrones políticos" (1996: 120).

la policía y de las quejas de los vecinos. Además del pago de cuotas, los comerciantes de base deben participar en las manifestaciones públicas en apoyo a algún candidato, con apoyo logístico en las calles durante las campañas electorales y en algunos de los casos, favorecer con el voto a alguno de los candidatos con los que se ha establecido una negociación. Durante este proceso, los mediadores políticos saben cómo explotar los vínculos con el gobierno y los partidos políticos, organizar a los ambulantes de base, al mismo tiempo que obtienen una serie de beneficios materiales y políticos. Además de la disponibilidad del espacio urbano como principal beneficio, en algunos casos también se otorga apoyo económico en caso de muerte, accidente o enfermedad. Asimismo, en algunos casos se posibilita el acceso al servicio de guarderías para los niños y las niñas, a programas de viviendas de interés social, cursos de capacitación, despensas económicas o gratuitas, etcétera. En otros casos, los líderes y lideresas de comerciantes ambulantes se constituyen en quienes direccionan a sus agremiados hacia los programas sociales ofrecidos por el Distrito Federal, tales como los subsidios para madres solteras, el programa de uniformes y útiles escolares y los comedores comunitarios. También participan en la aplicación de las políticas de seguridad pública como es el caso del "Frente Común contra la Delincuencia", para colaborar con los elementos de seguridad, en la denuncia y prevención del delito.

La función realizada por los líderes y lideresas se conoce en la literatura latinoamericana como *mediación política* (Lomnitz, 1994; Auyero 2001; Cornelius, 1975 y Roniger, 1990). Ésta se define por la capacidad de un actor social para "unir dos mundos" por efecto del poder posicional con el que cuenta, tanto por su participación en distintas redes sociales, especialmente en las redes políticas, como por encarnar el capital social del grupo que representa. Siguiendo a Auyero, las redes políticas se definen como el "conjunto de contactos

regulares o conexiones sociales similares entre individuos o grupos en los cuales, al menos uno de ellos es miembro de un partido político o un funcionario estatal" (Auyero, 2001: 100).

Una manera de comprender las relaciones entre comerciantes de base y líderes –y de estos últimos con funcionarios públicos y facciones partidarias– consiste en considerarlas como relaciones *estrictamente de intercambio*. Sin embargo, el intercambio estricto de bienes materiales es sólo una explicación parcial para dar cuenta de la existencia y reproducción de este tipo de relaciones sociales. El *toma y daca* de "apoyo por favores", involucra una importante dimensión simbólica que posibilita la perpetuación de este arreglo entre actores sociales (Auyero, 2007). Por ello, es posible entender estas relaciones mediante el concepto de *clientelismo político,* entendido como método para la movilización electoral que "beneficia con bienes materiales a cambio del soporte electoral, usando como criterio de distribución el que el patrón considera" (Stokes, 2007: 605). El clientelismo se sustenta en una relación asimétrica basada en diferencias de poder y en la desigualdad en la apropiación de los beneficios. Es una relación que posibilita el intercambio simultáneo de recursos y servicios políticos y económicos, así como expresivos, tales como la lealtad y la solidaridad (Auyero, 2001).

Esta relación se mantiene frente a la amenaza de dejar de recibir los beneficios esperados, que en este caso involucra el acceso a un espacio público urbano para el desenvolvimiento de la actividad comercial. Según Stokes (2007), este riesgo potencial corresponde al mecanismo *disciplinario* que evita el abandono del vínculo por el temor a que el flujo de beneficios termine. Otro mecanismo que explica la perpetuación de estas relaciones corresponde a la *reciprocidad*. En ella, el flujo de recursos genera una serie de obligaciones personales en quienes los reciben, las cuales se expresan por lo general mediante sentimientos de amistad y gratitud entre líderes y comerciantes.

Siguiendo a Bourdieu, las relaciones de dominación tienen un importante componente expresivo. Esto explica el hecho de que la violencia simbólica implícita en el intercambio es ocultada mediante la "disimulación y transfiguración (...) que asegura una transmutación real de las relaciones de poder al transformar la violencia que objetivamente contienen en algo reconocible y equivocadamente reconocible (...) y así a transformarlas en poder simbólico, capaz de producir efectos reales sin la utilización aparente de energía" (Bourdieu, 1991: 70). Para lograr la dominación legítima, se requiere del "autoengaño individual y colectivo" de la relación de poder que se halla implícita en esta relación de intercambio. En él, los agentes implicados se someten a la regla del juego en el que los actores hacen como "si se ignorara la regla" (Bourdieu, 1999: 253). Es decir, todos saben cómo funciona el intercambio, pero todos niegan estar involucrados en él. Esto permite perpetuar la "fe colectiva en el valor de lo universal" y también "humanizar el intercambio", el cual no sería posible si este mecanismo no actuara.

Más que el intercambio de breve duración, vemos que el clientelismo político se constituye en la base que posibilita relaciones de reciprocidad sostenidas a lo largo del tiempo, las cuales se apoyan a su vez en un complejo entramado de relaciones sociales que también permite la seguridad y la inclusión en contextos de alta informalidad, al mismo tiempo que posibilita la cooperación, el arbitraje de conflictos y la asociación entre personas. Desde el punto de vista de los partidos políticos, las vinculaciones con las organizaciones de comerciantes ambulantes representan una solución que es funcional y resuelve muchos de sus problemas organizativos. A su vez, las mismas financian costos operativos a través de lo que denominan *la caja menor* y sostienen una estructura cuyo principal exponente es el líder, el cual a su vez mantiene en funcionamiento una serie de relaciones sociales

más allá de los periodos electorales y genera mecanismos de distribución de recursos.

Tres momentos contenciosos para reflexionar sobre la naturaleza de la acción colectiva

En esta sección presentamos tres momentos emblemáticos de los desalojos de 1993 y 2007. Lejos de la idea transmitida en los reportes de prensa donde se presentan como acciones espontáneas en las que prevalecen los eventos violentos, los desalojos son momentos privilegiados para observar la capacidad organizativa de las organizaciones de comerciantes ambulantes. Ésta puede explicarse por la presencia de las estructuras organizativas fundamentadas en las complejas relaciones clientelares que presentamos en el apartado anterior. Las relaciones clientelares muestran el modo de funcionamiento rutinario de las relaciones sociales en este espacio social, las cuales posibilitan otras formas de acción política en momentos extraordinarios como los que describimos a continuación.

El primer momento corresponde al surgimiento de nuevas organizaciones de comerciantes ambulantes en medio de los intentos de desalojo de 1993. El segundo da cuenta del regreso en bloque a las calles del Centro Histórico en 1995, en un contexto de crisis política enmarcado por la renuncia de Camacho Solís a la regencia del Distrito Federal y de crisis económica que azotó al país. Por último, el tercero corresponde al retiro definitivo de las calles en 2007, en el marco de las conmemoraciones de la Independencia y la Revolución mexicana.

Durante los procesos de desalojo y de regreso en bloque por parte de los comerciantes, el conflicto se produjo por la tensión existente entre el acceso al espacio público y el derecho al trabajo. Aunque los comerciantes ambulantes desarrollan su actividad conforme les ampara el derecho al trabajo

establecido constitucionalmente, no es suyo el derecho de tomar las calles para su uso exclusivo. Esto explica en parte por qué su accionar no puede gestarse en el estricto campo definido por la ley y los procedimientos administrativos, sino que deben "articularse en el terreno de la política, donde las reglas son flexibles y pueden ser eludidas" (Chatterjee, 2008: 134). Esto se logra mediante la presión, la negociación y la movilización para encauzar la voluntad política de los tomadores de decisión.

La construcción de una demanda en torno al uso y apropiación del espacio urbano para la actividad comercial, expresa una situación de interacción directa entre los sectores populares y los Estados, encarnados en los gobiernos locales, la cual se inserta en el campo de la negociación política y tiene como lugar privilegiado el espacio urbano. Esta demanda no se ampara únicamente en el sentido de privación material, expresado en la necesidad de los actores sociales por contar con un ingreso, sino que es el resultado de un largo proceso individual y colectivo en el cual se percibe que dicha privación o necesidad corresponde en realidad a un derecho que ha sido cercenado, el cual cambia el modo en que se define la situación problemática y el modo en que se organizan los actores sociales para buscar una salida al problema (Bolos, 1999).

Surgimiento de nuevas organizaciones de comerciantes ambulantes

El desalojo de los comerciantes ambulantes en 1993 se produce en un contexto signado por la recesión económica, el descrédito institucional por efecto de las elecciones de 1988 y el cambio de las relaciones entre las organizaciones sociales y el Estado como resultado del incremento de los movimientos de base en los ámbitos urbanos que comenzaron a manifestar su descontento con la hegemonía del

PRI.[10] En este contexto, uno de los grupos de comerciantes invidentes,[11] liderado por Martín Guzmán se retira del PRI para vincularse con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Esta organización comienza a visibilizar la situación en la que se encuentran los comerciantes ambulantes en la ciudad mediante críticas al partido hegemónico, lo que posibilita el surgimiento de una agrupación de organizaciones de comerciantes ambulantes independientes llamada Coordinadora de Organizaciones de Comerciantes Ambulantes (COCA).

Dicha Coordinadora comienza a realizar movilizaciones, plantones y huelgas de hambre en contra de la represión hacia los vendedores ambulantes, tomando como uno de los escenarios la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. A través de la COCA, las agrupaciones de comerciantes ambulantes que no tenían interlocución directa con el gobierno, manifiestan su inconformidad con el partido hegemónico mediante nuevas formas de acción colectiva que

[10] A finales de la década de los ochenta se producen presiones por parte de los distintos movimientos sociales por la democratización del régimen y la ampliación de otros canales de participación política como resultado del fortalecimiento del movimiento urbano popular después de los sismos de 1985 y las movilizaciones sociales y electorales luego de las elecciones de 1988. Esta situación se produce en el marco del creciente desprestigio del PRI como resultado de la cuestionada elección de Carlos Salinas de Gortari, declarado como ganador de la contienda electoral con el 50.74% de la votación tras la supuesta "caída" del sistema de cómputo.

[11] Como relatan varios de los líderes que representan a este sector, las primeras organizaciones de comerciantes ambulantes que funcionaron en el Centro Histórico eran lideradas por invidentes. Es uno de los grupos más organizados en este sector ya que se vinculan con la Federación de Ciegos Trabajadores de México y con la Escuela Nacional para Ciegos ubicada en el Centro Histórico, a través de la cual integraban nuevos miembros a las organizaciones de comerciantes. Además de estas concesiones a la población invidente, también se han realizado otro tipo de concesiones a la población indígena, particularmente a mujeres indígenas mazahuas y otomíes (Arizpe, 1975; Oehmichen 2001).

han sido descritas por los involucrados como los primeros esfuerzos de acción independiente, más allá del acarreo al que estaban sujetos:

> Veníamos con un esquema de querer estar como personas que pensamos, como personas que pretendemos ubicarnos en la vida, como gente que tiene derecho a vivir bien.
> Yo estaba contento, afloraban mucho mis inconformidades y mis desacuerdos con la política.

En sus propuestas planteaban que:

> la reordenación [del comercio] debe partir de la base de eliminar toda forma de control ilegal tanto de líderes como de autoridades; de excluir la afiliación obligatoria al PRI y acabar con el corporativismo que sólo ha provocado el surgimiento de dirigentes venales".[12]

A través de este trabajo de visibilización, la COCA logra obtener mayor poder territorial en algunas de las calles más comerciales del Centro Histórico que se organizan sin incorporarse a la estructura del PRI. Según uno de sus fundadores, estas acciones fueron posibles por la efervescencia política que se estaba viviendo desde los movimientos sociales y las presiones por parte del Frente Democrático Nacional[13] (FDN) por una mayor apertura democrática en la capital: "la etapa neo-cardenista es una coyuntura importante porque había una descomposición del partido en el poder, tanto a nivel

[12] Cabildo, Miguel y Monge, Raúl, "Las calles de la ciudad, botín económico y político para los líderes del comercio ambulante", *Proceso*, núm. 685, 18 de diciembre de 1989, p. 25.

[13] El FDN fue una coalición de fuerzas políticas de izquierda y la disidencia del PRI. Fue creado en 1988 para disputar las elecciones con su candidato Cuauhtémoc Cárdenas y corresponde el antecedente de lo que hoy conocemos como Partido de la Revolución Democrática (PRD).

local como federal y esto permitió que pudiéramos trabajar con vendedores de manera más independiente".[14]

A la par que surgían estas nuevas organizaciones que buscaban una mayor independencia de las estructuras priístas, los comerciantes establecidos del Centro Histórico agrupados en la organización Procentrhico, emprendieron una serie de acciones haciendo un llamado público al gobierno para que ejerciera acciones frente a este problema. A su vez, afirmaron reiteradamente que la problemática del comercio ambulante representa la "pasividad e incapacidad oficiales".[15] Denunciaron a la Secretaría de Hacienda por permitir el contrabando; a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, por no conocer las condiciones ecológicas del Centro Histórico; a la Secretaría de Transporte, por no controlar el tráfico de vehículos; a la Secretaría de Salud, por permitir la venta de comida sin licencias sanitarias; a las delegaciones políticas de la ciudad por autorizar el comercio en el Centro Histórico, por sólo mencionar algunas de las instancias señaladas.

En conferencia de prensa,[16] demandaron al gobierno de la ciudad la implementación de políticas públicas para evitar que el primer cuadro de la ciudad se convirtiera en "reducto anárquico" por efecto del comercio ambulante en sus calles. Durante estas acciones denunciaron la competencia desleal del comercio ambulante frente al comercio establecido. También denunciaron la reducción de las ventas por la ubicación de puestos de ambulantes que impiden el paso a los clientes, dificultando el tránsito por el centro de la ciudad y desmotivando la visita de clientes con capacidad de compra.

[14] Federico García, fundador de la COCA, entrevista realizada el 11 de diciembre de 2008.

[15] Romero, Ismael, "Comerciantes del centro, irritados ante la "pasividad e incapacidad oficiales", *Excélsior*, 11-11-89, primera plana.

[16] *Idem*.

Frente al perjuicio causado por el comercio ambulante y la ausencia de acciones por parte del gobierno, los comerciantes establecidos proponen en esta conferencia de prensa tres medidas de acción: 1) cierres escalonados de comercios establecidos a partir del 23 de noviembre de 1989, 2) la suspensión del pago de impuestos y 3) congelación indefinida de los proyectos de inversión en la construcción de pasajes comerciales y mercados populares.[17] Mientras realizaban estas declaraciones, 550 comerciantes ambulantes de los grupos de invidentes invadieron la calle Correo Mayor, en la zona que va desde la calle Corregidora hasta la calle San Pablo, lo que fue interpretado por los comerciantes establecidos como una provocación más por parte de los comerciantes ambulantes que se negaban a abandonar las calles del Centro.

En respuesta a esta situación, los comerciantes establecidos deciden adelantar el cierre de comercios que estaba programado para el 23 de noviembre, el mismo día en que se realizaba la rueda de prensa. Se calcula que entonces cerraron más de 3 000 establecimientos comerciales,[18] correspondientes al 80% de los miembros de las organizaciones de comerciantes establecidos, anunciando además el cese del pago de los servicios públicos como agua, luz, etc. Adicionalmente, la agrupación culpó públicamente a los encargados de vía pública de la delegación y al gobierno de la ciudad de autorizar más permisos en el Centro Histórico. Además del cierre de establecimientos como forma de protesta, esta organización recurrió a las marchas y a los medios de comunicación para exigir al gobierno el despeje de las calles y denunciar la fuerte vinculación existente entre el gobierno y las organizaciones de comerciantes ambulantes.

Si bien Procentrhico es una organización que venía funcionando desde inicios de los años ochenta, es hasta el cierre

[17] *Idem*.

[18] Romero, Ismael *et al.*, "Sus líderes y autoridades del DDF se reparten enormes ganancias ilícitas", *El Universal*, primera plana, 12-11-1989.

de tiendas que aparecen en la escena pública. Mediante estas acciones directas, juegan un papel decisivo en la presión al gobierno local y nacional, la cual se convirtió en una forma de protesta novedosa por parte de los comerciantes establecidos, quienes hasta entonces canalizaban sus demandas a través de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). A modo de ver de algunos de los comerciantes establecidos que fundaron en ese entonces Procentrhico, si bien la Canaco venía realizando una serie de acciones de presión al gobierno en los medios de comunicación, se requería de una serie de acciones directas que tuvieran un efecto inmediato sobre los gobiernos de la ciudad y en la opinión pública.

Después de estos acontecimientos, en que surgen nuevas organizaciones de comerciantes ambulantes y establecidos, se inicia el proceso de judicialización de Martín Guzmán, líder de comerciantes ambulantes invidentes independientes. La judicialización es una de las herramientas que más ha utilizado el gobierno para presionar a este sector y obligarlos a negociar y aceptar los términos en que se plantean los desalojos, tanto entonces como en la actualidad. En algunos casos, la judicialización se ha empleado de manera selectiva, mientras que en otros momentos se ha realizado de manera generalizada. En este caso se utiliza con el fin de suprimir los intentos por parte de las organizaciones independientes para constituirse de manera crítica, considerándolos como un blanco fácil de provocaciones policiales, aislándolos de las demás organizaciones de comerciantes ambulantes e impidiéndoles "el acceso a los medios de contienda tolerados o prescritos" (McAdam, Tarrow S, y Tilly, 2005: 75).

Estas acciones terminan por desarticular la COCA, especialmente por las presiones de parte del gobierno y por las dificultades para vincularse con otras organizaciones sociales independientes al PRI, como la Asamblea de Barrios, con quienes lograron algunos acercamientos y colaboración conjunta pero no de manera articulada. El aumento del costo de la

movilización a causa de la judicialización es una muestra clara de los obstáculos impuestos por el funcionamiento de la estructura de poder (anclada en el control de los grupos sociales) mediante la estructura corporativa diseñada desde el orden institucional para canalizar las demandas sociales. También muestra cómo la aparición de nuevas organizaciones se constituye en un desafío para el sistema político, así como para los grupos reconocidos y controlados institucionalmente (Favela, 2002).

Por ello no es casual que las nuevas organizaciones que surgieron fuera del control de Guillermina Rico, la lideresa "oficial" del PRI en el Centro Histórico, lo hicieran al interior del mismo partido político. Entre ellas destaca la Coordinadora de Organizaciones de Invidentes y Comerciantes (COIC) que aglutinó a cinco organizaciones de comerciantes de invidentes del Centro Histórico. A través de esta articulación de organizaciones se constituyeron en un grupo reconocido diferente al grupo hegemónico, a cambio de no retirarse en bloque del PRI en un contexto de falta de legitimidad política y debilidad electoral de dicho partido.

Al respecto, podemos señalar que se trata de una forma de organización y de acción colectiva que nos habla de la tensión permanente entre la necesidad de presionar al Estado y la dependencia frente al mismo en una lucha enmarcada por la sobrevivencia y el reconocimiento, en un contexto de fuerte represión y violencia. En efecto, las características de dependencia respecto del Estado que provee una serie de recursos materiales y simbólicos, evidencia la doble lógica en la que este tipo de acción colectiva está inmersa, que puede definirse como la tensión entre la "urgencia y el proyecto" (Merklen, 2005). Esta tensión evidencia las dinámicas subyacentes a la acción política en los sectores populares, en la que se requiere de la articulación entre la resolución urgente de los aspectos básicos de la sobrevivencia y las acciones necesarias para gestionar los objetivos de mediano plazo.

Esto explica el surgimiento de organizaciones al interior del partido hegemónico que demandan al gobierno mayor reconocimiento, no como el resultado de una forma de control por parte del Estado, sino como una forma de adquirir mayor margen de acción en comparación con las organizaciones independientes susceptibles de represión por los altos costos de la movilización que implica hacerlo fuera de los canales institucionales. De este modo, se trata de una forma de acción colectiva que busca mayor integración y reconocimiento, no desde una oposición radical al Estado, sino a través de la coexistencia entre protesta y negociación.

El regreso a las calles en 1995

En 1995, tras casi un año de aplicación del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular (PMCP), los comerciantes ambulantes regresan a las calles. Este acontecimiento se produce en medio de la crisis económica, la crisis política a causa de la renuncia de Camacho Solís a la regencia de la ciudad y las debilidades del propio PMCP.[19]

Esto fue posible porque las organizaciones no dejaron de tener el control territorial de la zona después de los desalojos, debido a que consideraban que la negociación realizada con el gobierno central consistía en abandonar las calles ocupadas siempre y cuando ningún otro comerciante ambulante se instalara en ellas. Con la incertidumbre que se vivía en un contexto de desempleo creciente, los comerciantes ambulantes organizados se agruparon en una federación de organizaciones incluidas dentro del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular, la Federación de Asociaciones Sociales vinculadas al Sector Popular (FEDASP). Mediante la

[19] Entre ellos podemos mencionar la cartera vencida de los créditos otorgados a los comerciantes para obtener un local, la falta de certeza legal sobre la propiedad de los mismos y la ubicación de las plazas fuera de los circuitos comerciales.

misma se buscaba unir esfuerzos para evitar que sus propios agremiados y nuevos comerciantes ocuparan las calles que habían desocupado durante 1993-1994. Paradójicamente, este tipo de estrategia permitió que fueran ellos mismos quienes hicieran cumplir de alguna manera lo dispuesto por el Bando. No obstante, esta situación resultó insostenible ya que muchos de los comerciantes pertenecientes a las organizaciones que no fueron incluidas dentro del Programa prefirieron asumir los riesgos que implicaba la represión policial en el perímetro prohibido frente a las dificultades económicas por las que atravesaban. Aunque ya se habían registrado una serie de tomas parciales de calles, a través de la FEDASP los comerciantes regresan en bloque a las calles. La toma en bloque redujo notablemente el costo de la represión para todos los involucrados, independientemente de la organización a la que pertenecieran, al mismo tiempo que echaba por tierra el objetivo del PMCP y los proyectos de revitalización del Centro Histórico.

Este episodio de toma en bloque de las calles evidencia la capacidad estratégica de las organizaciones de comerciantes ambulantes para el *aprovechamiento y la creación de oportunidades*. Con esta toma de las calles, a pesar de la existencia del Bando que prohíbe su presencia, se ilustra la "ruptura de las negociaciones" frente a una cadena de promesas incumplidas por parte del gobierno. Asimismo, representó un reto directo a la autoridad a pesar de lo dispuesto en el Bando y la respuesta represiva por parte de la fuerza pública que le siguió a estos hechos entre la que se destaca el "operativo amanecer".[20]

[20] El 21 de agosto de 1995 la Secretaría de Seguridad Pública intervino en el perímetro A del Centro Histórico para retirar a los comerciantes ambulantes con 3 500 policías. Este operativo se realizó durante la madrugada y buscaba retirar las estructuras metálicas instaladas en las calles. Durante este operativo se registraron al menos cinco enfrentamientos entre comerciantes ambulantes y granaderos en los que resultaron heridos

La *creación y aprovechamiento de oportunidades* no puede entenderse como una respuesta aleatoria ni desesperada, sino como una acción estratégica de una serie de actores que cuentan con una base organizativa que se encarna en una diversidad de grupos, organizaciones y relaciones sociales ancladas en el territorio. Por otro lado, las acciones represivas, más que contribuir al desalojo de los comerciantes, hizo evidente la incapacidad por parte de las autoridades de buscar salidas creativas, incrementando el descrédito institucional de los gobernantes del Distrito Federal y reduciendo su capacidad de acción para incidir en este tema.[21] Adicionalmente, los funcionarios responsables del manejo del comercio ambulante, como el delegado de Cuauhtémoc, Jesús Dávila Narro (1994-1996), enfrentaron un alto costo político por estas acciones. Un mes más tarde Dávila Narro es destituido, acusado de propiciar una serie de conflictos en Tepito y por permitir el incremento del ambulantaje en el Centro Histórico.

Desalojo de los comerciantes en 2007

El 7 de marzo de 2007, Marcelo Ebrard anuncia el retiro de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico. Esta situación generó desconcierto y una serie de acciones inconexas entre las organizaciones de comerciantes ambulantes, que evidenciaron las limitaciones para el establecimiento de alianzas al interior del sector. En efecto, la competencia por ocupar las calles y las disputas por los espacios públicos, aunada a la estrategia de fragmentación ensayada por el gobierno desde la llegada del PRD al gobierno capitalino,

---

hombres, mujeres y niños y fueron detenidas al menos 14 personas. Durante una semana los policías permanecieron en las calles para evitar el regreso de los comerciantes, pero esto fue inevitable una semana después.

[21] Urrutia, Alonso y Posada, Miriam, "Cuestionan PAN y PRD el uso de la fuerza pública", *La Jornada*, 22-08-95, p. 36.

tuvo repercusiones en la capacidad de establecimiento de alianzas. La fragmentación entre organizaciones fue aprovechada estratégicamente por los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, quienes determinaron que el proceso de negociación debía realizarse con cada una de las organizaciones por separado.

A diferencia de otros desalojos, la represión no se ejerció de forma generalizada, sino que combinó un proceso de negociación mediante el cual se entregaron incentivos económicos, sumado a la simultánea judicialización de grupos de comerciantes. Los beneficios se otorgaron a las organizaciones que lograron articularse en grandes bloques. Entre ellas, las que hacían parte de PRI-CNOP,[22] quienes durante el proceso adelantado en 2007 se agruparon en el Frente Alternativo del Trabajo (FAT). Para el gobierno perredista de Marcelo Ebrard, negociar con este bloque fue estratégico puesto que por el número de agremiados que aglutinaba, aseguraron el retiro de un número importante de comerciantes, al mismo tiempo que presionaron a quienes se encontraban renuentes a entrar en el proceso de negociación y corrían el riesgo de quedar excluidos del mismo.

Otro bloque que se organizó para estas negociaciones fue el Frente Metropolitano de Organizaciones Populares (FREMOP) que actualmente articula 28 organizaciones de comerciantes ambulantes vinculadas al PRD. De manera individualizada otros grupos del PRD también fueron sumándose a las negociaciones, pero como contaban con un número menor de agremiados fueron las últimas que recibieron los predios para ser reubicados. Por su parte, aquellas que no fueron incluidas en las negociaciones fueron las más afectadas, puesto que quedaron con organizaciones muy debilitadas en razón de que sus miembros han tenido que buscar nuevos

[22] La CNOP es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares fundada en 1943. Corresponde a la instancia que aglutina a la diversidad de organizaciones del sector popular del PRI.

espacios comerciales. De hecho, muchos comerciantes de base han tenido que quedarse en las calles "toreando" a la policía encargada de custodiar el área y otros han dejado esta zona de la ciudad o se han dedicado al sector servicios.

Las organizaciones que negociaron su retiro de las calles con el gobierno firmaron un acuerdo en el cual éste se comprometió a entregar una serie de predios mediante un Permiso Administrativo Temporal Renovable (PATR) de 10 años. Se estableció que el espacio físico entregado debía ser equivalente al espacio ocupado en las calles y que su adecuación debía correr bajo su responsabilidad. Además de la entrega de estos predios, se otorgaron 1 300 pesos mensuales durante seis meses a los comerciantes de base. Adicionalmente, se otorgaron una serie de autorizaciones para el uso comercial de las calles en otros espacios en las cuatro delegaciones centrales.

Con el propósito de reducir los incentivos para el retorno a los espacios desalojados, se incrementó el costo de la movilización a través de la recopilación de los antecedentes judiciales de cada uno de los líderes para neutralizar cualquier posibilidad de agresión a los funcionarios y cuerpos policiacos, como ya había sucedido en otras ocasiones. Si las(os) líderes se negaban a negociar, podían quedar sin ningún beneficio o estar sujetos a la judicialización. Además del proceso de judicialización, encontramos, al igual que Alba y Labazée (2008), que las autoridades infiltraron a las organizaciones de comerciantes para provocar conflictos y así justificar su intervención y posterior desalojo. De esta manera, podemos ver que la estrategia del gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012) fue la de alternar acciones de negociación y entrega de beneficios con represión indirecta e infiltración de grupos.

A diferencia de otros procesos de desalojo de los comerciantes, éste se acompañó de la implementación de la Ley de Cultura Cívica inspirada en la estrategia de *tolerancia*

cero aplicada por Rudolph Giuliani en Nueva York y de la intensificación de la inversión privada por parte de Carlos Slim. La entrada de estos actores –más poderosos política, económica y simbólicamente– limitó la capacidad de acción de las organizaciones de comerciantes ambulantes, quienes fueron finalmente retirados de las calles.

En estos tres episodios encontramos varios aspectos que nos permiten comprender las acciones colectivas desplegadas durante los desalojos estudiados. En el primero, damos cuenta del surgimiento de nuevas organizaciones de comerciantes ambulantes fuera del partido hegemónico y dentro del mismo, circunstancia que resultaba novedosa en la dinámica de un sector que ha estado supeditado al ordenamiento del corporativismo de Estado. Aunque los esfuerzos por obtener mayor autonomía fueron reprimidos, en su momento pusieron en duda la capacidad del gobierno y del PRI para conducir las relaciones con este sector. Por otro lado, encontramos que aunque el corporativismo anclado en un discurso integrador de amplios sectores sociales se orientó a cooptar y controlar a grandes sectores de la sociedad (Reyna, 1976), en ocasiones puede constituirse en la base organizacional que les permite a los sectores populares avanzar políticamente. Evidentemente, se trata de una forma de acción colectiva anclada en la tensión entre "la urgencia y el proyecto" caracterizada por la búsqueda de integración y reconocimiento, no desde una oposición radical al Estado sino a través de la coexistencia entre la negociación y protesta.

En el segundo episodio se destaca la capacidad para la creación y aprovechamiento de oportunidades políticas, que posibilitaron el regreso de organizaciones de comerciantes ambulantes a las calles. El regreso en bloque representó un reto directo a la autoridad porque se realizó a pesar del Bando que prohibía su presencia en las calles del perímetro A del Centro Histórico, dejando en evidencia la incapacidad de la aplicación de la ley y de su resolución mediante el

uso de la fuerza. Adicionalmente, fue posible mediante el aprovechamiento de la base organizacional que mantuvo el control de las calles, mostrándonos que no fue el resultado del desorden y el azar.

Por último, en el tercer episodio mostramos cómo fue posible el retiro del comercio de las calles en 2007. En un escenario caracterizado por la presencia del gremio dividido y con dificultades para la creación de alianzas, el proceso de negociación terminó por romper cualquier posibilidad de acción conjunta. Adicionalmente, la estrategia del gobierno, que combinó la judicialización con la entrega de incentivos, obligó a las organizaciones de comerciantes a negociar su salida de las calles. Esto, aunado a la aplicación de la Ley de Cultura Cívica y la entrada de nuevos actores relacionados con los intereses privados, especialmente inmobiliarios, hizo imposible su permanencia en el Centro Histórico. En este episodio, a diferencia de los desalojos de 1993, en que el derecho al trabajo primó sobre el derecho al espàcio público, se impuso el interés por el "espacio público" y los intereses inmobiliarios. Este cambio de enfoque tuvo repercusiones sobre la capacidad de acción por parte de las organizaciones de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la ciudad.

REFLEXIONES FINALES

Iniciamos este trabajo dando cuenta de las dificultades para caracterizar el tipo de acción colectiva desplegada por parte de las organizaciones de comerciantes ambulantes durante los procesos de desalojo llevados a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entre ellas, mencionamos el predominio de los análisis que asocian la presencia de relaciones clientelares con la pasividad y la ausencia de acción colectiva.

Si bien las explicaciones orientadas a entender las relaciones entre sectores populares y el Estado, a partir de los

intercambios presentes en las relaciones clientelares, nos proporcionan una serie de elementos para la comprensión de la base organizacional en este espacio social, son pocas las herramientas que nos otorgan para el análisis de los conflictos y la movilización social presentes durante los desalojos. Buscando superar este desafío, nos enfocamos en la documentación y reconstrucción de los acontecimientos, dejando entre paréntesis las categorías predispuestas para el estudio de la problemática. Para ello, encontramos útil el análisis de la contienda política empleado por McAdam, Tarrow y Tilly (2005) para ordenar e identificar a los actores sociales, las acciones, los repertorios y las estrategias a través del tiempo.

Al analizar los tres acontecimientos escogidos para ilustrar algunas de las características distintivas de la acción colectiva, encontramos que durante los eventos estudiados surgieron nuevos actores sociales desde las organizaciones de comerciantes ambulantes y del comercio establecido. Aunque se trata de actores que constantemente negocian con el gobierno su permanencia en las calles, en algunos momentos desafiaron a los gobernantes locales y actuaron estratégicamente para crear y aprovechar las oportunidades políticas y de ese modo evitar su retiro.

Por otro lado, vimos que la estructuración de las relaciones sociales mediante la existencia de las relaciones clientelares creadas para controlar y cooptar a las organizaciones sociales, también se constituyen en la base organizativa que posibilita la capacidad de actuar colectivamente. En estos procesos fue central la figura de los líderes y lideresas, quienes encarnan el capital social del grupo que representan y concentran una serie de relaciones sociales especialmente con los actores estatales y partidarios.

Durante estos acontecimientos, la posibilidad de incidencia por parte de las organizaciones de comerciantes ambulantes, dependió de la capacidad para generar alian-

zas al interior del sector, de los costos de la represión, de la dinámica del campo social y de las condiciones del contexto político y económico que pudieran ser aprovechadas para legitimar sus acciones. Esto explica que en algunos momentos fuera posible desafiar al gobierno de la ciudad mediante la toma en bloque de las calles, poniendo en entredicho su capacidad para aplicar las leyes y también para emplear la fuerza pública. También explica el modo en que fue posible su retiro aparentemente silencioso en 2007, sin que mediara la intervención de la fuerza pública.

En este sentido, el análisis de la contienda política fue útil para ordenar la mirada y comprender los desalojos de los comerciantes como un proceso a través del tiempo. No obstante, debe quedar claro que en ausencia de estos escenarios contenciosos también se producen acciones colectivas. Esto ocurre durante el proceso mismo de creación y permanencia de las organizaciones de comerciantes ambulantes, que posibilita el acceso colectivo al espacio urbano, así como en el modo de ordenar este espacio social en el que se asignan los recursos, se resuelven los conflictos, se organizan las vidas y los negocios.

BIBLIOGRAFÍA

Alba, C. y P. Labazée (2008), "Liberalization, street vending and violence", en K. Kees (ed.), *Exclusion and violence in Latin America, symposium in honour of Dirk Kruij*, Nederland Utretch, Utretch University.

Arizpe, L. (1975), *Indígenas en la Ciudad de México: el caso de las "Marías"*, México, Secretaría de Educación Pública.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura (2004), "Ley de Cultura Cívica", *Gaceta Oficial del Distrito Federal,* URL: http://www.aldf.gob.mx/archivo-8dcfd36fe848aac90b3fc1e6706a8014.pdf, última consulta: 22 de agosto de 2010.

Auyero, J. (2007), *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, Siglo XXI.

_____ (2001), *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*, Buenos Aires, Manantial.

Barbosa Cruz, M. (2008), *El trabajo en las calles. Subsistencia y negociación política en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX*, México, El Colegio de México, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa.

Bolos, S. (1999), *La constitución de actores sociales y la política*, México, Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdés.

Bourdieu, P. (1999), "Efectos de lugar", en P. Bourdieu (ed.), *La miseria del mundo*, Buenos Aires, FCE, pp. 119-124.

_____ (1991), *Language and symbolic power*, Cambridge, Mass Polity.

Cabildo, Miguel y Raúl Monge (1989), "Las calles de la ciudad, botín económico y político para los líderes del comercio ambulante", *Proceso*, núm. 685, p. 25.

Chaterjee, P. (2008), *La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos*, Buenos Aires, Siglo XXI, CLACSO.

Cornelius, W. (1975), *Los inmigrantes pobres en la Ciudad de México y la política*, México, FCE.

Coulomb, R. (2001), "Gobernabilidad democrática y reforma político administrativa en el Centro histórico de la Ciudad de México", en *Foro sobre la Reforma Política del Distrito Federal*, México, Instituto Electoral del Distrito Federal, pp. 103-130.

Cross, J. (1998), *Informal politics. Street vendors and the state in Mexico City*, California, Stanford University Press.

De la Peña, G. (1996), "Corrupción e informalidad", *Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad*, vol. III, núm. 7, pp. 109-127.

De Soto, H. (1987), *El otro sendero*, México, Editorial Diana.

Diario Oficial de la Federación (1993), "Bando por el que se prohíbe el ejercicio del comercio en la vía pública en

puestos fijos, semifijos y de cualquier otro tipo en las calles comprendidas dentro del perímetro determinado por el Departamento del Distrito Federal para la Primera Fase de Desarrollo del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular, *Diario Oficial de la Federación,* 12 de julio.

Favela Gavia, D. M. (2002), "La estructura de oportunidades políticas de los movimientos sociales en sistemas políticos cerrados: examen del caso mexicano", *Estudios Sociológicos*, vol. XX, núm. 58, pp. 91-111.

Fernández-Kelly, P. (2006), "Introduction", en P. Fernández-Kelly, y J. Shefner (eds.), *Out of the Shadows. Political action and informal economy in Latin America*, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, pp. 1-22.

Galicia, Marco Antonio (1990), "Fue secuestrado el dirigente de los ambulantes, Martín Guzmán Antolín", México, *El Universal*, 8 de febrero, p. 2.

Gordon, Gary Isaac (1998), "Peddlers, pesos and power: The political economy of street vending in Mexico City", Chicago-Illinois, Universidad de Chicago, tesis de doctorado.

Lomnitz, L. (1994), *Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana,* México, FLACSO, Porrúa.

McAdam, D., S. Tarrow y Ch. Tilly (2005), *Dinámica de la contienda política*, Barcelona, Hacer.

Melé, P. (1998), *Patrimoine et action publique au centre des villes mexicaines*, París, Sorbonne Nouvellel'Iheal.

Merklen, D. (2005), *Pobres ciudadanos, las clases populares en la era democrática (Argentina 1983-2003)*, Buenos Aires, Gorla.

Oehmichen, Cristina (2001), "Mujeres indígenas migrantes en el proceso de cambio cultural. Análisis de las normas de control social y relaciones de género en la comuni-

dad extraterritorial", México, UNAM, tesis de doctorado (mimeo).

OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2010), *Panorama Laboral 2010*, Lima, OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

Portes, A. (1995), *En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la economía no regulada*, México, Porrúa, FLACSO.

Reyna, J. (1976), "Control político, estabilidad y desarrollo en México", *Cuadernos del Centro de Estudios Sociológicos*, núm. 3.

Romero, Ismael (1989), "Comerciantes del centro, irritados ante la 'pasividad e incapacidad' oficiales", México, *Excélsior*, primera plana, 11 de noviembre.

Romero, Ismael *et al.* (1989), "Sus líderes y autoridades del DDF se reparten enormes ganancias ilícitas", México, *El Universal*, primera plana, 12 de noviembre.

Roniger, L. (1990), *Hierarchy and trust in modern Mexico and Brazil*, Nueva York, Praeger.

Silva, D. (2011), "Negociando la (in)-formalidad. Las contiendas por el desalojo del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México (1990-2008)", México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, tesis de doctorado (mimeo).

_____ (2010), "Comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México (1990-2007)", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. LXXII, núm. 2, abril-junio, pp. 195-224.

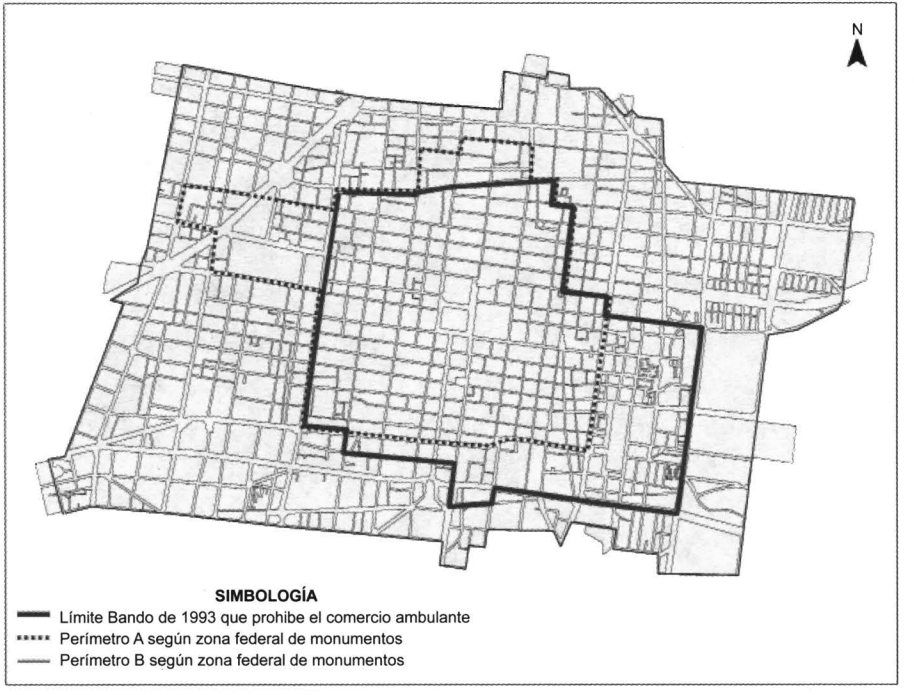
Sommers, M. (1994), "The Narrative Constitution of Identity, A Relational and Network Approach", *Theory and Society*, vol. XXIII, núm. 5, pp. 605-649.

Stokes, S. (2007), "Political Clientelism", en C. Boix, y S. Stokes (eds.), *The oxford handbook of comparative politics*, Londres, Oxford University Press, pp. 604-627.

Tokman, V. (ed.) (1995), *El sector informal en América Latina: dos décadas de análisis*, México, Conaculta.

Urrutia, Alonso y Miriam Posada (1995), "Cuestionan PAN y PRD el uso de la fuerza pública", México, *La Jornada*, 22 de agosto, p. 36.

Mapa. Perímetros A y B según Zona Federal de Monumentos Históricos (1980) y el perímetro de prohibición del comercio ambulante según el bando de 1993



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mapa digital, www.inegi.org.mx/geo/contenidos/mapadigital/.

VII. ACTORES, ESCENARIOS Y TIEMPOS: ALGUNOS DESAFÍOS PARA ESTUDIAR LA ACCIÓN COLECTIVA EN COLONIAS POPULARES

EDISON HURTADO ARROBA*

En las colonias populares de la Ciudad de México opera una amplia red de organizaciones sociales y políticas que son la base de distintas formas de participación política. Ello se debe, en gran parte, a que el gobierno de lo urbano marginal, el manejo político-institucional de los recursos públicos para planificar la ciudad y dotarla de servicios, permite la formación de espacios de interacción entre actores sociales, políticos y gubernamentales en torno a la gestión cotidiana de problemas urbanos. La situación de segregación urbana, que implica accesos diferenciales a servicios públicos o a derechos sociales, favorece la movilización colectiva y la formación de redes de intermediación política (Tarrés, 1994 y Bolos, 1995). Tal proceso sociopolítico está lleno de contradicciones, eventos contingentes, identificaciones móviles, estrategias situadas, disputas por la orientación de la acción. Este capítulo reflexiona sobre la complejidad analítica y los retos que presenta este "objeto de estudio", a la luz de una investigación de campo realizada entre 2009 y 2012 en tres colonias populares.

* Doctor en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México. Profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Ecuador.

En muchos sentidos, la organización vecinal produce un tipo de gestión de lo urbano-marginal que incluye formas de relación con las instituciones públicas, con los partidos políticos, con otras organizaciones y entre líderes y vecinos *per se*. Esas formas de relación pasan, a su vez, por distintos estadios, ya sea la autogestión, la demanda y negociación con el gobierno delegacional o local, la "gestoría social" (frente a las instituciones públicas o frente a ONGs), la afiliación a redes clientelares-partidistas, la búsqueda de patrocinadores o intermediarios políticos personalistas, o también diversos grados de protesta y acción pública contenciosa (Ramírez, 2002).

Tales tramas de interacción convocan a estrategias analíticas sobre la acción colectiva popular urbana que se mueven entre, al menos, tres clivajes. Primero, analizar la construcción de sujetos con demandas urbanas en países latinoamericanos ha supuesto, *grosso modo*, el encuentro de la acción colectiva con el clientelismo. Por un lado, existe una tradición que resalta el carácter (activo o reactivo) de resistencia y agencia de los "movimientos urbano-populares" o de acciones de protesta principalmente frente a la dinámica de segregación espacial y exclusión socioeconómica que produce el desarrollo del capitalismo en la periferia. Por otro lado, se enfatiza en que los sujetos (pasivos) tienen un rostro clientelar y susceptible de cooptación, que permite agruparlos y estudiarlos bajo una lógica de incentivos de satisfacción de necesidades (materiales y simbólicas). Sin embargo, varios estudios en la región (y fuera de ella) han demostrado, poco a poco, que tales entradas no necesariamente se contraponen, y que mucho de lo que ocurre en la acción colectiva popular urbana también está sujeto a tramas de interacción, procesos, situaciones, estrategias y temporalidades específicas (Auyero, 2001).

Segundo, paralelamente a la hora de estudiar la acción colectiva popular en las ciudades también se suele partir de perspectivas estructuralistas o agencialistas. Hay quienes

cobijan sus análisis de los actores colectivos urbanos en las consecuencias particulares del desarrollo urbano, asignando un poder explicativo a las condiciones estructurales (conurbación periférica, marginalidad urbana, segregación territorial) sobre la construcción de agendas y actores. Por otro lado, también hay quienes, desde discursos dominantes contemporáneos, promueven perspectivas de análisis en donde "la participación ciudadana" (un rescate bastante problemático de la agencia de los sectores populares) encarnaría soluciones para afrontar la irresoluta cuestión social urbana, basando su apuesta en la agencia (Ziccardi, 2008).

Un tercer clivaje emerge cuando visiones culturalistas se oponen a visiones instrumentalistas en el abordaje de la política popular urbana. Por un lado, una suerte de cultura política clientelar, pasiva, premoderna, predemocrática marcaría cuasi-genéticamente a los sujetos populares (una suerte de "nueva cultura de la pobreza") (Durand, 2010). Por otro, los habitantes de colonias populares son vistos como calculadores ("cazadores") y atentos a incentivos "meramente" materiales (digamos despensas) y, algunos casos, también simbólicos (reconocimiento). Todo ello en el marco de una disputa electoral entre facciones y elites políticas, de las cuales los sectores populares son "sus bases" (Merklen, 2005 y Stokes, 1991).

Estas aproximaciones problematizan, en diverso modo, la relación entre la cuestión social urbana y las prácticas políticas en contextos de segregación y marginalidad. ¿Cómo se ejerce el "derecho a la ciudad"? ¿Qué tipo de ciudadanía y de acción colectiva emerge en contextos urbanos marginales?[1]

[1] Ciertamente, responder estas preguntas ha supuesto el uso de páginas y páginas, al menos desde los años sesenta, cuando estuvieron en su auge las teorías de la marginalidad y la dependencia. Para el caso de la Ciudad de México, al menos en los años ochenta y noventa (Bolos, 1995) se ha producido una gran cantidad de trabajos tanto desde modelos analíticos basados en el clientelismo como en la acción colectiva.

En el marco de estas interrogantes, que requieren anclajes empíricos, en este texto me interesa poner en evidencia la capacidad heurística de un modelo explicativo relacional y situacional de la contienda política local, que intente lidiar con las dicotomías anunciadas (clientelismo *vs.* acción colectiva, estructura *vs.* agencia, cultura compartida *vs.* racionalidad instrumental). Busco poner en operación una perspectiva que tome en cuenta los procesos sociales y los mecanismos de intermediación e interacción que están detrás de episodios de contienda contenciosa y contienda contenida a nivel local (los casos de Tiempo Nuevo y Ceforma, que se analizan más adelante).

Siguiendo el modelo de la "dinámica de la contienda" de McAdam, Tarrow y Tilly, "utilizamos los mecanismos y los procesos como soportes de nuestra explicación; los episodios, como soportes de nuestra descripción" (2005: 32). Así, presentaré una serie de herramientas conceptuales que permitan decodificar episodios concretos de conflicto. Con este ejercicio, busco reflexionar en voz alta sobre los desafíos analíticos que enfrenté al investigar las prácticas políticas en colonias populares.

El texto se nutre de un trabajo de campo etnográfico en tres colonias populares en Tlalpan (Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo y La Fama) realizado entre 2009 y 2012. La producción de observables se realizó con base en el registro de las actividades de una red de actores locales con diferentes (pero a la vez entrelazadas) agendas: políticos que buscan cargos de representación, operadores políticos profesionales (partidistas), líderes vecinales y gestores sociales, y pobladores con necesidades urbanas. Aquí se presenta una parte de la evidencia empírica recogida sobre las relaciones entre actores colectivos y el campo político local en Tlalpan, y se construye un caso en donde la interacción produce episodios de contienda (aparentemente inesperados) (Harper, 1992). La pregunta de fondo es sobre cuáles son las condiciones de

posibilidad de la acción colectiva popular urbana y cómo se expresan en el México contemporáneo.

Este texto comienza con una breve caracterización de los modelos analíticos que se encuentran en la literatura y que se pueden usar en la investigación empírica. Me centro en dos de ellos que, no con poca frecuencia, aparecen como separados, pero que –combinados– constituyen lo que considero herramientas analíticas muy potentes. Sigue una descripción de los ámbitos de acción de tres líderes vecinales del campo político local en Tlalpan: Obdulia, Víctor y Rodrigo. Desde un análisis relacional, se evidencia una trama de conflictos (contiendas) aparentemente inesperados. Luego, presento un esbozo de tres precisiones analíticas en torno al estudio de la acción colectiva de los sectores urbano populares. Y cierran unas breves conclusiones.

LA POLÍTICA POPULAR EN MÉXICO: ENTRE CLIENTELISMO Y ACCIÓN COLECTIVA

La relación entre sectores populares urbanos y la política es un tema recurrente en la academia latinoamericana, al menos desde los años sesenta y setenta, cuando el proceso de sustitución de importaciones se acompañó de altas tasas de inmigración rural-urbana, y tanto las periferias urbanas como las "ciudades pérdidas" de los centros urbanos se poblaron súbitamente. De hecho, este fue uno de los temas clásicos de la sociología latinoamericana en los años sesenta y setenta.[2] A su alrededor se tejieron tensiones conceptuales sobre una concepción de lo social y el consecuente imaginario sobre lo político. No era lo mismo partir de un modelo funcionalista de la sociedad (la teoría de la modernización de G. Germani) que de uno marxista (los estudios sobre la

[2] Una síntesis pormenorizada del debate se encuentra en Lezama (2010). También se pueden ver Ziccardi y Ramírez (2008) y Portes, Roberts y Grimson (2008).

cuestión urbana de M. Castells). A su debido tiempo, los enfoques funcionalistas y marxistas sobre la marginalidad y la exclusión en las ciudades concibieron la sociedad bien como un espacio de integración funcional (o de desintegración) o bien como el producto del desarrollo de las fuerzas del capital en los países periféricos. La tensión conceptual en juego puede ser planteada así:

> ¿Se debía todo a un funcionamiento del mercado del trabajo propio de capitalismos dependientes que producen, mucho más que un 'ejército de reserva' de fuerza de trabajo, una 'masa marginal' no integrable en el marco de esta formación social? O, al contrario, ¿se trató de un déficit de integración debido a la celeridad del flujo rural, déficit a paliar con un desarrollo económico sostenido, la integración a la ciudad y la instalación de democracias estables? (Merklen, 2005: 133).

Este debate, a su vez, implicaba que la relación entre política y sectores marginales podía entenderse, de un lado, como un proceso de aprendizaje y adaptación de los valores y formas de vida urbanas.[3] Por el otro lado, la política se podía entender enmarcada en si las demandas urbanas contribuían a fomentar la lucha de clases en torno a conflictos centrales o sólo se quedaban como demandas puntuales.[4]

[3] Cornelius (1980) realiza un estudio de la relación de los inmigrantes pobres que llegan a la ciudad y la política. Su perspectiva asume que el aprendizaje político (o socialización) al que se ven sometidos los migrantes es un factor clave para explicar el grado de inserción en la vida urbana ("asimilación urbana").

[4] "En los años sesenta el concepto de marginalidad es incorporado a los dos principales paradigmas teóricos de la joven sociología latinoamericana: el funcionalismo y el marxismo. Sin duda, la forma como perciben el problema de la pobreza urbana una y otra perspectiva son sustancialmente diferentes, pero lo común es que parten de dos ejes que organizan el análisis de una y otra: a) las causas de la pobreza urbana y b) los efectos políticos que podía tener la existencia de este amplio contingente

Desde entonces, la literatura académica ha dado muestras de que las ciudades de América Latina son el escenario de la reproducción social de amplios sectores económicamente marginados, socialmente excluidos y espacialmente segregados. Las condiciones de vida precaria en estas ciudades han sido recurrentes, así como los estudios de barriadas, colonias populares, asentamientos, favelas, villas, etc., que han dado cuenta de cómo algunas de estas condiciones (las más estructurales) se recrean a lo largo de los años, y como otras (como las del sistema político) no son fijas ni inmutables sino que van cambiando tanto en su naturaleza como en sus expresiones.

Más allá de estos cambios en el tiempo, hay un consenso en la sociología urbana de y sobre la región acerca de que tales condiciones de vida de amplios sectores de la población pobre del continente estarían constriñendo sus posibilidades de ejercicio de derechos, sus formas de integración social y de participación política (Stokes, 1991). Ante esta situación, los nexos entre exclusión social, marginalidad, ciudadanía, clientelismo y movimiento urbano han sido utilizados recurrentemente para estudiar el tipo de integración social, económica y política de los pobres en las ciudades (Cornelius, 1975; Lomnitz, 1975; Eckstein, 1999; Durand, 2010; Ziccardi, 2008; Portes, Roberts y Grimson, 2008; Merklen, 2005).

Lo que se pone en el centro de la discusión es la relación entre la cuestión social urbana y las prácticas políticas (Castells, 1974), entendidas como la forma de concreción de la ciudadanía y como expresión de los lazos sociopolíticos vigentes (Portes, Roberts y Grimson, 2008). Si llevamos esta discusión al caso de la política urbana popular en el México contemporáneo, enmarcándola en los debates de la sociología urbana (latinoamericana) y la sociología de la

---

de trabajadores urbanos viviendo en barrios populares en las periferias paupérrimas" (Ziccardi, 2008: 74).

acción colectiva, ¿es posible notar cambios ocurridos con el paso del tiempo? ¿Cómo lidian los pobres urbanos, hoy, con sus demandas de inclusión? ¿En qué momento del "pacto de dominación" podemos ubicar a las colonias populares? Con el paso del tiempo, ¿cómo ejercen la ciudadanía los pobres urbanos en la ciudad de inicios del siglo XXI?

En particular, se puede sostener que la política popular urbana en la Ciudad de México se ha desarrollado en al menos cuatro escenarios (más o menos traslapados, pero distinguibles entre sí). Uno de control corporativo (vigente con fuerza en los años sesenta y setenta), hegemonizado por la presencia del PRI y su relación con las organizaciones populares (y las urbano-populares en particular) (Eckstein, 1999). Otro, paralelo, que expresa una relación más distante entre organizaciones y el partido de Estado, que ve emerger, en los setenta y ochenta principalmente, un así llamado "Movimiento Urbano Popular", y que se expresa en la Conamup y otras instancias más o menos autónomas del PRI (Ramírez Sáiz, 1986 y 2002). Un tercer escenario se configura luego del sismo del 85 y a la par del involucramiento en política electoral de las organizaciones urbano-populares desde la elección de 1988 hacia adelante (Álvarez, 2004). En ese escenario, las organizaciones urbano-populares tienen un auge vigoroso, en cierta medida "antisistema", expresado en una Asamblea de Barrios o en la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), y transitan a la política. Y un cuarto, desde al menos 1997 en adelante, cuando el sistema político se abre al pluralismo partidista, y comienza la hegemonía del PRD en la ciudad.

En lo que sigue, quisiera plantear dos ámbitos conceptuales bajo los que se ha mirado la relación entre sectores populares y política en la ciudad, que pueden servir como puntos de partida para una revisita de los modelos analíticos, a la luz del análisis que estoy desarrollando en colonias populares en Tlalpan (y que se presentan en las siguientes secciones).

El eterno retorno del clientelismo urbano

Para explicar la política de los sectores populares en México, varias investigaciones operan con el modelo analítico del clientelismo, aunque lo aplican en diferentes estrategias analíticas. Este tipo de investigaciones se centran en cómo los lazos verticales entre patrones, mediadores y clientes se legitiman como los mecanismos prevalecientes para la satisfacción de necesidades, así como para la movilización de lealtades y apoyos hacia dirigentes. La legitimidad de las formas personalizadas de resolución de problemas es una cuestión que se impregna en el tipo de vínculo social (González, 1997). Pueden variar los actores, pueden variar los recursos, pero el mecanismo clientelar permanece, acompañándose de una economía moral (reciprocidad) con respecto a las formas sabidas y esperadas de hacer las cosas (Auyero, 2001).

Los estudios que operan con el modelo analítico del clientelismo, no son todos iguales; lo aplican en diferentes estrategias analíticas. Por ejemplo, el estudio de Tejera sobre la "cultura de la política" en el Distrito Federal realizado en contextos de campaña electoral, concluye que "el clientelismo político y la aceptación del autoritarismo siguen vigentes en la cultura, lo cual se evidenció en las relaciones 'cara a cara' entre ciudadanos y candidatos" (2003: 338). Esta lógica toma cuerpo no sólo en los discursos sobre el apoyo político a cambio de soluciones a problemas concretos, sino de hecho en la búsqueda del "establecimiento de relaciones clientelares para que ello sucediera" (*idem*). Por su lado, Cobilt (2008) analiza el clientelismo no durante las elecciones sino en lo que llama "épocas de latencia", es decir, en momentos en que las maquinarias electorales se mantienen en bajo perfil o desaparecen de la escena. Otro estudio es el de Magdalena Tosoni (2007). Esta autora no sólo rescata las dimensiones objetivas en las que operan las maquinarias

políticas en el Distrito Federal, sino que pone énfasis en los puntos de vista de los clientes. Para esta autora, no basta describir el funcionamiento de las redes clientelares, se trata de entender el tipo de autoridad que se construye entre los actores. Así, si bien la mayoría de estudios ven como pasivos a los clientes, es posible indagar qué sentido tiene para ellos el clientelismo.[5] A contrapelo, el clásico estudio de Carlos Vélez-Ibáñez (1991) denomina "rituales de marginalidad" a aquellas relaciones entre patrones y clientes urbanos que producen un efecto de legitimación del mito de la integración nacional (dejando el entramado de las relaciones clientelares al servicio de la causa nacional).

En todos los casos, bajo estas lógicas se bloquea la progresión de una ciudadanía plena en la que sea la lógica de los derechos, y no la de los favores, la que permita la distribución de los fondos públicos.[6] Ahora bien, las variaciones respecto a este modelo de intermediación política tienen que ver con la cantidad y el tipo de recursos existentes que aceitan las redes (un programa de vivienda, un plan de subsidios), con los actores (partidos, organizaciones, líderes, ONGs) que intervienen en la dinámica política, con el papel del Estado y las políticas públicas de diversos niveles y con las formas

[5] En palabras de la autora: "El clientelismo aparece a primera vista como una relación asimétrica en la cual el político ofrece recursos para manipular a los pobres. En la historia de San Lázaro [una colonia popular en el municipio de Neza] la dirección de los recursos es inversa, los pobladores son los que dan su tiempo y esfuerzo para obligar que el político devuelva. Ellos se afiliaron, participaron de las campañas para condicionar a los políticos a intervenir en la solución de la propiedad de los terrenos, demostrando que la apelación a las prácticas clientelares puede originarse en los colonos pobres" (Tosoni, 2007: 54).

[6] En la misma línea, en su estudio de las redes peronistas en Argentina, Auyero (2001) sostiene que la resolución de problemas mediante la intermediación política personalizada, lejos de democratizar las relaciones entre patrones y clientes, facilita el control de las elites políticas sobre los sectores populares.

que adopta el intercambio en términos de economía moral. Todas estas variantes toman parte en las diversas modalidades de resolución de problemas mediante intermediaciones personalizadas.

Lo que quisiera fijar para la discusión posterior es que todas estas variaciones permiten diferenciar situaciones y ponderar explicaciones.[7] No siempre la máquina clientelar funciona de la misma manera. A la luz de un enfoque sobre lo social como reticular y configuracional (que se desarrolla más adelante), una mirada analítica a las redes clientelares permitiría comprender el funcionamiento de la intermediación política en colonias populares. Pero, ¿cómo explicar las situaciones en que, pese al control clientelar, se hacen presentes situaciones de protesta y acción colectiva? Es posible que la ruptura del "arreglo clientelar" provoque situaciones de conflicto, donde los pobres urbanos demandan atención a través de mecanismos de protesta. Se produciría una demanda por restituir un tipo de dominación tradicional o una ruptura y rearticulación del pacto de dominación. Sin embargo, ¿toda protesta es sólo producto de la ruptura del vínculo de dominación tradicional, léase, de la ruptura del circuito de prestaciones clientelares?

Desde la acción colectiva: el Movimiento Urbano Popular

Enfatizando en la agencia, mucha de la dinámica sociopolítica del Distrito Federal ha sido estudiada bajo la forma de movimiento urbano. Existe abundante literatura, en donde podemos ver la evolución del problema (Ramírez Sáiz, 1986 y

[7] "Una consecuencia directa de esta determinación contextual de los diferentes procesos sociales (...) es la dificultad, o en términos más precisos, la inutilidad analítica de realizar teorizaciones genéricas, ahistóricas, que traten de ser válidas para todas o casi todas las sociedades" (Benedicto, 1995: 229).

2002; Bolos, 1995 y 1999; Sánchez, 2004; Moctezuma, 1999; Alonso, 1998; Galindo, 1988, entre otros).

Al respecto, un primer paso es entender que libros como *La cuestión urbana* (1974) y *Movimientos sociales urbanos* (1974), de Manuel Castells, daban pistas para definir la política de los sectores marginales urbanos como expresiones de las relaciones estructurales. La situación de déficit habitacional en la ciudad era (y es) una estructura de oportunidad que alienta la formación de organizaciones populares tan temprano como en los años setenta. Esto sucede, para decirlo con David Harvey (2007: 22), porque "los movimientos sociales urbanos interiorizan los efectos (políticos, económicos e ideológicos) del contexto social más amplio (incluido el ser especie) del que forman parte, y su carácter depende fuertemente de esta interiorización. Pero los movimientos no son simples mediadores neutrales entre, pongamos, lo personal por una parte y las fuerzas político-económicas e ideológicas más amplias por otra".

Asimismo, largas páginas se escribieron tratando de dilucidar (bajo la égida touraineana) si el conflicto urbano alcanzaba el estatuto de "movimiento social", es decir, que interpelara al orden social en su conjunto (a su historicidad) y no solamente era un conjunto de peticiones puntuales. Lo cierto es que la demanda urbana estuvo presente a lo largo de todos estos años como una petición central y recurrente de los marginales hacia el sistema. En cuanto a estudios empíricos, podemos citar el estudio panorámico de Ramírez Sáiz (2002) que, respaldado en sus investigaciones previas sobre el movimiento urbano popular (1986), muestra cómo distintos momentos del MUP, en sus cuatro distintas modalidades (colonos, inquilinos, damnificados por el terremoto de 1985 y solicitantes de crédito para vivienda), van sufriendo modificaciones en las estructuras de oportunidad política, en los repertorios de acción y en los resultados esperados.

Arteaga (2003), por ejemplo, investiga organizaciones del Ajusco Medio en Tlalpan que, a inicios de los setenta, impulsaron la ocupación de terrenos. Se trató de un momento de violencia por las disputas en torno al uso del suelo. En ese entonces, los protagonistas eran principalmente migrantes atraídos por las expectativas de empleo de la ciudad. "En la actualidad la gestión y las demandas se siguen canalizando por medio de los líderes, aunque sus vínculos se han formalizado a través de los partidos políticos, principalmente del PRD" (2003: 389).

Varios estudios sobre el movimiento urbano popular en el Distrito Federal muestran formas de transición política y de posibles escenarios en los que se alteran las prácticas políticas. Uno de los cambios políticos detectados por este conjunto de autores tiene que ver con la incursión en política electoral de varios dirigentes sociales populares. En los casos que analiza María Luisa Tarrés (1994), varios dirigentes incursionan en la política casi de forma natural, pues tienen acceso a espacios de gestión cotidianamente. Lo mismo detecta Gisela Espinosa (2000) en el caso de las mujeres colonas de San Miguel Teotongo. Ramírez Sáiz (2002) muestra también que el MUP, en sus diferentes niveles organizativos, amplía los repertorios de acción con el advenimiento de a) la apertura en la competencia política y b) la crisis económica que deja menos recursos para la intervención.

En un trabajo más reciente, Mariza Ariza y Juan Manuel Ramírez (2008) muestran que los ejes explicativos de la actuación de la movilización popular han sido tres: "la estructura de oportunidades habitacionales, la dinámica interna de los grupos y, como consecuencia de los dos factores anteriores, sus desiguales efectos urbanos" (2008: 292).

Como apunté para la discusión posterior, quisiera mencionar que las organizaciones urbano-populares persisten en su funcionamiento, pese al paso del tiempo y a los cambios en las diferentes estructuras de oportunidad. Los sectores

populares aún persiguen la satisfacción de sus demandas y, a la vez, siguen reclamando su inclusión en la sociedad. Analíticamente, se trata de una situación que combina marginalidad y política en contextos cambiantes.

OBDULIA, VÍCTOR Y RODRIGO: LAS TRAMAS DE INTERACCIÓN

> Los actores juegan muy diferentes juegos al mismo tiempo, y la tarea del análisis es develar su pluralidad.
>
> A. MELUCCI

Ciertamente, es posible analizar la participación política de los grupos urbanos populares a la luz de otros modelos analíticos que vayan más allá de la dicotomía clientelismo-acción colectiva. Un ejemplo pueden ser las lecturas institucionalistas sobre el avance del pluralismo político en las democracias emergentes (que se concentran alrededor de estudios electorales). Otra lectura analítica se puede tejer a la luz de los dispositivos de participación ciudadana que se han implementado en la ciudad. Y, por cierto, también existen lecturas finas que ligan en un mismo modelo los momentos clientelares y contenciosos de la vida de las organizaciones urbano-populares.

En este acápite, quisiera contribuir a ese último tipo de lecturas. Siguiendo a Auyero, Page y Lapegna (2008), estoy convencido de que entre clientelismo político y acción colectiva contenciosa hay una relación recursiva. Precisamente por eso, la metáfora de la *zona gris* utilizada por Auyero (2007) o las indagaciones sobre "instituciones informales" (Helmke y Levitsky, 2004), o los análisis normativos sobre el carácter predemocrático, antidemocrático o iliberal de las acciones colectivas populares, me parece que deben precisarse y complejizarse. Para eso, esbozaré más adelante algunos puntos sobre a) la concepción de actor, b) los múltiples campos de

acción y c) la variable tiempo, en los estudios sobre acción colectiva y sectores populares.

Como una forma de introducir elementos que permitan esbozar esa perspectiva situacional y relacional sobre la acción colectiva popular urbana, a continuación presento a tres actores: Obdulia, Víctor y Rodrigo, no como "casos ideales ni representativos", sino como miembros de una trama de interacciones. Sus campos de acción, así como las tensiones que existen entre ellos (o mejor, entre las posiciones que ocupan en el campo político), me permitirán ilustrar los puntos analíticos sobre los cuales opera la investigación.

Los campos de acción de Obdulia: colonia Mesa Los Hornos, Bases Tlalpan y la delegación

A partir de octubre de 2009, comencé a asistir esporádicamente a las reuniones de una organización social a la que denominaré *Bases Tlalpan* (utilizo un seudónimo). A través de entrevistas, conversaciones y participación pasiva en sus reuniones, pude ver inicialmente algo de lo que hace y cómo se organiza. Se trata de una Asociación Civil que aparece, como tantas otras, luego del terremoto de 1985, y que hace parte (así se concibe) de "lo que hoy queda del Movimiento Urbano Popular". Fue fundada por Artemio N. y Obdulia G. en 1988, un matrimonio que vivía en la colonia popular *Mesa Los Hornos* que, en ese entonces, se organizó para promover la vivienda popular y negociar mejoras en los servicios urbanos con el gobierno de la ciudad.

Según recuerda Obdulia (entrevista), fueron "compradores de buena fe". Rentaban una casa en una colonia cercana, pero gracias a su trabajo como doctora en un hospital y el de su marido en el sindicato de maestros y en la delegación de Tlalpan, reunieron lo suficiente como para hacerse de un terreno y una vivienda propia. "Artemio siempre se dedicó más

a la política, desde que estaba en la universidad", cuenta. Esa vinculación le hizo pasar del sindicato a la delegación, a través de sus vínculos políticos. Obdulia se mantenía alejada, "porque trabajaba en el hospital, con régimen de turnos, y no tenía tiempo". Fue a raíz de que se mudaron a Mesa Los Hornos, buscando una casa propia, y frente a la inseguridad jurídica que enfrentaron ("no teníamos escrituras, sólo un contrato de compra-venta"), que Obdulia comenzó a organizar a un grupo de "compradores de buena fe" para presionar al gobierno de la ciudad; así comenzó su participación en una de las tantas organizaciones de colonos que se distribuían en las 32 hectáreas de la colonia.

Artemio murió hace poco (en 2008) y en su memoria pusieron, ocupando toda una pared de la oficina de *Bases Tlalpan*, una gran tela roja con la frase "Artemio, luchador social. Te recordaremos siempre", una foto suya y flores. Obdulia quedó al frente de la organización desde entonces. Pero a finales de 2009, por cuota política (en la campaña ayudó a la cargada electoral a favor del delegado), trabaja en un alto puesto directivo de la delegación Tlalpan (fue directora del Área en Educación y Salud de la delegación entre 2009-2012). Según su hijo, Héctor (de unos 32 años), quien tuvo que hacerse cargo de la organización desde entonces, su madre entró a la delegación como parte de las negociaciones con el jefe delegacional (Higinio Chávez, 2009-2012).[8] En una de nuestras primeras entrevistas, cuando le pregunto a Héctor qué hacen, quiénes son, me responde:

> Hacemos gestión y trabajo político. Somos una organización social. Somos líderes sociales. Nos viene de la tradición de Artemio y Obdulia, de ayudar a la gente en los problemas de vivienda y en la gestión urbana. Organizar a la gente, que to-

[8] En 2012, dio su apoyo a la candidata a jefa delegacional Maricela Contreras quien, una vez electa, designó a Obdulia como directora de Educación de Tlalpan para el periodo 2012-2015.

> men conciencia de sus necesidades y de que, con organización, se puede vivir mejor. Pero también hacemos trabajo político. En Tlalpan no hay organización como la nuestra. Hacemos gestión. Eso es la base. Ayudamos a la gente en sus demandas. Hacemos de todo. Pero, en estos días, principalmente, asistimos al llamado de Andrés Manuel. Le ponemos 3, 4 o 5 buses llenos de gente, o más si en realidad se necesita movilizar a la gente. Y también vemos cómo ayudar a los compañeros del SME... (Héctor, 15 de octubre de 2009).

El 20 de octubre de 2009 asistí por primera vez a las reuniones quincenales (los martes) que realiza la organización con sus miembros. Son reuniones (más o menos públicas) en las que se informa de avances o novedades, se asignan tareas y se evalúa el trabajo. Esta reunión en particular tenía cuatro puntos: 1) Informe sobre la situación política de Luz y Fuerza, 2) Informe de gestión de las demandas, 3) Informe de los resultados de la negociación con el nuevo jefe delegacional de Tlalpan y 4) Asignación de responsabilidades para la semana. A continuación detallo algunos fragmentos (sintéticos) del diario de campo de ese día.

Asisten 52 personas, 21 mujeres, 31 hombres. Inicia a las 18:15 hr. Hay una mesa con tres personas (Israel, Adelina y Raúl, dirigentes de la organización. Héctor se sienta a un costado, entre el público). El público está conformado principalmente por representantes de los núcleos de *Bases Tlalpan* (40 núcleos, según Héctor, aunque no asisten todos). También asiste un buen número de comerciantes ambulantes; la mayoría son mujeres: reciben de la organización una credencial para no ser molestados por los policías municipales (no es una credencial de comerciantes agremiados, ni de la organización que los entrega, sino de la propia delegación).

En los comentarios de momento está fresca la participación en dos mítines la semana pasada. El martes anterior asistieron al mitin convocado por "Andrés Manuel" (como

se le dice coloquialmente al ex candidato presidencial entre algunos miembros del grupo) frente al Congreso para protestar en contra de las medidas económicas (impuestos). El jueves asistieron a la marcha del SME en el Zócalo ("la gran marcha" me dice Héctor, con cierto aire maoísta). El martes fueron tres buses llenos con gente de la organización, pero el jueves "fue poca gente porque ya se habían desgastado en la convocatoria del martes".

Sobre el punto 1: Situación política de Luz y Fuerza del Centro (SME)

Israel habla por 35 minutos sobre el cierre de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Busca generar conciencia sobre la necesidad de apoyar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en su lucha "contra la privatización de la energía". Héctor pide el micrófono y habla otros 15 minutos, poniendo el énfasis en que *Bases Tlalpan* debe movilizarse para apoyar al SME:

> Aquí en Tlalpan no hay otra organización que pueda dar la lucha como nosotros lo sabemos hacer. Les tenemos que hacer el trabajo en el territorio a los compañeros del SME, y ustedes saben cómo somos y lo que hacemos...
> Vamos a organizar talleres informativos en cada uno de los 40 núcleos. Primero hacemos una reunión general con todos este sábado, y luego invitamos a compañeros del SME para que nos informen de la situación en las colonias, en nuestros núcleos de base...

Sobre el punto 2: Informe de las "gestiones"

Bases Tlalpan "gestiona". Adelina, una de sus jóvenes dirigentes,[9] es la encargada de llevar una carpeta con las

[9] Tiene 22 años, terminó la preparatoria. Espera algún día entrar a la universidad, pero por ahora "hace gestión". Es la representante de

demandas de atención levantadas por los miembros de la organización. En la reunión, señala que "todo se ha cumplido". "Ustedes saben que nosotros siempre cumplimos". Detalla las obras que se han atendido. Menciona el trabajo en las comisiones de gestión en temas de discapacitados, madres solteras, tercera edad, obras públicas y servicios urbanos. También menciona que se comenzaron a repartir las credenciales para los comerciantes en vía pública. Luego del informe de Adelina, habla un hombre en tono de reclamo: "Yo he pedido que me gestionen la luz para mi calle. Ya han sido cuatro semanas y yo espera y espera. El próximo 31 [de octubre, 2009] tengo un evento, por el día de los muertos, y no puede ser que lo tenga a oscuras. Sobre las lámparas yo ya hablé con Mónica [funcionaria de la delegación], pero no sé qué pasa que me hace venir a cada rato, sin darme respuesta". Adelina explica que el problema es que los empleados de la delegación saliente ya no quisieron trabajar en nada [son los últimos meses del periodo 2006-2009]. Pero que ahora que hay cinco miembros de *Bases Tlapan* en la delegación todo se va a solucionar pronto. Héctor pide la palabra y dice que ese es el tipo de demandas que pueden hacer los miembros de la organización. Invita a llenar el formulario de demandas (un formulario estándar para solicitar "gestión de obras") para ser atendidas tan pronto sea posible. Adelina reparte el formato para las demandas. Unas 15 personas toman un formulario.

Cuando se acaba la reunión le pregunto a Adelina qué tipo de cosas archiva en su carpeta de demandas. "De todo. Desde talar un árbol hasta obra pública. Nosotros hacemos gestión. Somos líderes sociales. Hacemos gestión...". Nos interrumpe Héctor: "Gestión... y trabajo político (enfatiza). Ya no es lo que era, como en la época fuerte del Movimiento

---

Bases Tlalpan en el Comité Ejecutivo Delegacional del PRD (un comité con nueve personas).

Urbano Popular. Pero tratamos de movilizar políticamente, de crear conciencia".

Sobre el punto 3: Negociaciones
con el actual delegado (del PRD)

Israel da una "buena noticia, aunque ya todos sabemos". En las negociaciones con el actual delegado, se ha pasado a tener cinco miembros de la organización *Bases Tlalpan*, mientras en el periodo anterior se tenía a tres. Insiste en que los cargos que se han obtenido en la delegación no son a título personal, sino que son "de la organización". Aclara que ya se tiene experiencia con personas que creen que han conseguido un trabajo, y se han olvidado que están ahí no sólo para cumplir con las tareas del puesto, sino principalmente para ayudar a gestionar desde adentro lo que requieran los compañeros de los núcleos de la organización. También aclara que se ha pensado para los puestos en personas con competencias acordes a lo que requiere una gestión pública, y en personas confiables que no van a traicionar a *Bases Tlalpan*. Anuncia los cargos negociados (en orden de importancia): "la compañera Obdulia" es la nueva directora de Salud y Educación de Tlalpan; Israel (o sea, él mismo), nuevo Jefe de Unidad de Promoción del Deporte; un Encargado de Unidad (en construcción de aulas escolares); y dos "Líderes Coordinadores" en temas de gestión social. En una entrevista posterior, Héctor aclara la situación:

> Nosotros le hicimos el trabajo en territorio al actual delegado. Nos debe unos buenos votos. Tenemos 40 núcleos de base en las colonias de la delegación. Con el anterior delegado estábamos mal, sobre todo al final, porque no querían trabajar con nosotros ni con nadie. Pero ahora logramos poner a cinco de nuestros miembros en los puestos de estructura de la delegación (Héctor, 15 de octubre de 2009).

Sobre el punto 4: Tareas

Hace 15 días se pidió: a) identificar paredes para realizar pintas y b) conseguir por escrito la autorización de los dueños de casa. Se pide resultados. Varias personas entregan las autorizaciones firmadas (incluyen un mapa del lugar y dimensiones en centímetros del espacio disponible en las casas o muros). Las pintas son urgentes para convocar a la reunión de apoyo al SME (el próximo sábado, en cuatro días). Se anuncia que ya se diseñaron dos pintas contra el alza de impuestos del gobierno de Calderón y cinco de apoyo al SME.

Por otro lado, también se anuncia la instalación de una ofrenda por el día de muertos. Otra vez se hará en nombre del "compañero Artemio" (fundador de la organización), pero se invita a poner calacas de personas conocidas y recientemente fallecidas. Se pide traer frutas, veladoras, dulces y flores para ofrenda (encargo especial para los comerciantes).

Se termina la reunión con el reparto de volantes que convocan a una reunión con dirigentes del SME para el próximo sábado 24. Israel pide que los comerciantes se lleven volantes (para tener más impacto en la convocatoria).

Bases Tlalpan gestiona, hace trabajo político, apoya a organizaciones sociales, comparte espacios de socialización (una ofrenda), sirve de nexo con la delegación. Sus miembros apoyan a políticos locales (jefe delegacional) y nacionales (Andrés Manuel López Obrador, AMLO). Si nos concentramos en Obdulia, hay que mencionar que su liderazgo no era opacado por Artemio, cuando éste vivía. Ella tenía su espacio, sobre todo en lo que se refiere a la organización en la colonia Mesa Los Hornos.

En la actualidad, esa colonia aún tiene problemas "de consolidación urbana", pero principalmente de regularización de la propiedad ("nadie tiene escrituras", me dice Obdulia en una entrevista).

A partir de su trabajo en esa colonia, que tiene uno de los índices de marginalidad más altos de la delegación,

Obdulia y Bases Tlalpan han crecido como intermediarios para gestionar demandas en otras colonias (al menos 40, según Héctor).

Entre sus capacidades de acción, movilizan gente a mítines o eventos y apoyan electoralmente a candidatos del PRD. A cambio de ese apoyo electoral, en 2009 negociaron puestos de estructura en la delegación. Obdulia pasó a ocupar un cargo de alta responsabilidad (Directora de Área)[10] y otros de los miembros de su organización, como Israel, también ocupan plazas en la delegación.

El caso de Israel es clave. Su lealtad está con la organización, no con el equipo del delegado. Su puesto, si se quiere, se lo debe a su militancia en Bases Tlalpan. Como veremos más adelante, eso será clave en el conflicto en torno a Ceforma.

Los campos de acción de Víctor: el agua en la colonia Miguel Hidalgo II

Al profesor Víctor Coreno lo conocí en marzo de 2010, como uno de los líderes vecinales de la Colonia Miguel Hidalgo II sección, donde desde hace 17 años hace gestiones para canalizar demandas de los vecinos de la colonia. Hace un par de años que lo acompañan en su tarea José e Hipólito, dos amigos suyos, jubilados, con quienes *hace grilla.* Entre broma y broma, dicen sobre sí mismos que son el "club de la grilla", porque se toman esta actividad como un servicio, un pasatiempo útil, pero no como una carrera política (al menos no en el sentido que le asignan los operadores políticos de los partidos).[11]

[10] Por debajo del jefe delegacional, los puestos de la estructura burocrática más importantes son, en ese orden: direcciones generales, direcciones de área, Jefe de Unidad Departamental (JUD), Líder Coordinador.

[11] Pepe (José Piña) dice que "aprendió la política" cuando trabajaba en la UNAM y vio como actuaban "los del Sindicato". Una vez jubilado, comenzó a colaborar en la escuela de su nieta, en el comité de padres, y

Víctor lidera una Asociación Civil que, desde hace casi 10 años, se ha especializado en interceder a nombre de los vecinos para bajar el costo de los servicios públicos, especialmente del agua que, en estas zonas, tiene un servicio muy irregular y de mala calidad. Sucede, por ejemplo, que dada la inclinación del suelo, el agua no tiene suficiente presión para llegar a todos los sectores. También sucede que los medidores son demasiado viejos y hay múltiples fallas en la facturación, lo que genera cobros excesivos, multas por no pago, recargos por pagos atrasados o suspensión del servicio. Entre los rumores que legitiman las demandas está uno recurrente sobre los medidores: como no hay presión, hay que abrir la llave y esperar que salga agua; pero hasta que eso ocurre se mide el aire que pasa por el medidor. En fin, el agua es un gran tema de movilización en esta colonia. Y es, de hecho, el "principal servicio" que ofrece Víctor y su Asociación Civil desde hace 17 años en la Colonia Miguel Hidalgo (segunda sección).

Subido en un esquema de condonaciones de pago (un resquicio legal que les favorece) si el servicio público es de mala calidad, y amparado en una legislación que reconoce al agua como un derecho al que se debe tener acceso, Víctor ha montado una estrategia para: a) no pagar el servicio y acumular una gran cartera vencida entre varios vecinos, lo cual es una fuente de presión social para el jefe de gobierno de la ciudad, b) buscar la condonación de la deuda gracias a un decreto facultativo del jefe de gobierno, apelando al mal servicio y a la acción conjunta de los vecinos, c) mientras se consigue la condonación, pagar un mínimo legal llamado "cuota fija" (de aprox. 120 pesos), para lo cual acuden los vecinos una vez al mes todos juntos para aprovechar la presión

se dio cuenta de que podía gestionar beneficios no sólo para la escuela sino para la colonia. Hipólito, también jubilado, fue contador público, y ha estado vinculado a Víctor para el trabajo de gestión desde hace algunos años (no menos de cinco).

y defenderse de los abusos en las ventanillas, d) aprovechar la expectativa generada y convocar a reuniones mensuales para tratar ese y otros temas.

En 2007, gracias a este esquema, una gran cantidad de vecinos se vieron beneficiados con una condonación de deudas: el jefe de gobierno terminó por condonar deudas, aduciendo que era mejor regularizar a los usuarios y que sigan pagando una cuota fija reducida de ahí en adelante. Un logro de la organización, sin duda. Este hecho, por supuesto, es repetido constantemente en las asambleas, y sirve de legitimador de las decisiones que se toman desde los líderes: es una muestra de que la organización sí funciona.

En abril de 2011, en uno de los tantos casos de aprovechamiento político del tema, la diputada local Valentina Batres (PRD) se publicitó en los medios como quien logró impulsar una condonación generalizada de multas y cobros atrasados del agua en toda la ciudad. El argumento del secretario de Finanzas del Distrito Federal fue que con esta medida, los morosos pagan lo que deben (con descuentos, sin multas, con facilidades, y con condonaciones de facturas de años anteriores) y se regularizan evitando crear mayores huecos en el cobro hacia el futuro. El acto fue celebrado entre los vecinos de la Miguel Hidalgo, pero también por pobladores de otras colonias populares.

Esta breve muestra de un mecanismo de intermediación política que se nutre de las demandas urbanas, también opera en otro tipo de necesidades de las colonias. Por ejemplo, a raíz de un nuevo ordenamiento catastral en la ciudad efectuado en 2011, muchas viviendas de las colonias Miguel Hidalgo, La Fama, Peña Pobre (entre tantas otras), fueron reclasificadas.[12] Ese registro catastral es la base para calcu-

[12] Un caso muy llamativo es el de la colonia popular Peña Pobre que, por ubicarse junto a la Plaza Comercial Cuicuilco, fue catalogada como Estrato 1. Eso hizo que los costos del agua y el predial se multiplicaran por 10 o por 20 en cada vivienda.

lar el impuesto predial. Durante todo el 2011 las organizaciones de vecinos han estado reportando constantes cobros excesivos en el predial, pidiendo una reclasificación catastral que les permita pagar menos. Nuevamente, organizaciones como las de Víctor en la Miguel Hidalgo (o las de Rodrigo en La Fama) aparecen para: a) explicar por qué el repentino cobro excesivo, b) buscar amparo en alguna normatividad, c) brindar un horizonte de posibles soluciones.

Lo que hacen los líderes vecinales a pequeña escala, lo hacen también actores políticos con mayor presencia en la ciudad (como el caso de la diputada V. Batres, hermana del entonces secretario de Desarrollo Social del GDF, Martí Batres).

Los mismos esquemas son aplicables a otros problemas y servicios urbanos. Uno de ellos es el que oferta en las colonias populares el sindicato de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Ayudados por amparos legales que en principio benefician a los usuarios,[13] los miembros del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) convocan a no pagar la luz, ofrecen conexión directa y rápida (e ilegal). La organización Bases Tlalpan, que opera en buena parte del territorio de la delegación de Tlalpan, pero cuyos orígenes se ubican en el mercado de tierras de la colonia Mesa de Hornos, fomenta entre sus bases la adopción del esquema propuesto por el SME. Lo mismo hacen organizaciones como las de Rodrigo

[13] Por ejemplo, que la ley establece haber firmado un contrato de prestación de servicios públicos. Y como la facturación de la CFE se hace sin la firma de ese contrato, el SME ofrece la opción del NO pago y de amparo legal. El esquema funciona otorgando una carta-poder al SME para que sea quien negocie ante las autoridades a nombre de los vecinos. Un tema que, a la luz de la economía popular y, en medio de una reunión de varios vecinos, se presenta como atractiva posibilidad de no pago. Para otros, en cambio, es la compra de un problema. La mayoría, de hecho, llevados por los criterios de los dirigentes, hace el trámite para otorgar la carta-poder (llenar un formulario, presentar copias de facturas anteriores y de la credencial del IFE) y se embarca en un posible no-pago de la luz.

Botello en la Fama y la de Víctor en la Miguel Hidalgo. Es una forma de no pagar por el servicio basándose en el cobro excesivo de parte de la empresa eléctrica ahora encargada de prestar el servicio (CFE).

Los campos de acción de Rodrigo: gestor en La Fama y empresario vinculado

En el barrio obrero La Fama, uno de los líderes de reciente aparición, Rodrigo Botello, ganó rápidamente legitimidad y liderazgo (en menos de cuatro meses) porque copió el modelo de intermediación de Víctor Coreno. Ofreció a los vecinos atención con respecto al excesivo cobro por el agua y el predial. En un momento, llevó a los vecinos a las asambleas organizadas por Coreno en la Miguel Hidalgo y, poco a poco, cautivó a un grupo de seguidores de La Fama y colonias aledañas para que se carnetizaran en una naciente organización, dejando a un lado la de Coreno. Se trata de un liderazgo nuevo, que se inserta en la dinámica de la gestión copiando el modelo de otro grupo ya establecido, el de Víctor.

Además de los servicios de intermediación en temas de agua, luz y predial, Rodrigo consiguió que la delegación asigne 200 000 pesos para remodelar el kiosko en la plaza central del barrio. Negoció con la Bodega Comercial Mexicana (que ocupa el inmueble de la fábrica La Fama, que da origen y nombre al barrio) el acceso (compartido) a la plaza central del barrio, para lo cual puso un largo tubo a lo ancho de la calle que impedía el paso de los camiones que abastecen a la Bodega. Así, logró un pago mensual de esta empresa a la organización vecinal.

También, en un acto celebrado por los miembros de la organización, amenazó con cerrar el paso de la Av. Insurgentes si es que no se cambiaban los tiempos del semáforo que permite la salida de vehículos de las colonias La Fama, Miguel Hidalgo, Tepeximilpa, Fuentes Brotantes, entre

otras, a esa avenida principal. Como resultado, la policía asignó una cuota de 2x1 minutos (antes era de 3x1 y hasta de 4x1 en horas pico) a la intersección vial: dos minutos para Insurgentes y un minuto para la calle Ayuntamiento, lo que descongestiona el tráfico para los vecinos de la zona. Todos estos logros, frutos del liderazgo de Botello, acrecientan su posición en la escalera de mediación política.

En otra faceta de su vida, Rodrigo hace parte de un grupo de apoyo a jóvenes que quieren salir del consumo de drogas. Asiste los domingos a sesiones grupales, que "es como doble A", en las que se comparten experiencias y se busca apoyo moral. Entre otras actividades, quienes participan en ese grupo se reúnen para hacer actividades deportivas. Muchos de ellos, practican frontón (golpear con la mano una pelota de caucho contra una pared reglamentaria).

A la vez, Rodrigo es un empresario. Junto a su padre (ex policía), tiene un negocio de seguridad privada en el que contrata personal para hacer guardia y prestar el servicio de sistemas electrónicos y computarizados de vigilancia. Según dice (entrevista), ese negocio se le ocurrió desde muy joven, cuando, trabajando para un grupo de judíos dueños de hoteles ubicados en distintas zonas de la ciudad, le encargaban mantener el orden en las instalaciones. "Lo mismo atendías casos de un borrachito que se pasaba de copas y no quería pagar la cuenta, o algunos huéspedes que hacían demasiado ruido en una habitación, o casos en que un marido celoso violentaba a su mujer o a su amante en algún hotel. Hasta ocurrieron un par de casos de asesinatos o ataques con armas. Es la vida de la noche, de los hoteles. Ahí aprendes a controlar situaciones de riesgo, a madrear a uno que ya se pasa, a manejar al personal. Me llamaban, a la hora que sea eh, y yo acudía con personal de seguridad, o a veces yo solo, a solucionar problemas que los administrativos del hotel no podían".

Con ese negocio de seguridad, atendió el pedido del delegado de brindarle seguridad personal y de vigilar las

casillas en la elección interna del PRD en 2009 (que fueron especialmente conflictivas): "Ahí conocí al delegado, esa fue mi primera vez que conocía *lo de la política*". Cuando asume el poder, el delegado nombra al hermano de Rodrigo como funcionario en el Área de Promoción del Deporte en la delegación. Asimismo, beneficia a Rodrigo y a su familia con la concesión (a nombre del padre de Rodrigo) de la administración de los deportivos de Villa Olímpica, Vivanco, Ceforma y Parque Morelos. Su hijo, también llamado Rodrigo, aparece en la planilla de la delegación como funcionario del Área de Deportes.

A raíz de estas concesiones, se han levantado denuncias de "corrupción". Un sector de la izquierda local (algunos de ellos, militantes de Bases Tlalpan) denuncia estos modelos de gestión como privatizaciones *de facto*, pues la nueva administración concesionada cobra el uso de las instalaciones construidas con recursos públicos, a precios mayores que antes del cambio de modalidad. Entre las concesiones que se adjudican a la familia de Rodrigo, se permite la instalación de gimnasios privados a los cuales acuden clientes de clases medias y no sectores de clases populares.

Según Rodrigo, las concesiones son legales, no las otorga directamente su hermano (funcionario), sino el jefe de su hermano, y se paga por ellas. En las entrevistas que tuvimos, Rodrigo me explica que es un negocio que quiso emprender su hijo a su regreso de una estancia en Canadá. "Lo mandé porque estaba mal, con problemas. Cuando regresó, me dijo que le apoye con el negocio de los gimnasios. Los vio allá en Canadá, cómo se administraban, qué servicios ofreces a los clientes, todo. Compramos los equipos de un gimnasio en Polanco, que los iban a rematar, porque querían renovar sus implementos. Caminadoras, máquinas de step, pesas, mostradores. Son todos de excelente calidad. Y los pusimos acá en estas zonas donde hay gente que puede pagar un poco menos".

DE CONTIENDAS Y TRAMAS DE INTERACCIÓN

Obdulia, Víctor y Rodrigo son líderes vecinales involucrados en la dinámica de gestión de demandas urbanas. Exceptuando el caso de Víctor, Obdulia y Rodrigo consiguieron beneficios directos (empleos o contratos) con la delegación.

Busco evidenciar una trama de interacciones de la que forman parte y que es constitutiva de la práctica política popular.

Los tres participaron activamente en la formulación de Planillas para participar en las Elecciones Vecinales de 2010, a raíz de las reformas a la Ley de Participación. Su papel como líderes locales les sitúa en lo que la literatura conoce como intermediarios políticos.

Son gestores que pueden vender su *capital político* a los partidos. Se ubican entre las demandas de la población y el gobierno local (de Tlalpan o de la Ciudad de México) que puede atenderlas.

Al presentar estos breves perfiles biográficos y las descripciones de las actividades de Obdulia, Víctor y Rodrigo, no es mi interés ubicarlos como "representativos" ni como "típico-ideales". En la siguiente sección voy a describir muy brevemente dos contiendas que se produjeron durante mi trabajo de campo y que abonan a la trama de interacciones que aquí construyo. Quiero enfatizar que una mirada analítica centrada en la interacción puede darnos luces explicativas que vayan más allá de la dicotomía acción (colectiva) *vs.* clientelismo.

Tiempo nuevo

El Centro de Artes y Oficios Tiempo Nuevo es una instalación ubicada en la colonia Miguel Hidalgo II, inaugurada durante los años noventa por el entonces presidente Carlos Salinas como una "donación" a la colonia. El complejo lo componen

dos edificios, un gran estacionamiento, un conjunto de canchas de futbol, básquet, frontón y tenis. Uno de los edificios lo ocupa el INVI (Instituto de Vivienda del Distrito Federal), el otro, de varios pisos, amplio y con varios salones, alberga talleres de baile, zumba, ballet, música, títeres, grabado, teatro. En la parte baja de las instalaciones cuenta con un auditorio, un subsuelo y una amplia bodega. En la parte posterior funciona una guardería de niños. Es decir, se trata de un importante complejo utilizado para actividades comunitarias, en el cual adultos, jóvenes y niños de la colonia (y de las colonias cercanas) pueden pasar las tardes, fines de semana o, en general, su tiempo libre.

En el salón de la planta baja, cada 15 días (o cada 30, según el ritmo que lleve), se reúne la organización de Víctor.

El 2 de agosto de 2010, funcionarios de la delegación hicieron una inspección de las instalaciones, y dejaron correr el rumor de que las instalaciones estaban subutilizadas. Y que, dado que la delegación renta espacios para el funcionamiento de algunas de sus dependencias, se estaba considerando desalojar a los usuarios y convertir los salones del edificio en oficinas. Es más, la parte de abajo y el subsuelo, se dijo, iban a ser utilizados como bodega del Servicio de Limpia. Ese mismo día, otro grupo de funcionarios acudió a las instalaciones y etiquetó las puertas del edificio con letreros que asignaban oficinas en los espacios ocupados por los talleres.

Frente a esta tentativa, la protesta de los usuarios y los profesores consistió en tomar las instalaciones al siguiente día, desde las 5:00 am. Víctor y los miembros más activos de su organización se ofrecieron para intermediar con el jefe delegacional. Los usuarios (principalmente padres de familia de los niños que acuden a los talleres) y los profesores no los quisieron reconocer como interlocutores y exigieron la presencia del delegado para negociar.

En esa época, Víctor y Rodrigo (junto a otros dirigentes de la colonia) fueron muy activos, llamando a reuniones,

explicando a la gente el posible perjuicio, etc. Días después, asisten varios funcionarios de la delegación a negociar con los vecinos, a explicarles que es necesario usar las instalaciones para los talleres, pero también para otros destinos porque están subutilizadas. Los usuarios, en medio de las tensiones, ven a Víctor y a Rodrigo con cierta desconfianza. Interpelan a los funcionarios de la delegación (con gritos) y piden nuevamente hablar con el delegado.

Al día siguiente acude el delegado, para entonces los usuarios habían puesto pancartas, advertido a periódicos y hecho denuncias de que se les iba a quitar un espacio comunitario. Amenazan con cerrar la avenida Insurgentes y tomar las estaciones del metrobús. Al acudir el delegado, vecinos, usuarios y profesores, increparon a los funcionarios que asistieron a "repartirse las oficinas". Rodrigo, usualmente muy activo en las reuniones, guardó distancia y silencio. Dejó que los vecinos hablaran directamente con el delegado.

Finalmente, el delegado ofreció hacer mejoras en las instalaciones, e incluso pagar mejor a los maestros. Los vecinos le toman la palabra y le piden que firme esos compromisos, ante lo cual el delegado convoca a una reunión en la delegación para la semana siguiente. Los usuarios exigen que sea ese mismo día. Así, el delegado los cita en la jefatura delegacional esa misma tarde. Con gran convocatoria, los usuarios de Tiempo Nuevo y los vecinos que acuden a las reuniones con Víctor, desbordan la sala de cabildos de la delegación. Entre negociaciones, acusaciones, gritos y malentendidos, se formula un acta con los ofrecimientos hechos en la mañana por el delegado. Luego, éste y su equipo se retiran de la sala. Después de unos minutos, aparece la secretaria particular del delegado con el borrador de un "acta" para que lo firmen los vecinos o sus representantes. Pero el acta no está redactada en papel membretado y los vecinos reclaman. Piden que sea un documento oficial y no sólo un papel. La secretaria del delegado responde que lo que están

firmando es un "pliego petitorio" y no un "compromiso del delegado". Ya entrada la noche, y sin la presencia de ningún funcionario de la delegación, los vecinos deciden salir e ir a sus casas. "Nos dieron atole con el dedo", me dice Alejandra, que redactó el acta. El efecto, sin embargo, fue la marcha atrás de la decisión de ocupar el espacio comunitario por oficinas administrativas.

El resultado en términos de la interacción entre líderes vecinales, vecinos y funcionarios puede resultar aleccionador: en una combinación de escenarios de conflicto, Víctor y Rodrigo son parcialmente reconocidos como interlocutores frente a las autoridades. Algunos vecinos que los conocían, promovieron que ellos asistan y apoyen la defensa del Centro Tiempo Nuevo. Otros, algunos usuarios del centro que no los conocían, fueron indiferentes o desconfiados a su participación. Víctor (junto a Pepe e Hipólito, sus amigos) y Rodrigo promovieron una serie de actos de resistencia frente a lo que consideraron un abuso por parte de la delegación. Pero una vez estallado el conflicto, fue suficiente la presión de los vecinos y el delegado dio marcha atrás.

Ceforma[14]

Ceforma es un complejo ubicado en la colonia Fuentes Brotantes, muy cerca de las colonias Miguel Hidalgo y La Fama. Se compone de una alberca olímpica, una fosa de clavados (donde entrena una ex campeona olímpica) y una alberca para practicar polo acuático. A un costado de la alberca se extiende un graderío, y al otro, una gran plataforma que se divide en espacios para un gimnasio, la práctica de box

[14] La familia de Rodrigo Botello: a) ofrece servicios de seguridad privada a la familia del delegado y b) posee las concesiones de los gimnasios y de los estacionamientos que funcionan en las instalaciones de los deportivos de la delegación. Entre ellos, el Deportivo Villa Olímpica, el Deportivo Vivanco y el recién inaugurado Ceforma.

y artes marciales como tae kwon do y kick boxing. Debajo de esta plataforma, hay varias instalaciones para duchas (ocupadas para la alberca) y salas de uso múltiple (zumba, baile, etc.). Se trata de una de las mayores inversiones en infraestructura hecha por el gobierno federal (la Conade) y administrada por la delegación como un punto para la promoción del deporte comunitario. La alberca se usa, principalmente, para cursos de natación a personas de todas las edades. Requiere para su funcionamiento de personal administrativo y profesores de natación.

La administración de este deportivo fue concesionada a la familia de Rodrigo Botello, lo mismo que otros deportivos de la delegación. Surgieron denuncias de privatización y de corrupción, alentadas por el hecho de que un hermano de Botello trabaja en la delegación (lo acusan de conflicto de intereses). Parte de las denuncias las formulaba Israel, miembro de Bases Tlalpan, quien denunciaba nepotismo, concesiones a dedo y la ausencia de pago a los profesores. También se denunció el cobro excesivo por el servicio de estacionamiento. Estas denuncias de Israel y otras personas (usuarios de Ceforma y profesores) circularon por periódicos, redes sociales, y han llegado a formar parte de comparecencias del delegado en la Asamblea Legislativa.

Algunas protestas terminaron en represión policial. Varios usuarios del deportivo resultaron heridos y una mujer fue golpeada y detenida. Otras personas sufrieron contusiones luego de un plantón frente a las instalaciones de la alberca.

La revista *Proceso* dedicó dos ediciones a estas noticias, puestas como portada de las respectivas ediciones. Toda esta información salió publicada como "denuncias" en la revista *Proceso* (núm. 1796) (y en otros medios como *Reforma*, *La Jornada* y *Excélsior*), que documentó una serie de contratos a dedo, nepotismo y asignación de puestos a "aviadores" (que cobran, pero no trabajan) en la delegación (uno de ellos, el

hijo de Rodrigo Botello). El principal informante de la periodista era Israel, de Bases Tlalpan.

Israel, recordemos, es miembro activo de Bases Tlalpan. Entró a la delegación como parte de los puestos que se le otorgaron a la organización por su apoyo electoral en 2009 y gracias a las discrepancias en el manejo de los deportivos, fue despedido. Como parte de la dinámica de denuncias, un colectivo de profesores y entrenadores de Ceforma, a los que apoyó Israel y Bases Tlalpan, convocó a padres de familia y usuarios a tomar las instalaciones, hacer plantones y colocar mantas. Cuando el delegado pidió a Obdulia que "controle a Israel", ésta se fue del lado de Israel y lo apoyó.

Este conflicto por Ceforma hizo que desde entonces (finales de 2010), Obdulia fuese marginada de la delegación: "No se atrevieron a despedirme, pero me tienen sin recursos. Ellos manejan el presupuesto, y pueden mover todos los recursos a otras direcciones".

El conflicto por Ceforma alejó políticamente a Obdulia del equipo del delegado. Esto se volvió a manifestar en las negociaciones que quiso emprender con la delegación, ya no como funcionaria, sino como líder de la Colonia Mesa Los Hornos. Se trataba de una negociación para regularizar predios en la colonia y dotarla de infraestructura. El delegado, ahora lejano políticamente de Obdulia, echó tierra a la posibilidad de regularizar predios en Mesa Los Hornos. El problema estructural de la colonia quedó pendiente, quizás puedan plantearlo con la siguiente administración (2012-2015).[15]

El conflicto de Ceforma muestra varios rostros y sirve para evaluar cómo los actores, en distintas facetas, confluyen en una trama de interacción. A la luz del conflicto de Tiempo Nuevo, se podría esperar que Rodrigo sea visto como un actor social que respalda a los vecinos en contra del delegado.

[15] En el proceso interno de selección de candidatos del PRD, Obdulia apoyó a Maricela Contreras, candidata opuesta al grupo del delegado.

Pero a la luz del conflicto por Ceforma, se alinea más con este último y menos con los vecinos.

Obdulia, que apoya políticamente al delegado en 2009, luego tiene que irse contra él, pues Israel (miembro de su organización) se ve inmerso en el conflicto por Ceforma. El delegado, a su vez, se sirve de los apoyos de Obdulia y de Rodrigo, cede espacios (a Obdulia) y concesiones (a Rodrigo), pero se enfrenta a ambos en dos momentos de pugna con los intereses de vecinos organizados. Esta trama que podría parecer "contradictoria" o poco decantada, es propia de varias otras interacciones, conflictos y disputas en la política local.

Ignoro si Obdulia y Rodrigo se conocen personalmente. Los vincula en el campo político, no sólo sus posiciones relativas en las redes de resolución de demandas urbanas, sino una relación directa con el delegado. Rodrigo como prestador de servicios de seguridad, a la vez que como beneficiario de las concesiones de los deportivos de la delegación. Obdulia, como gestora de demandas sociales, con pesos en el territorio que operó políticamente a favor del PRD en 2009 y se ganó con ese trabajo algunos puestos de estructura.

La mecánica política local hizo que Israel (del grupo militante de Obdulia) llegue a un sitio de la delegación en donde se encontró con el hermano de Rodrigo. La fricción entre ambos, el uno a favor y el otro en contra de las concesiones, provocó una contienda local que incluyó a usuarios de un servicio, así como a los propios actores políticos (en especial, el grupo político del delegado). En una publicación electrónica, que cubrió un evento político de Martí Batres (posible candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad) en la delegación, se recogía la siguiente nota:

> Obdulia George Matlacuazi, quien encabeza *Bases Tlalpan*, manifestó que para ir conformando un movimiento realmente de izquierda debemos estar todos bajo tres ejes fundamentales: alto a la represión, privatización y corrupción que vivimos en

> Tlalpan, en el Distrito Federal y en el país: *'Alto a la privatización de todos nuestros espacios, no es posible que nuestro espacio y territorio se siga privatizando y sea para algunos cuantos. El país es nuestro, la Delegación es nuestra y tenemos que seguir con esa lucha porque tenemos que rescatar lo que nos corresponde'*, dijo.

Aseguró que se tiene que seguir luchando por alcanzar la democracia y la igualdad, como se ha venido haciendo por una justicia real, 'no tenemos por qué estar pidiendo, tal pareciera una limosna, porque a los que están en el poder únicamente les corresponde coordinar los trabajos, asumir la responsabilidad que tienen, porque trabajan con nuestros impuestos, los deportistas, el deporte es un derecho no es un privilegio'.

Con estas descripciones, he querido ilustrar cómo se entrecruzan tramas de acción colectiva contenciosa (las protestas por Tiempo Nuevo y por Ceforma) con tramas de funcionamiento clientelar: la forma en que hacen gestiones tanto Obdulia como Rodrigo, convirtiéndose en intermediarios personales de demandas.

UNA MIRADA RELACIONAL A LA CONTIENDA POLÍTICA EN COLONIAS POPULARES

Las inmersiones en los datos que acabo de exponer tienen como fin situar algunas de las tensiones presentes en los debates teóricos y metodológicos implícitos en una mirada etnográfica sobre la política local, y en especial a la forma interrelacionada de acción colectiva y redes clientelares en colonias populares. Por ejemplo, ¿cómo abordar analíticamente a *Bases Tlalpan*? ¿Es un brazo del PRD o es, como dicen, "lo que queda del Movimiento Urbano Popular"? ¿Su dinámica puede abordarse como clientelismo o como acción colectiva? ¿O ambas? ¿Cuán representativa (estadística y

analíticamente hablando) es la experiencia de Víctor o de Rodrigo? ¿Son casos de "institucionalización" de organizaciones vecinales, o se trata de otras estrategias de acción que se modelaron en el camino?

Con el ánimo de hacer dialogar a la teoría con la empiria, quisiera traer a colación tres herramientas que eviten caer en lecturas reduccionistas de los fenómenos empíricos a ser aquí estudiados.

Las prácticas y la experiencia: el actor y las lógicas situacionales de acción

La primera idea teórica que quisiera poner en escena refiere a que, siguiendo la sociología de la experiencia de F. Dubet (1994 y 1989)[16] y la "construcción social de la acción colectiva" de A. Melucci (1991 y 1999), los actores ya no pueden ser vistos como portadores de una única y excluyente racionalidad política. Lejos de las concepciones racionalistas y estructuralistas de la acción, las advertencias de la sociología contemporánea sobre la acción colectiva nos obligan a pensar a los actores como portadores de sentidos prácticos que actúan, *a la vez*, en escenarios diversos y desplegando racionalidades acordes a cada tiempo y espacio. Se trata de actores competentes en varios campos de acción simultáneos.

Si tomamos la acción vecinal de Rodrigo, por ejemplo, vemos que logra cumplir demandas y acompañar la organización en La Fama (kiosko, pagos del agua, del predial). A la

[16] "La sociología de la experiencia aspira a definir la experiencia como una combinación de lógicas de acción, lógicas que vinculan al actor con cada una de las dimensiones de un sistema. El actor está obligado a articular lógicas de acción diferentes, y es la dinámica engendrada por esta actividad la que constituye la subjetividad del actor y su reflexividad" (Dubet, 1994: 105, traducción de María Luz Morán).

vez, busca resolver el problema de la legalización de predios, que es la demanda más fuerte de los vecinos que acuden semanalmente a las reuniones. Sin embargo, Rodrigo opera en un plano estrictamente político cuando apoya al delegado, y hace parte de una dinámica empresarial (¿corrupta?) al beneficiarse de las concesiones. Sus parientes cercanos son funcionarios públicos, y él mismo se beneficia de contratos con la delegación. Pero a la vez actúa como líder vecinal para presionar a la delegación por recursos.

Obdulia, así como su organización Bases Tlalpan, opera en distintos registros: como gestora de demandas (en Mesa Los Hornos), como funcionaria (en la delegación), como operadora política (apoyando al PRD), como colaboradora de organizaciones sociales (SME, por ejemplo).

Es decir, se trata de actores con racionalidades diversas en escenarios múltiples. Toda esta gama de posiciones y funciones se pueden conceptualizar como trabajo político, extendiendo la noción de política a todas esas acciones en las que se busca incidir en los recursos y en la distribución de poder.

"Los actores –dice Melucci– juegan muy diferentes juegos al mismo tiempo, y la tarea del análisis es develar su pluralidad" (1991: 363). En este sentido, un aspecto a rescatar es la superación de aquellos enfoques tradicionales que, cual roles, buscarían una sola lógica de acción en los sujetos. Desde la sociología de la experiencia, Dubet igualmente entiende que los actores están inmersos en tramas múltiples y que, en el despliegue de su agencia, combinan lógicas de acción de manera situacional. Se trata de actores complejos y activos, no de sujetos que sólo cumplen roles. Pensando relacionalmente, como lo hacen Elías con su idea de las figuraciones sociales (redes de relaciones de las que hacen parte los actores), o Simmel con la noción de círculos de acción y pertenencia (como distintos ámbitos de sociabilidad), Dubet (como Melucci y Tilly) llama la atención

sobre la heterogeneidad de los principios que organizan las conductas de los actores.

Estamos ante una perspectiva que privilegia la experiencia y las prácticas, sobre los roles y las posiciones (estructurales). Quedan en entredicho, al menos en suspenso, posiciones estructuralistas, funcionalistas y/o racionalistas, en la medida en que las racionalidades (no "la" racionalidad) y las estrategias dan cuerpo a un actor multidimensional. La acción, en este sentido, "no puede ser entendida como el simple efecto de precondiciones estructurales, o de expresiones de valores y creeencias" (Melucci, 1991: 358). En el fondo, lo que sucede es que (de la mano de Dubet) se rescata la idea weberiana de que la "acción [es] compleja, jerarquizada entre varios niveles de significado". En sus palabras:

> Weber nos enseñó que el actor estaba desgarrado entre diversas lógicas opuestas y contradictorias, que no había que creer en el *pathos* de la reconciliación de los valores y que había que admitir que la identidad social es un proceso complejo y contradictorio porque el actor se construye en varios niveles de la práctica, de los cuales cada uno tiene su propia lógica y remite a tipos específicos de relaciones sociales (Dubet, 1989: 534).

Este razonamiento es vital para entender, por ejemplo, las diversas esferas de acción de Bases Tlalpan (así como las incursiones en varios planos de acción de Rodrigo o de Víctor). Cuando les interrogo sobre "qué hacen", no tienen problema en admitir lógicas de acción que parecerían paradójicas, si se las mira con categorías analíticas normativas. Por un lado, "gestionar ante la delegación" podría ser visto como un momento para-institucional de la administración pública, un momento de clausura de las opciones transgresoras y de institucionalización del movimiento, o como una situación que los convierte en mediadores clientelares entre el partido en el poder local y las bases electorales (lo mismo que la

actividad detrás de la frase: en las elecciones, "le hicimos el trabajo en territorio al actual delegado", o "acudimos al llamado de Andrés Manuel"). Por otro lado, "apoyar al SME", o "hacer trabajo político", "tratar de generar conciencia contra el neoliberalismo", pueden ser vistos como actos disruptivos contra un orden social evaluado como injusto. En este caso, se trataría, en efecto, de alguna manifestación contenciosa.

Desde esta sociología de la experiencia, centrada en las diversas prácticas de los actores, y no en los roles que se esperan de ellos, es posible entender varias lógicas de acción operando al mismo tiempo y de forma estratégica. Sólo se trata de actores "in-formales" o de una zona "gris", si es que preconcebimos una distinción diáfana con lo "formal", y sólo si en realidad creemos que hay algo así como "lo blanco" y "lo negro", que se contaminan. Sostengo que no son "informales" ni "grises", sino simplemente actores complejos y diversos que deben ser comprendidos relacional y situacionalmente.

Campos de acción diversos
o el espacio entre sociedad y política

Una segunda idea que quisiera rescatar en este texto tiene que ver con las continuidades y discontinuidades entre acción colectiva contenciosa (movimientos sociales) y otras formas de hacer política. Por ejemplo, me refiero a que analíticamente se suelen establecer distinciones que en la realidad no existen. Cuando se habla de "sociedad civil" y "Estado" de forma separada, o cuando se habla de "movimiento social" y "movimiento (partido) político" como categorías dicotómicas, o de "movimiento social" e "institucionalización del movimiento" como dos momentos separados, se cae en presiones analíticas importantes (¡y útiles!), pero que a veces ocultan más de lo que esclarecen. Se piensa, por ejemplo, que cuando un militante se convierte en funcionario, el movimiento ha sido, de alguna manera, cooptado. Siendo "lo social" distinto

de "lo político", se suele pensar que cuando un activista se convierte en candidato, el movimiento (social) "muta" hacia "lo político". Sin embargo, me parece que pensar en una noción como "campos de acción diversos" y no normativamente dicotómicos anulan las sorpresas y afinan el análisis.

Los ejemplos sobre el tema abundan. Bases Tlalpan, sin rubor (y sin necesidad de tenerlo), opera a la par tanto en el aparato político de la delegación como en la vocación trotskista y movimientista que, a decir de Héctor, tienen. Se trata, por las entrevistas que tuve con Héctor y Obdulia, de una forma de operar en los espacios de intermediación política que se les presente, ya sea como brazos del PRD, bases de AMLO, operadores del SME en el territorio...

Por ejemplo, quisiera decir que conocí a los líderes de *Bases Tlalpan* en lo que se denominó el "Primer Foro de Discusión del PRD",[17] una reunión de evaluación política del Comité Ejecutivo Delegacional del partido luego de las elecciones. En mi diario de campo, al inicio los concebí como un grupo de mediadores clientelares entre la delegación, el partido en el poder de la delegación, para ser precisos, y las bases electorales. En ese momento, los pensé como parte de la maquinaria electoral del PRD local, que asistía a las reuniones a monitorear qué espacios (laborales) para sus miembros se abrían en la delegación (como de hecho fue la lógica de varios grupos participantes en ese Foro). Sin embargo, con pocas semanas de hacerles seguimiento, me di cuenta de que su vinculación con el PRD local es sólo una parte de su actividad. El eje está en la gestión de demandas en varias colonias, pero su origen proviene de la necesidad de regularizar la propiedad de la tierra en Mesa Los Hornos.

[17] Entre agosto y noviembre de 2009 se organizaron tres foros de discusión de este tipo, con miras a alimentar una propuesta de "refundación del partido" en el Congreso Nacional del PRD de inicios de diciembre de ese año.

Como pude observar, "la reunión del sábado 24 de octubre" con dirigentes del SME, por ejemplo, coincidía con la realización del Segundo Foro del PRD en Tlalpan. Ante eso, en la reunión del 20 de octubre, la organización no incluyó el tema del Foro en la agenda, ni se lo trató informalmente. Desde el público, en un momento de diálogo, se planteó la inquietud de quién asistirá a la reunión del PRD. La respuesta de Héctor fue que "hoy la prioridad es el SME", y alentó a los participantes a acudir orgánicamente, "con las camisetas de color rojo que nos caracterizan", al foro informativo con el SME, y no al foro del PRD, porque la situación así lo ameritaba.

Con este breve ejemplo quiero señalar nuevamente que si queremos ver a Bases Tlalpan como una (clientelismo) u otra cosa (acción colectiva), de forma dicotómica, perderemos finura en el análisis.

Este tema no es menor, porque autores como Melucci, así como Tilly y sus colegas, sí que hacen las distinciones entre lo social y lo político. Tal vez sea Tilly quien, con su concepto de conflicto político (que necesariamente incluye al Estado o al gobierno como uno de los agentes en el campo),[18] sea quien marque más claramente una estrechez conceptual al respecto.[19] Melucci (1999), del mismo modo, otorga un

[18] "El conflicto político incluye todas las ocasiones: 1) en las que algún grupo de personas realiza reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores (reivindicaciones que si se cumpliesen afectarían los intereses de estos últimos) y 2) en las que al menos una de las partes afectadas por reivindicaciones, incluyendo terceras partes, es un gobierno" (Tilly, 1998: 30).

[19] Insisto, no creo que se trate de distinciones y precisiones inútiles. Todo lo contrario. Mi punto es que, a veces, por querer ser precisos con los conceptos, somos imprecisos con la realidad. Se da el caso en que los actores no viven como "diferente" su participación en una red clientelar, en un partido político o en un movimiento (organización) social. Al separar estas esferas de acción, los sociólogos ganamos en precisión, ciertamente, pero se requiere enfatizar que para los actores, y en la realidad, las cosas funcionan entrelazadas.

estatus menor y acotado a la política, y uno más amplio y determinante a lo social. En sus palabras, "los movimientos sociales y los partidos políticos son dos formas de la acción que desarrollan los sistemas contemporáneos" (1999: 174). En el mismo sentido, "aun considerando la dimensión política de las relaciones sociales es importante no olvidar que los fenómenos políticos [sólo] expresan aquello que se forma en el tejido profundo de la sociedad" (1999: 175).

Mi punto es que estas distinciones son efectivamente útiles, pero hasta cierto punto. A veces la imbricación de los campos de acción es más importante que su decantamiento (y esto es particularmente relevante para entender la política popular urbana). Esto, me parece, es muy importante a la hora de pensar la política local, las zonas grises de la política popular, pues los actores, como traté de decirlo en el punto anterior, operan con múltiples lógicas de acción, y activan escenarios de acuerdo "al momento del flujo social" (para utilizar una frase de Bourdieu), y no siempre hacen las distinciones sociológicas en su actividad práctica.

Por ejemplo, estableciendo tres distinciones analíticas sobre si la acción tiene: a) un carácter colectivo (solidario) o agregativo, b) si presenta un conflicto o no, o c) si busca transgredir el orden o adaptarse a él, Melucci advierte la complejidad y pluralidad de situaciones que pueden presentarse en un mismo objeto empírico. Sus matices permiten distinguir tipos de acción colectiva distintos. Pero, en casos donde todo aparece "mezclado", y donde los actores se desenvuelven en entramados de relaciones que no necesariamente perciben como separadas (son, según los momentos y las circunstancias, solidarios *y* agregativos, buscan transgredir el orden, así como acoplarse a él, presentan un conflicto pero también quieren evitarlo) las distinciones de Melucci podrían resultar camisas de fuerza antes que herramientas de análisis. Vale subrayar que una conceptualización como la de "sociedad política"

de Chatterjee (2005) o de "zonas grises" de Auyero (2007) son útiles para pensar estas "mezclas", pero siempre con la salvedad de que la interpenetración entre lo social y lo político sólo se fija de forma analítica. Mi punto es que hay que tener en mente este hecho, como un ejercicio de vigilancia epistemológica.

El factor tiempo y el cambio social

Como tercera idea a colación, quisiera plantear que no se puede deslindar el análisis de las prácticas políticas locales de una mirada diacrónica sobre el cambio social. No sólo en el sentido de que se busque un cambio de forma normativa o teleológica (léase, democratización, por ejemplo, o cambio en la historicidad), sino operando sobre el supuesto de que los ciclos políticos cambian, las correlaciones de fuerza se alteran y las demandas sociales se redefinen.

Tal vez sea justamente ahí donde la escuela de la movilización de recursos y del proceso político, centrada más en la mecánica de la acción colectiva, saca ventajas, pues ha refinado un modelo que se preocupa más por la morfología y la organización de la contienda política, sin olvidar que la sociedad está en permanente cambio.

Inspirados en Barrington Moore y siendo deudores de la sociología histórica, Tilly y sus colegas se preocupan por el cambio social, y buscan en los *cómo* las respuestas a los *por qué* de las transformaciones sociales. Su modelo resulta útil y operativo pues conciben el cambio de manera paulatina y más concreta que aquel "cambio en la orientación cultural de la sociedad" de los estudiosos europeos. En sus palabras, "la expresión cambio social simplemente etiqueta ciertos aspectos de multitud de diferentes procesos sociales, cada uno de los cuales sigue su propia lógica" (Tilly, 1998: 28). Si los procesos sociales pueden ser pensados como ríos que fluyen, el cambio social no. "Podemos aprender ciertos cambios

sociales concretos" dice Tilly, pero "no podemos aprender el cambio social como un todo" (1998: 28).

Bajo esta noción operativa de cambio social, podemos hacer contrastes entre distintos momentos y dimensiones de la acción colectiva, y sondear (visibilizar) el cambio social en curso. Me refiero a ver (cual variables) distintos momentos en los ciclos de protesta, distintas configuraciones de las estructuras de oportunidad, diversos enmarcamientos y definiciones de la situación y, sobre todo, formas de acción (repertorios) que se renuevan en función de la creatividad de los actores. Esta es una opción que, de hecho, puede encontrarse en los estudiosos que abrevan del paradigma de la identidad. Pero pienso que estos últimos le ponen una exigencia tan grande a los actores colectivos (cambiar la historicidad) que merma las posibilidades de entender el cambio social en curso, porque lo perciben de forma global y normativa.

Pensando en los ejemplos que utilizo, claramente se puede ver que Bases Tlalpan está viviendo un momento distinto al de su origen a mediados de los ochenta. Por un lado, la competencia político-electoral que se instaura en el Distrito Federal a inicios de los noventa, altera la estructura de oportunidades políticas y sus opciones de acción. Por otro lado, la nueva generación de líderes sociales que ahora está a cargo de la organización (tras la muerte de Artemio, su fundador), marca nuevos horizontes en la agenda. Lo mismo sucede con los repertorios de acción que se modifican en estos años, pues de las demandas por vivienda de los inicios a la actividad de "gestión" actual, hay diferencias.

Lo que quiero resaltar es que: a) los actores y b) los escenarios configuran una c) trama y un proceso que va cambiando en el tiempo. Pensar en la acción colectiva de los sectores urbano-populares, requiere tomar en cuenta estas tres advertencias analíticas. En palabras de Melucci, "los análisis se tienen que dirigir a la pluralidad de aspectos

presentes en la acción colectiva, y explicar cómo se combinan y se sostienen a lo largo del tiempo" (1991: 364).

CIERRE

Los procesos de urbanización de América Latina han sido condicionantes de las formas particulares de acción política y protesta urbana. Las masas marginales pueden ser vistas como agentes pasivos carentes de posibilidades para el ejercicio de una ciudadanía plena, bases clientelares adormiladas por las situaciones de dominación, reproductores de culturas de la pobreza (que buscan simplemente la supervivencia material en condiciones extremas). Pero también son grupos que pueden organizarse y desplegar acciones colectivas. No siempre les queda fácil.

La actividad política de los pobres urbanos o las prácticas políticas de los pobres ciudadanos están moldeadas por las condiciones de segregación urbana y marginalidad socioeconómica (Merkelen, 2005 y Álvarez, San Juan y Sánchez, 2006). Los procesos de urbanización de las ciudades de América Latina fueron fruto de los modelos de acumulación capitalista en la periferia. La sustitución de importaciones dio un paso a un régimen de bienestar que se pretendía incluyente, y donde el Estado jugaba un papel protagónico a través de las políticas sociales. Quisiera sugerir que estos temas siguen presentes en la vida de los pobladores urbanos de México. Investigaciones como la de Paladino (2010), Tosoni (2007), aún en curso como la de Ziccardi (2008), o de largo aliento como las de Juan Manuel Ramírez Sáiz (1986) y Álvarez (2004), muestran que las demandas urbanas siguen produciendo actores sociales con características específicas, que las tramas de relación social se renuevan y que la esfera pública de la ciudad se complejiza. Por ejemplo, el paso que muchas de estas organizaciones populares están dando hacia la política electoral (Espinosa, 2000 y Haber, 2009)

es ciertamente un proceso nuevo que se ve facilitado por la apertura electoral en el Distrito y por intentos incipientes de formas alternativas de gestión pública (Bolos, 2003 y Tejera, 2009). Se trata de un tema que está investigado escasamente y que de entrada plantea interrogantes sobre el futuro de las organizaciones populares. Un tema que debe seguir indagándose con los lentes de quien busca nuevas politizaciones en la ciudad y nuevas (si las hubiese) formas de relación entre pobres urbanos y ciudad. La agenda analítica sigue abierta. Sin embargo, los retos que plantea esa agenda, al menos para los casos que investigo, obligan a combinar modelos analíticos, o formularlos de forma más compleja y cuidadosa, para abarcar lo que podría verse como contradicciones (de los actores) o contaminaciones (de los campos de acción). Para superar dicotomías como clientes pasivos *vs.* protestantes activos, o actores sociales *vs.* actores políticos, o cultura *vs.* estrategia, sugiero pensar que los actores tienen racionalidades múltiples, los escenarios son superpuestos y las condiciones son cambiantes. Al menos, es lo que me orienta para decodificar a los actores de la política popular urbana en el ejercicio de investigación que he estado realizando.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, Jorge (coord.) (1998), *Los movimientos sociales en el valle de México*, México, CIESAS, tomo II.

Álvarez, Lucía (2004), *La sociedad civil en la Ciudad de México. Actores sociales, oportunidades políticas y esfera pública*, México, UNAM, Plaza y Valdés.

_____ (1998), *Distrito Federal. Sociedad, economía, política, cultura*, México, UNAM.

_____, Carlos San Juan, Cristina Sánchez (coords.) (2006), *Democracia y exclusión: caminos encontrados en la Ciu-*

dad de México, México, UNAM, UAM, UACM, INAH, Plaza y Valdés.

Arditi, Benjamín (1995), "La política después de la política", en Silvia Bolos (coord.), *Actores sociales y demandas urbanas,* México, Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdés, pp. 39-73.

Ariza, Marina y Juan Manuel Ramírez (2008), "Urbanización, mercado de trabajo y escenarios sociales en el México finisecular", en A. Portes, B. Roberts y A. Grimson (coords.), *Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo*, México, Porrúa, Universidad Autónoma de Zacatecas, pp. 251-302.

Arteaga, Catalina (2003), "Espacio local, identidades y acción colectiva en la Ciudad de México. El caso del Ajusco Medio en la delegación Tlalpan", en Patricia Ramírez (coord.), *Espacio público y reconstrucción de ciudadanía*, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Porrúa, pp. 365-392.

Auyero, Javier (2007), *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina Contemporánea*, Buenos Aires, Siglo XXI.

_____ (2001), *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*, Argentina, Manantial.

_____, Fernanda Page y Pablo Lapegna (2008), "Clientelismo político y acción colectiva contenciosa: una relación recursiva", *Studia politicae*, núm. 14, pp. 7-40.

Benedicto, J. (1995), "La construcción de los universos políticos de los ciudadanos", en J. Benedicto y M. L. Morán (eds.), *Sociedad y política. Temas de sociología política.* Madrid, Alianza, pp. 299-322.

Bolos, Silvia (coord.) (2003), *Participación y espacio público*, México, Universidad de la Ciudad de México.

_____ (1999), L*a constitución de actores sociales y la política*, México, Plaza y Valdés.

_____ (coord.) (1995), *Actores sociales y demandas urbanas*, México, Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdés.

Bourdieu, Pierre (2001), "El campo político", en *El campo político*, Bolivia, Plural, pp. 9-31.

Castells, Manuel (1974), *La cuestión urbana*, México, Siglo XXI.

_____ (1974b), *Movimientos sociales urbanos*, México, Siglo XXI.

Chatterjee, Partha (2004), *The Politics of the Governed. Reflections on Popular Politics in Most of the World*, Nueva York, Columbia University Press.

Cobilt Cruz, Elizabeth Cristina (2008), "Entre el cliente y el patrón: la intermediación política en periodos de latencia", México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tesis de maestría.

Cornelius, Wayne (1980) [1975], *Los inmigrantes pobres en la Ciudad de México y la política*, México, Fondo de Cultura Económica.

Dubet, François (1994), *Sociologie de l'experience*, París, Seuil.

_____ (1989), "De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto", *Estudios Sociológicos*, vol. VII, núm. 21, pp. 519-545.

Durand, Víctor (2010), *Desigualdad social y ciudadanía precaria. ¿Estado de excepción permanente?*, México, Siglo XXI.

_____ (1997), "Cultura política de masas y el cambio del sistema político: el papel de la 'ambigüedad cultural'", *Revista Mexicana de Sociología,* vol. LIX, núm. 1, pp. 19-35.

Eckstein, Susan (1999), *El Estado y la pobreza urbana en México*, México, Siglo XXI.

Elias, Norbert (1999) [1970], *Sociología fundamental*, Barcelona, Gedisa.

Espinosa Damián, Gisela (2000), "Las mujeres de San Miguel Teotongo a la hora de la lucha ciudadana", en Dalia

Barrera Bassols (comp.), *Mujeres, ciudadanía y poder*, México, El Colegio de México, pp. 29-94.

Farrera, Javier (1988), "Implicaciones de la segregación urbana en el Movimiento Urbano Popular: zonas suroeste y norte de zona metropolitana de la Ciudad de México", en Jorge Alonso (coord.), *Los movimientos sociales en el valle de México*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, pp. 103-133, vol. 2.

Galindo, Luis Jesús (1988), "Ensayo tipológico del Movimiento Urbano Popular: la delegación de Tlalpan, Distrito Federal", en Jorge Alonso (coord.), *Los movimientos sociales en el valle de México*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, pp. 135-189, vol. 2.

González Alcantud, José (1997), *El clientelismo político. Perspectiva socio-antropológica*, Barcelona, Anthropos.

Haber, Paul (2009), "La migración del Movimiento Urbano Popular a la política de partido en el México contemporáneo", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. LXXI, núm. 2, abril-junio, pp. 213-245.

Harper, Douglas (1992), "Small N's and Communitu Case Studies", en Charles Ragin y Howard Becker (eds.), *What is a case,* Cambridge, Cambridge University Press, pp. 139-158.

Harvey, David (2007) [2001], *Espacios del capital. Hacia una geografía crítica*, Madrid, Akal.

Helmke, Gretchen y Steven Levitsky (2004), "Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda", *Perspectives on Politics*, vol. II, núm. 4, pp. 725-740.

Lezama, José Luis (2010) [1993], *Teoría social, espacio y ciudad*, México, El Colegio de México.

Lomnitz, L. A. (1975), *Cómo sobreviven los marginados*, México, Siglo XXI.

McAdam, Doug, Sidney Tarrow y Charles Tilly (2005) [2001], *Dinámica de la contienda política*, Barcelona, Hacer.

Melucci, Alberto (1999), "Democracia de la complejidad", en Alberto Melucci, *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia,* México, El Colegio de México.

_____ (1991), "La acción colectiva como construcción social", *Estudios Sociológicos,* vol. IX, núm. 26, pp. 357-364.

Merklen, Denis (2005), *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003),* Buenos Aires, Gorla.

Moctezuma, Pedro (1999), *Despertares. Comunidad y organización urbano popular en México 1970-1994,* México, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Metropolitana.

Paladino, Martín (2010), "Intermediación clientelar de demandas sociales y movilización política. La vivienda en la Ciudad de México", México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tesis de doctorado.

Portes, Alejandro, Bryan Roberts, Alejandro Grimson (coord.) (2008), *Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo,* México, Universidad Autónoma de Zacatecas, Porrúa.

Ramírez, Patricia (coord.) (2003), *Espacio público y reconstrucción de ciudadanía,* México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Porrúa.

_____ y Alicia Ziccardi (2008), "Pobreza urbana, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI. Una introducción", en R. Cordera, P. Ramírez y A. Ziccardi (coords.), *Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI,* México, Siglo XXI, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, pp. 23-48.

Ramírez Sáiz, Juan Manuel (2002), "Impacto urbano de la organización y de la protesta populares en México, 1980-2002", *Informe de avance, Proyecto "Latin American Urbanization in the Late Twentieth Century: A Comparative Study".*

_____ (1986), *El movimiento urbano popular en México*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

Sánchez, Estévez, Reyna (2004), *Los símbolos en los movimientos sociales. El caso de Superbarrio*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Simmel, George (2002) [1971], *Sobre la individualidad y las formas sociales. Escritos escogidos*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

Stokes, Susan (1991), "Politics and Latin America's Urban Poor. Reflections from a Lima Shantytown", *Latin American Research Review*, vol. XXVI, núm. 2, pp. 75-101.

Tarrés, María Luisa (1994), "Demandas democráticas y participación electoral en la Ciudad de México. Notas a partir de dos estudios de casos", en Roberto Blancarte (coord.), *Estado de México. Perspectivas para la década de los noventa*, México, El Colegio Mexiquense, Instituto Mexiquense de Cultura, pp. 627-663.

_____ (1991), "Campos de acción social y política de la mujer de clase media", en Vania Salles y Elsie McPhail (coords.), *Textos y pre-textos. Once estudios sobre la mujer*, México, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, El Colegio de México, pp. 77-115.

_____ (1990), "Participación social y política de las clases medias", en *México en el umbral del milenio,* México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, pp. 83-119.

Tejera Gaona, Héctor (2009), "Prácticas políticas, imaginarios y ciudadanía: las disonancias entre cultura y democracia en la Ciudad de México", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. LXXI, núm. 2, abril-junio, pp. 247-285.

Tilly, Charles (1998), "Conflicto político y cambio social", en P. Ibarra, B. Tejerina (eds.), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, Madrid, Trotta, pp. 9-17.

Tosoni, María Magdalena (2007), "Notas sobre el clientelismo político en la Ciudad de México", *Perfiles Latinoamericanos*, núm. 29, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pp. 47-69.

Vélez-Ibáñez, Carlos (1991) [1983], *La política de lucha y resistencia: procesos y cambios culturales en el México central urbano, 1969-1974*, México, Fondo de Cultura Económica.

Villoro, Juan (2007), "El olvido. Un itinerario urbano en México D.F.", *Nueva Sociedad*, núm. 212, pp. 162-175.

Ziccardi, Alicia (2008), "Ciudades latinoamericanas: procesos de marginalidad y exclusión social", en A. Ziccardi, R. Cordera y P. Ramírez (coords.), *Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Siglo XXI, pp. 73-91.

Ziccardi, Alicia y Patricia Ramírez (2008), "Pobreza urbana, desigualdad y exclusión social del siglo XXI. Una introducción", en A. Ziccardi, R. Cordera y P. Ramírez (coords.), *Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Siglo XXI, pp. 23-48.

TERCERA PARTE

ESPACIOS INSTITUCIONALES COMO ESCENARIOS DE CONFLICTO COLECTIVO: ELITES GUBERNAMENTALES Y CONTENCIÓN DE DEMANDAS SOCIALES

VIII. EL LEVIATÁN FRENTE A LOS QUE DEFIENDEN LO VERDE. EL PACTO RIBEREÑO Y LA DIRECCIÓN FEDERAL DE SEGURIDAD

Mario Alberto Velázquez García*

Dentro de los estudios sobre los movimientos sociales, tienen un papel importante los trabajos dedicados a los medios utilizados por un grupo para lograr que sus demandas sean atendidas. Este tipo de análisis se concentran en examinar los recursos de una protesta social (Traugott, 1995; Snow y Benford, 1992), dejando de lado la pregunta sobre el porqué se inicia un movimiento para fijar su atención en el cómo de estos actos colectivos. Las teorías que analizan los medios concretos usados para protestar se denominan de movilización de recursos (Tilly, 1995; Tarrow, 1995). Desde sus inicios esta explicación ha enfatizado que la efectividad y significado de las distintas formas de protesta dependen, en gran medida, de los mecanismos con que se interactúa con el resto de los actores sociales (Slater, 1994). Estas investigaciones han cobrado un especial interés debido a las nuevas posibilidades para la movilización social que han generado las tecnologías de comunicación como Internet o los teléfonos celulares (Castillejo, 2011; Abu-Tarbush, 2011; García, Miralles y Carbonell, 2011; Baumann, 2011). Sin

* Doctor en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México. Profesor-investigador de El Colegio de Sonora.

embargo, la teoría de movilización de recursos ha prestado poca atención a los mecanismos concretos usados por los gobiernos cuando enfrentan protestas, excepto por los trabajos dedicados a la represión o negociación (Frassinetti, 2006; Itzigsohn, y Hau, 2006; Velázquez, 2009). En otras palabras, se ha prestado mucho interés a los elementos que intervienen en las interacciones sociales que suponen una protesta social (el grupo que encabeza las manifestaciones), pero existen pocos estudios sobre los medios de respuesta de otro sector fundamental en muchas de estas interacciones: los Estados. Algunas investigaciones contemporáneas para el análisis del funcionamiento estatal frente a los movimientos sociales en México son Brachet-Márquez (2001), Pérez y Brachet-Márquez (2011) y Favela (2002, 2006).

Este trabajo busca contribuir a la discusión teórica sobre los movimientos sociales proponiendo una re-dimensionalización del Estado en su relación con las protestas, ya no sólo concentrándose en las acciones reactivas como la represión, el encarcelamiento o la negociación, sino en los mecanismos cotidianos que este actor social utiliza para conocer, controlar, definir y redirigir estas formas de acción colectiva. El presente capítulo plantea reinsertar la relación Estado-movimientos sociales como uno más de los puntos de contacto del primero con la población general. Es decir, el Estado aplica ante los movimientos sociales, no únicamente medidas emergentes y especiales como la represión o la negociación, sino busca aplicar un conjunto de mecanismos que le permitan predecir, regular y manejar dentro de límites establecidos este tipo de actos colectivos. En otras palabras, sugerimos tratar de entender a los movimientos sociales inspirándonos en la propuesta teórica del biopoder de Michel Foucault (1999, 2004).

Como ejemplo para ilustrar lo anterior analizaremos los mecanismos burocráticos, legales y de operación de programas con que el gobierno mexicano se relacionó con uno de

los movimientos ambientales mexicanos más importantes durante el siglo pasado: el Pacto Ribereño. Pondremos especial énfasis en el aparato de inteligencia mexicana que vigiló esta movilización social. Esta protesta fue originada por los lugareños ante los daños causados por Petróleos Mexicanos (Pemex) al operar pozos petroleros en municipios de Chiapas y Tabasco. Esta acción estatal generó la movilización de diversas organizaciones campesinas y municipios. Finalmente, el Pacto Ribereño logró que la paraestatal mexicana reconociera las afectaciones y pagara una indemnización (Velázquez Guzmán, 1982; Velázquez García, 2010).

El Pacto Ribereño ha sido objeto de diversos estudios (Velázquez Guzmán, 1982; Villar, 1970; Tirado, 1979; Simonian, 1995; Favela, 2006; Velázquez García, 2010), sin embargo, pocos han prestado atención a los mecanismos cotidianos y operativos estatales, excepto como ejemplos del autoritarismo, la represión o el corporativismo del Estado mexicano.[1] Al analizar el papel que tienen los Estados en el desarrollo de los movimientos sociales mexicanos, generalmente se asume que la forma de acción más significativa hacia las protestas son: 1) la represión o la cooptación en cualquiera de sus modalidades o niveles (Krain, 2000; Street, 1991; Della Porta, 1999b); 2) la aplicación de marcos legales que permiten o limitan la protesta (Velázquez, 2010; Fox, 1992); 3) las divisiones o peleas entre las elites gubernamentales que pueden constituir un signo de debilidad y entonces, un mensaje de oportunidad (Skocpol, 1979; Brennan, 1995); 4) el sistema de partidos y electoral como mecanismo de control y distribución de poder (Favela, 2002: 5) la participación del gobierno en conflictos bélicos con otros países (autores) que pueden generar una crisis financiera, militar o de imagen al interior (McAdam, 1999); 6) reformas políticas o de políticas públi-

[1] Los trabajos de Favela (2006) y Brachet-Márquez (2001) no se consideran bajo esta óptica.

cas que puedan influir en las posibilidades de movilización (McAdam, 1999; Zapata, 2006); y 7) la ideología o distintos tipos de propaganda (Itzigsohn y Vom Hau, 2006).

La investigación sobre los mecanismos concretos de operación del gobierno mexicano contra los movimientos sociales enfrenta dos obstáculos a considerar. Primero, los encargados de las áreas de respuesta contra las protestas han buscado sistemáticamente no dejar una constancia escrita respecto a su operación. De tal manera que el apoyo y financiamiento gubernamental de acciones como la creación de grupos paramilitares, la desaparición, muerte de oponentes y la tortura, entre otros, tiene pocos o ningún registro oficial que puedan constatarlos. Sin embargo, estas han sido prácticas presentes en la operación del gobierno. En segundo lugar, otra fuente importante de información sobre el desarrollo de las protestas sociales son periódicos y revistas. Sin embargo, el alto grado de control que el gobierno mexicano ejerció sobre los medios impresos durante buena parte del siglo XX, los intereses políticos y económicos de los dueños de estas empresas y la autocensura de los mismos, los convierte en registros parciales, imperfectos y muchas veces distorsionadores de la realidad. En este caso, la investigación aquí presentada utilizó datos contenidos en el Archivo General de la Nación (AGN) sobre las agencias gubernamentales encargadas del control o contacto con movimientos sociales como el ejército, las agencias de inteligencia, etcétera. Esta información no había sido explorada previamente en los trabajos sobre el Pacto Ribereño y su uso proporcionará nueva luz sobre las acciones gubernamentales y el desarrollo mismo de esta protesta.

EL ESTADO EN EL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

A mediados de la década de los ochenta el trabajo de Evans, Rueschemeyer y Skocpol, *Bringing the State Back in* (1985),

sintetizó el renovado interés que existía en la economía, la teoría política, la sociología y la historia por analizar al Estado. La idea de reconsiderar la centralidad de este actor para entender los distintos procesos sociales se sustentaba, en gran parte, en una revisión de los planteamientos weberianos sobre los elementos que conforman a dicha organización social. El Estado tenía que ser analizado no sólo como una especie de árbitro neutral o la organización que monopolizaba el uso de la fuerza, sino como un sistema que contenía elementos organizacionales, administrativos, jurídicos, recaudatorios y coercitivos adicionales (Weber, 1922). Uno de los planteamientos hechos a partir de la relectura de Weber es la llamada autonomía estatal (Skocpol, 1979). Los Estados, como entes organizativos, controlan un territorio y un grupo de personas. Por ello tienen la capacidad de generar y perseguir objetivos que no son únicamente un reflejo de los intereses de un grupo o clase particular de la sociedad. Al partir de este principio de autonomía en su funcionamiento, es posible pensar al Estado como un actor independiente y no únicamente un escenario para la lucha entre grupos o elites. Esto resulta fundamental en los estudios sobre movimientos sociales mexicanos, donde existe cierta tendencia a identificar tácitamente la actuación estatal con intereses de grupo o elites específicas (Zermeño, 1997; Moguel, 1997). Adicionalmente, es necesario reconocer que no todos los Estados tienen los mismos grados de autonomía y capacidad, esto es particularmente claro cuando este agente social enfrenta oposiciones políticas, algunas constituyen verdaderos retos a su autoridad o continuidad. El estudio de los movimientos sociales requiere identificar la confrontación diferenciada que puede presentarse entre el Estado y los diversos actores. En las posturas neo-marxistas la autonomía estatal permitió la reinterpretación de elementos centrales como el orden social, la ideología y el trabajo o, dicho de otro modo, facilitó un regreso a la interpretación original de Marx

(Skocpol, 1979; Poulantzas, 1969; Holloway y Picciioto, 1978; Touraine, 1973). A este respecto Skocpol (1982) señaló la necesidad de introducir elementos centrales de las teorías sobre el Estado dentro de los estudios de los movimientos sociales y con ello dejar de considerar las fuerzas del orden o los procedimientos legales como los únicos ejes ordenadores de la relación Estado y protesta social (Skocpol, 1982).

Finalmente, al partir de una postura en la que el Estado está compuesto por diferentes elementos organizacionales, administrativos, jurídicos, recaudatorios y coercitivos se puede suponer que existen una serie de directrices generales (ideológicas, políticas y administrativas) con las cuales el Estado busca gobernar un territorio y población (Foucault, 2004). Los Estados buscan ininterrumpidamente y de diferentes maneras, mantener cierto margen de estabilidad, paz y orden dentro de su territorio bajo un proyecto político-ideológico general (Foucault, 2004; Della Porta, 1999b). Por ello, la lógica con la que el Estado actúa ante una protesta no es exclusivamente la de acciones extraordinarias sino mediante prácticas que se aplican –existan o no personas levantando barricadas– en la lógica estatal de la estabilidad y continuidad de un proyecto de nación (Fox, 1992; Zapata, 2001). Esto genera, entre otras cosas, una multiplicación de los puntos de contacto entre este actor y las protestas sociales. De tal manera que la cohesión y la represión dejan de ser las únicas reacciones estatales relevantes y es necesario reconsiderar otros mecanismos con los cuales se busca dirigir, orientar y desarrollar a una población –y sus formas de acción colectiva como las protestas–, dentro de un territorio determinado (Foucault, 1999; 2004; Fox, 1992; Koopmans, 2004; Street, 1991; Della Porta, 1999b). En otras palabras, es necesario reequilibrar la atención que se ha dado a los medios de protesta para también prestársela a los medios estatales frente a ella (Evans, Rueschemeyer y Skocpol, 1985; Joseph y Nugent, 1994).

EL PACTO RIBEREÑO

Durante los últimos dos años del sexenio de Luis Echeverría (1979-1976) y el sexenio de José López Portillo (1976-1982) tuvo lugar uno de los movimientos ambientales más significativos en la historia contemporánea de México y un ejemplo notable en el uso de las estrategias gubernamentales para controlar y coartar a los movimientos ambientales.

En 1974 se anunció la existencia de enormes yacimientos petroleros localizados en los municipios de Reforma y Benito Juárez (Chiapas) y Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Centro (Tabasco). Al momento que se daba a conocer esta información, la compañía paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) había iniciado reuniones y trámites necesarios para adquirir los terrenos donde desarrollaría su operación. La compra de estos predios se llevó a cabo bajo un esquema que Velázquez Guzmán (1982) denominó como empresarial, pero que nosotros denominaremos como subcontratación (*outsourcing* o tercerización). Ésta consistía en que la dependencia de gobierno, en este caso la paraestatal Pemex, limitaba su participación a la parte técnica (cálculos), operativa (perforación, refinación, etcétera) y burocrática (firma de convenios), pero subcontrataba a otras agencias gubernamentales (militares, servicios de inteligencia, los gobiernos estatales, municipales o grupos paramilitares) para que se encargaran de "resolver" los problemas previos al inicio de la explotación de los pozos. Esto incluía la tarea de lograr los "acuerdos" y títulos de propiedad necesarios, sin preocuparse por la forma en que todos estos hubieran sido conseguidos.

A mediados de la década de los setenta la explotación petrolera se convirtió, para el gobierno mexicano, en la principal herramienta para sacar a México de sus problemas financieros y generar el desarrollo deseado (Favela, 2006). En otras palabras, el petróleo era uno de los pilares fundamentales para el mantenimiento del sistema político

mexicano y su partido en el poder (Velázquez Guzmán, 1982). La importancia que tenía la explotación de este recurso sin duda constituía un límite importante en el tipo de protestas que podían ser permitidas y el grupo de actores sociales con los cuales podría negociarse; dejar de explotar el petróleo no era en ningún caso una opción aceptable desde la óptica gubernamental.

Con el inicio de la actividad extractiva fueron visibles los problemas de contaminación en las tierras y los cuerpos de agua, pero también en el aire por los gases liberados (Favela, 2006: 148-149). Estos efectos secundarios de la actividad de Pemex, generaron una ola de manifestaciones de descontento por parte de los pobladores que rodeaban a las zonas petroleras. En un primer momento los reclamos se realizaron por medio de demandas legales. Sin embargo, las denuncias de los pobladores eran nulificadas con la "muralla de papel" gubernamental (Velázquez Guzmán, 1982). El mecanismo de la muralla de papel es el siguiente: los grupos que presentaban una demanda de indemnización, en este caso contra Pemex, tenían que acudir a una oficina de servicios administrativos específica; en muchas ocasiones localizada en la capital del país. Después de realizar un largo viaje los quejosos recibían un turno dentro de un largo y lento orden de atención que bien podía demorar días. Una vez atendidos, la dependencia les informaba de la existencia de un procedimiento que estipulaba que deberían ser los mismos agraviados los que demostraran que efectivamente se estaba produciendo el daño. Esta evidencia de afectación estaba sujeta a un formato de informe técnico diseñado por Pemex que implicaba la realización de extensos, complicados, largos y costosos estudios que debían hacerse por expertos. En pocas ocasiones la presentación de las pruebas cumplía los criterios de la oficina burocrática, por lo que la protesta no prosperaba. En el caso del Pacto Ribereño, instancias como la Comisión Dictaminadora del Estado de Tabasco

(CDET) consideraron inválidos los reclamos por daño.[2] Pero aun en aquellos casos en que se demostraba el daño, iniciaba un nuevo y largo procedimiento. Esta vez, para demostrar la propiedad de la tierra donde se producía el daño lo que incluía presentar, por ejemplo, la resolución presidencial original de constitución del ejido, el plano de dotación (también original), el censo ejidal en el momento del percance y los certificados de derecho agrarios. La lista de requisitos de esta naturaleza crecía y variaba entre cada una de las oficinas gubernamentales. La falta o parcialidad de alguno de los documentos bastaba para mandar el caso a una nueva lista de pendientes nunca resueltos (Velázquez Guzmán, 1982; Velázquez, 2010).

La probabilidad de que estas demandas prosperaran era baja si consideramos, tal como lo muestra Favela (2002), las herramientas legales que el Estado mexicano había construido para favorecer y proteger la producción petrolera. Primero, convirtiéndola en una actividad exclusiva de competencia federal. Luego, generando un ordenamiento de políticas públicas que hizo de esta industria una prioridad nacional por encima de cualquier otra. Y por último, una reglamentación que permitía a Pemex utilizar y expropiar cualquier tierra para su actividad sin que esto constituyera un acto ilegal (Favela, 2006: 129).

Las formas de control estatal, para el caso del Pacto Ribereño, fueron aplicadas de manera diferenciada a los distintos grupos. Así, aquellas organizaciones campesinas cercanas al gobierno como la Unión de Productores o los grandes empresarios agrícolas recibieron sin mayor obstáculo las indemnizaciones por los daños causados a sus tierras;

[2] AGN, Investigaciones políticas y Sociales (IPS). Un grupo de campesinos del Pacto Ribereño se trasladó a la Ciudad de México con el objetivo de entrevistarse con el profesor Óscar Ramírez Mijares, Secretario General de la CNC y el diputado Pasto Murguía para tratar la indemnización de sus tierras afectadas por Pemex.

la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos recibió 3 165 386 pesos.[3] Las dificultades para poder recibir estas compensaciones recaían en los pequeños propietarios o en los ejidatarios no afiliados a grupos progubernamentales (Velázquez Guzmán, 1982). Con ello, el gobierno demostraba qué tipo de protestas sería tolerado y atendido.

Sin embargo, el número de inconformes creció a tal punto que los mecanismos institucionales creados para controlar las protestas resultaron insuficientes. En 1975, los ejidatarios y pequeños propietarios se unieron ante la falta de respuesta de las distintas autoridades; participaron grupos de: Patastal (ranchería), Lázaro Cárdenas (ejido), Poza Redonda (ejido), Tercera Encrucijada (ejido), Galeana (ranchería), Aquiles Serdán (ejido), Santuario (ejido), Centro Tular (ranchería), El Guayo (ranchería), Comalcalco (municipio), Cárdenas (municipio) y Huimanguillo (municipio). Frente a los primeros brotes de organización las autoridades estatales y federales recurrieron a la represión o cooptación: interrogatorios por parte de las policías locales, ofrecimiento de pagos (o la cárcel) y la presencia del ejército en la zona afectada.

En 1976 se formó el Pacto Ribereño con la representación de delegados procedentes de los distintos lugares afectados. Según la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) de la Secretaría de Gobernación, esta alianza tuvo en su origen un interés jurídico, pues buscaba concentrar a los inconformes con un mismo proceso legal y así lograr una mayor indemnización ante los daños causados por Pemex (Favela, 2006: 152).[4] La participación de abogados resultó

[3] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 100-25-1, H-297, L-15, Villahermosa. El diputado local SILVINO COORE PERES, Secretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el estado, 6 de diciembre de 1976.

[4] AGN, Investigaciones políticas y Sociales (IPS), Pacto Ribereño en Villahermosa Tabasco 1, 1764B. Exp. 11, f 153. Antecedentes. Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre de 1976.

fundamental, no sólo como grupo de expertos encargados de dar seguimiento a lo jurídico, sino como líderes del movimiento. El Pacto Ribereño llegó a contar con la participación de 19 ejidos y 39 rancherías, lo que se calcula que sumaban 7 000 hombres más sus familias. A fin de sustentar de manera técnica su demanda, el Pacto Ribereño contrató a un experto en temas ambientales para que realizara un estudio ecológico de las zonas afectadas por Pemex. Este estudio permitió determinar el costo de la afectación en cuatro millones de pesos. Paralelo a estas protestas, existía una movilización estudiantil en la Universidad Autónoma de Tabasco, donde el Frente Estudiantil Demócrata de Tabasco mantenía tomadas las instalaciones protestando contra un aumento en las cuotas[5] y mayor subsidio a la universidad.[6] Es decir, en esta entidad se comenzaba a conformar una posible movilización social de grandes dimensiones.

Una de las tácticas ilegales a las que el gobierno recurría para reprimir al Pacto Ribereño era la creación de grupos de choque conformados por campesinos de otras localidades:

> ...Desde las 9.00 horas del día de hoy (5 de marzo de 1983), se empezaron a concentrar 200 campesinos aproximadamente, pertenecientes a los ejidos de Occidente, Oriente y Quintín Arauz, a petición de Wilfredo Robledo Madrid, Director de la Policía y tránsito del Estado, para formar un grupo de contra choque al Pacto Ribereño, ya que los 200 campesinos antes mencionados pertenecen a la Liga de Comunidades Agrarias,

[5] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 100-25-1, Comalcalco. A las 23 horas del 21 del actual *(sic)* grupos de 500 campesinos bloquearon los caminos que conducen a los pozos, estado de Tabasco, 22 de noviembre de 1976.

[6] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 100-25-1, H.22, L.14, Villahermosa. En las primeras horas de hoy en la Quinta Grijalva, residencia oficial del Gobernador de la Entidad (...), Estado de Tabasco, 20 de noviembre de 1976.

> siendo lo mismo de oposición al movimiento de Eulogio Méndez Pérez; el Presidente Municipal de esta localidad, Juan Santos Romero expresó que esta gente fue concentrada por si es necesario, ya que él tiene conocimiento de un posible asalto al Palacio de Comalcalco...[7]

Durante todo el desarrollo del movimiento del Pacto Ribereño tanto el gobierno federal como el estatal utilizaron formas de intimidación, represión y división contra los miembros del movimiento y las organizaciones que lo apoyaban. La aplicación de las mismas tuvo un carácter selectivo contra los principales dirigentes u organizadores de las protestas y masiva en los actos de bloqueo a las instalaciones petroleras. La prensa, principalmente la estatal, fue homogénea en su condena al movimiento y su intento por descalificar a sus integrantes, principalmente a los dirigentes.

Ante estos actos de represión, el grupo de campesinos desarrolló estrategias que les garantizara su seguridad. Así, por ejemplo existe un documento titulado: "Antecedentes del 'Pacto Ribereño' del estado de Tabasco". En diciembre de 1982, el dirigente del Pacto Ribereño, Eulogio Méndez Pérez, condujo una invasión al área petrolera de El Golpe, secuestrando 12 vehículos y un número no determinado de personal de Pemex. Al mismo tiempo 100 campesinos tomaron las instalaciones de otro campo petrolero "El Santuario", tomando dos vehículos, personal de la compañía y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR). Desde este sitio se usó el mismo equipo de comunicación de Pemex para demandar que tenían dos horas para pagar las indemnizaciones por daños y otros cuatro millones de pesos. La retención de personal de Pemex y de la PGR era un medio para disminuir las posibilidades de que el ejército buscara

[7] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, SITUACIÓN LATENTE EN ESTA LOCALIDAD Y EJIDOS ALEDAÑOS AL MISMO, Comalcalco, Tabasco, 5 de marzo de 1983.

retomar las instalaciones de forma violenta y les proporcionaba a los campesinos recursos para negociar.

Frente a esto, el Estado mexicano no tenía como objetivo principal desaparecer la protesta del Pacto Ribereño, sino encauzarla en la medida de lo posible y regular sus efectos. El Estado buscaba reintroducir estos actos colectivos dentro de la normalidad de los acontecimientos, enfocándose en uniformar su funcionamiento no sólo para lograr el control de la presente movilización social sino las futuras. Así, mientras se producía esta protesta se generaron dos transformaciones significativas: 1) un cambio en la legislación[8] que buscaba disminuir los recursos jurídicos en contra de la actividad de Pemex al clasificarla como actividad prioritaria y 2) la creación de instituciones estatales dedicadas específicamente a canalizar las protestas campesinas[9] (Velázquez Guzmán, 1982).

LA DIRECCIÓN FEDERAL DE SEGURIDAD Y EL PACTO RIBEREÑO

La Secretaría de Gobierno, por medio de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, dio seguimiento con-

[8] El presidente presentó una propuesta de reforma a los artículos VII y X de la ley que reglamentaba el artículo 27 de la Constitución. Eso hacía de la actividad de Pemex un asunto prioritario para todo el país (poniéndola por encima de cualquier otra actividad o uso de la tierra) y por ello de beneficio a todos los habitantes. Los dueños de tierras privadas o tierras ejidales dañadas tendrían que aceptar el peritaje que hiciera una Comisión de avalúos (de la misma empresa) para determinar la indemnización en caso de existir. Los ejidatarios sólo podrían presentar quejas a través de sus representantes legales (los comisariados ejidales); uniones como el Pacto Ribereño no tendrían valor jurídico.

[9] A petición del gobierno de Tabasco, se creó la Comisión dictaminadora de reclamaciones del estado de Tabasco (CODIRET) el 26 de agosto de 1977. Estaba formada por representantes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Patrimonio y Fomento Industrial, Reforma Agraria, gobierno del estado de Tabasco, Pemex y miembros de la Liga de las comunidades agrarias y sindicatos campesinos (Velázquez Guzmán, 1982).

tinuo a las protestas del Pacto Ribereño. La información proporcionada buscaba otorgar datos de "primera mano" al presidente y el secretario de Gobernación. Siguiendo los procedimientos estandarizados de la inteligencia mexicana desde la década de los cuarenta, se creó un informe general que permitiera contar con el mayor número de elementos para la toma de decisiones (Navarro, 2010). El seguimiento de la protesta permitía a las autoridades conocer, por ejemplo, el contenido de las pancartas desplegadas ("El pueblo unido jamás será vencido. Comité pro defensa de los derechos cívicos el pueblo"..."el 20 de noviembre a las cinco de la tarde juicio popular a la legislatura del estado en defensa de los derechos del pueblo"),[10] lo que resultaba importante si consideramos que las manifestaciones pocas veces eran cubiertas por medios de información como periódicos o la televisión a causa de la censura.

Los mecanismos estatales no buscan únicamente prohibir sino regular. En el caso del Pacto Ribereño, la autoridad central no sólo tenía interés en conocer y ordenar la acción de los campesinos sino de las mismas autoridades que estaban involucradas. En los documentos del Fondo de Investigaciones Políticas y Sociales es significativo el puntual seguimiento que se da a la acción de toda agencia gubernamental involucrada con la protesta, incluyéndose nombre y dependencia de las personas responsables de generar o cumplir cada decisión. Así por ejemplo, los reportes pormenorizan el monto de las indemnizaciones que Pemex había ya dado a algunos afectados[11] (6 200 000 pesos) y los

[10] AGN, Investigaciones políticas y Sociales (IPS), Exp. 100-25-1, H-273, L13, El grupo de 300 campesinos de los ejidos Palo Mulato, Pico de Oro, Zapoyal, Ogarrio, Huapacal y la Ceiba. 22 de octubre de 1976.

[11] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 100-25-1, H-269, L-13, Villahermosa. Desde hace 15 días, un grupo aproximado de 300 campesinos ha estado obstaculizando los caminos que utiliza Petróleos Mexicanos, estado de Tabasco. 21 de octubre de 1976.

ejidos específicos a los que se estaba dando el dinero.[12] Esos reportes eran para el presidente una fuente de primera mano para conocer las acciones y discursos de las otras agencias de gobierno frente a una protesta como el Pacto Ribereño.

En este mismo sentido los registros encontrados en el Archivo General de la Nación consignan un seguimiento a las reuniones intergubernamentales, esto permitía a la federación saber si se daba cumplimiento a las decisiones tomadas.[13] Por ejemplo, se controlaba y reportaba si Pemex estaba resolviendo el tema del Pacto Ribereño siguiendo los acuerdos tomados con la presidencia de la República.[14] En otras palabras, la vigilancia no era únicamente un mecanismo de represión, sino de autorregulación y vigilancia interna. Esta característica de los servicios de inteligencia mexicana en los movimientos sociales no ha sido considerada como importante en la investigación sobre este tipo de agencias estatales en su relación con los movimientos sociales al concentrarse las investigaciones al respecto a buscar la parte "represiva" o "autoritaria" de estos organismos de gobierno.

Los registros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) documentaron una división en dos grupos dentro de los campesinos que integraban el Pacto Ribereño. Esta división, sin embargo, no es mencionada en ninguno de los estudios que

[12] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 100-25-1, H-297, L-15, Villahermosa. El Lic. y Dip. Local SILVINO COORE PERES, Secretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado, 6 de diciembre de 1976.

[13] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, Cunduacán. A las 19.00 horas de hoy, en las oficinas generales de Pemex (...) 4 de febrero de 1983.

[14] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, HABLARÁ CON EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIC. ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO, CON RELACIÓN AL PACTO RIBEREÑO, Exp. 027-046-031.

se han hecho al respecto.[15] Para Velázquez Guzmán (1982) la versión sobre una posible fractura interna del grupo era una de las estrategias del gobierno para debilitar al movimiento: "Después de haber reprimido al movimiento por la fuerza pública se desató una campaña durante los primeros meses de 1977 para dividir a los miembros del Pacto Ribereño...La Comisión revisora de reclamaciones en Tabasco afirmó que los campesinos estaban siendo manipulados por abogados provenientes de la Ciudad de México, que sólo buscaban crear el caos en el agro tabasqueño; que la reclamación de 4 000 millones de pesos era absurda, que no se canalizó por los cauces idóneos, como las centrales campesinas o la propia Comisión Revisora..." (Velázquez Guzmán, 1982: 179). Sin embargo, la existencia de diferencias entre los miembros del Pacto Ribereño ayuda a explicar el desarrollo de los acontecimientos. Uno de los grupos tenía como su representante legal al licenciado José Arturo Acosta Vega, que comenzó su propia gestión de recursos, diferente a la que desarrollaba la mayoría de los campesinos inconformes.

EXPLICANDO AL PACTO RIBEREÑO DESDE LA DFS

La Dirección Federal de Seguridad (DFS) –el órgano de inteligencia del gobierno mexicano–, generaba reportes que estaban destinados a explicar las causas y circunstancias que generaban una movilización social. En el caso del Pacto Ribereño, existen al menos dos informes sobre los antecedentes de esta protesta. Ambos fueron compuestos en diferentes momentos y daban datos que permitieran entender a las autoridades del centro del país las razones que originaron este movimiento. Es importante resaltar

[15] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, PACTO RIBEREÑO. ANTECEDENTES (sin lugar), 4 de febrero de 1983.

que estos informes muestran una similitud muy grande con las explicaciones generadas desde la academia sobre esta protesta, por ejemplo, con la de Velázquez Guzmán (1982). Sin embargo, proporciona detalles no conocidos sobre los actos del gobierno. Estos informes muestran que las autoridades federales sabían con toda precisión que era la falta de atención por parte del gobierno estatal, municipal, las organizaciones obreras y campesinas de Tabasco y de Pemex lo que originó este movimiento. A pesar de ello, el gobierno central tenía sus razones políticas para prolongar el conflicto y no corregir lo que parecían ser claros errores en la procuración de justicia.

Uno de los informes de la DFS presenta un resumen sobre los orígenes de esta movilización surgida por los daños causados por un drenaje construido por Pemex que contaminó las tierras y salinizó el agua de consumo y para el riego. Respecto a las razones que explican la creación de una organización independiente los siguientes párrafos son muy elocuentes:

> ...Los ejidatarios y los pequeños propietarios, hicieron innumerables gestiones, ante los Superintendentes locales y Jefes del Servicio de aquel entonces en los Distritos Petroleros de Agua Dulce y Comalcalco, así como en la Jefatura de la Zona Sur en Coatzacoalcos, Ver., sin obtener ninguna respuesta favorable a sus demandas...Posteriormente buscaron el apoyo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, pero sus demandas no fueron resueltas, fue entonces cuando sus abogados relacionados con autoridades ejidales o pequeños propietarios les ofrecieron llevar adelante los trámites ante la empresa, quedando como sus representantes legales, por medio de un convenio. Con esta alianza entre abogados y campesinos se inicia una nueva fase en la que se formulan las demandas a la empresa y a la federación, unificándose ejidatarios, pequeños propietarios y avecindados en el grupo

denominado "Pacto Ribereño", que sienta las bases de una impugnación abierta...[16]

Pero al mismo tiempo, para la Dirección Federal de Seguridad (DFS) el inicio de esta protesta se localiza, en parte, en la trayectoria de sus protagonistas. Así en un documento sobre "antecedentes del 'Pacto Ribereño' del Estado de Tabasco" se explica el involucramiento de uno de los abogados del movimiento (José Arturo Acosta Vega) por su cambio de domicilio de la Ciudad de México al municipio de Comalcalco, Tabasco, por su involucramiento sentimental con una mujer (Aurestilla Arce), quien se acota, se dedicaba a "la vida galante". El recién llegado conoció los montos de las indemnizaciones que el gobierno había dado a los campesinos del municipio ante los daños causados por Pemex y les explicó que podían solicitar una cantidad mayor. La disposición de los campesinos a recibir la asesoría legal de José Arturo Acosta Vega fue ocasionada en parte, por la poca atención recibida por la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Tabasco, según el mismo informe de la Dirección Federal de Seguridad. José Arturo Acosta Vega recibía hasta el 40% del monto de las indemnizaciones y en varias ocasiones había pedido a los campesinos diversas cantidades de dinero para seguir con el juicio, lo que implica que no estaba con el Pacto Ribereño por compartir su causa sino por un interés económico.

EL SEGUIMIENTO AL PACTO RIBEREÑO

Como parte de sus actividades normales la DFS realizaba una vigilancia constante sobre los dirigentes del Pacto Ribereño. Este era el caso de Eulogio Méndez Pérez de quien existía

[16] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, PACTO RIBEREÑO. ANTECEDENTES (sin lugar), 4 de febrero de 1983.

un registro respecto a las reuniones que tenían lugar en su domicilio, la cantidad de personas que asistían, la hora y el objeto de dichas reuniones. La precisión de dicha información sugiere que la DFS contaba con colaboradores internos en la protesta: "...a las 18 horas del día de hoy, arribó el autobús de pasajeros con placas...a la casa de EULOGIO MÉNDEZ PÉREZ (subrayado del original), ubicada en la Calle...de esta ciudad, con 20 campesinos a bordo procedentes de la 'Ranchería Santuario' de este municipio, siendo dueño de dicho autobús el señor Joel Ventura...".[17] Existía también un registro continuo sobre el número de personas que pertenecían al movimiento, que eran generalmente calculados por la DFS en 7 000 campesinos.

Otro de los temas que la DFS reportó de manera sistemática fueron las entrevistas dadas por los líderes del Pacto Ribereño o los documentos que este movimiento dirigía a funcionarios. Respecto a las primeras no es posible saber quién fue el entrevistador, un periodista, un funcionario público o alguien que se hacía pasar por un corresponsal. Existen registros sobre dos conversaciones hechas con uno de los líderes principales de este movimiento, Eulogio Méndez Pérez, éstas fueron realizadas en los primeros años de la década de 1980, uno de los momentos más tensos de este conflicto. Lo que hace importantes estos documentos es que en ellos, el líder del Pacto Ribereño explica pasajes de este conflicto que no fueron documentados en las investigaciones que existen sobre esta protesta social.

La red de información que mantenía la DFS sobre el Pacto Ribereño permitía al gobierno conocer las tácticas y próximas acciones del grupo. Así existían reportes sobre el Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias de la entidad (de filiación priísta), Galileo Hernández Córdova, quien había

[17] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, LAS OFICINAS DEL PACTO RIBEREÑO SE ENCUENTRAN CUSTODIADAS POR CAMPESINOS Y NO PERMITEN LA ENTRADA A NADIE, Comalcalco, Tabasco, 2 de marzo de 1983.

sido uno de los líderes fundadores del Pacto Ribereño pero que, al participar en la organización cercana al gobierno, parecía haberse separado del grupo de inconformes. Sin embargo, el agente del DFS aseguraba que esta separación de Hernández Córdova era una táctica de "infiltración" que le permitía al Pacto conocer las posibles acciones del gobierno: "...se hace notar que se investigó que (Galileo Hernández Córdova) aún pertenece al Pacto Ribereño y que su actuación dentro del mismo ya no es directa y que por así convenir al Pacto antes mencionado, él se entrevista con Autoridades Estatales y Federales, aparentando un descontento con el líder campesino Eulogio Méndez Pérez, y poder sondear la situación y movimientos de dichas autoridades...".[18]

Los reportes de la DFS le permitían al gobierno de Tabasco, a Pemex y la federación conocer cuáles eran las estrategias de acción del Pacto Ribereño. En uno de los momentos más álgidos de esta protesta, la DFS tenía conocimiento previo sobre cuáles serían las medidas de presión que el movimiento tomaría si, pasado el plazo establecido, la autoridad no pagaba las indemnizaciones reclamadas:

> ...no van a tomar las instalaciones de Pemex en Lázaro Cárdenas de Comalcalco, Tab., como la vez pasada; porque tienen conocimiento que elementos del Ejército estarán resguardando estas instalaciones...que en esta ocasión cerrarán los pasos de acceso a las áreas de Pemex...[19]

La DFS entregaba reportes continuos sobre el Pacto Ribereño, sobre todo en momentos de tensión o cuando los

[18] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, SITUACIÓN LATENTE EN ESTA LOCALIDAD Y EJIDOS ALEDAÑOS AL MISMO, Comalcalco, Tabasco, 5 de marzo de 1983.

[19] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, CAMPESINOS DEL PACTO RIBEREÑO (*sic*) CERRARÁN CAMINOS SI PEMEX NO LES PAGA SUS INDEMNIZACIONES", Villahermosa, Tabasco, 1 de marzo de 1983.

líderes del movimiento habían advertido sobre posibles movilizaciones o tomas de instalaciones petroleras:

> ...hasta las 07.00 horas del día de hoy, la situación que prevalece entre los campesinos pertenecientes a la agrupación denominada Pacto Ribereño y que (palabra suprimida) encabezados por EULOGIO MÉNDEZ PÉREZ (subrayado del original), han amenazado con tomar las instalaciones de Pemex, es de tranquilidad...[20]

Los discursos dados por los dirigentes del Pacto Ribereño que pudieran resultar amenazantes, eran reportados también por la DFS. En la información examinada existen dos alocuciones de Eulogio Méndez Pérez donde él asegura tener contactos con grupos norteamericanos que le ofrecen armas para continuar su lucha. En un discurso posterior del mismo dirigente, éste dijo que tenía acercamientos con Fidel Castro Ruz (dirigente de Cuba) y que éste estaba dispuesto a proporcionarle armas en caso de que Pemex no cumpliera sus promesas:

> ...Eulogio Méndez Pérez...dijo que...si a las 0.01 *(sic)* horas del día de (palabras borradas) del actual no le cumplían con lo pactado, iba a lanzar a la "perrada" y a tomar medidas drásticas, para que supieran las autoridades quién es Eulogio Méndez Pérez, porque a él lo apoya Fidel Castro Ruz, el que le podía proporcionar armamento, para hacer un levantamiento, pero que por lo pronto podía tomar el Palacio Municipal de Comalcalco...[21]

[20] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, SITUACIÓN QUE PREVALECE EN ESTA LOCALIDAD, Comalcalco, Tabasco, 6 de marzo de 1983.

[21] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, "Comalcalco. A las 23.00 horas de ayer, EULOGIO MÉNDEZ PÉREZ, líder del "Pacto Ribereño"...", estado de Tabasco, 5 de marzo de 1983.

Otra actividad generalmente reportada eran las posibles alianzas que el Pacto Ribereño estableciera y que pudieran resultar peligrosas. Las reuniones de políticos opositores al PRI con miembros del Pacto Ribereño eran objeto de una constante vigilancia. El registro de la reunión de un ex candidato por el Partido Acción Nacional para diputado local por el municipio de Cunduacán, Víctor Sol Casao, con 15 campesinos del municipio del ejido de "Dos Ceibas" hace un resumen de las opiniones del ex candidato cuando los campesinos relataron que fueron presionados por sus representantes legales para recibir pequeños montos de dinero como indemnización. Ante esto la respuesta del panista fue la siguiente según la DFS:

> ...el Lic. VÍCTOR SOL CASAO indicó que había que ser muy bruto para no entender en qué país se vive y que los campesinos deben ser los primeros fusilados porque nunca han pensado en la liberación nacional; que el PAN ha vivido haciendo llamados a la conciencia política de los pueblos de México, para que no se dejen engatusar por la demagogia de los priístas y que, sin embargo, la respuesta siempre ha sido negativa; que en este caso, él no podía decir más que los campesinos deben tomar los machetes y hacer respetar sus derechos y que corran a sus líderes, porque son flojos que medran a costa del verdadero trabajador...Se hace notar que sobre la orientación que solicitaron dichos campesinos, el Lic. SOL CASAO no mencionó nada al respecto...[22]

Otra reunión se dio entre el dirigente del Comité Estatal del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Aurelio Cordero Aquino y miembros de su partido. En la reunión –realizada el 8 de marzo de 1983–, el dirigente partidista

[22] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, "De las 10.00 a las 11.45 horas de hoy, en las calles de Vicente Guerrero núm. 304...", estado de Tabasco, Villahermosa, 11 de marzo de 1983.

informaba a sus correligionarios de una reunión que él mismo había tenido con los campesinos del Pacto Ribereño un día antes. En el concilio, según la versión de la DFS, los campesinos resumieron la manera en que fueron estafados por José Arturo Acosta Vega con la complicidad de funcionarios federales y de Pemex. Los campesinos se dijeron dispuestos a defender sus derechos y seguir una tradición de lucha de la gente de esta zona del país:

> ...ellos están dispuestos a defender sus derechos y que harán honor a su calidad de hontalpanenses, descendientes de Gregorio Méndez y Andrés Sánchez Magallanes, héroes que defendieron a Tabasco de los soldados franceses...en vista de lo anterior el PMT ha ofrecido ayuda moral a los campesinos, porque considera que el gobierno y la empresa, están coludidos, perjudicando los derechos de los ejidatarios afectados, incitándolos a tomar decisiones más peligrosas...no hay que desaprovechar la oportunidad de orientar a estos campesinos, porque podrían ser el día de mañana, el núcleo más importante en contra de la corrupción...[23]

EL CONFLICTO POSTERIOR A UN PRIMER PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES

Los registros de la DFS documentan una división de dos grupos dentro de los campesinos que integraban el Pacto Ribereño. Esta división, sin embargo, no es mencionada en ninguno de los estudios que se han hecho al respecto.[24] Uno de los grupos tenía como su representante legal al licenciado José Arturo Acosta Vega, que comenzó su propia gestión de

[23] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, VILLAHERMOSA. De las 14.00 a las 15.20 horas del día de la fecha, en las oficinas del PMT...", estado de Tabasco, 8 de marzo de 1983.

[24] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, PACTO RIBEREÑO. ANTECEDENTES (sin lugar), 4 de febrero de 1983.

recursos, diferente a la que inició el resto, constituida por la mayoría de los campesinos inconformes.

En 1977, después de diversas negociaciones, el grupo encabezado por José Arturo Acosta Vega –según la versión de la DFS–, logró que Pemex aceptara, en principio, su responsabilidad en los daños causados al medio. Sin embargo, la paraestatal antepuso una nueva muralla de papel y el Pacto Ribereño continuó organizando cierres de instalaciones, seguidas de episodios de negociación. Velázquez Guzmán (1982) fija la fecha del cobro de las indemnizaciones (4 000 millones de pesos) en 1980. Incluso, sostiene que la mitad de ese dinero sería destinada a una campaña política, y el resto sería cobrado por los grandes propietarios que participaron en el Pacto. La mayoría nunca recibió ninguna indemnización (Velázquez Guzmán, 1982). Sin embargo, la DFS sostiene en un informe:

> ...el 27 de octubre de 1981, se inició la Operación 'Pacto Ribereño', interviniendo el Lic. ARTURO ACOSTA VEGA y equipo técnico de apoyo de la Procuraduría General de la República: Ing. Luis Pallas Ruiz, Coordinador técnico de la Operación, sancionada por el Lic. JOSÉ PIEDAD SILVA ARROYO...atendiendo un total de 1 367 reclamaciones, de las que resultaron procedentes 260 e improcedentes 1 107. A 56 pequeños propietarios les pagaron la cantidad de $4 691 477.73 y a 204 ejidatarios $8 590 009.22, por lo que el pago total suma 12 750 486.95...[25]

En otra versión de la misma DFS, José Arturo Acosta Vega cobró cuatro millones de pesos que repartió entre los campesinos Ramón Juárez (ranchería Paraestatal), Maurilio López Cruz (Ejido Lázaro Cárdenas de Comalcalco), Ramón Reyes Osorio (Galeana), Inocente Trinidad García

[25] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, PACTO RIBEREÑO. ANTECEDENTES (sin lugar), 4 de febrero de 1983.

e Isabel de la Rosa Juárez (Aquiles Serdán) y un grupo de representantes no identificados del Ejido Trujillo de García.[26] Es decir, el dinero no llegó a la mayoría de los integrantes del Pacto Ribereño sino sólo a los representados por este abogado. Incluso la DFS documentó el hecho de que el mismo abogado llegó a un acuerdo con autoridades federales y escapó de Tabasco con la mayoría del dinero. El fraude de José Arturo Acosta Vega fue comentado y reconocido por líderes del movimiento en entrevistas que les realizaron y de las cuales quedó constancia en los archivos de la DFS.[27] Por ejemplo, en una entrevista realizada a Eulogio Méndez Pérez (sin fecha):

> ...P. Teníamos conocimiento que tenía programada una manifestación para el día de ayer, consistente en bloquear carreteras y bloquear instalaciones de Pemex, ¿Por qué no se llevó a cabo?... R. Yo no tenía ningún pensamiento de bloquear carreteras, ni de realizar un mitin agresivo, sólo el único fin que tenía era manifestar agradecimiento al gobierno federal, el propio del Estado, a los presidentes municipales, de que se cumplió un convenio de 60 días...donde Pemex se comprometió a través del Lic. HUMBERTO MORALES, a abrir las investigaciones en contra del Lic. Acosta, quien era asesor del Pacto Ribereño, quien fue el que cometió el fraude... P. A cuánto asciende el fraude que le cometió el Lic. ACOSTA?... R. Según tengo mis documentos a 4 mil millones de pesos... P. Entonces eso quiere decir, que Pemex, ya le había liquidado al Lic. Acosta?... R. Le habían liquidado, pero indebidamente se volvieron a quedar el dinero, engañándonos a nosotros... P. Por eso el dinero se le entregó al Lic. Acosta, ¿o fue simulado?... R. Se le entregó,

[26] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, "ANTECEDENTES DEL "PACTO RIBEREÑO" DEL ESTADO DE TABASCO", 10 de enero de 1983.

[27] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, ENTREVISTA EFECTUADA A EULOGIO MÉNDEZ PÉREZ, DIRIGENTE DEL PACTO RIBEREÑO, Comalcalco, Tabasco, s/f.

> pero no llegó a manos de nuestros campesinos...(el Lic. Acosta) era un recepcionista legal, como Asesor Jurídico, porque así lo estipula la ley, pero solamente para demandas y transacciones, pero no para que tomara el dinero, entonces, solamente fue un simulacro...él indebidamente se apoderó de todo y de 1980 para aca *(sic)* empezó a engañarnos y traernos de aquí para allá (*sic*) y solamente con puras mentiras y mañas hasta el año de 1982, que ya rebasé y le reclamé su mal proceder y fue cuando lo descubrí, de que ya había cometido el fraude...[28]

En esta etapa del conflicto otra de las tácticas gubernamentales utilizadas fue la presión por medios de comunicación (Favela, 2006). Así, durante las reuniones públicas del Pacto Ribereño la radiodifusora de Comalcalco transmitía cada cinco minutos un mensaje donde se informaba que Pemex no pagaría los cuatro mil millones de pesos y que aquellos que quisieran recibir una indemnización individualizada, tenían que afiliarse a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Tabasco. Igualmente, un helicóptero sobrevolaba el municipio de Comalcalco para lanzar un periódico editado por Óscar Yergo Heredia, Secretario General en Villahermosa de la CNC. La publicación tenía por nombre *Diario Olmeca* y en su titular decía: "Pemex no pagará el adeudo de cuatro mil millones", argumentando lo mismo que se decía por radio.[29]

La presión para renunciar al movimiento y aceptar la indemnización individualizada ofrecida funcionó en algunos casos. El 24 de febrero, 11 agricultores del municipio de Huimanguillo (11), del Centro (6), Jalpa de Méndez (1) y Cun-

[28] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, ENTREVISTA EFECTUADA A EULOGIO MÉNDEZ PÉREZ, DIRIGENTE DEL PACTO RIBEREÑO, Comalcalco, Tabasco, s/f.

[29] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, COMALCALCO. "De las 9.00 a las 13.00 horas de hoy, se efectuó una reunión de campesinos...", estado de Tabasco, 3 de marzo de 1983.

duacán (14) aceptaron integrarse a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Tabasco. Ninguna persona del municipio de Comalcalco, donde estaba el principal foco del Pacto Ribereño, participó. En el primer caso (Huimanguillo), recibieron en conjunto 235 067 pesos; en el segundo (del Centro) 108 400, en el tercero (Jalpa de Mendez) 15 000 y finalmente (Cunduacán) 215 980. El total de dinero asignado en los cuatro municipios es de 574 447. Respecto a estas cantidades, son notorias las disparidades de las cantidades asignadas. Así, por ejemplo, en el municipio de Huimanguillo José Jiménez Román cobró 2 800 mientras Guadalupe Jiménez Palma cobró 48 000 y Mateo Pérez Jimenez 25 300. En el municipio de Cunduacán Manuel Miranda Frías cobró 3 360 mientras Leónidas Sánchez Zapata cobró 41 420 de indemnización.[30]

El día 11 de marzo de 1983 la DFS registró que se realizó el pago de las indemnizaciones. El evento fue realizado en instalaciones de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) con la presencia de 100 campesinos de diferentes ejidos. En la reunión estuvieron presentes representantes de Pemex que atestiguaron la entrega en los últimos cinco días de una cantidad total de 3 784 459.18 pesos.[31]

CONCLUSIONES

El análisis del movimiento conocido como el Pacto Ribereño nos permitió mostrar los distintos recursos legales, políticos, policiales, propagandísticos y de vigilancia con los cuales

[30] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, CAMPESINOS DE LOS MUNICIPIOS DE HUIMANGUILLO, CENTRO, CUNDUACÁN Y JALPA DE MÉNDEZ, COBRARON SUS INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES DE PEMEX, Villahermosa, Tabasco, 24 de febrero de 1983.

[31] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, COMALCALCO. "De las 9.00 a las 13.00 horas de hoy, se efectuó una reunión de campesinos...", estado de Tabasco, 3 de marzo de 1983.

contó el Estado mexicano en la década de los ochenta del pasado siglo para hacer frente a las protestas sociales. Estos medios de acción estatal rebasan por mucho la mera lógica de la violencia y la represión poniendo énfasis en la contención y redirección, no sólo de la actuación de los movimientos sociales, sino de los mismos agentes gubernamentales. Conflictos como el Pacto Ribereño le permitían al Estado mexicano reconfigurar las estructuras o herramientas estatales (las instituciones, procedimientos, leyes, programas, discursos) para evitar, en la medida de lo posible, el surgimiento y las consecuencias de nuevos movimientos sociales. Los instrumentos y las formas con los que el Estado buscó responder a los movimientos eran cambiantes, diversificados y con múltiples propósitos. Cambiantes, porque el Estado iba generando adecuaciones legales o de operación de sus distintas agencias a partir de lo sucedido con una protesta; diversificados porque los tipos de instrumentos y agencias involucrados en la respuesta gubernamental dependían de los escenarios que el Estado preveía dependiendo del desarrollo de cada protesta y con múltiples propósitos porque no sólo buscaban el control de la protesta sino reforzar, por ejemplo, los controles federales sobre los grupos políticos estatales.

Dentro de esta lógica general para el control y redirección de los acontecimientos sociales, el contar con información certera e inmediata, no sólo de lo hecho por los grupos que protestaban sino de los actos de las autoridades locales, estatales y dependencias federales, resultaba indispensable. En este sentido, los órganos de inteligencia, concretamente la Dirección Federal de Seguridad, fueron una herramienta fundamental para la construcción y consolidación del moderno Estado mexicano. Los reportes de inteligencia no sólo tenían como finalidad dar seguimiento a los grupos opositores al gobierno, sino permitir un control sobre la acción de agencias gubernamentales que podrían ser distintas de las ordenadas por las autoridades centrales. Esta actividad de

vigilancia, no necesariamente significaba la corrección de aquellos actos que podrían constituir faltas o delitos, simplemente buscaba dejar constancia de ellos. Un ejemplo de esto es un reporte de la DFS sobre el pago de las indemnizaciones, donde se manifiesta la existencia del descontento entre los campesinos por los bajos montos del dinero con el que están siendo pagados los daños sufridos en sus tierras. El informe reconoce que estos montos no corresponden con la cantidad que aplicaría como la legalmente estipulada: "...Cabe señalar que el cheque de que se trata en lugar de los 5 mil pesos cantidad por el que fue expedido, debería de haber sido por la cantidad de 66 mil pesos como pago correspondiente al 33% de sus hectáreas afectadas...".[32]

Una de las conclusiones más significativas de este trabajo es que durante el movimiento conocido como el Pacto Ribereño, la DFS no tuvo únicamente como objetivo la represión (aunque sin duda desempeñó un importante y doloroso papel en esta materia durante la última parte del siglo pasado), sino el dotar de información al ejecutivo sobre los actos de las dependencias propias (otros niveles o dependencias gubernamentales) y las organizaciones externas (las organizaciones independientes y los opositores políticos) durante el desarrollo de una protesta. Durante el Pacto Ribereño los reportes de la DFS detallaron la forma en que eran llevadas a cabo o no las acciones comandadas desde la federación, así como los malos manejos de las autoridades.

En este sentido, el presente estudio resulta un cuestionamiento a trabajos como el de Sergio Aguayo, *La Charola*, que presenta una imagen de la DFS como una organización primariamente ineficaz, compuesta mayoritariamente por agentes mal preparados dedicados prioritariamente a la represión y tortura de los enemigos del gobierno, pero

[32] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 027-046-031, EXISTE DESCONTENTO EN EL PAGO DE SUS TIERRAS POR AFECTACIONES QUE HACE PEMEX A LOS CAMPESINOS, Villahermosa, Tabasco, 6 de marzo de 1983.

también a actividades ilegales como el narcotráfico. Sin lugar a duda, este tipo de problemas estuvieron presentes dentro de la DFS, sin embargo, en el caso del Pacto Ribereño, la visión presentada por Sergio Aguayo sobre la función prioritaria de esta organización (la represión) y su forma de operar (ineficiente) resultan limitadas y pobres. En el caso analizado, la DFS se muestra como una aceptablemente eficiente y operativa organización capaz de infiltrar y conocer las principales características y debilidades del movimiento social, pero también de los órganos de gobierno que por negligencia o por corrupción se negaban a restituir a un grupo de particulares por un daño evidente causado por Pemex. Las actividades de la DFS durante el Pacto Ribereño permitieron al Estado mexicano: 1) documentar las actividades de los manifestantes (principalmente sus reuniones);[33] 2) reportar las reuniones entre el movimiento y las autoridades; 3) conocer las acciones y respuestas de los representantes del gobierno frente a los manifestantes; 4) identificar a los actores principales (tanto del lado de la protesta como por los distintos órganos de gobierno); 5) detallar los procesos jurídicos y administrativos en proceso; 6) ubicar políticamente a los oponentes (los informes incluían la afiliación, en este caso atribuida al Partido Comunista, de los representantes del Pacto Ribereño);[34] 7) conocer los lazos que el grupo logrará establecer con otras organizaciones. Los registros proporcionaban un seguimiento pormenorizado de

[33] AGN, Investigaciones políticas y Sociales (IPS), Situación Política de los Estados. 1764B, Exp. 011, f153. Campesinos del Pacto Ribereño durante una asamblea que efectuaron protestaron contra Pemex por la obstaculización del pago de indemnizaciones. Comalcalco, Tabasco, 22 de julio de 1979.

[34] AGN, Investigaciones políticas y Sociales (IPS), Asuntos Agrarios. 1630C, Exp. 11, Para dar a conocer los daños ocasionados por Pemex a los ejidos que pertenecen al Pacto Ribereño, hoy se efectuó una reunión en la que estuvieron presentes representantes de la SRA, Comalcalco, Tabasco, 18 de diciembre de 1977.

las personas que provenían de otras organizaciones sindicales, políticas o campesinas y participaban en eventos de esta protesta;[35] 8) determinar el número de participantes en cada uno de los eventos; y 9) el registro pormenorizado de las notas periodísticas publicadas respecto a la protesta.

Los documentos analizados de la DFS, más que mostrarnos las formas de represión del gobierno mexicano, develan la corrupción generalizada y el poco interés por corregir esta situación. El análisis de los documentos de la DFS permitió una mejor comprensión del Pacto Ribereño, incluso proporcionó elementos que no fueron mencionados en las investigaciones previas realizadas sobre esta movilización como la división interna y el hecho de que uno de los líderes del movimiento escapó con el dinero de las indemnizaciones (cosa que la DFS previó que podría suceder). El documentar la existencia de conflictos internos y actos de corrupción de uno de los representantes del movimiento no busca demeritar la importancia que esta movilización ambiental tuvo en la historia contemporánea de México. Por el contrario, permite ilustrar la capacidad gubernamental para vigilar y dar seguimiento a todas las acciones de los participantes de una protesta. En este sentido, el artículo aquí presentado coincide con la obra de Aaron Navarro, *Political Intelligence and the Creation of Modern Mexico, 1938-1954*, quien estudió el peso fundamental que las distintas oficinas de Seguridad y espionaje tuvieron durante los procesos electorales del pasado siglo. Es decir, este tipo de trabajos muestran la importancia que tuvieron las tareas de inteligencia (acciones no represivas) de estas instituciones para el funcionamiento del Estado mexicano no única y principalmente como agentes represivos, sino como fuente de información y control de

[35] AGN, Dirección Federal de Seguridad (DFS), Exp. 100-28-1, H-275, L-13, Continúa la huelga de los miembros del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (...), estado de Veracruz, 20 de noviembre de 1976.

otros organismos gubernamentales, pero, sobre todo, únicamente una parte dentro de un conjunto de herramientas encaminadas al control y re-direccionamiento de los grupos y acontecimientos sociales.

BIBLIOGRAFÍA

Abu-Tarbush, José (2011), *Perfiles sociopolíticos de la primavera árabe*, 18 de octubre, URL: http://www.aecpa.es/uploads/files/modules/congress/10/papers/249.pdf.

Aguayo, Sergio (2001), *La charola: una historia de los servicios de inteligencia en México*, México, Grijalbo.

Baumann Zygmunt (2011), "El 15-M es emocional, le falta pensamiento", México, *El País*, 17 de octubre, URL: http://politica.elpais.com/politica/2011/10/17/actualidad/1318808156_278372.html.

Brachet-Márquez, Viviane (2001), *El pacto de dominación. Estado, clase y reforma social en México (1910-1995)*, México, El Colegio de México.

Brennan, James (1995), "Industrial Sector and Union Politics in Latin America Labor Movements: Lights and Power Workers in Argentina and Mexico", *Latin American Research Review*, vol. XXX, núm. 1, pp. 39-68.

Castillejo, Clare (2011), "¿Traerá la primavera árabe cambios para las mujeres?", en *Foreing Policy*, 8 de junio, URL: http://www.fp-es.org/%C2%BFtraera-la-primavera-arabe-cambios-para-las-mujeres.

Della Porta, D. y M. Diani (1999a), *Social Movements: An Introduction*, Londres, Blackwell.

_____ (1999b), "Movimientos sociales y Estado: algunas ideas en torno a la represión policial de la protesta", en Dough McAdam, John D. McCarthy y Zald Mayer N., *Movimientos sociales: perspectivas comparadas,* España, Istmo, pp. 100-142.

Evans, Peter, Dietrich, Rueschemeyer y Skocpol, Theda (1985), "Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research", en Peter Evans, Dietrich, Rueschemeyer y Skocpol, Theda, *Bringing the State Back in,* Londres, Cambridge University Press.

Favela Gavia, Diana Margarita (2006), *Protesta y reforma en México. Interacción entre Estado y sociedad 1946-1997*, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

_____ (2002). "La estructura de oportunidades políticas de los movimientos sociales en sistemas políticos cerrados: examen del caso mexicano". *Estudios Sociológicos*, vol. XX, núm. 58: 91-122.

Foucault, Michel (2004), *Seguridad, territorio y población*, Argentina, FCE.

_____ (1999), *Estrategias de poder*, España, Paidós Ibérica, vol. II.

Fox, Jonathan (1992), *The politics of food in Mexico. State power and social mobilization*, EEUU, Cornell University Press.

Frassinetti Murga, Antonio (2006), "La sociología de los movimientos sociales", en Enrique de la Garza Toledo, *Tratado Latinoamericano de Sociología,* México, Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 103-121.

García Lola, Rafael Miralles y Jaime Carbonell (2011), "El movimiento del 15-M" *Cuadernos de Pedagogía*, núm. 414, mayo, URL: http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_pdf.asp?idArt=14780.

Holloway, John y Simon Picciiotto (comps.) (1978), *State and capital: A marxist debate*, Londres, Arnold.

Itzigsohn, José y Matthias Vom Hau (2006), "Unfinished Imagined Communities: States, Social Movements, and Nationalism in Latin America", *Theory and Society,* núm. 29, pp. 193-212.

Joseph, Gilbert M. y Daniel Nugent (1994), *Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*, Durham, Duke University Press.

Koopmans, Ruud (2004), "Protest in Time and Space: The Evolution of Waves of Contention", en D.A. Snow, S.A. Soule y H. Kriesi (eds.), *The Blackwell Companion to Social Movement*, Malden, Blackwell, pp. 19-46.

Krain, Matthew (2000), *Repression and Accommodation in Post-Revolutionary States*, Nueva York, Palgrave Macmillan.

McAdam, Doug (1999), "Orígenes terminológicos, problemas actuales, futuras líneas de investigación", en Dough McAdam, John D. McCarthy y Zald Mayer N., *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, España, Istmo, pp. 49-70.

_____, McCarthy John y Zald Mayer (1999), "Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales", en Dough McAdam, John D. McCarthy y Zald Mayer N., *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, España, Istmo, pp. 21-46.

Moguel, Julio (1997), "La vía campesina de desarrollo en México (crisis del modelo *farmer, pervivencia* y reproducción del modelo indio- comunitario)", en Sergio Zermeño (coord.), *Movimientos sociales e identidades colectivas. México en la década de los noventa*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, pp. 109-123.

Navarro, Aaron W. (2010), *Political Intelligence and the Creation of Modern Mexico, 1938-1954*, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press.

OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales) (2006), "Semarnat otorga a Minera San Xavier nuevo permiso para operar en San Luis Potosí", URL: http://olca.cl/oca/mexico/mineras010.htm.

Pérez Arteaga, Javier y Brachet-Márquez, Viviane (2011), *Dominación y contienda. Seis estudios de pugnas y transformaciones (1910-2010)*, El Colegio de México, México.

Poulantzas, Nicol (1969), "The Problem of the Capitalist State", *New Left Review*, vol. I, núm. 58, noviembre-diciembre, pp. 67-78.

Skocpol, Theda (1982), *Marxist Inquiries: Studies of Labor, Class, and States*, Chicago, Il, University of Chicago Press.

_____ (1979), *States and Social Revolutions*, United Kingdom, Cambridge University Press.

Simonian, Lane (1995), *Defending the Land of the Jaguar*, Texas, University of Texas Press.

Slater, David (1994), "Power and Social Movements in the Other Occident: Latin America in an International Context", *Latin American Perspectives,* vol. XXI, núm. 2, pp. 11-37.

Snow, David y Robert D. Benford (1992), "Master Frames and Cycles of Protest", en A. D. Morris y C. M. Mueller, *Frontiers in Social Movement Theory*, New Haven, Yale University Press, pp. 133-155.

Street, Susan (1991), "Movimientos sociales y el análisis del cambio sociopolítico en México", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. LIII, núm. 2, pp. 141-158.

Tarrow, Sidney (1999), "Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales", en Dough McAdam, John McCarthy y Zald Mayer N., *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, España, Istmo, pp. 71-99.

_____ (1995), *Power in movement: social movements, collective action, and politics*, Nueva York, Cambridge University.

Tilly, Charles C. (2004), *Social Movements, 1768-2004*, Londres, Paradigm Publishers.

_____ (1995), "Contentious Repertories in Great Britain", en Mark Traugott (ed.), *Repertories and Cycles of Collective Action,* Durham, N. C., Duke University Press.

_____ (1973), "Does Modernization Breed Revolution", *Comparative Politics*, núm. 5, pp. 425-447.

Tirado, Manlio (1979), *El problema del petróleo: Tabasco-Chiapas y el gasoducto*, México, Quinto Sol.

Touraine, Alain (1973), *Production de la société*, París, Seuil.

Traugott, Mark (1995), "Barricades as Repertoires: Continuities and Discontinuities in the History of French Contention", en Mark Traugott (ed.), *Repertories and Cycles of Collective Action*, Durham, N. C., Duke University Press.

Vega Gleason, Silvia (1992), "Petróleo, medio ambiente y salud", en Petróleos Mexicanos (ed.), *La industria petrolera ante la regulación jurídico-ecológica*, México, UNAM, Pemex.

Velázquez García, Mario Alberto (2010), "Los movimientos ambientales en México", en Ilán Bizberg y Francisco Zapata, *Movimientos sociales*, México, El Colegio de México, pp. 275-336, tomo VI, colección Los grandes problemas de México.

_____ (2009), *Las luchas verdes. Los movimientos ambientalistas de Tepoztlán, Morelos y el Cytrar en Hermosillo, Sonora*, México, El Colegio de Sonora.

Velázquez Guzmán, María Guadalupe (1982), "Afectaciones petroleras en Tabasco: el movimiento del Pacto Ribereño", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 44, núm. 1, pp. 167-187.

Villar, Samuel del (1970), *El significado del petróleo para la sociedad mexicana, perspectiva y síntesis del debate,* México, El Colegio de México.

Weber, Max (1922), *Gesammelte aufsätze zur wissenschaftslehre*, Tübingen, J.C.B. Mohr.

Zald Mayer y John McCarthy (1987), "Pro-Life and Pro-Choice Mobilization: Infrastructure Deficits and New Technologies", en Zald Mayer N. y John D. McCarthy, *Social Movements in Organizational Society: Collected Essay*, New Jersey, New Brunswick.

Zapata, Francisco (2006), "Mexican Labor in a Context of Political, Social, and Economic Change, 1982-2002", en Laura Randall (ed.), *Changing Structure of Mexico*, EEUU, Political, Social and Economic Prospective, M.E. Sharpe, pp. 438-453.

_____ (2001), *Ideología y política en América Latina*, México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.

Zermeño, Sergio (1997), *Movimientos sociales e identidades colectivas. México en la década de los noventa*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM.

IX. ELITE ECONÓMICA EN MOVIMIENTO: *LOBBYING* Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EMPRESAS TRANSNACIONALES FRENTE AL MOVIMIENTO SOCIAL ANTICORPORATIVO EN MÉXICO*

LAURA B. MONTES DE OCA BARRERA**

EL DESAFÍO ANALÍTICO DESDE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

La teoría de la movilización de recursos (TMR), desde dos de sus vertientes –la organizacional (McCarthy y Zald) y la del conflicto político (Tilly, Tarrow, Oberschall)– propone estudiar la acción colectiva y los movimientos sociales considerando tres factores: la combinación de oportunidades y constricciones (estructura de oportunidades políticas); los procesos colectivos de interpretación (procesos enmarcadores); así como las formas de organización (estructura de movilización). La conjunción de estos tres factores, así como la interacción

* Agradezco los comentarios que los lectores secretos y demás autores de este libro hicieron al borrador del presente capítulo; así como las sugerencias de María Luisa Tarrés. Este ensayo se elaboró durante la estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales, gracias al programa de becas 2011-2013 de la Universidad Nacional Autónoma de México; y retoma algunos de los resultados de la investigación doctoral realizada en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.

** Doctora en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México. Investigadora asociada de tiempo completo, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

con otros movimientos y movilizaciones –aliados y opuestos– a través del conflicto y la competencia, pueden favorecer o dificultar el surgimiento y la evolución de la acción colectiva. Asimismo, desde esta perspectiva se plantea, por una parte, que el triunfo de un movimiento social depende de la *alineación con las elites* (política y económica) y de su *alianza o confrontación* con ellas. Por la otra, que este triunfo promoverá la reacción de una contramovilización; es decir, una organización reactiva y defensiva que, eventualmente, buscará revertir los logros del movimiento social al que se enfrenta.

El objetivo de este capítulo es discutir la interacción movimiento-contramovimiento rearticulando el planteamiento básico de la TMR a fin de construir una propuesta analítica que permita dar cuenta de la movilización de la elite. Desde este campo teórico, los agentes movilizados no forman parte de la elite política o económica; buscan alianzas y aprovechan recomposiciones en ellas, pero no la conforman. Al revisar la bibliografía encontramos casos que han ocupado las páginas del análisis teórico o empírico sobre la acción-reacción de diversos movimientos sociales: derechos civiles, derecho al trabajo, defensa de los animales, democratización de la información en Internet y derecho a la elección sobre el aborto en Estados Unidos de América (Dixon, 2008; Lo, 1982; Meyer y Staggenborg, 1996; Peckham, 1998; Jasper y Poulsen, 1993). En estos casos se aplica automáticamente el modelo analítico de la movilización de recursos: desafío colectivo de agentes (movilizados y contramovilizados) que, interactuando y buscando alianzas con elites y autoridades, busca incidir en la toma de decisión (pública y privada). Pero, ¿cómo explicar la reacción que surge desde las elites frente a un movimiento social? ¿De qué manera se relaciona esta movilización con otras formas con las que la elite usualmente ejerce influencia en la toma de decisión pública, específicamente con el *lobbying* político? Y, ¿de qué manera se reconfiguran los factores planteados por la TMR cuando la

movilización no busca alianzas o confrontación con las elites, sino que surge en ellas?

Si bien, dentro de este cuerpo teórico se dan pistas sobre la confrontación de un movimiento ante la elite política (particularmente hacia los agentes del Estado), hay pocos avances para reflexionar sobre la disputa frente a actores no-estatales, así como movilizaciones de la elite que reaccionan contra otros movimientos. Eventualmente se mencionan contramovimientos como el de pro-energía nuclear, organizado desde la elite industrial (Meyer y Staggenborg, 1996); no obstante, hace falta reflexionar sobre otros casos que movilizan a estos sectores. En ello avanzan Vogus y Davis (2005: 48) quienes, vinculando los estudios organizacionales con la teoría de movilización de recursos, proponen estudiar esa movilización a fin de "extender la teoría del movimiento social más allá de su enfoque en grupos sin derechos y movilización de las bases, y de la suposición de que las elites actúan primordialmente como aliadas, patrocinadoras o proveedoras de recursos".

Hacia allá apunta el *desafío analítico* de este capítulo: ampliar la mirada analítica de la TMR, no sólo para pensar los movimientos sociales como aquellos esfuerzos públicos, organizados y sostenidos con reivindicaciones frente a un agravio colectivo (Tilly y Wood, 2010); sino para explicarlos *en relación con las contramovilizaciones* que, *configuradas desde la elite* (Mottl, 1980), conforman su reacción además de que acompañan e influyen sobre su desarrollo (es decir, sobre su mantenimiento, triunfo o eventual declive). En otras palabras, con la propuesta aquí desplegada se intenta trasladar el énfasis analítico de la TMR para explicar el desarrollo de los movimientos sociales desde su interacción con la contraparte que se moviliza en sentido contrario, de manera particular aquella que surge en la elite.[1] La propuesta es

[1] En esto se retoma, por una parte, el *modelo dinámico* de movilización que desde esta teoría se elabora para explicarla como una construcción interactiva de disputas entre agentes demandantes, sus oponentes,

concebir la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un contramovimiento el cual, no se define en los mismos términos que los movimientos sociales (Mottl, 1980); esto es, como "desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades" (Tarrow, 1997: 21). Los agentes movilizados en un contramovimiento no interactúan con las elites sino que forman parte de ellas. Asimismo, la intención del contramovimiento no es buscar un cambio sino resistirlo mediante acciones estratégicas que suelen adaptar y adoptar de las empleadas por el movimiento social al que se oponen (Burstein, 1991; Soule, 2009; Mottl, 1980).

El análisis se enfoca, entonces, en la interacción de un movimiento que desafía el *status quo* para promover un cambio; y un contramovimiento que, gestado "desde arriba", busca contener o revertir el cambio propuesto o alcanzado por aquel movimiento, intentando con ello restablecer un orden cultural, social, político o económico particular (Mottl, 1980: 624). Considerando distintas concepciones de contramovimiento encontramos coincidencia en que éste surge para revertir los cambios generados por un movimiento social (Lowery *et al.*, 2005; Andrews, 2002; Burstein, 1991; Mottl, 1980). Específicamente, Tahi Mottl plantea que los contramovimientos se diferencian de los movimientos sociales por el fácil acceso de recursos que tienen sus agentes, quienes defienden el orden existente (desigual, por lo general). Entonces, mientras un movimiento social, que surge "desde abajo", busca cambios sociales amplios en los patrones socioeconómicos y políticos, un contramovimiento se forma entre los grupos desafiados situados, generalmente, en una

---

miembros del Estado y medios de comunicación (McAdam *et al.*, 2001). Por la otra, se extiende el análisis de los movimientos sociales considerando sus resultados, consecuencias e impacto (Cress y Snow, 2000) de manera particular, con la reacción generada en su contra.

posición privilegiada de la relación política, económica o social. Además, este contramovimiento tiene un espectro ideológico y de acción restringido, fundamentado en la oposición al cambio: "las metas de los contramovimientos son particulares. Se enfocan en un agravio singular" y buscan restablecer el *status quo* (Mottl, 1980: 624-627).

En la interacción movimiento-contramovimiento aquí analizada se enfrentan dos grupos de interés: activistas anticorporativos y quienes controlan –como administradores o accionistas– a las grandes corporaciones transnacionales (elite económica). Las empresas estudiadas representan casos reveladores de grandes corporaciones multinacionales que, buscando reproducir el modelo económico capitalista que les ha permitido su expansión global, recurren a la Responsabilidad RSE para frenar las críticas en su contra. En este caso, la RSE opera como un mecanismo de movilización para, por una parte, generar influencia en la toma de decisión pública y privada; y, por la otra, contener la embestida del movimiento anticorporativo transnacional.[2] Cabe mencionar, no obstante, que la RSE también ha sido retomada por pequeñas y medianas empresas en busca de alternativas organizacionales para mejorar su productividad y competitividad (Porter y Kramer, 2007). Lo anterior denota la plasticidad de esta práctica; no obstante, en ambos casos las empresas recurren a la RSE para potenciar su crecimiento económico, adaptando la agenda ética, ambiental y de promoción de los derechos humanos a sus intereses y objetivos. Esta plasticidad nos permite, como se desarrolla adelante, descomponer analíticamente la RSE en, al menos, tres componentes: uno económico, otro ético y otro político.

Para explicar la *interacción* del movimiento anticorporativo y de la contramovilización empresarial se deben

[2] Aquí se considera indistintamente transnacional y multinacional como aquella organización (empresarial o de activismo social) que, traspasando las fronteras nacionales, opera en más de un país.

considerar dos precisiones. 1) Existen dos formas de influencia que se complementan: por una parte, un *lobbying* político que busca influir en la toma de decisión pública (hechura de políticas públicas y normas jurídicas); por la otra, un *lobbying* social que está orientado a incidir en la toma de decisión privada (de ciudadanos y consumidores).[3] La RSE puede ser considerada como un *lobbying* de tipo social que, además de incidir en la decisión privada, busca reforzar la toma de decisión pública (impulsada por el cabildeo político). 2) Si bien aquí se habla de elite económica *en singular*, esto *no* denota homogeneidad en su conformación. Esa elite está integrada por diversos y variados agentes que se articulan y confrontan entre sí y con otros agentes sociales mediante *fórmulas de necesidad* por las que fluye el poder, recombinándose la capacidad de control sobre el otro –y, con ello, los *diferenciales de poder*.[4]

La propuesta aquí desarrollada no busca contradecir las premisas centrales de la boyante y amplia conceptualización de los movimientos sociales –que, en diversas modalidades, los califican como populares y contrarios a las elites–; pero sí implica hacer un ejercicio sociológico para analizar la movilización de empresarios multinacionales

[3] En sentido estricto, el *lobbying* o cabildeo es definido en la literatura como una táctica de comunicación mediante la cual se transmite información a los gobernantes para la toma de decisión pública (Baumgartner y Leech, 1996; Astié-Burgos, 2011). Es la acción estratégica de un grupo de interés (empresa, individuos o asociaciones) para influir en la toma de decisión pública (Gray *et al.*, 2004). Aquí se propone ampliar la definición considerando dos tipos de *lobbying*, uno que sigue el sentido original del término y otro más que refiere a la incidencia en la toma de decisión privada.

[4] La fórmula de necesidad, refiere a las relaciones de control-dependencia-resistencia entre los individuos que integran una configuración social; mientras que los diferenciales de poder implican diversas capacidades de control sobre los demás agentes del entramado social (a partir de Elias, 1982; Foucault, 1984; y Emerson, 1962).

con los mismos factores con los que, desde la TMR, se estudian los movimientos sociales (combinación de oportunidades y constricciones; procesos colectivos de interpretación; y formas de organización). Para ello, en un primer apartado se discute la definición de movimiento social a fin de comprender la movilización desde la elite. Con ello, además, se propone incluir un componente político para entender la RSE como una contramovilización. En los siguientes apartados se escudriñan los tres factores de la acción colectiva para comprender el surgimiento del movimiento social y su contraparte organizativa (segundo apartado); identificar las propuestas y contrapropuestas como parte de la interpretación y valoración de cada parte (tercer apartado); así como distinguir las tácticas de movilización de activistas sociales y de grupos de interés empresariales (cuarto apartado). En este planteamiento, además, se reconsideran algunas de las críticas vertidas en torno a la TMR. Especialmente aquellas que apuntan contra el estatocentrismo y la falta de especificidad para diferenciar la acción colectiva institucional de la no institucional (Jasper y Poulsen, 1993; Cohen, 1988); así como la que identifica complicaciones para aplicar este enfoque en sociedades desiguales como las latinoamericanas, donde los actores movilizados y los que tienen el control social no están en igualdad de condiciones (Tarrés, 1992).

EL COMPONENTE POLÍTICO: LA RSE COMO CONTRAMOVIMIENTO

La responsabilidad social empresarial no es una práctica nueva; no obstante, lo que sí es nuevo, es la proliferación de su promoción. Las primeras propuestas de ella remiten a mediados del siglo XX, pero no fue sino hasta finales de esa centuria que la RSE se consolidó como una práctica ampliamente difundida entre las empresas multinacionales. Durante el Foro Económico de Davos de 1999, el entonces

secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –Kofi Annan– exhortó a los capitalistas del mundo para promover la responsabilidad social en sus empresas; ello sentó las bases para crear la iniciativa *Global Compact*.[5] Desde entonces se reconoce mundialmente la RSE como el conjunto de propósitos que las empresas pueden implementar para mejorar su desempeño productivo y su relación con la sociedad. Tales propósitos, de carácter voluntario, se sustentan en cuatro principios: promover el bienestar de los trabajadores; armonizar las acciones productivas con el medio ambiente; generar un compromiso con el desarrollo de la comunidad; y combatir la corrupción en los procesos productivos (Cajiga, 2006; Pacto Mundial, 2008).[6]

Después de la publicación del Pacto Mundial, se multiplicaron las iniciativas nacionales e internacionales, públicas y privadas, para promover la responsabilidad social de las empresas. Mientras que en 2000, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó una serie de directrices para regular a las empresas multinacionales; en 2002, la Comunidad Económica Europea (CEE) presentó un plan de regulación sustentable para la empresa, conocido como Libro Verde. Ocho años más tarde, y después de un arduo debate mundial, en 2010 se publicó la norma internacional ISO 26000 en Responsabilidad Social. En América Latina la RSE toma forma desde la década de los noventa con diversas iniciativas (Hupperts, 2006): el Instituto Ethos de Brasil (1998); Acción Empresarial de Chile (1999); Perú 2021 (1994); y Fundemas en El Salvador (2000).

Siguiendo la tendencia mundial, en México cada vez más organizaciones empresariales y firmas consultoras –naciona-

[5] En México el *Global Compact* es conocido como Pacto Mundial y se suscribió, de manera oficial, en junio de 2005.

[6] El principio para combatir la corrupción fue agregado en 2003, durante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, llevada a cabo en la ciudad de Mérida (México).

les e internacionales– ofrecen a las empresas portafolios de RSE para implementar y mostrar sus prácticas socialmente responsables. Muestra de ello es el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado, desde el año 2000, por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).[7] En 2001, veintiocho empresas se interesaron en obtener este distintivo; de ellas, sólo 17 lo obtuvieron. Esto contrasta con las cifras de 2010 e ilustra la expansión de la RSE: de 923 empresas interesadas en obtenerlo, 495 fueron galardonadas.[8]

Lo anterior ilustra la proliferación de la promoción y adopción de la RSE; no obstante, lo que no resulta evidente son las causas de ello. A diferencia de otras perspectivas que definen la RSE como un sistema de gestión que –ya sea por una motivación ética o por un cálculo económico– surge para mejorar las relaciones de la empresa con sus grupos de interés (trabajadores, consumidores, comunidades locales, otras empresas y autoridades gubernamentales), aquí se propone incluir un *componente político* para entender la proliferación de la RSE como una *contramovilización*. Es decir, como la reacción de la elite económica en contra del

[7] Cemefi es una Asociación Civil creada en 1988 por el empresario Manuel Arango con la misión de "promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos y sus organizaciones, para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera". En 1996 Cemefi incorpora puntualmente la RSE como una línea de acción específica a través del Programa de Responsabilidad Social Empresarial, orientado "a la promoción del tema y apoyando a la empresa en la comprensión, adopción de mejores prácticas y mejora continua". Desde el año 2000, el Centro se configura como principal promotor de la RSE en México al entregar un distintivo a las empresas que, interesadas en contestar un cuestionario de autoevaluación, demuestren su responsabilidad social siguiendo cuatro principios: 1) calidad de vida en la empresa, 2) ética empresarial, 3) vinculación con la comunidad y 4) cuidado-preservación del medio ambiente (Cajiga, 2006, www.cemefi.org.mx).

[8] Como se verá adelante, además del distintivo ESR las empresas que operan en México pueden optar por otros reconocimientos conferidos por organizaciones públicas y privadas.

movimiento anticorporativo.[9] Para ello, es preciso aclarar *qué se entiende por movimiento social* a fin de poder delimitar la contramovilización.

Al analizar la conceptualización de los movimientos sociales desde la TMR encontramos tres premisas centrales que guían la definición de la RSE como una contramovilización. En primer lugar, según Sidney Tarrow (1997 [1994]: 21) los movimientos sociales son "desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades". Desde esta perspectiva, los agentes movilizados interactúan con las elites, pero no forman parte de ellas; asimismo aquí se distingue a las elites de los oponentes. La segunda premisa, estrechamente relacionada con la anterior, tiene que ver con el "agravio común" que subyace a la conformación de un movimiento social (Tilly y Wood, 2010). Finalmente, la tercera tiene que ver con que Tarrow (1997 [1994]), al igual que Tilly y Wood (2010), contemplan al movimiento social como una alternativa organizacional de aquellos grupos que tienen menos recursos, para enfrentar adversarios mejor equipados. Esto también nos remite a la crítica referida en un principio (Tarrés, 1992) sobre el diferencial de poder que caracteriza la conformación social en países como México, donde las elites tienen mayor posibilidad de incidir en la toma de decisión pública.

Considerando las anteriores premisas sobre la definición de los movimientos sociales, podemos pensar en tres componentes para definir una contramovilización (como la RSE). Para ello, primero debemos acotar la definición de movimiento social respecto a la interacción con la elite (política o económica), identificada aquí como el contendiente principal: un movimiento social nace como un desafío colectivo de

[9] En otro espacio (Montes de Oca, 2013) se explora puntualmente el componente ético de la RSE, a fin de cuestionar si su práctica implica una reconfiguración del mercado.

personas (ubicadas fuera de la elite) que, luchando frente a un agravio común (favorecido por la elite) e intentando revertir las condiciones que lo generan, tiene la posibilidad de enfrentar a adversarios mejor equipados (situados en la elite). De esta forma, podemos definir la contramovilización como la reacción de la elite para frenar o desacreditar el desafío colectivo en su contra a fin de mantener e, incluso, reforzar la situación que generó el primer malestar o agravio.

Estas definiciones, como se argumenta en los siguientes apartados, nos permiten analizar no sólo el desarrollo del movimiento social anticorporativo (contra la comida "chatarra" y los transgénicos) sino su relación con la contramovilización de la elite económica. En estos términos, la RSE puede ser entendida como un contramovimiento de la elite económica que, apuntalando el impacto del *lobbying* político con el de tipo social, busca frenar o revertir las críticas y demandas del movimiento anticorporativo. Como veremos con los casos analizados, la RSE busca incidir en la toma de decisión pública y privada –de autoridades, ciudadanos y consumidores–; y, para ello, promueve cambios organizacionales y relacionales que impactan sobre prácticas específicas, en su sistema de gestión, o bien, en su mercadotecnia social.

De esta forma, y en contraste con los enfoques monistas que distinguen la RSE como una práctica económica o ética, aquí se propone definirla a partir de tres componentes: uno ético, uno económico y otro político:[10] 1) La RSE es producto de la conciencia moral (individual) vinculada a las creencias religiosas y/o a experiencias personales que marcan la existencia de los empresarios. 2) Es útil a los empresarios

[10] Hay una extensa discusión sobre las motivaciones de la RSE. Si bien unas perspectivas optan por definirla como un aspecto ético y no económico (Guédez, 2006), otras son más pragmáticas: "Más que enmarcar la RSE como un comportamiento moralmente bueno o malo, recientemente las compañías están interesadas en considerar el daño a su reputación o imagen si *no* se comportan de manera responsable" (Soule, 2009: 23).

porque incrementa ganancias y productividad, además de que mejora el posicionamiento de la firma en el mercado. 3) Su emergencia no sólo obedece a la conciencia ética o al cálculo económico de los empresarios, es también útil para frenar las críticas en contra de la expansión del capitalismo global. Si bien, al analizar casos específicos como los que se presentan en este capítulo, podemos ubicar motivaciones éticas y cálculo económico que mueven la adopción de prácticas socialmente responsables, aquí enfatizamos el *componente político* en su conformación como una movilización que busca frenar la *crítica social* contra el capitalismo global.[11]

Considerando lo anterior, podemos compaginar la genealogía del movimiento anticorporativo (Wallerstein, 2005; Boltanski y Chiapello, 2002) con la periodización de la RSE (Frederick, 2008; Carroll, 2008), a fin de ubicar la configuración de ésta como una reacción de la elite económica ante el embate de aquél.[12] Como se muestra en la tabla 1 hay pautas de transformación similares entre el desarrollo de la RSE y la genealogía de la crítica social (anticapitalista, primero y altermundista, después).

Retomando las raíces filantrópicas de inicios del siglo XX, a partir de la década de 1950 se empezó a hablar de la responsabilidad social de las empresas como una preocupación por lo social y un compromiso con las comunidades locales. Pero desde 1968, asimilando las demandas que el activismo social había posicionado en la agenda pública –contra la exclusión social y las diversas formas de dominación–, se

[11] Se habla de crítica social como un recurso para la movilización de agentes que, apelando a la justicia, denuncian una *situación* que consideran *indigna* y deslegitiman la *justificación* existente sobre el orden social y las relaciones de poder (Boltanski y Chiapello, 2002).

[12] Esta propuesta –desarrollada ampliamente en los siguientes apartados– se inspira en el planteamiento de Boltanski y Chiapello (2002) sobre la relación dinámica y de interdependencia entre el desarrollo del capitalismo y su crítica social.

Tabla 1. Pautas de transformación similar entre la RSE y la crítica social al capitalismo

Periodización de la RSE		*Genealogía del movimiento anticorporativo*	
1900-1952	Impulso filantrópico y preocupación por lo social.	1900-1967	*Movimiento anticapitalista* como herencia de la "vieja izquierda". Defensa de los derechos de los trabajadores y proclamación de soberanía popular y nacional.
1953-1967	Compromiso voluntario e involucramiento con comunidades vecinas.		
1968-1973	Reconocimiento de derechos impulsados por el activismo social (discriminación, contaminación, etc.).	1968-1989	Proyecto de transformación social y lucha contra la exclusión y la dominación mediante la "nueva izquierda". Incorporación de nuevas demandas (derechos humanos, feminismo, ecologismo, identidad étnica y diversidad sexual).
1974-1989	Pronta respuesta de la empresa (*responsiveness*) Principios éticos y respeto por los derechos humanos.		
1990 a la fecha	Empresas como buenas ciudadanas. Proliferación global de la promoción de la RSE.	1990 a la fecha	Ante la caída del socialismo real, reciclando los viejos discursos, se reconfigura la crítica social mediante un *movimiento anticorporativo* que busca construir mundo alternativo al capitalismo global y al neoliberalismo.

Fuente: Elaboración propia a partir de Frederick, 2008; Carroll, 2008; Wallerstein, 2005; Boltanski y Chiapello, 2002.

configura una nueva etapa de la RSE. En un contexto mundial de *protesta social*, se promueve que la RSE trascienda el compromiso filantrópico para asumir un papel más activo en la resolución de los problemas sociales. Haciendo eco de las demandas sociales se incorporan nuevos lineamientos de negocios para corregir la discriminación racial y sexual en el lugar de trabajo; reducir la contaminación industrial; mejorar las condiciones de salud y seguridad en las plantas y oficinas; ofrecer precios justos para los consumidores; asegurar la calidad y efectividad de los productos; proveer vasta información para los inversores; no recibir sobornos; tener un trato justo con los proveedores; así como rehusar arreglar los precios con los competidores.

Ahora bien, si la década de 1968-1978 había representado una activa movilización social de la crítica anticapitalista (que conjugó la acción social de sindicatos, estudiantes, intelectuales y clases populares), los años posteriores se caracterizaron por el *desgaste ideológico* de la crítica social.[13] La caída del socialismo real arremetió contra los ideales de la resistencia social. La lucha socialista anterior se desdibujó y en su lugar quedaron visos de "un sindicalismo desorientado" y de intentos por reforzar la ayuda humanitaria (Boltanski y Chiapello, 2002: 242). No obstante, con la creciente polarización socioeconómica que deviene de los ajustes económicos y políticos de la expansión global del capitalismo, en el siglo XXI se revitaliza la crítica social contra un capitalismo caracterizado como "imperialismo neoliberal". Su objetivo es construir un proyecto alternativo al capitalismo global; su lucha ya no apunta exclusivamente contra el Estado,

[13] El "desgaste ideológico" de la crítica (cuando la crítica no sabe qué decir, porque o bien ya lo ha dicho antes o porque ha sido retomado por el capitalismo) es distinto de la incapacidad de la crítica social por hacerse oír. Eso es lo que constituye más bien un "desarme físico"; es decir, cuando la crítica sabe qué decir, pero no puede hacerlo (Boltanski y Chiapello, 2002: 91).

sino contra las corporaciones globales y las organizaciones internacionales. Como veremos en los siguientes apartados con los casos analizados, el reciente impulso y proliferación de la RSE (con la que se quiere presentar a las corporaciones como ciudadanas globales con derechos y obligaciones) puede ser entendido como una movilización que reacciona frente a ese desafío altermundista.

Este recuento histórico nos permite apreciar la relación del desarrollo del capitalismo y de su crítica social como la interacción del movimiento anticorporativo y el contramovimiento de responsabilidad social. A fin de profundizar sobre los elementos que entran en juego en esta interacción, veamos a continuación los factores que, desde la TMR, dan cuenta de la acción colectiva. En particular se presenta la reflexión sobre los resultados de una investigación donde se analizó la confrontación entre activistas y empresarios en dos episodios de disputa en México: 1) legislación sobre manejo de organismos genéticamente modificados (OGM) y, 2) regulación sobre la venta de "comida chatarra" en escuelas. Estos episodios se resumen de la siguiente manera:[14]

1. Por una parte, el proceso legislativo que le dio vida a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) se caracterizó por la convergencia-divergencia de posturas a favor y en contra de la biotecnología. Para seguir lo estipulado en el Protocolo de Cartagena (firmado por el gobierno

[14] La metodología de la investigación que sustenta los resultados aquí presentados se fundamentó en contrastar las prácticas discursivas –los dichos y los hechos– de las partes confrontadas (activistas y empresarios). Para ello, se analizó información periodística, documental y de campo, así como de entrevistas realizadas *ex profeso*. En el tercer apartado de este capítulo se presentan los marcos de la movilización-contramovilización de estos episodios. Para un análisis más detallado, véase Montes de Oca, 2011.

mexicano en 2000 y ratificado en 2003), comenzó un largo proceso legislativo que, no sin tropiezos, culminó el 10 de febrero de 2005 con su aprobación final en la Cámara Alta.

2. Por otra parte, para regular el expendio en escuelas de alimentos industrializados y bebidas azucaradas con bajos contenidos nutrimentales, y con ello hacerle frente a lo que se comenzaba a denominar como una epidemia global –la desnutrición y obesidad infantiles–, entre 2008 y 2010 el Ejecutivo federal intentó diseñar mecanismos para prohibir su venta en escuelas de educación básica (Lineamientos generales para el expendio de alimentos en escuelas públicas y privadas de educación básica, en adelante Lineamientos). En esa sintonía estuvieron los intentos legislativos, entre 2009 y 2011, por modificar las leyes generales de salud y educación.

En estos episodios se enfrentaron dos partes: el movimiento anticorporativo conformado por organizaciones como El Poder del Consumidor y Greenpeace México y la movilización de empresas multinacionales como Bimbo, Coca-Cola y Monsanto. En esta confrontación cada parte presentó *retóricas* con las que buscaban convencer a los demás agentes sociales sobre sus propios intereses, valores y creencias, al tiempo que intentaban deslegitimar al adversario.[15]

Como se desarrolla en los apartados siguientes, activistas del movimiento anticorporativo trataron de convencer a los distintos públicos sobre el riesgo a la salud humana y animal por el uso de OGM, así como sobre el daño causado por la comida "chatarra" (obesidad, desnutrición, y hasta adicción

[15] Aquí se habla de *retórica* en el sentido aristotélico, como *arte de la persuasión*; y no en el sentido peyorativo del racionalismo y el empirismo, que la califica como "sinónimo de artificio, de insinceridad, de decadencia" (González, 1989: 9).

a estos productos). Por su parte, los empresarios contramovilizaron sus recursos –haciendo uso de la responsabilidad social– difundiendo retóricas para presentar la producción transgénica como una solución ante los riesgos del cambio climático, la baja productividad del campo mexicano y el consecuente desabasto de alimentos; así como su compromiso con la salud de los consumidores para promover hábitos saludables (hacer ejercicio y consumir una dieta balanceada), a fin de hacerle frente a la epidemia del sobrepeso y la obesidad infantil.

ACTIVISMO ANTICORPORATIVO Y SU CONTRAMOVILIZACIÓN: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

La estructura de oportunidades políticas (EOP) remite a las posibilidades y limitaciones para la acción colectiva, generadas por cambios específicos en el sistema político. De manera particular se contemplan cuatro dimensiones analíticas (McAdam, 1996): 1) apertura-cierre del sistema político institucionalizado; 2) estabilidad-inestabilidad en la alineación de la elite; 3) presencia-ausencia de aliados en la elite; y 4) capacidad-inclinación estatal a la represión. Una de las premisas básicas de esta formulación es que los agentes movilizados, que están fuera de las elites, buscan alianzas con ellas o aprovechan reacomodos en su articulación. Ello no corresponde con las condiciones del movimiento anticorporativo, el cual, además de desbordar los límites del sistema político institucionalizado y del Estado-nación, está orientado contra los intereses de la elite económica. A fin de adecuar estas dimensiones a tales condiciones se propone afinarlas de la siguiente manera: 1) reconfiguración del sistema político conforme a las tendencias de la gobernanza global y la consecuente diversificación de los blancos de crítica; 2) estabilidad-inestabilidad en la alineación de las elites

locales y globales; 3) alianza-confrontación con las elites; así como, 4) mecanismos estatales y no estatales de represión/contención de la movilización.[16]

Al hablar de gobernanza global se hace eco de los planteamientos que explican las nuevas formas de interacción entre gobierno, sociedad y mercado (Kooiman, 2003; Pierre y Peters, 2000; Pierre, 2000). Con ellas se sobreponen asuntos locales y globales, además de que se redefinen los límites entre lo público y lo privado, así como entre la regulación jurídica y ética. Esto tiene implicaciones en la alineación de las elites políticas y económicas. Si bien resulta simplista hablar de un vacío de poder o de la desaparición del Estado, es indudable que el diferencial de poder de la elite económica se ha incrementado en relación con la elite política. De hecho, como parte de la nueva gobernanza hay un reacomodo en los papeles de las elites económica y política. Ahora los filantrocapitalistas transnacionales, de la mano de gobiernos y elites políticas locales, abanderan proyectos sociales para el desarrollo comunitario (Bishop y Green, 2009).

Esto también ha reorientado los ataques de los movimientos sociales. Si antaño éstos centraban la movilización contra blancos estatales, con los cambios de la *globalización* y el *internacionalismo* (Tarrow, 2006), los movimientos sociales apuntan hacia las grandes corporaciones o las instituciones internacionales.[17] Si un movimiento quiere incidir, digamos, en la protección del medio ambiente o la defensa

[16] Otros ejercicios para adaptar la propuesta de la movilización de recursos a las nuevas condiciones de la globalización y el internacionalismo se presentan en Soule (2009) y en Tarrow (2006).

[17] La globalización implica un incremento en el volumen y la velocidad de los flujos de capital, bienes, información, ideas, personas y vínculos que conectan a los actores a lo largo de los países. El internacionalismo implica un incremento horizontal de la densidad relacional entre Estados, oficinas gubernamentales y actores no estatales; así como un incremento vertical de las vinculaciones entre los ámbitos local, nacional e internacional (Tarrow, 2006).

de los derechos laborales ya no sólo deberá interpelar a las autoridades políticas nacionales. También deberá increpar contra quienes manejan las empresas multinacionales que contaminan o que recurren al trabajo infantil. Éste ha sido el curso de un movimiento que evolucionó de un enfrentamiento casi exclusivamente estatal a uno que amplió su blanco de movilización a las grandes corporaciones transnacionales.

Para entender este devenir es útil pensar en la relación del capitalismo con su crítica social (Boltanski y Chiapello, 2002). Desde la consolidación del capitalismo moderno, la crítica social ha acompañado su desarrollo como una sombra: primero como una crítica anticapitalista (siglos XIX y XX) y, después, como una crítica anticorporativa (finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI). Considerando los últimos años de esta interacción encontramos que después de 1968 la crítica del capitalismo se expresó con mayor fuerza como un movimiento social que, desafiando a la autoridad estatal, buscaba modificar la estructura de poder y las relaciones sociales. No obstante, en la década de los ochenta esta movilización menguó a la par que fueron cayendo los regímenes socialistas a partir de 1989. Sin embargo, con las consecuencias negativas de las reformas estructurales, que apuntalaron la expansión global del capitalismo pero agudizaron la desigualdad socioeconómica, la crítica social se fortaleció. Durante la última década del siglo XX, comenzó a recomponerse el movimiento social anticapitalista. Una nueva movilización, sustentada en la posibilidad de construir un mundo con una lógica alternativa a la del capitalismo global, centró su principal objetivo de lucha contra las corporaciones transnacionales y las instituciones internacionales.

Fue así como la crítica anticapitalista (tendiente al socialismo) se renovó como una crítica anticorporativa (altermundista). Los activistas anticorporativos apuntan contra las grandes empresas globales en lugar de los gobiernos, porque han encontrado que éstas tienen más responsabilidad

sobre sus demandas. Sin embargo, este movimiento –como veremos en los siguientes apartados– no deja fuera de su confrontación a los blancos estatales (Soule, 2009).[18] Antes, cuando el Estado era el único centro organizativo del desarrollo económico, el poder estatal estaba en la mira del movimiento social anticapitalista; ahora, con la reconformación referida, la lucha anticorporativa tiene en la mira –además del Estado– a las grandes empresas multinacionales y a los organismos económicos internacionales.[19]

El movimiento anticorporativo se integra por organizaciones –reformistas o revolucionarias– que cuestionan o rechazan los modelos hegemónicos de democracia, capitalismo global y organización social, además de buscar alternativas sociales, políticas y económicas (mediante la transformación del orden social o la construcción de uno nuevo). Su movilización está orientada hacia el cambio social. Esto implica, en primer término, la existencia de inconformidad, indignación o agravio ante una situación específica; y, en segundo lugar, la construcción de un dispositivo crítico contra determinada relación de poder. De una fuente emotiva de molestia se construye un dispositivo que denuncia la situación indigna y justifica su transformación. La indignación hacia las acciones

[18] Pese a que Sarah Soule (2009) distingue analíticamente la política de confrontación (*contentious politics*) hacia el Estado, de críticas privadas hacia otro agente privado, no-estatal (*private politics*), ella también argumenta que en la movilización anticorporativa ambas estrategias se complementan.

[19] A finales del siglo XX, con la expansión global del capitalismo, el credo liberal resurgió con gran fuerza. Fue retomado por los organismos internacionales de cooperación, desarrollo y regulación económica. Organismos internacionales –como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU)–, nombrados bajo el apelativo de *neoliberales*, fueron puestos –junto con las empresas y los Estados– bajo la vigilancia de la crítica social anticorporativa.

del capitalismo ha sido la fuente del movimiento social en su contra. Este primer impulso emotivo del que emana la crítica, posteriormente se nutre con una retórica argumentativa que da voz y traduce el sufrimiento individual en términos del bien común (Boltanski y Chiapello, 2002).

Se configura así una movilización anticorporativa que, rompiendo las fronteras estatales, lucha contra la expansión global del capitalismo y sus consecuencias: desigualdad de oportunidades para el desarrollo; deterioro del medio ambiente y de las condiciones laborales; concentración de poder económico y político; así como marginación económica, social y política de amplios sectores poblacionales. Ejemplo de esta movilización global anticorporativa es el Foro Social Mundial (FSM). En febrero de 2000, durante el Foro Económico Mundial de Davos, 50 intelectuales de diversos países intentaron una táctica de lucha basada en la expresión de argumentaciones antineoliberales al organizar un Anti-Davos en Davos. Con estas experiencias y bajo la iniciativa de dos dirigentes de movimientos populares brasileños (Francisco Whitaker y Oded Grajew) y la colaboración de un activista social francés (Bernard Cassen, director de *Le Monde Diplomatique* y presidente de ATTAC-France), en febrero de 2001 se organizó el primer FSM en Porto Alegre, Brasil. Desde entonces, cada edición del Foro reitera su ofensiva: "hundir Davos" y hacer realidad la idea de que "otro mundo es posible" (Wallerstein, 2005: 225).

Esta afrenta contra el capitalismo global, cristalizada desde entonces en el FSM, se multiplica en otras tantas protestas hasta nuestros días en sociedades pobres, y también en países ricos con, por ejemplo, el movimiento *Occupy Wall Street*. Ante ello, la elite económica responde con una movilización de recursos que, en última instancia, se traduce en una ofensiva orientada a contener la crítica anticorporativa, por una parte; y justificar/reforzar la expansión global del capitalismo, por la otra. De esta forma se gesta un "nuevo

espíritu del capitalismo" (Boltanski y Chiapello, 2002). La conjugación de tácticas para incidir en la toma de decisión pública y privada de la RSE avanza en ese sentido. Como vimos en el apartado anterior, las protestas altermundistas fueron seguidas por el resurgimiento, en las agendas nacionales e internacionales, así como en los manuales gerenciales, de una responsabilidad social empresarial que suscribía las demandas básicas del movimiento anticorporativo.

Específicamente, desde la última década del siglo XX la RSE se extendió, con particularidades y énfasis propios, en países desarrollados y emergentes.[20] En países como Francia, Inglaterra y Dinamarca se ha avanzado en impulsar la RSE desde el Estado como un conjunto de derechos y obligaciones que las empresas tienen con el gobierno y la sociedad. En ello, no obstante, prevalece la perspectiva voluntaria; no hay marcos normativos que obliguen a las empresas a ser socialmente responsables, sólo hay acciones gubernamentales que lo fomentan. En los países del sur, como México, la RSE se "tropicaliza", manteniendo el compromiso voluntario y el énfasis filantrópico como sus principales ingredientes. Este acento filantrópico tiñe los discursos de las empresas socialmente responsables como actos caritativos o de buena voluntad, pero no como una obligación de la empresa con el gobierno y la sociedad.

Los primeros años del siglo XXI marcaron un retorno reforzado de la RSE. En la agenda internacional, se multiplicaron los instrumentos que la incentivan: el *Global Compact* de la ONU, el Libro Verde de la CEE, las Directrices para empresas multinacionales de la OCDE y la norma inter-

[20] De manera particular se puede mencionar que, en 1977, menos de la mitad de las 500 firmas de la revista *Fortune* mencionaban la RSE en sus reportes anuales, para finales de los noventa, casi el 90% lo hacía (Soule, 2009). En México esta expansión se demuestra con el creciente número de empresas interesadas en obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (véase el apartado anterior).

nacional ISO-26000. En tanto, en México la RSE es promovida mediante iniciativas del gobierno federal como la Norma en Responsabilidad Social; los reconocimientos de Empresa Incluyente y Empresa Familiarmente Responsable, o el Modelo de Equidad de Género; así como desde programas de organizaciones sociales con el Distintivo ESR de Cemefi o el Premio Ética y Valores de Concamin (Confederación de Cámaras Industriales).

En términos generales, las propuestas de RSE responden a la multiplicidad de críticas del movimiento anticorporativo. Justicia social, cuidado del medio ambiente, desarrollo social, condiciones laborales satisfactorias, protección de la salud de los consumidores, competencia equitativa, así como cumplimiento de leyes nacionales y de tratados internacionales entretejen las retóricas de la RSE y del movimiento anticorporativo.

RSE: ADAPTACIÓN/ASIMILACIÓN DE LA CRÍTICA ANTICORPORATIVA. LOS MARCOS DE LA CONTRAMOVILIZACIÓN Y DEL NUEVO ESPÍRITU DEL CAPITALISMO

Las retóricas del movimiento anticorporativo y de su contramovilización nos remiten a lo que la TMR define como procesos enmarcadores. Esto es, al *marco cultural* (de representaciones simbólicas) desde donde, mediante *esfuerzos estratégicos* y *conscientes*, un grupo de personas construye imágenes cognitivas y de evaluación moral para interpretar el descontento; valorar, criticar o justificar las circunstancias; así como definir asuntos para la agenda y para demandar la intervención pública (McAdam *et al.*, 1999: 27; Oberschall, 1996: 97; Zald, 1996: 262). Ante las imágenes negativas, las evaluaciones reprobatorias y las demandas regulatorias construidas por el movimiento anticorporativo, la elite económica construye, a su vez, imágenes positivas, propuestas de

acción y autorregulación para frenar la amenaza del castigo social y del incremento en la vigilancia estatal. Es así como se confronta el marco del movimiento anticorporativo con el de la movilización que envuelve la práctica de la RSE.

Esta confrontación nos lleva a pensar en la relación del capitalismo con su crítica social. Ante las críticas anticorporativas, los capitalistas construyen una justificación ética, un nuevo espíritu, que se nutre de ellas pero, a su vez, las fomenta. El movimiento anticorporativo surge para debilitar la expansión global del capitalismo y frenar sus consecuencias sociales; no obstante, cuando su crítica es absorbida por el nuevo espíritu del capitalismo, contradictoriamente fortalece el proyecto de las grandes empresas. Bajo esta lógica, si la crítica social muere, el capitalismo pierde su espíritu y, con ello, la posibilidad de ampliar su capacidad de control. Para que el capitalismo mantenga su lógica de expansión, requiere una justificación ética sustentada en ideas de bien común con las que, además de legitimar las prácticas capitalistas, se promueva compromiso con su desarrollo y continuidad. Es así como la capacidad de supervivencia del capitalismo se explica gracias a la *asimilación* de una parte de la crítica social.

Esta perspectiva se asemeja a la que propone explicar la interacción del movimiento y el contramovimiento (Meyer y Staggenborg, 1996; Jasper y Poulsen, 1993; Mottl, 1980). Si bien, el objetivo del movimiento social es deslegitimar y debilitar al adversario, indirectamente impulsa y alimenta una movilización en sentido contrario. Tres condiciones promueven el florecimiento de contramovilizaciones: 1) el éxito de un movimiento social; 2) la amenaza a intereses existentes; y 3) la búsqueda de alianzas para ampliar el apoyo social. A mayor éxito de un movimiento, mayor es la posibilidad de que se configure una movilización en su contra. Los movimientos que logran subir sus demandas en la agenda pública o que, incluso, consiguen incidir en la toma de decisión pública, son

los más propensos a generar contramovilizaciones. Asimismo, cuando un movimiento amenaza los intereses de un grupo, éste reaccionará de manera defensiva en un contramovimiento (Andrews, 2002; Burstein, 1991; Mottl, 1980). Si este grupo es una elite, buscará obtener apoyo de las bases sociales; si éste no es el caso, el grupo amenazado promoverá conseguir apoyo de las elites para mantener su defensa. A partir de estas premisas es que podemos entender el surgimiento de la RSE como la reacción de la elite económica ante la ofensiva del movimiento anticorporativo.

La década de los noventa del siglo XX se caracterizó por la innovación en los métodos de producción y administración de negocios. Principios organizativos como el justo-a-tiempo, la calidad total, el proceso de mejora continua o los equipos autónomos de producción hicieron de la empresa una nueva configuración social con vinculaciones muy *flexibles*. Así, la imagen-tipo de la empresa moderna es la de un "centro esbelto rodeado de una nebulosa" integrada por proveedores, empresas subcontratadas –o *outsourcings*–, prestadores de servicios, personal interino y empresas amigas (Boltanski y Chiapello, 2002: 119). Ésta es la imagen de empresas transnacionales que, a fin de agilizar sus operaciones comerciales e incrementar sus ganancias económicas, buscan flexibilizar las restricciones estatales (Drucker, 1993: 24).

Tales características e intereses propician que las corporaciones transnacionales busquen entornos más favorables a sus intereses. Se mudan a países marcados por la desigualdad y el desempleo, donde la mano de obra es más barata; donde la regulación nacional suele ser menos clara y más permisiva; y donde las *externalidades* o 'daños colaterales' del proceso productivo parecen estar alejadas del mundo desarrollado y de la crítica social. No obstante, con la *globalización contrahegemónica* (Santos, 2007; Evans, 2000), esto último no es así; los impactos de las transnacionales no pasan inadvertidos para la mirada 'fisgona' y la voz crítica

de las organizaciones sociales.[21] Mirada y voz que incomodan a las empresas porque denuncian, por igual, violación de derechos humanos o contaminación del medio ambiente; mirada y voz sin las cuales, probablemente, tales daños colaterales sí podrían pasar desapercibidos. Bajo esa mirada y con esa voz las organizaciones anticorporativas le exigen a los Estados reforzar sus marcos regulatorios. En los países del norte para impulsar normas que sancionen a las empresas cuyas cadenas productivas, instaladas en el sur, violan los derechos de sus trabajadores o lesionan el medio ambiente. En los países del sur, para reforzar y vigilar el cumplimiento de las regulaciones estatales y las del derecho internacional.

Son esta mirada y esta voz las que enmarcan el movimiento anticorporativo. Un movimiento que lucha contra la exclusión social y que está animado por un *logos* redistributivo –sustentado en los principios de igualdad y reconocimiento de la diferencia–; un movimiento que, en suma, implica la redistribución de los recursos simbólicos, culturales, políticos, sociales y materiales. Es un movimiento transnacional que se articula a través de la acción colectiva de redes con vínculos locales, nacionales y globales; y que, desde las protestas de Seattle en la reunión de la OMC en 1999, ha cobrado mayor fuerza perfilando "otra forma de globalización" (Santos, 2007: 43).

[21] Pensemos en la distinción que algunos autores hacen sobre dos tipos de globalización: la hegemónica o neoliberal y la contrahegemónica. Boaventura de Sousa Santos (2007: 31) define la globalización contrahegemónica como "un vasto conjunto de redes, iniciativas, organizaciones y movimientos que luchan contra los resultados económicos, sociales y políticos de la globalización hegemónica o neoliberal". En el mismo sentido, Peter Evans (2000: 230) entiende la globalización "contrahegemónica" o "globalización desde abajo" como aquella que se opone a las reglas y redes globales construidas en torno a los intereses de las corporaciones transnacionales; sobre todo si se considera que éstas tienen un carácter hegemónico. Con esta globalización "se piensa localmente y se actúa globalmente".

Mediante tácticas innovadoras –protestas públicas y boicots son algunas de las tácticas que se analizarán en el siguiente apartado–, las organizaciones que integran el movimiento anticorporativo demandan que el Estado refuerce sus controles sobre el mercado al tiempo que exhiben a las empresas con prácticas irresponsables. Acciones exitosas de organizaciones transnacionales (como Greenpeace o Amnistía Internacional) han hecho que corporativos transnacionales (como Nike, Dow, Pepsi o Gerber) retiren del mercado algún producto o ingrediente nocivo; modifiquen la política criticada; o eviten prácticas de negligencia (Soule, 2009).[22]

Campañas globales y locales contra organismos genéticamente modificados (OGM) y "comida chatarra" ilustran el embate de organizaciones anticorporativas en contra de transnacionales como Monsanto, Coca-Cola o Bimbo. Riesgo a la salud animal y humana, contaminación del medio ambiente, disminución de la diversidad biológica y cobro de patentes a campesinos pobres enmarcan las críticas globales contra el uso de semillas genéticamente modificadas (Robin, 2008). Adicción, obesidad, desnutrición y publicidad engañosa son las consecuencias negativas que, según la evaluación del movimiento anticorporativo, tiene la comercialización de "comida chatarra".

En México, la movilización anticorporativa respecto a estos casos repuntó, por una parte, cuando en 2002 se comenzó a discutir lo que sería la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), con la que

[22] Los casos analizados por Sarah Soule muestran la responsabilidad social de corporativos como respuesta a críticas específicas sobre ciertas prácticas empresariales (uno de los casos ilustrados por la autora es el de Gerber que, frente a las críticas de Greenpeace por la presencia de OGM en sus cereales, elimina a proveedores identificados con la producción transgénica y los sustituye por productores de maíz orgánico). Su propuesta coincide con la tesis central aquí presentada en el sentido de contemplar la RSE como una reacción ante la crítica anticorporativa.

se regularía la introducción de semillas con recombinación celular para la siembra y el consumo humano. Por la otra, cuando a partir de 2008 el gobierno federal y algunos gobiernos locales comenzaron a diseñar instrumentos para regular la venta y publicidad de los productos caracterizados como "chatarra". En ambos casos, organizaciones anticorporativas (como Greenpeace México y El Poder del Consumidor) demandaban que el gobierno prohibiera la entrada de OGM en el país así como la comercialización de "comida chatarra" en las escuelas.[23]

El movimiento social antitransgénicos y su contramovilización empresarial

El movimiento contra los OGM en México retomó la retórica de la crítica global buscando incidir en el proceso que dio luz a la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).[24] Después de una ardua negociación política y frente a diversas manifestaciones en su contra, el 2 de mayo de 2005 entró en vigor dicha ley. La primera

[23] Los episodios de disputa fueron reconstruidos a partir de información periodística así como de documentos de las organizaciones sociales y empresariales disponibles en sus portales de Internet (www.greenpeace.org/mexico; www.elpoderdelconsumidor.org; www.monsanto.com.mx; www. agrobio.com.mx; www.grupobimbo.com; www.viviendopositivamente.com.mx; www.heritage.coca-cola.com).

[24] En Europa la crítica antitransgénica habla del "nuevo colonialismo" o de un "neofeudalismo" de empresas que, como Monsanto, deterioran el tejido social y la economía de los productores; atentan contra la salud animal y humana; contaminan genéticamente la diversidad biológica; y promueven prácticas agrícolas que deterioran el medio ambiente agudizando el cambio climático. También hablan del "alimento de Frankenstein" al referirse a la recombinación de moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) para generar semillas transgénicas u hormonas de crecimiento bovino –prohibidas en el viejo continente– para la producción intensiva de leche (lo cual genera crecimiento desproporcionado de ubres e imposibilidad de movimiento).

versión de esta iniciativa de ley había sido propuesta, en 2002, desde la Cámara de Senadores (con impulso de científicos, industriales del ramo y cabilderos profesionales) por el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado (del Partido de la Revolución Democrática, PRD).[25] Esa propuesta fue aprobada por unanimidad y turnada a la Cámara de Diputados donde, en diciembre de 2004, se redactó un dictamen al cual –según acusaron sus críticos– se le agregaron, en último momento y producto del *lobbying* político de los corporativos transnacionales, argumentos favorables a la industria. Este dictamen, sin embargo, fue aprobado por mayoría el 15 de diciembre de 2004. Pese a su aprobación, éste generó controversias al interior de los partidos; particularmente en el principal partido opositor de izquierda (PRD). En un entorno crítico, esta ley, no obstante, fue reglamentada tres años después (el reglamento entró en vigor el 24 de marzo de 2008).

La LBOGM fue criticada por tener –según activistas– graves omisiones en, al menos dos temas trascendentales: el etiquetado de productos derivados de transgénicos (artículo 101) y la falta de mecanismos para hacer que las empresas respondan por afectaciones a terceros (artículo 121). Por su parte, el reglamento fue criticado por haber eliminado la "única posibilidad" de contrarrestar la contaminación genética del maíz mediante un Régimen de protección especial sustentado en el principio precautorio (Ribeiro, 2009). Y fue, precisamente, sobre la defensa del maíz no transgénico que, en 2007, las organizaciones que ya, desde 2002, habían manifestado su preocupación por la presencia de semillas transgénicas en México (Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Unión de Grupos Ambientalistas), impulsaron la campaña nacional "Sin maíz no hay país" para

[25] Cabe mencionar que, en 1999, el Partido Verde Ecologista de México ya había propuesto una iniciativa de ley sobre bioseguridad; misma que no prosperó.

la defensa de las variedades criollas de la semilla. Campaña que continúa hasta nuestros días y que refuerza la ofensiva contra los demás productos transgénicos.[26]

Frente a esa embestida contra los transgénicos, empresas como Monsanto respondieron con la promoción de sus acciones socialmente responsables. En 2008, tres años después de que se aprobara la también llamada Ley Monsanto y cuando se aprobó su reglamento, la multinacional semillera publicó su primer informe de Responsabilidad Social para México y América Latina Norte (Monsanto, 2008). En él se reitera el compromiso corporativo con el medio ambiente, la biodiversidad y la sustentabilidad. La retórica corporativa recurre a la filantropía (para apoyar proyectos productivos en Oaxaca, Puebla y Guerrero), así como a la promoción de una "agricultura sustentable" con organismos "genéticamente enriquecidos" (para hacer frente a la escasez de alimentos y la hambruna ante los riesgos del cambio climático).[27] Con

[26] En 2008 esta campaña –que ya sumaba a más de 300 organizaciones– se extendió a la siembra de frijol. Con el dicho "Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco ¡Pon a México en tu boca!", y en el marco de la apertura comercial de la producción agrícola como parte del TLCAN, a partir de enero de ese año, las organizaciones refrendaron su lucha contra los cultivos transgénicos. Asimismo, en octubre siguiente –en el Día mundial de la alimentación– organizaciones de esta campaña denunciaron la importación ilegal de semillas de maíz transgénico de Monsanto en cultivos del norteño estado de Chihuahua.

[27] En colaboración con los principales exponentes del filantrocapitalismo mundial –con las fundaciones de Bill y Melinda Gates; Howard Buffett y la familia Rockefeller–, y mediante la Fundación de Agricultura de África –*African Agricultural Technology Foundation* (AATF, por sus siglas en inglés)– y el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT) Monsanto busca desarrollar maíz tolerante a la sequía. El cual –asegura la retórica corporativa– "estará a disposición de los agricultores, libre de regalías". Asimismo, en México mediante su programa Educampo, *Monsanto Fund* colabora con la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (Fundar), organización creada en 1963 por la Unión de Empresarios Católicos, para llevar a cabo proyectos sobre

ello, Monsanto intenta desdibujar las críticas en su contra, recreando la estrategia global que, en 1995, emprendiera Robert B. Shapiro (ex director del corporativo central).

En ese entonces y ante el embate de la crítica social global sobre la 'negra historia' de una empresa que había crecido fabricando químicos peligrosos como la dioxina (base del agente naranja); en 1995, cuando Shapiro asumió la dirección ejecutiva, empezó a construir la imagen de un "nuevo Monsanto". Generó una "revolución cultural" de la otrora empresa química para transformarla en una biológica. De ser una compañía identificada con la muerte y el peligro, quería construir la imagen de una empresa de vida que brinda "alimentación, salud y esperanza" para "salvar el mundo" (citas de Shapiro, en Robin, 2008: 282-289). Esos fueron los primeros pasos para construir un mecanismo de legitimación fuerte e incuestionable que 'limpiara' la historia de la firma y proyectara la imagen de una compañía cimentada en la integridad de valores, la sustentabilidad, la calidad de vida y el compromiso social. Ética empresarial y respeto de derechos humanos y laborales; cuidado del medio ambiente y sustentabilidad; filantropía y compromiso con las comunidades son los pilares que desde entonces ha trazado la RSE de Monsanto para reconstruir su imagen pública.

Esto se puede trasladar al plano local donde, después del proceso legislativo mexicano, la RSE es utilizada por el corporativo como una táctica de *lobbying* social para transformar la imagen negativa construida por el embate anticorporativo. De esta forma, el *lobbying* político que dio vida a una ley favorable para las semilleras trasnacionales es complementado por uno de tipo social que busca incidir en la decisión privada, de productores y consumidores.

---

educación social y capacitación para el trabajo de familias campesinas vulnerables (Monsanto, 2008).

El movimiento social contra la "comida chatarra" y su contramovilización empresarial

Ante el alto índice de obesidad infantil en México y retomando las críticas globales, organizaciones del movimiento anticorporativo contra la "comida chatarra", como El Poder del Consumidor, procuraron subir el tema a la agenda pública.[28] A partir de 2007, la movilización social de esta organización se encaminó contra alimentos con alto contenido en grasas y azúcares, así como contra el impacto de su publicidad en el público infantil. Desde entonces, activistas sociales demandaron al Estado tomar medidas para combatir la obesidad infantil e impulsar un contrapeso frente a la industria productora de "comida chatarra". La intención era reglamentar su etiquetado además de prohibir la publicidad engañosa y su venta en las escuelas. La respuesta gubernamental frente a tales demandas y, sobre todo, ante el riesgo económico que significa atender los padecimientos presentes y futuros relacionados con la obesidad, fue diseñar lineamientos y reformas legislativas.[29] Estas medidas que, en un principio buscaban *prohibir* la venta de estos productos en escuelas,

[28] En 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la primera alerta global al identificar la obesidad como una enfermedad, aconsejando a los Estados regular el contenido de los alimentos procesados. En México no fue sino hasta 2006, con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud, cuando se consideró este asunto. La encuesta reveló que el 70% de la población total tiene problemas de peso, 40% obesidad y 30% sobrepeso; ante ello, se empezó a hablar de epidemia, ya no sólo de enfermedad. Desde 1999 la tasa de obesidad infantil, en menores de cinco a once años de edad, se incrementó 33% (García de León y Delaunay, 2008).

[29] Esta preocupación se muestra en una declaración que hiciera el secretario de Salud en 2010: "Hay países del mundo donde los sistemas de salud han quebrado porque ya no aguantan la presión de las complicaciones de las enfermedades crónicas, y la forma que tiene la progresión de la diabetes y las complicaciones en México nos hace temer que esto pudiera darse en un futuro no muy lejano" (Vega, 2010).

se toparon con un fuerte embate empresarial, cuyos cabilderos profesionales modificaron la regulación de acuerdo con sus intereses. Fue por ello que la crítica anticorporativa se reforzó en dos frentes: contra la regulación "light" del Estado y contra las propias empresas.

El 22 de mayo de 2010 las secretarías de Salud y de Educación Pública presentaron un anteproyecto que *prohibía* la venta de refrescos, fritangas y alimentos industrializados fritos en las escuelas (Lineamientos).[30] Con este anteproyecto también se publicó una lista de productos permitidos y prohibidos para la venta en las escuelas (Valle y Vega, 2010). Ante ello, los empresarios de la industria alimenticia y de bebidas no alcohólicas –representados por el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico)– presentaron diversas opiniones en contra. Las argumentaciones versaron sobre las afectaciones a la imagen de sus productos; sobre la imposibilidad de cambiar el contenido calórico de sus productos en sólo dos años; así como por los costos que implicaría la inversión en envases para porciones más pequeñas. Cediendo a la presión del *lobbying* empresarial, los funcionarios matizaron sus dichos. De manera particular, el secretario de Salud, que inicialmente había asumido una 'perspectiva antichatarra', comenzó a plantear la posibilidad de que se comercializaran algunos productos –pastelitos,

[30] En ese momento, el entonces secretario de Educación (Ernesto Lujambio), había apuntado la necesidad de generar tres estrategias a seguir para enfrentar el problema: la socialización en el aprendizaje de nuevas pautas de comportamiento; la activación física fuera y dentro de las escuelas; y la regulación específica de alimentos. Por su parte, la opinión del secretario de Salud (José Ángel Córdova) apuntaba hacia regular la venta de comida chatarra en las escuelas como medio para solucionar la obesidad infantil y mejorar los hábitos de consumo de los niños: "Ahora, la escuela es un espacio extraordinario para poder controlar lo que se vende, no podemos prohibir la venta de 'x' o 'y' producto en el comercio en general, pero en la escuela sí lo podemos controlar" (dicho de Córdova, citado por Vega, 2010).

dulces, galletas y frituras– pero en porciones más pequeñas.[31] Los Lineamientos se redujeron, así, a una serie de recomendaciones para disminuir las porciones de botanas, pastelitos y galletas.

Lo mismo ocurrió con las iniciativas legislativas, presentadas en 2009, para modificar las leyes generales de Salud y Educación. Después de casi dos años de discusión en ambas cámaras, en noviembre de 2010, los legisladores se pusieron de acuerdo para *limitar* el consumo de "comida chatarra" en escuelas primarias públicas y privadas; incluir como un asunto de salubridad general la obesidad; establecer que los planteles educativos deben contar con bebederos de agua; además de prohibir la publicidad de "comida chatarra" en los centros educativos.[32] Aunado a estas iniciativas estuvieron los intentos de gobiernos locales por regular la venta de esos productos en escuelas. Intentos que, empero, también fueron frenados por el *lobbying* empresarial.[33]

[31] La perspectiva antichatarra del secretario de Salud (José Ángel Córdova Villalobos) se remonta a 2008 con una propuesta de política pública –conocida como la Jarrita– orientada a emitir recomendaciones sobre la ingesta de bebidas azucaradas: "De jugos, sólo medio vaso por día, estableció; y los refrescos, mejor evitarlos" (García de León y Delaunay, 2008). Así como con el papel crítico que tuvo, en 2009, frente a un código empresarial –conocido como código PABI– que promovía la autorregulación sobre publicidad infantil de alimentos y bebidas azucaradas. Ambas generaron malestar en la elite industrial y movilizaron la artillería del *lobbying* político.

[32] En las modificaciones a Ley General de Salud y a la Ley General de Educación se promueve un consumo limitado de esos productos y se exhorta a habilitar depósitos de agua equipados con filtros y bebederos públicos en escuelas de educación básica y media superior. Lo único que sí se prohibió fue la publicidad de estos productos en las escuelas de educación básica (Art. 226 de la Ley General de Salud) y la venta de refrescos en esas escuelas (en las de educación media superior se permite la venta de bebidas "light").

[33] Desde 2006, en diferentes estados de la República se han modificado las leyes y reglamentos de educación y salud para regular la ingesta de

Los vaivenes del proceso regulatorio-legislativo sobre la venta de comida chatarra en las escuelas, en los que 'se adelgazó' el contenido de los Lineamientos y las reformas a las leyes generales de educación y salud, se reflejan en las críticas de diversas organizaciones (El Poder del Consumidor, Oxfam México, Centro de Orientación Alimentaria, entre otras). Si bien, al principio del proceso, las organizaciones críticas manifestaron su optimismo y beneplácito por el ataque a la venta de "comida chatarra"; al final, lo advirtieron como un retroceso que sólo favoreció los intereses comerciales de la industria de alimentos y bebidas.

En este proceso, además del *lobbying* político, tomó fuerza una movilización corporativa que, mediante un *lobbying* social, buscaba revertir los efectos negativos de la crítica sobre la imagen corporativa. Empresas como Grupo Bimbo o Coca-Cola, que fueron 'atacadas' por movilizaciones sociales bajo el argumento de ser *responsables* de la obesidad infantil en el país, respondieron con estrategias de RSE que pueden ser leídas en dos sentidos. Por una parte, las compañías se empeñan en mejorar la calidad de sus productos, ofreciendo mayor variedad, con mejores ingredientes y con información para que los consumidores decidan cuál de ellos adquirir. Por otra parte, las empresas fomentan que sus consumidores tengan una vida sana: que coman bien y hagan ejercicio. Con esta respuesta, las empresas 'le pasan' la responsabilidad a los consumidores. Son ellos los que deben decidir qué y cómo consumir. Son ellos los que deben hacer ejercicio y tener una dieta balanceada. Las empresas sólo son

---

alimentos con bajo contenido nutricional y alto contenido calórico. De ellos, sólo en cuatro se estipuló de manera explícita la prohibición de venta de productos chatarra: Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí y Michoacán. En tanto que en 13 entidades más sólo se incluyeron recomendaciones para mejorar la alimentación infantil (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas), Muñoz, 2010.

responsables de ampliar y mejorar la variedad de productos; aunque también colaboran a fin de diseñar campañas para promover el ejercicio y mejorar los hábitos alimenticios de la población. La edición y distribución de un catálogo con *tips* nutricionales (Nutrinotas Bimbo); el patrocinio de un torneo de fútbol (Futbolito Bimbo); la estrategia para procurar el bienestar emocional y físico de trabajadores y consumidores (Movimiento Bienestar de Coca-Cola); o el programa para fomentar la activación en estudiantes mexicanos (Apúntate a Jugar de Coca-Cola), son algunos ejemplos.

Estos casos nos muestran cómo la movilización de la elite económica, a partir de la RSE, conjugando tácticas de *lobbying* político y social, responde al movimiento social que se erige en su contra asimilando y adaptando su retórica. Esta respuesta es defensiva y de contención. Opera como un mecanismo de legitimación para procurar detener el castigo social (deterioro de la imagen corporativa) y para convencer sobre las bondades de la autorregulación y, con ello, desarticular las demandas que exigen mayor vigilancia estatal sobre el mercado (mayor regulación estatal). El que la RSE adapte y asimile las retóricas (valoraciones y preocupaciones) del movimiento anticorporativo sería, a decir de Boltanski y Chiapello, un desgaste ideológico de la crítica social. No obstante, también puede ser visto como un *enriquecimiento ideológico* del marco de acción de las empresas. Esta es la postura que Sarah Soule (2009: 160) plasma en su análisis:

> Estamos notando que la confrontación le importa a las corporaciones; también notamos una creciente voluntad de los líderes corporativos para colaborar con activistas, así como una actitud positiva de los activistas al respecto. El deseo es que esto propicie mejores prácticas de responsabilidad social y que genere cambios reales y sustantivos en las corporaciones.

No hay duda de que habrá que reflexionar más al respecto antes de descalificar o vanagloriar la retórica que enmarca

la contramovilización de la RSE. Sin embargo, con los casos analizados resulta clara la interacción entre el movimiento y su contramovilización. Ahora lo que queda pendiente en este capítulo es distinguir las tácticas de la acción colectiva en ambos tipos de movilización.

MOVIMIENTO SOCIAL Y ESTRUCTURA DE MOVILIZACIÓN: TÁCTICAS Y CANALES DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Al referirnos a la estructura de movilización encontramos la distinción entre canales formales e informales, así como las tácticas que permiten remontar la diferencia de recursos de los agentes movilizados. Avanzando en las formulaciones realizadas desde la TMR,[34] a continuación identificamos los canales de participación y distinguimos las tácticas de activistas y empresarios, particularmente en los episodios de disputa referidos.

El movimiento anticorporativo y la contramovilización empresarial –vía el *lobbying* político y social– operan con los mismos mecanismos: la legitimación y el convencimiento. Ambos, partiendo de sus propios objetivos, buscan influir sobre autoridades y opinión pública –potenciales aliados u opositores– para que se sumen a su causa, justificando sus propuestas y desacreditando las del adversario. Para ello, como se presentó en el apartado anterior, enmarcan sus propuestas en retóricas (proactivas o reactivas) con las que critican, exigen, proponen o se defienden. No obstante estos

[34] John D. McCarthy (1996: 145) distingue *estructuras de movilización informales* como redes de activistas y grupos de afinidad, de aquellas que tienen un carácter *formal*: organizaciones de movimientos sociales y comités de protesta. A su vez, considerando sus estrategias organizativas (conformación y orientación), Hanspeter Kriesi (1996: 153) distingue a las organizaciones de movimientos sociales (OMS) de los partidos o grupos de interés (Kriesi, 1996).

mecanismos compartidos, hay elementos organizacionales que distinguen al movimiento anticorporativo de la movilización en su contra.

De manera esquemática podríamos decir que mientras el movimiento anticorporativo tiende a emplear *canales informales* para incidir en la toma de decisión (pública y privada), la contramovilización empresarial suele conducir sus recursos por *canales formales*; en la práctica, no obstante, existen matices de esta separación. El anticorporativismo privilegia la protesta social, aunque no por ello descarta los canales formales de la negociación o la demanda colectiva; la movilización empresarial, por su parte, opta por la negociación con la elite política a través de canales formales (como el *lobbying* político), aunque también por la vía informal de la corrupción y la protesta social.[35] La RSE refuerza las tácticas del *lobbying* político con el de tipo social a partir de canales primordialmente formales. En esos casos, la negociación con tomadores de decisiones se complementó con las estrategias de responsabilidad social corporativa.

Ahora bien, debido a que los mecanismos de influencia del *lobbying* se basan en la información y el convencimiento (Potters y Van Winden, 1992), este canal de participación se torna central en situaciones que requieren un conocimiento especializado, de ahí que el movimiento anticorporativo también busque estas ventanas de participación e influencia. Tal fue el caso de la discusión legislativa sobre bioseguridad y OGM, donde científicos y biotecnólogos de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y de otras instituciones de investigación nacionales y extranjeras cabildearon –a favor

[35] Al respecto cabe advertir que hay una línea conceptual muy fina que distingue la corrupción y el *lobbying*, sobre todo en países –como México– donde el cabildeo no es una práctica del todo formal, sino que es una actividad que se realiza, en parte, de manera informal. En estos países la corrupción y el *lobbying* suelen complementarse (Campos y Giovannoni, 2007).

y en contra de esa tecnología– tratando de incidir sobre los tomadores de decisión.[36]

Lo anterior nos remite a una táctica compartida por ambas movilizaciones: el *recurso científico*. Tanto en el episodio de los OGM como en el de la "comida chatarra" el movimiento anticorporativo y la contramovilización empresarial recurrieron a estudios científicos para respaldar su dicho. Mientras las organizaciones anticorporativas presentaban datos científicos sobre el riesgo de los transgénicos o de la "comida chatarra", la elite económica presentaba sus estudios, criticando la ciencia "mala" del adversario, para asegurar la inocuidad de los productos. Publicaciones en revistas científicas sobre los riesgos de los OGM son respondidas por estudios donde se asevera lo contrario. Asimismo, mientras organizaciones anticorporativas refieren estudios sobre el perjuicio de la publicidad engañosa para el público infantil o sobre la adicción que genera la "comida chatarra", la industria despliega estudios sobre la importancia de una dieta balanceada asegurando que no hay alimentos malos, sino malas prácticas alimenticias.

Además de las tácticas de *lobbying* político presentadas en el apartado anterior y del recurso científico, compartidas en mayor o menor medida por ambas partes, la movilización empresarial recurre a tácticas que operan en el terreno de la publicidad y el *lobbying* social. Obtención de premios, distintivos o certificaciones con las que la firma exhibe sus buenas prácticas de RSE, son instrumentos para mejorar la imagen corporativa ante el embate crítico. Estas tácticas

[36] Figura significativa de apoyo fue la de Francisco Bolívar Zapata (integrante de la AMC), quien se pronunció a favor de los OGM y asesoró a los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología. En el lado opuesto estuvo Ignacio Chapela (científico mexicano que trabaja en la Universidad de Berkeley), quien en 2001 evidenció la "contaminación" de semillas transgénicas en el 10% de maíz sembrado en Oaxaca y que apoyó la movilización antitransgénicos en México.

responden a aquellas que son recurso del movimiento anticorporativo. Boicots, *buycotts*, campañas contrapublicitarias y protestas públicas son las tácticas de organizaciones anticorporativas y aunque también operan en el terreno de la publicidad, lo hacen en sentido inverso para incidir de manera negativa en la reputación de la firma criticada. Pero, además de estas tácticas, las organizaciones críticas (recurriendo a canales formales) también optan por acciones legales colectivas (*Class Action*), un recurso jurídico de reciente aprobación en México pero que tiene larga historia en otros países (como Estados Unidos, Brasil o Chile).

Es así como las tácticas del movimiento y la contramovilización, enmarcadas en sus propias retóricas, se contraponen para incidir en la toma de decisión *pública y privada.* La Guía Roja y Verde de Greenpeace[37] o la campaña contrapublicitaria de El Poder del Consumidor sobre el "Engaño integral de Bimbo",[38] encuentran su contraparte en la publicación de informes de responsabilidad social, o bien en la obtención de distintivos como el de Empresa Socialmente Responsable, conferido por Cemefi. Con estos instrumentos, ambas partes buscan incidir en la decisión de consumidores, inversionistas y ciudadanos (decisión privada), pero también en la toma de decisión de autoridades gubernamentales (decisión pública). Unas tácticas pueden tener efectos inmediatos al incidir di-

[37] Donde se exhiben a las compañías que, en un estudio realizado por la organización, no comprobaron estar libres de transgénicos frente a las que sí lo hicieron. Este documento concentra la táctica de *boycott* (inhibir el consumo de ciertos productos) y de *buycott* (alentar el consumo de otros).

[38] Mediante una presentación gráfica ilustrada con un Osito Bimbo 'diabólico' –garras, colmillos y cejas entornas denotan su gesto–, la organización documenta el *engaño* de un pan que se vende como integral sin serlo; y denuncia que los productos que la empresa comercializa en México y América Latina son de menor calidad que los vendidos en Estados Unidos (disponible en http://www.slideshare.net/guesta66488f/bimbo-engano-integral).

rectamente en la toma de decisión pública, pero otras tienen efectos de mediano y largo plazo.

En los casos analizados, el *lobbying* de la movilización empresarial resultó más efectivo en la decisión pública. Con la promulgación de la LBOGM; la emisión de los Lineamientos, y con las modificaciones a las Leyes generales de Salud y Educación, se favorecieron los intereses comerciales de la industria y se dejaron de lado las exigencias de las organizaciones anticorporativas (prohibir la comercialización de semillas transgénicas y de "comida chatarra"). No obstante, las tácticas del movimiento anticorporativo pueden tener efectos de más largo aliento en la toma de decisión privada (de los propios consumidores).

Muestra de ello es la preocupación de la industria refresquera sobre la *mala imagen* que se crea de esos productos al calificárseles como chatarra: "La consecuencia es una percepción negativa del supuesto efecto pernicioso de nuestros productos, que pueden ser tan buenos como otros" (Rafael Fernández, vicepresidente de Asuntos Públicos de Coca-Cola, en García de León, 2009). Para el otro caso estudiado, el efecto del movimiento antitransgénico está en la demanda creciente de productos orgánicos.[39]

Ahí es donde el *lobbying* social de la RSE cobra mayor sentido: para mejorar la imagen de la empresa y, con ello, apuntalar la decisión pública tomada. Con él, Monsanto busca presentarse como una empresa con propuestas "sustentables" y productos "enriquecidos" genéticamente; mientras que Bimbo y Coca-Cola como compañías preocupadas por la salud, alimentación y felicidad de niños y adultos.

[39] Impulsada por una mayor demanda de los consumidores, la producción orgánica en México, creció hasta 30% anual al cierre de 2011. El país es el tercero con más productores orgánicos en el mundo y su producción representa alrededor del 10% del Producto Interno Bruto agrícola (bioagricultura.worldpress.com).

CONCLUSIÓN

En este capítulo se analizó la interacción del movimiento anticorporativo con la movilización de la elite económica en dos episodios de disputa que, en México, enfrentaron a empresarios y activistas. Para ello se ha definido la RSE como un contramovimiento basado en un *lobbying* de tipo social que busca frenar o revertir el impacto del movimiento anticorporativo (difusión de una imagen negativa de la empresa y demanda para reforzar la regulación estatal sobre el mercado). Hemos visto que la RSE puede ser un recurso orientado a enfrentar las críticas contra las empresas (desacreditando el dicho del adversario) a fin de mejorar la imagen corporativa. Este recurso tiene una doble intención. Por una parte, se quiere incidir en la toma de decisión de los demás agentes del mercado (consumidores, proveedores, productores) a fin de potenciar el crecimiento de la compañía. Por la otra, se busca reforzar la toma de decisión pública que favorece a los intereses corporativos (inducida por el *lobbying* político); o bien, se intentan frenar posibles regulaciones que afecten esos intereses.

Retomando los planteamientos de la movilización de recursos hemos visto la estructura de oportunidades políticas que configuran la contraposición de ambas movilizaciones; la forma en que la RSE adapta y asimila la retórica del movimiento anticorporativo; así como las tácticas de movilización utilizadas para ganar aliados y desacreditar al contrario. La intención ha sido extender el análisis del movimiento social anticorporativo hacia la movilización de la elite económica, a fin de captar la complejidad del fenómeno. Se ha buscado explicar no sólo el desarrollo del movimiento social en sí mismo, sino en su interacción con la reacción generada en su contra. Hemos notado cómo la elite económica, combinando tácticas de *lobbying* político y social, moviliza recursos económicos, políticos, relacionales y de información para

contener y hasta revertir las demandas de la movilización en su contra.

Considerando los diferenciales de poder de sociedades como la mexicana, las elites tienen mayor posibilidad de incidir en la toma de decisión pública. No obstante, con la propuesta analítica desarrollada se busca contemplar los diferenciales de poder, no como una estructura de dominación que se reproduce en el tiempo, sino como una *fórmula de necesidad* donde las relaciones de poder se recomponen continuamente; y con la que el control de unos reside en la dependencia de los otros, pero también estriba en la resistencia de aquellos. La interacción movimiento-contramovimiento que hemos analizado nos permite apreciar la relación control-dependencia-resistencia y, con ello, la posibilidad de cambio social.

Los procesos de regulación examinados nos muestran la capacidad de influencia que empresas como Bimbo, Coca-Cola o Monsanto pueden tener sobre la toma de decisión pública y sobre todos aquellos que, de una manera u otra, intentan mermar su expansión económica. Pero, pese a que las multinacionales ejercieron un amplio *control* en los procesos de legislación-regulación analizados –orientando a su favor la decisión pública y buscando callar las voces críticas–, hemos visto que esas voces *resisten*, logrando difundir una imagen negativa que amenaza el crecimiento de la empresa. Ésta *depende* de su reputación, por lo que adopta prácticas de RSE que responden a las tácticas de la crítica social como el boicot o las campañas contrapublicitarias. Con ello, la confrontación se mantiene dando lugar a un proceso de *cambio social* que, en mayor o menor medida, incide en la acción de empresarios, consumidores y gobernantes. Compras éticas, empresas que cambian sus malas prácticas para mejorar la imagen corporativa y gobiernos vigilantes que responden a sus ciudadanos marcan las nuevas tendencias de relación entre Estado, mercado y sociedad. Tendencias que a veces

parecen alejarse de la realidad mexicana, pero que, no obstante, se mantienen en el horizonte de posibilidades.

BIBLIOGRAFÍA

AbroBio (2010), "Comité Científico de Biotecnología del gobierno francés señala que el estudio elaborado por la organización CRIIGEN no aporta ninguna evidencia que ponga en duda la seguridad de los alimentos transgénicos", México, *Comunicado de prensa,* 28 de enero.

Andreoni, James (1989), "Giving with Impure Altruism: Applications to Charity and Ricardian Equivalence", *The Journal of Political Economy*, vol. XCVII, núm. 6, pp. 1447-1458.

Andrews, Kenneth (2002), "Movement-countermovement Dynamics and the Emergence of New Institutions: The Case of 'White flags' Schools in Mississippi", *Social Forces*, vol. 80, núm. 3, marzo, 2002, pp. 911-936.

Astié-Burgos, Walter (2011), *Lobby y democracia: lo positivo y lo negativo del cabildeo. Los casos de Estados Unidos, Europa, México y del escenario internacional,* México, Siglo XXI.

Baumgartner, Frank R. y Beth L. Leech (1996), "The Multiple Ambiguities of 'Counteractive Lobbying'", *American Journal of Political Science*, vol. XL, núm. 2, mayo, 1996, pp. 521-542.

Becker, Gary (1981), "Altruism in the family and selfishness in the market place", *Economica*, vol. XLVIII, núm. 189, febrero, pp. 1-15.

Bishop, Matthew y Michael Green (2009) [2008], *Filantrocapitalismo. Cómo los ricos pueden cambiar el mundo,* Barcelona, Tendencias.

Boltanski, Luc y Ève Chiapello (2002) [1999], *El nuevo espíritu del capitalismo*, Madrid, Akal.

Burstein, Paul (1991), "Reverse Discrimination Causes in the Federal Court: Legal Movilization by a Countermovement", *The Sociological Quarterly*, vol. 32, núm. 4, pp. 511-528.

Cajiga, Felipe (2006), *Fundamentos Empresa Socialmente Responsable*, México, Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropía), AliaRSE por México (Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México).

Campos, Nauro y Francesco Giovannoni (2007), "Lobbying, Corruption and Political Influence", *Public Choice,* vol. CXXXI, núm. 1-2, pp. 1-21.

Carroll, Archie B. (2008), "A history of corporate social responsibility: concepts and practices", en A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon y D. Siegel (eds.), *The Oxford handbook of corporate social responsibility,* Oxford, Oxford University Press, pp. 19-46.

Cohen, Jean (1988), "Estrategia o identidad: paradigmas teóricos y nuevos movimientos sociales contemporáneos", en Cohen *et al.*, *Cuaderno de Ciencias Sociales*, 17, *Teoría de los movimientos sociales*, Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pp. 3-34.

Cress, Daniel y David A. Snow (2000), "The outcomes of Homeless Movilization: The Influence of Organization, Disruption, Political Movilization and Framing", *American Journal of Sociology,* vol. 105, núm. 4, pp. 1063-1104.

Desari, Maghnad y Yahia Said (2001), "The New Anti-Capitalism Movement: Money and Global Civil Society", en Helmut Anheier, Marlies Glasius y Mary Kaldor (eds.), *Global Civil Society 2001*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 51-78.

Dixon, Marc (2008), "Movements, Countermovements and Policy Adoption. The Case of Right-to-Work Activism", *Social Forces*, vol. LXXXVII, núm. 1, pp. 473-500.

Drucker, Peter (1999), *Los desafíos de la administración en el siglo XXI*, Buenos Aires, Sudamericana.

_____ (1993) [1992], *Dirección de instituciones sin fines de lucro: teoría y práctica*, Buenos Aires, El Ateneo, trad. Zoraida J. Valcárcel.

Elias, Norbert (1982) [1970], *Sociología fundamental*, Barcelona, Gedisa.

Emerson, Richard (1962), "Power-Dependence Relations", *American Sociological Review*, vol. XXVII, núm. 1, febrero, pp. 31-41.

Evans, Peter (2000), "Fighting Marginalization with Transnational Networks: Counter-Hegemonic Globalization", *Contemporary Sociology-A Journal of Reviews,* vol. XXIX, núm. 1, pp. 230-241.

Foucault, Michel (1984) [1975], *Vigilar y castigar*, México, Siglo XXI.

Frausto, Salvador (2007), "Lorenzo Servitje. Una apuesta por el pan", en Jorge Zepeda, *Los amos de México. Los juegos de poder a los que sólo unos pocos son invitados*, México, Planeta, pp. 241-272.

Frederick, W. (2008), "Corporate social responsibility", en A. Crane *et al.* (eds.), *The Oxford handbook of corporate social responsibility*, Oxford, Oxford University Press, pp. 522-531.

García de León, Verónica (2009), "Recreo sin papitas. Varios estados emprenden acciones para prevenir la obesidad infantil, ante el fracaso de las iniciativas federales", México, *CNN-Expansión*, 27 de abril.

_____ y Marina Delaunay (2008), "México comienza el ataque a las calorías", México, *CNN-Expansión*, 11 de agosto.

Gray, Virginia *et al.* (2004), "Demographic Opportunities, Collective Action, Competitive Exclusion, and the Crowded Room: Lobbying Forms among Institutions", *State Politics & Policy Quarterly*, vol. IV, núm. 1, primavera, pp. 18-54.

González Bedoya, Jesús (1989), "Prólogo a la edición española", en Chaïm Perelman y L. Olberchts-Tyteca, *Tratado*

de la argumentación. La Nueva Retórica, Madrid, Gredos, pp. 7-25, trad. Julia Sevilla Muñoz.

Guédez, Víctor (2006), *Ética y práctica de la responsabilidad social empresarial. El aporte de la empresa al capital social*, Venezuela, Planeta.

Hupperts, Pierre (2006), *Responsabilidad social corporativa. Mercadotecnia y alianzas ganar-ganar,* México, Accse FM.

Jasper, James y Jane Poulsen (1993), "Fighting Back: Vulnerabilities, Blunders, and Countermobilization by the Targets in Three Animal Right Campaigns", *Sociological Forum*, vol. VIII, núm. 4, pp. 639-657.

Kooiman, J. (2003), *Governing as Governance*, Londres, Sage.

Kriesi, Hanspeter (1996), "The organizational structure of new social movements in a political context", en Doug McAdam, John D. MacCarthy y Mayer N. Zald (eds.), *Comparative Perspectives on Social Movements*, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 152-184.

Lo, Clarence Y. H. (1982), "Countermovements and Conservative Movements in the Contemporary US", *Annual Review of Sociology*, vol. VIII, pp. 107-134.

Lowery, David, Virginia Gray, Jennifer Wolak, Erik Godwin, Whitt Kilburn (2005), "Reconsidering the Counter-Mobilization Hypothesis: Health Policy Lobbying in the American States", *Political Behavior*, vol. XXVII, núm. 2, pp. 99-132.

McAdam, Doug (1996), "Conceptual origins, current problems, future directions", en McAdam, Doug, John D. MacCarthy y Mayer N. Zald (eds.), *Comparative Perspectives on Social Movements*, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 23-40.

_____ (1983), "Tactical Innovation on the Pace of Insurgency", *American Sociological Review*, vol. 48, núm. 6, pp. 735-753.

McAdam, Dough *et al.* (1999), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, España, Istmo.

_____ (2001), *Dynamics of Contention*, Cambridge, Cambridge University Press.

McCarthy, John D. (1996), "Constraints and opportunities in adopting, adapting, and inventing", en Doug McAdam, John D. MacCarthy y Mayer N. Zald (eds.), *Comparative Perspectives on Social Movements*, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 141-151.

Meyer, David S. y Suzanne Staggenborg (1996), "Movements, Countermovements, and Structure of Political Opportunity", *American Journal of Sociology*, vol. CI, núm. 6, pp. 1628-1660.

Montes de Oca, Laura (2013), "Responsabilidad Social Empresarial: ¿hacia una reorganización ética del mercado?", en *La respuesta organizacional en busca de una sociedad más incluyente. Nuevos Avatares*, México, Fontamara, Universidad de Guanajuato (mimeo).

_____ (2011), *Analítica del poder de la responsabilidad social empresarial en México*, Berlín, Académica Española.

Monsanto Latinoamérica Norte (2008), "Primer Reporte de Responsabilidad Social", URL: http://www.monsanto.com.mx/rrse_monsanto_2008.pdf.

Mottl, Tahi (1980), "The Analysis of Countermovements", *Social Problems*, vol. 27, núm. 5 (Sociology of Political Knowledge Issue: Theoretical Inquiries, Critiques and Explanations), pp. 620-635.

Muñoz, Raúl (2010), "Sacan 'chatarra' de las escuelas", México, *Reforma*, 18 de febrero.

Oberschall, Anthony (1996), "Opportunities and framing in the Eastern European revolts of 1989", en Doug McAdam, John D. MacCarthy y Mayer N. Zald (eds.), *Comparative Perspectives on Social Movements*, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 93-121.

Pacto Mundial (2008), *Pacto Mundial en México. Comenzando por los Principios: Actividades 2007*, México, Naciones Unidas, Red Pacto Mundial México.

Peckham, Michael (1998), "New Dimensions of Social Movement, Countermovement Interaction: The Case of Scientology and its Internet Critics", *The Canadian Journal of Sociology*, vol. XXIII, núm. 4, pp. 317-347.

Pierre, Jon (ed.) (2000), *Debating governance*, Nueva York, Oxford University.

Pierre, Jon y B. Guy Peters (2000), *Governance, Politics and the State*, Nueva York, St. Martin's Press.

Porter, Michael E. y Mark R. Kramer (2007), "La ventaja competitiva de la filantropía corporativa", *Harvard Business Review*, vol. LXXX, núm. XII, pp. 5-17.

Post, Stephen *et al.* (2003), *Research on Altruism and Love. An Annotated Bibliography of Sociology, Evolutionary Biology, and Theology*, Pennsylvania, Templeton Foundation Press.

Potters, Jan y Frans van Winden (1992), "Lobbying and Asymmetric Information", *Public Choice,* vol. LXXIV, núm. 3, pp. 269-192.

Ribeiro, Silvia (2009), "La contaminación transgénica como negocio", México, *La Jornada*, 14 de marzo.

Robin, Marie-Monique (2008), *El mundo según Monsanto. De la dioxina a los OGM. Una multinacional que les desea lo mejor*, Barcelona, Península.

Salamanca, Fabrice (2009), "¿En qué consiste la siembra experimental de maíz transgénico?", México, *El Sol de México*, 30 de marzo.

Santos, Boaventura de Sousa (2007), "Más allá de la gobernanza neoliberal: el Foro Social Mundial como legalidad y política cosmopolitas subalternas", en Boaventura de Sousa Santos y César Rodríguez Garavito (eds.) (2007), *El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita*, Barcelona, Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa.

Sebastián, Luis de (1996), *La solidaridad. 'Guardián de mi hermano'*, Barcelona, Ariel.

Soule, Sarah A. (2009), *Contention and Corporate Social Responsibility*, Cambridge, Cambridge University Press.

Tarrés, María Luisa (1992), "Perspectivas analíticas en la sociología de la acción colectiva", *Estudios Sociológicos*, vol. X, núm. 30, pp. 735-757.

Tarrow, Sidney (2006), *The New Transnational Activism*, Nueva York, Cambridge University Press.

_____ (1997) [1994], *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza.

Tilly, Charles (1978), *From Mobilization to Revolution*, Nueva York, Random House.

_____ y Lesley Wood (2010) [2009], *Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook*, Barcelona, Crítica.

Valle, Sonia del y Margarita Vega (2010), "Acuerdan expulsar alimentos chatarra", México, *Reforma*, 27 de mayo.

Vega, Margarita (2010a), "Pide Salud a SEP más ejercicio físico", México, *Reforma*, 25 de marzo.

_____ (2010b), "Alertan por gasto en obesidad", México, *Reforma*, 25 de marzo.

Vogus, Timothy F. y Gerald F. Davis (2005), "Elite Mobilizations for Antitakeover Legislation, 1982-1990", en Gerald F. Davis, Doug McAdam, W. Richard Scott y Mayer N. Zald (eds.), *Social Movements and Organizational Theory*, Nueva York, Cambridge University Press.

Wallerstein, Immanuel (2005), *La crisis estructural del capitalismo*, México, Centro de Estudios, Información y Documentación "Immanuel Wallerstein", Contrahistorias, Clío.

Zald, Mayer N. (1996), "Culture, ideology, and strategic framing", en Doug McAdam, John D. MacCarthy y Mayer N. Zald (eds.), *Comparative Perspectives on Social Movements*, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 261-274.

Cuarta parte

ENFRENTANDO LA SITUACIÓN DE RIESGO: CRÍTICAS LOCALES A LA (DES)REGULACIÓN CAPITALISTA

X. RETOS Y FORTALEZAS DEL ANÁLISIS DE REDES SOCIALES APLICADO AL ESTUDIO DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL POR EL AGUA EN LA CUENCA DE MÉXICO

LEONARDO GARAVITO GONZÁLEZ*

El objetivo central de este texto es ilustrar la pertinencia del Análisis de Redes Sociales (ARS) en el estudio contemporáneo de los movimientos y movilizaciones sociales como una fuente de recursos teóricos y metodológicos que facilitan abordar la creciente complejidad de estos procesos sociales. Dicha complejidad se refiere a que actualmente, algunas de las características y el funcionamiento de estos procesos sociales desafían gran parte de las ideas clásicas utilizadas para su estudio y definición. En efecto, el ARS permite enfrentar al menos tres tipos de retos analíticos relacionados con las transformaciones más o menos contemporáneas observables en diversas movilizaciones sociales.

En primer lugar, en cuanto a su alcance, distintos movimientos y movilizaciones sociales han trascendido las fronteras territoriales de lo local y lo nacional. Por medio de las redes sociales, entendidas como estructuras sociales conformadas por actores conectados por alguna relación o interés común, múltiples luchas y movilizaciones sociales se

* Profesor-investigador de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México.

vinculan entre sí a escala planetaria. Ante esto, las problemáticas locales adquieren una visibilidad y un valor simbólico internacional, facilitando el establecimiento de redes de intercambio de recursos materiales e inmateriales entre sus participantes. Por lo tanto, a pesar de que una movilización social se enfoque en una demanda o lucha muy particular, es necesario asumir que las fuerzas y los intereses sociales con los cuales interactúa pueden trascender ampliamente las fronteras locales y nacionales. En virtud de la globalización, cualquier movilización, por más local que sea, posee potencial o efectivamente aliados y adversarios en todo el mundo, capaces de influenciar sus procesos de desarrollo y sus acciones.

En segundo lugar, también es apropiado revisar las ideas clásicas acerca de la duración, las estrategias y los objetivos de los movimientos sociales. Por una parte, los movimientos sociales han sido aceptados ampliamente como procesos sociales coyunturales o cíclicos, con un origen, un desarrollo y una decadencia más o menos clara y evidente. No obstante, en las últimas décadas diversos temas como la paz, el medio ambiente y los derechos humanos han generado procesos de movilización social con vocación de continuidad permanente que cuestionan esta premisa.

Por otra parte, los movimientos sociales fueron caracterizados como opositores férreos del orden establecido, cuyas principales acciones se caracterizaban por enfrentar, retar y desafiar la autoridad gubernamental. En este sentido, la colaboración o la cooperación con las autoridades indicaban no sólo la debilidad sino la decadencia de los movimientos sociales; esto, en términos de ser cooptados e institucionalizados por el sistema político. Sin embargo, de manera reciente, se evidencia el desarrollo de esquemas cooperativos con las instituciones gubernamentales que no implican necesariamente un debilitamiento de su capacidad crítica y controversial. Por el contrario, las relaciones con las instituciones

públicas y con algunos actores privados se han convertido en parte de su repertorio de vínculos estratégicos.

De forma adicional, los movimientos sociales tienden a ampliar sus objetivos desde las luchas políticas específicas hacia la búsqueda de logros culturales de mayor alcance; es decir que, mientras demandan ciertos cambios y acciones a las autoridades públicas o a los actores privados también buscan difundir nuevas ideas y formas de pensar entre la población en general. Así las movilizaciones asumen un nuevo rol social en el cual, más que grandes logros políticos, buscan influenciar la conciencia de la población y lograr un respaldo social para sus ideas y propuestas ante el sistema político. De tal forma, muchos movimientos sociales asumen una función de estimular la reflexividad social y la conciencia crítica de la población más que la búsqueda de logros o transformaciones políticas de manera directa.

Las anteriores ideas pretenden ilustrar cómo la indagación académica sobre los movimientos sociales es un campo dinámico que exige una constante revisión teórica y metodológica con el fin de seguir lo más cerca posible el desarrollo y la transformación de este tipo de procesos sociales. De manera complementaria y con la finalidad de dar un sustento empírico adicional a los anteriores planteamientos, la reflexión sobre el ARS aplicado al análisis de los movimientos sociales se complementa y se ejemplifica por medio de las lecciones aprendidas en el caso de la movilización social por el agua en la Cuenca de México (CM) (2005-2009) (Garavito, 2012).

Así, el contenido de este capítulo se divide en dos secciones: la primera, aborda los aportes y los límites del ARS aplicado al análisis de la acción social y los movimientos sociales de acuerdo con el caso de la CM. En esta parte se desarrolla, primero, el significado y el aporte del concepto de *redes sociales* en relación con las principales corrientes del estudio de los movimientos sociales; segundo, las carac-

terísticas principales del caso de la movilización por el agua en la CM; y tercero, sus aplicaciones y resultados centrales de acuerdo con el caso de estudio en consideración. Y en la segunda parte, se refieren las teorías y los conceptos complementarios al ARS que sirvieron para conseguir un abordaje más amplio y comprensivo del caso de la CM. En este sentido, se presenta tanto una serie de conceptos utilizados para el análisis del contexto de la movilización y el desarrollo de su capacidad reflexiva, como otros recursos adicionales claves para enriquecer los ARS realizados.

LOS ACTORES SOCIALES INTERPRETADOS A TRAVÉS DE SUS VÍNCULOS

El ARS y el análisis de la acción colectiva y de los movimientos sociales

El ARS se caracteriza principalmente por un abordaje estructural de la sociedad, que permite interpretar los sistemas y los procesos sociales desde una perspectiva relacional. Según esta, los actores sociales forman parte de diversas estructuras definidas en función de distintos tipos de relaciones: colaboración, reconocimiento, oposición, competencia, etc. El análisis de dichas estructuras permite identificar, por una parte, los flujos de recursos materiales y simbólicos en una red específica y, por otra, caracterizar los roles y el impacto de los diversos actores que participan en ella.

El concepto de redes sociales ha sido utilizado de múltiples formas en la investigación social. Sus usos abarcan desde aplicaciones metafóricas, donde la idea de las redes sociales funciona como una premisa utilizada para enmarcar la explicación de un proceso o un hecho social; hasta aplicaciones metodológicas, donde unas redes sociales específicas, sus patrones relacionales y su estructura, son los objetos directos de análisis.

El estudio de los movimientos sociales ha mantenido una estrecha relación con la idea de las redes sociales a lo largo de su desarrollo. Su corriente principal, conocida como el análisis de la movilización de recursos y representada por autores como Tarrow (2004), Tilly (2004, 1978) y Oberschall (1978) entre otros, ha utilizado la idea de las redes sociales como una metáfora clave para la descripción de sus variados casos de estudio. De manera más reciente, una línea de investigación referida como el análisis de los nuevos movimientos sociales cuyo representante principal es Melucci (1999, 1996, 1991), ha introducido nuevos métodos para medir con mayor exactitud la relevancia y el impacto de las redes sociales sobre el origen y el desarrollo de los movimientos sociales.

En principio, el enfoque de la movilización de recursos se interesa principalmente por el análisis de procesos políticos, interpretados como los resultados de los vínculos de intercambio y dependencia entre diversos grupos de interés, en el marco de los Estados nacionales. Es decir, se apoyan en la metáfora de las redes sociales para estudiar la distribución de los recursos entre los actores sociales, y las maneras en que las redes sociales y las coaliciones entran en conflicto por el acceso al poder político nacional o local.

Desde esta óptica, los movimientos sociales son entendidos como grupos de actores sociales que persiguen algún tipo de transformación del orden social y político nacional; caracterizados como rivales del Estado dada su capacidad para hacer visibles diversas debilidades e irracionalidades de las elites y de las autoridades (Tarrow, 2004). Así, imbuidos en un choque permanente frente a diversas normas políticas o culturales del orden social dominante, los movimientos sociales evidencian un repertorio de acciones conflictivas como marchas, protestas, manifestaciones, boicots, levantamientos, acciones legales, entre otras (Tilly, 1978). Algunos ejemplos de este tipo de movimientos

fueron las diversas luchas sociales de los siglos XIX y XX por el reconocimiento de los derechos laborales y por los derechos civiles.

A partir de la década de 1980, con el desarrollo de la globalización y la ampliación generalizada de la democracia a una escala planetaria, los movimientos sociales sufrieron algunas transformaciones. Los movimientos sociales adquirieron en efecto, el potencial para convertirse en fenómenos sociales transnacionales con posibilidad de integrar a diversos sectores y actores sociales con intereses comunes a escala internacional. El desarrollo de las acciones colectivas y el valor simbólico de los movimientos sociales en este sentido, desafiaron sus restricciones territoriales nacionales gracias a los avances tecnológicos en el transporte y las comunicaciones globales.

A medida que las fronteras políticas y geográficas de los Estados nacionales han perdido gran parte de su poder de contención sobre los movimientos sociales, éstos han ganado una vocación de permanencia en el tiempo y un alcance territorial ampliado. Según Melucci (1999: 97) el sistema social adquiere una dimensión planetaria y los acontecimientos dejan de ser importantes en sí mismos y son reconsiderados por su impacto simbólico en el sistema mundial. Las movilizaciones sociales encarnan de tal forma, el potencial de representar diversas identidades e intereses a escala mundial, a pesar de surgir en función de problemáticas locales. Múltiples temáticas como la oposición a la proliferación de armas nucleares, el apoyo a la ampliación y la profundización de las democracias, la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, se han convertido en causas capaces de resonar globalmente y de integrar a distintos actores sociales a nivel planetario. Por lo tanto, más allá del eventual impacto local, político o cultural, que puedan tener los movimientos sociales en la actualidad, éstos han adquirido un valor simbólico de alcance global

en función de su mera existencia como representantes del descontento y de la insatisfacción social.

En virtud de los anteriores cambios, la idea de una relación esencialmente conflictiva entre los movimientos sociales y el Estado ha sido reconsiderada, adquiriendo una dimensión más estratégica que incluye mayores grados de integración y de colaboración entre ambos. Según Tarrow (2004) los movimientos sociales se caracterizan ahora por reaccionar de maneras cada vez más elaboradas a la estructura de oportunidades que les brindan los sistemas políticos nacionales. Esto ha implicado que la cooperación eventual entre los movimientos y las autoridades gubernamentales se convierta en un tipo de acción colectiva con un nivel creciente de complejidad, aceptación y permanencia. Por ejemplo, según Pellow (1999), los diversos brazos del movimiento ambiental internacional han desarrollado una forma de acción colectiva denominada la toma de decisiones basada en el consenso (TDBC). Este enfoque puede explicarse como una respuesta social ante el reto de enfrentar un campo de acción donde la dominación corporativa y estatal ha sido la constante histórica. No obstante, a través del apoyo a la TDBC, los movimientos ambientales han encontrado una manera más efectiva de crear un balance entre el conflicto y la colaboración con sus opositores. Este balance les ha permitido ampliar su participación política y su impacto ante los crecientes desequilibrios ecológicos y sociales mundiales.

Ante estas transformaciones, el estudio de los movimientos sociales ha reconocido la necesidad de profundizar y precisar el análisis de las estructuras relacionales que subyacen al desarrollo de la acción social. En efecto, la perspectiva de los nuevos movimientos sociales profundiza sobre los procesos e impactos culturales desencadenados por la acción colectiva y los movimientos sociales. Los nuevos movimientos sociales se refieren a movilizaciones que incluyen temas emergentes como el género y el medio ambiente, los

cuales van más allá de los derechos sociales básicos. Según Melluci (1999) los nuevos movimientos sociales difieren de los movimientos sociales tradicionales en que, a pesar de ejercer cierta influencia sobre las instituciones políticas, no están orientados exclusivamente hacia el cambio político. Al cuestionar la definición de los códigos institucionales, no sólo exigen respuestas por parte de las autoridades sino que también ofrecen a la sociedad opciones alternativas para interpretar la realidad. De acuerdo con esto, resulta necesario priorizar el análisis de los procesos organizacionales al interior de las movilizaciones sociales, de la construcción de significados, de alianzas e identidades compartidas que cimentan las acciones colectivas. Así, para el estudio detallado de las estructuras relacionales subyacentes a las movilizaciones sociales, el empleo de los métodos especializados del ARS adquiere un valor creciente.

Desde finales de la década de 1990 se ha desarrollado una corriente de investigación que se apoya en diversos tipos de análisis matemáticos y estadísticos que abordan las características estructurales de las redes como su tamaño, densidad y distribución entre otras, las cuales permiten comparar y evaluar sus efectos sobre el desarrollo de las movilizaciones sociales específicas. Al respecto, los aportes de Diani (2003, 2004) y su análisis de la acción colectiva, apoyado principalmente en conceptos y herramientas del ARS es relevante. Según Diani, el ARS brinda un enfoque teórico particular al análisis de los movimientos sociales, en contraste con la aproximación empírica dominante. Es decir, se pasa de una óptica donde las redes son consideradas tanto una precondición como un resultado de los movimientos sociales, y su estudio se caracteriza por identificar los mecanismos sociales presentes en los repertorios de la acción colectiva, a otro énfasis donde el objetivo es analizar los procesos de creación de las redes sociales y, a partir de esto, distinguir las diferentes formas de articulación entre los actores sociales.

Esta contribución ha permitido transitar desde una definición meramente descriptiva de los movimientos sociales hacia una más estructural, que plantea una serie de particularidades organizacionales que diferencian a los movimientos de otros fenómenos sociales más o menos similares como las campañas o las coaliciones. Así, la particularidad estructural de los movimientos sociales consiste en estar conformados por actores independientes, imbuidos en un contexto local (donde 'local' delimita un espacio social o territorial), quienes tienen identidades, valores, orientaciones y objetivos específicos, pero que al mismo tiempo se vinculan a través de diversas formas de cooperación concreta y/o de reconocimiento mutuo en una relación que se extiende más allá de cualquier protesta o campaña específica (Diani, 2003: 301).

En efecto, el establecimiento de vínculos de cooperación concreta y de reconocimiento mutuo entre diversos actores sociales, más allá del corto plazo son, por lo tanto, los elementos básicos que identifican el desarrollo de un movimiento social. Los vínculos de cooperación y de reconocimiento en su conjunto configuran las *redes de cercanía* que funcionan como mecanismos de coordinación y que sostienen los procesos colectivos subyacentes a los movimientos sociales, como son: el desarrollo de las identidades y de los significados compartidos, así como la coordinación y la realización de las acciones colectivas. Por lo tanto, el análisis de redes sociales ofrece elementos teóricos y metodológicos apropiados para evaluar la estructura relacional, con sus intercambios materiales y simbólicos, que interconectan a los actores sociales con potencial para configurar un movimiento social (Diani, 2003).

El caso de la movilización por el agua en la CM

El objetivo central de este caso fue estudiar el desarrollo reciente (2005-2009) y el aporte reflexivo de una movilización

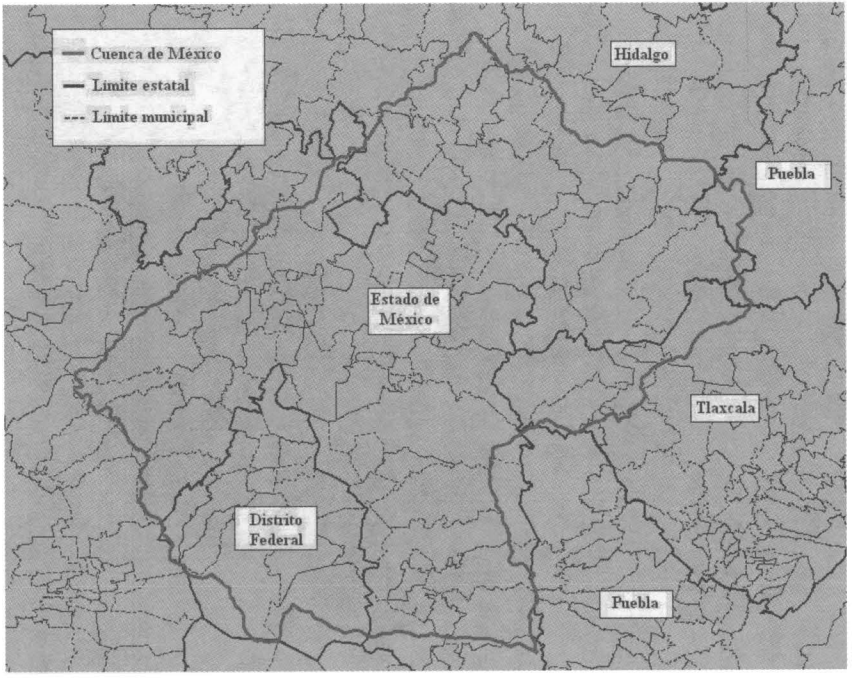
social que cuestiona el orden social establecido del agua en la CM; es decir, los significados y las prácticas dominantes entre las autoridades gubernamentales y otros actores sociales interesados por el agua en la región. Esta movilización fue representada por un conjunto de organizaciones sociales con diversos intereses compartidos y particulares sobre el agua en la CM. Se partió de la hipótesis de que estas organizaciones configuran un actor social colectivo, el cual compite con otros actores sociales y racionalidades por el control de las definiciones y los usos que determinan el actual orden social local y nacional del agua.

La CM es el principal referente territorial de este caso porque sus características ecológicas determinan, en primera instancia, la disponibilidad natural de agua en la región. La CM es un territorio hidrológico de tipo cerrado o endorreico, porque retiene las aguas de lluvia y las superficiales favoreciendo su acumulación en lagos y acuíferos subterráneos. Posee una extensión de 9 600 km^2 que abarcan casi la totalidad del Distrito Federal y en menor proporción parte de los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla (mapa 1).

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es la siguiente unidad territorial en consideración, integrada por el Distrito Federal y 60 municipios conurbados, que en conjunto forman la Ciudad de México. Albergando más de 20 millones de habitantes, la Ciudad de México hace parte del grupo de ciudades más grandes del mundo junto a otras como Tokio, Seúl, Delhi y Nueva York. La intersección ente la CM y la ZMVM da forma a una de las principales problemáticas del agua en la región: el riesgo de una escasez creciente para abastecer la ciudad.

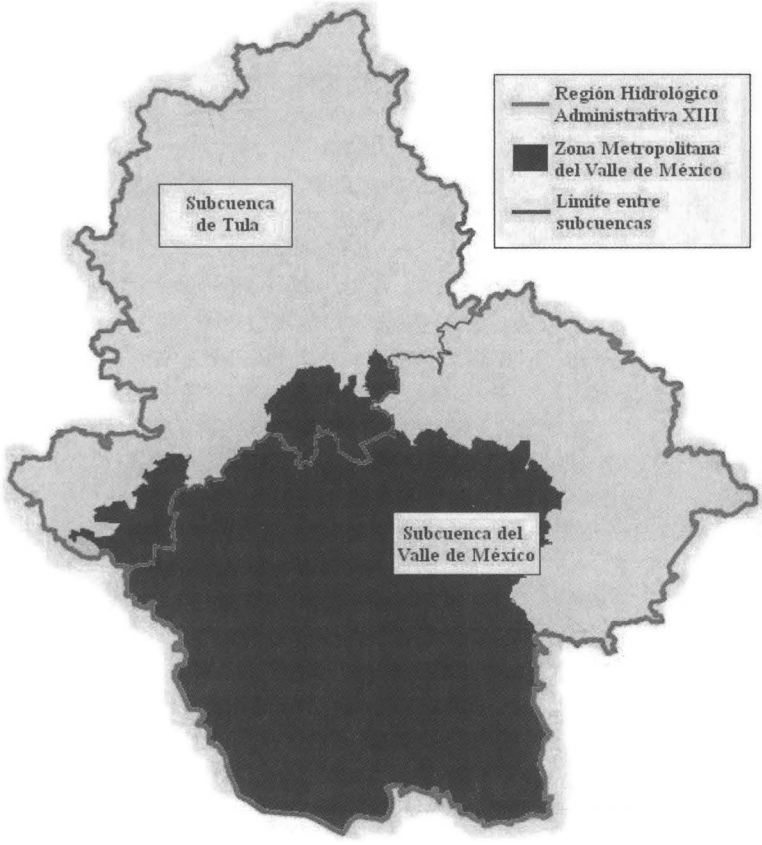
En el mapa 2 se presenta la ubicación de la ZMVM al interior de la Región Hidrológico-Administrativa XIII. La Región Hidrológico-Administrativa XIII hace parte de la división hidrológica del territorio nacional mexicano definida por la Comisión Nacional de Aguas (Conagua) para fines

Mapa 1. La Cuenca de México y las entidades federativas que abarca



Fuente: Elaboración propia, basada en el *Sistema de consulta de cuencas hidrográficas de México* (http://cuencas.ine.gob.mx/cuenca/).

Mapa 2. Ubicación de la ZMVM al interior de la Región Hidrológico-Administrativa XIII



Fuente: Elaboración propia basado en Conagua, 2009.

de planeación y gestión (mapa 3). El territorio de la Región Hidrológico-Administrativa XIII se divide en dos subcuencas: al norte, la de Tula y al sur, la del Valle de México cuyo territorio coincide en gran medida con el de la CM, planteado anteriormente.

Un claro indicador del riesgo de escasez de agua en la región es el índice de estrés hídrico, el cual brinda una valoración inicial del nivel de presión que ejerce el sistema social sobre su base ecológica. Su valor refleja la relación entre el uso humano del agua y su disponibilidad natural media en un territorio específico. En este sentido el estrés hídrico en 2008 para la Región Hidrológica XIII es del 148%, y del 182% para la Subregión del Valle de México (Conagua, 2009). La gravedad de estas cifras es relevante en tanto que un nivel de estrés hídrico severo corresponde a las situaciones en las que las extracciones de agua superan el 40% o más de la disponibilidad.

El elevado nivel de estrés hídrico en la CM es un indicador del deterioro del agua en términos de su cantidad y calidad. El decrecimiento de la cantidad de agua en la región es evidente no sólo por la desaparición progresiva de los cuerpos de aguas superficiales, sino por la sobreexplotación de sus acuíferos subterráneos. En 2003, la sobreexplotación de los acuíferos en la Subregión del Valle de México (1700.58 hm^3) superó en más del 220% a su nivel promedio de recarga (750.70 hm^3) (Conagua, 2009: 71). De manera adicional, la calidad de las aguas superficiales en la Región Hidrológico-Administrativa XIII según la Red Nacional de Monitoreo, la señalaron como la más contaminada del país (Conagua, 2010).

La principal estrategia de las autoridades gubernamentales para enfrentar estos retos ha sido la realización de grandes proyectos hidráulicos para importar el líquido desde otras cuencas colindantes. De una parte, a través del Sistema Cutzamala que se extiende desde los estados de Michoacán y México hasta el Distrito Federal, en 2008 se importó un caudal de 15.1 m^3 por segundo (485.7 hm^3 anuales). De otra parte, por medio del Sistema Lerma, que se nutre del acuífero de Lerma en la Subregión de Tula, se trasladó un volumen de 3.83 m^3 por segundo (120 hm^3 anuales) (Conagua, 2009). La importación y exportación de

Mapa 3. División Hidrológico-Administrativa de México, resaltando la Región Hidrológico-Administrativa XIII

Regiones Hidrológico-Administrativas de la Conagua

I Península de Baja California	V Pacífico Sur	IX Golfo Norte
II Noroeste	VI Río Bravo	X Golfo Centro
III Pacífico Norte	VII Cuencas Centrales del Norte	XI Frontera Sur
IV Balsas	VIII Lerma-Santiago-Pacífico	XII Península de Yucatán

Fuente: Conagua, 2009.

agua ha generado diversos conflictos y efectos colaterales en las comunidades y los territorios desde donde se extraen y hacia donde se expulsa el agua. Por lo tanto, es necesario considerar otro nivel territorial, cuyos límites son móviles puesto que varían en función al alcance de los efectos sociales y ecológicos negativos, asociados con la realización y funcionamiento de los grandes sistemas hidráulicos. Como una referencia mínima, esta región debe incluir las poblaciones y los territorios relacionados con las presas y cuencas en Michoacán y el Estado de México, sobre las cuales se ex-

tiende el sistema de importación de agua Lerma-Cutzamala; y de igual forma, las poblaciones y territorios en Hidalgo que reciben la mayor parte de las aguas exportadas por el sistema de drenaje, donde es recibida por cuerpos de agua que confluyen finalmente en el Golfo de México.

A pesar del agua importada, la dimensión del déficit en la CM es evidente por medio del índice de disponibilidad media de agua *per cápita*. Según éste una disponibilidad menor a 1 000 m^3 por persona al año es 'extremadamente baja'. En el caso de la Subregión Hidrológica del Valle de México en 2008, su valor fue de 119 m^3, el más bajo en todo el país (Conagua, 2009). Sin embargo, dicha situación de escasez no afecta a toda la población de la CM de manera equitativa puesto que la evidencia señala que los sectores sociales más pobres son los más afectados. Según Burns (2009) los niveles de dotación de agua para consumo en el Distrito Federal mostraron que el 77% de la población, más de 15 millones de personas en los estratos más bajos, tuvieron una dotación máxima de 128 litros por persona diarios; mientras que el 6% correspondiente a los estratos más altos recibió y consumió más de 390 litros.

Por último, dada la condición cerrada de la CM, en 2008 se exportó hacia la Subregión de Tula un exceso de agua de lluvias y de aguas residuales con un volumen aproximado de 50.4 m^3 por segundo (1589.4 hm^3 anuales) (Conagua, 2009). Dicha actividad ha sido fundamental para contrarrestar la tendencia natural de la CM a formar lagos, y para desalojar la gran cantidad de aguas residuales que produce la ZMVM. No obstante, esta práctica ha implicado el desarrollo de diversos conflictos y efectos secundarios sociales y ambientales en la subregión de Tula.

En este contexto general, el desarrollo reciente de la actividad social por el agua a escala de la CM y del país es visible por medio de dos ámbitos: de una parte, a través del desarrollo de la conflictividad social por el agua; y de otra

parte, por la emergencia de diversas redes sociales, que movilizan la crítica y la controversia social y política en el tema del agua.

Según Torregrosa *et al.* (2010), la creciente conflictividad social por el agua en México ha funcionado como una forma de participación social alternativa, que representa parte de los esfuerzos de la población con menos recursos económicos para incidir sobre la toma de decisiones políticas, en relación con el logro de condiciones de vida dignas y el reconocimiento de los múltiples significados del agua. El desarrollo de esta conflictividad ha subrayado la incapacidad de las autoridades para mediar efectivamente muchas disputas sociales e imponer la aplicación de las legislaciones pertinentes. Esta incapacidad ha sido evidente en múltiples casos donde la apropiación del agua por parte de algunos de los grupos sociales más ricos del país ha desafiado a las autoridades públicas y a la normatividad vigente. Algunos ejemplos de esto son: primero, la apropiación de múltiples pozos de agua por parte del sector industrial en Monterrey; segundo, la depredación del acuífero de la costa de Hermosillo por parte de grandes agricultores; tercero, la diseminación de pozos clandestinos en el Valle de México; cuarto, la concentración en manos de la empresa privada de los derechos de aguas ejidales en la Comarca Lagunera (Aboites, 2009); y quinto, la creciente cantidad de concesiones para extracción de agua y descarga de desechos a las grandes empresas embotelladoras de refrescos y cervezas.

Desde un punto de vista cuantitativo, según Becerra *et al.* (2006), entre 1990 y 2002 se identificaron al menos 131 casos de conflictos sociales por el agua en el país, entendidos como disputas habitualmente provocadas por la competencia por este recurso. Los asuntos de estos conflictos incluyeron las demandas por el acceso al agua (56%), los conflictos por los precios y tarifas (24%), las demandas de infraestructura (6%), el rescate de los acuíferos (2%) y otros varios (12%).

Estas cifras sugieren que los conflictos sociales por el agua configuran una variable que está adquiriendo una importancia creciente para la toma de decisiones y las políticas públicas (Becerra *et al.*, 2006). De acuerdo con su distribución geográfica, la mayor parte de los conflictos se concentraron en el Distrito Federal y el Estado de México (49%), reafirmando el carácter controversial del agua en la zona de la CM. En contraste, la región norte del país aglutinó el 14% de los conflictos, la sur el 13%, la centro-oriente el 9%, la oriente el 9%, la noreste el 3%, y la occidente el 3 por ciento.

De manera adicional, la formación de diversas redes de organizaciones sociales interesadas por el agua a escala nacional y de la CM, refleja el ascenso de la actividad social en la materia. En general, la relevancia creciente de las organizaciones sociales en México se debe a su aporte al proceso de democratización de la sociedad, y su funcionamiento como espacios que canalizan diversos intereses sociales al margen de los mecanismos institucionales de la participación social (Aranda y García, 2007; Mazzoti, 2006). En el tema del agua, las redes sociales nacionales han seguido las ideas y los planteamientos generales difundidos por el Movimiento Global en Defensa del Agua. Por ejemplo, con respecto a la oposición frente a los grandes proyectos hidráulicos y la privatización del agua se identificó al 'Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)', formado en 2004. Sobre el reconocimiento del agua como un bien público y de su acceso como un derecho humano se encontró a la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), creada en 2005. Estas redes han demandado la ampliación de los procesos de democratización y el reconocimiento de los derechos ciudadanos sobre los bienes comunes.

Además de sus múltiples dimensiones territoriales, el desarrollo reciente de la problemática del agua en la CM se enmarca en un sistema político que desde finales de la

década de 1980, ha impulsado diversas reformas institucionales nacionales y locales inspiradas por el proyecto del neoliberalismo global. En el sector del agua, bajo las premisas de minimizar la intervención pública y de maximizar su eficiencia, las autoridades gubernamentales han intentado desconcentrar y descentralizar su gestión; instaurar un sistema de participación social que amplíe su manejo democrático; y estimular el aporte de la iniciativa y la inversión privada. El desarrollo de estos procesos ha generado diversas consecuencias nacionales y locales relevantes al caso de la CM.

La influencia del proyecto neoliberal es amplia y contradictoria, puesto que impulsa a las autoridades gubernamentales a difundir un apoyo principalmente discursivo sobre la dimensión social y ecológica del agua, en el marco del desarrollo humano sustentable. Sin embargo, en la práctica, se enfatiza más la valoración económica del agua, en darle un manejo de acuerdo con las fuerzas del mercado. Como resultado, la búsqueda de la eficiencia financiera tiende a anteponerse sobre la equidad y la justicia social y ambiental en materia del agua. De tal forma el interés lucrativo de unas elites nacionales e internacionales, se cubre con una retórica de conciencia social y ecológica, tras la cual se perpetúan sistemas de explotación y abuso sobre la naturaleza y los sectores más pobres de la sociedad.

El crecimiento y la agudización de los conflictos por el agua en todo el planeta plantean el reto de comprender mejor los roles y el aporte de la acción social crítica y propositiva. El caso de la movilización en la CM posee una pertinencia teórica y práctica para iluminar múltiples aspectos de estos procesos. Lo que actualmente está en juego en éste y otros conflictos sociales por el agua alrededor del mundo, no es sólo garantizar un nivel suficiente y equitativo de abastecimiento, un manejo responsable de los riesgos y los efectos colaterales de sus modelos de gestión; sino también la construcción de sociedades y modelos de autoridad más reflexivos y democrá-

ticos. Por lo tanto, aunque es un grave problema que algunas elites pretendan controlar el agua con fines de lucro propio y de poder político, sus consecuencias negativas en contra del desarrollo social, democrático, reflexivo y ecológico de las sociedades pueden ser aún peores.

Aplicación del ARS al caso de la CM

El uso del ARS en este caso tuvo múltiples implicaciones teóricas y metodológicas en relación con la construcción del objeto empírico de esta investigación. En primer lugar, determinó los criterios centrales para identificar y caracterizar el desarrollo de una movilización social. En segundo lugar, se utilizó para medir y analizar las diversas estructuras relacionales al interior del grupo de organizaciones que representan a la movilización por el agua en la CM, y entre este grupo y los otros actores en su contexto organizativo. En suma, la principal fortaleza del ARS fue facilitar un detallado análisis organizacional de la movilización y de su entorno, basado en la medición empírica de unos vínculos de interacción y reconocimiento, los cuales configuran unas redes de intercambios materiales y simbólicos, para el periodo 2005-2009. Sin embargo, dicha fortaleza también es límite, puesto que al partir de un grupo concreto de actores, basados en vínculos particulares y en una temporalidad definida, la precisión de sus resultados no es generalizable más allá de estos límites. Dada esta situación, es apropiado acompañar los ARS con otros conceptos y herramientas teóricas y metodológicas para realizar su contextualización política y social, o para evaluar su rol e impacto en la sociedad en general (este tema será abordado en la próxima sección).

En lo teórico, los criterios definidos por Diani (2004, 2003) para diferenciar un movimiento social de otros procesos sociales, fueron los determinantes centrales para identificar y caracterizar la movilización por el agua en la CM. Estos crite-

rios son: primero, la presencia de orientaciones conflictuales que identifiquen claramente los oponentes de la movilización; segundo, la configuración de redes de intercambios materiales y simbólicos entre los actores vinculados al proyecto colectivo; y tercero, la construcción de identidades colectivas entre los participantes de las redes. Esta perspectiva determinó que el principal objeto de análisis fueran las redes sociales, en contraste con el enfoque tradicional del análisis de los repertorios de la acción colectiva. Este cambio, de los repertorios a las redes, se fundamentó en que el desarrollo de las acciones colectivas, de sus potencialidades y restricciones puede explicarse en gran medida, por las oportunidades y restricciones de las estructuras relacionales subyacentes a los actores sociales. En efecto, transforma la pregunta de investigación de ¿cuáles son las acciones colectivas de la movilización? relativa a estudiar un repertorio; a ¿cómo es la estructura relacional subyacente a la acción colectiva en la movilización?

En cuanto a lo metodológico se utilizaron dos grupos de conceptos y técnicas del ARS con el fin de, primero, comprobar la existencia de redes de cercanía entre los actores de la movilización; y segundo, para identificar sus principales oponentes y propuestas colectivas y sus procesos de construcción de identidades compartidas. En ambos casos, los análisis se desarrollaron a partir de un grupo de 18 organizaciones sociales con diversos intereses y acciones vinculadas con el agua en la región. Su selección se basó en identificar la mayor cantidad posible de organizaciones relacionadas con el agua en la CM; tras lo cual, el tamaño del grupo se redujo en función de aquellas interesadas por participar como informantes claves. El grupo final abarcó más de 75% de las organizaciones contactadas. Al respecto, es de resaltar que entre más completo sea el grupo de actores participantes los análisis de sus vínculos adquieren una creciente precisión y confiabilidad. Aunque deseable, no es un requisito primordial

que el grupo alcance siempre 100%, puesto que muchos de los eventuales ausentes son incorporados indirectamente a las redes al ser referidos por los informantes. El cuadro 1 ofrece un listado de las organizaciones entrevistadas para este caso de estudio.

Cuadro 1. Organizaciones sociales participantes en el estudio

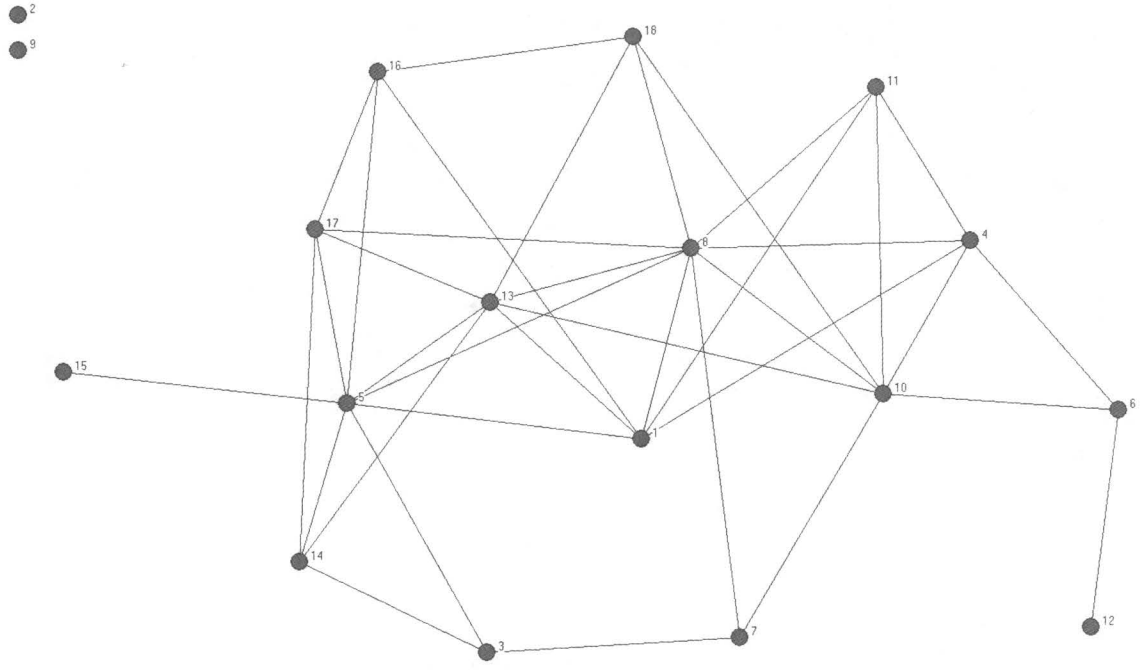
Núm.	*Nombre*
1	Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C.
2	Instituto Internacional de Recursos Renovables, A.C. México
3	Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México (Ecocomunidades)
4	Consejo Consultivo del Agua, A.C.
5	Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
6	Pronatura, A.C.
7	Presencia Ciudadana Mexicana, A.C.
8	Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
9	Patronato Pro Zona Mazahua, A.C.
10	Red Mexicana de Acción por el Agua
11	Centro de Estudios Jurídicos Ambientales, A.C. (CEJA)
12	Fundación Tlaloc, A.C.
13	Guardianes de los Volcanes, A.C.
14	Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)
15	Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL)
16	Mujer y Medio Ambiente, A.C.
17	Equipo Pueblo, A.C.
18	Fondo Pro-Cuenca del Valle de Bravo, A.C.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de las redes de cercanía, tanto al interior del grupo como con su contexto organizativo, se fundamentó principalmente en unos indicadores de centralidad nodal, los cuales representan en términos absolutos la cantidad de vínculos que cada organización posee. En las redes analizadas, el total de vínculos de cada organización incluye la combinación de dos tipos: primero, los vínculos de salida, es decir, cada una de las relaciones reconocidas por cada organización; y segundo, los vínculos de entrada, correspondientes con los vínculos recibidos al ser nombrado por alguna de las organizaciones entrevistadas. Dicha combinación, vínculos de entrada y salida, permite reconocer algunas relaciones omitidas voluntaria o involuntariamente por los informantes que, no obstante, son referidos por sus contrapartes. Este tipo de indicador de centralidad refleja el posicionamiento de los actores en relación con su prestigio y expansividad en la red (Faust, 2002; Wasserman y Faust, 1994). Si bien el detalle de estos resultados se omite en este texto por razones de síntesis, este indicador señala el porcentaje de la movilización que se encuentra vinculada con cada una de las organizaciones y, por lo tanto, ilustra el grado de penetración de cada organización en el conjunto de la movilización.

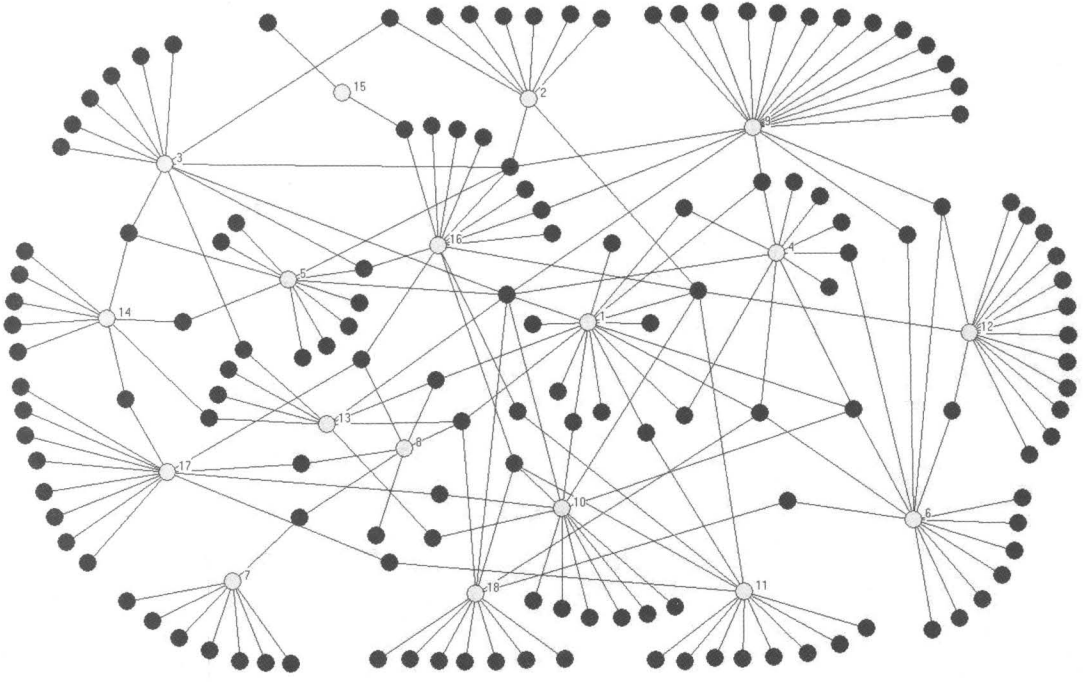
La existencia de una red de cercanía al interior del grupo se comprobó a través de dos tipos de vínculos directos: de una parte, los vínculos de interacción, es decir, las relaciones derivadas por la realización de acciones conjuntas; y los vínculos de reconocimiento, que corresponde a la percepción de otros actores como aliados o fuente de apoyos. Los resultados demostraron (gráfica 1) que el grupo posee un nivel básico de integración y cohesión capaz de sustentar el desarrollo de acciones colectivas y de un movimiento social. En la gráfica 1, los puntos corresponden a las organizaciones, identificadas según su número en la tabla 1, y las líneas representan la existencia de al menos algunos de los vínculos de cercanía entre ellos.

Gráfica 1. Red de cercanía entre las organizaciones 2005-2009



Fuente: Elaboración propia con información de las 18 organizaciones.

Gráfica 2. Red de cercanía 2005-2009, entre la movilización y su contexto organizativo



Fuente: Elaboración propia con información de las 18 organizaciones.

Asimismo, por medio de estos mismos vínculos se caracterizó el contexto organizativo de la movilización. Es decir, los diversos actores públicos, privados, locales, nacionales e internacionales, con los cuales, reconocieron tener relaciones de interacción o reconocimiento en el periodo de estudio. La gráfica 2 ilustra con puntos oscuros a los 143 actores del contexto, con puntos claros a las 18 organizaciones de la movilización y con las líneas la existencia de al menos uno de los vínculos de cercanía. Su análisis reveló que la movilización tiende a acercarse, principalmente, hacia otras organizaciones sociales nacionales e internacionales y hacia un conjunto de instituciones públicas nacionales. De manera complementaria, la movilización se acerca en menor grado a un conjunto de actores del sector académico nacional y del sector privado empresarial. El principal resultado de este análisis fue comprobar que la movilización posee una compleja y relevante estrategia de cooperación con múltiples actores de su contexto, la cual se desarrolla de forma paralela a su enfoque conflictivo y opositor (tema que será abordado más adelante).

En ambas redes, otros análisis complementarios permitieron identificar cuáles son sus actores más centrales y más periféricos, y cuáles son sus principales roles en el funcionamiento de las redes. Por una parte, los actores más centrales son las principales fuentes de integración en la red, poseen la mayor cantidad de vínculos y, por lo tanto, de influencia y reconocimiento. Los actores centrales funcionan como intermediarios capaces de potencializar o bloquear los flujos materiales y simbólicos al interior de las redes. Por otra parte, los actores más periféricos, con pocos vínculos, representan la diversidad de la red, los actores que se alejan, cuestionan o complementan las tendencias de los actores centrales. Su importancia radica en dar un carácter más incluyente y horizontal a las redes, controlando su nivel de centralización. Los resultados detallados de esos análisis

serán omitidos para no extenderse demasiado al respecto. No obstante, lo relevante es que los ARS realizados permitieron no sólo identificar la existencia efectiva de las redes, sino también detallar su estructura en términos de los roles y las posiciones de los actores al interior de las redes estudiadas.

Pasando a otro punto, para identificar los procesos de construcción de las identidades compartidas en la movilización y para la caracterización de su enfoque controversial y la identificación de sus oponentes, se recurrió a otra serie de vínculos indirectos derivados de sus definiciones y percepciones acerca de la problemática del agua en la CM. Por medio de este análisis, se identificaron una serie de esquemas interpretativos, compuestos de múltiples significados compartidos por las organizaciones, los cuales determinan sus principales formas colectivas de entender, definir y responder a su realidad.

En este caso se utilizaron tres tipos de marcos interpretativos introducidos en los trabajos de Snow y Benford (1988 y 1992). Estos son, primero, un marco diagnóstico, que aborda cómo los actores interpretan una situación problemática, y cómo distribuyen la responsabilidad de dicha situación entre un conjunto de hechos y de actores claves. Segundo, un marco predictivo sobre las soluciones y las estrategias que proponen para abordar dicha problemática. Y tercero, un marco motivacional que da cuenta de las acciones y de las promesas de la movilización, para lograr sus objetivos y conseguir un creciente respaldo social y político.

Para la identificación y clasificación de los significados compartidos, en cada uno de los marcos se aplicaron dos tipos de análisis matriciales que interrelacionaron a las 18 organizaciones con sus diversas interpretaciones sobre las problemáticas del agua en la CM. Por medio de un modelo de análisis de *bloques centro/periferia* (Hanneman y Riddle, 2005), en cada marco se distinguió un bloque central y una periferia. Cada bloque central estaba integrado por un

subgrupo de organizaciones con un alto grado de cohesión, definido en función de unos significados que comparten entre sí. De forma complementaria, cada periferia incluyó tanto al resto de las organizaciones que coincidieron en menor medida con los significados centrales, como a los otros significados compartidos con menores grados de aceptación.

La aplicación de este modelo ofreció resultados en varios sentidos: en primer lugar, identificó los significados centrales que conforman el conjunto de ideas y de propuestas con mayor potencial para generar integración e identificación colectiva en la movilización. En efecto, se encontró que la capacidad de la movilización para construir definiciones compartidas es amplia. Cada uno de los marcos interpretativos se caracterizó por incluir un grupo de significados centrales con un alto grado de aceptación colectiva, indicando procesos de identificación colectiva entre las organizaciones. De tal forma, se consolidó la imagen de la movilización como un actor social colectivo en desarrollo. Para ilustrar este punto, el cuadro 2 presenta los principales significados centrales de la movilización y su grado de aceptación (frecuencia relativa, FR).

En segundo lugar, la periferia de los marcos interpretativos identificó las ideas y las propuestas alternativas que difieren de las tendencias centrales y que diversifican su capacidad interpretativa. La relevancia de los significados y las organizaciones periféricas consiste en evidenciar posiciones críticas y diferentes a las perspectivas centrales. Estas propuestas, a pesar de no contar con un apoyo generalizado, configuran recursos latentes y caminos potenciales para el desarrollo alternativo de la movilización. Sus resultados detallados serán omitidos por motivos de síntesis; sin embargo, vale la pena resaltar que los marcos interpretativos abarcaron diversos significados y puntos de vista, contenidos por unas estructuras interpretativas relativamente incluyentes. En suma, esto indicó que en la movilización se facilita el

Cuadro 2. Significados compartidos centrales en la movilización

Marco diagnóstico: hechos y actores responsables de la problemática	*FR*
Irracionalidad ambiental de las autoridades	89%
Múltiples problemas de inequidad en la cantidad y calidad del agua en la región de la CM	78%
Carencia de educación ambiental entre la población de la región de la CM	67%
Marco predictivo: principales soluciones	*FR*
Revisar y reformar el modelo exportador de agua	67%
Generar una cultura de cuidado del agua y una conciencia ecológica en la población	61%
Mayor participación social. Mayor acceso a la información	56%
Marco motivacional: rol de la movilización	*FR*
Investigar y denunciar la problemática del agua. Generar conciencia ambiental y cultural del agua	94%
Apoyar procesos de participación social y planeación participativa. Fortalecer los Consejos de Cuenca	56%
Defensa del derecho humano al agua. Propuestas de regulación y de política pública	50%
Generar conectividad y colaboración entre los actores sociales vinculados con la problemática del agua. Asesorar y apoyar a otras organizaciones sociales	44%

Fuente: Elaboración propia basado en la información de las 18 entrevistas.

desarrollo de procesos de debate, divergencia o autocrítica, que brindan una relevante amplitud y flexibilidad ideológica para adaptarse al entorno.

Así, a través del análisis matricial de los marcos interpretativos se comprobó, primero, que la movilización posee una

visión controversial del agua en la CM basada principalmente, en la crítica al modelo de gestión exportador/importador de agua en la región, la visibilización de sus múltiples efectos negativos sociales y ambientales dentro y fuera de la CM y la oposición al alcance limitado y superficial del actual modelo de participación social. Segundo, que sus principales opositores han sido las instituciones gubernamentales, locales y nacionales, del sector de agua y las organizaciones del sector privado comercial asociadas con el apoyo y la progresiva imposición de una lógica mercantil en su conceptualización y manejo. Y tercero, se evidenció que la movilización cuenta con múltiples procesos de construcción de identidades compartidas, en función de diversos significados colectivos como la difusión de una interpretación del agua como un derecho humano y un bien común, la exigencia de mayor democratización y participación social en la toma de decisiones relacionadas con la planeación y el manejo del agua en la región, y un creciente interés de fortalecer la conectividad y la construcción de redes sociales entre los actores interesados en la defensa del agua a nivel regional, nacional y global.

ELEMENTOS TEÓRICOS ADICIONALES PARA COMPLEMENTAR Y AMPLIAR EL ALCANCE DEL ARS

El análisis del contexto de la movilización por el agua en la CM

La contextualización de los ARS es un reto fundamental para ir más allá de los análisis estructurales al interior de las redes y relacionarlas con el entorno que las contiene. Si bien el ARS sirve para estudiar de forma detallada la estructura organizacional de la movilización, el análisis de su contexto permite identificar los estímulos y las constricciones que parten de su entorno social y político.

En el caso de la movilización por el agua en la CM, la caracterización de su contexto se apoyó en dos conceptos analíticos: el campo de acción social (Touraine, 1995) y la teoría de la construcción social de la naturaleza (Eder, 1996).

En primer lugar, el campo de acción social impuso la necesidad de identificar los principales temas y ámbitos que delimitan el alcance de los conflictos sociales relacionados con el agua en la CM. Dicho alcance depende de la posibilidad de que las reivindicaciones y las propuestas de la movilización trasciendan el entorno local y lleguen a problematizar el modelo de desarrollo social regional o nacional.

En segundo lugar, a partir de la teoría de la construcción social de la naturaleza se abordó la construcción normativa y simbólica del agua al interior del sistema político nacional. Según esta teoría, las ideas de una sociedad sobre la naturaleza y sus diversos elementos, como el agua, por ejemplo, son construidas y moldeadas por fuerzas sociales que privilegian maneras dominantes de interpretación.

Por una parte, la construcción normativa abordó las principales normas políticas y las reglas de acción que enmarcan y delimitan la relación entre la sociedad mexicana y el agua y, por otra parte, la construcción simbólica se refirió a los principales significados utilizados al interior del sistema político para explicar la actual problemática del agua en la CM.

En su conjunto, los análisis del contexto señalaron que la creciente disputa por el control de los significados y los usos dominantes del agua en la región, el país y el mundo configuran un campo de acción social retador pero fértil para el desarrollo de la acción y del conflicto social. A partir de una situación local caracterizada por una progresiva tensión social y ecológica en relación con los riesgos de escasez de agua y los efectos negativos asociados al modelo

de importación-exportación entre cuencas, las principales conclusiones fueron las siguientes: primero, que el campo de acción social en la CM posee una relevancia creciente y un alcance que se extiende desde lo local hasta lo global. Su pertinencia parte de la denuncia, la crítica y la oposición frente al modelo dominante de gestión en la región; pero se extiende hasta diversos aspectos controversiales de la normatividad y el sistema político-administrativo nacional (por ejemplo, la definición legal del agua, sus sistemas de participación social, de planeación y toma de decisiones). El conflicto social por el agua en la CM demuestra una potencialidad simbólica planetaria, como parte del conflicto global entre los actores y los sectores sociales que apoyan una definición mercantil del agua, en contraste con aquellos que abogan por su reconocimiento explícito como un derecho humano y un patrimonio común. Así, el campo de acción social ofrece múltiples oportunidades para el desarrollo de la movilización por el agua en la CM, derivadas de los vínculos potenciales con otros actores y sectores sociales nacionales e internacionales.

En cuanto a la construcción normativa del agua, se identificó que predomina un panorama nacional restrictivo al desarrollo de la actividad social por el agua. Por una parte, el proceso de democratización ha sido muy limitado. El modelo actual de participación social mantiene un perfil primordialmente autoritario frente a los procesos de toma de decisiones, de planeación y aplicación de políticas públicas. El proceso de descentralización ha convertido el agua en recurso de creciente valor político, ante el cual, los intereses sociales compiten con las instituciones gubernamentales, los políticos profesionales y los actores privados que intentan apropiarse del tema y manipular electoralmente a la población.

Por último, la construcción simbólica reciente del agua en la CM ha girado entre dos conceptos clave: la "escasez" y la "crisis", indicando un estado de creciente incertidumbre

social frente al presente y al futuro del manejo del agua en la región. El sistema político enfrenta el reto de ajustarse y responder a la percepción de experimentar una coyuntura crítica, ante la cual, sus estructuras normativas y administrativas no están preparadas. Esta situación ha generado un debilitamiento relativo de las autoridades gubernamentales para controlar el orden social en la CM y, por consiguiente, una oportunidad para que la acción social pueda movilizar un conjunto de significados y propuestas alternativas.

El análisis del potencial aporte reflexivo de la movilización por el agua en la CM

Para abordar el potencial reflexivo de la movilización fue necesario ampliar la perspectiva analítica de este estudio, desde la visión organizacional del ARS hacia un enfoque simbólico. El objetivo fue considerar la existencia y el desarrollo de la movilización no sólo por sus patrones relacionales, sino también como símbolos que representan y dan visibilidad a diversas tensiones y conflictos sociales que reclaman ser conceptualizados. Así, el análisis sobre la reflexividad sirvió para caracterizar los roles y el potencial impacto cultural y político de la movilización frente al conjunto de la sociedad.

Según Beck (1994) el potencial reflexivo de los actores sociales se refiere a su capacidad para reflexionar acerca de las condiciones sociales en las que viven y con ello, una creciente capacidad para su modificación. Es decir, para impulsar procesos de cambio social. Este concepto se deriva del desarrollo de la teoría de la modernidad reflexiva (Beck, 2000, 1998, 1992; Beck, Giddens y Lash, 1994; Giddens, 1998, 1991). Según esta teoría, las actuales sociedades y sus diversos actores enfrentan un dilema entre la expansión continua del proyecto clásico de la modernidad y su tendencia a reformar y reemplazar todos los aspectos idiosincráticos y tradicionales del orden social por una racionalidad instru-

mental dominante; y la oposición crítica y reflexiva frente a los límites, riesgos y efectos colaterales de dicho modelo, que no han sido comprendidos de manera suficiente. Sin embargo, en lo relacionado con los análisis del caso de la movilización por el agua en la CM fue necesario pasar de la propuesta general de la teoría de la reflexividad en su sentido más amplio, es decir, como un momento crítico de la modernidad, hacia la reflexividad entendida específicamente como una habilidad propia de los actores sociales.

Desarrollos recientes de la esta teoría plantean que es posible generar un nuevo tipo de estabilidad social capaz de regular la competencia entre diversas racionalidades. A través del concepto de "autoridad reflexiva", Hoogenboom y Osswaarde (2005) consideran la habilidad conjunta de las instituciones y de los actores sociales para negociar, reconciliar y representar diversos argumentos y habilidades. En este sentido, el desarrollo de las movilizaciones sociales puede tomarse como un indicador del nivel de reflexividad de las sociedades que las contienen (Blühdom, 2006). Por último, Lee (2008) propone un modelo de múltiples racionalidades en conflicto, según el cual es necesario incluir otras racionalidades relacionadas con las tradiciones y los conocimientos locales, aún relevantes en múltiples sociedades en todo el planeta.

A partir de estas ideas, el análisis de la reflexividad de la movilización por el agua en la CM se desplegó en dos niveles: en una escala general se reinterpretó el contexto de la movilización como una competencia entre diversas racionalidades por el control del orden social del agua en el país y la región de la CM. Y en una escala particular se evaluaron las habilidades reflexivas propias de la movilización para configurarse como un actor social de relevancia simbólica. Según Ashmore (1989), la capacidad reflexiva de los actores sociales puede analizarse por medio de tres aspectos complementarios: su reflexividad constitutiva, autorreferente y autoconsciente.

En primer lugar, la reflexividad constitutiva se refiere a la capacidad para construir definiciones de la realidad. Para su evaluación se tuvieron en cuenta los hallazgos sobre los significados compartidos centrales en la movilización en relación con las principales oportunidades y las restricciones que impone su entorno político y social. Este contraste permitió ofrecer una perspectiva contextualizada de la habilidad de la movilización para interpretar las actuales problemáticas del agua.

En segundo lugar, la reflexividad autorreferente se relaciona con la capacidad de la movilización para actuar sobre sí misma y para reflexionar en torno a las consecuencias de sus actos, es decir, con su habilidad de autocrítica. Su caracterización se basó en los resultados de las redes de cercanía dentro de la movilización y en los procesos de construcción de los significados periféricos. Por una parte, las redes de cercanía evidenciaron los espacios para el encuentro entre las organizaciones sociales y, por lo tanto, para la construcción de parámetros colectivos de identificación, interpretación y de comportamiento. Por otra parte, los significados periféricos resaltaron la existencia de diferentes perspectivas y enfoques en la movilización. En conjunto, mientras que las redes de cercanía mostraron su potencial para integrar un actor colectivo, los significados periféricos resaltaron su capacidad de autocrítica frente a sus tendencias centrales.

En tercer lugar, la reflexividad autoconsciente se corresponde con la capacidad de la movilización para tomar conciencia del carácter reflexivo de sus acciones, es decir, de su habilidad para percibir el potencial simbólico de su existencia y de sus actos. Para su análisis se consideraron los resultados de las redes de cercanía entre la movilización y su entorno organizativo y los significados compartidos del marco motivacional. Así, se realizó un contraste entre la interpretación de su rol social y de sus aportes frente a la sociedad en general, que componen su marco motivacional;

y los sectores particulares de la sociedad hacia los cuales se ha enfocado efectivamente la difusión de sus propuestas e ideas, identificadas en su red de cercanía con el entorno.

En síntesis, las conclusiones principales de estos análisis fueron, en primer lugar, que la movilización por el agua en la CM enfrenta actualmente unas condiciones retadoras pero estimulantes para simbolizar la defensa del agua como la defensa de un derecho humano, la oposición y crítica a su mercantilización, y la exigencia de esquemas de autoridad y de toma de decisiones más democráticos y reflexivos. La creciente incertidumbre política frente al manejo del agua, acompañada de la generalización de una percepción de crisis por el agua en la región, han generado un amplio campo de acción social. Esta situación ha facilitado su configuración como un actor estratégico para representar un malestar social vigente frente al orden social dominante del agua y sus riesgos y efectos colaterales. Dada su amplia potencialidad simbólica, el principal reto de la movilización es más práctico: sobrevivir al contexto político excluyente y autoritario que predomina sobre el actual modelo de participación social en materia de agua.

En segundo lugar, la estructura relacional de la movilización indicó un tipo de integración capaz de fomentar el encuentro, el diálogo y el debate, lo cual ha facilitado el desarrollo de procesos de autopercepción y autoevaluación. La movilización se caracterizó en este sentido por configurar un patrón de integración incluyente y descentralizada. Este tipo de estructura relacional estimula la coexistencia de diversas ideas, enfoques complementarios o críticos paralelamente a sus tendencias centrales. En este sentido, la diversidad interpretativa dentro de la movilización favorece la autocrítica y le ha otorgado flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios de su entorno. En términos simbólicos, la estructura relacional de la movilización reflejó un proceso local de creciente interés, acción y organización social

a favor del debate, la crítica y las propuestas alternativas frente al orden social dominante del agua en la región. En este nivel, el mayor desafío de la movilización es mantener una posición crítica y creativa, incluso y sobre todo, con sus propios significados centrales. Por ejemplo, su apoyo generalizado al concepto de desarrollo sustentable, el cual implica una visión principalmente antropocéntrica sobre la relación entre la sociedad y la naturaleza.

Por último, la movilización manifestó la capacidad de reconocer el carácter reflexivo de su existencia y de sus actos. En gran medida expresó ser consciente del hecho de tener un rol social político y pedagógico que se manifiesta en un balance complejo entre la oposición controversial y la cooperación con sus principales opositores: las autoridades gubernamentales y el sector empresarial. La movilización por el agua en la CM ha realizado diversos tipos de acciones sociales que incluyen tanto la crítica en contra de la mercantilización del agua y la denuncia de diversas tensiones, irracionalidades y fallos en el orden social del agua en la región, como el apoyo a la construcción de un marco de trabajo colaborativo con sus contrincantes basado en la democracia y la legalidad vigente. La movilización ha demostrado así una capacidad básica para realizar un acercamiento estratégico a sus oponentes sin perder su carácter opositor o controversial. En efecto, aunque el concepto del desarrollo sustentable ha sido el fundamento para un leguaje común entre la movilización y sus contradictores, las interpretaciones propias de la movilización han logrado diferenciarse de las visiones de sus contrapartes, más influenciadas por la perspectiva mercantil. La importancia simbólica de la dinámica enfrentamiento-cooperación es que indica un interés sistémico creciente entre los diversos sectores y actores sociales involucrados con el agua en la región, de abrir el debate y formular eventuales acuerdos colectivos, a pesar de sus diferencias ideológicas, racionalidades e intereses.

A manera de epílogo, el jueves 29 de septiembre de 2011 el Senado de México aprobó una reforma al artículo cuarto de la Constitución Política nacional, señalando que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para su consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. A pesar de ser un hecho posterior al periodo de tiempo considerado en este caso de estudio es digno de traerse a colación puesto que representa el logro de uno de los objetivos centrales de la movilización. En consecuencia, el campo de la acción social por el agua a nivel nacional tenderá a ampliarse ante la necesidad progresiva de traducir este reconocimiento del agua como un derecho fundamental, en acciones, planes, políticas y normas concretas. Son de esperar crecientes oportunidades y desafíos a las capacidades organizativas, reflexivas, críticas, opositoras y propositivas de la movilización en la CM y, en general, de toda la acción social por el agua a nivel nacional. Sin duda, el reto es inmenso pero la coyuntura tiende a hacerse más propicia. Esta reforma constitucional coloca a México en la vanguardia normativa de la defensa social del agua a escala global. Por lo tanto, su futura aplicación, sus resultados y los roles que asuma la acción social por el agua durante este proceso, configurarán referentes de relevancia internacional para los diversos actores sociales en todo el planeta, involucrados con el desarrollo del conflicto global por el control de las definiciones y los usos dominantes del agua.

Como conclusión general, a través del caso de la movilización por el agua en la CM es posible evidenciar el aporte teórico y metodológico que el ARS puede ofrecer al análisis de los movimientos sociales. En primer lugar, el análisis relacional no se ve constreñido por ningún tipo de fronteras locales o nacionales y es capaz de captar la complejidad y el tamaño de las redes vinculadas con el desarrollo de un movimiento en toda su amplitud. En este sentido el ARS permite abordar una dimensión social meso que fluctúa e integra lo

micro y lo macro. Es decir, si lo macro se vincula con la superestructura, en el nivel de la regulación nacional, estatal o del mercado, y el nivel micro con la agencia y la regulación interpersonal; el nivel meso genera una opción analítica y metodológica que apunta hacia lo comunitario y permite enfrentar dicha dicotomía al enfocarse hacia los sistemas relacionales que generan combinaciones entre diversas redes locales y globales (Ferrand, 2002; Wellman, 1988).

En segundo lugar, el ARS deja de lado el supuesto teórico acerca de la naturaleza cíclica de los movimientos sociales a favor de una mirada estructural a profundidad, ofreciendo la oportunidad de construir imágenes detalladas de la dimensión relacional particular a cada movilización social en uno o varios momentos específicos de su desarrollo. En tercer lugar, el ARS permite abordar a los supuestos opositores o contradictores de un movimiento social y evaluar su alcance estratégico, más allá de sus diferencias discursivas o ideológicas, a partir de sus roles y posiciones estructurales al interior de las redes sociales. Y por último, el ARS aplicado a la identificación de los significados e identidades compartidas permite visibilizar y analizar la construcción y la proyección de los objetivos culturales del movimiento social a la par de sus objetivos políticos. No obstante, a pesar de los aportes metodológicos y analíticos planteados anteriormente, es apropiado reconocer que el ARS posee una serie de limitaciones que implican la necesidad de incluir algunos conceptos o teorías complementarias para construir análisis lo más abarcadores y completos posibles. Esto es especialmente pertinente en relación con la contextualización de las redes sociales y con el análisis o la previsión de sus eventuales impactos futuros.

BIBLIOGRAFÍA

Aboites, Luis (2009), *La decadencia del agua de la nación. Estudio sobre la desigualdad social y cambio político en*

México. Segunda mitad del siglo xx, México, El Colegio de México.

Aranda, José y Andrea García (2007), "Redes sociales y reflexividad: su importancia en la construcción de la sociedad civil en México", *Ciencia Ergo,* vol. 14, núm. 2, julio-octubre, pp. 141-152.

Ashmore, Malcom (1989), *The reflexive thesis. Writing sociology of scientific knowledge,* Chicago, The University of Chicago Press.

Becerra, Mariana *et al.* (2006), "Los conflictos por agua en México. Diagnóstico y análisis", *Gestión y Política Pública*, vol. XV, núm. 1, pp. 111-143.

Beck, Ulrich (2000), *La democracia y sus enemigos*, Barcelona, Paidós Ibérica.

_____ (1998), "La política de la sociedad de riesgo", *Revista de Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 13, núm. 39, pp. 501-515.

_____ (1994), "The reinvention of politics: toward a theory of reflexive modernization", en Beck, Ulrich *et al.* (eds.), *Reflexive modernization*, Cambridge, Polity Press, pp. 13-73.

_____ (1992), *Risk Society: Towards a New Modernity*, Londres, Sage Publications.

Beck, Ulrich, Anthony Giddens y Scott Lash (eds.) (1994), *Reflexive modernization*, Cambridge, Polity Press.

Blühdorn, Ingolfur (2006), "Self-Experience in the theme park of radical action? Social movements and political articulation in the late-modern condition", *Journal of Social Theory*, vol. I, núm. 9, pp. 23-42.

Borgatti, Steve *et al.* (2002), *Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis*, Harvard Analytic Technologies.

Burns, Elena (2009), *Repensar la cuenca. La gestión de ciclos del agua en el Valle de México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa.

Conagua (Comisión Nacional del Agua) (2010), *Estadísticas del agua en México*, México, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

_____ (2009), *Estadísticas del agua de la región hidrológica-administrativa XIII, Aguas del Valle de México*, México, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diani, Mario (2004), "Organizations, coalitions, and movements", *Theory and Society*, vol. XXXIII, núm. 3-4, pp. 281-309.

_____ (2003), "Social movements, contentious actions, and social networks: from metaphor to substance?", en Mario Diani y Doug McAdam (eds.), *Social movements and networks, relational approaches to collective action*, Oxford, Oxford University Press.

Eder, Klaus (1996), *The social construction of nature*, Londres, Sage Publications.

Faust, Katherine (2002), "Las redes sociales en las ciencias sociales y del comportamiento", en Jorge Gil Mendieta y Samuel Schmidt (eds.), *Análisis de redes. Aplicaciones en ciencias sociales*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 1-12.

Ferrand, Alexis (2002), "Las comunidades locales como estructuras mezo", *Revista hispana para el análisis de redes sociales,* vol. 3, núm. 4, URL: http://revistes.uab.cat/redes/article/view/23/14.

Garavito González, Leonardo (2012), "Un oasis en el desierto: reflexividad y redes sociales por el agua en la Cuenca de México", México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, tesis de doctorado.

Giddens, Anthony (1998), *La constitución de la sociedad: bases teóricas para la teoría de la estructuración*, Buenos Aires, Amorrortu.

_____ (1991), *The consequences of modernity*, Stanford University Press.

Hanneman Robert y Mark Riddle (2005), *Introduction to social networks methods*, University of California.

Hoogenboom, Marcel y Ringo Ossewaarde (2005), "From iron cage to pigeon house: the birth of reflexive authority", *Organization Studies*, vol. 26, núm. 4, pp. 601-619.

Lee, Raymond (2008), "In search of second modernity: reinterpreting reflexive modernization in the context of multiple modernities", *Social Science Information*, vol. 47, núm. 1, pp. 55-69.

Mazzoti, Giovanna (2006), "Explorando la relación entre capital social y la formación de redes de organizaciones civiles (ONG's) en México", *Ciencias Sociais Unisinos*, vol. 42, núm. 1, pp. 50-58.

Melucci, Alberto (1999), *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México, El Colegio de México.

_____ (1996), *Challenging codes: collective action in the formation age*, Cambridge, University Press.

_____ (1991), "La acción colectiva como construcción social", *Estudios Sociológicos*, vol. IX, núm. 26, pp. 257-364.

Oberschall, Anthony (1978), "Theories of social conflict", *Annual Review of Sociology*, núm. 4, pp. 291-315.

Pellow, David (1999), "Framing emerging environmental movement tactics: mobilizing consensus, demobilizing conflict", *Sociological Forum*, vol. 14, núm. 4, pp. 659-683.

Snow, David y Robert Benford (1992), "Master frames and cycles of protest", en Aldon Morris y Carol Mueller (eds.), *Frontiers of social movement theory*, Yale University Press, pp. 133-155.

_____ (1988), "Ideology, frame resonance and participant mobilization", en Bert Klandermans *et al.* (eds.), *International social movement research*, Greenwich, JAI Press.

Tarrow, Sidney (2004), *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza Editorial.

Tilly, Charles (2004), *Social Movements*, 1768-2004, Paradigm Publishers.

_____ (1978), *From Mobilization to Revolution*, McGraw-Hill.

Torregrosa, María L. *et al.* (2010), "Administración del agua", en Blanca Jiménez *et al.* (eds.), *El agua en México: cauces y encauses*, México, Academia Mexicana de Ciencia, pp. 595-624.

Touraine, Alain (1995), *Producción de la sociedad*, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Wasserman, Stanley y Katherine Faust (1994), *Social network analysis. Methods and application. Structural analysis in the social sciences*, Cambridge University press.

Wellman, Barry y Stephen Berkowitz (eds.) (1988), *Social structures. A new approach*, Cambridge University Press.

XI. ANÁLISIS DE RETOS Y RETOS DEL ANÁLISIS DE LA ACCIÓN COLECTIVA Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA LOS RIESGOS DE LA MINERÍA CANADIENSE EN EL CASO DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ

David Madrigal González*

En este capítulo analizo los retos teórico-metodológicos que implicó el estudio de los procesos de acción colectiva y de movilización contra el proyecto de la empresa minera canadiense New Gold-Minera San Xavier, en el municipio de Cerro de San Pedro, ubicado en el estado de San Luis Potosí. Propongo, en primer lugar, una forma de abordaje desde la teoría general de la sociedad del riesgo para observar sus determinaciones en el ámbito del capitalismo globalizado y sus implicaciones en las escalas estatal y nacional. En segundo lugar, estudio las fases a través de las cuales se estructuraron los procesos de movilización en el caso de Cerro de San Pedro, retomando los planteamientos de Alberto Melucci para articular la acción colectiva con su función simbólica y comunicativa. En tercero y cuarto lugar, me enfoco en el análisis de la reflexividad que los grupos en resistencia de la sociedad local han puesto en juego discursivamente para fijar su lucha en torno a los riesgos ambientales derivados

* Doctor en estudios urbanos y ambientales por El Colegio de México. Profesor-investigador de El Colegio de San Luis.

de las actividades extractivas de una empresa de capital transnacional. Hacia las conclusiones, recupero los retos teórico-metodológicos que implicó la investigación para hacer una reflexión final acerca de las limitaciones surgidas del marco analítico utilizado para el estudio de caso.

La movilización social contra los riesgos de la minería canadiense en el caso de Cerro de San Pedro se ha hecho visible por más de 15 años a través de acciones colectivas como marchas, plantones, mítines, festivales culturales, etc. Cada una de estas acciones colectivas ha surgido de un conjunto de vínculos que impulsan el agrupamiento de intereses en común por medio de actos reivindicativos (Alonso, 2011: 2). Las acciones colectivas que analizamos en este capítulo formaron parte de un proceso que activó y conectó las redes personales y colectivas en una red más amplia formada por las redes de las organizaciones participantes en la lucha contra la minería canadiense en distintas escalas. La movilización a través del conjunto de acciones colectivas obedeció a un proceso de reflexividad de la sociedad local que, entre otras cosas, hizo posible que una parte de ella superara la aceptación histórica de la minería en la región para, a partir de ello, reconceptualizar esta actividad en términos de riesgos ambientales.

Los procesos globales como la minería llevada a cabo por empresas transnacionales en localidades específicas con impactos igualmente específicos, constituye el espacio de reflexión sobre los procesos de motivación y de formación de los marcos interpretativos que llevan a la acción colectiva, así como el análisis sobre los retos que representa el abordaje de las múltiples dimensiones de la movilización y de sus motivaciones. A lo largo de este capítulo se sostiene que la percepción del riesgo ambiental se construye en procesos con características muy concretas del lugar, donde la acción colectiva puede ser parte de dicha construcción, revelando cuestiones estructurales más allá del problema de la des-

trucción ambiental, pero donde ésta forma parte a su vez del repertorio de motivaciones de la movilización.

MINERÍA CANADIENSE Y SOCIEDAD DEL RIESGO EN MÉXICO

La idea de la que parte esta investigación fue que la sociedad del riesgo mundial a la que hace referencia Ulrich Beck (1998) tendría necesariamente que probarse en un contexto local específico. Con "la sociedad del riesgo" Beck se refiere principalmente a los riesgos globales derivados de un súper desarrollo industrial, científico y tecnológico que, puesto al servicio del capital y sustentado en el dominio de la naturaleza, se expresa en consecuencias y riesgos socioambientales igualmente globales como los fenómenos de cambio climático, el agujero en la capa de ozono, o la proliferación de epidemias. Aplicada esta idea a un contexto local, tenemos que determinados riesgos son producidos en esta misma escala como resultado de un relativo –pero equivalente– súper desarrollo industrial, científico y tecnológico puesto al servicio del capital y del dominio de la naturaleza en los niveles municipal y estatal. Es decir, una cierta expresión de sociedad del riesgo localizada se vive desde poblaciones específicas y a partir de actividades económicas particulares con participación en el mercado mundial, como puede ser el caso de la minería canadiense.

En torno a este tipo de actividad económica se pueden conformar procesos políticos de resistencia y cambio social que son una vía de análisis de la acción colectiva y de la necesidad de movilización al interior de las sociedades del riesgo localizadas. Estas formas organizadas de resistencia que recurren a la acción pública, construyen una orientación discursiva que se condensa en demandas que no se pueden resolver tecnológica o científicamente, como es el caso de los riesgos, pero que al ser exhibidas se convierten en desafíos

puntuales para la sociedad y el gobierno locales. La acción colectiva y la movilización social en San Luis Potosí tienen un papel fundamental en que los riesgos de la minería canadiense estén definidos no sólo en términos técnicos y científicos, sino también en términos de problema social. En buena medida, es gracias a los que se han movilizado contra el potencial destructivo de la minería canadiense, que los riesgos ocupan un lugar importante no sólo en la política de seguridad de las empresas y en las regulaciones impuestas por el Estado, sino también, en el debate público y político en los niveles municipal, estatal y nacional.

Para Beck (1998), la diferencia fundamental entre las sociedades contemporáneas y su pasado, es que las sociedades contemporáneas se caracterizan esencialmente por la imposibilidad de prever los riesgos creados por su progreso científico y tecnológico. En todas las culturas y fases anteriores de desarrollo social, las sociedades se enfrentaron con amenazas de distintas maneras pero en la sociedad del riesgo actual, las sociedades y su ideal de progreso se encuentran confrontados con lo imprevisible de los riesgos y las consecuencias del medio ambiente. Con las sociedades del riesgo localizadas, igual que en la sociedad global, la autoproducción de las condiciones de vida social se convierte en problema y tema (Beck, 1998:237).

Las sociedades contemporáneas, basadas en el consumo, han tenido distintos niveles de éxito con el desarrollo de sus fuerzas productivas y han creado una enorme infraestructura técnico-científica para satisfacer las necesidades de su mantenimiento. Sin embargo, esta dinámica global, que ha tenido gran impacto en la transformación social y espacial de los mundos locales, ha detonado nuevas manifestaciones culturales, ha creado otras condiciones para la emergencia de nuevos actores, borra las barreras que contenían el mundo rural separado del mundo urbano y reconfigura las relaciones de poder asumidas como dominantes y hegemónicas.

En las sociedades del riesgo localizadas que siguen el patrón de la sociedad del riesgo global, se puede distinguir una transición de una sociedad industrial tradicional a una sociedad del riesgo cuando los sistemas de normas sociales fracasan ante los peligros desencadenados por la toma de decisiones; cuando la demanda de control saca a la luz que los sistemas normativos no cumplen y no hacen cumplir sus exigencias, razón por la cual se convierten en objeto del cuestionamiento social (Madrigal, 2009: 23).

Otro rasgo característico de dicha transición se observa cuando los cuestionamientos colectivos en torno a los peligros o riesgos son paralizados, reprimidos o disimulados asignándoles un lugar en el terreno de la pugna política. Una vez ubicados los cuestionamientos en este terreno, las sospechas y amenazas que guían la actuación tanto de las empresas como de las instituciones gubernamentales y la resistencia civil organizada, la probabilidad de los peligros, los riesgos y sus consecuencias son sometidos a una dinámica de afirmaciones, legitimaciones, promesas de control y descalificaciones que organiza los discursos dentro del conflicto de acuerdo con la lógica de relaciones de poder del contexto local.

El momento de transición es al mismo tiempo un proceso de redefinición colectiva de la aceptabilidad de los riesgos, es decir, un proceso de toma de decisiones que reorganiza localmente a la sociedad frente a una nueva circunstancia. Se trata de un proceso en el que también se produce una reflexividad social sobre los riesgos, una autocrítica social que no sólo es generada por una acumulación de conocimiento por vía de la experiencia, sino que también es producida por una nueva circunstancia histórica que pone a la vista las consecuencias de la racionalidad aplicada hasta el momento y los universos simbólicos con los que se ha justificado y potenciado la generación sistemática de riesgos y sus consecuencias incalculables para el mismo conocimiento alcanzado. El ries-

go siempre implica que el futuro se presenta como incierto, pero como proceso de reflexión social el riesgo muestra que lo que en el futuro puede suceder depende de las decisiones y acciones que se toman en el presente (Guitián, 2003: 284).

De acuerdo con Beck, existen cuatro factores con los cuales podemos juzgar la transición hacia la sociedad del riesgo y que fueron la base para analizar lo que he denominado "sociedades del riesgo localizadas":

1. Se vuelve sintomático que el progreso sea considerado como sustituto del consenso, es decir, que el progreso esté normalizado como el fin y que los riesgos estén normalizados como los medios para llegar a ello.
2. El proyecto de Estado de bienestar pierde su esencia utópica, lo que hace evidente a la sociedad sus límites y aspectos sombríos.
3. La paulatina desaparición del intervencionismo estatal en el terreno social y el proceso de acumulación de avances tecnológicos implican amenazas desconocidas, se configuran en una sola delimitación de la política que engendra, por una parte, derechos generalizados y admitidos en el margen del sistema político tradicional y, por otra, una cultura política ciudadana que busca nuevas formas de participación al margen del propio aparato gubernamental.
4. Un recorte de las posibilidades democráticas de intervención y al mismo tiempo el surgimiento de una necesidad de instancias democráticas para tomar en cuenta la crítica y las presiones de la opinión pública.

El caso de la minería canadiense resulta útil para analizar la presencia de estos cuatro factores en la transición de sociedades locales de la provincia mexicana como San Luis Potosí.

En primer lugar, se presume desde el Estado un consenso alrededor de la idea de que la minería transnacional es el camino del progreso para el municipio de Cerro de San Pedro y para la economía de la región.

En segundo lugar, el caso de la canadiense New Gold-Minera San Xavier, en el municipio de Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí, ha hecho patentes las limitaciones del Estado en los tres niveles de su aparato gubernamental frente a la naturaleza política de los riesgos generados por este tipo de empresas.

En tercer lugar, el desdibujamiento de la figura del Estado en el debate público sobre los riesgos de la minería canadiense, revela que una actuación permisiva por parte de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), así como una acumulación de avances tecnológicos en manos de esta actividad, han generado la necesidad de acciones colectivas para intervenir en el tema al margen del sistema político.

En cuarto lugar, el proceso de movilización ha hecho patente la necesidad de nuevas instancias que tomen en cuenta la crítica y la opinión ciudadana respecto de las decisiones tomadas y que se tendrán que tomar en el caso de Cerro de San Pedro.

La ciudad de San Luis Potosí le debe su origen a la minería. Las haciendas de beneficio y la organización social en torno a éstas vertebraron el país a través de sus vínculos económicos con el mercado mundial, así que llama la atención que los proyectos mineros empiecen a ser juzgados como riesgosos precisamente en los contextos mineros locales que están considerados como testimonios de bonanza y progreso desde los tiempos de la Colonia.

Las acciones colectivas y la movilización que se han articulado alrededor de los riesgos ambientales de la minería canadiense en el Valle de San Luis Potosí, muestran que existe una historia reciente de toma de decisiones en torno

al tema, que se ha traducido en la formación de nuevas amenazas, nuevos grupos agraviados y nuevas formas de rechazo e imposición que rebasan lo que la sociedad local alcanza a reflexionar sobre sus propias capacidades de participación política (Revilla, 2010:67) y sobre sí misma como sociedad minera. El proyecto de explotación minera en Cerro de San Pedro ha venido a significar una emergente reflexividad social como resultado del choque entre dos percepciones del riesgo distintas, por un lado, la percepción normalizada de los riesgos de la minería a través de la historia local, por otro lado, una percepción de riesgos normalizada a través de la ciencia y la tecnología actuales en el ramo, manifiesta tanto en el marco legal como en los métodos de control y evaluaciones probabilísticas de los riesgos por parte de la empresa minera canadiense.

ACCIÓN COLECTIVA, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y REFLEXIVIDAD SOCIAL EN TORNO A LA MINERÍA CANADIENSE EN SAN LUIS POTOSÍ

La movilización social por el medio ambiente ha mostrado que la combinación de valores materialistas y postmaterialistas sucede tanto en países de economías desarrolladas como en países con economías emergentes. Este es uno de los factores que ha hecho crecer la atención pública y el interés por el medio ambiente. Ni los países más industrializados han resuelto para siempre los problemas básicos de la subsistencia, ni los países menos industrializados han visto que la solución de sus problemas se encuentre en perseguir ese modelo. Ante las transformaciones ambientales globales como el cambio climático, el efecto invernadero o la lluvia ácida, incluso los países más desarrollados pueden tener mayores problemas dada la naturaleza contingente de estos fenómenos y el exceso de confianza en su propio desarrollo

económico, científico y tecnológico.[1] La confianza en el desarrollo económico, científico y tecnológico de las sociedades actuales se encuentra montada generalmente sobre una idea de "naturaleza desnaturalizada". Se trata de una idea de "naturaleza" hecha a la medida de la sociedad industrial, originada en el crisol del imaginario moderno que la concibe como un artefacto limpio de sustancias y causas finales, de espacios o tiempos privilegiados, como un ente separado de la sociedad y susceptible de control. La naturaleza existe entonces para ser analizada, transformada, replicada y administrada para beneficio de la industria, el mercado y el Estado (Rubert de Ventós, 1998: 143).

Es importante detenerse en lo anterior, ya que la movilización social por cuestiones del medio ambiente rompe aparentemente con esta forma instrumental de entender la naturaleza y a partir de dicha ruptura emerge la definición social de nuevos problemas que reclaman atención en el debate público y político. Las acciones colectivas en torno a los riesgos ambientales son un ejemplo de esto y tienen lugar en un momento histórico en el que dichas acciones parecen surgir de un cambio de percepción en la forma de entender la naturaleza de su entorno. Aunque la modernidad expresada en todo lo que rodea, confirma el principio de verdad de que la naturaleza ha sido dominada por el hombre, al mismo tiempo aparecen también, en forma contingente, los males producidos por esta forma de racionalizar el mundo. En este proceso, el papel de la esfera pública resulta crucial para la comprensión del cambio o ruptura de percepción, como

[1] Este parece haber sido uno de los aspectos más desconcertantes para la sociedad y gobierno norteamericanos en el año 2005, cuando el huracán "Katrina" impactó en las costas de Nueva Orleans causando daños materiales estimados en más de 75 mil millones de dólares y más de 2 mil personas fallecidas. Aunque el evento fue clasificado socialmente como el mayor desastre natural de la historia de este país, está claro que no fue únicamente un resultado del poder natural de las tormentas.

de la aparición y emergencia –en este contexto– de nuevos problemas socialmente definidos como tales, siendo este el caso de los riesgos derivados de la minería canadiense y sus métodos modernos de explotación.

Alberto Melucci (1999), teórico contemporáneo de los nuevos movimientos sociales, propone que las acciones colectivas, como en este caso las que han integrado la movilización social contra los riesgos de la minería canadiense en San Luis Potosí, tienen esencialmente una función simbólica y comunicativa que muestra a la sociedad la relación entre un problema concreto y la lógica de los sistemas complejos de códigos de poder y control. Asimismo, sacan a la luz lo que el sistema dominante no dice, a saber en este caso, que existen procesos reflexivos en la escala local que pueden cambiar la aceptabilidad histórica de los riesgos de la minería.

Las sociedades son producto de sus conflictos y éstos siempre han generado distintos tipos de acciones colectivas y movilización social. Pero en las sociedades contemporáneas, estas expresiones colectivas se han dejado de interpretar como objetos homogéneos, como agentes y desafíos grupales propuestos por personas que comparten objetivos comunes y que cuentan con lazos fuertes de solidaridad que se mantienen sin cambio, la movilización no es una voluntad colectiva uniforme que se propone la ruptura de los límites del sistema y no es una reacción colectiva al unísono con la que se encara la constitución del capitalismo monopolista de Estado y su lucha de clases para la transformación final de las estructuras de dominación (Melucci, 1999; Reichmann y Fernández, 1994; Tarrow, 1997; Laraña, 1999; Castells, 1974; Touraine, 1987).

Las acciones colectivas hacen la movilización social y ésta se organiza a partir de la desorganización. En la circunstancia que envuelve a la sociedad mexicana actual sobresale la coexistencia de conflictos preindustriales y propios de la sociedad industrial, así como conflictos que son discontinuos,

diferentes cualitativamente de aquellos precedentes, pero que hacen referencia al marco de relaciones de un orden social que no termina de diluirse (Melucci, 1999: 69-87). La movilización por el medio ambiente en esta otra circunstancia no puede aspirar a la configuración de coaliciones ecologistas y ambientalistas como ha sucedido en otros contextos y épocas. En México, la movilización ecológico-ambientalista combina formas de presionar a los actores gubernamentales y empresariales a través de acciones de tipo legal, con acciones creativas que ayudan a crear el marco de atención pública necesario para romper el silencio mediático local y estatal y, posteriormente, nacional.

Ahora bien, el lenguaje es el vehículo discursivo que se practica en el seno de cada formación social específica, es la matriz que condiciona, desde la propia coyuntura social y cultural, lo que pueden decir y lo que deben decir los distintos actores sociales involucrados en un campo de acción. En el lenguaje tenemos al portador de interpretaciones, tradiciones, formas de ver el mundo, definiciones, máximas, costumbres, usos, instituciones (Beriain, 1990: 14), mitos, creencias y otras representaciones que median nuestra interacción con el ambiente exterior, y nuestro ordenamiento de lo que Schütz denomina "la estructura del mundo social".[2]

La constitución de los individuos en sujetos de discurso, sucede a través del entramado complejo de formaciones ideológicas que proporciona a cada sujeto la realidad que percibe; dicha realidad es entonces un sistema de significaciones percibidas, aceptadas, y consideradas en sí mismas como evidencias. El discurso tiene muchos matices pero en ellos es posible encontrar formas discursivas con las cuales los sujetos actualizan las ideologías que los gobiernan (Robin,

[2] "La estructura del mundo social es significativa no sólo para quienes viven en ese mundo, sino también para sus intérpretes científicos. Al vivir en el mundo, vivimos con otros y para otros, y orientamos nuestras vidas hacia ellos" (Schütz, 1993: 39).

Regina, 1976, citada en Gutiérrez, Guzmán y Sefchovich, 1988: 81-84).

El tipo de relación entre discurso y sociedad por el que me interesé en esta investigación se encuentra en el "análisis crítico del discurso". Esta forma de analizar el discurso está tomada de Van Dijk (1999), quien formula sus primeros planteamientos en la lingüística del texto y la teoría de los actos de habla. Van Dijk propone una perspectiva crítica del discurso basada en el abuso del poder,[3] la dominación[4] y la desigualdad, que son practicados, reproducidos y combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato, se considera que así como la acción social es una forma de discurso, el discurso es una forma de acción social que hace un trabajo ideológico de legitimación de sus condiciones de producción, es decir, que la discursividad que produce el conflicto puede encauzarse a lo largo del tiempo para legitimar la dominación discursiva, definida ésta como el abuso de poder por medio del discurso (Van Dijk, 2004: 17).

Algunos sugieren que la percepción social[5] de la población mundial se ha movido cualitativamente a partir de la década

[3] En donde el poder se define como control social en dos formas, la primera que subraya el poder de controlar el discurso, y la segunda que subraya el poder del discurso para controlar las mentes de las personas. Las personas controlamos el discurso para incidir en las mentes de otros y eventualmente incidir de manera sutil e indirecta en sus acciones. En lugar del poder coercitivo para controlar las acciones de las personas por medio de la fuerza, el poder moderno es un poder esencialmente discursivo (Van Dijk, 1999: 24-25).

[4] La dominación se define aquí como el ejercicio de poder que no se basa únicamente en el interés de quienes lo ejercen, sino que va contra los intereses legítimos de los que son controlados o dominados. El ejemplo más desafortunadamente popular en nuestro país es el del personaje o grupo político que usa el poder para enriquecerse con dinero de carácter público.

[5] Por percepción social entendemos aquella percepción en la que influyen los factores sociales y culturales y que tiene que ver tanto con el ambiente físico como social (Vargas, 1994: 53).

de los sesenta, redefiniendo viejas luchas, haciendo emerger otras y creando un espacio de batalla discursiva donde el manejo, control, manipulación, difusión del lenguaje y las imágenes a través de los medios de comunicación, juegan un papel fundamental. Pero es tal la heterogeneidad temática que pueden incluir las protestas ambientales en el México del siglo XXI, que quizá hoy más que nunca resulta impreciso hablar de movimientos ambientalistas unificados o en proceso de unificación. Las acciones colectivas y la movilización social participan en la redefinición de los cambios en los espacios físicos y sociales desde lo local, cuestionando la dominación discursiva, poniendo a la vista las asimetrías de poder generadas por los procesos de globalización en lo local, así como sacando a la luz –en el debate político– que estos procesos locales de conflictividad representan en sí mismos distintas formas de globalización contrahegemónica, es decir, formas de incidir, de transformar, de ajustar, de darle la vuelta, de sacar provecho –desde el lugar– al supuesto proceso global de homogenización.

En casos como el de San Luis Potosí, las acciones colectivas y la movilización contra los riesgos de la minería canadiense sugieren que la sociedad local, o por lo menos una parte de ella, atraviesa un momento importante de reflexividad que está creando condiciones para la emergencia de nuevos actores que reaccionan a la desinformación, a la incertidumbre, a los riesgos que implica la falta de mecanismos eficientes para vigilar el cumplimiento de leyes y reglamentos ambientales, al abuso de poder, la corrupción, la voracidad del mercado y la desintegración comunitaria derivados de esta actividad.

La movilización social y las acciones colectivas en general son procesos y dinámicas que pueden ser abordadas desde una gran gama de opciones teóricas. En este caso, intenté aproximarme primero a la noción de "nuevos movimientos sociales" para enfocar la sociedad civil como un conjunto de

actores vinculados al Estado en cuanto ciudadanos, pero no definidos como actores propiamente económicos o grupos de interés, aunque tampoco como actores políticos (en relación con los partidos políticos), pese a que en general hacen política (Duhau, 2002: 125).

Entiendo que la novedad de los movimientos sociales en la actualidad no radica en que sean ajenos al espacio de la política o en que se mantengan al margen de la institucionalización, sino que los nuevos movimientos sociales están insertos en contextos de emergencia de distintos modelos de desarrollo[6] y de reconfiguración de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. De acuerdo con lo anterior, la llamada nueva movilización social se basa en la intersubjetividad, ya que lo que lleva a la acción y al conflicto es en sí sintomático de un cambio cultural más profundo y de nuevos valores que están incidiendo en la manera de interpretar la realidad (Godàs, 2003: 506).

Las acciones colectivas muestran una tendencia a trascender la estructura de clases, lo cual implica la emergencia de nuevas dimensiones identitarias. Estas formas de interacción no se guían por una definición clara entre el individuo y la colectividad, entre el líder y sus seguidores, ya que utilizan una diversidad de tácticas y estrategias de acción, tanto colectivas como individuales, a veces más radicales, otras más moderadas (Della Porta,1999) para evidenciar

[6] El nuevo modelo de desarrollo al que nos referimos, es también llamado "modelo neoliberal". Dicho modelo está asociado a una apertura generalizada de mercados, a un debilitamiento del Estado en su concepción de principal benefactor de las necesidades de la sociedad, y a una crisis de representatividad política que modifica los elementos constitutivos de la acción colectiva, en suma, se trata de una transición de modelos de desarrollo que implica un cambio en la relación histórica entre la esfera económica, la esfera política (sistema político), y la esfera social (sociedad civil) (Zapata, 2002).

una crisis de credibilidad en los canales convencionales de participación (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994: 6-8).

Las acciones colectivas de la movilización ambientalista aparecen en la escena actual para subrayar que estamos en una sociedad productora de políticas que incrementan y reparten los riesgos de la modernidad por todo el planeta. El ambientalismo moderno fluye como un discurso público que presenta la preocupación por el ambiente como un proyecto coherente, como un espacio discursivo que sirve de marco universal de referencia (Eder, 1996: 164). En el momento actual, en el que el mundo atraviesa por procesos de globalización, es la distribución de riesgos, más que la distribución inequitativa de la riqueza, lo que moviliza a numerosos colectivos sociales (López y Luján, 2000: 20).

En las sociedades contemporáneas se cuenta con desarrollos tecnológicos que producen nuevas formas de riesgo, en relación con los riesgos y peligros del pasado. Por un lado, se encuentra la capacidad potencial para producir daños inesperados tanto en su alcance territorial como en sus consecuencias ecológicas. Por otro lado, se encuentra el resultado de vivir en sociedades cada vez más tecnificadas donde la emergencia de una realidad mundial denominada "modernización reflexiva" se caracteriza por la distribución inequitativa de males o riesgos de males, a diferencia de la "modernidad simple" en la que el eje que estructuraba la sociedad industrial era la distribución inequitativa de la riqueza o la distribución de bienes (Beck, 1998).

Las acciones colectivas y la movilización ambientalista subrayan la presencia de nuevas circunstancias locales en las que existe una profunda debilidad de poder y una crisis de intervención y soberanía de las instituciones del Estado (Martí I. Puig, 2004: 79-90). Este es un punto en el que las movilizaciones sociales ambientalistas conectan entre sí y que eventualmente hace posible la emergencia de luchas transnacionales que son menos visibles en las calles que en

los medios de comunicación. En la "era de la información" las demandas sociales organizadas en acciones colectivas llegan más lejos. Sin embargo, llegan con un tratamiento mediático que exige cada vez mayor dramatismo a los reclamos sociales para poder llamar la atención de la opinión pública. Los diferentes costos que puede tener para las movilizaciones sociales esta condición dramática de aparición y existencia pública forman parte de las circunstancias particulares que enfrenta la resistencia organizada en cada caso. La dimensión teatral y de *performance* en la que se ven envueltas las movilizaciones ambientales para lograr visibilidad social y acceso al debate en la esfera pública, los convierte en una especie de mecanismo colectivo de reflexión a través del cual cada realidad local se mira a sí misma en función de su entorno.

Las movilizaciones ambientalistas dependen hasta cierto punto de la forma en que se construyen los problemas en el debate público, pero tienen un margen de acción política en las posibilidades que abre la interrelación entre el nivel de la experiencia individual, el nivel de la interpretación colectiva y el nivel de la estructura social local (Rucht y Neidhardt, 2002: 10). El sentido de urgencia en la construcción de los problemas ambientales locales se conecta directamente con la velocidad a la que circulan los discursos, las imágenes y las noticias acerca de lo que pasa. La inmediatez impide a los individuos y los grupos tomar distancia y reflexionar con calma la acción, la identidad, la participación, la identificación de las fuerzas que tienden a la disgregación, la manera de nombrar al oponente. La acción, la participación y la identidad son sólo algunas de las posibilidades de interrelación que se generan, pero los participantes de la movilización deben tener la fluidez de la dinámica social actual donde no todos alcanzan el mismo ritmo y existen distintos tipos de activismo que subyacen a las acciones colectivas con las que finalmente se da a conocer una problemática ambiental en común.

Autores como Maslow (1954) propusieron en el siglo XX que las sociedades se mueven a partir de una jerarquía de necesidades primarias y secundarias, en donde aspectos sociales como el medio ambiente, se encuentran valorados como necesidades de segundo orden. En este sentido, el cambio de preocupación por lo ambiental sería entonces una prueba de que se han logrado mejores condiciones socioeconómicas. La garantía de la satisfacción a largo plazo de las necesidades físico-biológicas y materiales elementales generaría las condiciones para nuevas necesidades como la calidad de vida y el cuidado del medio ambiente (Inglehart, 1971). Pero en buena parte del mundo, como lo hace patente la minería canadiense en San Luis Potosí, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población y la garantía de satisfacción de sus necesidades primarias es mero discurso. Las sociedades menos desarrolladas tienen subordinado su bienestar a múltiples formas de dominación política y económica que impiden que se generalicen sus problemas ambientales, esta forma de ejercer el poder a través de la obstrucción, obedece a una presión ejercida por fuerzas económicas y políticas que ante la inestabilidad o la falta de control, pueden por lo menos evitar el acceso de ciertos problemas a la esfera pública (Crenson, 1974). No obstante lo anterior, los problemas ambientales, como los riesgos, pueden surgir y tener acceso al debate público en forma de acción colectiva y de movilización social.

Existen muchos tipos de riesgos y también muchos obstáculos. La selección de riesgos es un proceso relacionado con factores sociales y culturales propios de cada contexto, ya que cada sociedad produce su perspectiva particular del medio ambiente natural, y en tal medida, produce sus propios niveles de tolerancia a determinados riesgos. La tolerancia o aceptabilidad de unos riesgos a diferencia de otros se relaciona con una especie de voluntad cultural de aceptar los daños (Douglas y Wildavsky, 1982) por un lado, pero tam-

bién, en un sentido más concreto, se relaciona con la forma en que originalmente son presentados los riesgos ante quienes los desconocían. Esto remite a un proceso de diseño de dicha forma de presentación de los riesgos que incide, aunque con frecuencia no se le perciba así, en el grado de compromiso público (Best, 1987) que emerge para combatirlos.

La arena pública es donde los riesgos seleccionados y construidos como un tema y un problema social, compiten por la atención, por la legitimidad y por los recursos sociales (Hilgartner y Bosk, 1988) para hacerlos visibles. La definición colectiva de los riesgos ambientales en el caso de la minería canadiense en el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, es producto de un conjunto de discursos fragmentados y contradictorios que colisionan en la esfera pública (Hajer, 1995) donde también se compite por la atención y por el compromiso público con otros temas y otros problemas como la expansión urbana y sus impactos sobre el acuífero profundo del Valle de San Luis, el incremento de la contaminación del aire en la capital por las emisiones de fábricas y vehículos, etc. Pero los riesgos siempre consisten en valoraciones futuras y, por lo mismo, se refieren a lo que todavía no se ha concretado, los riesgos son abstractos hasta que se tornan en peligros o en situaciones indeseables o lamentables. En el caso de las actividades extractivas que está llevando a cabo desde 1995 la empresa canadiense New Gold-Minera San Xavier a 12 kilómetros de distancia del centro de la ciudad de San Luis Potosí, las acciones colectivas y la movilización social contra los riesgos resultantes de sus métodos de explotación, han logrado aglutinar durante todos estos años distintas valoraciones abstractas sobre lo que puede pasar con el medio ambiente a escala local. Este proceso de reflexividad en torno a las decisiones tomadas para permitir la llegada, la operación y la permanencia de este proyecto por encima de sus riesgos para la población, es lo que me permitió proyectar el caso como un ejemplo

de emergencia de una sociedad del riesgo localizada en nuestro país.

DESAFÍOS DEL ANÁLISIS DE LA ACCIÓN COLECTIVA Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL COMO PROCESO DE REFLEXIVIDAD EN EL CASO DE CERRO DE SAN PEDRO

El análisis de las acciones colectivas y la movilización social contra los riesgos ambientales de la minería canadiense en el Cerro de San Pedro de San Luis Potosí, representó también un reto de carácter práctico, la necesidad de reconstruir el proceso a través del cual dichas acciones y movilización crearon una esfera de atención pública en la esfera local, estatal y nacional.

Ante tal necesidad, recurrí a la propuesta constructivista de los problemas sociales para descomponer en fases lo que se ha presentado como un proceso de conflictividad de larga duración. De acuerdo con Spector y Kitsuse (1987) el proceso de definición social de una problemática atraviesa por cinco etapas: 1) la aparición del problema, 2) la emergencia del problema social, 3) el reconocimiento y la legitimidad de los grupos que conforman cada uno de los actores e intereses, 4) la re-emergencia de las demandas y la inconformidad de los grupos originales ante los procedimientos establecidos por las instituciones oficiales y agencias de gobierno y 5) el relanzamiento de los grupos denunciantes de las instituciones oficiales y agencias de gobierno, ante la falta de respuesta a sus demandas. De acuerdo con el estudio de caso, hallé que se podían agregar a este marco explicativo dos fases más: 6) la constitución de una demanda específica (los riesgos ambientales) como la base discursiva de las acciones colectivas y la movilización, y 7) la internacionalización de la protesta local y de la demanda específica, es decir, la fase en la que el caso de Cerro de San Pedro se inserta en la esfera

del debate público internacional estableciendo alianzas con organismos extranjeros de derechos humanos, ecologistas y ambientalistas, así como con organizaciones civiles que luchan puntualmente contra los impactos socio-ambientales de la minería destructiva o mega minería en general o contra los impactos de la minería canadiense de tajo a cielo abierto en particular.[7]

El caso de Cerro de San Pedro es un proceso que se ha prolongado por más de 16 años siendo este uno de sus principales retos teórico-metodológicos. Inicié con una cuestión elemental que serviría para relacionar la sociedad del riesgo mundial y la reflexividad social local con la movilización: la pregunta sobre cómo se originó esta movilización y sobre qué tipo de recursos y acciones colectivas se construyó el discurso de los riesgos de la minería canadiense. La pre-

[7] En esta fase viene una paradoja importante, ésta es también la fase de la lamentable derrota –en su propio territorio– de la coalición de grupos opositores a la empresa New Gold-Minera San Xavier que se internacionalizó bajo la figura del Frente Amplio Opositor (FAO). Con excepción de junio de 2004, cuando el presidente de la entonces Metallica Resources dio a conocer en un boletín de prensa que la empresa cesaba operaciones y que había tenido que despedir a 150 trabajadores, en ningún otro momento los recursos de movilización social y en particular los recursos jurídicos utilizados y ganados por el FAO en distintas instancias nacionales e internacionales, lograron detener la destrucción de la montaña conocida como Cerro de San Pedro, representada en el escudo de armas del estado de San Luis Potosí. En 2011 la empresa siguió obteniendo el oro y plata de este lugar y sólo en este año reportó ganancias por más de 280 millones de dólares. En abril de 2013, mientras se escribe la versión final de este capítulo, la empresa informa en su portal de Internet que Minera San Xavier, subsidiaria mexicana de New Gold, tiene distintivo ESR, "Empresa Socialmente Responsable" por cuatro años consecutivos, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía, así como reconocimiento como "Empresa Segura" de tercer nivel (más alto) por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por la implementación de Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo" (New Gold, 2013).

gunta lleva implícito el supuesto de que detrás de lo que se llama movilización social se esconden muchas y disímbolas manifestaciones colectivas.

Las acciones colectivas, en su diversidad de formas, son producto de la reflexividad de los sujetos que participan en ellas, en la acción se cumple el ciclo pensar-hacer que sintetiza o condensa el aprendizaje del grupo y los distintos tipos de reflexión a los que llegan sus integrantes. Así, en la primera fase del caso, el periodo de aparición del problema en la escena local entre los años 1995 y 1997, se muestra uno de los primeros recursos utilizados para actuar colectivamente, la conformación de una primera coalición o alianza de grupos y particulares bajo la figura del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro, integrado principalmente por habitantes del lugar y algunos avecindados en la capital pero con alguna propiedad en el pueblo de Cerro de San Pedro. Durante esta fase la movilización social contra el proyecto minero canadiense en Cerro de San Pedro se ocupó de crear redes de solidaridad en la ciudad de San Luis Potosí y buscó aprovechar las oportunidades para difundir su causa en los medios de comunicación locales, principalmente en la prensa.

En cuanto a lo primero, se concretó la alianza con Pro San Luis Ecológico, A.C., una organización ambientalista que venía de participar en el caso del confinamiento de desechos tóxicos de la empresa norteamericana Metalclad en el municipio potosino de Guadalcázar; en cuanto a lo segundo, las intermitentes declaraciones de los integrantes del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico de Cerro de San Pedro y las ocasionales informaciones en formato de reportajes que publicaron prácticamente todos los diarios de la capital potosina durante esta fase, colocaron el problema en la escena y debate públicos a nivel estatal.

Los riesgos del nuevo proyecto de explotación en manos de una minera canadiense se basaban hasta este momento

en dos tipos de informaciones, por un lado, en lo comunicado en la prensa por el secretario de Fomento Minero del gobierno del estado en julio de 1996,[8] quien decía que no se trataba sólo de hacer una mina y nada más, sino de un compromiso con la población y el medio ambiente. Con esta declaración el secretario sembró literalmente el tema del impacto ambiental del proyecto, lo que sería retomado por los grupos opositores como una necesidad de información y de aprendizaje al respecto. Por otro lado, con respecto a la información que venía de los representantes de la entonces Metallica Resources, también empresa canadiense, durante los primeros encuentros con los habitantes de la zona, en el contexto de una misa dominical, dieron a conocer los alcances de su proyecto de explotación de oro y plata en Cerro de San Pedro afirmando que la minera traería empleos, pero requería de la reubicación de la gente y de algunos edificios antiguos, entre ellos la iglesia de San Pedro y la de San Nicolás Tolentino. El episodio quedó marcado en la historia del proceso como una especie de mito fundador a partir del cual se explica la necesidad de actuar de forma organizada para evitar la desaparición de la historia del pueblo de Cerro de San Pedro y de sus habitantes.

Como un anexo al mito fundador, se habla de que antes de que sucediera el encuentro entre los representantes de la empresa y los habitantes del pueblo en el marco de una misa dominical, el delegado estatal en turno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, acudió muy preocupado al pueblo de Cerro de San Pedro para decir que "se venía el proyecto en grande" y que lo único que podía detenerlo era la resistencia de los propios habitantes del lugar.

Mitos o no, la emergencia del problema localmente vinculó desde el inicio el conflicto con los riesgos de afectación

[8] Humberto del Río Pedrajo, secretario de Fomento Minero del gobierno del estado, aparece como gerente de relaciones públicas de Minera San Xavier en febrero de 1998.

a la población y al pueblo de Cerro de San Pedro y comunidades aledañas. Los primeros focos de alerta fueron sobre los inmuebles antiguos ubicados en el pueblo, entre ellos las dos iglesias del siglo XVII. Asimismo, comenzó a señalarse el riesgo de que desapareciera la montaña emblemática conocida como "Cerro de San Pedro", lo cual efectivamente ya sucedió. La atención sobre la montaña como elemento cultural de la población local fue la base sobre la que se formó posteriormente la interpretación de los riesgos socioambientales derivados de la exposición a la minería canadiense a cielo abierto. La primera forma de definir socialmente el problema con las pretensiones de la minería canadiense, fue en términos de riesgos de afectación física al patrimonio histórico y cultural contenido en el pueblo y sus escasos habitantes. Estos riesgos para la historia y la cultura locales, se hallan incluidos en el nombre de la primera forma de organizar la resistencia que fue el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro.

El reto de comprender el proceso a través del cual las acciones colectivas y la movilización social se estructuraron en un proceso de reflexividad entre algunos sectores de la población local, me llevó a asumir el concepto de coyuntura para intermediar entre las acciones colectivas y el largo plazo, entre la acción de los sujetos y la estructura social.

El análisis coyuntural me permitió hacer una lectura agrupada de acciones y de su relevancia en cada fase, sin perder de vista su lugar en el proceso como conjunto. Por razones de espacio, en este capítulo ilustraré únicamente algunos momentos coyunturales en los que las acciones apuntan hacia dicho proceso de reflexividad.

Entre los años 1997 y 1998, dentro de la segunda fase, las acciones colectivas que articularon los grupos opositores cobran una nueva forma con la participación de varias organizaciones que manifestaron su rechazo al proyecto en Cerro de San Pedro. Aparece entonces en el frente de resistencia

la organización civil denominada Educación y Defensa Ambiental A.C., que anunciaba su alianza con Pro San Luis Ecológico A.C. y el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro. Los recursos de movilización y de presión que se utilizaron en esta fase fueron tanto desplegados con firmas en la prensa local, como manifestaciones frente a las oficinas estatales del INAH y de la entonces Semarnap,[9] así como solicitudes por escrito a la empresa Minera San Xavier y a la misma Semarnap para que se presentara públicamente la manifestación de impacto ambiental (MIA). Una vez que dicho documento se pudo consultar, se actuó a través de Pro San Luis Ecológico, A.C., para denunciar en los medios de comunicación locales que la MIA no contaba con un estudio detallado de riesgos en el que se abordaran los posibles problemas con el agua. Durante esta fase la alianza opositora aprendió que entre los posibles problemas con el agua se encontraba el excesivo consumo que requiere la minería de tajo a cielo abierto y en particular los procesos de lixiviación.[10] Se empezó a hablar

[9] "El 30 de noviembre del año 2000, se cambió la Ley de la Administración Pública Federal dando origen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El cambio de nombre va más allá de pasar el subsector pesca a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) pues, de lo que se trata es de hacer una gestión funcional que permita impulsar una política nacional de protección ambiental que dé respuesta a la creciente expectativa nacional para proteger los recursos naturales y que logre incidir en las causas de la contaminación y de la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad. La Semarnat ha adoptado un nuevo diseño institucional y una nueva estructura ya que actualmente la política ambiental es una política de estado, por lo que el medio ambiente adquiere gran importancia al establecerse como un tema transversal inserto en las agendas de trabajo de las tres comisiones de gobierno: Desarrollo Social y Humano, Orden y Respeto y Crecimiento con calidad" (Semarnat, 2012).

[10] La Norma Oficial Mexicana NOM-155-Semarnat-2007, publicada en el *Diario Oficial* del viernes 15 de enero de 2010, establece entre los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de

entonces de otro aspecto más concreto de los riesgos que se corren con la minería moderna y en especial de los riesgos de mayor sobreexplotación de los acuíferos profundos en la zona que desde 1961 estaban ya decretados en estado de

---

minerales de oro y plata, "...que para prevenir y controlar los efectos generados en la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas, la Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan la adecuada ubicación y formas de los depósitos de residuos de sistemas de lixiviación y establecimiento de beneficio de los minerales. Que debido a los impactos significativos que los residuos provenientes de plantas de beneficio de minerales producen sobre el medio ambiente, se hace necesario su control. Que los patios de lixiviación son uno de los sistemas para la disposición de los residuos sólidos generados por el beneficio de minerales incluidos en el artículo 17 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y deben reunir condiciones de máxima seguridad, a fin de garantizar la protección de la población, las actividades económicas y sociales y, en general, el equilibrio ecológico. Que el método de prueba que establece el procedimiento para determinar la peligrosidad de los minerales lixiviados o gastados, propuesto en este proyecto de Norma Oficial Mexicana fue desarrollado y estandarizado para determinar las características que los hacen peligrosos por su toxicidad a matrices sólidas, como son los residuos mineros y que está aceptado por la comunidad científica nacional e internacional" (p. 10, primera sección). Más adelante en la introducción menciona: "la lixiviación de minerales es uno de los métodos más utilizados en la actualidad para la extracción de metales preciosos debido a su relativa simplicidad operativa, tecnológica y a su bajo costo de inversión en relación con otros métodos. Los principales problemas ambientales de la operación de un sistema de lixiviación se asocian con el potencial de generación de drenaje ácido y la movilidad de metales del mineral lixiviado, así como por la pérdida de estabilidad del sistema. A nivel internacional son reconocidos los efectos ambientales que se pueden generar debido al inadecuado manejo de este tipo de sistemas de beneficio de minerales. Los impactos ambientales pueden ser significativamente minimizados a través de la aplicación de las mejores tecnologías ambientales que permitan el adecuado diseño, construcción, operación y eliminación de toxicidad de las instalaciones; así como de prácticas para el cierre definitivo y la restauración de este tipo de operaciones" (*Diario Oficial de la Federación*, 2010: 12, primera sección).

veda por el gobierno federal. Comenzó a hablarse también de los riesgos para la flora y fauna del lugar, de los riesgos de contaminación de la calidad del aire de la población del Municipio de Cerro de San Pedro y de los municipios aledaños entre los que se encuentra la ciudad de San Luis Potosí,[11] asimismo, en esta fase surgió el tema de los riesgos para la salud de la población del Valle de San Luis por su exposición al manejo y utilización de grandes cantidades de explosivos, de cianuro y de otros químicos necesarios para los procesos de extracción del oro y la plata.

En el primer bimestre de 1998, después de que el gobierno estatal contrató a una empresa canadiense para atender el problema de abatimiento de los mantos acuíferos, hecho que se realizó con una cobertura mediática espacial y en presencia del presidente del país y del gobernador general de Canadá, las acciones colectivas dieron un giro propositivo y a través de Pro San Luis Ecológico A.C., nuevamente se anunció a los medios locales un proyecto alternativo de desarrollo turístico para el pueblo de Cerro de San Pedro, con el objetivo de reactivar la economía en el lugar y sacarlo del olvido en el que se había quedado después de las evaluaciones realizadas en los años setenta por varias compañías mineras para determinar el tonelaje y calidad del depósito explotable (Mining Watch, 2006).

El proyecto nunca se concretó y para marzo de 1999, la empresa Minera San Xavier anunció que en abril del siguien-

[11] Uno de los aspectos en los que no se pudo profundizar en esta investigación fue la repentina desaparición del foco de atención del conflicto, instalado en esta cabecera municipal, de las localidades y colonias que rodean al pueblo de Cerro de San Pedro. La población de Portezuelo, Cuesta de Campa, La Nueva Zapatilla, Divisadero, Calderón, Jesús María, Joyita de la Cruz, Granjas de San Pedro, Real del Potosí y La Florida, entre otros, también se encuentran dentro del perímetro de impacto del proyecto minero canadiense y, sin embargo, no aparecen más que ocasionalmente incluidas en la historia discursiva de esta movilización.

te año iniciarían los trabajos de explotación del proyecto Cerro de San Pedro, después de haber concluido la etapa de preparación de caminos e infraestructura. Por su parte, la Semarnap entregó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental para la operación de Minera San Xavier en San Luis Potosí, mientras que la "Coalición de Grupos Opositores",[12] que para entonces ya se presentaba con este nombre, realizó una manifestación pacífica en la toma de protesta del nuevo arzobispo de la ciudad realizada en el auditorio Miguel Barragán. Días más tarde, daban a conocer en los medios que recibieron en la capital y en Cerro de San Pedro, la visita de una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con la presencia del Subcomandante Marcos, con quienes realizaron una marcha de protesta solidaria por el camino antiguo a Cerro de San Pedro y un mitin en la Plaza de Fundadores. Unos días después, Greenpeace México anunciaba su apoyo a la resistencia y a la defensa del medio ambiente que se hacía en este caso.

Las acciones colectivas en este momento coyuntural marcan una diferencia respecto a las acciones que se realizaron en 1998. Los recursos de movilización como acudir a la toma del nuevo arzobispo para hacer visible la protesta o la realización de una marcha y un mitin con la presencia de los delegados del EZLN, son más estratégicos e incluyen la toma pública de espacios como el camino antiguo a Cerro de San Pedro y la Plaza de los Fundadores, ambos espacios importantes para llamar la atención de la opinión pública local. La espacialidad de las acciones colectivas juega un papel importante en la construcción de la denuncia de los riesgos que corre la sociedad local ante la minería canadiense y ponen a la vista que dichos riesgos fueron omitidos en la decisión de autorizar sus operaciones en Cerro de San Pedro.

[12] Integrada por Educación y Defensa Ambiental A.C., Pro San Luis Ecológico A.C. y el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro.

En la transición hacia lo que identifiqué como la fase 5, se encuentran momentos coyunturales que ilustran el mayor reto teórico-metodológico que enfrenté para el estudio de las acciones colectivas. Seguirle la pista a todas las acciones realizadas por los grupos de la coalición opositora resultaba muy complicado desde un simple registro de observación empírica de marchas, plantones, festivales culturales, etc., a manera de espectador solitario. Intenté entonces mirar desde el interior de la propia resistencia, incluyéndome en su red de correos electrónicos, acudiendo a reuniones de organización y a actos públicos como activista. La observación de las dificultades para conciliar distintas perspectivas del problema y distintas expectativas de los participantes en la movilización social, me llevó a decidir que la mejor forma de continuar con el estudio de caso era centrarme en uno de los principales productos del proceso de reflexividad que venía observando en las distintas fases, la formación de coaliciones discursivas y lo que llamé esquemas argumentativos que sintetizan el universo discursivo de los tres actores principales en pugna: la empresa minera canadiense, la sociedad civil organizada y el Estado mexicano.

La definición colectiva de los riesgos ambientales se construye a partir de un conjunto de discursos fragmentados y muchas veces contradictorios (Hajer, 1995) que entran en fricción y producen efectos en la esfera pública. La interacción discursiva de las partes en conflicto, a partir de lo que ellos mismos construyeron como un problema social, nos muestra el despliegue de argumentos que se agruparon en el proceso de conflictividad como resultado de muchos discursos encontrados, contradictorios o hasta dispersos y mitificados, pero a través de los cuales cada una de las partes fue construyendo al otro como contrario o como aliado de sus propios intereses y objetivos. El discurso de los riesgos ambientales se formó a través de la interacción y el debate públicos haciendo observables las relaciones de poder y de

dominación con las que los grupos en resistencia viven y se mueven para participar en lo que les interesa o les preocupa.

Como investigador en este caso de movilización contra la minería canadiense, el discurso fue una especie de "muleta" clave para transitar en un fenómeno tan complejo como la acción colectiva y su relación con la percepción de riesgos ambientales. El discurso significó una estrategia de acceso a los factores sociales y culturales que incidieron en la construcción colectiva de la aceptación y percepción pública de los riesgos del medio ambiente en el caso de Cerro de San Pedro. A partir de ello, me quedó claro que no se pueden reducir las acciones colectivas a su práctica, se debe complementar el análisis de los procesos de reflexividad social con la parte discursiva de los actores. Discurso y acción son dos procesos cruciales para la formación de una percepción de los riesgos en poblaciones de tradición minera como Cerro de San Pedro y la ciudad de San Luis Potosí, estos son procesos en los que se avanza con la paciencia del trabajo a pico y pala como se hacía en la vieja minería.

En abril de 2006, la "Coalición de Grupos Opositores" ya se había convertido en el "Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier" (FAO) e incluía una red más amplia de organizaciones y colectivos locales, nacionales e internacionales. El FAO bloquea con barricadas una de las entradas a las instalaciones de la empresa. Con esta acción, denuncian ante los medios de comunicación nacionales que la empresa no detenía sus operaciones, después de que la Semarnat dejó sin efectos los permisos ambientales y después de que esta secretaría le había instruido para que elaborara y presentara un nuevo estudio de impacto ambiental.

En este episodio se hace evidente que el discurso y la acción son procesos paralelos que no siempre se corresponden. A través del debate público sobre los riesgos que corre el medio ambiente del Valle de San Luis Potosí por las actividades extractivas de la minería moderna, se articulan

los discursos de las partes pero no sus actuaciones que por momentos parecen inconexas o exageradas. Las actuaciones particulares de la resistencia al proyecto minero, por ejemplo, parecen a simple vista congruentes con el discurso de los riesgos ambientales, en el sentido de un rechazo a la idea de correr dichos riesgos a cambio de ganancias económicas que no se quedan en la población local, pero en realidad, desde una lectura de las relaciones de poder y de dominación, el asunto de fondo es cómo se genera esa necesidad de escenificación pública del rechazo a los riesgos en un contexto social y cultural particular.

De esta manera, la acción colectiva, que se puede asumir como acción conflictiva, se vuelve una forma enunciativa que reacciona a la dominación discursiva, no sólo desde la ofensa, desde el agravio o desde los riesgos que se perciben para una sociedad local, sino también, desde el universo de significación formado por el conflicto y que tiene su soporte en formas pragmáticas y de lenguaje, si bien el poder es el elemento que abraza todas las formas de articulación social.

La dominación discursiva requiere de un acceso privilegiado a recursos específicos como el dinero, la información, el conocimiento, o la comunicación pública de alcance masivo. De hecho, el acceso privilegiado a formas específicas de discurso como el que mueven los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, los grupos de académicos o las declaraciones de científicos especialistas o expertos y de los políticos, son en sí mismas recursos para ejercer el poder.

No obstante, en este caso particular, dicha dominación discursiva que veremos más adelante condensada en los esquemas argumentativos de los tres actores relevantes, generó en forma paralela un proceso de reflexión de la sociedad local respecto a la presencia de un nuevo proyecto minero al pueblo histórico de Cerro de San Pedro que, acompañado de acciones y discursos institucionales, subversivos y em-

presariales, creó el marco para que algunos sectores de la población, entre ellos los grupos al frente de la resistencia, pudieran superar la aceptación histórica de la minería en el Valle de San Luis Potosí, actualizando así el significado de esta actividad en términos de riesgos de contaminación ambiental para toda la región.

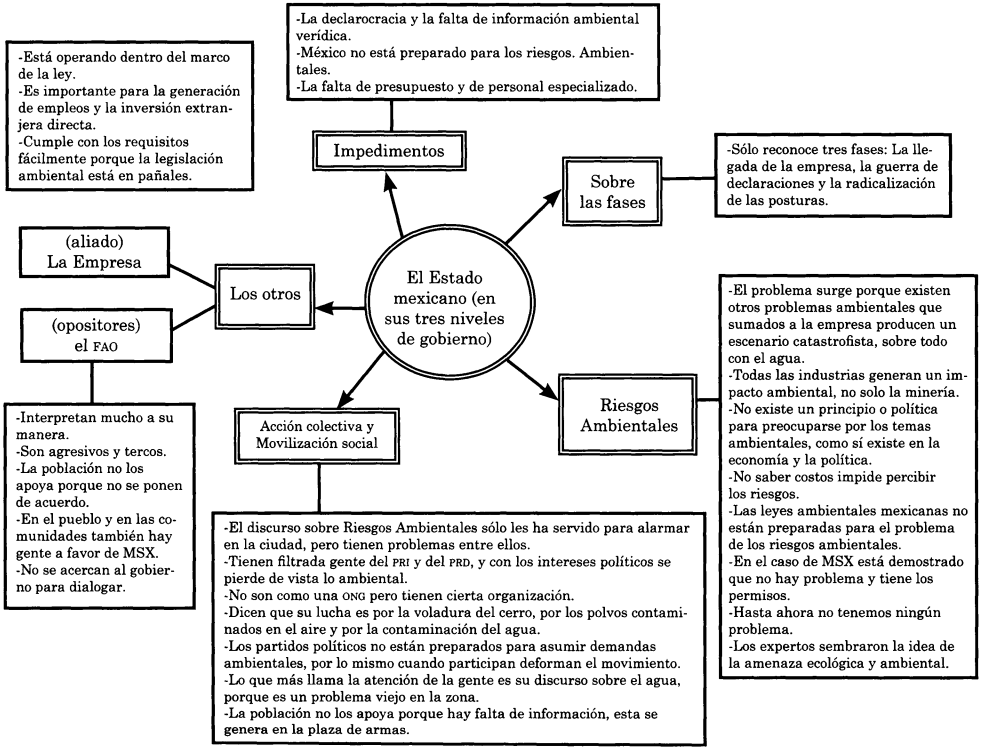
EL UNIVERSO DISCURSIVO DE LA DOMINACIÓN Y LA REFLEXIVIDAD SOCIAL A PARTIR DE ESQUEMAS ARGUMENTATIVOS

En los esquemas argumentativos que presentamos a continuación se encuentran cinco tópicos comunes a las tres partes en las que agrupé a los participantes en el proceso de conflicto del caso de Cerro de San Pedro. Estos cinco tópicos, ejes del análisis de las acciones colectivas y de la movilización de grupos e intereses en el caso, obedecen a un intento de articulación entre el planteamiento teórico macro de la sociedad del riesgo y sus dimensiones locales en el caso de la industria minera canadiense.

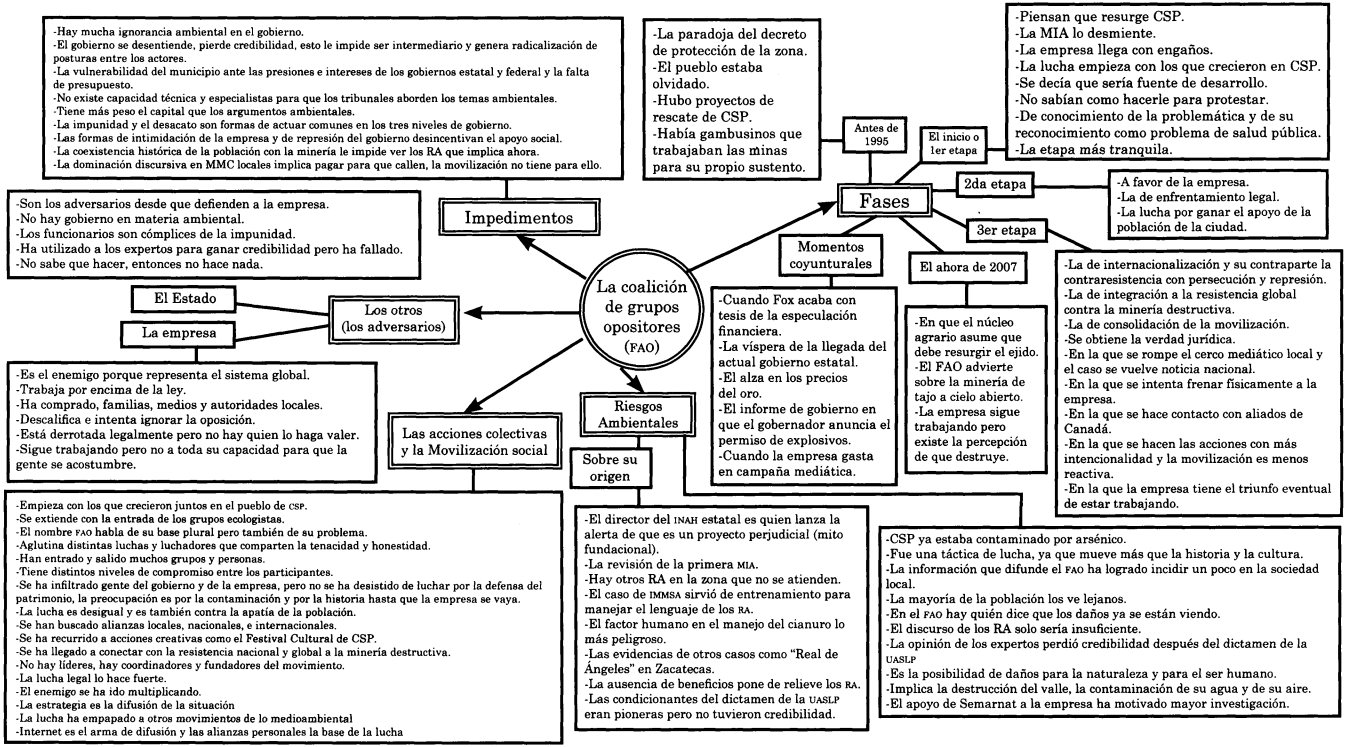
El resultado fue una propuesta de marco interpretativo con el que se pudiera relacionar la parte estructural de la dinámica de cambio en las sociedades del riesgo localizadas por este tipo de proyectos extractivos con la esfera de la acción donde se desarrolla la movilización de recursos que pone en escena el universo de significación formado por el conflicto y las relaciones de poder y dominación en las que se encuentra inserta su producción.

La articulación entre las acciones y el discurso, que se sintetiza en los esquemas argumentativos de cada una de las partes en el conflicto, obedece al análisis de un proceso de más de 15 años utilizando distintas técnicas de recopilación de datos, como la investigación documental, la entrevista semi-estructurada y la observación participante. Esta

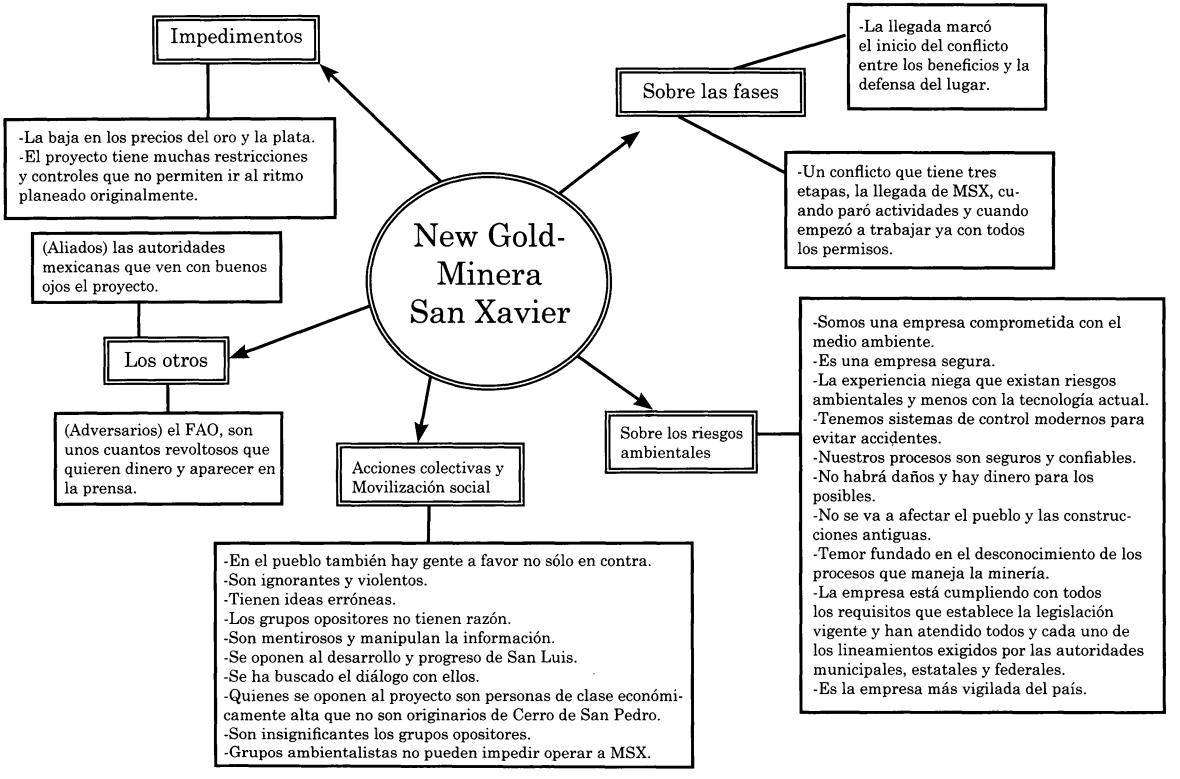
Esquema 1. Esquema argumentativo de las acciones y discursos institucionales del Estado mexicano, producto del análisis y síntesis del proceso



Esquema 2. Esquema argumentativo de las acciones y discursos de la coalición de grupos opositores representada en la figura del Frente Amplio Opositor a la New Gold-Minera San Xavier (FAO), producto del análisis y síntesis del proceso



Esquema 3. Esquema argumentativo de las acciones y discursos empresariales en favor de la empresa minera canadiense, producto del análisis y síntesis del proceso.



versión esquemática del universo discursivo de los actores permite destacar tanto la presencia de una dominación discursiva, como la transición de la sociedad local hacia una sociedad más reflexiva, que algunos sectores como los grupos en resistencia lograron traducir en una superación de la aceptabilidad histórica de la minería en general y en una reconceptualización de la minería canadiense en términos de riesgos ambientales en lo particular.

CONCLUSIONES

A lo largo de este capítulo describo el andamiaje teórico-metodológico que construí para realizar la investigación sobre el caso de Cerro de San Pedro.

En primer lugar, hago un planteamiento general sobre la sociedad del riesgo y su problematización en lo que llamo sociedades del riesgo localizadas a través del más reciente auge de la minería canadiense en San Luis Potosí.

En segundo lugar, abordé el reto teórico y empírico que significó la investigación de las acciones colectivas y la reconstrucción del proceso de más de 15 años en los que se produjo el discurso de los riesgos ambientales y el rechazo de una parte de la población local a las formas de hacer las cosas de la empresa New Gold-Minera San Xavier.

El uso de la teoría de la acción colectiva, en particular el enfoque de Melucci sobre su función simbólica y comunicativa, me ayudó a entender el marco expresivo en el que se formaron las acciones y los argumentos que componen la parte discursiva de la percepción social de los riesgos ambientales que se corren con la minería canadiense, al mismo tiempo que me permitió reconocer la complejidad de los procesos confluyentes en este tipo de conflictos.

En tercer lugar, me enfoqué en el análisis de lo que entendí como un proceso de reflexividad de la sociedad local a partir del cual se han movilizado los tres actores, tanto con

sus acciones, como discursivamente en torno a los riesgos de las actividades extractivas de la empresa minera canadiense instalada en el pueblo histórico de Cerro de San Pedro desde 1995. En cuarto lugar, presenté el universo discursivo que conforman los tres esquemas argumentativos a los cuales recurrí para articular la acción y el discurso de los actores a lo largo del proceso de conflictividad. La articulación es un intento de mirada de conjunto en la que encontramos que la acción tiene un poder discursivo y el discurso tiene el poder de nombrar para motivar o inhibir la acción. En un proceso de larga duración como el que analizamos, acción, discurso y poder se entremezclan en dos procesos particulares y relacionados a través de los riesgos, el proceso de dominación discursiva y el proceso de reflexividad de una emergente sociedad del riesgo localizada.

En el marco de las sociedades del riesgo localizadas en México por la presencia de la minería canadiense y sus métodos de explotación a cielo abierto, observé que no se trata de cuántas acciones colectivas hacen válida la movilización social o cuántas le dan legitimidad política a la resistencia, sino cuál es el proceso de discursividad y el contexto de dominación discursiva que mueven a la acción y los factores históricos y culturales que orientan la reflexividad social de los que se movilizan en dicho contexto.

En la resistencia contra las formas de explotación de la minería canadiense, en particular desde el caso en Cerro de San Pedro, se puede afirmar que hay un énfasis geoambiental en este tipo de nuevas luchas (Svampa, 2010). La movilización refiere a una exigencia que el sistema económico y político no puede resolver (Alonso, 2011: 28) y que al ser exhibida se convierte en un problema social. No obstante, sólo desde la política institucionalizada y el capital privado se tiene el poder de intervenir sistemáticamente en la discursividad generada por el conflicto y desde ahí construirlo y difundirlo socialmente como un problema centrado en la

existencia de una oposición al desarrollo y el progreso de toda la entidad.

El análisis de los retos que implicó esta investigación, me llevó a preguntas como: ¿hasta qué punto logré superar los moldes con los que se había pensado antes este tipo de fenómenos de acción colectiva y movilización social?, ¿hasta dónde se pudieron articular en mi propuesta las ideas clásicas sobre la movilización de recursos, la organicidad del movimiento, el contexto político y la estructura de oportunidades, los repertorios de protesta, los ciclos de la protesta, la producción de identidades, su difusión y circulación, sus limitaciones, su coordinación y conexión internacional, las consecuencias y alcance de las acciones?, ¿hasta dónde se pudo llegar a otros acercamientos como el papel de las emociones o de la capacidad de elección en la decisión de participar en las acciones colectivas y en la movilización social?

La propuesta teórico-metodológica que elaboré fue un traje a la medida de la información obtenida durante cuatro años de investigación acerca de lo sucedido en el caso de Cerro de San Pedro, lo cual me llevó a enfocarme en la relación entre la acción y el discurso a partir de la movilización social.

Gracias a esta opción logré identificar que es en la articulación del discurso y la acción donde se sitúa la emergencia de un cambio en la reflexividad de la sociedad local respecto a los riesgos ambientales que implica en la actualidad la minería canadiense. También esa reflexividad constituye una nueva circunstancia para las poblaciones locales y marca nuevas pautas para la formación de nuevos actores y el desarrollo de estrategias para participar en el debate público sobre lo que les afecta. Sin embargo, no se puede explicar, por ejemplo, por qué no se puede generalizar a toda la población local dicha reflexividad que a los grupos en resistencia les permitió superar la aceptabilidad histórica de los riesgos de la minería. Los sectores que se organizaron en acciones colectivas para llamar la atención sobre los riesgos que se

están viviendo con la minería canadiense, ubicada a tan sólo 12 kilómetros de distancia de la capital, se enfrentan a un proceso complejo mediante el cual se va encauzando la discursividad generada por el conflicto, pues tanto el Estado como la empresa tienen un acceso privilegiado a recursos de poder como los medios de comunicación. Esta forma de dominación discursiva es percibida por la sociedad civil organizada y en buena medida por ello recurre a la puesta en escena de la resistencia a través de la acción colectiva.

En la sociedad del riesgo localizada de la que hablo a lo largo de este capítulo, la emergencia de una reflexividad social fue posible gracias a una nueva circunstancia marcada por la llegada en 1995 de la minería canadiense y sus métodos de explotación a cielo abierto a Cerro de San Pedro, pero no responde si la emergencia de dicha reflexividad social será capaz de desmontar la aceptabilidad histórica de la minería que predomina en la población del Valle de San Luis Potosí. Esta actividad económica se ha llevado a cabo durante distintos periodos, con distintas intensidades, a través de distintas empresas y distintos países de origen, pero además, fue un factor fundamental para la fundación y el desarrollo económico de la ciudad de San Luis Potosí que se encuentra en el corazón de dicho Valle. Con la llegada de la empresa canadiense y sus formas actuales de explotación, surgió en algunos sectores de la región una preocupación por los costos ambientales de tal asimilación histórica. En estos sectores, el discurso de las consecuencias sociales, culturales y ecológicas es utilizado no sólo para denunciar la naturaleza contingente de los riesgos derivados de los métodos modernos de explotación de las empresas canadienses, sino también para darle visibilidad a este proceso de reconceptualización de la minería actual en términos de riesgos ambientales.

La presencia de los grupos que se han organizado en un frente de resistencia no pudo detener la destrucción del Cerro de San Pedro, pero contribuyó a formar y hacer emerger un

proceso de reflexividad social sobre lo que esto significa y sobre esta nueva circunstancia. A partir de ello, las acciones colectivas y los recursos de lucha para presionar la salida de la empresa canadiense y su filial mexicana o para que firmen compromisos específicos y factibles para la remediación del lugar cuando venga el cierre de la mina, siempre tendrán un efecto acumulativo sobre el propio proceso de reflexividad social local puesto en marcha.

Para la resistencia, el discurso medioambiental es un recurso de movilización contra la dominación discursiva practicada por el capital y la política institucionalizada. Para el Estado y la empresa canadiense, el discurso medioambiental es un recurso de legitimación social y de la política institucionalizada. En todas las partes hay una instrumentalización de la naturaleza "desnaturalizada", la construcción del problema de los riesgos ambientales como un conflicto social en el Valle de San Luis Potosí, es uno de los productos de dicha instrumentalización. En este sentido, el deterioro o la destrucción de la naturaleza no es únicamente lo que moviliza a la sociedad potosina, sino también la posibilidad que abre este discurso de visibilizar este tipo de problemas estructurales que enfrenta actualmente la relación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, a partir de la presencia local de un proyecto minero canadiense y sus métodos de explotación del oro y la plata en Cerro de San Pedro.

Es el año de 2013, el conflicto continúa. Con esta investigación intenté apoyar la conclusión de que la preocupación ambiental es más que un recurso discursivo y que la acción colectiva y la movilización en torno a la minería en Cerro de San Pedro pueden ser comprendidas a partir de factores como la destrucción del patrimonio, el riesgo ambiental, la destrucción ambiental, la injusticia experimentada por la ciudadanía en el transcurso del conflicto, y otros, pero, sobre todo, a partir de la reconceptualización de la aceptabilidad histórica de la minería en la región. A partir de lo anterior,

podemos cerrar diciendo que aunque no pude dar cuenta de todas de las dimensiones y escalas posibles de la acción de los actores, de la movilización social y de sus motivaciones a lo largo del proceso estudiado, en cambio me fue posible mostrar la incidencia de las condicionantes políticas y de las relaciones de poder en la construcción de los factores de riesgo y en el establecimiento de redes y alianzas temporales para sostener la acción colectiva y la movilización social en un contexto como el Valle de San Luis Potosí.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, Jorge (2011), "Repensar los movimientos sociales", I Encuentro de antropólogos mexicanos y brasileños, Grupo de Trabajo 5: Movimientos Sociales, 8 de septiembre, México, Casa Chata-CIESAS.

Beck, Ulrich (1998), *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*, Barcelona, Paidós.

Beriain, Josetxo (1990), *Representaciones colectivas y proyecto de modernidad*, Barcelona, Anthropos.

Best, Joel (1987), "Rhetoric in Claims-Making: Constructing the Missing Children Problem", *Social Problems*, vol. XXXIV, núm. 2, pp. 101-121.

Castells, Manuel (1974), *Movimientos sociales urbanos*, México, Siglo XXI.

Crenson, M. (1974), *The unpolitics o fair pollution. A study of non-decision making in the cities*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Della Porta, Donatella y Diani, Mario (1999), *Social movements: an introduction*, Londres, Blackwell.

Diario Oficial de la Federación (2010), "Norma Oficial Mexicana NOM-155-Semarnat", México, Segunda Sección, *Diario Oficial de la Federación*, 15 de enero.

Douglas, Mary y A. B. Wildavsky (1982), *Risk and culture: An essay on the selection of technical and environmental dangers*, Berkeley, University of California Press.

Duhau, Emilio (2002), "Diez preguntas sobre los movimientos sociales", en Durand, Jorge (coord.), *Movimientos sociales: desafíos teóricos y metodológicos*, México, Universidad de Guadalajara, pp. 111-132.

Eder, Klaus (1996), *The Social Construction of Nature*, Londres, Sage Publications.

Godàs, Xavier (2003), "Los movimientos sociales", en Giner, Salvador (coord.), *Teoría sociológica moderna*, Barcelona, Ariel, pp. 493-512.

Guitián G., Mónica (2003), "Riesgo e incertidumbre. Contornos sociológicos de la modernidad", en Gina Zabludovsky Kuper y Mónica Guitián Galán (coords.), *Sociología y modernidad tardía: entre la tradición y los nuevos retos,* México, Ediciones Casa Juan Pablos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, pp. 283-309.

Gutiérrez, Silvia, Luis Guzmán y Sara Sefchovich (1988), "Discurso y sociedad", en De la Garza Toledo, Enrique, *Hacia una metodología de la reconstrucción*, México, Porrúa, UNAM, pp. 71-85.

Hajer, Maarten A. (1995), *The politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*, Nueva York, Oxford University Press.

Hilgartner, S. y C. L. Bosk (1988), "The rise and fall of social problems", *American Journal of Sociology*, vol. XCIV, núm. 1, pp. 53-78.

Inglehart, Ronald (1971), "The silent revolution in Europe. Intergenerational change in post-industrial societies", *American Political Science Review*, vol. LXV, núm. 4, pp. 991-1017.

Johnston, Hank, Enrique Laraña y Joseph Gusfield (1994), "Identidades, ideologías y vida cotidiana en los nuevos movimientos sociales", en Enrique Laraña y Joseph Gusfield (eds.), *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 3-42.

Laraña, Enrique (1999), *La construcción de los movimientos sociales*, Madrid, Alianza.

López Cerezo, José A. y José Luis Luján López (2000), *Ciencia y política del riesgo*, Madrid, Alianza.

Madrigal González, David (2009), "La naturaleza vale oro: Riesgos ambientales y movilización social en el caso de la empresa minera canadiense New Gold-Minera San Xavier en México", México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México, tesis de doctorado.

Martí I. Puig (2004), "Los movimientos sociales en un mundo globalizado: ¿alguna novedad?", *América Latina Hoy*, núm. 36, pp. 79-100.

Maslow, Abraham (1954), *Motivación y personalidad*, Barcelona, Sagitario.

Melucci, Alberto (1999), *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México, El Colegio de México.

Mining Watch (2006), "Boletín de prensa", *Mining Watch*, mayo, URL: http://www.miningwatch.ca/es.

New Gold (2013), *Minera San Xavier*, URL: http://newgold.com/properties/operations/cerro-san-pedro/cerro-san-pedro-spanish-site/minera-san-xavier/default.aspx.

Reichmann, Jorge y B. Fernández (1994), *Redes que dan libertad*, España, Paidós.

Revilla Blanco, Marisa (2010), "América Latina y los movimientos sociales: el presente de la 'rebelión del coro'", *Nueva Sociedad*, núm. 227, mayo-junio, pp. 51-67.

Rubert de Ventós, Xavier (1998), *Crítica de la modernidad*, Barcelona, Anagrama.

Rucht, D. y F. Neidhardt (2002), "Towards a movement society?, On the possibilities of institutionalizing social movements", *Social Movement Studies*, vol. I, núm.1, pp. 7-30.

Schütz, Alfred (1993), *La construcción significativa del mundo social: introducción a la sociología comprensiva*, Barcelona, Paidós.

Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) (2012), *Antecedentes*, URL: http://www.semarnat.gob.mx/movil/conocenos/Pages/antecedentes.aspx.

Spector, Malcolm y John I. Kitsuse (1987), *Constructing Social Problems*, Hawthorne, Nueva York, Aldine de Gruyter.

Svampa, Maristella (2010), "Movimientos sociales, matrices sociopolíticas y nuevos escenarios en América Latina", *Working Papers*, núm. 1, URL: http:// www.social-globalization.uni-kassel.de/owp.php.

Tarrow, Sydney (1997), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza, pp. 33-143.

Touraine, Alain (1987), *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*, Chile, OIT, pp. 85-170.

Van Dijk, Teun A. (2004), "Discurso y dominación", *Grandes Conferencias en la Facultad de Ciencias Humanas*, núm. 4, pp. 5-28.

_____ (1999), *De la poética generativa hasta el análisis crítico del discurso*, Holanda, Universidad de Amsterdam.

Vargas Melgarejo, Luz María (1994), "Sobre el concepto de percepción", *Alteridades*, vol. 4, núm. 8, pp. 47-53.

Zapata, Francisco (2002), "La formación de la acción colectiva en el nuevo modelo de desarrollo", en Jorge Durand (coord.), *Movimientos sociales: Desafíos teóricos y metodológicos*, México, Universidad de Guadalajara, pp. 55-68.

Arenas de conflicto y experiencias colectivas. Horizontes y dominación
se terminó de imprimir en octubre de 2014
en los talleres de Editorial Color, S.A. de C.V.
Naranjo 96 bis, P.B. Col. Santa María la Ribera
06400 México, D.F.
Portada: Pablo Reyna.
Tipografía y formación: Irma Martínez Hidalgo.
Cuidó la edición la Dirección de Publicaciones de
El Colegio de México.

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS

Los trabajos que integran este libro se proponen identificar y comprender la pluralidad de orientaciones, relaciones y significados que se juegan en el actuar colectivo. Si bien la acción colectiva es un tema clásico en las ciencias sociales latinoamericanas, las experiencias contemporáneas no dejan de evidenciar las limitaciones y los vacíos explicativos de la teoría, haciendo necesario un balance de los marcos analíticos construidos desde que la acción colectiva y los movimientos sociales son reconocidos como un campo de estudio autónomo. En este sentido, frente a las tendencias globalizadoras del ámbito económico y cultural, la obra se articula en un esfuerzo por captar el carácter híbrido de las prácticas colectivas y descifrar los vínculos que se tejen a partir de éstas entre los actores sociales y las distintas formas del poder político.

Inspirados en el espíritu de Alberto Melucci, quien plantea el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales como una vía indirecta para pensar en qué tipo de sociedad vivimos, continua fuente de incertidumbre, los estudios de caso que integran este volumen nos permiten aportar alternativas de análisis. De modo que estas páginas se interesan por la vida cotidiana, la subjetividad y el discurso, así como por las múltiples formas que adquiere la acción colectiva, e identifican las arenas desde las cuales los actores se definen y redefinen constantemente, reelaboran los códigos simbólicos y pugnan por generar, mantener o transformar sus condiciones materiales, identitarias, políticas...

ISBN 978-607-462-695-7

C M EL COLEGIO DE MÉXICO